

Universidad Pablo de Olavide

Programa de Doctorado, regulado por el RD 99/2011, Historia y Estudios
Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas.



Tierras en nombre del Rey.

Mercedes reales de tierras

en La Rioja del Tucumán Colonial 1591-1861

MEMORIA PARA OPTAR POR EL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR:

Adrián Gustavo Mercado Reynoso

Bajo la dirección de los doctores:

1. DR./DRA **FRANCISCO ANTONIO RUBIO DURAN**

UNIVERSIDAD/ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN: UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE, PAÍS ESPAÑA

2. DR./DRA. **JOSE LUIS BELMONTE POSTIGO**

UNIVERSIDAD/ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE, PAÍS ESPAÑA

OCTUBRE 2016

Índice

	Pag
Abreviaciones.....	11
§ 1 Introducción.....	12
§ 2 El por qué de la actualidad del tema. Hipótesis.....	21
2.1. El problema de los regímenes “anómalos” según la moderna visión de un organismo estatal federal.....	23
§ 2.2 La experiencia jurídica de la merced.....	36
§ 2.3. Delimitación del espacio de investigación.....	39
§ 2.3 Hacia una teoría del derecho indiano.....	43
PRIMERA PARTE Merced de tierra y derecho colonial.....	52
§ 3 Merced de tierras: concepto	53
§ 4 Fundamentos normativos de los repartos de tierras a través de mercedes.....	55
4.1. Noticia en Las Partidas.....	59
§ 5 Componentes de la merced de tierras.....	65
5.1. El documento propiamente dicho.....	66
5.1.1. La petición.....	67
5.1.1.a. La condición de <i>vecino</i>	68
5.1.1.b. Fundamento de la petición.....	69
5.1.1.c. <i>Descripta</i> del <i>status</i> social del solicitante.....	70
5.1.1.d. Identificación y delimitación del bien fundario.....	72
5.1.2. La concesión.....	75
5.1.3. El origen legal de las mercedes de tierras americanas.....	76
5.1.4. El <i>vestimentum</i> o la toma de posesión o puesta en posesión.....	79
5.1.5. El gravamen de la media anata.....	81
SEGUNDA PARTE Tierras en nombre del Rey en una ciudad del Antiguo Régimen.....	87
§ 6 Provincia de los Juríes del Tucumán. Nuevas jurisdicciones y nuevos ensayos político-poblacionales.....	88
§ 6.1. El evento fundacional en sí.....	89
§ 7 La primera merced de una nueva jurisdicción: “a la conquista de la tierra”.....	99
§ 8 Acceso y resolución de conflictos en la república de los españoles: el juicio de residencia.....	110
§ 9 Guerra Calchaquí y orden mercenario.....	128
§ 10 La Aplicación de sanciones a encomenderos riojanos por el Oidor Luján de Vargas en su visita de	141

10.1	. « <i>Lo que cada vno cogiere, deve ser suyo</i> » . La “ <i>consuetudo est ius disponens</i> ” de los beneméritos <i>Patres familias</i> contra el “ <i>ius scriptum</i> ” del funcionariado visitador	146
10.2.	Por mandato Real.....	157
10.3.	El visitador y los encomenderos.....	158
10.4.	Consideraciones generales sobre la <i>visita</i> como instituto.....	159
10.5.	Procedimiento.....	160
10.6.	Los cargos y los descargos.....	161
10.6.a.	Los cargos o agravios al orden encomenderil pugnado por la Corona.....	162
10.6. b.	Los descargos.....	162
10.7.	Las citas de Derecho Indiano en el Auto.....	165
10.8.	Legislación utilizada.....	166
10.9.	El impacto local según el escribano del cabildo.....	170
10.10.	Algunas consideraciones sobre la <i>Visita</i>	173
§ 11.	La <i>ius política</i> de la apropiación: renta de indios, renta de hacienda en el Mayorazgo de Anillaco	174
§ 12	Doctrina de la merced según Ots Capdequí.....	205
§ 13	La merced real como tipo de dominio.....	211
§ 14	El estudio de casos. Cinco mercedes de los Llanos riojanos.....	215
14.1	Atiles	
14.2	Merced de Ulapes y de Malanzán	
14.3	Merced de la Hediondita	
14.4.	Merced de Tudcúm	
14.4.a.	El tardío arribo del Estado burgues y la experiencia jurídica de <i>saneamiento</i> de la Merced de Tudcúm	253
§ 15	Esfuerzos legislativos locales en la construcción de la fiscalidad provincial.....	264
§ 16	Merced de encomienda y de tierra, merced de bienes.....	280
§ 17	La merced de tierra ¿Es el origen de la actual propiedad de tierra?.....	295
17.1	Un derivado del derecho común indiano llamado <i>Derechos y Acciones</i>	299
17.2	De <i>Lex agraria</i> , <i>iure precaria</i> , y <i>iure domini vel quasi</i> (1200-1600)	310
§ 18	El valor de la tierra según el valor del trabajo.....	314
18.1	La merced de tierra en la gobernación tucumana ¿en una formación económico-social de carácter feudal?	316
18.2	El principio jerárquico para la asignación del acervo de tierras.....	333

§ 19	Merced de <i>araupatis-yuctabas</i> o del Bañado del Pantano.....	341
§ 20	Los funcionarios juristas.....	352
§.21	Amparos a a favor del indigenado situado en Reducción de Indios.....	358
§ 22	Intensidades apropiativas del Tucumán: del inka al periodo toledano.....	369
§ 23	Los bienes de la <i>Societas Iesu</i>	379
§ 24	De la merced realenga de la <i>Chacra</i> (1613) a la merced patialenga de <i>Bajo Los Pedernales</i> (1861).....	396
§ 25	Los mercenderos de tierras y las acciones estatales para-propietarias: criollos y ganaderos en <i>conflictus de iure procedat</i>	400
§ 26	Borbones y el nacimiento del federalismo de ciudades. Ordenamientos jurídicos y el pasaje de Ciudad a Provincia, 1810-1860.....	419
26.1	Cada uno en su iuris-dictio.....	422
26.2	Las codificaciones <i>patrias</i> llamadas Constituciones.....	426
26.3	Derecho <i>Patrio</i> y Derecho Pre-codificado <i>nacional</i>	432
§ 27.	<i>Siguiendo el Orden de la Costumbre</i> . Praxis y transmisión de situaciones reales.....	438
§ 28	Don Desiderio Tello: de <i>patrón</i> a nombre de pueblo.....	453
§ 29	Cultura jurídica y retórica del <i>usus terrae communis</i>	462
§ 30	El código civil <i>sin</i> código agrario.....	475
§ 31	Montoneros y bolcheviques al asalto del Orden moderno.....	478
§ 32	Consideraciones finales.....	488
§	Fuentes de Archivo y Manuscritas.....	511
§	Fuentes Éditas.....	515
§	Bibliografía Citada.....	519
§	Apéndice Documental.....	544

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Graf. 1	El sistema jurídico de las Indias según Levaggi.....	43
Graf. 2	La “acción política” como acto de subjetivación en el antiguo régimen (en Castilla y en La Rioja tucumana, Siglo XVII) según una gráfica comparativa de Bernardo Ares (2000) y Mercado Reynoso (2003).....	46
Graf. 3	Distribución bruta de los ingresos de la Real Caja de Hacienda de la Jurisdicción de La Rioja. 1749-1768, por ramo y en porcentajes.....	86
Graf. 4	Mercedes según relación de linderos y escala por superficie en hectáreas.....	215
Graf. 5	Titular originario de la merced de La hediondita y árbol genealógico del caudillo Nicolás Peñalosa hasta Ángel V. Peñaloza.....	237
Graf. 6	Cantidad de mercedes otorgadas por Gobernador y años de mandato.....	254
Graf. 7	Mercedes seleccionadas por comuneros (ex ante) y propietarios (ex-post) siglo XX....	299
Graf. 8	Feudalismo en A. Latina y en La Rioja.....	324
Graf. 9	Dispersión y cantidad de mercedes de tierras por año de concesión.....	401
Graf. 10	Porcentaje de Pobladores “Hacendados” [Ganaderos Vacunos] de La Rioja por departamentos, año 1855.....	409

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Población indígena encomenda en 1607 en la Gobernación del Tucumán	105
Tabla 2	Encomienda por nombre del titular de la encomienda y número de indios de tasa a cargo según la Visita del Oidor Martínez Lujan	139
Tabla 3	Árbol genealógico de la familia Bazán de Pedraza (simplificada)	178
Tabla 4	Hacienda de Anillaco por tipo de encomienda y número de tributarios hacia la última década del siglo XVIII	198
Tabla 5	Mercedes o tierras indivisas de los Llanos de la provincia de La Rioja, por municipio y superficie en hectáreas (1967)	217
Tabla 6	Animales por existencias y tipo en la Merced de Tudcúm	260
Tabla 7	Existencias y ventas de animales por tipo y por precio de venta en \$, de la Merced de Tudcúm	260
Tabla 8	Tipología de situaciones reales de los sujetos mercenderos ante la merced “procesada” 1967.	263
Tabla 9	Registro de títulos de propiedad por Municipio en 1888 según Libros disponibles creados por ley provincial n° 88	269
Tabla 10	Superficie ocupada por Merced o Campo Comunero con relación a la propiedad privada (sic), por región y en porcentaje, en hectáreas, La Rioja, año 1963.	379
Tabla 11	Fecha de disposiciones y referencia de fuentes de Toledo 1569-1574 según E. Salles y H. Noejovic	372
Tabla 12	Propiedades jesuíticas en La Rioja por año y forma de adquisición, Siglo XVII y XVIII	381
Tabla 13	Censo General de la Provincia de La Rioja de 1855. Población por tipo de actividad (“Profesiones”)	402
Tabla 14	Ejemplos de mercedes privatizadas, por número de comuneros y nuevos propietarios.	466
Tabla 15	Mercedes de tierra por año de concesión y denominación, La Rioja 1613-1858	469
Tabla 16	Gobernadores del Tucumán, periodos de gobierno por cantidad de mercedes de tierras concedidas en la jurisdicción de La Rioja	475

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1	Planimetría del medio natural y cuadrícula de La Rioja.	99
Mapa 2	Flujograma de Mercancías de la Hacienda de Anillaco del Valle de Abaucán (1690 c.).	200
Mapa 3	Merced de Atilés (15) y Merced de Malanzán (14) en mapa del año 1964.	225
Mapa 4	“La región del Tucumán” en una <i>Carta del Gran Chaco e Paefi Confinanti</i> , de 1789.	233
Mapa 5	Mapa de la mensura de subdivisión de la merced de La Hediondita en nuevos propietarios (1967)	289
Mapa 6	Mapa de Tucumán encargado por el Padre Torres.	345
Mapa 7	Mercedes según representación gráfica del geógrafo R. Díaz.	352
Mapa 8	Concentración y superposición de mercedes de La Rioja identificadas en un plano cartográfico (1964) de los municipios riojanos de Dalmacio Veléz Sarfield, Gobernador Gordillo, General Ocampo, Rivadavia y General Belgrano	404
Mapa 9	Mercedes de tierras riojanas por cabecera o paraje donde se realizó la puesta de posesión.	486

APÉNDICE DOCUMENTAL 544

Documento A	Ordenanza X, tít. II, del Virrey Francisco de Toledo, Arequipa, 6 de noviembre de 1575.	545
Documento B	Acta de Capitulación, Santiago del Estero, 1590	542
Documento C	Acta de Fundación de La Rioja del 20 de Mayo de 1591.	552
Documento D	Merced de solares a los primeros vecinos de la ciudad de Todos Los Santos de La Nueva Ríoxa	554
Documento E	Cuadrícula o Traza de La Rioja	558
Documento F	Merced de tierras de Autigasta (1591)	560
Documento G	Merced de tierras de Capayan (1592)	561
Documento H	Merced de tierras de Yoque-Pacatala a favor de Francisco Nuñez de Yllañes	562

		(1649)	
Documento	I	Merced de tierras de Tudcúm	565
Documento	J	Solicitud de merced de tierras al norte de cochangasta, amparo de las estancias del duraznillo y ampliación a tierras vacas a favor del colegio de la Compañía de Jesús (1687)	566
Documento	K	Merced de Ulapes	567
Documento	L	Merced de Olta	569
Documento	M	Merced de Anillaco-Fiambalá y Tinogasta	571
Documento	N	Auto General del Oidor y Visitador Martínez Luján de Vargas, La Rioja, de 1693.	575
Documento	O	Merced de sobras de La Chimenea a favor de Juan Muñoz Pereyra (1701)	580
Documento	P	Mersed Real y mas documentos perten. ^{tes} al paraje de Santa Rita de Chilecito en el Balle de Anguinan Jurisdicción dela Rioxa (1713)	583
Documento	Q	Venta del <i>Potrero</i> de Mariana del Moral a Benito Nina y Manuel Mercado (1845)	589

AGRADECIMIENTOS:

Este trabajo no podría ser sin la confianza y dirección de Rosario Valpuesta Fernández quien desde el departamento de derecho privado de la UPO me indicó el camino tan arduo del derecho indiano. Mis sinceros agradecimientos a los profesores A. Hyspanha, G. Levi, A. López y López y en especial a Juan Marchena Fernández quién ya desde la Universidad Internacional de Andalucía con sede en La Rábida recreó el puente con mi mundo andino. Un agradecimiento a P. Grossi del Centro di Studi per il Pensiero Giuridico Moderno de la Universidad de Florencia y a V. Tau Anzoátegui, quién financió parte de las presentes investigaciones y me orientó desde el Instituto de Investigaciones Historia del Derecho de Buenos Aires. A mis colegas docentes de la Universidad Nacional de Rosario (CEEMI Centro de Estudios Espacio Memoria e Identidad) y de la Universidad Nacional de La Rioja (Dpto. de Humanidades) que debieron soportar mis avances y aportaron sugerencias. A D. Barrera (ISHIR), N. Areces (CESOR) y J. Djenderedjian (I. Ravignani). Mis sinceras gracias.

Estas páginas están dedicadas a Susana Beatriz, Valentina Frida,
Paloma Aixa, Agustina, Victoria, Ottón y Renatta
Audrey.

"Consuetudo est ius disponens. Nam est ius non scriptum. Praescriptio est illud quo acquiritur ius dispositum, ut dominium et huiusmodi".

Cino DA PISTOIA [c.1322], *Lectura super Codice*, ed. Facsimilar de Il Cigno GG Edizioni, 1998, Roma, p. 1350

"La mayor cosa después de la Encarnación y Muerte del que lo Crió, es el descubrimiento de Indias; Y así las llaman Nuevo Mundo"

Francisco LÓPEZ DE GÓMARA, *Historia General de las Indias y la conquista de México*, 1552.

"Todo derecho tiene por objeto las personas y las cosas, los derechos personales y los derechos reales"

Dalmacio VELEZ SARFIELD, redactor del Código Civil argentino, en la nota de elevación del libro primero del Código Civil al Sr. Ministro de Justicia, E. Costa, Buenos Aires, junio 21 de 1865.

"La historia es light también por razones de marketing"

Bartolomé CLAVERO, "Religión y capitalismo (más acá de Max Weber)" *Areas. Revista internacional de Ciencias Sociales*, 10 (1989), 8.

ABREVIATURAS

AGI: Archivo General de Indias

AGNA: Archivo General de la Nación Argentina.

AHCo: Archivo Histórico de Córdoba.

AJLR: Archivo Judicial de La Rioja.

ACELR: Archivo del Colegio de Escribanos de La Rioja.

ADGC: Archivo de la Dirección General de Catastro de La Rioja.

AHLR: Archivo Histórico de La Rioja.

AHCa: Archivo Histórico de Catamarca.

AGNM: Archivo General de la Nación de México.

AHDE: Anuario de Historia del Derecho Español.

BIHAAER: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”.

CZAV: Colección Zacarías Agüero Vera.

RQF: Revista dei Quaderni Fiorentini.

RJHyL: Revista de la Junta de Historia y Letras de La Rioja.

RHCHP: Revista Histórica del Convento de Hermanos Predicadores de La Rioja.

RHDRL: Revista de Historia de Derecho “Ricardo Levene”.

RdBA: Revista de Buenos Aires. Historia Americana, Literatura y Derecho.

§ 1 —INTRODUCCIÓN

El presente trabajo titulado *Tierras en nombre del Rey* indagará el proceso histórico y político tricentenario de la relación de los sujetos con la tierra donde viven, y pretende dimensionar el impacto de las concesiones de mercedes de tierras en la conformación de la territorialidad española en La Rioja, antigua jurisdicción de la Gobernación del Tucumán y actual provincia de Argentina, durante los siglos XVI al XIX. En la primera parte, presentaré un análisis del título de merced de tierras: concepto, componentes, conformidad, procedimiento y su sustento jurídico, naturaleza, y doctrina correspondientes, en un esfuerzo por clarificar las situaciones que a nuestra sistemática mentalidad moderna le cuesta encuadrar. En la segunda parte, esbozaré un estudio *ius* historiográfico y su evolución en la jurisdicción de Todos los Santos de la Nueva Rioja, desde la fundación hasta las vísperas de la codificación argentina (desde los años de 1591 a 1861). Por último, analizaré la continuidad de estas concesiones en el marco del derecho patrio argentino: las llamadas “mercedes patrias” o “patrialengas” para diferenciarlas de las “realengas”. En estas mercedes concedidas “por la Patria” y ya no por el rey se visualizan los esfuerzos por constituir un orden patriótico y localista en un escenario de guerras civiles, en donde algunos comuneros de tierras serán llamados “montoneros”. Pretendo redimensionar algunos acontecimientos históricos que nos permitirán discernir la mentalidad circulante de los “hombres” sobre las “cosas raíces”. Uno de ellos, se refiere a la fundación de la ciudad en 1591, cabecera jurisdiccional de la provincia en estudio. El otro referirá a la visita del oidor Luján de Vargas en 1693 y, en la última parte del periodo colonial, la expulsión de la Compañía de Jesús en 1776. Además de ver las antedichas concesiones de mercedes patrialengas y de los esfuerzos legislativos por ordenar y fiscalizar en el siglo XIX, resumiré el peculiar camino del derecho común en el tercer cuarto del siglo XX con la creación pública de un organismo estatal llamado “Instituto de Minifundio y Tierras Indivisas”, que intenta, desde diversos abordajes normativos y pactistas, deconstruir el *ordo* comunitario de uso

comunal de las tierras que tanta resistencia y vitalidad había mantenido, impulsar la patrimonialización y eliminar los “obstáculos” para la circulación de la tierra como mercancía.

Entonces aparecerá el primer gran obstáculo epistemológico de peso: valorar la aplicación del derecho según la cronología propuesta y el dialogo abierto entre el concepto y la evidencia empírica. Abandonando el generalizado prejuicio de que el orden jurídico del *ancient regime* no se regulaba por el derecho, el derecho indiano se revaloriza como instructor de sentido de las acciones estatales de la Corona y como mitigador de los conflictos entre el orden y el sistema colonial. Me adentraré, hasta donde lo permita la delimitación práctica de la presente investigación, en los debates sobre el derecho indiano al que llamaremos toledano para diferenciarnos de, por ejemplo, otras experiencias jurídicas indianas que *partindo de suas raízes ibéricas* adquieren entidad propia como el *dereito indiano luso-brasileiro*¹. A la complejidad del ordo indiano va sumada la complejidad del ordo andino.

La necesidad de explicar la pervivencia de situaciones reales, definidas modernamente como “precarias” en la ocupación de la tierra en el siglo XX, nos obliga a profundizar el estudio de la codificación argentina y aquella patria de la provincia para el periodo, indagando sobre la cultura registral y el complejo aparato legal que las leyes, ahora provinciales, le imprimieron a las tierras en general y las tierras comunales en un intento de patrimonializarlas acorde a la codificación civil nacional. Las mercedes de tierras mutan hacia un nuevo significado, por cuanto ya no son un título regio que ligaba a un individuo a un bien de raíz —y si se quiere, de éste con el estado no inicialmente estadocéntrico—, sino que devienen en un espacio territorial en donde conviven comunidades igualmente ligadas a la tierra, primero indios y mestisos, y luego campesinos-comuneros-montoneros, que fueron considerados un problema para la modernización por la ausencia de la propiedad privada en la tierra y las relaciones normativas que guían las actividades mercantiles, prendísticas e hipotecarias. El

¹ HESPANHA, António Manuel, “A Constituição do Império Português: Revisão de Alguns Enviesamentos Correntes”, en FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima ed., *O Antigo Regime nos Trópicos: a Dinâmica Imperial Portuguesa (Séculos XVI-XVIII)*, ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2001.

paradigma absolutista de mediados del siglo XX volvía a la carga —como lo había hecho a fines del XIX sin éxito— y preveía que la acción de inversión económica del principal sujeto legitimador como el Estado provincial y federal (inversión pública) en la construcción de vías férreas, caminos y fuentes de abastecimiento de agua potable, como así también el fortalecimiento de la capacidad estadual para incidir coercitivamente en un registro único, conllevarían, inevitablemente, a la salida de la precarización a la que estaban llamadas las relaciones dominiales de estas comunidades aisladas y, básicamente, no urbanas y reguladas por la costumbre. Por oposición, a la Argentina exportadora y agroganadera de la pampa húmeda, hubo un recorrido peculiarmente diferenciado. ¿Existió en La Rioja una ausencia de la tradición liberal rioplatense?, ¿aquella que denunció el baldío y fomentó una colonización instrumentada por vía de la enfiteusis que allanó el camino a la propiedad plena? ¿Fue la *traditio* de *ius indiana* una de las causas de las llamadas imperfecciones dominiales o “titulaciones insuficientes” sobre todo en las provincias del Noroeste argentino, entre ellas, La Rioja? ¿Hubo resistencia oligárquica y popular a la introducción de reformas modernistas al régimen de tierras como parece denunciar la “ilustración” local?

Respecto de las fuentes consultadas para el marco general, esta propuesta sobre las mercedes surge de investigaciones realizadas en el Archivo General de Indias en el periodo entre los años 2000 y 2003, en el Archivo Histórico de Córdoba y en el Archivo Judicial de La Rioja. Ocasionalmente, he visitado el Archivo General de la Nación, el Archivo del Colegio de Escribanos de La Rioja y el Archivo Histórico de Catamarca. En el Archivo de Indias, y ante la voluminosa presencia de las secciones del archivo como *Audiencia de Charcas* y *Escribanía de Cámara*, uno mismo concibe el porqué del nombre de la sección *Gobierno*, justamente por el intento del sistema colonial de gobernar los acontecimientos hasta en el lejano (desde allá) Tucumán. Allí se encuentran las cartas del Gobernador Juan Ramírez de Velasco a través de las que pide pertrechos y funda ciudades, como así también, la acción notarial del escribano regio que está allí, con su estrato escriturario, estableciendo las secuencias procesales que legitiman la ocupación e hispanización. Y aparecen las primeras concesiones, de indios, de tierras, de solares que rápidamente se prefiguran como uno de los pilares de la “empresa”.

Desde este marco, he intentado que la elección de las fuentes no opacara tanto el carácter local de la aplicación de las normas del derecho indiano en cuanto las continuas tensiones existentes entre el estamento dominante mercenario con el indio y los funcionarios regios, en el proceso mismo de ocupación de los recursos naturales y las tierras fértiles — que también llamaremos (con)formación de la territorialidad española—. Y en el proceso mismo, aparecen los conflictos y las vías legales de las que dispone el sistema colonial para resolverlos. En el juicio de residencia del mencionado gobernador, se lo acusa de no haber respetado las concesiones de mercedes que el maestre de campo y capitulador Blas Ponce había realizado a los vecinos feudatarios de la recientemente fundada Ciudad de *Todos Los Sanctos de la Nueva Rioja*. Y vía *dicendo*.

Desde esta perspectiva, el hombre colonial y su relación con las cosas estarán marcados por lo que, desde la pre y pos modernidad, podríamos denominar la “sociedad de derechos”, en contraposición con la idea decimonónica del “estado de derecho”. El estado de derecho se funda en que el Estado es capaz de mantener la coherencia y la unicidad del orden jurídico, con objetables pretensiones, como, por ejemplo, la noción de una igualdad ante la ley (y que Paolo Grossi denunció como “mitología de la modernidad”). La sociedad de derechos, por el contrario, propone una asignación de derechos según el lugar donde el hombre es ubicado en la estratificación, estamento social o fuero, con derechos de estirpe supraestatales, del Rey y del indio. Ahora bien, esta manera de aproximarse al tema de la tierra posibilita visualizar la coexistencia de los derechos en concurrencia y colaboración sobre un único bien, dejando de lado o reconsiderando las crecientes críticas de la Ilustración contra las mercedes de tierras, mercedes de encomiendas y mayorazgos. Comienza entonces a perfilarse que, en los mayorazgos, las encomiendas y en las mercedes de tierras, la centralidad no estaba dada por la voluntad de los singulares sujetos, sino que se encontraba en los bienes amayorazgados, el trabajo indio y la tierra concedida, cada uno en su caso (y que el estado moderno ya es productor de sentido de lo lícito y lo no). Aparece, entonces, una redimensión de estos institutos como piedras angulares de la sociedad civil en donde estallan las continuas contradicciones que el estado colonial deberá dominar mediante la organización y reglamentación de los distintos intereses y corporaciones societales.

Admito que había llegado al tema de las mercedes compartiendo fuertes prejuicios sobre la naturaleza misma de las concesiones regias (entendida como “retrograda” respecto de la “modernidad”), definidas a priori, como arbitrarias² y adscribía, con simpatía hacia los pueblos originarios o autóctonos de las sociedades amerindias que llamaré aquí “indios”, quienes habían sufrido la usurpación de sus dominios por parte de una élite feudal hispana. Pero esas voluminosas, y a veces, como dice A. Presta, “descarnadamente tediosas” fuentes que hasta encierran las palpitaciones cotidianas de los hombres, representan un interminable flujo informativo que, al procesarse, permite la abstracción y reconstrucción de la malla y tejido social en el que cada individuo y sus actividades constituyeron el entramado social³ e institucional. Pero este entramado social se constituye en voluntades y normas pautadas y consuetudinarias entre la élite terrateniente hispana y las masas indias, luego campesinas. Es, en esta instancia normativa donde, valga la redundancia, a la problemática de la legitimidad de ejercicio se abrió el camino a distintos ensayos para lograr asentarla sobre nuevas y estables bases —tanto jurídico-políticas como ético-morales— que hicieran factible, en la práctica, someter a un poder en constante y convulsionada re-construcción a las conciencias individuales. En el Archivo de Córdoba, gracias a la gentil colaboración de su Director Aleaga, surgen de los libros de “Escribanías de Gobierno y de Hipotecas”, copias parciales de mercedes de tierras que el monarca distribuyó y que, por derecho de conquista, se atribuyó en dominio. En el Archivo Histórico de Catamarca encontramos una copia de la Merced de Anillaco concedida a Juan Gregorio Bazan de Pedraza en

² “La arbitrariedad de la justicia regia, con el otorgamiento de mercedes, trajo constantes perturbaciones en los cálculos peculiares de la actividad económica” en Max WEBER, *Historia Económica General*, ed. Paidós, Buenos Aires, 1989, 238. Para una crítica a la visión weberiana, véase a Enrique DUSSEL, *The invention of the Americas*, ed. Continuum Publishing, Nueva York, 1995, reproducido en Dossier de Revista *Otro Sur*, año 1, núm. 2, Rosario, 17-26, y “Die Sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur”, en *Gesammelte Aufsätze zur Social-und Wirtschaftsgeschichte*, Tubinga, 1924, resumida en Karl POLANYI, *El sustento del hombre*, Madrid, ed. Mondadori, 1995, 368 y ss. Volveremos a Weber a través de concepto que Bartolomé Clavero atribuye a un conjunto de pensadores del derecho indiano contemporáneo, él mismo incluido, y auto definido por Clavero como “ma[r]xweberismo”. Cf., Bartolomé CLAVERO, “Gracia y derecho, entre localización, recepción y globalización (lectura coral de las vísperas constitucionales de António Hespanha)”, en *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, núm. 41, 677-767 (en adelante RQF 41, 677 y ss.)

³ Ana PRESTA, *Los encomenderos de La Plata 1550-1600*, ed. IEP, Lima, 38.

1687 que nos obliga a redefinir el tópico según el cual el encomendero no podía ser el titular de tierras de sus encomendados. Y con este material, esboqué las primeras formulaciones explicativas de la dinamicidad de este trabajo, cuyos avances titulados “Mercedes de tierras en nombre del Rey en La Rioja Colonial” fue presentado en el 51° congreso de americanistas en Santiago de Chile⁴. Heraclio Bonilla, Nidia Areces y el coordinador del simposio, H. Noejovich, me alentaron a continuar con el estudio, resaltando los aciertos y marcándome algunos aspectos críticos, tales como que hasta ese momento le concedía una gran trascendencia a elementos cuantitativos: las dimensiones espaciales, las superficies en hectáreas y leguas y los precios de las mercedes. En el espacio andino, 200.000 hectáreas entregadas en merced como aconteció con la *ut supra*, son “relativas” sino se contempla el esquema de sujeción de la población autóctona a esas tierras y si no se describe la *ius política* de la apropiación de los recursos materiales que esas tierras generan. A Héctor Noejovich, de la PUC de Lima, le agradezco el aporte de pensar las relaciones sociales en términos de no propiedad, del peso de la sujeción y jefatura étnica⁵ y el aprovechamiento que hace el sistema colonial del esquema estadual preexistente. La discusión del período secular, al que denominamos “toledano”, la hemos desarrollado en una ponencia “Unicidad y diversidad en el sujeto patrimonial indiano: el pensamiento novohispano (s.XVI y s.XVII)”, en donde abordamos la relación entre el sujeto privado y las cosas raíces, en la discusión que llevó adelante la *intelighenzia* del período y que Grossi⁶ denominó *homini novi*, así como Francisco Toledo, Francisco de Alfaro y Alonso de Veracruz, introduciéndome, a partir de sus escritos, a la discusión del “dominio dividido” en las tierras concedidas⁷. En él se avanza en la discusión teórica-jurídica del Fray Alonso de

⁴ Adrián MERCADO REYNOSO, “Mercedes de tierra en nombre del Rey en La Rioja Colonial”, Actas del 51° Congreso de Americanistas, Santiago de Chile, Julio de 2003.

⁵ Héctor NOEJOVICH CHERNOFF, *Los albores de la economía americana*, ed. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1996, 255 y ss.

⁶ Como veremos a lo largo del presente trabajo, Paolo GROSSI, director del *Centro Studi del Pensiero Giuridico Moderno* de la Universidad de Pisa, será una fuente inestimable de bibliografía y constitución del método *ius historiográfico*.

⁷ Adrián MERCADO REYNOSO, “Unicidad y diversidad en el sujeto patrimonial indiano: el pensamiento novohispano (s.XVI y s.XVII)” Actas de 1° Jornadas ‘Experiencias de la Diversidad’,

Veracruz sobre la legitimidad del tributo siempre que se reserve al pueblo el dominio de la tierra⁸ de donde se los extrae. Ya no era, entonces, una mayor o menor descripción de la construcción de la territorialidad haciendo referencia al uso o goce de título de ella, sino que había un poder público que concedía, en un proceso administrativo complejo desde el que se debían aunar voluntades locales para llegar a buen puerto. Había entonces que describir qué era una merced, qué pasos conllevaba, qué decía y qué proclamaba, así como, cuáles, en definitiva, eran sus principios naturales y legales que el *ordo* imprimía.

Al profesor López y López le debo la deuda intelectual por haberme acercado a Paolo Grossi y su metodología de *ius* historiografía, la cual he creído apropiada para discurrir en el presente trabajo, y cuya versión previa ya me la ha publicado la Universidad Nacional de Rosario de Argentina⁹. De Grossi, del *Centro Studi per il pensiero Giuridico Moderno*, es tomada la noción de absolutismo jurídico del proceso codificador que empañó y obcultó las situaciones reales de dominio sobre la tierra, y sus modos¹⁰. La falta de una investigación acabada del sistema indiano de propiedad¹¹,

Facultad de Humanidades y Artes – CEDUC, Universidad Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, Mayo 2003. 18. (CD-ROM) I.S.B.N.:950-673-369-4

⁸ Ernest BURRUS, *The Writing of Alonso de Veracruz*, ed Jesuit Historical Institute of Roma, Roma, 1968, 2 tomos. Existe una versión española de Jose A. ALMANDOZ GARMENDIA, “*Fray Alonso de Veracruz y la encomienda indiana en la historia eclesiastica novohispana 1552-1556*”, ed. José Porrúa, Madrid, 1971; y por último Silvio ZAVALA, *Fray Alonso de Veracruz. Primer maestro de Derecho Agrario en la incipiente Universidad de México*, Centro de Estudios de Historia Condumex Chimalistac, México, 1981, 88.

⁹ Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras, Cosas, Consuetudes. Formas disociadas de propiedad inmobiliaria en la Ciudad de todos los Santos de la Nueva Rioja, siglos XVI-XVIII*, ed. Universidad Nacional de Rosario Editora, Rosario, 2003, 308.

¹⁰ Paolo GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, ed. CEDAM, Padova, 1966; *id.*, *Un'alto modo di possedere, L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, ed. Laterza, Bari, 1974; *id.* “La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico”, en RQF, núm. XVII, ed. Guiffre, (1988), <http://www.centropgm.unifi.it/quaderni/17/index.htm> (Consultado el 29/02/2016); traducido al español por el prologuista como *La propiedad y las propiedades: un análisis histórico*; “Prólogo para civilistas” de Ángel M. López y López, ed. Cívitas, Madrid, 1992, XXII; *id.* “La categoría del dominio utile e gli 'homines novi' del quadrivio cinquecentesco”, 209-243, y “Assolutismo giuridico e proprietà collettive”, 505-557 en RQF, núm. XIX (1990), en <http://www.centropgm.unifi.it/quaderni/19/index.htm> (Consultado el 29/02/2016); *id.*, “Un

aún en elaboración, nos obliga a avanzar lentamente en la metodología propuesta por García Gallo y, recientemente, por Víctor Tau Anzoátegui. Sobre este último, tributo la mayor de las consideraciones por cuanto me ha permitido adentrarme en la recepción y ejecución de las leyes reales, la praxis socio-jurídicas y la aplicación de justicia, tomando en consideración su crítica al paradigma estatal y legalista¹². El instituto de Investigaciones de Historia del Derecho me ha financiado y permitido ponenciar, en sus XX Jornadas desarrolladas en Buenos Aires, mi trabajo “Estatidad del derecho indiano en la aplicación de sanciones a encomenderos riojanos en su Visita de 1693”. Agradezco los comentarios de Eduardo Martiré y José Mariluz Urquijo y la buena discusión que trajo aparejada la apreciación de estado colonial y la aplicación práctica de justicia colonial del oidor de la Audiencia de Charcas de la Novísima Recopilación y sus efectos locales en la acción de “las Justicias” en una jurisdicción tucumana como La Rioja a fines de XVII¹³.

El dominio de la tierra era, en el antiguo régimen — y según un tópico habitual de la historia hispanoamericana—, la base de la producción, así como del sistema de poder y de protección social que caracterizaba todo el sistema político colonial. Por ello, ante un bien como es la tierra —un lote, un predio o un campo—, la sociedad de derechos del espacio colonial tuvo varias *istituto* para relacionar ese bien con un determinado dueño: uno de ellos es la merced, el título de merced de tierras, y en el presente trabajo de

diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)” en Paolo GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, ed. Giuffrè, Milán, 1998, 281-289; *id.*, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milán, ed. Giuffrè, 2001, 324; *id.*, “A medieval roots”, en Paolo Grossi, *A History of European Law*, ed. John Wiley-Blackwell, Malasia, 2010, 1-39

¹¹ Es la opinión de Alamiro de AVILA MARTEL, “Plan para una investigación sobre la propiedad en el derecho indiano”, en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, Núm. 6, ed. Jurídica Chilena, Santiago, 1970, 152-153..

¹² Víctor TAU ANZOATEGUI, *Nuevos Horizontes en el Estudio Histórico del Derecho Indiano*, ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1997.

¹³ Adrián MERCADO REYNOSO, “Estatidad del derecho indiano en la aplicación de las sanciones a encomenderos riojanos por el oidor Lujan de Vargas en su *Visita* de 1693”. Ponencia presentada en las XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2004, ed. Dunken.

historiografía jurídica, la normativa jurídica y la praxis histórica de la merced ocuparán un aspecto sustancial con referencia a las relaciones de producción donde ésta esta inserta. Aunque intentemos construir una estadística confiable, ella no evidenciará el aspecto relacional: tierras con servicio era un espacio territorial con gente para trabajarlas y no un lugar de residencia. Y la merced de tierras brindaba seguridad de patrimonialización y acumulación de valores no necesariamente dinerarios a su titular, al que llamamos mercendero, aprovechando la *ius* política del sistema colonial que impulsaba la colonización y subordinación de los sujetos indígenas a un *ordo iuris* católico y regio.

En este sentido, me propongo cubrir un fuerte vacío existente en el estudio sobre arqueología jurídica que compromete a la tierra y a la celosa esfera de pertenencia de sus tenedores, aportando información sobre el orden jurídico que, parafraseando a Clavero, “...es aquí, igual que sobre los pasados, medio y no fin”¹⁴, y que la noción de arqueología jurídica habilita para realizar un trabajo de desocultamiento de las normas pautadas, explícitas o consuetudinarias, respecto de la cosa territorial y su disponibilidad a ser poseída, transferida y consumida.

Por otra parte, no presentaré ni analizaré la rica variedad de formas de acceso a la propiedad de la tierra —a la que, por su parte, la merced de tierras corresponde a una de ellas— perteneciente al universo de cartografía jurídica llamado derecho indiano, sino que, realizaré una conceptualización de la merced y sus fundamentos normativos así como del desarrollo de su ejecución, describiendo los rasgos más notables de la situación de mercendero (o titular de mercedes de tierras en la jurisdicción de Todos los Santos de la Nueva Rioja de la provincia tucumana) con el objeto de dar a conocer — mediante el análisis de estudios de caso una zona denominada Los Llanos riojanos y del valle de Abaucán— feudos que, según testimonios, existieron en esa época, en la provincia. Asimismo, me propongo desentrañar los nudos evolutivos del referido título y su impronta al interior del orden normativo. *In fine*, describiré las tensiones entre este orden jurídico provincial —heredero, en cuanto derecho patrio del derecho indiano— y

¹⁴ Bartolomé CLAVERO, *Ama Llunku, Abya Yala: Constituyencia Indígena y Código Ladino por América*, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, 277.

los impulsos hegemónicos del absolutismo jurídico de la codificación nacional argentina.

§ 2 —¿POR QUÉ LAS MERCEDES ES UN TEMA DE ACTUALIDAD? HIPÓTESIS

Hacia 1964 existen vastas superficies territoriales en algunos de los municipios de la Provincia de La Rioja que no poseen registros catastrales de sus tierras, hecho éste que refiere a la ausencia del Estado registral, característica típica de sociedades previas al período del constitucionalismo liberal decimonónico. Asimismo, encontramos que existen alrededor de unas ochenta grandes extensiones —mercedes o también llamada “tierras indivisas”— que revisten el título de tierras precarias y, mayoritariamente, no devinieron en propiedad privada plena.

Esta situación parecería común a la realidad rural de América latina actual (especialmente la andina). Dicen al respecto, Guerrero y Platt, prestigiosos americanistas:

“En efecto, en un recorrido por los Andes de Bolivia al Ecuador, pasando por el Perú, se puede constatar que las comunidades se encuentran en un proceso de transformación ináudita. Parecen recorridas por varias tendencias, a la vez de desintegración y de rearticulación. Bajo la presión neoliberal y la globalización, los estados se empeñan en cumplir un imperativo liberal de inicios de la República. En la última década, se han dictado nuevas leyes agrarias de “saneamiento” (Bolivia), “titularización” (Perú), y de “subdivisión de los páramos” (Ecuador). En toda la región, se constatan procesos de expulsión sin precedentes de los comuneros hacia las ciudades y fuera del ámbito nacional”¹⁵

¹⁵ Andrés GUERRERO y Tristán PLATT, “Proyecto antiguo, nuevas preguntas: La antropología histórica de las Comunidades andinas de cara al nuevo siglo”, en Hans Joachim KÖNIG, Tristán PLATT y Colin LEWIS (coord.) *Estado-nación, Comunidad Indígena, Industria, Tres debates al final del Milenio*, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Cuaderno núm. 8 de AHILA, 98.

Lo que acabamos de leer, con diferentes adjetivos asociados a la tierra como objeto en transición, llámese “en saneamiento” “páramo” “titularizada”, tienen un hilo conductor en el carácter andino y comunero de su espacialidad, en desarticulación y rearticulación según Tristán Patt que apunta a entender una totalidad unificadora de los Andes amerindios.

Volviendo a La Rioja, en el año 2000, un programa social con financiación internacional, participó en el diagnóstico acerca de la necesidad de construir un complejo educativo en el pueblo de Amaná del Ayuntamiento-Municipio de Independencia. Dentro de los requisitos estatales federales para la concesión del financiamiento total de la construcción del complejo, se destacó uno: dominio perfecto del predio o lote de tierra donde se asentaría, los recursos financieros y una escritura pública tralativa del predio a favor del nuevo proyecto-entidad jurídica. Este requisito no llegaría a contar con el apoyo del Concejo Municipal del Municipio/Alcaldía de Independencia; el mismo se refería a la imposibilidad, como peticionantes, de lograr el otorgamiento de un predio de tierra, con nomenclatura catastral, cuya propiedad estuviera escriturada a nombre del nuevo proyecto. No se trataba del hecho de que el municipio no poseyera la potestad fáctica de otorgar tierras públicas mensuradas en posesión sino de que tal potestad no se condecía con la propiedad —al menos en los términos de dominio— que la legalidad contractual moderna les exigía como copartícipes de la financiación. El problema, según refiriera el delegado municipal informante, databa de la época colonial, cuando el gobernador del Tucumán, entonces jurisdicción a la que perteneciera el territorio del actual municipio, habría concedido la merced de tierra de Amaná¹⁶. De tal predio, nacería el pueblo de Amaná en el municipio Independencia (Provincia de La Rioja) una vez que ésta se independizó de Tucumán y de la Intendencia de Córdoba, sucesivamente. Ya en el siglo XXI, a pesar de un modesto grado de desarrollo institucional del Municipio, los pueblerinos de Amaná y de Patquía —comerciantes, maestros, pequeños ganaderos, campesinos— representados

¹⁶ “El Gobernador de Su Majestad Don Angel de Peredo concedió la merced de tierras de Amaná al señor Nicolás de Brizuela el 26 de Junio de 1670”, en “Merced de Amaná”, en *REVISTA DE LA JUNTA DE HISTORIA Y LETRAS DE LA RIOJA* (en adelante *RJHLR*), año II, núm. 1, enero-marzo, La Rioja, 1942, 31-35.

democráticamente en el consejo municipal local y en el parlamento provincial, no habían solucionado el problema de la tenencia regular de sus tierras. ¿Cómo la sociedad local había subsistido con la pervivencia de tal situación de intitulación dominial sin registros de sus bienes raíces? Ellos —los habitantes del campo—seguirán criando sus cabras, alquilando sus bañados, talando sus bosques por madera y carbón vegetal, comprando y vendiendo lo producido sobre la tierra que ellos poseen, heredaron y transmitirán *ab intestato*... o con meros boletos de compraventa sin certificación publica de firmas. En la imperfección de los títulos indivisos de tierras, proclamada por saberes técnicos y registros codificadores, en definitiva, ¿existe realmente un problema?

De la justificación de la problemática y de las preguntas que de ella se ha planteado —¿qué ha pasado que no hay escrituras en el Pueblo de Amaná del Municipio de Independencia? — se deducen dos hipótesis que serán expuestas a continuación y guiarán la investigación:

- Vista la destrucción total de los archivos capitulares y protocolares públicos ¿es posible reconstruir un mapa conceptual y cronológico-histórico de las mercedes de tierras que fueron concedidas desde la creación misma de la jurisdicción de Todos Los Santos de la Nueva Rioja? ¿a quiénes se las concedió? ¿en qué año? ¿cuáles eran las condiciones históricas que rodearon estas cesiones?
- ¿Son las mercedes de tierras concedidas entre los siglos XVII al XIX las originarias de la situación de indivisibilidad del dominio territorial descrita por los documentos modernos de mediados de siglo XX?

§ 2.1 EL PROBLEMA DE LOS REGÍMENES “ANÓMALOS” DEL PROPIEDAD TERRITORIAL

Teniendo en consideración que los juristas e historiadores modernos debemos ser conscientes del desarrollo histórico de los conceptos, la historia de la “propiedad” territorial en La Rioja —y en el noroeste argentino que contempló el Tucumán colonial— constituye un tema que difícilmente se agote, aún cuando el tiempo

transcurra y lo abordemos —sean los discursos de los especialistas y legos en torno a las diversas interpretaciones— desde una inusitada variedad de paradigmas de lo social: juristas, *ius* historiadores, economistas, etno historiadores, escribanos, agrimensores, y, en general, técnicos del estado, adscriptos a la cultura registral. Fueron estos últimos, en el cuarto final del siglo XX, en concurso generalizado de congresos registrales nacionales desarrollados en la segunda mitad del siglo XX que convocaban a operadores jurídicos y funcionarios de las direcciones provinciales de propiedad inmobiliaria y de catastro, quienes advirtieron que algo no estaba aconteciendo como la normatividad del código lo había precisado para los derechos reales sobre la tierra. Con matices, se intentó descalificar a estos regímenes como “anómalos” o de “titulación insuficiente” o “comuneros”, que, en síntesis son definidos por su consecuencia, esto es, por la inobservancia de la norma moderna que impiden el ingreso de tierras al mercado capitalista y al cobro de impuestos inmobiliarios. Imposibilitados de acordar una diagnosis común se dirigieron al Consejo Federal de Inversiones, un ente autárquico que contrató consultores para efectivizar, entre otros empeños, “planes de desarrollo”. Esto produjo, una serie de documentos¹⁷, que analizaremos sintéticamente a continuación y que nos permitirán marcar una pauta de la magnitud del problema, mientras que, como veremos, el génesis está aún oculto en un innominado derecho indiano. Aun cuando sean muy generales, estos documentos de trabajo sugieren interesantes elementos para la interpretación disciplinaria sobre cómo se concibe el funcionamiento de un sistema comunal de tierras en el norte argentino de fines del siglo XX.

“Suele ser un frecuente error de método pretender explicar todos los problemas jurídicos por causas remotas y profundas —explica un técnico del CFI—, pero es una indiscutible ingenuidad analizar los problemas vinculados al régimen de propiedad de la tierra soslayando la historia y la política, u olvidando que debajo de él se encuentran,

¹⁷ Roberto CATALÁN *et al.*, *Estudio sobre las mercedes de los llanos de La Rioja*, Buenos Aires, -Consejo Federal de Inversiones (en adelante CFI), 1964, 252, ms.; Felipe VILLARO, *Problemática jurídica de áreas deprimidas, con "titulaciones insuficientes" y regímenes anómalos en la tenencia de la tierra*, CFI, Buenos Aires, 1986, ms.; QUIROGA, Horacio E, *et al.*, *Determinación de las superficies afectadas por campos comuneros en el departamento Tinogasta, provincia de Catamarca*, CFI, San Fernando del Valle de Catamarca, 2000, 2 v., ms.; José FERRER *et al.*, *Estudio integral de las áreas bajo riego de la cuenca del Río Bermejo, provincia de La Rioja: suelos*, CFI, Buenos Aires, 1982, 3 v., ms.; Horacio DíEZ, *et al.*, *Acuerdo Federal para el desarrollo rural del Chaco árido*, CFI, Buenos Aires, 1987, 211, ms.

siempre, relaciones económicas y de poder”¹⁸. Se notaba que se habían agotado las explicaciones desarrollistas, las climatológicas y aún las geológicas para entender la construcción de la territorialidad y el vínculo primordial de los sujetos con la intensidad y la extensión de la cosa fundaria. La inaccesibilidad del derecho a la propiedad en algunas tierras del norte argentino era un tema que debía analizarse, además, en la complejidad de un país federal, donde cada provincia posee para sí facultades no delegadas y hasta sus leyes provinciales que regulan principios nacionales¹⁹.

Hasta la década del setenta del pasado siglo se estaba, tecnocráticamente hablando, en dos situaciones: la primera era definir el problema conceptualmente (vg. “titulaciones insuficientes”, “tenencias precarias”, “derechos comuneros”) y segunda, definir la extensión o superficie del “objeto” (en cuales provincias y en qué magnitud espacial). Por problemas de espacio, vamos a referenciar modélicamente el trabajo del CFI de F. Villaro de 1986. “Un análisis atento —nos advierte— no puede dejar de señalar, inicialmente, que ni el origen, ni el mantenimiento, ni la solución de las situaciones de ‘titulación insuficiente’ en áreas críticas de muchas provincias argentinas, son ajenas a al carácter que tuvo la conquista y colonización española en América, a la idea liberal de la Constitución nacional y el Código Civil argentino, a los intereses de la generación del ’80 y sus sucesores, y al profundo abismo que el puerto de Buenos Aires y los poderes económicos a él anudados tendió entre el litoral ganadero y la pampa húmeda y el resto del país”²⁰ Y aclara que algunos son causas y otros condición. Sin ahondar en una exégesis sobre qué se entiende por titulaciones insuficientes, opina que una somera revisión de las situaciones que se incluyen en ella, da cuenta que también esa misma denominación es insuficiente. Mientras que en la Rioja pervive la denominación de

¹⁸ F. VILLARO, *Problemática*, 3.

¹⁹ Como indagaremos más adelante, la mayoría de las leyes provinciales dedicadas a la “lo rural” y la sanción de los Códigos Rurales provinciales de fines del siglo XIX y gran parte del XX, de las actuales provincias del entonces Tucumán, tendían, más que a “propietizar” o individualizar la ruralidad sino más bien a tutelar a los entonces “sujetos agrarios” campesinos y sus relaciones comarcales y comerciales, —comuneros ricos o pobres, asalariados rurales o indigentes— del absolutismo jurídico propietario. Véase in extenso el § 30 “El Código civil *sin* código agrario”, p. 447 y ss., del presente trabajo.

²⁰ F. VILLARO, *Problemática*, 2.

mercedes y a sus habitantes “derechosos”, en la vecina provincia de Catamarca se los llama “campos comuneros” y “comuneros” respectivamente. Otro autor del CFI, ya en el 2000, nos refuerza el carácter privado de este título en contraposición al derecho registral oficial “(...) hasta hubo un llamamiento para que los interesados pudiesen presentarse a exhibir títulos, que nos permitiera fehacientemente la determinación de espacios territoriales dentro de las superficies en estudio que hicieran posible segregarlo de ese denominador común conocido como ‘Campos Comuneros’; fenómeno jurídico casi exclusivo del norte argentino, no contemplado por la normas de fondo”²¹. El llamamiento del funcionario a que exhiban sus títulos es la prueba de la incontestación pública de éstos en un registro estadual municipal, provincial o nacional. ¿Pero, por qué? ¿Quiénes eran los comuneros? ¿Qué títulos debían exhibir? Los primeros eran los tenedores de derechos (veremos después como “Derechos y Acciones”) y posesiones en tierras que, en principio, no eran publicas ni fiscales, y sus títulos eran contratos privados, las más de las veces, certificados ante escribano público, pero que la característica aglutinante, como veremos, era que ni su tipología ni condición estaba avalada por el orden jurídico codificador, ni federal ni provincial ni municipal. En otras palabras, su existencia no se insertaba —ni se inserta aún— en ningún derecho real del *Code* decimonónico argentino.

Retrocedamos en el tiempo. Cuatrocientos años antes, Francisco de Alfaro, un jurista no desconocido para el Tucumán colonial y célebre por sus famosas Ordenanzas que llevan su nombre, escribió en 1606,

*“Nam titulus in hoc officio necessarius est: longa possessio non sufficit: ergo titulus petitus semper debet exhiberi, no obtenio possesione officij”*²²

La responsabilidad de probación de la cosa invocada era, aun siendo como en este caso, el cual nos refiere a los oficios, del intitulado y no de una entidad pública, y como veremos, marcará una fuerte pauta de tenencia material del escrito llamado “título”, en

²¹ H. QUIROGA *et al.*, *Determinación de las superficies afectadas*, 49.

²² Francisco de ALFARO, *Tractatus de officio fiscalis, Deque fiscalibus privilegijs Don Francisci de Alfaro Reggi in Argentina Cancellaria Regnorum Pirv fiscalis procvratoris*, ed. Apud Ludovicum Sanchez, Valladolid, 1606, 674, (Sala de Tesoro de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires).

manos del titular o de sus familiares. Inclusive el “título” no necesariamente debía ser escrito, como en Amaicha de Valle Calchaquí en la actual provincia del Tucumán donde el mismo, —sobreponiendo al esquema normativo de *vero* instrumento público— fue oral, y transmitido oralmente de generación en generación²³. Dentro de estos márgenes extremos, este comentario debe conllevar un intento de comprender el sentido histórico del texto y en el esfuerzo por establecer en forma narrativa su relación y vinculación con el contexto histórico en el que se generó, al que se refiere y sobre el que actuó. En otras palabras: el comentario de un texto histórico siempre remite y exige tratar el contexto histórico donde se fraguó y donde adquiere su sentido y significado pertinente. Entonces, el poder sobre la cosa y el tiempo de posesión requería, modernamente, un documento escrito y apto. Frente a la exigencia de exhibición de título —*titulus petitus semper debet exhiberi*— como forma, surgía, contrastablemente, la idea de posesión desde tiempo *inmemorial*²⁴. La jurisprudencia indiana reforzaba la preposición la cual la *longa possessio* no era suficiente sin la presentación de título. En el orden jurídico tucumano, se constituía así una cultural comunal que intuía que solo argumentar que se está en ese predio desde tiempos inmemoriales no era suficiente. Había, además, que tener un “papel”, un papel escrito de carácter público, independientemente de lo que este instrumento privado o público diga, debía en su testimonio gráfico referenciar al predio de sus antepasados con el portador del escrito y como veremos, con una fecha cierta y linderos reconocibles.

²³ Ramón Cano, un comunero del paraje de La Merced recitó a Alfonso Carrizo el “título de merced de tierras de sus antepasados”, que fue transcripto en A: CARRIZO, *Cancionero Popular del Tucumán*, ed. UNT, 1937, tomo I, página 36, y que Carrizo entendió como “Real Cédula”, («Real cédula o merced de tierras de los Amaichas-Tañes»). Para una lectura crítica de ésta visión folklórica y reseña del estado de la cuestión, véase a Jorge Sosa, « La “cédula real de los Amaycha”. Contextualización, análisis y transcripción de un documento controversial », *Corpus* [En línea], Vol 5, No 1 | 2015. <http://corpusarchivos.revues.org/1374> (consultado el 21-01-2016)

²⁴ Las nociones temporales, que no analizaremos en el presente trabajo, se refieren a expresiones argumentales frecuentes como: “*desde tiempo inmemorial*”, “*origen y antiguo sitio*”, “*tiempo de los antiguos*”, “*ab origen e immortal memoria*”. Al respecto, véase los comentarios de Gabriela SICA, “¿De qué norte hablamos? Las percepciones históricas del espacio y sus consecuencia en la investigación de las sociedades prehispánicas y coloniales del noroeste argentino”, en *Memoria Americana* 11, año 2003, 51-72.

Y, ¿quiénes eran los sujetos agrarios llamados “comuneros”? Gran parte de la literatura histórica ha asimilado a las poblaciones comuneras como sinónimo de poblaciones indígenas. Si en Catamarca son comuneros quienes, en el año 2000, habitan los campos comuneros, doscientos años antes como ha probado D. Santamaría, hacia el año 1804 eran comuneros los indígenas que aportaban a las cajas de los censos con sus productos comunitarios²⁵. Sin analizar la condición epocal de la terminología en cuestión, es opinión más o menos convenida que el comunero es aquel que dispone del acceso al usufructo del predio territorial donde reside, siembra, caza, leña, etc., *habitus* o habitante de esa comunidad rural²⁶ y, en efecto, comunero de la misma, a sazón amparados por preceptos legales de inspiración colectivista²⁷.

“Es frecuente que los comuneros cedan sus derechos en el campo e incluso sus posesiones exclusivas cuando las tienen, a un sucesor singular que se instala o nó en su rancho, en el denominado ‘puesto’, siendo reconocido por sus reales por todos, siempre que no perturbe el sistema de uso y aprovechamiento de la cosa común que las generaciones se han transmitido junto con sus bienes, costumbres y tradiciones. No falta, sin embargo, el que, comunero o no de las ‘mercedes’ o campos comunes, pretende apropiarse con exclusividad de todo o gran parte del campo, privando a los condóminos o coposeros del ejercicio efectivo de la coposesión; y generalmente

²⁵ Daniel Santamaría, “La propiedad de la tierra y la condición social del indio en el Alto Perú, 1780-1810”, en *Desarrollo Económico-IDES*, Buenos Aires, núm. 66, vol. 17, 257.

²⁶ Nótese ya en el título de J. MARILUZ URQUIJO, “La comunidad de pastos y montes en el derecho indiano”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene* (en adelante *RIHDRL*) núm. 23, 56 (1972).

²⁷ “La permanencia de los preceptos legales de inspiración colectivista en un mundo trabajado por las ideas individualistas ocasiona decisiones judiciales y administrativas contradictorias y variantes regionales sólo aprehensibles mediante un tratamiento casuístico supeditado, naturalmente, al hallazgo de la documentación pertinente”, Jose MARILUZ URQUIJO, “Algo más sobre la comunidad de montes en el Rio de La Plata”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho* (en adelante *RIHD*) núm. 1, 384, (1973) en línea, en <https://www.dropbox.com/s/r9aq39w1v44nzq2/Revista%20de%20Historia%20del%20Derecho%20n%C2%B01.pdf?dl=0>, (Consultado el 12-03-2016)

puede hacerlo aquel que goza de un poder económico o político el que ha accedido a expensas de sus propios paisanos cuando no es un extraño”²⁸.

La idea de comunero, es también lo que el adjetivo pretende indicar, y en esta idea será infructuosa la búsqueda de su significado jurídico *in sensu strictu*. Lo es, un individuo habitante del campo comunero, pero no todos los sujetos superficiarios de un campo comunero son “comuneros”. Solo lo son los “troncales” o principales descendientes de habitantes originarios y nacidos (nativos) en ese paraje o tierra definida como comunera/o. Esta idea nos está direccionando hacia la naturaleza jurídica ya del derecho local de gentes y la relación de éste con el derecho nacional precodificado argentino, pero, nos estimula, simultáneamente, a la búsqueda de una historia cultural de las prácticas constitutivas de la posesión del suelo en el Tucumán y su peculiar naturaleza esbozada en su tránsito del antiguo régimen a la modernidad.

En la actualidad, y en un ejemplo práctico de la mentalidad de un sujeto agrario, una comunera del valle de Abaucán, habitante del paraje de Los Aguirre situado entre Tinogasta y El Puesto (Catamarca), llamada Aldacira Aguirre, nos dijo —mediante entrevista abierta— que los “troncales” no son las familias principales sino “las familias que participaron de la hechura de la ‘ley de los troncales’²⁹. Inmediatamente después de dicho esto, aclara que la idea de la ley que yo tengo como entrevistador no es la ley que ella hace referencia. Dice que es “la ley que han establecido sus tatarabuelos y abuelos (mediados del s XIX)”. Para ello, los jefes de hogar se han reunido para establecer una distribución que consiste en: “cada jefe de familia cargará un tronco de árbol en sus espaldas y recorrerá una línea preestablecida hasta que su peso o cansancio lo obligue a tirar el madero, allí se amojonará y comenzará uno nuevo adulto, hasta distribuir toda la tierra del enclave Los Aguirres”. Este paraje, habría instituido esta “ley” de distribución hacia 1840-1850 entre la veintena de familias habitantes autóctonas del enclave ubicado al interior de la merced de tierras Anillaco-Fiambalá. Hacia 1930-1940 abandona la última familia estos predios por migración hacia las ciudades del interior argentino. La

²⁸ Carlos LANZILLOTO, “Las Mercedes Indivisas riojanas frente al código civil y la legislación local”, La Rioja, Mimeo, (1968 c).

²⁹ Aldacira AGUIRRE, Comunicación personal, Tinogasta, provincia de Catamarca, julio de 2006.

entrevistada no pudo precisar la fecha ni origen de esta “ley privada” y es consciente de que a la fecha no posee ningún título escrito sobre esas tierras más que lo relatado oralmente al entrevistador (2006). El ámbito cartográfico en donde Aldacira ubica al paraje los Aguirre, ha sido definido topográfica y catastralmente por la provincia de Catamarca como “Campo Comunero”³⁰.

Pero volviendo a Villaro, las situaciones de naturaleza caracterizadas, aunque más no sea erróneamente, de “titulación insuficiente”, éste las lista hostilmente como una condena brutal a lo antiguo sin preguntarse en las sutiles formas de convivencia y organización comunitaria que trasuntan esas insuficiencias “...en la mayoría de los casos no se plantean únicamente deficiencias o insuficiencias en los títulos de dominio, sino también —continuará Villaro— ocupación de tierras sin título, o contra título, y formas anómalas, atípicas del derecho de dominio o condominio y hasta una particular disociación entre el derecho de propiedad que hace que el ‘título’ ande por un lado y la posesión por otro”. Después, veremos cómo los técnicos estatales que implementaron leyes y prácticas definidas de saneamiento de tierras en la década del setenta del siglo pasado fueron más imaginativos que el abogado Villaro, que, si bien proviene del mundo del derecho, intenta listar situaciones “enraizadas” que evocan distintivamente lo que él tiene en mente: no hay propiedad, no hay propiedad no individual (el tradicional condominio), ni aquella propiedad de una persona jurídica, ni aun pública, ni estatal. No podemos acusar a Villaro de desconocer la *traditio* del derecho indiano, ni del mundo civilista italiano que estudió el orden jurídico territorial medieval, ni los múltiples abordajes como los del Emile de Laveleye, quien, en 1874, afirma:

*“La propiedad plena de la tierra es una institución muy reciente”*³¹

Independientemente de cual sea la categorización ahistórica de la situación existente, (Villaro es un hombre práctico, y funcional a los términos de referencia de su

³⁰ QUIROGA, Horacio E, *et al.*, *Determinación de las superficies afectadas por campos comuneros en el departamento Tinogasta...* vol. 2, 56.

³¹ Emile de LAVELEYE, *De la propriété et de ses formes primitives*, Paris, 1874, 542, citado en Andres LLAMAS, *Bernardino Rivadavia y la cuestión de la tierra*, ed. Cazes-Liga Argentina para el Impuesto Único, Buenos Aires, 1915, 56. En el mismo sentido argumental GROSSI, *La proprietà...* 363.

consultoría del Estado, que busca soluciones legales y procedimentales y no de describir el origen de la situación problemática), el pensamiento técnico moderno intenta sistematizar el segundo punto en cuestión, es decir, cuáles y en qué extensión superficiaria se encuentra esta indescriptible situación no codificada. La Rioja, Catamarca, partes de San Juan, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero son provincias donde existen esas situaciones descriptas como anomalías. “Más de un 30% de la superficie del país (Argentina) está afectada por falta de títulos que aseguren a los propietarios y poseedores, el goce pacífico de sus derechos de propiedad”³² dirán las conclusiones de congresos de profesionales registrales (agrimensores y escribanos) de mediados de la década del 1970.

En efecto, según este autor “puede concluirse que grandes extensiones están comprendidas en ellas [las titulaciones insuficientes], manteniendo niveles de infra producción (en la mayoría hay apenas economías de subsistencia), varios millones de hectáreas que debiendo estar incorporadas plenamente a la producción constituyen un verdadero despilfarro de recursos, al tiempo de ser, además, enclaves de retraso cultural y social”³³

En términos generales, según Villaro, más del 50% de la superficie total de la Provincia de La Rioja se encuentra en la situación descrita —en cuanto enclaves de “retraso cultural” —; igualmente Catamarca, en la cual, en los recientes estudios del departamento de Fiambalá, se ha reestablecido la noción jurídica e intentado una cuantificación material de los “campos comuneros”. Allí veremos como el encomendero y hacendado Juan Gregorio Bazán de Pedraza construye, en 1700, el mayorazgo de Anillaco en el Valle de Abaucán³⁴. Suma complejidad al estudio, la incorporación a esta

³² J. NIETO *et al.*, “Titulaciones dominiales insuficientes. Diversas soluciones”, Recopilación de trabajos presentados en el Congreso Registral y publicados por la cátedra de Derecho Reales de la Facultad de Dercho de la Universidad Nacional de Córdoba, s/e., s.f.; citado por VILLARO, *Problemática ...*, 4.

³³ F. VILLARO, *Problemática ...*, 19.

³⁴ In extenso, A. MERCADO REYNOSO, “La hacienda de Anillaco del Valle de Abaucán”, en DÁVILO, Beatriz *et al* (coords.), *Espacio, Memoria e Identidad* [recurso electrónico en disco compacto], Rosario, pcia. de Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario, 2006. En línea en

jurisdicción de San Fernando del Valle de Catamarca, de las antiguas jurisdicciones de Londres del Pomán (1633-1679) y los territorios nacionales de la Gobernación de los Andes (1900-1943), amén de haber pertenecido a Chile y a Bolivia, y que fueron incorporados a la provincia a partir de la constatación de la preexistencia de la merced de tierras de Antofagasta³⁵, territorio del entonces mayorazgo de Huasán.

En Tucumán, en la homónima provincia, las tierras de titulación insuficiente acaparan solo el 8% de su superficie no montañosa, pero allí se encuentran las comunidades ancestrales de Amaicha de valle y Conaista.

En la Córdoba del norte y noroeste, limitando con La Rioja y Santiago del Estero, es “bastante difícil encontrar un dominio (perfecto)”;³⁶ de igual manera, si analizamos los estudios de casos como los de la merced de Sinsacate³⁶, los mismos no hacen más que verificar, a priori, la tensión que genera la complejidad del tema de los usuarios actuales de la tierra y la justificación de los precedentes históricos coloniales.

En la aldea provincia de San Juan se encuentra el departamento o alcaldía de Valle Fértil antigua “merced³⁷ real de indios Huarpes del Valle Fértil” el cual se transmite en

<http://consulta.bcn.gob.ar/bcn/Catalogo.VerRegistro?co=645375&lg=fr>, (consultado el 13/05/2015)

³⁵ En 1889 Bolivia y Argentina firman un tratado por el cual en la primera le cede a nuestro país la Puna de Atacama a cambio de la localidad de Tarija. Chile que ocupaba la puna y había ganado la guerra a Bolivia pretende quedarse con gran parte de él arguyendo el derecho de conquista. Pero el laudo arbitral a la que se someten ambas naciones le reconoció los derechos a los argentinos sobre el el 80% aproximado del espacio terrícola en disputa. Para aportar en este sentido, el Perito Moreno, negociador argentino, presentó una copia del otorgamiento de la merced de tierras de Antofagasta y Carachapampa del Gobernador del Tucumán Fernández Campero a favor de Luis Díaz, fechada en Salta el año 1766. Véase al respecto Silvia GARCÍA *et al.*, *Y quinientos años es mucho. Puna e historia, Antofagasta de la Sierra, Catamarca*, ed. AINA, Buenos Aires, 2000, 61 y ss. Para el título de merced de tierras, véase el apéndice documental de Cornelio SANCHEZ OVIEDO, *Los derechos de Catamarca a la Puna de Atacama*, ed. del autor, San Fernando del Valle de Catamarca, 1943, 207 y ss.

³⁶ Matilde TAGLE, “Sinsacate: tierra codiciada. Historia de una merced invalidada”, en *Cuadernos de Historia*, núm. 13, año 2003, Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas Roberto I. Peña de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 177-186.

³⁷ La merced real de indios huarpes del valle fértil fue otorgada en 1604 por el Gobernador Alonso García Ramón a Baltasar Quiroga, ascendiente del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga, según Víctor ROBLEDO, “La sangre de Facundo y otras revelaciones”, en Revista *Papeles de Cultura*,

un catastro especial. Mención especial merece la merced de tierras de Sayanca, ubicada entre Mendoza y San Juan, declarada ya en el presente siglo, como apócrifa³⁸.

El sureste de Santiago del Estero sufrió las características descriptas en toda su región sudeste, que significaron una política de expropiación pública de pueblos como los de la Termas de Río Hondo³⁹ y con una amplia explotación extractiva de los quebrachales boscosos.

Las provincias de Salta y Jujuy⁴⁰ pareciera haber habido un recorrido diverso al sud calchaquino (el CFI no aborda temas de titulaciones insuficientes en esas provincias) y podría ser una consecuencia directa que el derecho patrio local autorizó en 1839, el

La Rioja, Julio de 2005,12. “El motivo de la aparición de una villa en Valle Fértil de tan efímera existencia, sobre todo en épocas en que habían cesado las fundaciones de villas y ciudades, no deja de ser una incógnita. Para Ardissonne y Grondona éste habría sido la necesidad de controlar los levantamientos indígenas y pacificar la región por una parte, y por otra la determinación de separaciones entre las Gobernaciones de Tucumán y Chile por eventuales conflictos” nos dice Catalina T. MICHELI, *Realidad socioeconómica de los indígenas de San Juan en el siglo XVII*, ed. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, San Juan, 1996, 30-31.

³⁸ La merced de tierras de Sayancas posee dos características distintivas: sus 750.000 hectáreas es una de ellas, y las interesantes incidencias del tratamiento judicial de más de un siglo y medio. El caso de la Merced Real de 1713 concluyó definitivamente el 4 de Mayo de 1961, con la sentencia dictada por el Juez del Quinto Juzgado Civil de Mendoza, F. Decunto, por la cual se declaraba, en relación con el título de merced, que “dicha pieza no es auténtica, que es falsa y que es apócrifa”, citado por Atilio CORNEJO LENCINA, *La falsa Merced Real de 1713 a favor del Cacique Sayanca. Texto de la sentencia judicial que la declara falsa, apócrifa y sin ningún valor. Relación de los hechos y copias de los documentos y peritajes que muestran su falsedad*, ed. del Autor., Mendoza, 1961, 63.

³⁹ Edmundo GÓMEZ y Wolfam LUTHY, “Títulos insuficientes y su consolidación”, ed. Instituto de Derecho Registral, Buenos Aires, 1976, 13, citado por F. VILLARO, *Problemática ...*, 17.

⁴⁰ Véase in extenso Daniel SANTAMARÍA, *Memorias del Jujuy Colonial y del Marquesado de Tojo. Desarrollo integrado de una secuencia territorial multiétnica, siglos XVI-XVIII*, ed. Universidad Internacional de Andalucía Sede Iberoamericana de la Rabida, Huelva, 285. Sentencia de la Corte Suprema dada por 1870 en el juicio que entabló la Provincia de Jujuy contra Fernando Campero, sobre reivindicación, y que se halla publicada en la Colección de Fallos de la Suprema Corte de la Nación, tomo 19, 29, que generó toda una jurisprudencia sobre las herencia estatal, y como tal fiscal, de las tierras de indios encomendados. Véase el laudable trabajo y aporte documental de Gastón DOUCET, “De Juan José Feliciano Fernández Campero a Fernando Campero: Aportes documentales y críticos al estudio de la sucesión del Marquesado del Valle de Tojo en el Siglo XIX”, Separata de autor, Buenos Aires, 1994, 9-133, s/e.

parcelamiento enfitéutico⁴¹ y el arrendamiento de tierras ahora fiscales cerrando la puerta de entrada a la comunalidad como principio, en donde la figura del enfiteusis⁴² —enmarcada en el derecho local— era el articulador de las necesidades fiscales y la disposición de las tierras comunales como si fuesen fiscales y de ahí potencialmente privatizadas o privatizables.

Como veremos más adelante, hubo muchos pronunciamientos por parte de la *intellighenzia* local de fines del XIX y en el XX (con múltiples visiones, modernistas, románticas y costumbristas sobre la problemática aquí planteada), pero quisiéramos detenernos en particular en este grupo de técnicos (agrónomos, hidrólogos, sociólogos) que elaboraban *papper* (también llamados “documentos de trabajo”) de propuestas al Consejo Federal de Inversiones. No es causal que en la segunda mitad del siglo cunda una visión modernista de tradición cepalina (CEPAL- Comisión Económica Para América Latina, sede en Santiago de Chile)⁴³ que ha sido catalogada como desarrollista⁴⁴. Gran parte de ese desarrollismo fue enmarcado en la proscripción del peronismo, el combate a los movimientos insurgentes armados y lo cobijaron las escuelas militares que antes y después pugnaron por golpes de estado. En este contexto, son significativas la persecución y la persuasión política y fiscal al sector subalterno que, por primera vez en documentos oficiales llama “comuneros”; según esta visión desarrollista del CFI, éstos “no facilitaban los procedimientos legales para la colonización rural”. Los amparos y la posesión efectiva de comuneros sobre sus mejoras

⁴¹ Guillermo MADRAZO, “El proceso enfitéutico y las tierras de indios en la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy, República Argentina)”, en ANDES, núm 1, 1990, 52-95.

⁴² Carlos LUQUE COLOMBRES, “Los ejidos de Córdoba y la enfiteusis”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, (en adelante RIHD) ed. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, núm. 9, 1958, Imprenta de la Universidad, 96-114.

⁴³ A modo de ejemplo, el ILPES (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social) es un organismo autónomo creado bajo la égida del la CEPAL y establecido el 1 de julio de 1962 en Santiago de Chile como proyecto del Fondo Especial de la Naciones Unidas. Su objetivo principal es promocionar, a solicitud de los gobiernos, servicios de capacitación, asesoramiento e investigación sobre desarrollo y planificación.

⁴⁴ Osvaldo SUNKEL y Pedro PAZ, *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*, México, Siglo XXI, 16va edición, 1982, 271 y ss. IV parte “un ensayo de interpretación del desarrollo latinoamericano”.

y tierras habían obstaculizado el “saneamiento”. A modo de ejemplo, el abogado del CFI, Rodolfo Carrera, para quien el problema de la Rioja es “sus 2.400.000 hectáreas de comunidades indivisas” y los tres sub-problemas en que se subdivide aquel:

- a) “Los ocupantes
- b) Las mejoras (que habrá que indemnizarlas previo a redistribuirlas),
- c) Exceso de condóminos.”⁴⁵

Pugnarán, Carrera y otros técnicos, por un armado legal que proceda al parcelamiento en “unidades económicas” y la “entrega de títulos sanos” y “pago o reconocimiento de las indemnizaciones”. Concluye que “...en los campos indivisos, ‘si los comuneros no se ponen de acuerdo’ para llegar a la solución buscada se recurriría a la expropiación ‘de toda la merced’, para su posterior adjudicación de las unidades económicas” (lo resaltado es mío).

“Las consecuencias de este estado de incertidumbre e inseguridad han sido desastrosas para la provincia. En primer término, porque existen conflictos entre los variado y diferentes grupos de titulados condóminos, sobre las tierras que ejercen actos posesorios, o tienen sus casas [hogares]. En segundo lugar, porque la imposibilidad material de practicar la división del condominio, hace imposible la incorporación de mejoras o el otorgamiento de créditos y, en última instancia, su explotación. Es, en definitiva, una verdadera paralización de la economía de la Provincia, porque estas tierras son, como dice el viejo proverbio español ‘bien común bien de ningún’”⁴⁶. Desarrollaré, más adelante los resultados prácticos de esta intervención pública estatal y provincial en el § 14.4.a. del presente trabajo.

⁴⁵ R. CARRERA, (CFI); “Programa preliminar para la formulación de un estudio sobre el régimen jurídico aplicable a las comunidades indivisas y los minifundios de la Provincia de La Rioja”, Buenos Aires, 1968, 7 y ss. En línea <http://biblioteca.cfi.org.ar/documento/programa-preliminar-para-la-formulacion-de-un-estudio-sobre-el-regimen-juridico-aplicable-a-las-comunidades-indivisas-y-los-minifundios-de-la-provincia-de-la-rioja/> (Consultado el 09-12-2015)

⁴⁶ R. CARRERA, (CFI); “Programa ...”, 5.

§ 2.2 —LA EXPERIENCIA JURÍDICA DE LA MERCED DE TIERRAS.

El instrumento adecuado para la comprensión y la correcta ordenación del enorme material que tenemos adelante, es la noción de “experiencia jurídica” como esquema interpretativo del devenir histórico jurídico⁴⁷. Preciado el método, comparada con la experiencia jurídica⁴⁸ medieval y moderna, la exigencia histórica imperial española en América funda, al menos, una nueva experiencia jurídica a la que denominaremos, siguiendo una clásica convención, indiana. Esta experiencia jurídica indiana, desarrollada a lo largo de siglos, se revela como variada y compleja donde la historia del derecho puede pensarse como una historia de las experiencias jurídicas, singularizada en el hecho siempre destacado de que los productores de derecho pre moderno no se ocupan de dogmas y conceptos jurídicos, ni tampoco ambicionan describir y descubrir caminos genéricos, sino que pretenden dar soluciones peculiares a situaciones conflictivas.

En este poder político que se caracteriza por hallarse intrínsecamente inacabado, es y se mantiene como un poder incompleto, queriendo expresarse con esta calificación un

⁴⁷ El mérito de este paradigma, Paolo Grossi lo atribuye a algunos ensayos de C. CAPOGRASSI, *Studi sulla esperienza jurídica* [1932] y al sociólogo del derecho G. GURVICH, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit* [1937], y señala “*Esperienza jurídica*: una siffatta combinazione di sostantivo e aggettivo non è casuale. Si tratta invece, come si sa, di una locuzione elaborata e proposta, negli anni Trenta di questo secolo, nell'ambito della filosofia jurídica italiana e francese, con l'intento di sottolineare —in un momento di idealismo imperante— la inabdicabile umanità del diritto, il suo continuo coinvolgimento con la vita. ‘Esperienza jurídica’ significa infatti un modo peculiare di vivere il diritto nella storia, si percepirlo concettualizzarlo applicarlo, in connessione a una determinata visione del mondo sociale, a determinati presupposti culturali; significa quindi un insieme di scelte peculiari e di soluzioni peculiari per i grandi problemi che la realizzazione del diritto pone a seconda dei vari contesti storici.”. Cfr. GROSSI, *L'ordine jurídico medievale*, Bari, ed. Laterza, 1993, 23. En español, *El orden jurídico medieval*, ed. Marcial Pons, Madrid, 1996, 256, traducción de Francisco TOMÁS Y VALIENTE y Clara ALVAREZ.

⁴⁸ “La notion de culture juridique, plus large que celle de science du droit, peut être un moyen d’appréhender les éléments de continuité et de rupture dans le passage du jus commune à l’âge des codes” nos dice Riccardo FERRANTE, en “Cultura jurídica e codificazione”, en *Cliothemis*, Revue électronique d’histoire du droit, N° 2. En línea <http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-2> (Consultado el 14/02/2014)

poder no totalizador, no omnicomprensivo⁴⁹. El conflicto y el poder se saldan en el marco institucional, dirán tanto J. Gelman como H. Pietschmann. Del primero leemos que: “Durante el periodo colonial, [el orden legítimo con reglas aceptadas por la comunidad y un aparato estatal capaz de aplicarlas] se había garantizado fundamentalmente mediante un complejo sistema de negociaciones entre los diversos sectores dominantes y el resto de la sociedad, que reconocían en la Corona y sus representantes locales un poder de arbitraje que articulaba los diferentes intereses y permitía la reproducción social. Si bien la coacción y la represión desembozada no estaban ausentes del sistema de dominación colonial, la clave del éxito y de la perduración del régimen parece encontrarse más bien en una especie de consenso, que colocaba a la justicia real en el centro de la resolución de los conflictos”⁵⁰.

Otro autor, resumiendo un compendio de historia de América Latina, dirá: “Lo importante es, sin embargo, que estos conflictos derivados de la ruptura de equilibrios tradicionales se solucionan finalmente, en la abrumadora mayoría de los casos, a lo largo del sistema legal-institucional y es en este contexto que adquiere importancia el discurso legitimador intelectual-histórico-jurídico”⁵¹.

En este marco, nuestro objeto de estudio se ubica en las concesiones e mercedes de tierras que el rey otorgaba a sus vasallos conquistadores.

Pero en cualquier orden, el dominio requiere de un poder autónomo e inmediato sobre las cosas y de una conciencia de dominio bajo el orden normativo y el esquema de

⁴⁹ Paolo GROSSI, “Un derecho sin estado. La noción de autonomía como fundamento de la constitución jurídica medieval”, en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, núm. 9, (1997), p. 167 y ss.

⁵⁰ Jorge GELMAN, “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires”, *BIHAAER*, Tercera Serie, núm. 21, 1º semestre de 2000, 7. Del mismo autor, quien no duda en atribuirle al derecho indiano una instancia de resolución de conflictos locales entre la administración pública y la economía colonial, véase Jorge GELMAN, *Economie et Administration locale dans le Rio de la Plata du XIIe. siècle*, tesis doctoral, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1983.

⁵¹ Horst PIETSCHMANN, “El ejercicio y los conflictos de poder en Hispanoamérica”, en UNESCO. *Historia General de América Latina*. Vol.III-2. *Consolidación del Orden Colonial*. (Coord.) Allan KUETHE y Alfredo CASTILLERO CALVO (dir.), París, ed. Trotta-UNESCO, 2001, 671 y ss.

mentalidad circulante⁵². Los espacios, entonces, no son similares *oltre mer* dado que en América algunas instituciones transportadas desde Europa asumen, luego de implementadas, particularidades locales sin abandonar la anterior tradición de aquéllas.

La implementación de un nuevo orden, y sus lógicas resistencias, sirve como la consumación de una experiencia que, según Vergopoulos⁵³ no es clásica, no nace de una sociedad civil local y americana. Mientras que en la Europa medieval la confluencia de *cividades* era la que conformaba las naciones y de éstas un estado, en América Latina serían una nación, la castellana, y un estado monárquico, el ibérico y el lusitano los que conformaron y modelaron el nuevo estado indiano y la nueva sociedad civil latinoamericana.

Las instituciones de derecho implementadas (e interpretadas aquí como nexo entre el Estado y la sociedad civil) como la encomienda, la capitulación, la merced de tierras, el juicio de residencia de los gobernadores, el recurso de queja ante la Audiencia, el requerimiento, por nombrar sólo algunas, han sido descriptas minuciosamente⁵⁴, aunque en términos genéricos, es decir, tomando las instituciones de derecho indiano como un todo “latinoamericano” sin ahondar en las características propias que éstas adquieren en las diferentes audiencias y virreinos.

Al investigar, en el espacio rioplatense, la relación existente entre el hombre y los bienes, Ricardo Levene⁵⁵ —uno de los estudiosos sudamericanos más destacados en

⁵² Ángel LÓPEZ Y LÓPEZ, *Prólogo para civilistas*, del libro de Paolo GROSSI, *La propiedad, las propiedades*, Madrid, ed. Civilistas, 1991, 6-8.

⁵³ Kostantin VERGOPOULOS, “L’Etat dans le capitalisme périphérique”, en *Reveu tiers-monde del institut d’étud du développement économique et social*, Tomo XXIV, N° 93, PUF, París, 1987, 35 y ss. En el paradigma de Vergopoulos hay un Estado metropolitano que modela el periférico incidiendo de manera directa hasta las instituciones de la sociedad civil. “Este Estado solo tiene sentido porque articula y modela los elementos sociales. Lo que es más, aquí la sociedad sólo existe porque es modelada por el Estado. Por múltiples imbrincaciones, la sociedad (civil) periférica no se desarrolla más que por el Estado, reside en el Estado, funciona en el Estado”.

⁵⁴ Ver sobre el tema a prestigiosos americanistas como Alfonso GARCIA GALLO, José María OTS CAPDEQUÍ, Silvio ZAVALA y Ricardo LEVENE, cuyas citas y opiniones serán desarrolladas, en menor medida, en el presente trabajo.

⁵⁵ Ricardo LEVENE, *Historia del Derecho...*, Tomo II, 465.

Historia del Derecho— distingue, en el plano heurístico, las instituciones ligadas a los dos principales bienes americanos a repartir: los repartimientos de tierra y los repartimientos de indios para el trabajo, los ‘repartimientos’ y las ‘encomiendas’ constituyen la materia vital de derecho Indiano”⁵⁶. Así, “en primer término, son las instituciones sobre cuyas bases se erigió el edificio de las Indias, la realidad palpitante humana de trascendencia económica y política”. Este autor, quien según José María Ots Capdequí posee “una viva simpatía por la obra de España en América”, parte de un punto de vista similar al propuesto por el materialismo dialéctico, en el sentido que tanto el “trabajo” como la “tierra”, son “fuerzas productivas” donde se asienta el *überbau* o edificio jurídico-político de la nueva sociedad americana.

§ 2.3. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN

¿Por qué elegir una ciudad y provincia como La Rioja como límite espacio-temporal? Parafraseando a Manuel Burga⁵⁷, la respuesta es muy simple. Nací en ella y allí viví ininterrumpidamente durante 25 años. Además, el estudio de una institución de derecho como la merced de tierras, dentro de la experiencia jurídica indiana y criolla, se enfrenta con un obstáculo de difícil superación: la evanescencia del objeto de análisis. Frente a la modernidad, la relativa ambigüedad del referente nos plantea, en efecto, un conjunto de complejos problemas tanto en lo relativo a la comparabilidad de los diversos enfoques (histórico, antropológico, jurídico etc.) como así también en lo referido al acceso a las fuentes históricas con especial relevancia y pertinencia a la relación social entre los sujetos e *suoi beni terrieri*. De allí que, atendiendo a un problema de construcción de escalas de análisis, el ámbito espacial o geográfico preciso nos ayude a un mejor análisis secuencial y crítico, que partirá de la provincia de los

⁵⁶ R. LEVENE, *Historia ...*, 132.

⁵⁷ “¿Porque el valle del Jequetepeque? La respuesta es muy simple: nací en el valle y viví en él, ininterrumpidamente, durante 15 años”, nos señala Manuel Burga en su clásico ensayo, M. BURGA, *De la encomienda a la hacienda capitalista: El valle de Jequetepeque del siglo XVI al XX*, ed. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1976, 13.

Diaguitas y Juries (hoy La Rioja)⁵⁸ para avanzar, en investigaciones posteriores, con el resto del norte argentino.

Levene hablando de otra institución como es la encomienda nos dice que “eran diferentes según el distrito geográfico respectivo y lo fueron también según su momento histórico, cambiando su estructura, en el curso de la dominación española”⁵⁹. La especificidad del espacio como lugar de la *praxis* del derecho tiene en cuenta, para decirlo con palabras de Cunill Grau, “la realidad aplastante de las inmensas distancias y magnitudes de las superficies americanas”⁶⁰, que podría ser un elemento determinante de aquella particularidad. Dicho en otras palabras, la naturaleza del espacio geográfico se destaca de la dimensión humana del sujeto apropiador y para ello está el derecho. El instrumento ibérico de la regulada concesión de cuerdas del príncipe se escapa por la magnitud misma del bien, ahora son islas o valles íntegros el objeto concedido. Aun así, ese espacio estaba ocupado, en algunas veces, por indígenas.

Si bien, en principio, la merced de encomienda y la merced de tierras fueron dos instituciones diferentes y pese a que la legalidad colonial pretendía mantenerlas separadas, en la práctica, en el norte argentino, la encomienda fue una de las primeras y más decisivas formas de acceso a la tierra. Por eso, en una primera fase (de la conquista y colonización), previo al control de la tierra, más decisivo fue el control de la fuerza de trabajo indígena. Correlativamente a la pérdida de la significación de la encomienda como mecanismo compulsivo, el control sobre la tierra se fue convirtiendo en una forma que podía ser utilizado para ejercer el control sobre los trabajadores rurales o artesanales asentados en ellas, con una valoración del recurso tierra muy discontinuo, emparentado con la ausencia o presencia de conflictos de guerra contra el indio, o su colaboración como mano de obra “amigable”.

⁵⁸ Hacemos referencia también a las antiguas jurisdicciones de Londres (1556 hasta la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, en 1683). Más apropiadamente sería “espacio riojano-londinense”. Véase las anotaciones al respecto, A. MERCADO REYNOSO, *El Inka Volverá...*, 23.

⁵⁹ R. LEVENE, *Historia ...*, 133.

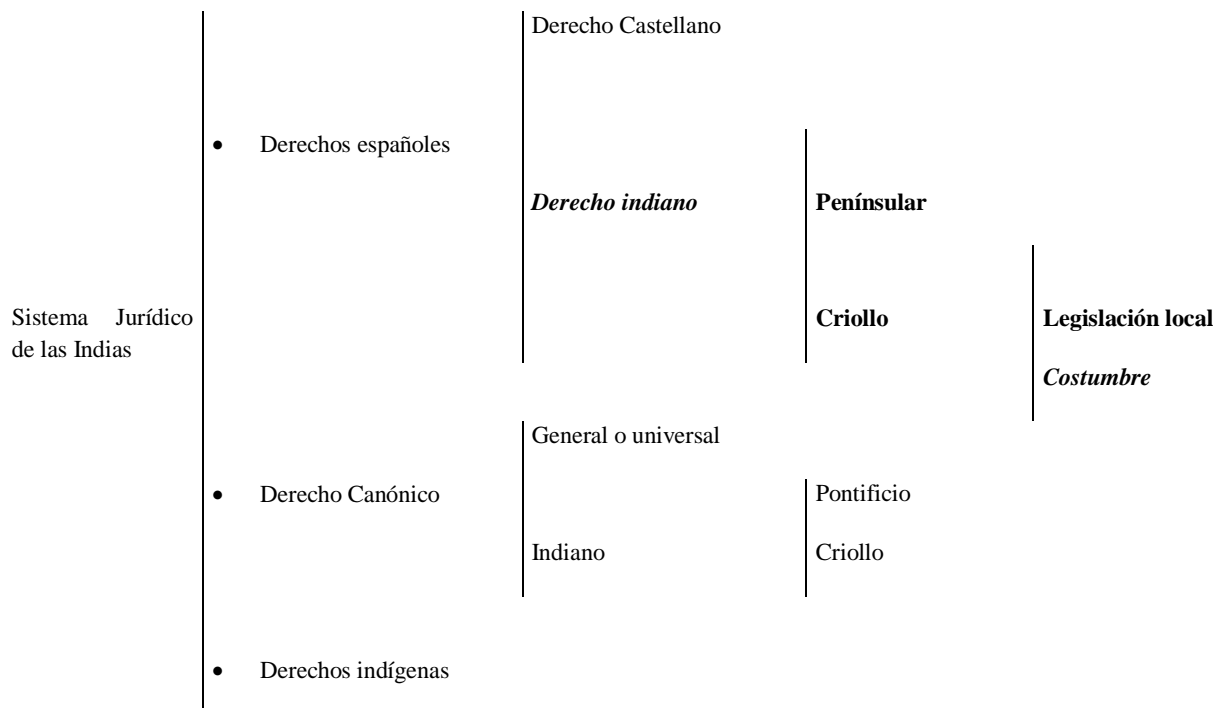
⁶⁰ Pedro CUNILL GRAU, “La geohistoria”, en *Para una historia de América 1: Las Estructuras*, en Marcello CARMAGNANI, Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ y Romano RUGGIERO (coords.), ed. Fideicomiso Historia de México – El Colegio de México- FCE –, México, 1999, 567.

A fin de rescatar la particularidad, intentaré demostrar que de la intensa historicidad jurídica del acto fundacional de la ciudad y de las instituciones sociales explícitas de ese mismo acto desde donde surge un nuevo planeta jurídico, aunque subordinado a una monarquía policéntrica. En este contexto *jurisdiccional*, el título de la merced de tierras se caracterizada por una extraordinaria consistencia (*compacteza*) y versatilidad⁶¹ en concurrir con idéntico fin entre el *conquistador* y su *Majestad el rey*, a partir de una hipótesis que pretende, además de evitar cautelosamente las simplificaciones, indagar acerca de la relación existente entre las tierras, el poder oligárquico y el derecho indiano peninsular y criollo⁶². Junto a la *translatio* castellana, sancionado en el celulario indiano dado, creció vigorosamente en Indias un derecho consuetudinario que, en ocasiones, se sobrepuso al legal.

⁶¹ “De manera reciente, algunos autores civilistas, estudiosos del derecho y la ciencia jurídica han tratado de echar luz sobre un concepto angular de la historia del derecho como lo es el *absolutismo jurídico*, examinando, a través de éste, una fase fundamental de la historia del derecho moderno y, precisamente, un ciclo relativamente reciente en el cual se ha completado el proceso de codificaciones del siglo XVIII y XIX del derecho civil. Desde entonces se asiste a una *panlegalización* de las fuentes del derecho privado, que en gran parte asfixia, con su rígida visión monística, las visiones *pluriordamentali* (v. gr. de varios ordenes) y, por cierto, pluriculturales que hasta aquí han caracterizado a las experiencias jurídicas. Desde ese momento solo al Estado central le pertenece el poder de determinar, de manera exclusiva, el límite de lo lícito y lo no lícito, de los tenedores y no tenedores de derechos, y con ello incidir en lo relevante e irrelevante desde el punto de vista jurídico”. Véase GROSSI, *Un’altro modo di possedere*, Bari, ed. Laterza, 1974; y del mismo autor la obra “La proprietà e le proprietà nell’ officina dello storico”, en RQF, Milan, Guiffrè, 1993, 603-663; y también en su más reciente proyecto de investigación para el *Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica* italiano en <http://DEX1.TDS.UNIFI.IT/ricerche/grossi97.htm>.- Retomando, en este sentido, las palabras de Angel López López refiriéndose a la historia del dominio «*el contenido mínimo para que se tenga dominium es la existencia de un poder (...) autónomo e inmediato sobre la cosa*» en donde la concreción de los atributos de propietario lo da, en la historia del dominio útil «*la conciencia de dominio bajo el esquema de mentalidad circulante*», y concluye, «*esa es la lección de la historia a la hora de definir algo como propiedad*», en Angel LÓPEZ LÓPEZ, prólogo para civilistas del libro de Grossi, traducido al español con el título, *La propiedad y las propiedades*, Madrid, ed. Civilistas, 1991, 6 y 8.

⁶² “Se llama Derecho indiano Peninsular al conjunto de disposiciones (leyes, en el sentido amplio) dictadas por las autoridades residentes en España (la mayoría de ellas por el consejo de Indias y, en el siglo XVIII, también por los secretarios reales), para regir en Indias y a los organismos indianos de la península (el propio Consejo, la Casa de Contratación, las juntas). Se llama Derecho indiano criollo al formado por las disposiciones emanadas de las autoridades españolas residentes en América (virreyes, gobernadores, audiencias, visitadores, cabildos) y por la costumbre local. Tanta importancia tuvo el Derecho indiano Peninsular como el Criollo en la vida jurídica americana. La mayor atención que se presto, por lo general, a la legislación Peninsular no se debió siempre a razones científicas, sino a su más fácil consulta.” Cita de Abelardo LEVAGGI, *Manual de Historia del Derecho Argentino (Castellano –Indiano/nacional)*, Buenos Aires, tomo 1, Parte General, ed. Depalma (1ª reimp.), 1991, 145.

Graf. 1: Sistema jurídico de las Indias según Abelardo Levaggi⁶³



Fuente: A. LEVAGGI, *Manual ...*, 152.

El marco hipotético es de tipo descriptivo dado que considera que la merced de tierras se presentaba como el principal título de dominio de la tierra. Tuvo un carácter versátil y su acceso y aplicación fueron exclusivamente en beneficio de los vasallos monárquicos del estamento dominante peninsular, quienes a través del gobernador invocaban la potestad nominal del rey. Asimismo, y a pesar de que ni el derecho indiano penínsular ni el criollo disponían que el peticionante *debía* ser español o descendiente, la costumbre sedimentó el principio que ningún indio, curaca o cacique pudiera ser mercendero o titular de una merced de tierras en estos tres siglos de estudio⁶⁴.

⁶³ A. LEVAGGI, *Manual ...*, 152.

⁶⁴ Sobre este punto desarrollaremos el concepto en los párrafos 22.2. (principio de étnico jerárquico para ser destinatarios de privilegios regios como las mercedes) y 24 (amparos al indigenado) del presente trabajo.

Una de las aristas problemáticas que ofrece nuestro objeto de estudio reside en la pervivencia, en la provincia de La Rioja, del orden colonial resistente a su pasaje o mutación al nuevo orden nacional independentista, razón por la cual se indagará sobre las causas de esta pervivencia y su relación con la continuidad de la mercedes de tierras. Ensayaremos pues nuevas líneas de investigación, que establece que la posesión de la tierra a través de las mercedes reales estuvieron, en los primeros tres siglos de La Rioja, regidas por la *convenientia*⁶⁵ y, por la pérdida gradual y sostenida del *dominio útil* y *usufructo* de los bienes raíces de los poseedores indígenas.

El marco de las anteriores hipótesis se sitúa en el periodo comprendido entre el descubrimiento y conquista, pasando por el período toledano hasta las reformas borbónicas de creación de las Intendencias que, según aclara García Gallo en el párrafo titulado “La persistencia del sistema”, “las instituciones del gobierno territorial del Nuevo Mundo, eran mucho más simples de lo que a primera vista parece, y al mismo tiempo dotadas de la elasticidad suficiente para adaptarse a las más variadas circunstancias y necesidades de lugar y tiempo, se mantiene sustancialmente en los siglos XVII y XVIII”⁶⁶.

§ 2.4 HACIA UNA TEORÍA DE LA HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

Este trabajo pretende situarse en una teoría de la historia del derecho indiano, pero, ¿qué era el derecho indiano? “No era ni mero trasplante europeo ni simple creación

⁶⁵ Definimos *convenientia* a toda *ius politica* del Rey —en este caso representada por sus funcionarios *regios*— por inalterar o inmodificar, en cuanto dueños de la aplicación normativa del propio *ius commune*, la estructura de la propiedad, o de la renta de la tierra del Reino —los vecinos— a favor del Pueblo Indígena —representado en la comunidades indias excedentarias—.

⁶⁶ A. GARCIA GALLO, *Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI*. AHDE, Madrid, 1970, 347 y ss.

americana” nos dirá Tao Anzoategui⁶⁷. Al adentrarnos en evaluar el orden jurídico y la experiencia jurídica⁶⁸ desde el paradigma de la larga duración⁶⁹, pondremos una particular atención en la relación existente entre el ámbito del poder legal y el de *facto*. Este último lo diseña la consuetud o costumbre y salvo raras excepciones, la tradición académica no lo valoriza. En este marco, se pondrá especial acento a las continuidades subyacentes, a las condiciones ¿casi inamovibles? de instituciones del tipo de la propiedad dominial y a los otros modos de poseer y al lento cambio de conceptos históricos como, por ejemplo, el de Estado (Rey), de soberanía (*autorictas*), el de propiedad (*dominii*), el de ley (*ius*) y el de legalidad (*ius utenti*), prelación y prescripción, etcétera, sujetos a una revisión conceptual desde lo que hemos llamado modernidad.

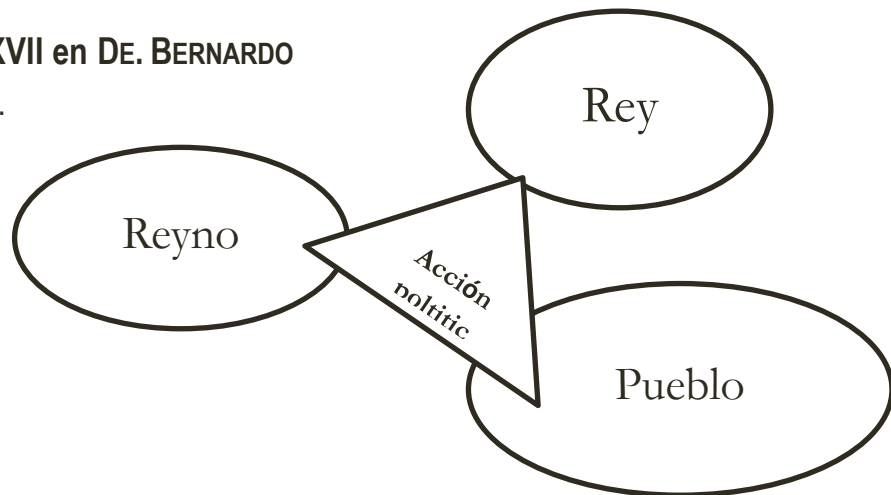
⁶⁷ Cfr. TAO ANZOATEGUI, “El derecho indiano en su relación con los derechos castellano y común” en Atti dell’incontro di studio Firenze-Lucca 25-27 maggio 1989, citado por Andrea LANDI “Unum et ídem regnum. L’unione del nuevo mundo alla corona di Castiglia nella riflessione di Juan Solórzano Pereira”, en RDQF, núm 41, 139-175, 2012.

⁶⁸ Las colegas Laura Quiroga y Gabriela Lapido señalan que...“Mercado Reynoso (2003:52) utiliza este concepto como «*esquema interpretativo del devenir histórico-jurídico*», aplicado a su estudio regional de las mercedes de tierras en La Rioja para los siglos XVI y XVII. La *experiencia jurídica* se entiende como una relación compleja y diferenciada entre el ordenamiento, delineado por la normativa jurídica, y la vida social como ámbito de lo ordenado”, en QUIROGA, Laura; LAPIDO, Gabriela, “Las Aguas del Hualfin: Contradicciones y Conflictos en un año de seca”, en Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, núm. 37, agosto, 2011, 60, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile; en línea en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371336247004>, en referencia al trabajo de mi autoría, véase Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras Cosas Consuetudes..*, 52

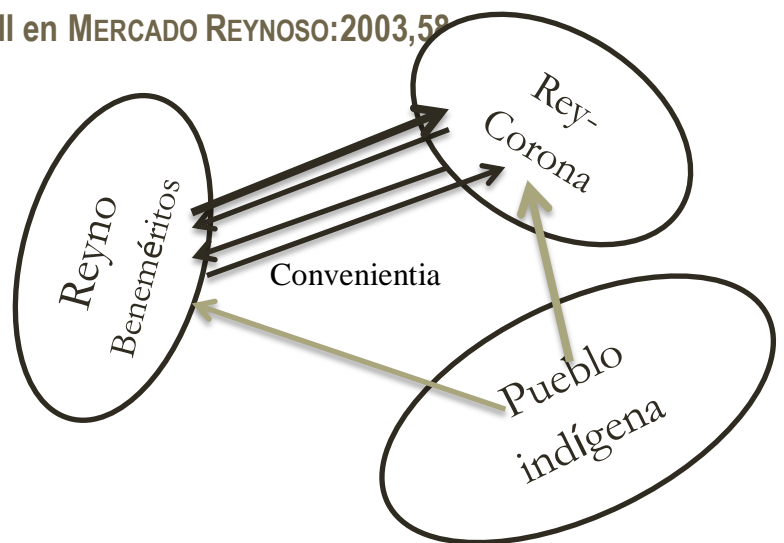
⁶⁹ “*Si no hay teoría no hay historia*” repitió Fernand Braudel, en F. BRAUDEL-G. DUBY, et AL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II*, Paris, ed. Armand Colib, 1949, 42, e implementó un sistema de la historia eliminando “*le temps court*” versus “*le long durée*”. Las coyunturas de la historia diplomática, las crónicas y descripciones tradicionales de acontecimientos fueron reconsiderados críticamente a partir de este nuevo paradigma que intenta analizar el pasado a partir de la larga duración. En la historia del derecho es posible imitar apócrifamente aquella afirmación, diciendo que no hay historia del derecho sin una teoría del derecho. Como veremos más adelante, desarrollaremos una larga duración que ubicamos desde el Código Peruano de Gaspar Escalona Agüero de 1637 hasta la tardía codificación provincial de 1855 y que intentaremos arropar de un *ius proprium indianum* de decidida influencia toledana en el sud calchaquí del Tucumán.

Graf. 3: La “acción política” como acto de subjetivación en el antiguo régimen (en Castilla y en La Rioja tucumana, Siglo XVII) según una gráfica comparativa de Bernardo Ares (2000) y Mercado Reynoso (2003).

La Acción política en Castilla, S. XVII en DE. BERNARDO ARES: 2000,74.



La Acción política en La Rioja, S XVII en MERCADO REYNOSO:2003,59



Fuente: interpretación propia en base a DE BERNARDO ARES, “Rey-Reino...”, 2000;
y MERCADO REYNOSO, *Tierras Cosas...*, 2003.

Sobre la revisión conceptual propuesta, seguiremos a Paolo Grossi, quien considera que “*noi moderni usiamo correttamente concetti e termini come ‘stato’. ‘sovrانيتà’, ‘legge’, ‘legalità’, ‘interpretazione’, caricandoli di quei contenuti che la coscienza moderna vi ha grevemente sedimentato; concetti e termini compromessi inevitabilmente da quei contenuti. Se, come disinvoltamente si fa da storici e anche da storici di diritto, siffatti concetti e termini vengono trapiantati nel tessuto medievale quasi che un continuum legasse quel tessuto a noi; se invece, come positivamente è, il rapporto medievale/moderno si pone all’insegna della discontinuità con un cambiamento dei valori portanti dell’universo politico e giuridico; quei concetti-termini si risolvono in una forzatura della realtà storica e, anziché strumenti di comprensione, fungono piuttosto da pericolose matrici di fraintendimenti ed equivoci.*”⁷⁰

El orden jurídico, entonces, puede ser abordado teniendo presente tanto las consideraciones grossianas y braudelinas así como permitir acercarnos a la tentación de comprender, escuchar de manera responsable los documentos públicos, dejando que las fuentes históricas exhiban sin constricciones, su propio mensaje. En sentido amplio, descubrir qué es lo que cambió y qué pervivió de las instituciones del Derecho y del Estado indiano ligadas a la tierra, en la gobernación del Tucumán y en el virreinato del Perú. Por otra parte, el impacto inmediato que el proceso independentista riopletense tuvo sobre el régimen de tierras es, hasta el presente, una investigación pendiente.

En este contexto, Grossi señala algunos errores que habría que evitar en el estudio de la historia del derecho —y que aquí llamo iushistoriografía— e invita a discurrir plenamente sobre la continuidad y discontinuidad del orden jurídico⁷¹, situando en su real dimensión y resignificando la figura de la experiencia y la consuetud como constitución de lo real normado⁷².

⁷⁰ GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, 11.

⁷¹ GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, 109.

⁷² P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, en particular el capítulo cuarto: *Figure dell’esperienza. 1. La consuetudine come ‘costituzione’*, 88 y ss.

En este marco, la noción de *ordine giuridico* de Grossi, es concurrente con la de *sistema colonial* de Marchena Fernández. Análogamente, no vemos diferencias sustanciales con algunos conceptos angulares de estudios historiográficos e ius historiográficos de tradición anglosajona como los de *legal tradition* de H. Berman⁷³ o *legal culture* de C. Cutter⁷⁴.

Con sentido diferente y agudo, Alfonso García Gallo nos enseña a no confundir el ordenamiento con lo ordenado. “*El derecho es una ordenación de la vida social que posee la fuerza vinculante. Es sólo una ordenación, no la vida social en toda su complejidad; esto independientemente de la complejidad que aquella pueda tener para ésta. El objeto de la ciencia de la Historia del Derecho debe limitarse sólo a aquella ordenación sin pretender abarcar la vida social, que en su conjunto o en sus particulares manifestaciones constituye el objeto de otras ciencias. Ciertamente, el Derecho ordena, aunque no siempre en igual medida, las más diversas manifestaciones de la vida social; (...). Como más de una vez se ha dicho, el Derecho es la vida y los*

⁷³ “Hablar de tradición jurídica occidental —nos advierte Berman— es postular un concepto de derecho no como un cuerpo de reglas, sino como proceso, como empresa, en que las reglas solo tienen sentido en el contexto de las instituciones y procedimientos, valores y modos de pensamiento. Desde esta perspectiva más vasta, las fuentes de la ley no solo incluye la voluntad del legislador sino la razón, la conciencia comunitaria, los usos y costumbre...”, en Harold BERMAN, *Law and revolution. The formation of the Western Legal Tradition*, ed. Harvard University Press, 1983, Cambridge, Massachusets. Traducción española: *La formación de la tradición jurídica de occidente*, ed. F.C.E., México, 1996, 84.

⁷⁴ Charles CUTTER, *The Legal Culture of Northern New Spain. 1700-1810*, Albuquerque, ed. University of New Mexico Press, 1995. Recientes estudiosos de economía y sociedad rioplatense como, por ejemplo, GELMAN, J. “Unos números sorprendentes. Cambio y continuidad en el mundo agrario bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX” en *Anuario IEHS*, 11, Tandil, 1996, 7, revaloriza este estudio sobre el norte del Virreinato de Nueva España en el siglo XVIII, el cual muestra cómo en esa región de frontera, donde la presencia del Estado colonial es mínima, igualmente funciona un consenso alrededor de la *legal culture* encargado en un pocos funcionarios legos que buscan compromisos recíprocos —por nosotros llamados *convenientia*— entre las leyes de indias, el gobierno local y los intereses y costumbres locales. Veremos más adelante, la mediación de institutos, Cfr. Charles CUTTER, *The Protector de Indios in Colonial New Mexico, 1659-1821*, Albuquerque, 1986, 30-59.

textos jurídicos son un fiel exponente de la cultura de un pueblo. Pero no puede justificarse en modo alguno confundir la ordenación con lo ordenado”⁷⁵.

Sin embargo, es indudable que, en términos de *l’histoire structurale*⁷⁶, existe la persistencia de elementos constitutivos y constituyentes de la sociedad así como la relación con la historia del régimen de dominio de los sujetos sobre los objetos no puede reducirse a la historia de una palabra (semántica de la noción de “*propiedad*”), de una expresión y su articulación recurrente dentro de una modalidad discursiva (*merced*); la extensión de su campo semántico, en fin, el hecho de que los actores sociales que deciden el rumbo político de una comunidad hagan uso de una determinada expresión o palabra para representarse su realidad, no es otra cosa que la historia de una idea política, de una “visión del mundo”⁷⁷. Provocativamente entonces, la *merced* ¿es una “idea” o una “cosa”? Al igual que análogamente “iglesia” representa una construcción religiosa y una comunidad de creyentes, la idea de “*merced*” será una campo agrícola o una comunidad de campesinos. En fin la *merced* de tierras sería “una extensión que se espacializa y se territorializa en un mismo tiempo”⁷⁸.

⁷⁵ A. GARCIA GALLO, *Metodología de la historia del Derecho Indiano*, Santiago, ed. Jurídica de Chile, 1971, 17.

⁷⁶ El concepto “historia estructural” parece haber surgido alrededor de 1940, y de Dieter GROCH “Strukturgeschichte als ‘totales’ Geschichte?”, en “*Vierteljahrschrift für Sozial – und Wirtschaftsgeschichte*” (Periódico trimestral de historia social y económica) 58, N° 3, (1971), 312, citado en ROTH, Guenther y SCHICHTER, Wolfgang (ed) *Duración y racionalización: aproximaciones a la historia en Fernand Braudel y Max Weber*, California, UCA Press, 1979, 151.

⁷⁷ Antonio ANNINO, “No hay que hacer historia de lo que no fue (...) Nadie [debe] hacer historia moderna siguiendo categorías ‘democráticas’, nadie [debe] hacer historia medieval siguiendo categorías medievales”, Conferencia de A. ANNINO, IRICE, Rosario, Setiembre 2005. Imposible aquí hacer una síntesis de la discusión historiográfica abierta, entre otros por Annino. Una excelente muestra del estado de las investigaciones en Antonio Annino, *Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia / Taurus, 2014, p.445.

⁷⁸ Para la conceptualización de espacialización del territorio enmarcado en un paradigma llamado “antropología jurídica del espacio” véase a Alejandro CASAGRANDE (2014), Reseña del libro de BARRIERA, Darío “*Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político. Santa Fe, 1573-1640*” Ed. Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y Museo Histórico Provincial “Brigadier Estanislao López”, Santa Fe, 2013, p. 422. En línea en <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n29a14> (Consultado el 12/05/15)

En otros términos, la “merced” de tierras ha pervivido durante cuatro siglos —al menos conceptualmente en los archivos judiciales tucumanos— porque ha sido productora de territorialidad y sus titulares han sido personas importantes e influyentes en los aspectos nodales de la sociedad y su puesta en discusión sólo podrá alcanzarse de la mano de un discurso referido a la codificación del derecho y “desfeudalizador”⁷⁹ de la mano de una mitología moderna, el absolutismo jurídico. La *longe durée* de la que hablaba Braudel se aplica a ciertas estructuras y relaciones sociales donde las formas tienden a permanecer más o menos invariables, mientras que los contenidos van cambiando y adaptándose a las nuevas realidades⁸⁰, y este pareciera ser el caso en particular de un concepto como el de merced de tierras, que recubre relaciones sociales altamente variables entre el año 1600 y el 1950, cuando tiende a desaparecer.

Nuestra pretensión de ubicar el presente trabajo de investigación en el período que abarca dos siglos —de 1591 a 1805— posee la intención manifiesta de captar el orden por fuera de la historia de suceso —*l’histoire événementielle*—, el que, a su vez, coincide en lo singular, con la periodización propuesta por Ots Capdequí y por tres acontecimientos no ajenos al poder nominal del Rey tales como fueron la fundación de La Rioja en la Provincia de los Diaguitas (1591), la visita del Oidor Vargas (1693) y la expulsión de los Jesuitas (1767). En este particular periodo, cuando se estaba construyendo la identidad como nación y se ponía en discusión el modelo de constitución desde la perspectiva de la forma de gobierno, veremos cómo caudillos y líderes independentistas, “estancieros” y poseedores de mercedes de tierras no cuestionaron, sino que, por lo contrario, afirmaron las mercedes como título válido, legal y legítimo. Validación y confirmación que llevarían, a fines del siglo XIX, a una

⁷⁹ Ambas expresiones son de Pio CARONI, *Saggi sulla storia del código*, Milán, ed. Giuffrè, 1998, 53. Véase también del mismo autor, “La Historia de la codificación y la historia del código”, en INITUM, n. 5, 2000, 403-431.

⁸⁰ Se toma nota de la magistral crítica de Antonio Hespanha a la escuela de los *Annales*, la cual afirma que, si bien esta escuela historiza todas las dimensiones europeas que van de la población al comercio, ninguna de éstas dimensiona la influencia del derecho, y el derecho romano, en la cultura europea y mediterránea, A. HESPANHA, Conferencia de inauguración Doctorado de Mercado y Derecho, Sala de Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, Julio 2002.

tardía codificación cuya consecuencia sería su desaparición y no-reconocimiento nominal por parte del discurso burgués decimonónico.

Como veremos, en términos de Hespanha⁸¹, y de Coing⁸², y extrapolando la experiencia jurídica de las dificultades de la recepción del derecho romano en las variadas *iurisdictio et populus* europeos, es posible advertir que por muy intensa —y discutible— que haya sido la constitucionalidad y codificación de los estados nacionales como el argentino y a mediados del tardío XIX, las costumbres generales y locales de los diversos “pueblos” tucumanos (emparentadas con el derecho indiano o con el simple derecho común) contrastaban con “áreas normativas” que el derecho nacional aspiraba a uniformar, y donde el contraste o contraposición y resistencia se verificaba con particular intensidad en el ámbito de la de los derechos patrimoniales con relación a la tierra cuyos derechos provenían de “derechos y acciones” originarios en mercedes de tierras.

A modo de ejemplo introductorio y para situarnos en *das situações enraizadas* que el derecho indiano en la región de estudio genera, veremos cómo, en el año de 1857 —mientras las élites rioplatenses discutían el modelo de código civil que se implementaría— se apersonó una cacique amaicha en la “división protocolos” de la Provincia de Buenos Aires exigiendo la “protocolización” de “su” título de tierras llamado, de allí en más, “Cedula real de los Amaichas”⁸³ y que remitían a un documento trasladado de 1717 pero que mencionaba la concesión de una merced de

⁸¹ A. HESPANHA, *Cultura jurídica europea...*, 95.

⁸² H. COING, *Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht, Einführung Süd- und Westeuropa*, 1982. - XXVI, t.1, 25-34.

⁸³ Vease mi trabajo monográfico en Adrián MERCADO REYNOSO “¿Real Cédula o Merced de Tierras de los Amaichas?”, Departamento de Humanidades de la UNLaR, 2015, Mimeo. Para una contextualización y estado de la cuestión, SOSA, Jorge y LENTON, Diana, “Oralidad, territorialidad y etnogénesis de un pueblo originario: la Cédula Real de Amaycha del Valle”, en MANASSE, B. y ARENAS, P. (Comp.), *Arqueología, tierras y territorios: conflictos e intereses*. Santiago del Estero, Editorial Lucrecia, 2009, pp. 134-157; y Jorge SOSA, «La “cédula real de los Amaycha...”», citado.

tierras del fines del XVII. Ésta *iura radicata* (inscribir un derecho a tierras en un libro público legitimador de sentido de veracidad) no se decidía en la Jurisdicción de origen, ¿Cuál *sede*? ¿Con sede en San Miguel de Tucuman o en San Fernando del Valle de Catamarca? El contexto de los continuos cambios generados por tres Guerras Calchaquíes en dos siglos, cinco jurisdicciones desaparecidas (entre ellas las de Londres), dos provincias y una república del Tucumán, para volver a la Confederación Argentina previo paso por la Provincias Unidas del Rio de La Plata generó la incertidumbre. En otras palabras, desaparecido el eje monárquico (colonial o policéntrico), los indígenas buscaron un ente legitimador rioplatense (antigua sede de Intendencia) debido a que no eran atendidas las particularidades del caso en las leyes indianas subrogantes, ni de la república provinciana sino que se resolvía según las sensibilidades jurídicas locales. Al decir de Clavero, que pone en boca de Hespanha, el derecho era el derecho local “*ao contrario dos modelos politicos universals que virão depois*”⁸⁴.

Hespanha nos alerta, en “Modalidades e limites do imperialismo..” que hay una dominación “imperial” y política y se introduce en la vastísima polémica del *legal transfer* y pluralidad compleja de derechos,

“*A partir do sec. XV, os europeos levaram a seu direito para outras zonas do mundo. Este processo de expansão do direito europeu tem sido frequentemente simplificado, ao ser encarado como um processo unilateral de imposição de uma ordem jurídica europeia a povos de culturas jurídicas radicalmente distintas ou de aceitação passiva por estes de uma ordem jurídica mais perfeita e mais moderna. Pelo contrario, deve ser visto como um fenómeno muito complexo, em que as transições jurídicas se efectuam no dois sentidos, em que a violencia se combina com a aceitação, cada parte traduzindo nos seus modelos culturais e apropriando para os seus interesses elementos dos direitos alheios; em que as condições de dominio político variam de acordo com os lugares, os tempos e os modelos de dominação colonial ('imperial')*”⁸⁵

⁸⁴ Cfr. Bartolomé CLAVERO, “Gracia ...”, 677.

⁸⁵ A. HESPANHA, “Modalidades...” 101.

Primera Parte

Merced de tierra y derecho indiano

§ 3 MERCED DE TIERRA: CONCEPTO

La merced de tierras es la institución que implementara el monarca para la distribución de bienes inmuebles en sus dominios americanos y que ejecutaron sus funcionarios, por facultad concedida de aquel, entre los siglos XVI y XVII.

En sentido ajustado, se trataba de la concesión *regia* de la posesión de un bien de “raíz” a un individuo “merituable”⁸⁶ o “benemérito”⁸⁷ en cuanto acreedor —simbólica o materialmente— de la Corona, previa petición de éste a la autoridad realista, así como el cumplimiento de requisitos tales como la tributación de media anata, la autorización del cabildo y la ausencia de terceros que interfirieran en reclamo de ese mismo derecho. La concesión comportaba, como último paso de un procedimiento administrativo preestablecido, la puesta en posesión por parte de un funcionario público y, realizada ésta, no podía ser revocada sin previo juicio. El nuevo titular podía, tras el cumplimiento de esos requisitos, transferir su propiedad a terceros⁸⁸.

⁸⁶ Merced, (Del lat. *merces*, -ēdis) Premio o galardón que se da por el trabajo, según el *Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia*, Vigésima Segunda Edición (2006), en línea en www.rae.es (Consultado el 12-01-2013).

⁸⁷ Del lat. “benemeritus”, adj. Digno de recompensa, literalmente de “buen mérito”.

⁸⁸ Las *mercedes de tierra* han sido conceptualizadas desde variados abordajes: desde la clásica y peyorativa mirada de la racionalidad weberista que vimos en la nota al pie número 2 de página 19 al también clásico abordaje andino de Assadourian. Solo como ejemplo, Assadourian resalta su mera característica de apropiación —y por lo tanto poco idóneas para una lectura iushistoriográfica—, definiéndolas como “*mecanismo estatal de distribución gratuita de tierras indígenas a los españoles*”, ASSADOURIAN, “Estructuras económicas coloniales: El sistema de las haciendas”, Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc. N° 2, FyH-UNC, Córdoba, 1999, 27. En línea en http://www.ffyh.unc.edu.ar/dependencias/ciffyh/Nueva/Publicaciones_todas/Cuadernos_historia.htm#9 (Consultado el 15-06-2012). Como veremos en § 11, en términos de *ius política*, gratuidad no es sinónimo merecimiento.

En gran medida, estamos ante un siglo hispano de generación de regulaciones que podríamos llamar modernas por sus características de pasaje del localismo al universalismo que ordenaban, por citar unos ejemplos concernientes a lo territorial, las capitulaciones, el cómo y quiénes podían fundar ciudades, conceder solares, estableciendo hasta las características que debía poseer el territorio sometido a la acción colonizadora. La concesión de mercedes no tuvo una norma específica, sino que era derivada de un poder del virrey a los gobernadores y, eventualmente, a sus tenientes de gobernación. En ese sentido, esta *facultas* transcurrió por vías más intangibles —aunque no por ello menos efectivas— de la potestad de los delegados regios, la disciplina moral-teológica (“al buen vasallo cristiano”), la “conquista de la tierra” como cosmovisión colonial y la práctica consuetudinaria acción pre política. Esto, conjuntamente con el carácter y naturaleza de la pretendida extensión del dominio de la monarquía castellano aragonesa al Nuevo Mundo vía legitimación papal, le dio a la merced una característica y singularidad propias.

El punto de máxima certeza legislativa lo dará el título XII de la Recopilación de Leyes de Indias, que recogió la voluntad del rey, máxima fuente de legislación. En este contexto, el 25 de mayo de 1596, Felipe II sanciona desde Toledo:

“TITULO DOCE: DE LA VENTA, COMPOSICIÓN Y REPARTIMIENTO DE TIERRAS, SOLARES Y AGUAS. Porque nuestros vasallos se alienten al descubrimiento y población de las Yndias, y puedan vivir con la comodidad, y conveniencia, que deseamos: Es Nuestra Voluntad, que se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerías, y peonías á todos los que fueran á poblar tierras nuevas en los Pueblos y Lugares, que por el Gobernador de la nueva población les fueron señalados, haciendo distinción entre escuderos, peones, y los que fueron de ménos grado y merecimiento, y los aumenten y mejoren, atenta la calidad de sus servicios, para que cuiden de la labranza y crianza; habiendo hecho en ellas su morada y labor, y residido en aquellos pueblos quatro años, les concedemos facultad, para que de allí en adelante los puedan vender, y hacer de ellos á voluntad libremente, como cosa propia; y asimismo conforme a su calidad, el Gobernador, ó quien tuviera nuestra facultad, les encomiende los Indios en el repartimiento que hiciere para que

gocen de sus aprovechamientos y demoras, en conformidad de las tasas, y de lo que está ordenado”⁸⁹

La voluntad real se sostenía en que los vasallos adquirieran bienes reales, previo cumplimiento de procedimientos administrativos y en retribución a los servicios prestados durante la conquista del Nuevo Mundo. El gobernador, o el que detentaba esa facultad, era como autoridad local, el que señalaba el objeto sujeto de traslación. Este objeto no era simbólico, sino que se presentaba como *res corporalis*, real y corporal, es decir, en forma de solares, chacras, cuadras o medias cuadras que por su naturaleza son inmuebles.

§ 4 —FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LOS REPARTOS DE TIERRAS A TRAVÉS DE MERCEDES

Acríticamente, la justificación de la concesión de mercedes de tierras y de los derechos que ésta conlleva se fundarán, centenariamente, en que todas las propiedades de tierras, en América, pertenecían al Estado-Rey como único propietario⁹⁰. En ese

⁸⁹ RECOPIACIÓN DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS, *Mandadas Imprimir y Publicar Por la Magestad Católica Del Rey Don Carlos II, Tomo Segundo. Quarta Impresión. Madrid. MDCCLXXXI*, Madrid, Coeditada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el BOE (Boletín del Estado Español), Imprenta Nacional, 1998, 39.

⁹⁰ Como desarrollaremos más adelante, ésta afirmación no descuida la provocativa aseveración de Hespanha sobre la inexistencia del Estado — y su unicidad normativa—en sociedades previas al período del constitucionalismo liberal decimonómico. Véase a A. HESPANHA, *La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna*, CEC, Madrid, 1993. Sin embargo, Grafe nos orientará en esta idea que *l'État polycentrique* es una construcción permanente, véase GRAFE, Regina; “Tyrannie à distance: la construction de l'État polycentrique et les systèmes fiscaux en Espagne (1650-1800)”, pp.167-186; en Katia BEGUIN (ed.) *Ressources publiques et construction étatique en Europe*, Ministère des Finances et des Comptes Publics, Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Paris, 2015, en línea en https://www.researchgate.net/publication/277011146_Tyrannie_a_distance_la_construction_de_l

sentido, una disposición del jefe de Estado, fechada el 1 de noviembre de 1591, fue la que nacionalizó⁹¹ el suelo americano. La Ley 14, título XII, lib. IV de la “Recopilación”, que recoge la citada disposición de 1591⁹², expresa:

“Por haber Nos sucedido enteramente en el señorío de las Indias y pertenecer a nuestro patrimonio y corona real los baldíos, suelos y tierras que no estuvieren concedidos por los Señores Reyes predecesores, ó por Nos, ó en nuestro nombre”⁹³.

La legalidad de la sucesión de la potestad de concesión de propiedades de fundos terrieros estuvo legitimada por el derecho de conquista conforme a un principio jurídico epocal del alto medievo según el cual “las tierras nuevamente conquistadas e acrecentadas al señorío antiguo se han de regir por las leyes del reyno a quien se acrecienta”⁹⁴. En la medida en que reforzaba gradualmente⁹⁵ la capacidad de conceder

[%27Etat polycentrique et les systemes fiscaux en Espagne 1650-1800](#) (Consultado el 04/12/2015)

⁹¹ Mariluz Urquijo es la voz más autorizada para desacreditar esta afirmación que, por cierto, tiende a uniformizar los múltiples ordenamientos del régimen de tierras en Hispanoamérica del siglo XVI. Referenciando a los que denomina algunas facetas del estado de la cuestión de la propiedad en el derecho indiano, nos dice “Creemos que se ha avanzado lo bastante [en los estudios de historia del derecho] como para fijar una interpretación más acertada de la importante Ley 14, título XII, libro IV de la *Recopilación de Indias*, (...). Y que hoy [1970] no se sostendría que mediante dicha ley se *nacionalizó* todo el suelo americano ni que por ella *todas* las tierras de América pertenecieron al Estado como *único* propietario”, J. MARILUZ URQUIJO, “La propiedad ...”, 155 (la cursiva es mía).

⁹² “Real Cédula sobre la restitución de las tierras que se poseen sin justos ni verdaderos títulos”, fechada en El Pardo el 1 de noviembre de 1591, publicada integralmente en *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones de América y Oceanía*, Madrid, ed. por Joaquín F. PACHECO, Francisco de CÁRDENAS, Luis Torres DE MENDOZA, 1864-1884, t. XVIII, 243; y recogida parcialmente en *RECOPILACIÓN... La Ley 14, título XII, libro IV*.

⁹³ *RECOPILACIÓN... Ley 14, título XII, libro IV*.

⁹⁴ Juan MANZANO Y MANZANO, *Historia de la Recopilación de Indias*, t.I, Madrid, 1950, 6, recogido por Víctor TAU ANZOÁTEGUI, *¿Qué fue el Derecho Indiano?*, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, 17.

bienes, crece en legitimación el criterio rector de que las tierras baldías eran regias. Por otra parte, la referencia al señorío de Indias era, en múltiples interpretaciones modernas que queramos darle, herencia de la soberanía patrimonial o, en todo caso, del dominio del estado moderno y su facultad de conceder su regio patrimonio, en este caso tierras realengas que serían, justamente, objeto de las mercedes.

La legalidad de entrega de propiedades, ahora regias, estuvo legitimada por el derecho de conquista y como veremos, en una lógica *ius* política —y estimamos que Solórzano de Pereira la sintetiza tan acabadamente con la enunciación doctrinal del *Indiani Iure*—, en la medida en que reforzaba la capacidad generadora de concesión de bienes que, en ese sentido epocal de regalía, habían sido, explícitamente, dominio o propiedad o capacidad de los estados americanos premodernos y precolombinos manifiestamente reconocidos por el *indianum iure*, tal el incaico:

*“Por auer fuesido el Rey nuestro Señor en los titulos y derechos de los Reyes Ingas, vltimos Señores en el Gentilifmo del Territorio, y fuelo de las prouincias del Pirv, es feñor absoluto”*⁹⁶

El rey europeo es el “Señor Absoluto del Suelo”, escribirá en 1646 Gaspar Escalona Agüero en su comentado *Gazophilatium Regium Perubicum*. Así, el primer funcionario de la *intelligenza*, orgánico del estado colonial que describía, de manera lógica y

⁹⁵ Tal como veremos a lo largo del presente trabajo, el proceso de conquista y consolidación del sistema colonial es un proceso gradual, imbuido de rupturas y continuidades en el marco de criterios rectores. En este sentido interpretativo, es que creemos que acontece con las llamadas *Cedulas* reales, de mediados y fines del siglo XVI, y paradójicamente, para definir e inducir a que bienes privados que se *compusiessen*, vinieron a consolidar por *escrito* un argumento doctrinal referente al dominio regio castellano de las tierras de la colonia. En disposiciones varias de 1578, 1589 y 1591, aunque no tan explícitas, utilizadas para construir la ley 14 del referido título 12, libro IV, han permitido a Felipe II establecer una regla general respecto a las tierras descubiertas y ocupadas. Burdamente estos son a) el establecimiento de un principio doctrinal claro del carácter real del dominio originario, y b) delimitar los términos de licitud de los “títulos justos y verdaderos” de los privados pretendientes. De allí en más, todas las miradas recaerán en los documentos *públicos* escritos.

⁹⁶ Gaspar ESCALONA AGÜERO, *Gazophilatium Regium Perubicum*, ed. Lib. II, Part. II, Cap. XX, n.1. Se ha consultado la edición de 1646 existente en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional (Buenos Aires).

jurídicamente compacta, cómo los reyes necesitaban títulos, y éstos se transmitieron, en el Perú de los Reyes Incas y dominaron tanto el gentilicio como el suelo andino. Vasallaje y tierra son unificados en la condición cúspide de “señor absoluto propietario”. En consecuencia, define su condición de dueño que dará pie a la sustentación del territorio como Regio Patrimonio, e introducirá la noción de *proprietas regia* y de ahí en más la precaridad (*usus preccaria*) de las nuevas formas de acceso que no tuvieran su intervención. Leemos que el rey,

“(…)es Señor absoluto, y dueño del, como ellos [los Incas] lo fueron, en quanto a la propiedad, y directo dominio, fin que sus habitantes, y naturales tviessén entonces más queran folamente vna precaria, y temporal possesion de las tierras de las tierras que por los dichos Monarcas se les repartian, para que las labraffesn, y fembraffen, y el fruto, y semillas que cogieffen, (...)”⁹⁷

Dominio directo en contraposición del útil, propiedad como sinónimo de dominio directo y absoluto, precaridad y rusticiadad en formas de posesión que aquél no habilite, serán en los años siguientes determinantes en la literatura jurídica indiana, y según veremos, una cantera inacabable de legitimidad en la justificación de la construcción de la territorialidad de las Indias⁹⁸.

Además, la unicidad de la *jurisdictio* territorial indiana a cuya cabeza estaba el monarca castellano-aragonés contrastaba con la multiplicidad de jurisdicciones de realengo, de abolengo y señoríos existentes en la Península⁹⁹. Huelga decir que en la España del siglo XVI coexistían jurisdicciones fiscales y de administración de justicia paralelas y que, por otra parte, los reinos, las ciudades, las villas, la iglesia y la nobleza defendían tenazmente sus *iure proprium*¹⁰⁰ en defensa de exenciones y privilegios. En

⁹⁷ G. ESCALONA AGÜERO, *Gazophilatium...*, Introducción.

⁹⁸ Véase § 20.

⁹⁹ Salvador DE MOXÓ, *Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla Medieval*, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 2000, 370.

¹⁰⁰ Para el mapa conceptual nos orientaremos en Bartolomé CLAVERO, quien por ejemplo, respecto al *ius proprium* nos señala “La monarquía hispana como tal no tenía *ius proprium*. Por encima de ella está el *ius commune* de la cultura romana y cristiana y en su interior existen los *iura propria* de sus diversos territorios. Entre éstos, algunos, precisamente los hispanos, se encuentran además con la posibilidad de un *ius* que

contraste, el establecimiento de las colonias americanas representó una oportunidad sin precedentes para diseñar un modelo de entrega de las regalías, entre ellas, la tierra¹⁰¹.

Sintéticamente, desde mediados del siglo XVII (con Escalona) hasta principios del siglo XIX (con las anónimas disertaciones del doctorado de Charcas), se construye y consolida la idea de la tierra como “*una rama del árbol PATRIMONIAL de V Magestad y su natiua inclinación a sus regalías*”¹⁰² La regalía de la tierra iba emparentada con el vasallaje y su inmediato gobierno. Para un buen gobierno de sus vasallos, el rey envía a ministros en los cuales deposita “el ejercicio de sus propias regalías”¹⁰³. Tierra, poder político, y vasallaje. Como veremos más adelante, se consolida la doctrina solorziana de la legitimidad de entrega de patrimonio regio en pago de servicios a la Corona.

4.1. NOTICIA EN “LAS PARTIDAS”

Es sabido sobre la influencia de “Las Partidas” en el derecho Castellano, y por deducción, en el Indiano. Asimismo, existe un *ius* historiador reconocido como A. Hespanha que ve en “Las Partidas” de Alfonso X la caracterización jurídica del régimen

fuera proprium de ellos y commune de todos, de toda Hispania”, en Bartolomé CLAVERO, *Institución histórica del derecho*, en Bartolomé CLAVERO; A. HESPANHA; C. PETIT; J. VALLEJO, *Curso General de Historia del Derecho*, ed. Marcial Pons, Madrid, I, 57 y ss.

¹⁰¹ Vilma MILLETICH, “El Río de la Plata en la economía colonial”, en Enrique TANDETER (Director), *Nueva Historia Argentina*, Tomo 2. “La Sociedad Colonial”, ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2000, 221.

¹⁰² G. ESCALONA AGÜERO, *Ibidem*, 21. Según la teoría absolutista, con fuertes ecos romanos y aristotélicos, corresponde la reserva de las *regalías* (los intentos por hacer efectiva dicha reserva, diríamos nosotros) a la esfera de decisión del rey.

¹⁰³ [Disertación de Turno] Br. Jose Cabero, “*Disertación sobre prerrogativas de los Virreyes y sus facultades*” leída en 1802. “*Los vasallos —dice Cabero— tienen la quintuple obligación de reconocer, amar, temer, respetar y guardar a su Rey. Esto lleva implícito, entre otras obligaciones, la de cumplir exactamente las leyes, la de auxiliarlo con sus personas y bienes para la defensa del Reino y la de amar y obedecer a sus ministros*”, en AGNU, caja 207 (Archivo General de la Nación de la R. O. del Uruguay) citado por Daisy RÍSPODAS ARDANAZ, “Constituciones de la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas de Charcas (1782-1808)”, en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, núm 6, ed. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Santiago, 1970, 268-318.

tierras nacida del proceso de concesión de las mercedes¹⁰⁴. Dicho esto, con las Partidas es posible argumentar a favor de la naturaleza pactista de este título llamado merced de tierras.

El vínculo de “Las Partidas” con la merced de tierras y éstas con el *estado indiano*¹⁰⁵ escapa a este trabajo. Mencionaré, sin embargo, que cuando buscamos los modos de adquirir dominio y se consultan los antiquísimos papeles familiares del siglo XVI y XVII, se encuentran constancias oficiales de hazañas personales que describen a los

¹⁰⁴ António HESPANHA, comunicación personal, 10/06/2002 (en adelante, com. pers.):

<https://sites.google.com/site/antoniomanuelhespanha/home> es el sitio del Profesor A. Hespanha con registro actualizado de su obra, videos de conferencias y enlaces de una serie de trabajos, inclusive que aquí se citan. Por fuera de este enlace solo hemos visto que se encuentra Antonio-Manuel HESPANHA *La gracia del derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 351. Sobre los dossiers, reseñas y notas críticas a sus variados trabajos remitimos *in totum* a Bartolomé CLAVERO, “Gracias y derecho. Entre localización, recepción y globalización (lectura coral de la vísperas constitucionales de António Hespanha)”, en RQF núm. 41, 2012, 677-767. Asimismo hemos consultado su *As Vésperas do Leviathan. Instituições e poder político. Portugal, século XVII*, Coimbra, Almedina, 1994; del mismo autor, *A Política Perdida. Ordem e Governo antes das Modernidade*, Curitiba, Jurauá, 2010. Para una relectura crítica de éste, véase a Laura de MELLO E SOUZA, *O sol e a sombra. Política e administração na América portuguesa do século XVIII*, Sao Pablo, ed. Companhia das Letras, 2006. Y la respuesta de A. HESPANHA, *Depois do Leviathan, entrevista a António Hespanha* de Pedro Cardim, en *Análise Social*, 2011, Vol. 46, núm.2000, 430-445. Y por último su propia autocritica en Heautontimorumenos, *a propósito de As Vísperas de Leviathan*, en «Heautontimorumenos, Scienza & Politica, per una storia delle dottrine» Vol 3, N° 5 (1991), Università di Bologna, 107-113, en línea en: <http://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/3066/2463> (Consultado el 12-12-15)

¹⁰⁵ En nuestra ponencia “Estatalidad del derecho indiano...” no eludimos a la paradigmática discusión sobre la existencia o no de estado “moderno” en las Indias. Cuando mencionamos al estado en el nuevo mundo estamos haciendo referencia a una idea althusseriana del estado territorial como aparato de estado y que es construido socialmente, como en el caso vicerey Toledo y su Virreinato del Perú sobre las ruinas del *reyno del Piru*, es decir sobre un complejo sistema de dominación cusqueño de sustrato incaico y de características andinas (mita, centralidad divina, ejercicio coercitivo de la autoridad, etc.). Se complejizará la idea del estado “colonial” al introducirnos en el debate del modo de producción feudal que acompaña ese tipo *d’État territoriaux* que plantea Marcello Carmagnani en el § 18.1 ““La merced de tierra en la gobernación tucumana ¿en una formación económica de carácter feudal?” del presente trabajo. Véase, además, MERCADO REYNOSO, Adrián; “Estatalidad del derecho indiano en la aplicación de las sanciones a encomenderos riojanos por el oidor Lujan de Vargas en su *Visita* de 1693”. XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, septiembre de 2004

titulares de proezas, fundaciones, y conquistas militares o de otro tipo que poseen, así evaluó, una estrecha relación —aunque más no sea cronológica— con los discursos jurídicos y de argumentación de legalidad de la ocupación territorial del espacio tucumano. Lo que denominamos el Estado es, en el siglo XVI castellano, la supremacía de jurisdicción y las demás regalías, reunidas en un haz en el Rey, ejercidas a través de la burocracia, pero susceptibles también de delegaciones y concesiones en merced, más o menos amplias, bajo la reserva del grado supremo¹⁰⁶. El futuro titular de la tierra la pide porque se la merece como premio por su “individual” y personal aporte. En efecto, en las probanzas de los beneméritos, “levantadas” con el objeto de avalar alguna petición particular al Estado colonial¹⁰⁷ o en los considerandos oficiales de concesiones de mercedes de tierras o de encomiendas, quedaron establecidos numerosos servicios de vasallos realizados a su costa y a su misión (o costa y mención). Ello significaba que había contribuido con sus recursos, y en la mayoría de las veces, con su “propia persona” en políticas públicas de colonización, implantación, represión, promoción, defensa o guerra a favor de los intereses monárquicos *d’oltre mer*¹⁰⁸. Como se prueba más adelante, la merced era, a diferencia de la gracia y la donación, una retribución por un servicio o contribución a la causa del rey. Las de tierras, a diferencia de las otras mercedes, encontraron una fuente de validación para la concesión *feudataria* en aquella expresión de “sus costas y a su misión” (o mención o minción) llevada adelante por el peticionante quién aducía, no una suplica ni una gratitud —que en tal caso conllevarían

¹⁰⁶ Es la opinión de Mario GÓNGORA en *El Estado en el Derecho Indiano. Época de fundación: 1492-1570*, Santiago, 1951, 43 y ss.

¹⁰⁷ La noción de estado colonial, la entendemos aquí, vulgarmente, como un aparato administrativo, jurídico y militar construido en las *Colonias* para que respondan a los intereses de la metrópoli, Cfr. Nicola MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e perversi*, Bologna, 1993, 35 y ss. Más contemporáneamente, el desarrollo de la teoría marxista aplicada al tema del *Estado absolutista* llevó a Perry Anderson a concebirlo como una estructura ambigua en la cual la apariencia de modernidad ocultaría una predominante forma de relaciones sociales feudales, al menos al inicio de su desarrollo. El producto obtenido de la fiscalidad —una de las apariencias de modernidad— se invertiría en cambio con criterios feudales en la guerra, que sería la forma típicamente feudal de dirimir conflictos. Véase Perry ANDERSON, *Lineages of the absolutist state*, ed. New Left Book, Londres, 1974, 16 y 20-42. Para la cuestión del Estado y su relación con el *feudalismo* americano, véase íntegramente el parágrafo 18.1. del presente trabajo.

¹⁰⁸ Utilizaremos “d’oltre mer” y “oltre mer” como sinónimo de “ultramarinos”, para resaltar que dicha conceptualización trae aparejada una carga historiográfica eurocentrista o eurocéntrica.

a una *donatio*— sino que esta petición conformaba una expresión fundada en un carácter retributivo o remunerativo por lo que él o su ascendente habían contribuido al reino. Y el rey, ya modernamente ataviado con atributos estatales, consustanciado con la opinión de una burocracia funcionarial y clerical de la necesidad de apoyar en esta etapa formativa de una clase de feudatarios y señores, invocaba su “real conciencia” de la “justa” retribución con feudos —tierras— a sus vasallos, *Ricos omes e a los Caualleos*, ante los eventuales defensores del patrimonio regio, como las cámaras o prerrogativas forales.

Ya en el Tucumán, si bien resaltando aspectos genealógicos, simbólicos y jurídicos, varios autores contemporáneos, entre ellos, Vera¹⁰⁹, Mercol¹¹⁰, y Serrano Redonnet¹¹¹, encuentran el origen de la concesión, en la conciencia regia retributiva, de feudos y derechos a sujetos privados, en la ley 2, título 26 de la cuarta Partida de Don Alfonso X cuando estatuye:

*“Mas el feudo se otorga con postura, prometiendo el vasallo al señor de fazerle el servicio a su costa, e a su misión, con cierta contya de caballeros e de omes, o otros servicios quel prometiese facer”*¹¹²

De esta dualidad señor-vasallo, en donde el primero otorga y el otro recibe, el objeto de tralación es un *feudo*¹¹³, es decir *una cosa que sea rayz*, concedida a cambio de su

¹⁰⁹ Juan VERA, “El concepto de mercedes y encomiendas”, en *BOLETÍN DE LA JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE CATAMARCA*, Catamarca, 1955, 171-198.

¹¹⁰ Italo MERCOL, “Noticia histórica de las mercedes” en Italo MERCOL (Comp.), *Los Derechos y acciones en las mercedes y campos comuneros: La solución riojana*, La Rioja, ed. Publicación técnica n° 6 de la Dirección General de Catastro de la Provincia de La Rioja, 1976, 86 [Aporte al segundo congreso nacional de derecho registral, Córdoba, 1976].

¹¹¹ Jorge A. SERRANO REDONNET, *La sociedad de Buenos Aires en sus derechos a mayorazgos y a otras fundaciones españolas*, ed. Academia Americana de Genealogía, Buenos Aires, 1992, 278.

¹¹² *LAS SIETE PARTIDAS DEL SABIO REY DON ALONJO EL NONO*, *Glosadas por el Lic. Gregorio López del Consejo Real de Indias, vertidas al castellano y estensamente adicionada con nuevas notas y comentarios y unas tablas sinópticas comparativas sobre la legislación española, antigua y moderna, hasta su actual estado*, por Ignacio SANPONTS Y BARBA, Ramón MARTÍ DE EIXALA, y José FERRER Y SUBIRANA, ed. Imp. de Antonio Bergnes, 1843, t.1, 975; t.2, 1211; t.3, 851; t.4, 650. Barcelona. La cita es de la página 897 del tomo 3.

¹¹³ “Ley 1° *Que cosa es feudo, e onde tomo ese nome, e quantas maneras son del.*”, subtítulo el “Tít. XXVI: de los Feudos” en este caso en la 1144 del t. 2 de la *Ob. Cit* supr. Define “Feudo es, bien Fecho que da el

cooperación en campaña aportando hombres y caballos o aquellas acciones que el concedido prometiére hacer, podría encontrarse el antecedente más sólido de concesiones regias territoriales. Obviamente, reproduce una relación señor-siervo medieval, pero como lo señalan las mismas Partidas preguntándose sobre cuántas maneras hay de vasallaje, está reservada a aquella que integra el Rey con los nobles principales, la “*primera e la mayor es aquella, que a el rey fobre todos los de su señorio: a la que llaman en latin: merum imperium: que quiere dezir, como puro e efmerado mandamiento de judgar, e demandar los de su tierra*”¹¹⁴.

Es por este pacto vasallico y por *imperium* del monarca que se legitima el acceso al *fundo terriero*. La tierra, en este caso tucumana, rodeada de escenarios hostiles era ya, para la mentalidad de un vasallo hispano en el Tucumán americano de 1585, un bien bajo indiscutible imperio regio, es decir, era el Rey fuente de justicia donde *manan todos los derechos tanto quiere decir como cosa donde en que se encierran todos... de qual natura quier que sean*, y como tal solicita tierras en merced porque “*asistió mas tiempo de dos años sirviendo a su Magd. en todo lo que le fue mandado con sus armas y caballos y a su costa*”¹¹⁵.

Como es sabido, desde mediados del siglo XIV, la institución merced de tierras esta íntimamente ligada al acontecer político de la península ibérica y ha sido destacada

Señor a algund ome, porque se torne su vasallo; e el façe omenaje, de le ser leal. E toma este nome de fe, que dene siempre el vasallo guardar al Señor”. Al distinguir lo tipos de feudos (de atal y de Cámara) aclara que este es un bien, una cosa, y que esta es de *rayz*, es decir inmueble. Los comentaristas Ignacio Sanponts y Barba, Ramón Martí de Exhala, y José Ferrer y Subirana, subrayan al respecto “Pues el feudo no puede consistir sino en la cosas inmuebles ó en las adherentes á ellas, y las que se cuentan legalmente entre las inmuebles, como lo son los réditos anuales ciertos e indubitables”. Esto último sirve de aclaración para las mercedes de maravedís o maravedís que las partidas entienden como concesiones de réditos de la tierra, Véase “*Ley 2 Que departimiento ha entre Tierra, e Feudo, e Honor*”p. 1145 del tomo 2.

¹¹⁴ *Ibidem*, 61 vuelta, con la aclaración de *Sobre todos*, cual “*Subditi respectu iurisdictionis licet non ratione feudi dicuntur vassalli, vt hic.(...)*”

¹¹⁵ Archivo y Biblioteca Histórica de Salta, carpeta 1, doc. 54. Solicitud de merced de tierras de Gonzalo de Torres Hinojosa, 20 de enero de 1585. Recogido por Laura SACCHETTI DE ROVERE, “Concesión de mercedes, tierras y solares en Salta. (1582-1589)”; en AA.VV., *Los primeros cuatro siglos de Salta. 1582 – 16 de Abril – 1982. Una visión multidisciplinaria*. Salta, ed. División de Publicaciones de la UNSA, 1982, 405.

como un punto de inicio para el crecimiento del poder de la nobleza¹¹⁶. No obstante provenir desde la época de los godos¹¹⁷, las concesiones de bienes inmuebles como señoríos, villas y lugares a “naturales” del reino se consolidan en el periodo¹¹⁸.

¹¹⁶ La noción de mercedes enriqueñas —por Enrique II también llamado “de las mercedes”— nace a debido a las características excepcionales de las concesiones hechas por ese rey. “*Con las mercedes enriqueñas el poder y patrimonio territorial de la nobleza crecieron desmesuradamente a costa del realengo*” Cfr. Carmelo VIÑAS Y MEY, “De la edad media a la moderna. El Cantábrico y el estrecho de Gibraltar en la historia política española”, en *HISPANIA*, 1941, núm. 5, 72. Vincent Vives afirma que “Enrique II subió al trono ayudado por los nobles y que pagó sus servicios con innumerables mercedes y donaciones, abre a la aristocracia un amplio camino para trepar al poder”, en Jaime VINCENT VIVES, *Aproximación a la Historia de España*, ed. Centro de Estudios Historicos Internacionales- Imp. Juvenil, Barcelona, 1952, 116.

¹¹⁷ Fue Leovigildo el primero y acaso el único rey godó que hizo una concesión territorial bajo forma de donación de un pueblo principal con señorío y vasallos, y donde se contiene la descripción del hecho en Enrique F. FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, *España Sagrada: theatro geographico-historico de la Iglesia de España, origen, divisiones y limites de todas sus provincias, antigüedad, traslaciones y estado antiguo y presente...*, ed. Imprenta de Gabriel Ramírez, [1762] Madrid, 1905, tomo 22, 282.

¹¹⁸ El rey Pedro I justifica las mercedes con estos argumentos y pide a sus descendientes que las guarden y no las revoquen, dado en Burgos el 29 de mayo de 1374: “*Otro si por razon de los muchos é grandes é señalados servicios que nos hicieron en los nuestros menesteres los Perlados (sic), Condes, é Duques, é Marqueses, é Maestres, é Ricos omes, é Infanzones, é los Caballeros, é Escuderos, é Cibdadanos asi como naturales de nuestros Regnos, como los de fuera dellos, é algunas cibdades, villas é logares de los nuestros Regnos, é otras personas singulares, de qualquier estado ó condicion que sean, por lo qual le ovimos de facer algunas gracias é mercedes, porque nos lo avian bien servido é merecido, é que son tales que lo servirán é meresceran de aquí adelante, por ende mandamos á la Reyna, é al dicho Infante mi fijo, que les guarden é cumplan é mantengan las dichas gracias é mercedes que les nos facimos, é que se las non quebranten nin mengüen por ninguna razon que sea: ca nos ge las confirmamos (...)*”, . en *Crónica de Enrique II*, Madrid, B. AA. EE., núm LXVIII, 1953, 42, recogido por Nelly R. PORRO, “*La inalienabilidad de los bienes de mayorazgo, tres documentos inéditos del siglo XV para su estudio*”, en *REVISTA DEL INSTITUTO DE HISTORIA DEL DERECHO RICARDO LEVENE* (en adelante RIHDRL) Buenos Aires, núm. 21, 1970, 128 y 129. Durante la llamada reconquista, llegó a constituir un peligro para el régimen económico y fiscal del reino, por ello la reclamaron las Cortes contra las donaciones bajo merced del reino, limitando la facultad de hacerlas el mismísimo rey Enrique IV por una pragmática (1432) y Valladolid (1442), también Enrique IV en las de Córdoba (1455), Ocaña (1469) y Santamaría (1472) y los reyes católicos en las de Madrid (1476), y Toledo (1480). El fundamento de la facultad del monarca para hacer esta clase de donaciones se encuentra asentada en la doctrina sentada en la Ley VIII, tít. XII del Lib. III del Fuero Real (1º. [...] lib. III de la Novísima Recopilación), la que distingue que las cosas que el rey diere a alguno, no se la pueda quitar él ni otro sin culpa, y el donatario hiciere de ellas lo que quisiere, transmitiéndolas ab intestato a sus herederos, por lo que se estableció el derecho de los monarcas para disponer del patrimonio de la corona a favor de sus vasallos. Para llevar cuenta y razón de las mercedes hechas se estableció un registro general de las mismas en 1329 a petición de las Cortes de Madrid al rey Alfonso XI, ordenándose la inscripción en el mismo de las hechas en múltiples ocasiones (lo cual prueba que no se cumplió dicho requisito), como hicieron las Reales Pragmáticas de 21 de diciembre de 1423 y 6 de abril de 1487, las ordenanzas de Madrigal de 1476 y los decretos posteriores de 1625, 23 de mayo de 1667, 23 de febrero de 1680, 27 de Julio de 1683, 5 de Julio de 1685, 31 de Julio de 1692 y 4 de febrero de 1700; ordenando limitaciones ya desde la de 1423 que

En síntesis, aunque en el *corpus iuris* de las Partidas no se encuentra establecida la merced ni la define y clasifica como sí lo hace con varios institutos de naturaleza similar, en ella se encuentra la potestad del rey de disponer de la facultad de concesión de feudos y tierras realengas por voluntad propia y de carácter inalienable del bien concedido, características que le impregnarán las particularidades del trasplante americano.

§ 5 —COMPONENTES DEL TÍTULO DE LA MERCED DE TIERRAS

Como la merced es un documento público emitido por la autoridad competente, su composición podía variar en función de los tres niveles de la administración pública estatal que el ordenamiento indiano preveía: el Gobernador, la Audiencia, el Consejo de Indias. Mientras el gobernador asumía efectivamente la potestad delegada de conceder tierras, los órganos colegiados como la audiencia y el consejo se reservaban la facultad

afirma que no valiesen las mercedes y privilegio reales que no se asentasen previamente en los libros de contaduría mayor (Ley, tit. I lib X de la Novísima Recopilación). Don Juan II ordenó (1447) que cesasen las mercedes de maravedíes, de muros y villas o lugares del rey que hubiera pasado al señorío de particulares, que no “salieran” las mercedes de pinos, moros, galeras y otras cosas de atarazanas reales —Vg. que se puedan fabricar armas—. En 1442 se ordenó que no se pudiesen donar o enajenar de la corona los pueblos, aldeas, términos y jurisdicciones —en virtud de una mejor comprensión entre la jurisdicción realenga y la foral—, salvo por la urgente necesidad o por premiar grandes servicios y de acuerdo con el Consejo y con seis procuradores de seis ciudades, so pena de la nulidad de la *donatio* o de la merced. Si se precisaba aún más el carácter real del orden señorial, limitando su existencia a la autorización real, también regulaba las cosas inmuebles que se mercendeasen entre familiares del rey, por lo que las cosas que este diese a la reina, el príncipe o la princesa, solo se tendrían en usufructo vitalicio. Enrique IV prohibió en adelante las mercedes, donaciones y enajenaciones de señorío y jurisdicción a extranjeros, y las hechas a naturales en tiempos de tutorías, precepto que viene reiterado por los reyes Católicos; el mismo Enrique IV revocó en 1473 las hechas desde el 15 de setiembre de 1464 en adelante. Los reyes católicos rescribieron la moderación de las donaciones y mercedes reales y establecieron la extinción de las mercedes de maravedíes conforme fuesen vacando. En Julio VALDEÓN BARUQUE, “Notas sobre las mercedes de Enrique II de Castilla”, en *HISPANIA*, T. XXVIII, (1968) 38-55. Y Véase el Archivo General de Simancas, *Catálogo XII : contaduría de Mercedes. Catálogo genealógico. Mercedes de Carlos V. Años 1515-1556 / XI: Catálogo de privilegios y mercedes de Hidalguía*, y, *Catálogo genealógico, entresacado de la cantaduría de Mercedes*, compilado por Mariano ALCOCER Y MARTÍNEZ, ed. Imp. Casa Social Católica, Valladolid, 1927.

de ser instancias de recusación o resolución en caso de conflicto de competencias o jurisdicción de la gobernación. El cabildo, el alcalde de la hermandad y el recaudador del impuesto de la media *annata* se introducirán en sus competencias propias, como veremos.

Intentaré adentrarnos en una caracterización exégetica del documento llamado “Merced de Tierras”, a fin de aportar, a través de una detallada descripción conforme a la práctica y procedimiento, claridad respecto del rol de este título en la implementación de una política distributiva de tierras.

§ 5.1. —EL DOCUMENTO PROPIAMENTE DICHO

El aspecto documentario da cuenta de una variedad de las formas materiales indianas, entre ellas la composición interna del documento. No obstante, no hay contraposición entre documento y proceso que administra la secuencia de la *unidad documentarie*. Los archivos locales tucumanos informan de multiplicidad de actas, pedimentos, oficios, escribanos, traslados, folios sueltos, que operan en un falso diversificante universo de lo que son las mercedes de tierras. Sin embargo, después de años de investigación de fuentes, surgen evidencias de una conclusión complementaria a las hipótesis que guían esta *recerque*: la validación del poder sobre el bien terriero va coligada a una producción documental expresa que esté dotada de una secuencia de autenticidad: pedido, pago de media *annata*, concesión y toma de posesión. Todo en papel sellado o papel común a falta de aquel.

En efecto, diré que el mérito, la fuerza social y la solidez jurídica de la merced dependía de una serie de condiciones estatuidas y circunstancias procedimentales que me atreveré a listar de la siguiente manera:

- I. La existencia de un documento escrito, que otorga a un sujeto la titularidad de un bien fundario, real y corpóreo [*terriero*, relativo a la tierra o de fundo, del latín *fundus*].

El escrito posee, a su vez, tres componentes:

- I.a la petición;

I.b el otorgamiento de la concesión *condicionada* de la autoridad regia en nombre del Rey y;

I.c la puesta en posesión del beneficiario de la merced por parte de un funcionario público local.

Este documento, “cosificado” en un expediente —y como tal una “cosa” en sí misma, puesto que la construcción del derecho de apropiación del hombre sobre la cosa inmueble, el testimonio escrito de los actos suplidos y documentados conformaban una substancialidad al *ius* apropiativo—, era la culminación de un procedimiento que consistía en tramitar la petición hasta lograr el objetivo deseado y obtener el otorgamiento de la tierra solicitada mediante la puesta en posesión predial. Así, los indiscutibles fundamentos realengos pasaban a ser de la esfera sustancial de pertenencia privada¹¹⁹.

Entre la petición y el otorgamiento, de hecho y de derecho, existía una clara diferencia de tiempos y de señalamientos como eran la descripción y denominación del bien inmueble. No obstante, en la mayoría de las solicitudes de merced, el que la otorgaba se remitía a la descripción del peticionante del objeto peticionado. En algunos casos, existieron solicitudes de merced a partir de las cuales aquel que peticionaba pretendía más tierras de las que se otorgaran, creando, en consecuencia, una fuente de litigios en el siglo XIX y XX.

Pero volviendo a la exégesis de lo escrito¹²⁰ en el documento (I), el lugar más sustancial, desde el punto de vista privado, era el correspondiente a la petición (I.1.).

¹¹⁹ Paolo Grossi nos ilustra respecto del pasaje del dominio público al privado de la praxis medieval cuando afirma que “*sforzati di seguire l’operosità conoscitiva del ceto dei giuristi medievalisti che aveva condotto a due risultati: custodendo gelosamente nel proprio subconcio un tesoro di forze e di istituzioni, liberato e consolidato nella prassi dei secoli altomedievali, il giuriconsulto culturalmente provveduto dell’età del rinascimento giuridico, adattando disinvolto i testi romani, ‘realizza’ un numero rilevante e comunque indefinito di situazioni personali su un bene (cioè consente loro una presenza incisiva sul piano ‘reale’) e arriva a concepirle molte di queste situazioni reali addirittura come dominio pensandole come partecipi della sfera gelosa della appartenenza.*” GROSSI, en “Dominia’ e ‘Servitutes’: inversión sistemática de diritto comune in tema di servitù”, en RQF n. 8, *Biblioteca Per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, ed. Giuffrè, Milán, 1992, 755 y ss.

¹²⁰ El estado monárquico ya establecía en las Partidas “*que fuese ballada escritura...*” en donde el instrumento escrito poseía una validez superior, por ejemplo, a la testimonial. Véase, José

§ 5.1.1 LA PETICIÓN

La petición de merced de tierra es la solicitud del beneficiario a título personal, hecha por escrito y dirigida al Rey. En ella el sujeto está obligado, consuetudinariamente, a describir los motivos y promocionarse como merecedor de tal distinción, lo que nos brinda una excelente fuente de información histórica del período. Con la petición individual comenzaba la diligencia necesaria para la obtención de tierra realenga; el peticionante debía realizar diversas diligencias que resultaban, la mayoría de las veces, bastante engorrosas debido a las condiciones naturales de comunicación, a las instancias de administración intervinientes (el tesorero real, el “justicia” de la jurisdicción donde el bien se estuviera situado, el cabildo, etc.) y a la condición de “escrito” de la petición, en el contexto de un mundo mayoritariamente iletrado.

A continuación, presentamos las diversas instancias o *corpus* que el solicitante debía incluir en el texto, clasificados en: I.1.a. Condición de vecino; I.1.b. Motivación o razón de la petición; I.1.c. Condición, estatus o clase social del solicitante; y I.1.d. identificación o dimensionamiento del bien territorial.

5.1.1.A. CONDICIÓN DE VECINO.

En la mayoría de los casos, los peticionantes de mercedes de tierras alegaron encontrarse *abesinados*¹²¹, es decir, manifestaron poseer la condición de vecinos, situación que se acreditaba por “el ser hijo, o hija, o hijos del nuevo poblador, o sus

MARTINES GIJÓN, *La prueba judicial en el derecho territorial de Navarra y Aragón durante la baja edad media*. Separata de AHDE., Madrid, 1961, 33-45.

¹²¹ [Archivo Judicial de La Rioja (en adelante AJLR), A-395, Merced de Ulapes, f. 91. y f.403-409 vta. [Archivo del Colegio de Escribanos –en adelante ACELR- Protocolo Escribano Miguel Jaramillo, año 1880, fojas 78 y ss.]; [Archivo Histórico de Catamarca –en adelante AHCa-Sección Gobierno, Carpeta N° 1, Leg. s/n, años 1681-1902, fs. 9 a 13 y vta.]; [Archivo Histórico de Córdoba (Arg.) –en adelante AHCo-, Escribanía de Hacienda N° 2, Leg. 7. Expte. 9] ;] ; [Archivo de la Dirección General de Catastro, Sección Rural, -en adelante ADGC-, MJ-20-P14, f. 14 y ss.]

parientes dentro del cuarto grado”¹²². Otras veces, tal como lo sostiene Rubio Duran¹²³, quien solicitaba merced de tierras “no era poblador asentado sino ‘residente’ en la ciudad”. En estos casos, si la merced era concedida, habitualmente se especificaba que “sea obligado a vivir en esta ciudad”¹²⁴. Levene lo ha descripto como “derecho de vecindad en Indias”¹²⁵: una prerrogativa de los vecinos de los pueblos de realengo proveniente de una disposición del año 1503¹²⁶. Ya en el siglo XVII, se invocaba la vecindad de algunos de los numerosos poblados que comenzaban a institucionalizarse en zonas que antes fueran rurales, respetándose la opinión del cabildo de la jurisdicción al que, en primera instancia, se remitía la petición.

5.1.1.B. —FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN.

La razón más elemental y también la más frecuente para solicitar una merced de tierras fue la necesidad de sustento alimentario. Se mencionan las expresiones —que

¹²² José OTS CAPDEQUÍ, *Manual de historia del derecho español en las indias y del derecho propiamente indiano*. Buenos Aires. Tomo I. 1944, 237.

¹²³ Francisco RUBIO DURÁN, *Punas, Valles y quebradas: tierra y trabajo en el Tucumán Colonial. Siglo XVII*, Sevilla, ed. Serie *Nuestra América*, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, 1999, 567.

¹²⁴ En la jurisdicción de La Rioja no hemos encontrado casos de residentes o ‘pasantes’ que hayan solicitado y se las hayan concedido. Sin embargo se citan antecedentes en Salta, que previo levantamiento de algunas ciudades como Talavera, solicitaban en merced de solares o tierras de Salta sin todavía ser vecinos de ella. Véase Rubio, 89, Merced de Puna a beneficio de Alonso de la Plaza, 21 Junio de 1600, Leg. 1, Expte. 12; Archivo de los Tribunales de Jujuy. En el mismo sentido, otro caso donde el solicitante “...es vecino de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera, y el poco posible que tengo en mi vecindad me obliga a que venga con toda mi casa y mi familia a vivir en esta ciudad...” Carpeta 2. Doc. 75, Archivo y Biblioteca Histórica de Salta (en adelante A.B.H.S.), citado por Laura SACHETTI DE ROVERE, “Concesión de mercedes, tierras y solares en Salta. (1582-1589)”; en *Los primeros cuatro siglos de Salta. 1582 – 16 de Abril – 1982. Una visión multidisciplinaria*, Salta, s/e, 1982, 233 y ss.

¹²⁵ R. LEVENE, *Historia del Derecho Argentino- Historia de las Instituciones de Derecho Público y Privado Indio*, ed Kraft, Buenos Aires, tomo II [VII], 213-216 [518].

¹²⁶ Véase *RECOPILACIÓN....* Ley VI, Tit. V, Lib. IV, “Y el que toviere casa Poblada aunque no sea encomendero de indios entienda ser vecino”, nos ilustra el Licenciado Don Juan de MATIENZO, *Gobierno del Perú*, Buenos Aires, ed. Compañía Sud Americana de Billetes de Banco, 1910, 219; En el mismo sentido SOLÓRZANO DE PEREYRA, *Política ...*, 226 y 387.

verificamos en fuentes archivos riojanos y cordobeses del Tucumán— como “*para sustento de su persona y casa*”, “*para ayuda de su sustento*”, y los documentos riojanos “*estoi casado y pobre y para poder me sustentar se sirba en nombre de su magestad a aserme merced de un pedaso de tierras que estan bacas y realengas*”¹²⁷, “*hacer me merced de estas sierras vacas para poder poblar estancias de ganados mayores y menores y sembrar para sustentarme conforme a la calidad de mi persona*”¹²⁸. Las órdenes religiosas, y en especial la jesuítica, también solicitaban para el “sustento” de sus propias actividades. Una merced solicitada por el Rector del Colegio riojano de la Compañía de Jesús, de un pedazo de tierras y “un salto” de agua para la construcción de un molino, “*a Uds. Pido y suplico, que como Gouvernador y Capitan general que es desta Provincia de Tucumán, por su Magestad, que Dios guarde, que en nombre desa Magestad haga merced a este collegio dela comp de jesus de dicho salto, y pedazo de tierras como tengo dicho, para edificar un molino, y hazer un corral para tener el ganado necessario para el arrio de otro molino, y poder pastear en otra tierra, por tener este collegio necesidad de un molino para sustento de sus sujetos*”¹²⁹.

Vemos como en múltiples ejemplos, el peticionante le otorgaba suprema importancia para su sustento material a la tierra, emparentada con la idea de “industria”, es decir, su laboreo para la extracción de “sus frutos”.

5.1.1.C. — *DESCRIPTA DEL STATUS SOCIAL DEL SOLICITANTE*

Tal como lo ratifica el título XII de la Recopilación, el funcionario otorgante de la merced debía ponderar la “calidad” del vasallo-solicitante. La mención de condición de *hidalgos* –real o fingida- o *hijosdalgos*, le asentaba a la petición una fuerza política de indudable relevancia para el estado monárquico. En una solicitud fechada en La Rioja

¹²⁷ AHCo, Escribanía de Gobierno, 2, Leg. 7. Expte. 9. (merced de Olta).

¹²⁸ AHCo, Escribanía de Hipotecas, 12, Leg. 14, Expte. 2. (merced de Cargoya)

¹²⁹ AHCo Escribanía de Gobierno 2, Leg. 6 –Tomo II, Expte. 22 (“Expte. 114 . 1687. La Compañía de Jesús pide merced de mas tierras, en La Rioja.”).

en 1692 del encomendero Gómez Camargo, invocaba en su solicitud de la merced de Ulapes “*que yo conforme a las obligaciones de Isodalgo que soy notorio pueda acudir al real Servicio de cargas de vecindad y crianza de mis Ijos, y de sustentto dela dicha mi mujer*”,¹³⁰

Es importante destacar lo que realmente cuenta a los ojos de dicho testigo: un orden institucional estatutario dentro del cual una comunidad de vecinos se atribuye derechos legítimamente reconocidos sobre una población sometida. Derechos que no son gratuitos, es decir simples donativos de la autoridad pública, sino que son privilegios producto de su aporte, como encomendero o feudatario, de las cargas para el mantenimiento del orden.

Orden y vecindad surgen como conceptos claves en cuanto portadores, la segunda del sustento material de la primera. Moutoukias¹³¹ ha señalado las dificultades de encontrar una definición homogénea de vecindad en los textos legales. Más allá de una precisa definición, nuevos abordajes la suponen, a la vecindad, como un vínculo con la “naturaleza” (el natural de, como lugar de nacimiento) que involucraba, en realidad, algo más complejo: se trataba de una combinación entre el “lugar” de nacimiento, la “pureza de la sangre” y las relaciones cultivadas durante varias generaciones¹³².

Como veremos más adelante, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, la vecindad y las cargas de vecindad estaban unidas al principio de aporte con costas “propias”, en la guerra contra los indígenas insubordinados. Sin embargo, a medida que la dominación europea se consolidaba, se hizo más complejo el esquema inicial entablado durante la conquista. ¿A cuál esquema inicial nos estamos refiriendo? Precisamente a aquél que,

¹³⁰ AJLR, A-395.

¹³¹ Zacarías MOUTOUKIAS, “Gobierno y sociedad en el Tucumán y en el Río de La Plata”, en *Nueva Historia Argentina*, Tomo 2, ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2000, 359 y ss.

¹³² Dario BARRIERA, *Conquista y colonización hispánica Santa Fe la Vieja (1573-1660)*, Rosario, ed. Prehistoria-La Capital, 2006, 124 y 125 [215].

basado en una ley de 1554, establecía que vecino era “el que tuviere casa poblada, aunque no sea encomendero de indios, entienda ser vecino”¹³³

La política de poblamiento y el establecimiento de un caserío eran prioridades iniciales del periodo de conquista en este espacio de frontera. Como quiera que fuese, la condición de vecino no era simbólica o nobiliaria —aunque la invocación de vecino *fuedatario* conlleve esas prerrogativas— sino que aparecía asociada a una posición o estado (*status*) social. De hecho, y acorde a la intersubjetividad e ideales señoriales de este grupo, la noción de casa poblada suponía una condición extremadamente importante: residencia del vecino y ubicación de sus intereses materiales inmediatos; suponía, asimismo, una casa capaz de albergar y alimentar huéspedes o funcionarios, parientes y criados, así como sirvientes. O sea, que su existencia suponía medios materiales y políticos para sostenerla.

5.1.1.D. —IDENTIFICACIÓN DEL BIEN FUNDARIO.

La necesidad imperiosa de identificar de manera precisa el bien —que indujera el proceso codificador de fines del XIX sobre los bienes reales—, dejaría al descubierto el principal déficit del título de merced: la imprecisión en la delimitación espacial del objeto-cosa, al menos, en la gobernación tucumana.

Paradójicamente, la cosa fundaria, centro de este microcosmos corpóreo e inmueble del que emanaban tanto las relaciones especiales de los habitantes de determinados distritos cuanto las intenciones de validación —como era la titulación por merced—, no estaba delimitada de manera precisa, según lo requería ahora el orden moderno. En la mayoría de los casos, el peticionario indicaba los límites del predio y lo avalaba. Es decir que, el sujeto privado era aquél que decía y describía la superficie a partir de la geografía y mencionaba a los límites naturales como cerros, ríos, o árboles de gran calado o ‘marcas’. Si bien ésta situación se dio en la jurisdicción de La Rioja y en la Gobernación del Tucumán, existe una excepción en la jurisdicción del Río de la Plata,

¹³³ Z. MOUTOUKIAS “Gobierno ...”, 360.

donde se comisionó al Capitán Pereyra para una mensura de tierras con precisas unidades de medida. Veamos,

*“recoja la cuerda del padrón y medida que es de cien varas castellanas para con el hacer la dicha medida (...) y señalará. y cosas necesarias para hacerla dicha medición, que hará con toda clarida y distinción, poniéndola por escrito, con dia, mes y anno, y horas y la parte y legua y el numero de la suertes que fuere midiendo, poniendo el numero a la primera y luego el n° al segunta, y asi sucesivamente hasta llegar al dicho Salto del dicho Rio”*¹³⁴.

La geografía nos indica que la “pampa húmeda” rioplatense —a diferencia de los valles, quebradas, aguadas, arroyos y pueblos precolombinos del área andina del noroeste argentino— fue y es un territorio uniforme y playo. Por el contrario, comparada con el uniforme horizonte pampeano, la cultura andina aporta mayores fuentes de delimitación debido a las continuas irrupciones naturales y a las “fallas” geográficas. En este sentido, los puntos de referencia riojanos y tucumanos, en general, pertenecían a la toponimia local indígena, por cierto, más rica y compleja, a causa de la preexistencia de la tradición autóctona en una zona de ocupación incaica-aymará.

Así, la voluntad de expresarse en función de una unidad de medida “convenida” y constancia por escrito parecen haber constituido el nuevo criterio del mundo americano¹³⁵, muy diferente a la planta irregular de la casi totalidad de los pueblos y ciudades españolas existentes hacia 1500. El salto de la vara castellana a la legua en la merced, se da en concordancia con una nueva visión del espacio donde el punto de referencia es de un antiguo pueblo o “sitio” indio o, en el caso de una región

¹³⁴ Comisión ordenada por “Don Francisco de Avendaño y Valvidia, Caballero de la orden de Santiago, Gobernador y Capitan General, Justicia Mayor de las provincias del Tucumán y à cuyo cargo están estas del Rio de La Plata r el Rey nuestro señor Dios lo Guarde, dimos la presente en Buenos ayres en veinte de noviembre de 1642”, transcrito en, *Mercedes de tierras hechas por los gobernadores a nombre del rey*, ed. ARCHIVO HISTÓRICO DR. RICARDO LEVENE, La Plata, 1979, 56.

¹³⁵ Al comentar las disposiciones de 1573, García Gallo precisa dónde han de considerarse los nuevos emplazamientos, “en este punto, el Derecho urbanístico indiano, sino la ciudad misma americana representa un avance considerable respecto al castellano”, . A. GARCÍA GALLO, “*De la ciudad castellana a la indiana*”, en Academia Nacional de Historia, VI Congreso Internacional de Historia de América, Buenos Aires, Octubre de 1980, (Buenos Aires 1982), 43-53. recogido en “*Los Orígenes...*” 1005 y ss.

semidesértica, una aguada o vertiente o arroyo. Desde ese lugar, único, identificable e indiscutible, se establece el centro y a partir de allí, se “mide”,

*“se sirva de aserme Merced en nombre de su Majestad que Dios guarde de Un pedazo de tierras que estan en una aguada llamada Vlape que esta en un camino nuevo (...) que esta poco amidad para la ciudad de San Luis de Loyola; distante de la ciudad dela Rioxa como sinquenta leguas poco mas o menos ;(...), y que la dicha Merced [sea de] dos o tres leguas encontorno dela dicha aguada ”*¹³⁶

Es posible observar, entonces, de qué manera la aguada, lugar de asentamiento indígena, sería el punto central a partir del cual se contaban las tres leguas en torno a ella. La merced adopta, tanto en el imaginario cuanto en su documento, la forma circular. Así la pide y así el gobernador se la otorga,

*“...según el tenor de su pedimento sin perjuicio de Pueblo de Indios y de otra cualquier persona Sele ase Merced del pedasso de las tierras contenido en su pedimento debajo a los linderos mencionados ”*¹³⁷.

Obsérvese que se piden “dos o tres leguas”, y la autoridad regalista se las otorga sin precisar “ese” número. Un siglo después, a través de otro instituto, los linderos darán lugar a un “amojonamiento” consensuado para evitar los conflictos de yuxtaposición. Otra,

*“...cuyo título o nombre es de Hedionda, tomando por linderos a la parte del sud de las tierras y aguadas de Juan de Argañaraz, y para lo del norte, con el paraje delas Salinas, y su territorio; por la parte de oriente con tierras de Atilés y Malanzan y por la del poniente con el paraje y estancia de las tumanas, jurisdicción de la ciudad de San Juan, la cual dicha Merced bajo los expresados linderos pido”*¹³⁸

¹³⁶ AJLR, A-953.

¹³⁷ *Ibidem ant.*

¹³⁸ AJLR, F-5. s.f.

El argumento expresado en los límites referenciados (en unidades productivas “Salinas y su territorio”, “paraje y estancia de las Tumanas”) está indicando, a mediados de este siglo XVIII, un cambio desde un primitivo naturismo hacia una concepción de unidad económica o agraria, de estancia ganadera o “hacienda”.

La progresiva salida del feudalismo señorial a la modernidad de fines del XIX, que conlleva una determinada visión del mundo social, significará una serie de elecciones peculiares y soluciones regionales para los grandes problemas de fragmentación del orden jurídico en varias provincias. Los conflictos y *litis*, no son ausencia o presencia de *lex*, sino de mercenderos patrones de estancias por el establecimiento de linderos precisos de sus dominios, como la merced de Hedionda y los de la merced de Puluchán, la de Malanzán, y la merced de los Argañaraces. “Amojonamiento” y “demostración” surgen como instrucciones judiciales necesarias para echar luz sobre la geografía del territorio desde una ¿nueva? racionalidad moderna y catastral. La judicialización de los aspirantes a propietarios conllevó ya no a discutir la validez o efectividad de tal o cual concesión sino al procedimiento en sí mismo, en especial si la aspiración del mercendero se correspondía con los linderos efectivamente concedido. En un ejemplo de las *litis* sobre los linderos pedidos y los efectivamente concedidos leemos:

“...como no es lo mismo pedir que otorgar, o no todo lo que se pide se concede.”¹³⁹ de lo que se desprende de una mayor apreciación del texto escrito de petición y concesión efectiva.

Complementariamente vemos cómo se renuevan institutos existentes como el de amojonamiento con piedras, los cuales, según Guaman Poma, provienen de la tradición andina incaica, mixturada con una “demostración” o declaración de testigos firmantes en el documento mismo.

¹³⁹ Dice el texto completo “Mas documento que la Merced pidió Don Tomas Camargo, y que fue otorgada por el Señor Gobernador Dn. Martín de Jáuregui. Es verdad que Camargo solicitó las sobras del pueblo de Atilas, pero como no es lo mismo pedir que otorgar, o no todo lo que se pide se conceder; el Señor Gobernador Jáuregui ante quien se solicitó esta Merced en su Auto de nueve de febrero de 1698 (...) no expresa, haber concedido sobras algunas de Atilas ni de otros terrenos, y solo lo hace Merced de las tierras y tres aguadas de Ichan, Puluchán y Malanzán, que el postulante menciona en su petición, sin perjuicio como dice de otro de mayor derecho”. Alegato anónimo, 1753, en AJLR, Expte F-5, s.f.-

§ 5.1.2. —LA CONCESIÓN

Llamamos concesión a la entrega legal y formal del bien inmueble por parte del funcionario colonial que porta la facultad de ejecutar esa entrega. Como ya vimos en el título 12, el rey menciona “al gobernador o quien tuviere nuestra facultad”, y desde un primer momento otorga a éste un rol destacado como dispensador de tierras. No obstante, los que realizaban la distribución inmediata pueden variar; así, además del mencionado, podían hacerla el jefe de la expedición, el capitulador, el Virrey, el presidente de la Audiencia, el Cabildo y los Gobernadores, es decir, las autoridades coloniales que ejercen sus funciones en nombre del Rey. La autorización concedida a Colón en 1497 para repartir tierras de la Española (Cuba), posteriormente, sería tomada como modelo para pautar repartimiento de tierras mediante mercedes que se harían en futuras entradas.

La fórmula de concesión real de tierras era más o menos expresa

“Abiendo visto este pedimento presentado por Don (...) Sele ase Merced del pedasso de las tierras contenido en su pedimento debajo a los linderos mecionados, del qual abiendo enterado el derecho dela media nata a fassion del Theniente Thessorero Jues ofisial dela Real hacienda dela dicha Ciudad dela Rioxa, y ora de otra manera; las Justicias de ella le daran y aran se le den la posesión delas dichas tierras conforme a derecho y dadas no consentiran Sea desposeído sin primero ser oído y por fuero.”¹⁴⁰

Toda merced de tierra (o de encomienda) dada en el Nuevo Mundo adquiriría su forma legal a través del auto expedido por la autoridad competente —en este caso del gobernador— que se entregaba al beneficiario para que pudiese justificar su posesión. La entrega la realizaba el “justicia” de la jurisdicción pertinente, previo informe favorable del tesorero real. Este documento, similar en las diferentes regiones indianas,

¹⁴⁰ AJLR, A-395, s. f.

no tuvo una uniformidad a lo largo del período colonial, pues si en un principio los autos eran cortos y escuetos, poco a poco se fueron ampliando, al agregársele —como consecuencia de la progresiva legislación toledana— diversas cláusulas o apartados, tales como las concesiones de a título oneroso que fueran instruidas por el virrey Toledo desde 1568.

§ 5.1.3. —EL ORIGEN LEGAL DE LAS MERCEDES DE TIERRAS.

Contextualmente inmersa en medio de la tarea colonizadora del Nuevo Mundo, la primer merced de tierras se sitúa en La Española, en la región de Antillas caribeñas, primer asentamiento efectivo del colectivo hispano en suelo americano¹⁴¹ y data de la carta patente que los reyes otorgaron a Cristóbal Colón, el 22 de julio de 1497, en Medina del Campo, autorizándolo a dar y repartir a cada vecino de la isla española,

“...Las tierras e montes e aguas....para que aquello haya e tenga e posea por suyo e como suyo, e lo use e plante e labre e se aproveche dello, con facultad para poder vender e dar e donar e trocar e cambiar, e enagenar e empelar e façer dello e en ello todo lo que quisiere e por bien tuviere, como de cosa suya propia habida de justo e derecho título, obligándose las tales personas de tener e mantener vecindad con su casa poblada en la dicha isla Española por cuatro años primeros siguientes contados desde el día que les diéredes e entregáredes las tales tierras e haciendas”

142

¹⁴¹ Históricamente la merced de tierras es de origen penínsular o ibérico (OTS CAPDEQUI, SALUSTIANO DE DIOS, ZAVALA, MARILUZ URQUIJO) emparentada con la conquista de bienes raíces musulmanes y fundamentada en el derecho común de conquista. Al respecto, véase a Miguel Ángel LADERO QUESADA, “Mercedes reales en Granada anteriores al año 1500”, *Separata de HISPANIA*, núm 112 (1969), 385-424. Para una actualización del tema de las mercedes en un contexto europeo de colonización castellana de tierras antes musulmanas, véase a Jose LÓPEZ de Coca CASTAÑER, “Tenencia de fortalezas en el Reino de Granada”, en Jose TORRES FONTES, *Homenaje al profesor José Torres Fontes*, ed. EDITUM, tomo 2, Murcia, 1987, 931-952.

¹⁴² Martín de FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, *Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, con varios documentos inéditos concernientes a la historia de la marina castellana y de los establecimientos españoles*, Madrid, Tomo II, *Documentos de Colón y las primeras poblaciones*, 215-216, ed. Imprenta Real, 1825. Silvio Zavala, en., *Estudios Indianos*, México, edición de El Colegio Nacional, 1948, 214, ubica en esta disposición real el origen de la concesión de mercedes en América.

La merced de tierras nacía como entidad jurídica diferente de la merced de encomienda. Se componía, según lo leído, de un justo título en el que se señalaban las obligaciones comunales del vecino a cambio del *dominium* que el poder regio concedía. La *facultas* concedida a Colón se traslada a virreyes, audiencias, gobernadores y cabildos, incluso se faculta a titulares de mercedes a entregar nuevas mercedes como en el caso de Nueva España

“...atento a lo que del resulta por el presente concedo a vos el dicho Capitán Alonso de Tovar y en nombre de su majestad repartáis a los pobladores de la dicha villa de cadeita solares para edificar sus casas y tierras para el lavor, y crianza de ganado en la forma y cantidad que se dispone por la real Provisión de poblaciones dadas en Segovia en trece de julio del año mil quinietos y setenta y tres y sean en los límites de quatro legua en contorno sin embargo de las diez leguas que nos dieran y señalaron de jurisdicción (...)”¹⁴³

Tal como señala Mariluz Urquijo, en los preparativos del primer viaje colombino se tuvo en cuenta la posibilidad de conseguir metales preciosos y otros bienes negociables, si bien no se previó el modo de utilización de la tierra a la que se arribaría. “Es solo a mediados de 1497 cuando una real provisión faculta a Colón para repartir tierras en la isla Española en propiedad (...) y desde entonces la tierra del Nuevo Mundo fue para la Corona un medio para lograr el arraigo de la población y para sustentar la expansión de la colonización”¹⁴⁴. La concesión de ésta fue modelo de repartimiento a pautar con los conquistadores y vecinos que estarían a cargo de las nuevas ‘entradas’¹⁴⁵.

¹⁴³ ARCHIVO HISTÓRICO DE QUERÉTARO, *Merced Otorgada al Capitán Alonso de Tovar Guzman Para la Fundación de Cadereita en 1748* (sic), México, ed. Vargas Rea, 1945, 14 y 15 [El año de la fundación oficial de Cadereita –1748- no coincide con el del documento, fechado en la ciudad de México “a diez y seis de febrero de mil seis cientos y cuarenta y un años”].

¹⁴⁴ José MARILUZ URQUIJO, *El régimen de la tierra en el Derecho Indiano*, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Instituto de Historia del Derecho ‘Ricardo Levene’, Lecciones de Historia Jurídica, ed. Perrot, 1968, 18.

¹⁴⁵ La capitulación entre Carlos V y Pedro de Mendoza (1534) dice “*Concedemos a los dichos vecinos y pobladores que les sean dados por vos [Pedro de Mendoza] los solares en que se edifiquen casas y caballerías y aguas convenientes a sus personas conforme a lo que se ha hecho y se hace en la Isla Española*”, en José TORRE REVELLO, *Documentos Históricos y Geográficos relativos a la conquista y colonización rioplatense. Con introducción de Revello*, Buenos Aires, Comisión Oficial del IV Centenario de la 1º Fundación de Buenos Aires, 1941, Tomo II, 43. Idem en la capitulación entre Ramírez de Velasco en nombre de Felipe II y Blas

“*Justo e derecho título*” entregaban en merced los reyes para que “*tenga e posea por suyo*” los vasallos estos bienes, por lo que los nuevos *dominii* eran portadores del triunfo de la soberanía individual del mercendero y nuevo titular, por lo que, podían vender, dar, cambiar, “*enagenar*”, “*empelar*” y “*façer dello e en ello todo lo que quisiere*”, y transforma al documento en una verdadera sustanciación de dominio útil de ese vasallo sobre la cosa inmueble y otorga al título máxima fuerza potestativa en el ordenamiento estatal del antiguo régimen.

§ 5.1.4. — VESTIMENTUM O TOMA DE POSESIÓN O PUESTA EN POSESIÓN.

Considerado como una simple formalidad por la tradición doctrinaria moderna después del siglo XIX, el *iure indianun* por el contrario, consideraba el acto o auto o toma o puesta en posesión como una promulgación y aceptación del pueblo súbdito y prueba la asociación entre el peticionante, el *autorictas* que lo promulga (el rey y su legitimidad) con una voluntad general indisociada a la *testimonianza* de los vecinos testigos y el no “contradijo” (u oposición) por ningún derecho vulnerado.

El acto de entrega culminaba el oficio procesual y como afirmamos más arriba, la autoridad distrital —“justicia”, alcalde mayor o el de hermandad, corregidor o sus tenientes de gobernador o escribano o vecino que sepa leer y escribir— entregaba la tierra al beneficiario via una interposita persona (vecino, comisionado, “*quien sepa leer y escriuir*”); quien tomaba oficialmente posesión de ella y, delante de testigos, realizaba una ritualidad de orígenes medievales consistente en beber agua, tirar piedras y arrancar

Ponce (1591) “*El segundo: que assi mismo, su señoría me ha de dar poder para repartir solares, quadras, Huertas, chacras, estancias y caballerías, y su Señoría me ha de dejar en la dicha población toda la más gente que pudiere pa pobladores y sustentadores, gente de guerra, buenos soldados.(...) El tercero: que su señoría me ha de hacer merced en nombre de su Magestad el Rey Don Felipe nuestro Señor, de más del repartimiento que en su real nombre tengo en esta ciudad, de darme y encomendarme otro repartimiento en términos de aquella ciudad, en el cual entren valles, pueblos, Caziques e indios(...) Cuarto: que su señoría me ha de hacer merced en el dicho nombre, de dar como ha quatro pobladores, quatro suertes de tierra, solares, huertas, viñas, Estancias y caballerías, dándomelas por servidas, y una parada de molino en la ciudad, y mas cercana, y en los asientos de mina otra, o en las tierras que se sembrare, paellas, y en las tierras para sementeras de minas otras quatro suertes.*” En Juan J ROMERO, Dardo DE LA VEGA DÍAZ, Rafael TORRES y Juan C. GÓMEZ (comps.), *Recopilación de documentos relativos a la fundación de la ciudad de La Rioja*, ed. Talleres Gráficos del Estado, La Rioja, 1938, 14 y ss.

hierbas. Este ritual presentaba tanto una acción afirmativa como una definición religiosa —tal como lo ha estudiado Gabriel Guarda¹⁴⁶— lo que se verifica en varios puntos de las Indias como, por ejemplo, Nueva España donde un ungido mercendero de tierras en el tardío 1743,

“En virtud de lo mandado en el auto que antecede cogió de la mano a don (...) Y el dicho Francisco Esteban de Oriñuela se paseó por dichas tierras y de ellas arrancó hierbas e hizo otros actos de verdadera posesión”¹⁴⁷

Situación ésta que se reproduce por razones diversas -aunque con un parecido notable- en la jurisdicción de La Rioja del Tucumán, ámbito de nuestro estudio, cuando se pone en posesión a Nicolas Peñaloza (padre del “caudillo” independentista Chacho Peñaloza) en la merced de *La Hediondita* en 1806.

“Yo (...) y en presencia de los testigos quel presente fueron ala operación, tomé de la mano a Don Nicolás Peñalosa lo pasié em aquel lugar denominado el Portezuelo y puse en posesion real, actual, corporal *Jure dominii vel quasi*, y en señal de haberla tomado, bebió agua arrancó muchas yerbas tiró piedras asiendo otras demostraciones de dueño y señor absoluto la qual la dí yo y el la tomó”¹⁴⁸

A escala local, aunque de menor entidad, este procedimiento es un reflejo de los ceremoniales y tomas de posesión definitivas realizadas por los gobernadores

¹⁴⁶ Gabriel GUARDA, “Tres reflexiones en torno a la fundación de la ciudad indiana”, en Francisco DE SOLANO (coord.), *Estudios sobre la ciudad iberoamericana*, Madrid, CSIC, Instituto Fernández de Oviedo, 1975, 89-106.

¹⁴⁷ ACDR, Mayorazgo de La Llave, vol. 4, II, 138, en Francisco DE SOLANO, “Selección documental sobre el régimen de tierras, 1509-1813”, en, *Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala*, Guatemala, ed. Universidad de San Carlos, 1973, 445. El Archivo General Agrario de México cuenta con un grupo documental histórico constituido por una variedad de expedientes pertenecientes tanto al periodo virreinal como al siglo XIX y a los primeros años del XX. Véase algunas transcripciones de mercedes de tierras y contienen valiosa información sobre diversas formas de tenencia de la tierra, sus conflictos y además han tenido un importante papel en los procesos agrarios iniciados por los pueblos. En Regina OLMEDO, *El grupo documental histórico del Archivo General Agrario*, en <http://207.248.180.194/bibdf/ran/agaweb/paginas/01-07.htm>; y http://www.queretaro.gob.mx/nuestro_edo/info_gral/Queretaro/historia.htm (Consultado el 25/07/2009)

¹⁴⁸ AJLR, F-5, Caja “campos”, fol. 94.

tucumanos al fundar las ciudades y establecer nuevas jurisdicciones. Gestos tales como los de cortar ramas y beber agua indicaban la definitiva posesión del espacio al tiempo que señalaban la preeminencia de la función como funcionario del soberano en cuyo nombre actuaban; tal como lo hiciera Ramírez de Velasco en 1591 previo a plantar el árbol sin ramas que indicaba el sitio donde se administraría públicamente justicia como acto de ejercicio del *imperium* y la soberanía de Su Majestad.

Esto legitimaba, como veremos, la distribución de derechos que regulaba el acceso a los recursos realizada en nombre del Rey como señor eminente de dichos recursos, ejecutándose formalmente delante de testigos al tiempo que era afianzada por autoridad de un escribano de gobierno que la legalizaba¹⁴⁹.

La referencia a la posesión (el término *possessio* y *possessiones*) nunca faltó en la documentación medieval dirá Conte¹⁵⁰. Y, de hecho, se encuentra repetido un número extraordinariamente alto de veces en la documentación privada ya que con él se calificaban los bienes detentados a cualquier título, como a modo de ejemplo los actos de transferencia de bienes *inter vivos*¹⁵¹. Bastaba que quien se declaraba expoliado pudiese demostrar haber sido *vestitus* de un disfrute, sea esta merced de tierras, incluso de encomiendas¹⁵².

¹⁴⁹ Francisco MORALES PADRÓN, “Descubrimiento y toma de posesión”, *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, 1955, vol. XII, 321-380.

¹⁵⁰ Emanuel CONTE y Marta MADERO, *Procesos, inquisiciones, pruebas: homenaje a Mario Sbriccoli*, ed. Manantial, Buenos Aires, 2009, 250.

¹⁵¹ Vid ej. Venta del Potrero de Mariana del Moral a Benito Nina y Manuel Mercado año 1845, *AEHR*, *Protocolo Gaspar Villafañe 1845 y Blas Gonzales 1848-51*, f. 8.-12 *vt*a “teniendoles presente en nombre de la Patria Les di la publica posession q’ previene el dñō, Jure Domini vel quasi, la que aprehendieron y tomaron en un dia claro y sereno horas dies de la mañana” , en Apendice Documental Q, aquí transcripta en p. 589 y ss..

¹⁵² “D. Bartolome de Olmos Aguilera con este titulo de encomienda ante ellas le den y hagan dar La possession de los dhos yndios *Real Corporal*, actual, *iure domini*, vel quassi, y valga aunque le sea dada en un yndio, en vos y en nombre de ..” en *Revista del Archivo Histórico de Córdoba*, Números 1-2, 1944, Córdoba (fs. 179) [p. 65].

5.1.5. EL GRAVAMEN DE LA MEDIA ANATA

En el procedimiento y diligenciamiento previo a que culminase la concesión del sitio peticionado, las titulaciones de tierra tuvieron que cumplimentar el pago de una carga impuesta al predio que se establecía sobre la base de la estimación porcentual del beneficio anualizado a futuro que obtendría el nuevo mercendero. Según Ots Capdequí, la anata era “un impuesto directo, de carácter personal, [en] pago de los beneficios de medio o de un año, que había de satisfacer el que se veía agraciado con la concesión de algún oficio público”¹⁵³. La media anata venía a sustituir a la mesada establecida sin éxito en 1625 y fue decretada el 22 de mayo de 1631 pasando a integrar el sistema rentístico indiano, y es, para el tratadista indiano Joseph de Rezabal y Ugarte, parte de “los alimentos que ministra la República al Príncipe, para que sostenga la suprema representación con que se halla condecorado”¹⁵⁴.

Su exacción estuvo a cargo del funcionariado estatal —que podía ser el tesorero de la caja real de la jurisdicción donde se radicaba el bien o un asesor de la audiencia o del delegado o subdelegado de la superintendencia de composición de tierras¹⁵⁵ o el responsable de las “Rentas Reales” o de la “Contaduría General”—, calculaba el impuesto en entre el 2% y el 7% de la valuación de la tierra y que teóricamente, correspondía a la mitad del beneficio monetario que ella le proporcionaría en un año y

¹⁵³ J. OTS CAPDEQUÍ, *El régimen...*, 58.

¹⁵⁴ Joseph de REZABAL Y UGARTE, *Tratado del real derecho de las medias anatas seculares y del servicio de lanzas a que están obligados los títulos de Castilla. Origen histórico de este juzgado en el reino de Perú...*, Madrid, ed. [en la oficina de] Don Benito Cano, 1792, Colección Clásicos Tavera: Obras seleccionadas, *Textos clásicos de Literatura Jurídica Indiana (I)*, ed. Fundación MAPFRE- Fundación Histórica Tavera-Digibis Publicaciones Digitales, Serie II, Vl. 15, 1999, CD-ROM. También recogido por Alberto D. LEIVA, “La aplicación de la media anata en el Virreinato del Río de La Plata”, en *REVISTA CHILENA DE HISTORIA DEL DERECHO*, núm 13, Santiago, 1987, 21.

¹⁵⁵ Sobre la figura de “Superintendencia de Beneficio y Composición de Tierras”, véase § 14.1 “Atiles”, nota al pie núm. 458, p.253 del presente trabajo. Francisco DE SOLANO, es quien mejor a tratado el medio siglo de pervivencia de ella, véase, “El juez de tierras y la superintendencia del beneficio y composición de tierras”, *Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano*, Vol. IV, Quito, 1980, 347-358.

debía enterar en una sola paga todo lo reclamado¹⁵⁶. Conjuntamente con los oficios públicos, se debía tributar la media anata por las mercedes de tierra y de encomienda¹⁵⁷.

A partir de los ejemplos que presentaremos a continuación referidos a la merced de Ulapes, en La Rioja peruviana, y la merced de Tampochucho, en la Mextitlán mexicana, será posible presentar las similitudes del acto tributario en el Orbe indiano:

*“En la ciudad de La Rioja en diez y seis días del mes de Setiembre de mil seiscientos y nobentta y siete años Yo el Theniente Juan Clementte de Andrada, Theniente thessorero Juez Oficial de la Real hacienda me ago cargo de tres pessos corrientes de ocho rreales que dicho dia entero en esta Real Caxa de mi cargo Don (...), por un título de Merced de una aguada llamada Vlape con otras leguas de tierras en conttorno las quales se abaluaron por personas de mi satisfacción en siento y sinquenta pessos y por ellos pagó dichos tres pesos”*¹⁵⁸

Esto supone, entre otras cosas, una movilidad del expediente debido a que la petición se dirige en Córdoba, la adjudicación en San Miguel y la tasación y pago en la Real Caja de hacienda de la jurisdicción de La Rioja, que dependía de la Real Caja de Potosí. Del mismo modo, en el ejemplo siguiente será posible observar cómo la petición al virrey de Nueva España se realiza en México mientras las tierras se solicitan en Mextitlan.

“En venticuatro días de noviembre de 1739 don (...) quién el Excmo virrey sé sirvio adjudicarle unas tierras realengas nombradas Tampochucho, en la Jurisdicción de

¹⁵⁶ Alberto Leiva ha sido quien a resaltado la características de la modalidad indiana de la media anata en especial para la Contaduría de Buenos Aires, las fuentes invocadas y los oficios y gracias honoríficas y el peso del “ejemplar” es decir, como el encargado del ramo tomaba en cuenta precedente del mismo oficio para el calculo del monto a tributar, véase A. LEIVA, *La aplicación de la media anata*, 25 y ss.

¹⁵⁷ Para las cargas “generales” véase a Ricardo LEVENE, *Investigaciones acerca de la Historia económica del virreynato del Plata*, ed. Librería el Ateneo, Buenos Aires, 1952, t. II, 211 y ss. Y sobre el peso del gravamen en la mercedes de encomiendas del Tucumán, Adolfo GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *La encomienda en el Tucumán*, ed. Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1984, 183 y ss.

¹⁵⁸ AJLR, “F-5”, fol. 406.

Mextitlán, cuyo valor se le dio de 150 pesos. Enteró en la Real Caja de esta corte el real derecho de media anata siete pesos y cuatro tomines”¹⁵⁹

La tierra era tasada y su anata incorporada, en metálico, a la unidad del sistema fiscal colonial que era la caja real, oficina responsable de la recaudación y registro contable de los ingresos proveniente de los impuestos. La media anata no deber ser entendida, a partir de la afirmación de Ots, como gravamen proveniente de un oficio público (“la anata” también era el tributo de la mitad del salario durante el primer año de cualquier nuevo cargo de la administración civil o religiosa) sino, como vimos, de las tierras realengas otorgadas en merced¹⁶⁰.

Por último, no existen investigaciones cuantitativas que nos permitan establecer la incidencia de la anata de tierras en los ingresos totales provenientes de las Indias¹⁶¹. Sin embargo, sobre la base de las fuentes consultadas es que la media anata haya sido una de las menores fuentes de ingresos fiscales¹⁶².

Una caja real era, básicamente, un libro contable donde se asentaban los depósitos y extracciones de valor no siempre monetario sino también en especie. Su registro anual por parte de un funcionario nos brinda una excelente oportunidad de conocer mucho más acerca de las relaciones personales y interpersonales a nivel local y *ciudadano*.

¹⁵⁹ AGNM, Tierras, vol. 2255, citado en Francisco DE SOLANO, *Cedulario de tierras...*, 409.

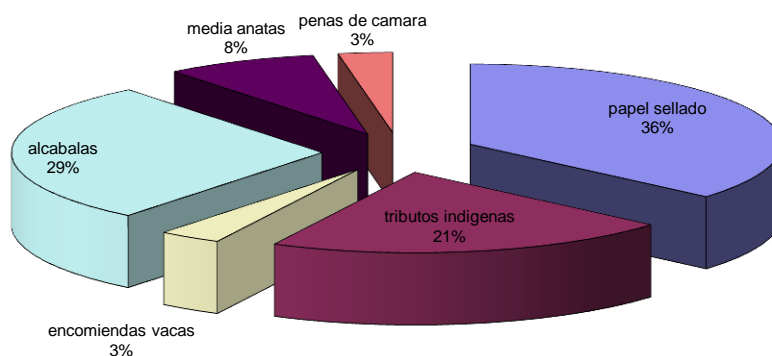
¹⁶⁰ Según Vicente D. SIERRA, la media anata o anata era “*una imposición general a las gracias o mercedes que dispensaba el Soberano para que se le descontase la mitad de los productos de un año a beneficio del erario*”, en *Historia de la Argentina 1492-1600 y 1600-1701*, 2 tomos, ed. Unión de Editores Latinos, Buenos Aires, 1957, t.1, 211.

¹⁶¹ “*Desgraciadamente, resulta muy difícil realizar el análisis de la aplicación general y local de la política impositiva sobre la tierra, al carecer de documentación susceptible de seriar y sistematizar al respecto*”, Francisco RUBIO DURÁN, *Tierra y ocupación en el área surandina*, ed. Aconcagua, Sevilla, 1997, 170.

¹⁶² “*Las principales fuentes de ingresos estatales provenían de los derechos que pagaban la producción de metales (quintos y diezmos, tres por ciento del oro, ensaye) el comercio internacional y local (el almojarifazgo y la alcabala respectivamente) y el tributo que pesaba sobre la masa de la población indígena. Los impuestos eclesiásticos (...) Finalmente estaban los ingresos provenientes de los monopolios controlados por el estado como la venta de nieve, sal, naipes, papel sellado, tabaco, mercurio.*”, Vilma MILLETICH, “El régimen de la producción en la Economía Colonial”, en E. Tandeter (comp.), *Nueva Historia Argentina*, tomo 2, El sistema Colonial, ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2000, 221.

Tal como manifiesta Rubio Durán, “es difícil realizar un análisis de la aplicación general y local de la política impositiva” ante la inexistencia de documentación serial. No obstante, hemos obtenido del Archivo General de la Nación (Argentina) unos libros de caja de la Rioja que hemos podido seriar de 1749 a 1768¹⁶³.

Graf. 3 : Distribución bruta de los ingresos de la Real Caja de Hacienda de la Jurisdicción de La Rioja. 1749-1768, por ramo y en porcentajes



Fuente: AGNA, Colonia, Sec. Contaduría, XIII, 12, 9,4

¹⁶³ Archivo General de la Nación, División Colonia; Sección Contaduría; Sala XIII, Cuerpo 12, Anaquel 9, Numero 4 (de los años 1749-1768). En adelante se citará la documentación del Archivo General de la Nación Argentina indicando la sección, sala, cuerpo y número, vg. AGNA, XIII, 12, 9, 4.

Un minucioso análisis de sólo dos décadas de registro de la caja real de La Rioja, nos indica que la media anata de mercedes de tierras representó el 8% promedio de todos los ingresos provenientes de la recaudación regalista de esa jurisdicción citadina, entre los años 1749 y 1768. Por cierto, el referido promedio, no es el ítem más importante por cuanto la principal fuente de ingresos tributarios del periodo siguió siendo, según los “ramos de hacienda”, la venta de papel sellado con el 36%, las alcabalas (“*el ramo de alcaualas por las ventas de los efectos de la tierra y de castilla*”)¹⁶⁴ con el 28,57%, siguiéndole en tercer lugar los tributos indígenas con el 21% y, en cuarto, la media anata de mercedes tierras con el 7,39%. Por último, están los ingresos de los ramos de las “encomiendas vacas” por el 3,26% y las penas de cámara con el 2,8%¹⁶⁵.

En síntesis, puede afirmarse que el gravamen de la media anata que pesaba sobre las mercedes de tierras, representaba, a más de 150 años de la fundación de la ciudad de La Rioja, menos del 10% de sus ingresos constantes. Si se tiene en cuenta que la media anata de la merced de tierra de naturaleza unitaria en el Derecho Tributario Indiano —a diferencia de tributos anuales de los indios “de tasa” o al comercio o alcábalas— consistía en un pago único que los sujetos debían abonar al Estado, es posible hacerse una idea de la magnitud de los bienes territoriales regalistas todavía disponibles.

¹⁶⁴ Alcabala, “Lleva este nombre el derecho que se cobra sobre el valor de todas las cosas muebles, inmuebles y semovientes que se venden, ó permutan”, en José Canga ARGÜELLES, *Diccionario de Hacienda, con aplicación a España*, ed. Imp. M. Calero y Portocarrero, Madrid, 1833, 24.

¹⁶⁵ AGNA, XIII.12.9.4. Para la sistematización se han tomado los recaudos de excluir los elementos discontinuos como los ingresos ocasionales de cargos civiles o eclesiásticos vacantes y las remisiones de otras ciudades. Un estudio más profundo debe evaluar también los egresos de enteros hechos a otras cajas reales, a industrias como las de “sisas”, y los “gastos de guerra” para dar cuenta de la magnitud de la complejidad del Derecho Tributario Indiano.

SEGUNDA PARTE

**Tierras en nombre del Rey: De una ciudad del Antiguo Régimen a las mercedes
patriales del derecho patrio, La Rioja 1591-1861.**

§ 6 PROVINCIA DE LOS JURIES, NUEVAS JURISDICCIONES, NUEVOS ENSAYOS POLÍTICO POBLACIONALES

En América, los españoles se encontraron con sociedades indígenas complejas¹⁶⁶ que mostraban un avanzado proceso de urbanización. Aprovechando estos centros urbanos, los conquistadores se asentaron sobre ellos transformando la función del espacio e incorporando nuevas técnicas de construcción, usos y hábitos culturales. En casos notables de continuidad urbanística como Tenochtitlán y Cuzco, capitales de la confederación azteca y del *tawantisuyu*, tras ser ocupadas militarmente, sus espacios y edificios públicos y privados fueron repartidos e impuestos de los símbolos cristianos sobre la simbología aborígen. En las regiones deshabitadas o recorridas tanto por pueblos nómades cuanto por seminómades, la situación fue distinta¹⁶⁷. En el actual territorio argentino, los españoles no encontraron ciudades ni poderosos conglomerados indígenas, como los hallados en su avance por México o por Perú. En la Provincia “del

¹⁶⁶ “(...) varios señoríos y estados de diversos grados y complejidad pueden verse durante este tiempo a lo largo de la costa del Perú; por ejemplo, Chimu, Chancay, Huanco, Chíncha, Ica, y en las tierras altas, Cajamarca, Wancaní, Collao, Huamachuco, Conchudos, Huaylas, Huánuco y Ocros. El altiplano boliviano estaba habitado por grupos muy diversos, Canas, Canchis, Colla, Lupaca, Pacaje, Caranga, Quillaca, Caracara, Charca, Chuis y Chie. A finales del siglo XIV y principios del XV, los señoríos y estados del Perú y Bolivia cayeron bajo el estado expansionista incaico, al igual que aquellos de Argentina (Amaguaca, Apatama, Diaguita, Capayán) y del norte de Chile (Arica, Pica, Atacama y Diaguita). El dominio de los incas al momento de la llegada de los españoles incluía las regiones montañosas de Ecuador, todo Perú y Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina. Se calcula que la población del imperio en esa época iba de 6.000.000 a entre 9.000.000 y 15.000.000 (cifra actualmente mas aceptada) hasta un máximo de 37.500.000. (...) El estado incaico estableció centros administrativos regionales y provinciales, construyó caminos, acueductos, canales de irrigación y centros ceremoniales, (...) desarrollo interno, de migraciones y contactos interculturales (...) Si bien el empleo intensivo de la mano de obra era esencial para sostener a la población en general, también se canalizaba a la construcción de ciudades, caminos, almacenes y otras obras públicas, así como la construcción y mantenimiento de monumentos, tumbas y pirámides” en Juan VILLAMARÍN y Judith VILLAMARÍN, “El trabajo indígena, su papel en la organización social y política prehispánica y colonial”, en Marcelo CARMAGNANI, Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ y Ruggero ROMANO (Coords.), *Para una historia de América III. Los nudos* (2), ed. F.C.E. –Fideicomiso Historia de las Américas- El Colegio de México, México, 37 y ss.

¹⁶⁷ Nidia ARECES, “Las sociedades urbanas coloniales”, en *Nueva Historia Argentina*, Tomo 2. “La Sociedad Colonial”, Buenos Aires, Director Enrique Tandeter, ed. Sudamericana. 2000, 147-187.

Tucumán, Juríes y Diaguitas”, integrante de la Audiencia de Charcas ¹⁶⁸, los colonizadores, tuvieron que reconocer, ponderar y aceptar nuevos hábitats a los que, nostálgicamente, nombraron haciendo referencia a los dejados tras de sí, en su vieja patria: Todos los Santos de la Nueva Rioja, Santiago de la Nueva Extremadura, Córdoba de la Nueva Andalucía, San Francisco de la Nueva Provincia de Álava, San Clemente de la Nueva Sevilla, etc.

§ 6.1. —EL EVENTO FUNDACIONAL EN SÍ

La fundación de La Rioja (ciudad y jurisdicción) es un acontecimiento que puede ser abordado desde múltiples dimensiones. Una de ellas es la legal: Juan Ramírez de Velasco, Gobernador del Tucumán, en uso de sus funciones y misiones, en nombre del rey, funda la ciudad el 20 de mayo de 1591 y ordena a su escribano la certificación de tal hecho en un documento público que ha llegado hasta nuestros días ¹⁶⁹.

El mismo acto fundacional es un evento que, visto desde el punto de vista institucional, reviste mayor trascendencia desde la perspectiva jurídico-legal en sentido estricto ¹⁷⁰. El estudio de las instituciones que genera este acto de creación, en sí mismo, requiere de un análisis de datos y fuentes ajenos al orden normativo ¹⁷¹.

¹⁶⁸ Por orden real ampliando los límites y el distrito de la Audiencia de Charcas, e incluyendo entre otras tierras las de Tucumán Juríes y Diaguitas que se apartan de la Gobernación de Chile, véase la Real Provisión, fechada en Guadalajara del 29 de Agosto de 1563, citado en R. LEVILLIER, *Guerras y Conquistas en Tucumán y Cuyo, 1554-1574*, Buenos Aires, Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino ‘La Argentina en el Siglo XVI’, Talleres Gráficos Porter Hnos., 1945.

¹⁶⁹ AGI, Véase la transcripción literal en el Apéndice Documental C, p. 552.

¹⁷⁰ La fundación, como acto formal-legal, de ciudades hoy inexistentes como Londres, Esteco o San Clemente de la Nueva Sevilla, son intrascendentes desde el punto de vista histórico.

¹⁷¹ A. García Gallo plantea que para llevar adelante el estudio de las instituciones de derecho indiano es necesario examinar fuentes y recogida de datos que no son necesariamente ordenamientos normativos. “*Dar respuesta a aquellas cuestiones que, inicialmente o a lo largo de la investigación, se han planteado sobre las instituciones, provocando ésta, supone haber examinado las fuentes y recogido los datos que en ellas se encuentran. Es evidente —continúa este autor— que esta respuesta no se dará, o sólo en contados casos, limitándonos a reproducir o extraer las disposiciones legales o los datos recogidos. Este método,*

Dicha trascendencia está dada en el hecho de que se funda, no sólo en un emplazamiento urbano, sino que se presenta como una nueva ciudad-estado hispana que introduce, en un medio hostil y ajeno, instituciones tales como su lengua, religión, etc¹⁷². Como todo acto fundacional requiere de la existencia de una “política”, en este caso de poblamiento, de la monarquía castellana, así como de la capacidad o del poder institucional como para llevarlo a la práctica, traducidos en un conjunto de requisitos tales como: una élite instruida y motivada, dinero para pagar la soldadesca, familias socias del emprendimiento fundacional, y tierras, entendidos no sólo como un lugar de extracción de recursos sino como un nuevo espacio de dominio. Esta élite, portadora tanto de una ideología cuanto del orden normativo propio –como fuera el derecho indiano- contaba con un centenio de experiencia (de *facto* e *iure*) respecto de la organicidad de la vida pública de esta nueva fundación, fundación de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, que sería comandada por un funcionario militar de la monarquía.

seguido por Ots Capdequí en sus diferentes manuales, resulta insatisfactorio”. Alfonso GARCÍA GALLO Metodología del la Historia.... 167.

¹⁷² En la tradición historiográfica rioplatense y a mediados del siglo XIX se produce un debate sobre la fundación de Buenos Aires, que transcurre en el periódico *Registro Estadístico* de 1859, (publicada bajo el mismo nombre, tomo 1), y que tiene como contendientes a Manuel Ricardo Trelles y a Pedro de Angelis. En el debate, el segundo afirmaba que no había existido una fundación previa por cuanto no se había documentado el establecimiento del árbol de la justicia, ni se dá el nombre de *Santa Maria del Buen Aire* ni se señalo los términos de la jurisdicción. Trelles polemiza con las fuentes y la parcialidad de los “traslados” de éstas, y la discusión se reconduce a qué es lo que se entiende por jurisdicción. Vicente Quesada, trae a discusión la comisión de Juan Ramírez de Velasco realiza a uno de sus tenientes para la fundación de San Salvador de *Jujui*. En esta, Quesada analiza exegéticamente la documentación y lista catorce puntos, que según el mandante Velasco, debe realizar su subordinado para que realice la fundación: 1) la comisión propiamente dicha [nombres de los comisionados, etc.]; 2) la orden de que elija un sitio; 3) que la ciudad se llame “Ciudad de Velasco”; 3) que señale la jurisdicción; 5) sobre la elección del cabildo y su juramento; 6) traza y planta; 7) sobre el reparto de tierras; 8) sobre el reparto de indios yanacunas, 9) que declare *vacas* a las tierras del valle de Jujui; 10) sobre el pregón en la ciudad de Salta; 11) sobre el auto de poblamiento; 12) sobre el nombramiento del escribano; 13) sobre la formalización del libro de cabildo; 14) y la fundación en sí misma, véase a V. QUESADA, “Actas de fundaciones de las ciudades capitales de Provincia de la República Argentina”, en *RdeBA*, tomo VII, 40-50, 1865.

El conquistador y jefe ya era gobernador de una ciudad cuya fundación y administración había sido exitosa en la guerra contra los indios Calchaquíes¹⁷³, llamada, como dijimos, del Tucumán Jurés y Diaguitas y que se asentaba con cabecera en la ciudad de Santiago del Estero. En ella, además, actuaba como jefe expedicionario de una empresa en la que participaban un financista, con quien había firmado una “capitulación”, un séquito administrativo y un grupo de familias totalmente motivadas que rendían la pleitesía del caso al representante legal y simbólico del rey, es decir, al “gobernador”¹⁷⁴ y jefe de expedición, el navarro Joan Ramírez de Velasco.

¹⁷³ Para información del lector, en este trabajo escribiremos: Calchaquies, al referirnos al heterogéneo conglomerado de “parcialidades” indias en el valle homónimo. Dirá Juan Ambrosetti,

“(…) tous les indiens qui avaient cette culture parlaient cette même langue, et du moment encore que d’elle nous ne connaissons pas même le plus simple vocabulaire? D’ailleurs le nom diaguita a été plutôt appliqué aux tribus de la province de Catamarca y La Rioja et pas, à ceux de Salta et Jujuy tandis que le mot Calchaquie a été donné à tous les indiens qui plus d’une fois se sont confederés dans les cent ans qui ont lutté contre les espagnols pour son indépendance et qui ont donné aux chroniqueurs l’idée d’appeler ces terribles guerres: Les guerres calchaquíes”, J. AMBROSETTI, *La question calchaquie et les travaux de la faculté de philosophie et lettres de L’Université Buenos Aires*, Viena, Separat-abdruck aus den verhandlungen des XVI Internationalen Amerikanisten-Kongresses, 1909, ed. A. Hartleben’s, 429-467. Una también heterogénea estructura política indígena, que, siguiendo una acertada definición de Cabrera, “es un *collubio gentium*, o sea un bloque de entidades étnicas distintas”, cfr. CABRERA, *Los Lules* (Comité científico internacional americano celebrado en Buenos Aires en ocasión del centenario de la Republica Argentina), ed. Establecimiento Tipográfico F. Domincini, Buenos Aires, 1910, 157. A modo de ejemplo, sólo en el actual Jujuy, el 15% de lo que entonces era la gobernación del Tucumán intervinieron los Chiriguano, “*omaguacas, pomamarcas, oloyas, yanapatas, lules y otras naciones que thenian ocupado el paso e comercio entre las dichas provincias del Tucuman y el Piru*” según Francisco Algañaraz, en LEVILLIER (1920, II, 512). Algunos describen a estas “naciones” sobre la base de la subjetividad propia de uno de los caciques rebeldes como Viltipoco (1595), donde conviven instituciones incaicas como la *mit’a* o el cultivo de tierras estatales por servicios de *mit’a* de pueblos cercanos. Los españoles y el propio derecho indiano se apropiaron de categorías jurídicas en donde los *mitimas* o *mitimaes* permanentes preservaban y reforzaban funciones sociales jerarquizadas como estamento propio. Véase a Nathan WACHTEL, *Les mitimas de la vallée de cochabamba. La politique de colonisation de Hayna Capac*, Journal de la Société des Americanistes, núm. LXXVII, Paris, 297-324. Y Ana MARÍA LORANDI, “Pleito de Juan Ochoa de Zárate por la posesión de los indios ocloas. Un caso de verticalidad étnica o un relicto del archipiélago estatal”, en *Runa*, Vol. XIV, Buenos Aires, 1984, 123-140.

¹⁷⁴ La “gobernación” de cada provincia estaba a cargo, normalmente, de un gobernador nombrado por el Rey. Éste cuidaba de la gobernación y de administración de justicia en lo civil y criminal en grado de apelación de los alcaldes ordinarios. Ninguna disposición general, ni tampoco en el análisis y transcripción de los títulos que se expide a los interesados, precisaban cuáles eran las competencias y/o atribuciones que correspondían a estos gobernadores. En principio han de ser las mismas que las ordenanzas castellanas de 1500 les confieren, solo que en este caso el territorio es mucho más extenso que las de los corregidores castellanos Peninsulares, y de hecho sobre cuestiones de población y repartimientos de tierras y encomiendas, que en estas nuevas tierras

Se organizó la ceremonia, los detalles jurídicos del caso, y se eligió el día. Conscientes de la trascendencia de la decisión, se buscó el mejor lugar del valle de Yacampis (pensemos que estamos hablando de una superficie grande que corresponde a la actual jurisdicción de Andalucía, España).

En este valle ya existía un poblado indígena que se dedicaba a la agricultura y a la producción de maíz, como lo hacían en toda la región andina los aborígenes de tradición altiplana. Digamos que ellos fueron los primeros desposeídos a favor de un nuevo colectivo. Si respetamos la tradición historiográfica de nominar al pueblo de indios con la designación toponomástica del lugar, podemos decir que el pueblo de indios Acampis o Yacampis perdió, en el acto de invasión, el *potere di godimento* o el dominio útil del valle, sus tierras y acequias. Doctrinariamente, la legitimidad de los nuevos ocupantes era, por cierto, muy sólida jurídicamente hablando. Los pueblos paganos, en el marco del *corpus indiano*, no tenían derechos. “El derecho indiano nace fiel a las prácticas y doctrina jurídica de la Europa del cuatrocientos. Por ello, conforme al *ius comune*, que inspira plenamente el Derecho de Castilla, no se reconoce capacidad jurídica a los pueblos paganos, y de acuerdo con el Hostiense se acepta la plena autoridad del Papa sobre ellos y su facultad de cederla a los príncipes cristianos”¹⁷⁵.

Tras el apresamiento del cacique del poblado de Acampie o Yacampis por parte de los españoles, se consumó la sustanciación de una regla común de decapitación efectiva de la forma de autoridad o gobierno pre-existente y su desestructuración, como paso necesario a la implementación efectiva del nuevo orden¹⁷⁶. Luis de Hoyos, partícipe y escribano (nos) cuenta:

“e caminanado de noche amaneció sobre las sementeras de los indios e se anduvo rastreando donde podría estar el pueblo [a fundar, n.d.r.] hasta las diez del día poco

tienen especial importancia. Véase Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ, *El Oficio de gobernador en el derecho indiano*, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene*. N°23, La Plata, 1972, 171-237.

¹⁷⁵ A. GARCÍA GALLO en “La evolución del derecho Indiano y sus fuentes”, en *Los orígenes españoles...* 265.

¹⁷⁶ Leslie BETHEL (comp) en *Historia de América Latina. La sociedad colonial*, ed. Cambridge University Press, 1987, y en la ed. Crítica, Barcelona, 1990, describe los procesos análogos de otras jurisdicciones latinoamericanas.

más o menos. Fueron presos muchos indios e indias y el cacique principal de ellos y se esperó la retaguardia hasta que otro día llegó”¹⁷⁷

Está probado que existió comunicación a través de intérpretes —con tradición en los *mitimaes* incaicos— que traducían del cacán al español, utilizando el quechua como puente. Por otra parte, el “requerimiento” no existía, desconociéndose las causas de ello.

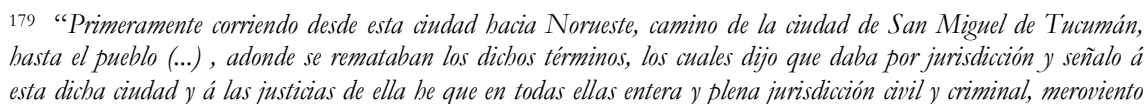
El millar de indios *yacampis* del poblado de Acampis no sólo estaba intimidado por los invasores blancos sino también por los 400 indios adultos “amigos”, como se denominaban a los mercenarios aborígenes, aunque pertenecieran a otras “naciones”; ellos acompañaron y sirvieron de mano de obra, de carga y de guerra, al evento español.

Entre la ocupación efectiva del territorio y la fundación pasaron algunas semanas. En esos días es muy probable que los arquitectos de la expedición hayan buscado el mejor emplazamiento¹⁷⁸, requiriendo siempre que el mismo estuviese ubicado frente al arroyo o al riachuelo que baja de la quebrada cercana. Se eligía el centro, a partir del cual se organizaba la traza, en papel, de *su echura en quadro*, de una extensión de nueve manzanas de este a oeste y de igual medida de sur a norte. Este cuadrilátero de treinta y seis *quadrás* “podía” subdividirse, a su vez, en parcelas.

El mismo día de la fundación, luego de la ceremonia, un escribano estableció los límites de la futura jurisdicción “corriendo desde el Norueste” y los demás puntos cardinales desde donde se “daba” por jurisdicción a la recientemente nominada

¹⁷⁷ AGI 34. Existe transcripción parcial en R. LEVILLIER, *Probanzas de méritos y servicios de los conquistadores Tomo 2 (1583-1600)*. Madrid. 504, y citado por Juan Alfonso Carrizo, *Cancionero Popular de La Rioja*, Buenos Aires. Tomo 1, ed. A. Baiocco y Cía. 1942. 66.

¹⁷⁸ “tratar aquí de apreciar en qué medida y de qué forma la ciudad castellana pasa al nuevo mundo, el examen de la misma se centrará (...) de modo especial a fines del siglo XV y primeros años del XVI”, por cuanto si bien se conoce por su lectura directa la *Recopilación de 1680* la precisa regulación de las Ordenanzas de 1573, Alfonso García Gallo señala que debemos “tener en cuenta que la misma (Recopilación) es tardía y que faltando con anterioridad normas suficientes, en la práctica las cosas no debieron ocurrir siempre de la misma manera”. No obstante, “(...) el Derecho urbanístico indiano, sino la ciudad misma americana, representa un avance considerable respecto al castellano”. Ya en las *Instrucciones* a los colonizadores Hernán Cortés precisaba el modo en que debían escoger los emplazamientos para fundar nuevas ciudades “Se ha de mirar que sean en sitios sanos y no anegadiços (...) Y que sean de buenas aguas y de buenos aires y cerca de montes y de buena tierra de labrança; y d’estas cosas, las que mas pudieran tener”. Véase, además de A. GARCIA GALLO, *Los orígenes españoles ...*, 1017. Al respecto, también el excelente trabajo de Javier AGUILERA ROJAS, *Fundación de ciudades hispanoamericanas*, Madrid, ed. Colección Mapfre 1492, 1994. 109-133 y 364-379.



(viene de la página anterior) Fuente: Traslado de la Cuadrícula de La Rioja, “*Este traslado lo saqué yo el Pr. Francisco José de la Gloria de uno que tiene el Vice Dr Miguel del Moral sacado por él (del) que se halla en Cabildo... Villa Argentina, Setiembre 20 de 1854*”, en Antoine ZINNY, *Escritos inéditos de Antonio Zinny el redactor del congreso nacional (1816-1820)*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones de la Sección Historia, N° X, ed. Peuser, 1921, lámina V.

Según el historiador González Iramáin, se procedió a la traza de la nueva población delimitando manzanas y la plaza con un surco practicado por un arado tirado de bueyes. Lo anecdótico esconde la acción fundacional y simiente de la estructura que todos los paradigmas historiográficos llamados “jurisdiccionalistas”: *Iuris dictio*, *misio in possessio*, *vestitutum*, inserto en un documento cuyo original esta en el Archivo de Indias: Luis de Hoyos, escribano de gobierno de Su Magestad relata...

“fue que su señoría poblase y fundase en este asiento la ciudad y que era bueno y buenas tierras acequiadas y había pasto y leña y agua y en comarca de toda esta prouincia y asi visto por su señoría lo susodicho a los veinte de mayo de este presente año saco el estandarte real de su majestad y puesto a cauallo el capitán don Joan Ramírez de Velasco alférez general de esta gouernación le tomo en sus manos y le acompañaron todos los capitanes y soldados deste capo armados a punto de guerra y saliendo su señoría con la dicha gente a cauallo dio una vuelta en redor de la plaza que auia de ser y auiendo llegado en medio della se apeo del dicho cauallo y tomo estandarte rreal de mano del dicho alferes general y le campeo tres veces diciendo España España España y estas prouincias y ciudad de Todos los Santos de la nueva rrioxa por el catolico Rey Don Felipe nuestro señor y en su real nombre hincó y mano hincar un árbol de madera por rrollo e picota diziendo ser tal arbol de Justicia civil y criminal con mero mixto imperio donde sea executada la rreal justicia y echo mano a su espada y dio ciertos golpes a unas ramas diziendo que en nombre de su majestad tomaua y aprehendia possesio de estas prouincias y de esta ciudad y la llamo y puso por nombre ciudad de todos Santos de la nueva rrioxa y efectho lo susodicho nombró alcaldes i regidores officiales rreales algualcil mayor y

Imperio, como por S. M. es concedido á los pobladores y lo firmo de (en) su nombre. —Juan Ramirez de Velasco.— Ante mí: Luis de Rios, escribano de Cabildo.” en M. REYES , 10.

*alcaldes de la hermandad y otros oficiales de republica y ante su señoría juraron a Dios nuestro señor de lo usar bien y fielmente”*¹⁸⁰

Fue entonces —continúa González Iramain— que “celebrada la Santa Misa quedó implantada en la agreste planicie diaguita nuestra actual ciudad capital, que era en aquel 20 de mayo de 1591 un simple campamento de soldados y colonos, rodeados por carretas, caballos, vacas, bueyes y ovejas traídos desde Santiago del Estero”¹⁸¹.

Más allá de lo que el enciclopedismo y las obras de divulgación nos ha resaltado de la expedición fundadora, se repite una ritualidad institucional de extrema importancia, que en nuestro estudio del orden normativo, está dado por la siguiente secuencia:

- a) se funda una ciudad,
- b) se establece su jurisdicción espacial (una nueva jurisdicción),
- c) se constituye un cabildo y,
- d) se reparten las tierras en solares y cuadras, mediante el otorgamiento de mercedes de tierras.

Esta secuencia no reviste un aspecto diferente al que ocurriera con un puñado de ciudades fundadas en este siglo en el actual territorio de la Argentina, Bolivia y Chile, pero es indudable que pocas veces un evento pre-moderno generó, por su simple realización —incluidos los aspectos jurídicos, simbólicos, honoríficos y de

¹⁸⁰ AGI, Sec. V, Charcas, 34. De este inapreciable documento guardado en el Archivo General de Indias es posible resaltar varios aspectos que van desde la *possessio*, el rito de las ramas y plantación del árbol de la justicia. No obstante hay un aspecto que no es formal-ritual sino que parece ser de contenido: y este es el pasaje, en la burocracia naciente, de la noción de conjuntos de reinos del “Perú”, “Castilla”, “Algeciras”, etc. de mediados del siglo XVI que a fines de ese se transforma en un unitario “España”. “*se apeo del dicho cauallo y tomo estandarte rreal de mano del dicho alferes general y le campeo tres veces diciendo España España España*” certifica Hoyos que dijo Ramírez de Velasco en 1591. Esta conciencia de *Hispania*, difiere de las anteriores invocaciones a la metrópoli, como las del caso de la jura de Felipe II en la plaza de armas de Cuzco del 8 de diciembre de 1557. En ella el corregidor “(...) *en la señal de dicha posesión; y manejó el caballo en que estaba con el dicho estandarte real, diciendo: Castilla Castilla Cuzco Cuzco Perú Perú, por el Rey don Felipe nuestro Señor*”, . Diego EZEQUIEL Y NAVIA, *Noticias cronológicas de la gran ciudad de Cuzco*, t 2, ed. Fundación Augusto Wiese, Lima. La cita es del t 1, Pág. 188.

¹⁸¹ Jorge GONZÁLEZ IRAMAIN, *Marco histórico*, en Beatriz Landeira de González Iramain *La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad de La Rioja*, La Rioja, ed. Canguro, 1997, 25.

resignificación de conductas colectivas e individuales—, tantas instituciones de derecho.

El escribano real Luis de Hoyos refrendó el acta del 20 de mayo de 1591 donde se designaba a los “Alcaldes y Regidores y otros oficiales de Cabildo y Justicia y de Su Majestad” que totalizaron catorce ciudadanos españoles, varones y partícipes de la expedición, donde se encuentran el procurador, el alguacil y el mayordomo de la ciudad, el tesorero “*de Su Magestad*.” Los restantes once oficiales más el gobernador, conformaron el cabildo. Y esa élite, compuesta por una docena de personas “de la mayor calidad”, reunida a la salida del oficio religioso, consensuaría el repartimiento de cuadras en cuyo centro estaban situados.

Ante este auditorio selecto, el gobernador Ramírez de Velasco desplegó la cuadrícula desde donde comenzó el repartimiento de tierras, generando las pautas iniciales de distribución del bien objeto de este estudio.

Puede decirse que, desde el punto de vista temporal, el nacimiento de la ciudad iba acompañado por el nacimiento del cabildo y de la propiedad de la tierra de jurisdicción de aquélla¹⁸².

En los días posteriores se tomaron las decisiones de implementación de nuevas instituciones del derecho indiano tales como las mercedes de encomiendas y se concluye con las pautas contractuales de la capitulación a favor del Blas Ponce¹⁸³.

¹⁸² “Lo que en España ha sido excepcional, la edificación total de una nueva planta de poblaciones que se crean — así, en Puerto Real y Monreal de Bayoma—, ya que en la mayoría de los casos se trata de constituir en consejo un grupo o comunidad que ya existente, de hecho es lo común en Canarias y en América. La llegada de los españoles a cualquier parte y su asentamiento en el territorio exigen, con la constitución jurídica de la población, la materialización de esta, trazando calles y estableciendo las bases de la edificación. Cuando la población se lleva a cabo en un territorio recién descubierto o no ocupado, a los actos fundacionales precede a veces la toma de posesión del lugar. La fundación jurídica y material del lugar suelen ir conjuntas, de tal modo que tras hacer pública el fundador su decisión de crear una población y darle nombre, toma posesión del lugar elegido para ella, alza en lo que va a ser su plaza un madero a manera de royo y símbolo de jurisdicción —‘árbol de justicia’ lo llama Valdivia—, esboza el trazado o planta, forma la relación de vecinos, procede a efectuar los primeros nombramientos para desempeño de los oficios y a repartir solares para vivienda, tierra para el cultivo, y en su caso, en América, indios en encomienda. De todo lo cual se levanta acta solemne por escribano público”. Véase Alfonso García-Gallo, *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. La ciencia Jurídica en la formación del derecho hispanoamericano en los siglos XVI al XVIII*, Madrid. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1992, 1246.

El nuevo carácter urbano y cuadrículo que la cultura española exportaba a América es uno de los principales elementos de reconocimiento del sistema colonial en el ámbito local. La ciudad, el centro del poder societario y asentamiento de una clase política, era una realidad colectiva nueva y una expresión de la organización administrativa, política y simbólica del territorio, poblado por una comunidad humana en un espacio delimitado. Sus miembros mantenían relaciones interdependientes regidas por instituciones tales como la iglesia, la familia, la vecindad y el derecho a la herencia y a la propiedad de tierras, entendidas éstas como solares o de pan llevar. Durante los siglos siguientes, la ciudad se erigió como el espacio desde donde se gestaba la dominación sobre el resto de la jurisdicción y de los elementos hostiles al nuevo orden, como lo eran los indios lugareños. Además, se vincularía con las otras instituciones (v.gr. las encomiendas) con primacía de la gradual complejidad del aparato administrativo y legal. En este caso, La Rioja, al igual que las otras ciudades de la Castilla Europea y del resto de Hispanoamérica, se ubicó en el sólido marco jurídico de la monarquía continental, atlántica¹⁸⁴ e imperial, encuadrada en las tradiciones de la península en el

¹⁸³ Dentro de la “*memoria del servizjo que yo (Blas Ponce) me obligo a hacer el Rey*” figura el aporte de 3000 pesos, carretas, familias, 3000 cabras y 2000 corderos, herrajes y la construcción de un fuerte en el nuevo asentamiento a cambio de ser designado maestre de campo por cuatro años, poseer encomiendas de 3000 indios y un veinte por cien de los que se repartiesen, además de disponer de la potestad de otorgar mercedes de solares y chacras, y otras privilegios de regalías de minas, nos da una magnitud de la “entrada” (campana expedicionaria) y del rol que ocupan los actores privados, en este caso concertando un contrato de capitulación que hemos transcrito íntegramente en el apéndice. Véase en el Apéndice, el documento núm. 2, .

¹⁸⁴ José María GARCÍA MARÍN, *Monarquía Católica en Italia: Burocracia imperial y privilegios constitucionales*, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, 19-121 nos aporta los elementos paradigmáticos del período diciendo “*Me parece que el imperio español tal como se perfila desde fines del siglo XV y hasta finales del siglo XVII, a pesar de su incuestionable carácter heterogéneo de sus componentes, ha de ser atendido como una unidad. Incluso en su doble condición de Monarquía Continental y Atlántica. (...) En efecto, en las diversas formas de autoritarismo de los reyes españoles se manifestó en América (extraordinaria expansión burocrática, imparable ascenso del prestigio internacional español, obtención de ingentes ingresos económicos, etcétera) hubo de tener un reflejo en la potenciación de los aparatos internos y externos de poder (...). El mantenimiento de este poder europeo (hace referencia a las posesiones hispánicas de Milán, Nápoles, Flandes, etcétera. N del R.) fue posible gracias a la contundente pericia de los ejércitos, el despliegue de una extensa y eficaz red diplomática y la ampliación, diversificación y reestructuración de una burocracia que, sin perder del todo su carácter feudal, en beneficio de una cierta despersonalización de sus integrantes ante el Estado, logró indudable eficacia en los ámbitos gubernativos, puramente administrativo, jurisdiccional y hacendístico. Burocracia organizada, profesional y estrechamente vinculada con la soberanía y el ejército tecnificado y permanentemente retribuido con soldada, se han considerado tradicionalmente como elementos fundamentales, pilares básicos sobre los que se alza la nueva forma de organización política que es en la Europa occidental de comienzos del siglo XVI el Estado Moderno*”.

siglo XII, cuando ya era notorio el florecimiento de las ciudades y del régimen municipal unido a ella, en detrimento del espacio señorial feudal.

MAPA 1: PLANIMETRÍA DEL MEDIO NATURAL Y CUADRÍCULA DE LA CIUDAD DE LA RIOJA



Fuente: Beatriz LANDEIRA, *La cuadrícula ...*, 52.

§ 7. LA PRIMERA MERCED DE UNA NUEVA JURISDICCIÓN: A LA “CONQUISTA DE LA TIERRA”

Tal como afirma Rubio Durán, al analizar el norte argentino en este periodo, podemos incurrir en una hispanización mal entendida que oculte el carácter impositivo tanto de los nuevos actores y del nuevo orden cuanto de la cultura aborígen autóctona. “Cuando se trata de sociedades complejas como las que pretendemos analizar, las versiones de la organización del pasado —al igual que otras construcciones ideológicas— son elaboradas desde la perspectiva del poder. Los hispanos podían entender el mundo que conquistaban solamente a través de categorías y percepciones

que su cultura y tradición les proporcionaba”¹⁸⁵. Dentro de este paradigma histórico y formando parte de la “hispanización” de las visiones de lo acontecido, creemos que el nuevo orden fundacional requirió, además del convencimiento ideológico de los partícipes y de las condiciones objetivas de conquista y explotación (cultura y tradición), de un estadio normativo articulado. En este contexto, los actos debían corresponderse con un orden secular que estaba representado por el derecho indiano criollo o peninsular, con un sostenido anclaje en el derecho de conquista y el naciente derecho administrativo, que legitimaba los actos, ya no de conquista y dominación física y simbólica de los contendientes sino de gobierno público y administración. En otras palabras, el colectivo hispano no sólo requería de las armas -aparato represivo- sino de un “derecho” -aparato administrativo-.

Dicho esto, el modo de la aplicación del derecho castellano se sustanció, inseparable y funcional, del proceso mismo de colonización y al reparto y la autorregulación de los conflictos locales.

La percepción del colectivo hispano era acorde a las instituciones peninsulares europeas alto medievales, íntimamente ligadas al “derecho de conquista” y al reparto, en “merced”, en virtud del “merecimiento” otorgado a los nuevos titulares de derechos reales sobre cosas y tierras que anteriormente había sido detentadas por los conquistados. La merced de tierras era un medio de unión —carácter tanto jurídico como simbólico— de la clase dominante mercendera con el gobernador, las instituciones y el Rey.

Taxativamente existió un bien físico, real, transferible, portador de *status*, como era la tierra y un instrumento como la merced real. Ambas, el bien y el instrumento generaron la primera titulación de dominio que registró La Rioja. Ajeno a las particularidades precedentes, no solo el *istituto* generaba una ligazón de los sujetos a la cosa territorial, sino que alentaba un convencimiento colectivo de legitimidad y esbozaba los argumentos de dominio futuro.

¹⁸⁵ Irene SILVERBLATT, *Luna, sol y brujas. Géneros y clases en los Andes prehispanicos y coloniales*, Cuzco, 1990. Recogido por RUBIO DURÁN, *Tierra y ...*, 23.

El 27 de agosto de 1591, el maestre de campo, capitulador financista y primera autoridad de La Rioja estampó su firma en nombre del Rey en un “documento” escrito que listaba las diversas adscripciones de cuadras y solares a conventos y a sujetos privados. En el reparto y otorgamiento inicial de tierras de esta nueva jurisdicción, el título de merced real fue suscripto solemnemente mediante un acta pública y, destacado de características particulares, sobresale el sentido colectivo y comunitario —dado que estaba dirigido a muchos titulares desde un solo documento público—.

*“En la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja Provincia de Los Diaguitas, en 27 días del mes de agosto de 1591 años, el Capitán Blas Ponce, Maestre de Campo de esta Gobernación y Teniente General de Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción por S. M., dijo, que por cuanto algunas personas de los vecinos de esta ciudad; que habían de perpetuarse y permanecer en ella casados y por casar, que tenía hijos y familia le han pedido que habían pedido que porque teniendo pocos solares y cuadras les hiciese merced en nombre de S.M., como á pobladores y conquistadores de dicha ciudad y provincia, de hacerles merced de acrecentarles algunas cuadras y teniendo consideración a los servicios y trabajos, dijo, que en nombre de S.M. hacía e hizo merced á personas aquí nombradas y señaladas, de cuadras y solares siguientes: las cuales señalaba y señalo por cima de esta ciudad y de las cuadras señaladas que en la traza señalaba en la tierra que hay entre dicha traza ó acequias que de la loma vienen por encima de dicha ciudad para regar las huertas y solares hasta llegar á las dichas acequias, como no pase por ellas. Las cuadras que se fuesen señalando en más cantidad de media cuadra delante de la parte de la acequia, para arriba de las cuales corran el principio de cada suerte en frente. La primera de la cuadra de su señoría y mano izquierda hacia el río en frente de cada cuadra como van saliendo las cuadras de la ciudad, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta hasta mano derecha, y hacia mano izquierda, segunda, tercera, cuarta y quinta y cada suerte de estas ha de correr hacia la Boca de la Quebrada, donde viene el río de esta ciudad (...)”*¹⁸⁶

¹⁸⁶ Véase la transcripción literal completa en el Apéndice adjunto al presente trabajo, Documento “C” Acta de Fundación de La Rioja del 20 de Mayo de 1591” p.552 y ss. También Vicente Gregorio QUESADA la ha transcripto en, “Actas de Fundación de las Ciudades Capitales de

El cabildo riojano se estableció como espacio institucional y como lugar de consenso del repartimiento de los recursos conquistados. Fue una institución del derecho peninsular que legitimó el repartimiento de tierras y decretó el carácter de vecino que permitía el acceso a la propiedad. Como tal se implementó inmediatamente después de efectuada la fundación misma de la ciudad y fue parte del periodo fundacional por cuanto, una vez instalados en la plaza, se distinguió a los vecinos beneméritos que lo integrarían. Juan Ramírez de Velasco designó como cabildantes a los señores Antonio Álvarez, Baltasar Ávila de Barrionuevo, Pedro López Centeno, Francisco Maldonado, Francisco Retamoso, Francisco Robledo, Pedro de Soria Medrano, Pedro Tello de Sotomayor, Melchor de Vega y Mateo Rosas de Oquendo, para que se reunieran “a Cabildo para tratar cosas concernientes al servicio de Dios nuestro Señor y bien de esta República”¹⁸⁷ y ocuparan los cargos de procurador, alcaldes de la ciudad y de la hermandad, tesorero, contador, teniente general y justicia mayor, alguacil y mayordomo. Fue esta élite en su *istitutio* como el cabildo —“verdaderas oligarquías privilegiadas” según Ots Capdequí¹⁸⁸— el lugar donde se dirimió y estableció el consenso entre los vecinos. Toda visión moderna del período insistirá en la pretensión de determinar la función diferenciada del cabildo en su rol militar, jurisdiccional, administrativo o financiero-fiscal. En cualquier caso, en la ciudad y jurisdicción de La Rioja, la creación de una institución -como fuera el cabildo- significó un corte y una *discontinutà* en la aventura de la empresa colonizadora que llevaba a sujetos privados hasta ese nuevo espacio comunal, pasando a ser una institucionalidad formal. En síntesis, dejó de ser una campaña de colonización (a “capa y espada”) para convertirse en una ocupación efectiva del espacio y un ejercicio de gobierno-dominio municipal.

Provincia en la Republica Argentina”, en *Revista de Buenos Aires*, tomo VII, Buenos Aires, 1886, 530-540, citando a ZINNY, Antoinne, *Historia de los gobernadores de las provincias argentinas* [1882]; recogido por Marcelino REYES, *Bosquejo histórico de la provincia de La Rioja (1543-1867)*, Buenos Aires, ed. Talleres Gráficos de H. Cattáneo, 1913, 11.

¹⁸⁷ Los nombres surgen del cotejo de dos actas, una del 20 de mayo de 1591 en AGI Charcas, 34 y aquella extraída de Antoinne ZINNY, *Papeles de los Gobernadores*, del 21 de Junio de 1591, que referencia a Vicente QUESADA en *Revista de Buenos Aires* y citada por Marcelino REYES “*Bosquejo..*” 1913.

¹⁸⁸ Ots Capdequí dedica en la XI conferencia en Santo Domingo, un capítulo al estudio del papel jugado por los cabildos municipales en orden al régimen de tierra. Véase J. OTS CAPDEQUÍ, *El régimen...*, 137 y ss.

Para Ots Capdequí “el cabildo era una institución que no tenía nada de artificiosa, que no era una creación de los juristas o legisladores sino algo que tenía fuerte raigambre (...) ese mismo régimen municipal que en Castilla estaba en un período de postración, al implantarse aquí, en América, en un ambiente nuevo tanto en lo geográfico, como en lo social y en lo económico, en un ambiente que estaba por hacer, cobró savia nueva, que dio a su actuación un valor extraordinario.”¹⁸⁹.

En este contexto, *el cauildo Justicia y Regimiento de la ciudad de Todos los Sanctos de la Nueva Rioxá* tuvo un rol determinante, no sólo en el reparto de las tierras sino en las disputas suscitadas en torno a su distribución, tanto en el momento del primer reparto como tras haber sido concedidas. Un buen ejemplo de lo planteado será el litigio entre el capitulador y el gobernador en el juicio de residencia al que este último fuera sometido.

Lamentablemente no se han preservado hasta nuestros días las actas del cabildo pero es muy verosímil la hipótesis del historiador Marcelino Reyes acerca de que en ella nació la primera merced conjunta así como que en su ámbito se acordó la distribución de 120 cuadras a favor de 54 españoles adultos y una mujer, generándose medio centenar de nuevos mercenderos de plazas y solares además de los que se formaran por la asignación de tierras a las compañías religiosas de los dominicos, jesuitas, mercedarios y franciscanos.

Así, en una merced en nombre de su majestad, el maestre de campo Blas Ponce, titula a 55 nuevos propietarios civiles¹⁹⁰, los cuartos, medias y enteras cuadras asignadas, el sitio para el cabildo, para el hospital, etc. De los 15 funcionarios entre “Alcaldes y Regidores y Otros Oficios de Cabildo y Justicia” mayordomo y “tesorero de S. M.”, siete fueron titulares de mercedes.

Puede afirmarse, entonces, que el diez por ciento de los nuevos propietarios estaba constituido por autoridades públicas —cabildantes, regidores, alcaldes, si bien no todas las autoridades eran propietarias. Contrariamente a lo que pensamos, existía una élite

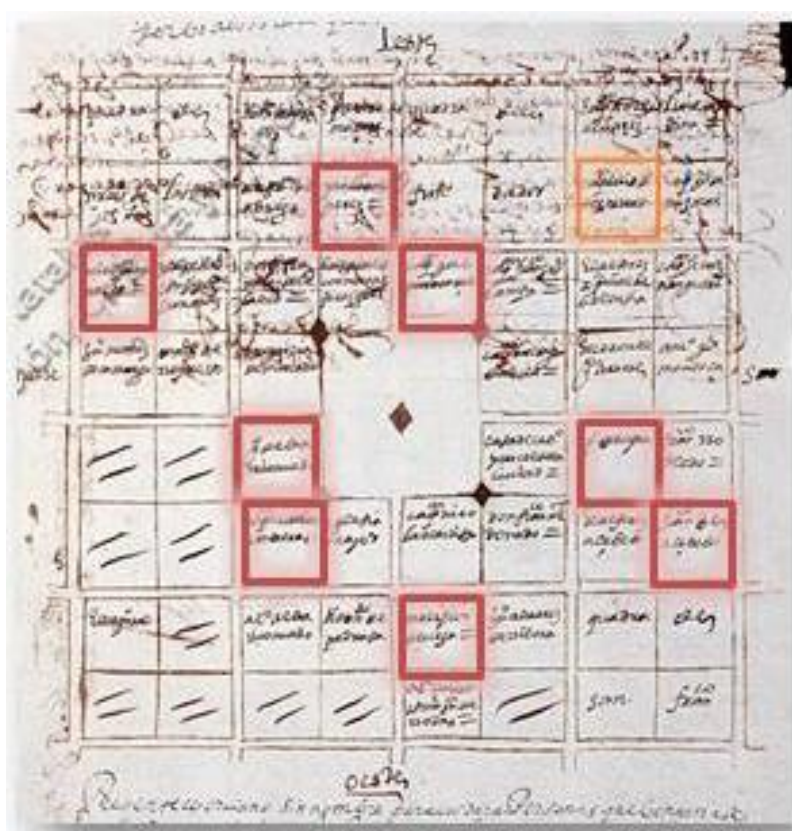
¹⁸⁹ Véase J. OTS CAPDEQUÍ, *El régimen.....*,139.

¹⁹⁰ Al respecto véase la transcripción textual en el *Apéndice Documental*, documento D p.558.

gubernativa poseedora de una extraordinaria movilidad espacial ligada a las campañas deliberadas de conquista y colonización, y que, tanto participó en la fundación de La Rioja como, años después, lo haría en las de Londres¹⁹¹ o San Juan de La Ribera de Londres¹⁹² y Salta.

Si bien la peculiar relación existente entre el sistema político indiano y el sistema de propiedad de la tierra, excede nuestro ámbito de estudio, no podemos ignorar, como veremos más adelante, la compleja existencia de conflictos entre mercenderos de tierras y encomiendas referidos a supuestos derechos sobre pueblos indígenas (y hasta sobre indios

que, al
Guillermo
“llenar
páginas en
de



suelos)
decir de
Beato,
largas
los libros
nuestros

¹⁹¹ Tal es del caso de “[7] Cap. tan. Ant.º Alvarez (...) [30] fran.º maldonado (...) [32] fran.º rrobledo y [38] melchior de uega” que entre corchetes, en el original, figura el numero y seguido el nombre del titular de merced de cuadras en el plano de la traza de la ciudad de San Juan Bautista de la Ribera (Londres), como asimismo los primogénitos de las familias riojanas “ramirez belasco” “arissa” “reynoso” “gusman” y “barrionuevo”, en *Mapa de la Trazá con indicación de reparto y solares a sus pobladores*, AGI, Charcas 26, c. 1607.

¹⁹² Reproducimos en esta página la cuadrícula de San Juan de la Ribera de Londres en un traslado en AGI, Buenos Aires, 224 “planta fundacional...”, en Laura QUIROGA, “La descripción política de los paisajes americanos: Guerra y paisaje en la Relación Geografica de 1604. La Provincia de los Diaguitas (Gobernación del Tucumán, Virreinato del Perú)”, en evaluación para prensa en *Melanges*, Casa Velázquez (École des hautes études hispaniques et ibériques), p. 26.

archivos”¹⁹³ y necesariamente nos remitirán a una instancia de validación normativa de las acciones de los sujetos poseedores.

Tabla 1: población india encomendada en 1607 en la Gobernación del Tucumán

Santiago del Estero	4.729	Repartidos entre 42 vecinos
Córdoba	4.113	Repartidos entre 60 vecinos
La Rioja	4.000	Repartidos entre 62 vecinos
N.S de Talavera	1.634	Repartidos entre 33 vecinos y 15 soldados
Salta	1.800	Repartidos entre 30 vecinos
San Miguel del Tucumán	1.100	Repartidos entre 32 vecinos
San Salvador de Jujuy	490	Repartidos entre 8 vecinos
Nueva Madrid	188	Repartidos entre 10 vecinos
Total indios	18.056	[Total vecinos 277 y 15 soldados]

Fuente: AGI., Charcas 26 y 34, Carta de Alonso de Ribera al Rey, Santiago del Estero, 19 de Marzo de 1607

En este marco, la esencia de la acción política consistió en preservar una determinada estructura de la propiedad, nos dice José Manuel De Bernando de Ares¹⁹⁴. En las instituciones públicas indianas del virreinato, audiencias, gobernaciones y cabildos, la

¹⁹³ Guillermo BEATO, “La época colonial entre los años 1600 y 1750”, en C. ASSADOURIAN; G. BEATO, y J. CHIARAMONTE, *Argentina de la conquista a la independencia*, ed. Paidós, Buenos Aires, 1ª Reimpresión, 1985, 381.

¹⁹⁴ José Manuel DE BERNARDO ARES, “Rey-Reino: el binomio estatal de la corona de Castilla en el siglo XVII”, en Juan L. CASTELLANO- Jean DEDIEU-María V. LÓPEZ –CORDÓN CORDEZO (eds.) *La pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, Madrid, ed. Marcial Pons, serie Maison des Pays Ibériques, 2000, 340 y ss.

lucha por el poder estaba condicionada por estos elementos básicos, es decir: la propiedad, la soberanía y la fiscalidad, por lo que es fácil observar la estrecha relación existente entre las instituciones en las que toma cuerpo el poder y el sistema de propiedad de la comunidad¹⁹⁵. Desde el punto de vista de esta “nueva historia política”¹⁹⁶ del orden normativo, es interesante insistir en la percepción de que instituciones colegiadas indianas tales como el cabildo limitaban las arbitrariedades del gobernador, del capitulador o del mercendero de tierras o encomiendas, así como — utilizando una categorización histórica de Man¹⁹⁷ — fueron una cristalización de la capacidad del estado (en este caso, monárquico y castellano) para penetrar en el territorio colonial e implantar, logísticamente, sus decisiones públicas legitimantes. Si partimos de la trilogía heurística Rey-Reino-Pueblo¹⁹⁸, es legítimo cuestionarnos si el cabildo defendía con *arbitrio* propio o institucionalizaba el dominio del vecino español.

¹⁹⁵ Véase Cynthia HERRUP, “The countries and the country: some thoughts on seventeenth-century historiography”, en *Social History*, VII, 1983, 169-181; y Bartolomé YUN CASALILLA, *Sobre la transición al capitalismo en Castilla, Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830)*, ed. Junta de Castilla y León, Valladolid, 1987, 671.

¹⁹⁶ Esta corriente historiográfica llamada “nueva historia política” donde están José Castellano, Bartolomé Yun Casalilla, José Bernardo de Ares, revalorizan las instancias políticas propiamente dichas. Por ejemplo, en la gestión burocrática colonial dice Castellano “Reinar es un oficio y un oficio duro”, en CASTELLANO, Juan Luis; “El rey, la Corona y los ministros”, en Juan L. CASTELLANO- Jean DEDIEU-María V. LÓPEZ –CORDÓN CORDEZO (eds.) *La pluma, la mitra y la espada*, 31-49. J. Bernardo Ares, por su parte, nos introduce a “La teoría y práctica del proceso político (Siglo XVII). La lucha por el poder. El Rey y el Reino, en cuanto motores de acción política, generan un proceso constante y dialéctico que se caracteriza por un doble haz de interrelaciones yuxtapuestas, complementarias o conflictivas.”, en Juan L. CASTELLANO- Jean DEDIEU-María V. LÓPEZ –CORDÓN CORDEZO (eds.) *La pluma, la mitra y la espada*, 344 y ss.

¹⁹⁷ La historia del poder para Michel Mann se basa en la medición de la capacidad socioespacial de organización y en la explicación de su desarrollo. Véase Michael MAN, *A history of power from the beginning to A.D. 1760*, Cambridge. Cambridge University Press, 1983, p. 44 [826]. Título original: *The sources of Social Power. Volume I. A History of Power from the Beginning to A. D. 1760*. Cambridge University Press, 1986. Edición castellana como *Las fuentes del poder social, I: Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760*. Traducción de Fernando Santos Fontenla, Alianza Editorial, Madrid, 1991.

¹⁹⁸ Como motores institucionales de la acción política define, esta corriente historiográfica identificada con la “nueva historia política”, al rey, al reino y al pueblo, como un triángulo de interacción recíproca “en donde naturalmente esta acción política fue ejercida principalmente por el primero o por el segundo o por ambos a dos (*sic*) sobre un Pueblo, sobre una comunidad (...)”, en J. DE BERNARDO ARES, “Rey-Reino:...”, 349.

“La elección de los cargos de los cargos del Cabildo ‘los hazen los vezinos encomenderos de unos en otros, y así se andan entre ellos mismos... y así mesmo... son los que tienen en si todos los mantenimientos del sustento ordinario, y los que han de vender á los regatones, es coça clara que no habrá la retitud en las posturas o en los aprecioes que se hobieren de hazer á los regatones’...”¹⁹⁹

Así, los cabildantes iniciales de la gobernación del Tucumán “eran los que tienen en sí todos los mantenimientos diarios” de las ciudades, organizando los pedimentos al gobernador o al mismísimo Rey²⁰⁰, lo que resignifica al cabildo como nivel local de la organización política de la monarquía absoluta y espacio donde *se toman* las decisiones²⁰¹.

¹⁹⁹ “Memorial de Diego Robles sobre el asiento del Pirí” En CDIRAO, Tomo XI, 22. Recogido por C. S. ASSADOURIAN, “La Producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial: El caso del espacio peruano, Siglo XVI”, en E. FLORESCANO (comp.), *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina*, México, ed. F.C.E. 1979, 277.

²⁰⁰ Un año después de su fundación, el 2 de abril de 1592 «el Cabildo de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja Provincia de Los Diaguitas» envió a la península un emisario vecino de Santiago del Estero con una carta a “Su Majestad el Rey don Felipe, nuestro Señor,” para suplicarle que hiciera merced a esta ciudad de una serie de privilegios contenida en un Instructivo acordado “en Cabildo pleno en nombrar al Capitan Alvaro de Abrego, Teniente General de esta Gobernación en los casos de Guerra, para que, como persona que se ha hallado presente en esta jornada y población vaya a besar a Vuestra Magestad, ser servido hacernos en premio y remuneración de nuestros servicios para que con esta ayuda pueda yr en abumento esta ciudad, y conseguir los fines que por ello pretende, que no se dudan siendo Vuestra Magestad servido hacernosla”. En la instrucción existen catorce puntos que van desde “primeramente besara a Su Majestad los pies de nuestra parte, darle nuestra carta e informarle dicha nueva fundación”. Entre los pedidos figuran la concesión por tres vidas de los Indios, que pueda cada vecino sacar repartimiento de 50 indios casados cada uno, que los exceptúe de las cargas del pecho y alcabala a la ciudad por cincuenta años y de las penas de cámara que hubiere “pa las obras publicas”. También solicitan que solo intervenga la audiencia de la Plata (Charcas) “que nos aga merced que será particular y mui grande en que pleitos de indios que se tratare en adelante en propiedad, como en posesión, se determinen y fenezcan en la Real Audiencia de La Plata, en cuyo distrito caen, y que no vayan a su Real Consejo de Indias, atenta la gran distancia de tierra y mar y pobreza presente”.. “Esperamos en nro. Señor y en él mucho deseo que tiene de que los Reales Quintos de Vm° sean acrecentados Emos de tener buen suceso/ Y porque no nos Justo padezca la honrra de quién También acude a servir a Vm° conoce por pasión de particulares/. Advertimos a Vm° que algunos del cabildo pasado con ella sin que los demás lo supiesen metieron un capítulo en un duplicado de la que abían escrito a Vm° contra el [Joan Ramirez de Velasco]./ y por que su mucha Xpandad y el zelo referido con que anda en el Real seruizio de Vm° no lo merece/ AGI, Charcas, 34. También citado -aunque de manera parcial- por Roberto LEVILLIER en *Gobernación del Tucumán – Correspondencia de los Cabildos en el Siglo XVI – Documentos del Archivo de Indias*. Buenos Aires, Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino ‘La Argentina en el Siglo XVI’, ed. Talleres Gráficos Porter Hnos., Buenos Aires, 1945, 481-483.

²⁰¹ Xavier GIL PUJOL, *Centralismo e localismo? Sobre as relações políticas e culturais entre capital e territórios nas monarquias europeias dos séculos XVI e XVII*, en “Penelope, Fazer e desfazer a História” N° 6, Lisboa., 1991, 119-144. Asimismo sobre el concepto de “monarquía”, véase, José María Jover ZAMORA,

Dentro de las pocas actas del cabildo del periodo, es significativo que en ésta, ubicada en el AGI (Charcas, 34), los cabildantes riojanos pidan que los temas de propiedad de los repartimientos de indios “fenezcan” en la Audiencia de Charcas,

*“que nos aga merced que será particular y mui grande en que pleitos de indios que se tratare en adelante en propiedad, como en posesión, se determinen y fenezcan en la Real Audiencia de La Plata, en cuyo distrito caen, y que no vayan a su Real Consejo de Indias, atenta la gran distancia de tierra y mar y pobreza presente”*²⁰²

A los largo de los estudios del periodo se ha resaltado “la pobreza de la tierra” y los costos en “pleitos” pero también, en vistas a los nuevos estudios sobre la dominación monárquica²⁰³, pueden ser redefinidos ubicando el espacio publico donde realmente está

“Sobre los conceptos de monarquía y nación en el pensamiento político español del siglo XVII”, en *“Cuadernos de Historia de España”*, XIII, 1950, 101-150. Sobre el concepto de “absoluto”, el ya mencionado Perry ANDERSON, *Lineages of the absolutist state*, y José Antonio MARAVALL, *“Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII)”*, ed. Alianza, Madrid, 1986, I, 278-287. Un análisis contrastado con investigación empírica peninsular en Xavier Gil Pujol, *Las claves del absolutismo y parlamentarismo (1603-1715)*, ed. Planeta, Barcelona, 1991. Mientras que para el abordaje desde una perspectiva local de la praxis política véase José Manuel DE BERNARDO ARES, *“Gobernantes y gobernados en el Antiguo Régimen. Estado y sociedad desde la perspectiva local”*, en *Axarquía*, N° 14, 1985, 13-40. También del mismo autor su tesis doctoral J. M. DE BERNARDO ARES, *Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda de propios en la Córdoba de Carlos II*, Ed. Universidad de Córdoba, Córdoba, 1993, pero sobre todo el aporte paradigmático de De Bernardo Ares en su idea de “poderes intermedios” que deben ser tenido en cuenta en la cientificidad de la acción política como actos de subjetivación local, aunque aquí recurra a J. Bodin, en José M- DE BERNARDO DE ARES, “Los poderes intermedios en la ‘República’ de Jean Bodin” en *Revista de Estudios Políticos* núm.42, 227-238 (Nov-Dic, 1984) pp. 212-237

Sobre el redescubrimiento de la esfera municipal a partir del análisis político y el sistema “polisnodial” de los consejos, aunque desde una perspectiva más clásica véase, SALUSTIANO DE DIOS, *“La evolución de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII”*, en *Hispania, entre Derechos propios y Derechos nacionales*, Bartolomé CLAVERO, Paolo GROSSI y Francisco TOMÁS Y VALIENTE (ed.), ed. Giuffrè, Milan, 1990, II, 593-755.

²⁰² AGI, Charcas, 34.

²⁰³ “Si ponemos el foco de atención sobre la capacidad de las poblaciones y sus elites por gestionar la política local, el paradigma colonial extraeuropeo parece claramente cuestionable, a no ser que se demuestre que el rey tenía mayor capacidad de intervención a la hora de definir la política efectiva en México o Goa que en Murcia o Nápoles. No se puede discutir que las poblaciones extra-europeas tenían menos foros y menos presencia en las cortes europeas que sus homólogos del Viejo Continente, pero parece que su autonomía efectiva a la hora de decidir cómo gobernar y

ubicada la política en el Tucuman y quienes son sus protagonistas. “La politique locale devient ainsi un objet d’analyse du global”, nos ilustra Ruiz Ibañez²⁰⁴, afirmación que compartimos con el cual no toda política es ius-política y que solo deviene en global en si atañe a la esfera de los propietarios y propiedades (de indios o tierras o cargos o impuestos).

No obstante, dentro de la historiografía clásica existe una estrecha relación entre el espacio colonizador y el “nuevo” orden selectivo. Alfonso García Gallo traza un paralelismo entre la ciudad castellana y la ciudad indiana en cuanto comunidad organizada, en la cual “ni la ciudad castellana ni la indiana integran a cuantos habitan” porque la primera excluye a los judíos y a los moros, al tiempo que la segunda lo hace con los indios, negros y esclavos. Como veremos en el ejemplo peninsular de Salustino de Dios, la merced de tierras otorgada a un vecino cristiano “de un moro que se había ido allende” no difiere, jurídicamente hablando, de las solares de tierras acequiadas otorgadas a un vecino de la Nueva Ríoxa en “chacras” antes pertenecientes a los indígenas yacampis. Pero conviene insistir sobre algunos aspectos que tendrán, en la concesión de mercedes de tierra, vital trascendencia para los siglos venideros. García Gallo menciona, por un lado y diferenciándolo de la península ibérica, a “la inmensidad del territorio jurisdiccional” que se asignara a cada ciudad como La Nova Ríoxa y su ámbito municipal y que contrastara, en cuanto a su extensión con varias provincias o territorios castellanos e incluso al de un “reino” peninsular como el de Algeciras, etcétera ya que, según García Gallo, “carecen –estos últimos- de organización propia”

cómo gestionar la dominación no se quedaba a la zaga de la de aquellos.... Y lo mismo se podría decir de la estructuración política local. A fin de cuentas eran las corporaciones armadas, lo que incluye a personas ‘ordinarias’, de San Luis Potosí a Saint Omer, las que defendían las fronteras, y a las que se reconocían privilegios por ello. La autoridad del rey se expresaba a través del poder de aquellas, sin el cual difícilmente podía existir. Ambos elementos formaban parte de un todo, al que bien podemos llamar dominación monárquica”, en J. RUIZ IBAÑEZ, “Una historia más allá del paradigma centro-periferia”. Texto inédito, en <http://historiapolitica.com/dossiers/los-territorios-americanos-y-su-integracion-en-el-mundo-hispanico-itinerarios-historiograficos-entre-el-paradigma-colonial-y-la-monarquia-policentrica/> (Consultado el 31/12/2015)

²⁰⁴ J. RUIZ IBAÑEZ, “Les acteurs de l’hégémonie hispanique : du monde à la péninsule Ibérique”, *Annales Histoire Sciences Sociales*, 2014, 927-954, en <https://www.cairn.info/revue-Annales-2014-4-page-927.htm> (Consultado el 11/02/2016)

(en confrontación con el Nuevo Mundo). Por otro lado, la consideración de los vecinos, con la consiguiente participación en el gobierno local, “confiere al régimen un cierto carácter oligárquico”. Tal como viéramos en la representación del cabildo riojano, uno de cada cinco de los vecinos mercenderos —el que recibía merced de tierras o merced de encomiendas— era cabildante (modernamente, la voluntad del poder estará emparentada con la voluntad de poseer). En este marco, García Gallo concluye planteando que “la enorme distancia, en el espacio y en el tiempo a que quedan las poblaciones del Nuevo Mundo respecto del rey y del Consejo —a diferencia de las Penínsulares que sólo están a pocas jornadas— hace que en los primeros tiempos aquellas, como únicos órganos revestidos de autoridad en aquel mundo lejano, lleguen a ejercer funciones superiores que no le son propias”²⁰⁵.

§ 8. ACCESO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA REPÚBLICA DE ESPAÑOLES: EL JUICIO DE RESIDENCIA

El acceso a la tierra riojana fue judicializado apenas hubo un cambio de autoridades gubernamentales. El gobernador del Tucumán fue sometido a juicio “de residencia” en ocasión de ser sustituido de su cargo —a pesar de que el mismo nombramiento lo liberaba de esta clase de juicio— debido a problemas en el reparto de tierras y a la validez de los títulos de mercedes otorgados, que fueran cuestionados por Blas Ponce, capitulante ante el rey, cuestionamiento en el que actuaron, como parte, todos los cabildos de las jurisdicciones del Tucumán.

Joan Ramírez de Velasco provenía del “noble linaje que aunque no existe ya por varonía, aportó su sangre esforzada a las principales casas de La Rioja”²⁰⁶. En Europa

²⁰⁵ A. GARCÍA GALLO, *Los orígenes...*, 1023.

²⁰⁶ “Había nacido en San Millán de la Cogolla, en la provincia de La Rioja (Castilla), Hijo de Juan Ramírez de Pescina y Avalos, que descendía de los Condes de Aguilar de Hinestrillas y del Rey Ramiro Sánchez de Navarra, y de doña Ana de Velasco y de la Calle, de la Casa de los Condestables de Castilla y Duques de Frías. El futuro fundador de nuestra ciudad fue Divisero de la Casa de la Pescina, título que heredo de su tatarabuelo paterno. Sirvió

había recibido la designación favorable a sus servicios militares que le granjearan también los conocimientos de técnicas y estrategias para combatir a los indios Calchaquíes²⁰⁷. Era un noble, pero además era militar. A las excelentes referencias que llegaban al monarca sobre el “Capitán de Mar y Tierra” Ramírez de Velasco, avaladas por veintisiete años de servicios en diversas batallas mantenidas en España y en el exterior, se le sumaban su cargo de la real Armada como oficial de mar a la cual había ingresado en 1555 con destino Nápoles²⁰⁸. Según Félix Luna, su designación conllevaba inmunidad “como recompensa por estos grandes servicios el rey lo nombró Gobernador del Tucumán, con la especial franquicia de no estar sujeto a juicio de residencia, en marzo de 1584”²⁰⁹. Sin embargo, en opinión y cotejación de documentos, varios historiadores han comprobado la realización de su juicio de residencia²¹⁰. El

al Rey esforzadamente durante treinta años en las guerras de Flandes, Milán, Granada y en la conquista del Portugal. Como recompensa por estos grandes servicios el rey lo nombró Gobernador del Tucumán, con la especial franquicia de no estar sujeto a juicio de residencia, en marzo de 1584. A mediados de año siguiente, el flamante gobernador llegaba a estas tierras, acompañado de su mujer e hijos: estos fueron tres, pues los otros tres nacieron aquí (en Argentina n. del r.).(...).Había contraído matrimonio en Sevilla con Da. Catalina de Ugarte y Velasco.” en Félix C. LUNA, “Rioja, la noble”, en Revista de la Junta de Historia y Letras de La Rioja (en adelante RJHLR), año III; núm. 4; Octubre- Noviembre y Diciembre de 1944. La Rioja.

²⁰⁷ La disuación para que indios rebeldes se autoproclamen súbditos sino serán guerreados por el Gobernador, más la ayuda de indios mercenarios, es un plan predeterminado tal como lo informa Ramírez de Velasco al Rey, en 1588, dos años antes de la fundación de La Rioja y Jujuy, “*Voy caminando con un Ejército de cien españoles y seiscientos (indios) amigos a la ciudad de Salta del valle calchaquí con intención de que aquella gente, de tantos cristianizar se restituya un nuevo conocimiento de la fe sermi y obediencia de su Magesta y quedame esperanzado de la buena fin de que se traça informada y de l’ánima que todos llevamos defín(d)ir a su Mag. Que los enemigos han de sufrir Esta vez: la paz que des(e)amos o con el castigo que merecen*”. Talavera, 21 de febrero de 1588, AGI, Charcas 42.

²⁰⁸ Un reciente estudio afirma que “*enterado Ramírez de Velasco de las preferencias de Felipe II hacia su persona, el 9 de agosto de 1582 elevó en Lisboa, ante el alcalde Juan de Tejada del Consejo de su Majestad, una petición de que se le facilitara traslados que acreditaran en forma fehaciente que reunía los antecedentes requeridos para desempeñar el cargo de gobernador de las provincias del Tucumán, Jurés, Diaguita y Comechingones, a cuyo efecto presentó las certificaciones del general Sancho de Ávila y de Francisco Duarte, informe del interrogatorio practicado a quienes habían sido sus superiores y carta del Duque de Median Sidonia al rey Felipe II recomendando al capitán Ramírez de Velasco*”. En dichas certificaciones se constata su carácter militar naval en el desempeño de la guarda de seis viajes a Centroamérica custodiando los galones que hacían la ruta de las Indias con mercancías, Cfr. Juan SÁENZ-DÍEZ, *Los riojanos en América*, Madrid, ed. MAPFRE, 1992, 79 y ss.

²⁰⁹ R. LEVILLIER, *Papeles* 169.

²¹⁰ Entre otros, Juan CARRIZO, *Cancionero popular de La Rioja*, Buenos Aires, Tomo 1, ed. Espasa Calpe, 1937; A. BAZAN, *Historia*... 67, y R. LEVILLIER, *Papeles*..., 154.

gobernador estaba preparando una nueva expedición cuando recibe la noticia acerca de la designación, por parte del Virrey del Perú, de Fernando Zárate en su reemplazo, como nuevo gobernador del Tucumán. Según el historiador Roberto Levillier, proclive a la épica histórica, el nuevo era “un personaje de campanillas pero no de competencia”²¹¹; lo cierto es que, en vistas a la abundante evidencia cartográfica de los actores del período, es posible deducir que se trata del reemplazo de un eminente militar por un civil más preocupado por el gobierno que por la guerra y la búsqueda de oro. En el mismo sentido, la historiadora Silvia Palomeque concluye que, con la antedicha designación finaliza “un periodo inicial de conquista”²¹² del norte argentino. El nuevo nombramiento del virrey anulaba la franquicia de “no estar sujeto al juicio de residencia” realizada por el propio Rey, si bien no fue posible constatarlo de manera documentada. Así, los actos de gobierno que fueran juzgados, abarcan un período de nueve años, comprendido entre el mes de marzo de 1584 y abril de 1593. El Virrey que actuó no tuvo necesidad de apelar al Consejo de Indias debido a las nuevas prerrogativas que, progresivamente, irían asumiendo las instituciones indianas con respecto a los aspectos gubernamentales, reservando los aspectos fiscales a la Península.²¹³

²¹¹ R. LEVILLIER, *Papeles de los Gobernadores en el siglo XVI*, 2 tomos, Madrid, 1920, y, de mismo, *Probanzas y méritos y servicios de los conquistadores*, 2 tomos, Madrid, 1919-1920. También, *Guerras y Conquistas en Tucuman y Cuyo, 1554-1574*; y, *Descubrimiento y Población del Norte argentino por españoles del Perú, 1543-1553*, Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino ‘La Argentina en el Siglo XVI’, Talleres Gráficos Porter Hnos. Buenos Aires, 1945; y por ultimo, *Papeles Eclesiásticos del Tucuman*, Vol 2, Imprenta Juan Pueyo, Madrid, 1924.

²¹² “Recién en la década del noventa, durante el gobierno de Ramírez de Velasco, pudieron cerrar el cerco alrededor del valle Calchaquí a través de la fundación de La Rioja (1591) y garantizar el paso seguro a Charcas con la fundación de Jujuy (1593), con lo cual hacia finales del siglo XVI culminó ‘el período inicial de conquista’ (...)”. Sobre la actuación militar de Ramírez de Velasco afirma “Es en esta situación tan crítica para los indios sometidos donde actúa el gobernador Ramírez de Velasco que, con su efectivo accionar político y militar logra concluir la etapa inicial de conquista apoyando a los encomenderos y a costa de la población indígena pacificada. A la sobreexplotación, maltrato, invasión militar, yacónización, mortalidad y expulsión de los hombres hacia otras jurisdicciones, los indígenas respondieron con el abandono de los pueblos el bandidaje en los caminos, movimiento que fue acompañado, apoyado u organizado por los sacerdotes de la antigua sociedad indígena. La represión del gobernador consistió en nombrar los primeros funcionarios del área rural (alcaldes de la Hermandad), en apresar a algunos salteadores y a cuarenta ‘hechiceros [...] viejos de mas de setenta años’ y en quemar vivos a varios de ellos”, Silvia PALOMEQUE “El mundo indígena. Siglos XVI-XVIII”, en E. TANDETER (comp.) *Nueva Historia Argentina*, tomo II “La sociedad Colonial”; ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2000, 117 y ss.

²¹³ “12. Ahora bien, la política de los reyes españoles, aunque otra cosa digan los historiadores, trata de evitar roces y celos entre las diversas autoridades que intervienen en un mismo territorio, y esto lo consigue de una forma muy

En este contexto, el nuevo gobernador arribó a Santiago del Estero, capital de la gobernación del Tucumán, en el mes de mayo de 1593 y su primera disposición fue enjuiciar a su antecesor, para lo cual nombró al teniente general Pedro de Ribera para llevar adelante el juicio de residencia. Armando Bazán opina que “desde el punto de vista de su actuación en La Rioja tiene interés la querella promovida por sus vecinos”, en la que aparecen las primeras actuaciones litigiosas de las instituciones de derecho que el propio gobernador Ramírez de Velasco había creado: el Cabildo de la Nova Ríoxa y los vecinos, instituidos como beneficiarios de mercedes de tierras y de encomiendas.

Como vimos en la ciudad y jurisdicción de *Todos Los Sanctos de la Nueva Ríoxa*, Provincia de los Diaguitas, el primer repartimiento se dio a través de un documento refrendado por un escribano público *pro tempore*,

“Yo Luis de Hoyos escribano Público de gobernación en esta provincia del Tucumán y del cabildo de esta ciudad de la Nueva Ríoxa en la provincia de los Diaguitas nombrado por su señoría el señor Joan Ramírez de Velasco”.

No es de extrañar que la querella contra un funcionario público, la primera instituida en la historia de esta ciudad, fuese promovida por los vecinos contra el ex -gobernador, su hijo Juan y el escribano de la gobernación Luis de Hoyos. Bazán, en base a documentación de Pablo Cabrera, detalla que actuó como apoderado en dicha demanda Pedro Tello de Sotomayor, procurador de la ciudad, quien, en un escrito presentado ante

*simple: Acumulando en una misma persona los cargos de gobierno, de justicia y guerra, y en su caso de política. Únicamente los negocios de hacienda se mantienen siempre fuera de cualquier acumulación. 13. Como consecuencia de esta política de acumulación de cargos, en cada reino o virreinato a la persona que recibe el oficio de virrey, no al oficio mismo, se le nombra al mismo tiempo, pero en despacho diferente, gobernador en la misma provincia en que reside (a veces también en otras), presidente de la audiencia que radica en la misma, y capitán general en el distrito cuya cabecera se halla en la misma provincia [la cursiva del autor. N.d.r]. Pero no se le nombra gobernador de otras provincias, ni presidente de las otras Audiencias que acaso pueda haber en su virreinato, ni tiene mando militar en los lugares donde hay otro capitán general. La persona que recibe el título de virrey ejerce a un tiempo el poder general inherente a éste, y los poderes particulares que me permitan atender a las funciones de gobierno □ donde las tiene□ propias de los gobernadores (los poderes ordinarios de éstos) actuar en lo judicial como presidente de Audiencia (aunque sin intervenir en los fallos por no ser letrado), y en lo militar proceder como cualquier capitán general. Todo esta claro cuando en la actuación de un virrey se distingue el distinto modo de hacerlo según lo haga ejerciendo uno u otro cargo.”, A. GARCÍA GALLO, *Los principios rectores de la organización territorial de la Indias*, ed. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos-Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1970, 336-337. Para mayores precisiones “Instrucciones a los virreyes de la Nueva España” Cáp. 24, *Celulario de Encimas*, I, 331; II, 7.*

el juez de residencia, con fecha 15 de diciembre de 1593, expresaba los siguientes “agravios”:

1. “Que Ramírez de Velasco al hacer los ‘repartimientos’ de tierras e indios había preferido con mucho exceso a ‘su persona, hijos de parientes, criados y paniaguados’, violando las células y las reales ordenanzas. Así había puesto ‘en su Cabeza 25’ pueblos de indios, y a su hijo Juan, menor sujeto a patria potestad, le había otorgado otros 15.
2. Que el resto de las tierras y encomiendas las había repartido entre algunos vecinos con la ‘irregularidad’ de repartir la misma cosa a diferentes personas y que a otras le había ‘dado títulos’ sobre pueblos que no existían, de todo lo cual resulto un sinnúmero de pleitos entre los vecinos.
3. Que en la visita que hizo el gobernador, al año siguiente de la fundación, con el pretexto de que iba a solucionar los pleitos puso preso al Cap. Blas Ponce y a Baltasar de Ávila Barrionuevo, presionándolos para que renunciaran a sus encomiendas y también se negó a confirmar los repartimientos que su teniente general, el nombrado Blas Ponce, había hecho según las capitulaciones celebradas entre ambos. Que también había ‘vejado y molestado’ a otros vecinos honrados con dichos y hechos, ‘quitándoles’ a algunos las encomiendas anteriormente concedidas y poniéndolas a su cabeza. Para este objeto, había adulterado los registros originales con la complicidad del escribano Luis de Hoyos, acrecentando su patrimonio a 45 pueblos de indios mientras que su hijo Juan, que en la primera data figuraba con 15 aparecía ahora con 25 pueblos de indios encomendados:

“sin lo poder façer quebrantando las cédulas y ordenanzas reales no teniendo para ello titulo” —transcribe la acusación del cabildo riojano, el presbitero Pablo Cabrera²¹⁴—“repartido la cossa dos y tres veces en diferentes y que a otros habia dado titulos de pueblos compuestos y que no los había ni parecían” (...) “Y que estando en la dha. Ciudad de Todos los Santos, viendo el dho. Juan Ramírez de Velasco que agunos indios que había dado por encomienda rreal a algunos pobladores y conquistadores

²¹⁴ Pablo CABRERA, *Introducción a la Historia Eclesial del Tucumán, 1535 a 1590*, tomo II, ed. Santa Catalina, Buenos Aires, 1934-1935, 396.

habían salido ciertos y les servían, se los había quitado y encomendado en sí propio, poniendo en los márxenes de el dho. Registro donde estaba el titulo de su encomienda, el asiento sin día, mes y año, ni sustancia de título judicial legal ni verdadero, dando a entender los había tomado y encomendado en sí, en el dho. día veynte e quatro de Mayo, habiendo sido un año despues”.

4. Agregaba Sotomayor que por estas causas ‘los vecinos estaban gastados y pobres en *pleytos*’ y que, al no cumplir Ramírez de Velasco con el contrato firmado con Blas Ponce, la ciudad había perdido lo que éste se obligó a gastar anualmente para su sostenimiento. Solicitó, en consecuencia, que hechas las informaciones y diligencias convenientes se quitaran al demandado, a su hijo, deudos, criados y *paniaguados* todas las encomiendas y se los condenara a pagar los gastos, intereses y perjuicios que había ocasionado a la ciudad, que estimo en la suma de 25 mil pesos de buen oro”²¹⁵.

El Cabildo era explícito en la denuncia en torno a la violación de las células y ordenanzas reales que prohibían el favoritismo de la autoridad con su familia. A su vez, la acusación se fundamentaba en el no cumplimiento de las cláusulas contractuales de la Capitulación²¹⁶, en las que delegaba la potestad de repartir indios y tierras, así como la consciente adulteración de los documentos públicos (“los registros originales”²¹⁷) y también la “asociación” con el escribano para cometer los delitos.

²¹⁵ AHCo, Escribanía 2, legajo 4, expediente 1, recogido por A. BAZÁN, *Historia...* 75 y ss.

²¹⁶ Para adentrarnos con mayor profundidad en el instituto ‘capitulación’ como andamiaje administrativo y contractual, recomendamos el capítulo 1. “Qué era una capitulación”, el “4. Pugnas y confusiones” de la primera parte y “1.a) ‘*Si por contrato viene daño al reyno, no vala*’, en José A. ARMAS CHITTY, *Influencia de algunas capitulaciones en la geografía de Venezuela*, Serie Historia, Instituto de Antropología e Historia, Facultades de Humanidades y Educación, Universidad Central de Caracas, Caracas, 1967, 260.

²¹⁷ No hemos encontrado en las jurisdicciones de Londres, La Rioja y Catamarca, nada que se le parezca a un padrón de beneficiarios de mercedes de tierras o *libro de mercedes*, que contrasta, de manera evidente, con los múltiples padrones de indios de tasa, registros de diezmos, y vecinos encomenderos, etc.. Insistimos en la idea que la “fijación” en los libros del cabildo se ordenaba cuando se preveía potenciales conflictos o cuando la autoridad concesionaria era excepcional. Cuando Hernandarias a fines siglo XVI ordena anotar los “*Solares q Estaban rrepartidos para la tra[za] q’hiço El Capitan y cuadras q Estaban En Blanco q’sé* [hayan situado] *en el libro del Cabildo para alguna fixexa*

Mucho es lo que se puede decir del acto acusatorio. “*Ponéndolos [sic] en los márgenes de dchos. Registros*” supone la existencia —veremos que es, en principio, excepcional— “de registros” escritos de encomiendas, donde esta “*asentado (...) en el libro del Cabildo para alguna fixeça y Memoria*”, entre otros, “el título”, la fecha y “data”, lugar donde se “sustancia el valor judicial legal y verdadero”. Las atribuciones judiciales se encontraban dispersas entre los distintos funcionarios que ocupaban cargos gubernamentales dado que tanto el procurador denunciante como los anteriormente mencionados, no eran letrados sino vecinos, mercenderos de tierras y encomiendas de su jurisdicción y su nombramiento lo habían recibido del Cabildo. No obstante, ello no invalida el apego a las normas emanadas por el rey ante el mínimo estado parlamentario de cuestiones vitales como las tierras, indios y aguas. La invocación al derecho indiano y el castigo a los abusos fueron impulsados por los propios vecinos que habían sido compañeros de empresa, en la conquista, del gobernador denunciado.

El juicio de residencia consistía en un procedimiento destinado a determinar la conducta del funcionario en el desempeño de su oficio. El objeto del juicio no se centró, solamente, en el castigo del abuso y eventuales arbitrariedades cometidas por Velasco en la distribución de mercedes, sino que, a través del mismo, se exaltó la buena conducta del residenciado. Tal como lo afirman Víctor Tao-Anzoategui y Eduardo Martire²¹⁸, al término del desempeño de su oficio, en principio, todos los funcionarios

y *Memoria*”, lo hace para reafirmar la potestad de su Capitan de haber actuado repartiendo solares y cuadradas vacas bajo su mandato, *Actas Capitulares de Corrientes*, tomo 1 Años 1588 a 1646, Buenos Aires, ed. G. Kraft Ltda, 1942, 144 (567). En oposición, tanto estudios clásicos como los de Cabrera, o actuales como los de Piana de Cuesta, verificarían la existencia de un libro de mercedes en el Cabildo cordobés, al parecer de carácter exclusivo de solares y mercedes de tierra. Véase, Pbro. CABRERA, “Córdoba de la Nueva Andalucía: Noticias etnogeográficas e históricas acerca de su fundación”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Córdoba (Argentina), noviembre de 1916, año III, núm 9, 184-220; marzo de 1917, año IV, núm. 3, 65-100; julio de 1917, año IV, núm.5, 428-491; Josefina PIANA DE CUESTAS, “De encomiendas y mercedes de tierras: afinidades y precedencias en la jurisdicción de Córdoba” en *BIHAAER*, Tercera Serie, núm. 5, 1º semestre de 1992, 20.

²¹⁸ Víctor TAU ANZOATEGUI y Eduardo MARTIRE, *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*, ed. Macchi, 4ª edición, Buenos Aires, 1975, 82-84.

indianos estaban obligados a someterse a residencia. Por otra parte, y según sostiene Mariluz Urquijo²¹⁹, el juicio de residencia podía ser promovido en cualquier momento; tanto es así que fue establecido periódicamente para los oficios perpetuos o permanentes. Estaba prohibido ocupar un nuevo cargo sin haberse sometido al juicio por su anterior empleo.

Para sustanciar el juicio, se designaba un juez especial, siendo frecuente que tal designación recayera en el sucesor del residenciado en el cargo, razón por la cual, Zárate como nuevo gobernador del Tucumán, juzgó al residenciado Velasco. En general, el juez residenciador era designado por el Presidente del Consejo de Indias cuando el oficio era de provisión real, como lo fuera en este caso, y por los virreyes, cuando se trataba de presidentes y gobernadores respectivamente, cuando el empleo era provisto por esos funcionarios.

El juicio se tramitó en Santiago del Estero, capital de la Gobernación del Tucumán, porque era el lugar donde el residenciado había desempeñado su oficio, y se le exigió estar presente durante la sustanciación. Por ello, Ramírez de Velasco se queda allí, desde donde escribe cartas a España, entre ellas al mismísimo Rey. Ocasionalmente, se autorizaba a los altos funcionarios que debían trasladarse a otras regiones, a designar un procurador para que los representase durante el juicio residencia. El juicio involucraba no sólo al residenciado principal sino también a otros funcionarios que hubieren estado implicados en el desempeño de cargos durante su gobierno. En este caso, el juicio se hizo extensivo al escribano Luis de Hoyos y al Alférez Real, Juan Ramírez de Velasco, hijo del residenciado.

Una vez llegado al lugar, como era de proceder, el juez residenciador, anunciaba el juicio de residencia a través de edictos publicitados en la capital y en todo el territorio sometido a la jurisdicción del funcionario enjuiciado, invitando a cabildos y, a través de ellos, se convocaba a españoles y a indios a presentar sus demandas contra el residenciado y sus auxiliares, dentro del plazo determinado. El mismo transcurrió hasta mediados de mayo al 28 de diciembre de 1593.

²¹⁹ J. MARILUZ URQUIJO. *Ensayo sobre los juicios de residencia indianos*, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-americanos, CSIC ; XVIII, 1952, 318.

El juicio constaba de dos partes, una secreta en la que el juez averiguaba de oficio la conducta del funcionario, y otra pública, en la que el particular agraviado podía promover demandas y querellas para obtener la satisfacción de los agravios inferidos por el residenciado, si bien, en caso de no llegar a probar las acusaciones, el querellante debía pagar una indemnización. En la parte secreta, el juez solicitaba informes a organismos oficiales, revisaba papeles y documentos públicos, recibía denuncias anónimas, examinaba testigos, etc. La prueba testimonial era muy importante y el juez debía elegir testigos probos para someterlos a un interrogatorio que era preparado siguiendo los modelos tradicionales y las órdenes reales al respecto. De acuerdo con comprobaciones obtenidas, el juez formulaba cargos concretos contra el residenciado, a quien daba traslado para que se produjese su defensa.

La sentencia debía absolver de los cargos o condenar al residenciado. En este último caso, se imponían diversas penas de acuerdo con la falta cometida y según criterio del juzgador: multa, inhabilitación temporal, inhabilitación perpetua, destierro y traslado.

Tau Anzoategui y Martire agregan que, aunque el régimen no fue uniforme ni respetado en todos los casos, en la segunda instancia de este juicio concurría el Consejo de Indias, cuando el residenciado ocupaba oficio de provisión real y la Audiencia en los demás casos. En cambio, en los juicios instaurados por los particulares contra el residenciado, la apelación era sustanciada ante la Audiencia.

Pedro de Ribera, procurador del juicio de residencia, mandó a comparecer a testigos y el juez residenciador dispuso, después de formalizar la querella, la orden de prisión contra Ramírez de Velasco y Luis de Hoyos.

Es indudable el alto grado de litigiosidad que se dio en los repartimientos de los únicos bienes plausibles de generar un valor, como indios y tierras (veremos como en las gobernaciones de Francisco de Aguirre, Nuñez del Prado, Abreu y Lerma aconteció de igual manera). Así, es posible observar como, en el colectivo español, se activaron las demandas de justo derecho y se insiste por la aprobación de los primeros documentos públicos, ya fuere invalidando las actuaciones —en este caso, de los primeros funcionarios públicos—, o sugiriendo el cumplimiento de los contratos de capitulación.

El cabildo riojano estimó que la prisión del ex gobernador era una pena excesiva y prefirió llegar a un avenimiento. Para ello, mandó nuevas instrucciones al procurador Tello con el objeto de llegar a una transacción con el residenciado, a condición de que éste hiciera “desistimiento” de las encomiendas y mercedes que agregó indebidamente a su patrimonio a fin de que ellas pasaran a beneficiar a quienes primitivamente las había otorgado su capitulador Blas Ponce²²⁰.

Los pleitos civiles que se describen, y de los cuales no hay archivos existentes,²²¹ nos presentan un Derecho más ligado a la *convenientia*, donde se buscaba arribar a buen acuerdo.

El juez de residencia, atento a las demás pruebas presentadas por otros cabildos y probanzas del juicio, creyó tener motivos para condenar al ex gobernador a una multa de dos mil ducados. Ramírez apeló la sentencia ante la Audiencia de La Plata (Charcas), la que redujo la pena impuesta por Pedro de La Ribera a la suma de doscientos pesos, con la expresa declaración de que el gobernador «uso el dicho oficio como buen gobernador y juez limpio y recto, haciendo justicia a las partes, acudiendo a las costas de servicio de su Majestad y por esta nuestra sentencia definitiva Ansi lo pronunciamos

²²⁰ Blas Ponce había, como dijimos, sido el financista de la campaña y capitulador. Pero a su vez también era mercendero de tierras. Había recibido de Juan Ramires de Velasco en 18 de abril de 1587 la merced de tierras de Olocopina “situada a treinta leguas [al sud] de Santiago del Estero (...) en plena provincia de los [indios] Sanabirones a orillas del río dulce”, Archivo de Tribunales de Córdoba, Sección hipotecas, sf. Citado por P. CABRERA, *Córdoba de la Nueva Andalucía. Noticias etno-geográficas e históricas acerca de su fundación*, Revista de la Universidad, Córdoba, ed. Bautista Cubas, 1917, 87.

²²¹ Los archivos riojanos sufrieron los embates de la guerra civil de mediados de siglo XIX y la escasez de papel. Marcelino Reyes señala que “durante ocho días, del 22 al 29 de julio de 1841, que permaneció (el general) Lamadrid en la ciudad capital de La Rioja, dispuso la fabricación de pólvora para aumentar la munición de infantería de que se encontraba bastante desprovisto. Con ese motivo ¡parece todavía increíble! Dispuso inutilizar los papeles del archivo de la provincia para hacer cartuchos, destruyendo de esa manera documentos preciosos y de verdadero valor histórico, que se conservaban desde la fundación de la ciudad por el general Ramírez de Velasco”, 107. También Antonio Zinny corrobora que “Consta, por lo menos en la heroica defensa de la ciudad contra los montoneros, en junio de 1862, se echó manos de papeles del archivo para fabricar cartuchos” en A. ZINNY, “Los archivos de La Rioja y Catamarca”, en *Escritos inéditos de Antonio Zinny el redactor del congreso nacional (1816-1820)*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones de la Sección Historia, N° X, ed. Casa Jacobo Peuser, 1921, 267. Dardo de la Vega Díaz ratifica, en 1942, que “La Rioja es quizás la única ciudad que no puede mostrar sus libros capitulares, por haberlos extraviado”, en D. DE LA VEGA DIAZ, “Actas Capitulares de La Rioja”, en RJHyL N°1, enero, febrero y marzo de 1942, pp. 21-44.

y mandamos con costas. Licenciado Cepeda, licenciado Peralta, licenciado Bernardino de Albornos. — *La Plata [hoy Sucre], venticinco de octubre de 1594*”²²².

Roxana Boixadós, investigadora contemporánea del contexto riojano, le quita dramaticidad a la acusación contra Velasco, explicable a razón de que, en la etapa inicial de la conquista, muchas de las encomiendas eran, y cito, “de noticia, es decir, por referencia y conocimiento indirecto, sin que mediara comprobación alguna sobre la existencia de los pueblos [encomendados] su volumen demográfico y localización concreta”²²³.

No obstante, el P. LOZANO es quien detalla las encomiendas de Juan Ramírez de Velasco de 1592. Le adjudica al residenciado los pueblos de “*Anquilpate, Quilacolquicha, Pohonagasta, Yungunigasta, Famatina, Anguinachao, Quimamalinja, Ambaragasta, situados en el Valle de Famatinaguay; Quinmivil, en el valle de Famayfil; Sañogasta, Ampasacha, Cavilanmipa, Lipisgasta, en el valle de Aymocaj. Y por fin los pueblos de Taogasta y Zalaogasta (...)*”²²⁴.

Resulta pues inverosímil que exista un desconocimiento de las localizaciones de los repartimientos por parte de Velasco, “Como dicen los documentos —nos dice Gaspar Guzmán— Ramírez de Velasco anda a lo largo del Valle de Catamarca para llegar a La Rioja. Y lo hace minuciosamente, deteniendo su campo en distintas jornadas a lo largo de una ruta de más de cuarenta leguas. Muchos de sus capitanes hacen una elección teórica de las numerosas regiones transitadas y tal vez algunos inclusive, habrían señalado su elección al gobernador. El caso que apenas fundada La Rioja, Ramírez de Velasco comienza de inmediato a hacer merced de tierras de todo el Valle de Catamarca”.²²⁵ El mismo Ramírez se asigna las mercedes de encomiendas de

²²² R. LEVILLIER, *Papeles de los gobernadores...*, tomo II, 472.

²²³ R. BOIXADÓS, *Los pueblos indios de la Rioja Colonial*, en J. Farberman y R. Montero (comp), *Los pueblos ...*, 15, 2002.

²²⁴ Pedro LOZANO, *Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán*, , ed. Imprenta Popular, Buenos Aires, 5 Tomos, 1874. La cita es del tomo IV, 396

²²⁵ Gaspar GUZMÁN, *Historia Colonial de Catamarca, Poblamientos, fundaciones y desenvolvimiento social*, Ed. Milton, Buenos Aires, 1985, 192.

Sanagasta²²⁶ y las de Quinmivil, que ya habían sido asignadas en las anteriores fundaciones de Londres de Quinmivil de 1558 y Conando de 1562.

Velasco las evaluó, probablemente, como abandonadas de hecho desde hacía treinta años, e incumplidas de la obligación de poblarlas, sin considerar los reclamos que los mercenderos “guardados en derecho” le harán cuando los pregones llamen a formularle cargos de residencia. De hecho, en la misma carta *ut supra*, fechada en “Santiago del Tucumán, octubre 20 de 1591”, dice: “*Yo me quedo aprestando para boluer con setenta hombres a la ciudad de todos sanctos (...) y a castigar algunas cosas que anlli an sucedido principalmente algunos desacatos que el capitan blas ponce a tenido seré de buelta en todo el mes de marzo mediante dios.*”²²⁷

Blas Ponce, –mercendero de tierras y de encomiendas, capitulador, teniente de gobernador y ahora desacatado–, se enfrentó, por razones no muy claras, al mismo gobernador, actitud que sería bastante común en las campañas de exploración y colonización a partir de la superposición de jurisdicciones y mandatos específicos, acordados e implícitos. Pero, como veremos en el parágrafo que trataremos sobre la acción del virrey Francisco de Toledo, la norma distaba mucho de ser vulnerada de manera ostensible. “Hasta por causas muy leves acostumbran pleitear” —dirá Lozano— dicho esto en clave interpretativa que hoy amerita una revisión. Los conflictos se dirimían sobre objetos patrimoniales como los repartimientos de indios y sus instrumentos públicos eran sometidos a continuas legitimaciones ligadas a la verticalidad del mando que, en la esfera gubernativa, habilitaba o limitaba lo actuado por su antecesor. Cabrera dice al respecto que

“Cada Justicia mayor, salvas, naturalmente, algunos muy contadas excepciones, declaraba caducos los repartimientos efectuados por su antecesor”²²⁸, razón por la cual, según una interpretación de Cabrera, el virrey Francisco de Toledo expidió un *Decreto*

²²⁶ “*una prouincia que llaman sanagasta, circunvezina a la de Londres*” le dice Velasco en una Carta al Rey, en R. LEVILLIER, *Nueva Crónica de la conquista del Tucumán*. Varsovia, 1927-29, ed. Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de la República Argentina, tomo III, 339.

²²⁷ R. LEVILLIER, *Nueva Crónica...*, 339, t III.

²²⁸ CABRERA, *Córdoba de la Nueva Andalucía...*, 134.

fechado el 17-IX-1571, mandando “*que se les buelban y restituyan los repartimientos q’s se les hubieran encomendado y quitado por otros gobernadores no pudiendo ni deuiéndolo hazer*”²²⁹. Este decreto surgió de una información que el Virrey hizo levantar en el Cuzco, el 17-IX-1571, para averiguar los excesos cometidos por los Gobernadores del Tucumán; Hernán Mexía Mirabal declaró contra el Gobernador tucumano Francisco de Aguirre afirmando que éste

“dió por ningunas todas las encomiendas y mercedes que avía fecho Nuñez de Prado, y encomendó la tierra de nuevo a las personas que él quiso”; y que (tanto Aguirre como Pacheco) ‘cobraron sus salarios o parte dellos ... de los diezmos que se metían en la caxa, al tiempo que no avía Vicario, y después los novenos pertenecientes a Su Magestad’; y que Aguirre “havía encomendado a un hijo suyo y quitado a una menor, hija de Julián Sedeño (de la encomienda de Soconcho y Manogasta), sobre que ay pleyto entre la dicha menor y el dicho Francisco de Aguirre”.

También el sucesor Zorita “*rrebocó lo que Francisco de Aguirre avía fecho y tornó a encomendar la tierra*”. Asimismo, Castañeda, sucesor de Zorita “*rremovió algunas encomiendas ... y a la sazón se rrevelaron los yndios de aquella tierra y se despoblaron tres ciudades, y el dicho Castañeda se salió de la tierra*”. En la mencionada información declararon además los testigos Pedro Sánchez de Alcayaga, Antonio de Lezcano y Juan Mexía Mirabal - hermano de Hernán -, quien dijo, entre otras cosas, que Diego Pacheco “*rrevocó a Hernán Mexía Mirabal, hermano deste testigo, una encomienda de yndios que tenía por el Capitán Joan Nuñez de Prado*”²³⁰.

Con casi más de dos décadas de acontecidos los sucesos, Hernán Mejía Mirabal continua, en este caso en su *Probanza de Méritos*, resaltando este aspecto de arbitrariedad por el poder político del registro patrimonial de “encomiendas y mercedes” (he aquí un caso nítido de diferenciación vulgar de las mercedes de

²²⁹ *Informe hecho en el Cusco por Francisco de Toledo (etc.) acerca de la quejas hechas por varios vecinos*, AGI, 2-6/11 Rº 24, citado por CABRERA, *Córdoba de la Nueva Andalucía...*,134.

²³⁰ Carlos F. IBARGUREN , en “Mexía Mirabal, Hernán: Biografía Histórica”, Ms. S.f.

encomiendas de las mercedes de tierras en el siglo XVI). Las arbitrariedades estarían dadas, en síntesis, porque el nuevo gobernador, en primer lugar anula las mercedes otorgadas por su antecesor; en segundo término, cambia los registros de los escribanos de la gobernación y por último, en caso de ausentarse, lleva consigo los registros (en este caso a Santiago de Chile), Leemos

“Llegó Francisco de Aguirre —según las probanzas de méritos de Hernán Mexía Mirabal— y se apoderó de la dicha ciudad de Santiago del Estero (aún llamábase Barco); quitó las armas a los vecinos de aquella ciudad, y prendió a los justicias (al Teniente Vázquez Pacheco y a otras personas). Nuñez de Prado, ausente, ‘andava conquistando la tierra’ (en Famatina, con 30 o 40 soldados, y a la busca de minas de oro). El jefe trasandino, en consecuencia, ‘ynbió gente de guerra para que le traxesen antél, y la dicha gente traxo al dicho Joan Nuñez de Prado’. Aguirre entonces, le echó de la tierra (confinándolo a Chile) ... hizo que los Cabildos lo rrecibiesen por Justicia ... y dió por ningunas todas las encomiendas y mercedes que avía fecho el dicho Joan Nuñez de Prado; y encomendó la tierra de nuevo en las personas que él quiso, quitando títulos y rregistros a las personas que los tenían y a los Escrivanos de gobernación. Y estando en la tierra solamente un año governándola, se fue a las dichas provincias de Chile, y llevó consigo todos los dichos títulos y rregistros, y mucha gente y armas de la tierra, y echó della a los frailes que avía”²³¹

Todo el siglo XVI es, en el mundo andino, un espacio no uniforme donde el plan de colonización y conquista del Tucuman es atravesado por conflictos y divergencias ocasionados por múltiples causas. Para los nuevos historiadores del Tucumán colonial, el periodo es que “La Tierra es algo Libre y Vidriosa” titulará magistralmente el historiador del derecho Diego Barrera²³². Antes, en los clásicos, el padre Antonio LARROUY afirma en “Autonomía Catamarqueña” de 1921 que desde el siglo XVI hasta

²³¹ C. IBARGUREN, en “Mexía Mirabal.”, op. cit.

²³² Carta del gobernador del Tucumán Lic. Hernando de Lerma al Rey, Talavera, 28/09/1581, en Biblioteca Nacional, Buenos Aires, TCXXII, N°2129. Darío BARRIERA, un historiador del derecho, afirma que en ese trabajo aquí citado que tratará de “mostrar de qué manera aunque algunos proyectos enfrentados tensaban el diseño jurisdiccional que estaba construyéndose para el sur del virreinato peruano del último cuarto del siglo XVII, sus agentes —de cualquier modo— obraban desde una cultura y universo normativo que tendía a la construcción de la Monarquía católica”, cfr. en “La Tierra Nueva es algo Libre y Vidriosa. El delito de «traición a la Corona real»: lealtades, tiranía, delito y pecado en al jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas (1580-1581)”, en *Revista Ley, Razón y Justicia*, Neuquén, año 8, núm.11, 2010, 281-307.

el año 1627-8 no hay, en el Tucumán, una paz civil ni eclesial y atribuye el desorden al conflicto de competencias eclesiales y civiles y jurisdiccionales. Roberto Levillier publica en 1920 en la imprenta de Juan Pueyo “Francisco de Aguirre y los orígenes del Tucumán 1550-1570”, donde los problemas jurisdiccionales no solo terminaban en hechos de sangre, sino de fe católica al adentrarse en la jurisdicción eclesial. José Toribio Molina, asimismo, publica en 1914 “Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile” donde dedica dos capítulos: el cap. V, “Primer proceso a Francisco de Aguirre” y el X “Segundo proceso a Francisco de Aguirre acaecido en el Tucumán”. Ello explica, en parte, las denuncias expresadas por Mexía más arriba, del cual destacaré un solo aspecto que acá nos interesa: hubo un registro escrito llamado “libros de indios” (registro de encomiendas) los cuales eran transportados consigo por estas huestes, que sumada las guerras civiles acaecidas nos dan cuenta de la inestabilidad intrínseca en esta carrera de guerra al indígena, poblamiento y las disputas, jurisdiccionales y personales de los contendientes.

El planteo de nuevas miradas a nuevos problemas nos indaga replantear las periodizaciones clásicas fundada en eventos señeros. Existen algunos elementos que nos permiten suponer un “antes” en la *ius* historiografía local que abarca el período comprendido entre el comienzo temporal de la ocupación territorial (1585 circa) hasta el llamado por Montes 2° Levantamiento Calchaquí (1633-1662?). Aquel periodo (fines del siglo XVI y primera década del XVII), es, diríamos, un clásico periodo de ocupación inicial, en donde se destacan las expediciones exploratorias y la fundación de ciudades y concesiones de encomiendas. La Guerra de 1630 en adelante oscurecerá estas trastiendas importantes para la historia del derecho y el llamado a defensa por las armas en la lucha contra la resistencia de los indios limitará, por obvias razones, las disputas legales por los recursos humanos y materiales en el colectivo español (Reyno) y entre éste y la Corona (Rey).

Como veremos, la guerra calchaquí afectó, a diferencia del resto del mundo andino, la legalidad de la ocupación de suelo de las tierras de “pan llevar” y se circunscribió a algunos núcleos urbanos y enclaves fértiles. También imprimió, como ensayaremos, a las mercedes de tierras y encomiendas una peculiar característica constitutiva de índole

señorial. Desde lo público, aún en guerra, la licitud de las concesiones siguió siendo un elemento constitutivo de las acusaciones a gobernadores vía juicios de residencia²³³, los que continuaron desarrollándose durante todo el siglo, en parte, por la “conciencia” toledana de que los excesos y abusos de la burocracia de gobierno generaban rebeliones y conjuras que culminaban con mercenderos muertos o gastos militares para sofocarlas, afectando, en todos los casos, a los intereses de la metrópoli.

Intersubjetivamente, “riqueza” y “pobreza” serán tópicos comunes explicativos de orden jurídico del sistema colonial que, como veremos más adelante, se complementan con “orden y desorden”. “Una tierra pobre en metales preciosos pero rica en cantidad de mano de obra y valles fértiles, condujo a varias irregularidades en la conducta que adoptaron tanto los empresarios privados como los encargados de hacer cumplir esas normas”²³⁴. Más aún, Juan Ramírez de Velasco no solo era el encargado de hacer cumplir *esas* normas indianas sino también de producirlas. El acusado por los mercenderos tucumanos de abusar el poder público y asociarse con el escribano para alterar el registro de los repartimientos en 1593, será quién sancionará en el año 1597, en Asunción, las célebres ordenanzas “Dadas por el Señor Gobernador Sobre el Gobierno y Trato de los Indios”²³⁵ en donde sienta las bases jurídicas, en la Región del

²³³ Mercado Villacorta, tasó en dos reales por foja las costas causadas por el juicio de residencia a su antecesor, «En la ciudad de Cordoba a los veinte y dos dias de mes de mayo de mil seiscientos y cincuenta y seis años El señor don alonso de Mercado y Villacorta, caballero de la orden de santiago y gobernador de la pcia de tucuman y por su magestad que dios guarde dijo que por quanto su señoria ha visto y y reconocido en latassasion quede costas caussadas en la residencia que tomo a su antecesor y demas personajes que ha debiandar abido excessos en lo tocante a lo que sea los jueces que lo fueron de las ciudades dondeasistit personalmente por aberlo de hacerque debiendoseles, de lo escrito, dos reales por cada foxa”. Escribanía de hipotecas N°1, Leg. 108, Expte. 1. 1657. AHCo Mercado Villacorta ya habia informado al Rey del “desamparamiento” y se presentó a sí mismo como restablecedor del poblamiento y buen gobierno. En Carta de Mercado de Villacorta al Rey, AGI, Charcas 58.

²³⁴ Alejandra ANELLO, “Familia indígena en el Curato de Londres”, en Judith FARBERMAN y Raquel GIL MONTERO (comp.) *Los pueblos de indios del Tucumán Colonial: Pervivencia y desestructuración*, ed. EdiUnju-UNQ, 2002, 101-138.

²³⁵ AGI, Sec. V, Charcas, 74, 4, leg. 12.

Plata (*provincias del río de la Plata y del Paraguai*), para la *regulae* de todos los problemas relacionados con el *indio*²³⁶.

La personalización del derecho y la historicidad de las “acepciones” individuales-personales de derecho aparece, sin duda, para los constitucionalistas modernos, inmersa en una dimensión exquisitamente autoritaria²³⁷. Es decir, visto como instrumento del *autorictae* del Estado expresado en las manifestaciones “normativas” de las “ordenanzas”, del “Auto”, del “Bando”, del “acto” administrativo y de la “sentencia” judicial. Dicha manifestación destaca la ausencia de una superioridad y un destaco o distancia entre el productor y operador de derecho, por un lado, y la comunidad de destinatarios por el otro²³⁸.

“Orden” y “desorden” serán los denominadores argumentales que se aplicarán sobre los elementos pilares del sistema colonial como lo fueron el trabajo indio y la merced de tierra, íntimamente emparentados con los calificativos de lo lícito y lo no lícito en el lenguaje epocal y en la intersubjetividad *ius* política local. Fue un “desorden” que los mercenderos no “fortalezcan su dominio” con las obligaciones impuestas en las concesiones, pensó Juan Ramírez de Velasco cuando en su paso por Vera (de la actual

²³⁶ Las ordenanzas se transcriben en el apéndice. Y se encuentran comentadas en Juan Carlos García Santillán, *Legislación sobre indios del Río de La Plata en el siglo XVI*, ed. Biblioteca de História Hispanoamericana, Madrid, 1928, 447. Y Enrique de GANDÍA, *Francisco de Alfaro y la condición social de los indios. Río de Plata, Paraguay, Tucumán y Perú, Siglos XVI y XVII*. Ed. El Ateneo, Bs. As. 1939, 572. Según Magnus Mörner “*las ordenanzas de Hernandarias de 1603 se ballarán en Gandía, junto a las del gobernador Ramírez de Velasco de 1597. Tras el estudio de estos textos legales, Gandía llega a la conclusión de que el encomendero era ‘la figura más noble y abnegada de la colonización americana... un misionero civil’, porque sus relaciones con los indios estaban minuciosamente reguladas y porque muchos de los abusos denunciados por las Ordenanzas eran, en realidad, triviales.*” M. MÖRNER, *Actividades políticas y económicas de los jesuitas en el Río de La Plata*, ed. Hyspamerica, Buenos Aires, 1986, 168-169. trad española de *The political and Economic Activities of the Jesuit in La Plata Region* [1968].

²³⁷ GROSSI, *L'ordine...*, 18

²³⁸ Grossi recuerda a Jacques Bodin, teórico de la república, para quien “*le ponti principal de la majesté souveraine et puissance absolue gist principalement a donner loy aux subjectts en general san leur consentement*”, J. Bodin, *Le six livres de la Republique* (1576), 146. El texto de Bodin ya puede ser plenamente situado, según Grossi, “en el moderno” “aunque si bien es aún perfectamente perceptible la huella del comportamiento medieval de la Francia del siglo XVI”, P. GROSSI, “Un derecho sin estado...”, nota 8 de página 171.

provincia argentina de Santa Fe) dicta un “Auto de Gobierno” emplazando por un término de seis meses a los vecinos que tuviesen encomienda de indios, títulos de solares y tierras en la ciudad y que no se encontrasen en la jurisdicción para que volvieran a poblarla so pena de perder sus derechos. Por ello, ordenó edificar en los lotes que tenían en propiedad y trabajar las referidas tierras como chacras²³⁹.

*“por quanto auiedo visto el estado de la tierra y considerando mucha desorden quen algunas cosas a abido particularmente en el servicio de los naturales con gran cargo de conciencia de los bezinos encomenderos y otras dignas de remedio para que de aquí en adelante se obie semejante deshorden y los bezinos y demas personas sepan y entiendan como an de acudir al descargo de la Real Conciencia y a las demas cosas del servicio de su magestad bien y augmento de los naturales destas prouincias mande hacer e hize las hordenanças siguientes”*²⁴⁰

Si monarquía católica articulaba lo local con lo global²⁴¹, la norma será un instrumento de dicha mediación-articulación. No debe obviarse el evidente “desorden” y debe cargarse en la “conciencia” de los vecinos “principales”, responsables estamentales de acudir al sostén del orden, piensa Velasco. Se destaca que, aún no siendo un hombre de derecho, no “naturaliza” las excepciones y, por lo tanto, regula las “conductas”. Este gobernante productor de derecho (el Auto de Corrientes está fechado en Vera el 6 de septiembre de 1596 y el 1 de enero de 1597 en Asunción las célebres ordenanzas) había venido proyectando a lo largo de su gestión de gobierno, “pretendía organizar la administración de las provincias e introducir al propio tiempo reformas sociales que consideraba justas²⁴²”.

²³⁹ Vicente D. SIERRA, *Historia de la Argentina*, Buenos Aires, ed. Unión de Editores Latinos, tomo II, 468 (512), 1957.

²⁴⁰ AGI, Sec. V, Charcas, 74, 4, leg. 12

²⁴¹ Serge GRUZINSKI, “Monarquía católica, mundialización y mestizajes: Algunas pistas para el historiador de hoy”, en *Memoria Americana*, 11, 9-29, 2003

²⁴² Juan SÁENZ-DÍEZ, *Los riojanos...* 88. “no tuvo sin embargo tiempo de aplicarlas, ya que a finales del mismo mes, al emprender viaje de Asunción a la ciudad de la Santísima Trinidad, enfermó en Santa Fe de la Vera Cruz, donde murió (...)”. Como veremos más adelante, con Levellier

En términos excesivamente simples, hacia el 1600, el gradual impulso del “sistema colonial” —desde el virrey Toledo al gobernador tucumano Pedro de Mercado— intentaba dominar el “orden colonial” representado por la preeminencia de los intereses de los mercaderos, como se verá, con diversos resultados.

§ 9. GUERRA CALCHAQUÍ Y ORDEN MERCENDERO

Hay un punto de coincidencia temporal entre los “alzamientos” particulares y la rebelión que estalló, en diferentes fases de intensidad y conflicto, en la región del noroeste riojano ligada al altiplano y el proceso mismo de ocupación hispana de áreas sensibles a la entidad calchaquí como el valle de Hualfín, el valle de Abaucan y el Valle de Famatina²⁴³. A estos alzamientos es posible catalogarlos como rebeliones a causa de “la toma de la tierra” calchaquí (aunque hemos precisado en otro lugar el denominativo sud-calchaquí). La complejidad de las rebeliones radicarán en que los rebeldes (indios y mestizos aliados a éstos) atacarán al sistema colonial en su conjunto a las ciudades cabeceras y con ello enfrenar, como un todo, a las distintas instituciones que lo conforman (cabildo, iglesia, encomienda, merced y tributo)²⁴⁴. Hay una épica diferente a las rebeliones posteriores que estallaron debido a casos puntuales de aumentos de

describiendo la acción del virrey Toledo, y aquí Juan Sáenz Diez respecto a Velasco, se historiza el marco normativo (dictado de ordenanzas) resaltando la acción personal-individual-voluntaria del sujeto (voluntad de legislar), independientemente del sistema colonial (opinión de las Audiencias, etc.).

²⁴³ Sin el ánimo de polemizar con las actuales denominaciones, diremos que cuando diga valle de Abaucan referencio al valle del Bermejo, valle de Hualfín al actual Bélén y valle de Famatina al actual Chilecito.

²⁴⁴ Scarlett O’PHÉLAN GODOY, “Hacia una tipología y enfoque alternativo de las revueltas y rebeliones del Perú Colonial (siglo XVIII), en *Jarbuch für Geschichte von staatswirtschaft Lateinamerikas*, Viena, 21, 1984, 128 y ss.

tributos o reclamos puntuales. En este caso se debió a una disputa soberana en el sentido schmittiano, es decir, por disputar quién, en definitiva, disponía del espacio y los recursos existentes en él²⁴⁵.

Al promediar el primer tercio del siglo XVIII, con más de una década de guerra con los *Calchaquíes*, el régimen de tierras era, literalmente, un caos, debido principalmente a la guerra al indígena y la resistencia de este mediante guerra de guerrillas. Es probable que haya habido planes de despoblamiento total de la ciudad de La Rioja con su cuadrícula ante el constante sitio de los indios alzados, como efectivamente había acontecido con Londres de San Juan Bautista de la Ribera.

Las fuentes documentales nos hablan de un sitio de la ciudad por parte de los indios famatinas y hualfines (dichos vulgarmente calchaquí), cuyos malones

“tres asaltos que dieron a la ciudad los enemigos para llevarse la una hasta nuestros propios umbrales”²⁴⁶

Dirá el informe del *Collegio de la Rioxa* del padre jesuita Diego de Boroa, provincial del Paraguay, en sus Cartas Anuas de 1632-34.

El abandono de la ciudad de Londres hizo de nuevos vecinos a La Rioja y surgen las más evidentes particularidades de esta guerra privada, es decir, a costa de los vecinos. Y, como veremos, esto último incidirá de manera notoria en la conformación del régimen de tierras, íntimamente ligado a la praxis de ocupación del espacio.

²⁴⁵ Hemos elaborado una interpretación “schmittiana” de la excepcionalidad de la disputa entre Calchaquíes (y su *xuntas de guerra*) y las ciudades (tenientes y gobernadores) para describir la disputa por la soberanía del espacio tucumano de mediados del siglo XVII en el sud calchaquí, en A. MERCADO, *El inka volverá*, 56 y ss.

²⁴⁶ ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, *Cartas Annuas de la Provincia Jesuitica del Paraguay*, Buenos Aires, ed. Academia Nacional de Historia, 1990, 73.

¿Quiénes eran los contendientes? Como se analiza en un documento de trabajo²⁴⁷, las huestes que irrumpieron desde mediados del siglo XVI en la región tucumana estaban conformadas por hombres avezados y experimentados en otros procesos de ocupación realizados en diversos espacios del Alto Perú o en algunas zonas de la jurisdicción chilena. A diferencia de otras zonas del virreinato ya pacificadas, los conquistadores²⁴⁸ de nueva generación, muchos ellos hijos y nietos de los fundadores, debieron costear mulas, armas, alimentos y, tal vez, hasta la carga más pesada, la de su “propia persona”, para garantizar las “entradas” de la soldadesca popular en las zonas de los altiplanos, con el objeto de reprimir a los alzados y construir un linaje militar que le otorgue el prestigio de su persona y le contribuya a exigir al sistema colonial una “merecida” recompensa.

Esta situación perpetuó una condición de merecimiento²⁴⁹ por parte de los peticionantes de nuevas mercedes, al tiempo que afectó, tangencialmente, las nuevas concesiones, que fueron reotorgadas no sin antes procurar regular los conflictos que dicha nueva concesión conllevaba. Así, se señalarían las vacas con titulares ausentes, regulándose no tanto una ampliación del dominio sino la reocupación de aquellas posesiones cuyos titulares habían fallecido en la guerra o se habían ausentado por cualquier motivo.

En este marco, es posible observar la movilidad de los peticionantes, tendiente a abarcar posesiones de mercedes de encomienda y de tierras distantes entre sí, al igual que una estrategia que se hiciera costumbre, a partir de la cual, los servicios en la zona

²⁴⁷ Carmen GÓMEZ PÉREZ y Juan MARCHENA FERNÁNDEZ, *Las sociedades indígenas y los conquistadores. Apus y supay*, Quito, en Manuel BURGA (comp.) *Historia Andina*, Vol. II, 1ª parte, Universidad Andina Simón Bolívar, 1996.

²⁴⁸ Sobre la condición social de los conquistadores, véase Juan MARCHENA FERNÁNDEZ, *Ejército y milicianos en el mundo colonial americano*, Madrid, Colección MAPFRE, 1992, 316; y Antonio Gumersindo CABALLERO GÓMEZ, *Milicia castellana y sociedad colonial*, Tesis doctoral, Sevilla, 1990.

²⁴⁹ El sistema colonial fortalecía el orden colonial al mandar a “Ordenar que se guarde las leyes y cédulas reales que están proveídas acerca de encomendar los repartimientos de indios a hijos, nietos y descendientes de conquistadores” *Real Cédula al gobernador del Tucumán, Alonso de Ribera*, fechada el 10 de Julio de 1610 en Aranda, en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN HISTORIA DEL DERECHO, *Libros registros-cedulares del Tucumán y el Paraguay (1573-1716)*, Catálogo, Buenos Ares, ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2000, 78. [414].

de frontera eran remunerados con tierras en zonas apacibles y fértiles. Así, por ejemplo, el cura vicario de la Rioja pide merced de tierras en Cargoya, situada bajo jurisdicción de Córdoba “del Tucumán”, como la que figura en el documento de petición.

“Me dé de una tierras llamadas Cargoyas que corriendo de esta ciudad camino (a) Amelgancho (...) caen a man izquierda al poniente una legua de ancho y dos de largo con sus aguadas. Y confina con la senda que va a la estancia del capitán Don Juan de Cabrera. / y Por mis meritos y servicios y por ser hijo de pobladores y conquistadores de esta ciudad en el real nombre, hacer me merced de estas sierras vacas para poder poblar estancias de ganados mayores y menores y sembrar para sustentarme conforme a la calidad de mi persona”²⁵⁰

Este pedido, elevado por Gaspariño Bazán, cura vicario de la ciudad de La Rioja, a los 28 días del mes de marzo de 1648 ante el Gobernador Gutiérrez de Acosta y Padilla²⁵¹, posee la particularidad de ser el primer pedido de merced que incluye, en su solicitud, la intención de ser “estancias de ganados mayores”. En efecto, a mediados de siglo XVII aparece el punto de inflexión del valor de la unidad económica productiva ligada al uso intensivo de la fuerza de trabajo aborígen, dando paso al usufructo de las condiciones naturales propicias para la cría de ganado mular, caballar y vacuno, lo que constituyó un virtual abandono de la unidad económica de “sementeras”, ligadas a la apropiación de la mitad de lo producido (“a tanto”) en los cultivos realizados por los naturales para adaptarse ya no a una cultura agrícola sino a una “estanciera”.

En otras palabras, a medida que los “señoríos” se hacían más complejos, los bienes y la mano de obra se canalizaban cada vez más hacia un mercado no doméstico ni local. Las dificultades prácticas como las de abastecer con carne vacuna desde su faena hasta su consumo se habían solucionado con el “tasajo”, el cual requería una considerable

²⁵⁰ AHCo, Escribanía de Hipotecas, Leg 23, Expte. 3, 1648-49.

²⁵¹ F. RUBIO DURÁN señala que son numerosos los testimonios que se pueden citar en su capítulo “Guerra y Ocupación” de su obra *Tierra y ocupación*. El Gobernador del Tucumán Gutiérrez de Acosta y Padilla en un mandamiento que dirigió a la ciudad de Salta el 30 de agosto de 1649, es muy ilustrativo respecto al estado de guerra “y en esta ocasión, milita más la razón cuando la opinión y el nombre de la nación española, tan invicto en todas las naciones y en especial en estas Indias, está tan caído y postrado, particularmente en esta provincia [del Tucumán], con guerras tan dilatadas con los calchaquíes, donde jamás han sido sujetos aunque diversas veces intentado”, A. B. H. Sa, Actas Capitulares, fol. 367 vta.

demanda de horas / hombre que, sumada al coste de transporte, no incentivaban ni una solicitud constante ni su producción a gran escala. A su vez, el trabajo sometido a rutinas, la extracción de servicios y / o apropiación de tributos y bienes metalíferos y comestibles llevada a cabo por el colectivo hispano había llegado a un punto crítico de inmovilidad de la mano de obra dividida por estaciones de cultivo. La plata acuñada, principal incentivo para el acopio, había permitido a los ganaderos atesorar un excedente que iba a posibilitar la compra de más ganado a través de la cual se podría llegar a superar el espacio comarcal por la posesión de cabezas en varios predios sin la necesidad de tener que depender de mano de obra intensiva, esto en razón de que el cuidado de la ganadería (mular y vacuna) era realizado por un puñado de “gauchos” semiespecializados y tampoco se necesitaba realizar inversiones en la transformación del entorno físico. El crecimiento del comercio, especialmente el comercio a grandes distancias, se desenvolvía en una amplia red de caminos y carretas que encarecía el producto, aunque nunca en igual proporción al del ganado mular y vacuno que se transportaba en pie, desde La Rioja, al mercado salteño o de Copiapó y de allí a Potosí. La tecnología ganadera dio un salto sobre la agrícola y cultívigena de la mano de empresas comerciales para el abastecimiento de los centros mineros²⁵².

¿Y cuál fue la influencia sobre el mercado de tierras y sobre el título de tierras? El mejoramiento y adaptabilidad del producto ganadero como bien idóneo con elevado valor de cambio, no debe entenderse de manera lineal como un incremento de las grandes propiedades –“haciendas” o “estancias”- las que, en ocasiones, desplazaron a los indígenas, con sus “bañados”, “chácaras” o “chacras”²⁵³, melgas y huertos y a otros pequeños productores, con el objeto de criar ganado o combinar cría y siembra. Por el

²⁵² Juan VILLAMARÍN y Judith VILLAMARÍN, *El trabajo indígena.....op cit*, 13-72.

²⁵³ Voz aimará de amplia difusión en la Gobernación de Tucumán y en Charcas, que según SOLÓRZANO PEREIRA, *Política Indiana* (lib.VI, cap. XIII), puede equipararse a la huerta en España “Casa de campo para labranza”; este americanismo se entiende, en cualquier diccionario moderno de la lengua castellana, como “habitación rústica en donde convivían indios en estancias separadas”. En Chile hoy se señala como “propiedad rústica, no tan grande como una hacienda ni tan pequeña como una quinta o granja”. En Argentina y Chile “sementería o haza de maíz, trigo, zapallos o sandías y melones y aún toda clase de plantas. En las colonias o pueblos recién fundados, cada una de las divisiones de tierra destinados a la labranza, a diferencia de las manzanas señaladas para la formación de pueblos”.

contrario, parece haber fomentado un proceso de adecuación entre los poseedores de mercedes y los poseedores de ganado. Estos últimos compraban con la moneda que poseían, es decir, con plata o mulas.

*“Sepan quanttos esta pública escriptura de Ventta Real Vieren como el Capittan Don Joseph Camargo [hijo] residente en esta ciudad de San Juan de La Frontera y abesindado en al Ciudad de San Luis de Loyolla (...) otorgo y conosco por la Presentte Cartta que Doy en Bentta (...) al Capitan Antonio Reinoso Vecino de La Rioxá, (...) a saber Un pedasso de Tierras con la Aguada llamada Vlape, que tendrá dicho pedasso de tierras en conttorino dos y tres leguas en la jurisdicción de La Rioxá (...) em precio y quantía de quatrocientos y sinquenta pesos en generos. Y tengo (...) sinquenta pesos en platta mas dos mulas mansas que me dio a nuebe pesos que me dio y pago por esta cuentta y que da el dicho obligado a dar treinta mulas de a dos (...) al precio de quatro pesos cada Mula que así se a ajustado. Y el resto que quedare (...) nos ha de dar en Lienzo (...)”*²⁵⁴

En 1732, el ganadero Reinoso compraba así la merced de Ulapes a los herederos del mercendero Gómez Carmargo, quien la había obtenido en merced en 1692, es decir, tierras a cambio de pesos de plata y mulas, generando toda una tendencia patrimonialista en las tierras bajas aptas para el pastoreo.

De este ejemplo es posible inferir dos elementos comunes del proceso de constitución de la territorialidad. Por evidente, como veremos, una es la concesión propia de mercedes, pero otra, menos importante, pero de gravitación constante, es el mecanismo de transmisión privado y transacción de los bienes raíces a través de instrumentos públicos como las “Cartas de Venta”²⁵⁵.

Por el lado de lo público-institucional, concluida la Guerra Calchaquí y después de desplegada una agresiva política de “pacificación”, se visualiza un fortalecimiento del

²⁵⁴ AJLR, A-395.

²⁵⁵ Para la cuestión de las trasmisiones, véase el § 27 “*Siguiendo el orden de la costumbre: praxis y transmisión de situaciones reales*”, 437 y ss. del presente trabajo.

poder del estado. Comienza a perder entidad la imagen del gobernador andariego, medio juez y militar. El poder concentrado en el Estado, y simbolizado nominalmente en el monarca, fue ejercido, en la mayoría de las ocasiones, por escrito y de la mano del Gobernador, lo que dio paso a que se brindara una mayor atención al Derecho vigente.

En síntesis, el régimen de tierras se mantuvo sólido en cuanto a la petición y el procedimiento administrativo, lo que, visto desde la perspectiva pública, brinda indicios de una consolidación del poder político del Gobernador en detrimento de los órganos colegiados tales como el cabildo de ciudades o la mismísima Audiencia y de las reglamentaciones emanadas por los visitadores.

En este contexto, las funciones del gobernador, y dentro de ellas las de la guerra, alcanzarían notables consecuencias sociales en los actores vencidos (las parcialidades indígenas levantadas en armas) debido a que su condición de “desnaturalizados”, *ipso facto* (por disposición derivante inmediatamente del hecho), implicaría la pérdida efectiva de derecho sobre las tierras de origen, sumiéndolos en esclavitud al servicio de un titular de merced de tierras, de encomienda o reduciéndolos en otra jurisdicción, como veremos en el caso de los indios quilmes, (amaichas, tafíes, etc.) hualfines (famaillás, pituviles, etc.) y abaucanes (fiambalás, tinogastas, etc.) y reubicando a los indios “amigos”²⁵⁶. El reparto de cautivos de guerra era una costumbre instituida a favor de mercenderos que financiaban la participación de soldados e indios leales en las campañas. Estas “piezas”, según Boxiados, “debían seguir a sus ‘dueños’, y revestían un *status* similar al de los yanaconas (por su adscripción personal y por estar separados de su comunidad)”²⁵⁷.

²⁵⁶ Según Zinny, Mercado Villacorta, apenas reducida la nación calchaquí, a los pacciocas, culalahos y tolombones “*por la brillante conducta (...) que auxiliaron a las armas españolas contra los calchaquíes*” se les señaló el Valle de Chamoros “*contra los tafíes*”, y a los amaychas, amhuaychas, anfamas, tucumangastas, amchacpas e illancas, se los ubicó cerca de Esteco, “*contra los mocovíes*” en evidente función defensiva. “*Y con el fin de cortar la retirada a los bárbaros, perdiendo para siempre esperanza [los indios] de recuperar su país [calchaquí], el gobernador de Mercado hizo a muchos españoles merced de diferentes repartimientos de tierra*”, A. ZINNY, *Historia de los gobernadores...* t.1,139.

²⁵⁷ Roxana BOIXADOS, “Indios rebeldes –indios leales. El pueblo de famatina en la sociedad colonial (La Rioja, siglo XVII)”. En *XAMA* Publicación de la Unidad de Antropología. Instituto de Ciencias Sociales y Ambientales, Mendoza, 1998, 170.

Las visitas ordenadas por los gobernadores, tales como lo fuera la destinada a censar a los indios desnaturalizados a la fuerza, describían fielmente el carácter servicial de los indios esclavizados o “artículos de cambio”²⁵⁸. La fuente que prueba lo afirmado se encuentra en un documento inédito titulado “*Reconocimiento y registro que hizo personalmente el gobierno desta provincia con asistencia del justicia maior desta ciudad de La Rioja (...) de todas las quadras y chacras en que estan sitiados los indios y familias desnaturalizados de dcho Valle de Calchaqui por las composiciones que hicieron de ellas dando medios para su passificación y conquista. 5 dias del mes de mayo de seicientos sesenta y siete años*”.

Mercado Villacorta, el gobernador del Tucumán que, en 1666, reprimió los últimos focos del gran levantamiento, impulsó de manera inmediata la desnaturalización a través del traslado forzado de familias indígenas a cientos de kilómetros de sus asentamientos naturales. El caso más extremo es el de los indios yocabiles llamados quilmes, quienes fueron trasladados desde Tañi del Valle al sur de la provincia de Buenos Aires²⁵⁹. Al año siguiente se impulsa, desde la gobernación, un registro o censo de los naturalizados desagregados por jurisdicción de destino, el que ha llegado hasta el presente, aunque de modo parcial²⁶⁰.

²⁵⁸ Gastón DOUCET, “Sobre cautivos de guerra y esclavos indios en el Tucumán. Notas en torno a un fichero documental salteño del siglo XVIII”, en *Revista de Historia del Derecho*, núm. 15, 1990, 137.

²⁵⁹ “Un hallazgo confirma el origen indio de la ciudad de Quilmes” titula con firma de E. Pogoriles, el diario CLARÍN del 6/1/02. Según el periodista, Quilmes era parte de la “Reducción de la ‘Exaltación de la Cruz de los Indios Quilmes’ y estaba al lado de la primitiva capilla construida por sacerdotes jesuitas y mercedarios. La antigua reducción fue un asentamiento agrícola creado en 1666 por los españoles con 200 familias de indios Quilmes desterrados de los Valles Calchaquíes, en el noroeste de Tucumán y trasladados a las orillas del Río de la Plata luego de ser vencidos en una cruenta guerra. Bajo el control de ‘encomenderos’ españoles y sacerdotes, los indios cultivaron sembradíos de trigo y construyeron hornos de ladrillos y cal. La reducción india era también una ‘encomienda Real’ y tenía que pagar impuestos al rey de España. Por eso a partir del año 1700 se traen además indios guaraníes y araucanos, se establecen barracas para esclavos negros traídos de África y florece el contrabando”. POGORILES, E. Un hallazgo confirma el origen indio de la ciudad de Quilmes [de provincia de Buenos Aires, Argentina]. Clarín, 6 de enero de 2002..

²⁶⁰ « El Valle saca provecho de este reparto pues se entregan “las trescientas cincuenta [familias] a la ciudad de La Rioja y al Valle [de Catamarca]... para el beneficio de las viñas y algodones”. En 1671 el gobernador del Tucumán don Angelo de Peredo escribe que entre el Valle y La Rioja “de los desnaturalizados del Calchaquí se repartieron más de ochocientas familias», Romualdo

Por otra parte, el documento en cuestión nos permite describir cuál era la geografía de las familias titulares de merced de tierras, vueltas chacras en La Rioja. Piénsese que, en la lógica *casus belli* del derecho de conquista, se otorgaba, por *compossision* un número de indios adultos desnaturalizados a dueños de chacras, no solo debido a un probado merecimiento por su participación con costas en la guerra sino porque poseían los medios —las tierras— para *gouernar su sustento*. Así, a cambio de adoctrinarlos en la religión cristiana e idioma español, cuya socialización se denominaba *passificasion*, el mercendero obtenía el usufructo de su fuerza de trabajo.

En consecuencia, ochenta y un indios adultos con sus familias y otras tantas “piezas sueltas” que totalizaban 509 personas fueron repartidos en veintiún chacras de la ciudad de La Rioja. El impacto que produjeron al ser repartidos entre los dominios de un centenar de españoles y criollos debió ser importante desde varios puntos de vista, entre ellos el demográfico y étnico, dado que vino a institucionalizar como una regla señorial el trabajo servicial, *servus*, de los sitiados a favor del colectivo dominante.

En 1667, el proceso de registro manuscrito fue minucioso dado que se utilizaron intérpretes “de la lengua general de los calchaquies” quienes entrevistaban a cada uno de los indios “sitiados” en mercedes de chacras. A pesar de las denuncias realizadas a sus “sustentadores” por carecer de tierras asignadas y cuotas establecidas de *quantidad* de trabajo, que violaban las cédulas garantistas de los derechos de los naturales, jamás recibieron respuesta local. Por el contrario, el maestre mayor de justicia de la ciudad de La Rioja y encargado del registro opinaba que durante el servicio doméstico que las indias mujeres realizaban, en los domicilios de los propietarios de cuadras y chacras, actividades educativas en la casa del patrón, sin reparar en que el personal de servicio estaba textualmente prohibido por el derecho Indiano.

“Assi se les dexo adbertidos que tratassen degouernar su sustento y cultivar las tierras bajas dela chacra en que estan poblados y que an escoxido y porque otro destos indios sea ocupado en texer y los demas en el servizio dela chacra. Algunas de las mugeres asistiendo en la cassa del padron que sea de hacer y ajustar la

ARDISSONE, *La instalación humana en el Valle de Catamarca. Estudio Antropogeográfico*, ed. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, tomo XXVII, La Plata, 1941, 122.

uenta con cada uno y pagarles el alcance en ovejas o en cordellatte como pidiesen= Por lo que toco al Pecado la gente delas familias que a asistido en lacassa del dueño de esta chacra an aprendido algo con el servizio doméstico y los demas no an empezado a ser adoctrinados por eso dejose adbertido al particular en tanto que aya doctrinante.”²⁶¹

Los indios desnaturalizados reclamaban la asignación del pago en ovejas para poder tejer ropas a sus hijos. El registrador dio por sentado que siempre existirían reclamos de “este tipo”. Es más, contradiciendo las ordenanzas virreinales de Francisco de Toledo dirigidas a los “señores y dueños de las chácaras” (especialmente la ordenanza XI y XIV) y las Ordenanzas de Alfaro —referidas al trato y prohibición del servicio personal— elabora el informe donde conciente esa clase de socialización efectiva, y concluye que “*an aprendido algo con el servizio doméstico*”.

Pero el orden colonial estaba montado, como dijimos, en un ya eficaz equilibrio pendular como era el derecho indiano. He aquí entonces que, de manera abrupta, esta visita general *sui generis* ordenada por Mercado en febrero de 1667, fue suspendida en diciembre del mismo año por mandato del fiscal Portales amparado en un decreto de la Audiencia e inmediatamente la decisión fue acatada por el gobernador²⁶². Se consideraba que la facultad de realizar visitas generales era privativa de las Audiencias, lo que desautorizaba la orden impartida por el gobernador a sus tenientes de las ciudades de la provincia quienes eran los que realizaban la visita a las encomiendas de sus respectivos distritos. En consecuencia, el gobernador no podrá delegar en un teniente de ciudad, que detenta, además, el *status* de vecino mercendero de tierras y encomiendas, el control fiscal y legal de los asuntos públicos de bien general como lo son la dominación de las parcialidades rebeldes. Como veremos, el sistema colonial triunfa al implementar la visita de un burócrata profesional y hombre de derecho como Martínez Luxan de Vargas. Pero no solo ello, entre ambas visitas (la ordenada por el gobernador —en rigor solo “reconocimiento y registro”— y la ordenada por el Consejo de Indias), se había publicado en Madrid la “Recopilación de Leyes de Indias”, en 1680,

²⁶¹ AHCo; Escribanía de Hacienda, 2, Leg. 2, 1664 a 74.

²⁶² AGI; Escribanía de Cámara 874 A, pieza 1º, fol. 468.

y habían sido impresas las “Ordenanzas del Perú” en 1685²⁶³, lo que dio a funcionarios públicos como el Oidor, un instrumento de aplicación de derecho nunca antes visto²⁶⁴.

Al solo efecto de presentar esta cosmovisión letrada, permítanme reproducir una parte de la introducción de Tomas Ballesteros para quien, la imagen que estas leyes indianas le dan al *Nuevo Orbe* un lugar en el templo de la fama debido a que, aún con rotos eslabones de la cadena que unen al pueblo con el rey, las ordenanzas vienen a engarzar hasta perfeccionar la dirección de la cadena política regia que abraza las provincias y obliga suavemente a ser oídas por los vasallos habitantes de este nuevo mundo. En sus palabras:

*“el apacible ruido de sus cadenas será vínculo en la memoria, su aspecto será indefectible recuerdo de los beneficios que V.Exc. ha hecho a este Reyno venciendo grandes dificultades, viniendo con sucesivo engace los rotos perdidos eslabones de las Ordenanzas hasta perfeccionar sus sabias direcciones la cadena política, que abraza todo el régimen de estas Provincias, y atrae suavemente por los oídos la obediencia de sus habitantes.”*²⁶⁵

Como se aprecia, el optimismo recopilador no descuida de mencionar los “eslabones rotos o perdidos” de las ordenanzas para los cual el tiempo ineludiblemente perfeccionará su difusión y su aplicabilidad por las sabias direcciones a su “cadena política”. Por ellos los oidores son los idóneos para visitar la tierra. Y la visita debe identificar, cuantificar, señalar primero quienes y qué, cuales son los delitos y cuáles no, dentro de una *iuris dictio*, no ya “partido” sino dentro de jurisdicciones precisas tucumanas y enmarcadas en un derecho procesal indiano.

²⁶³ Tomas de BALLESTEROS, *Tomo Primero de las Ordenanzas del Perú*, Lima, impresas por Joseph de Contreras, 1685.

²⁶⁴ Víctor TAU ANZOÁTEGUI, “Órdenes normativos y prácticas socio-jurídicas. La justicia”, Separata de la *Nueva Historia de la Nación Argentina*, tomo II, Academia Nacional de Historia, Buenos Aires, ed Planeta, 1999, 294.

²⁶⁵ Tomas de BALLESTEROS, *Tomo Primero...*, Lima, 1685, 142. reproducción facsimilar en línea en <https://archive.org/stream/tomoprimerodelas01peru> (Consultado el 21-02-15)

Tabla 2: Encomiendas por nombre del titular de la encomienda y número de indios de tasa a cargo según la visita del Oidor Martínez Luján de Vargas de 1693²⁶⁶

Indios en encomienda en la jurisdicción en Todos los Santos de la Nueva Rioja		Encomendero	N° indios Tributarios presentes	N° de Tributarios ausentes
1	Calchaquies y mocovies	D. Jacinto de Mercado y Reinoso	3	—
2	Calchaquies y mocovies	D. Antonio de Almonacid	2	—
3	Calchaquies y mocovies	D. Santos de Toledo y Pimentel	—	—
4	Calchaquies	Francisco de Barrionuevo	1	—
5	Calchaquies	Domingo Calisto	1	—
6	Calchaquies y mocovies	D. Martín de Villafañe y Guzmán	5	—
7	Ladinos y calchaquies	D. Diego de Toledo Pimentel	3	—
8	Atilos y calchaquies	D. Alonso Moreno Gordillo	10	2
9	Calchaquies	D. Juan de Herrera y Guzmán	1	—
10	Calchaquies	Jacinto de Contreras	2	—
11	Calchaquies	D. Pedro de Luna y Cárdenas	1	—
12	Puluchanes y calchaquies	D. Francisco de Herrera y Guzmán	4	1
13	Calchaquies	Francisco Gonzáles de Vargas y Machuca	1	—
14	Calchaquies	Esteban de Avila y Barrionuevo	1	—
15	Tobas	Pedro Quintero	2	—
16	Colosacan(es)	Antonio de Escobedo	2	—
17	Calchaquies	Pedro Díaz de Alvarado	4	2
18	Tobas	D. José de Toledo Pimentel	1	—
19	Amilganchos, calchaquies y tobas	D. Luis Gutierrez Gallegos	7	1
20	Tobas	D. Ignacio de Mercado y Reinoso	1	—
21	Calchaquies	Isidro de Córdoba	1	—
22	Calchaquies	Francisco del Moral	1	—
23	Calchaquies y tobas	D. Baltasar de Herrera y Guzmán	1	1
24	Anguinan(es)	Felipe de Luna	3	—
25	Ladinos y calchaquies	D. Sebastián Rufo de Sotomayor	4	—

²⁶⁶ AGI; Escribanía de Cámara 864 A, pieza 5°, fol. 3 y ss.

26	Calchaquíes	Mauricio Beriel de Vega	1	—
27	Calchaquíes	D. Francisco de Villafañe	1	—
28	Calchaquíes	D. Diego de Salinas	—	1
29	Calchaquíes	D. Juan de Cabrera	1	—
30	Calchaquíes	Francisco Fernández Romero	2	—
31	Calchaquíes	Juan Nieto Principe	2	—
32	Quilmes	Manuel Alvarez de Ochoa	2	1
33	Quilmes	José Díez de Oviedo	—	—
34	Guaco(s)	D. Gil Gregorio Bazán de Pedraza	21	8
35	Siján, paganso(s) y calchaquíes	D. Baltasar de Villafañe	8	—
36	Mocaolingastas, calchaquíes y mocovíes	Juan Sánchez de Loria	1	—
37	Calchaquíes y mocovíes	Domingo Nieto Principe	1	—
38	Chocoagasta (cochangastas)	Da. Clara Moreno Gordillo	1	—
39	Calchaquíes	Diego de Soto	—	—
40	¿?	Jose Gómez de Brito	2	1
41	Famatinas y sanagastas	Francisco Moreno Maldonado	14	6
42	Calchaquíes y mocovíes	Andrés Perez de Arce	1	—
43	Bichigastas	D. Francisco de Tejeda Bazán	27	4
44	Aimogastas	Melchor Carrizo	10	11
45	Anguinan(es)	D. Juan de Gregorio Bazán de Pedraza	57	4
46	Machigasta(s) y Aminga(s)	D. Juan de Adaro y Arrazola	26	2
47	Malligasta(s)	Juan Clemente de Andrada	25	3
48	Olta(s) y calchaquíes	Gregorio de Brizuela	6	—
49	Pituil(es)	Felix de Barrionuevo	11	1
50	Pisapanacos	D. Manuel de Villafañe y Guzmán	12	—
51	Tinogastas	Juan de Vega y Castilla	18	4
52	Los Sauces	José de Carrizo de Andrada	22	—
53	Calchaquíes	Nicolás Enriquez	1	—
		Summa	337	53
		Totales	420	

Fuente: AGI; Escribanía de Cámara 864 A, pieza 5°, fol. 3 y ss.

Así, por ocasión de la visita del oidor Vargas tenemos los datos. En la gobernación del Tucumán había 258 mercedes de encomiendas. La mayoría de los indios encomendados pertenecía a las etnias calchaquíes y mocovíes —según el mismo Oidor—, que tanto el gobernador Mercado de Villacorta como Ángel de Peredo habían desnaturalizado y repartido como grupos de familias o como indios adultos “suelos”. Desnaturalizado, por

definición, era aquel indio que no era natural de la tierra que habitaba, a partir del traslado forzoso. Los indios desnaturalizados no necesariamente debían pertenecer a otras jurisdicciones -como de hecho lo eran los mocovíes, tobas y omegas— sino que, siendo riojanos y habiendo participado de la guerra en contra del colectivo hispano, habían sido desnaturalizados dentro de la misma jurisdicción, como fuera el caso de los atiles, guandacoles, famatinas, anguinanes y capayanes.

§ 10. LA APLICACIÓN DE SANCIONES A ENCOMENDEROS RIOJANOS POR EL OIDOR LUJÁN DE VARGAS EN SU VISITA DE 1693²⁶⁷.

Como afirmamos en trabajos anteriores es importante para la comprensión historiográfica de una civilidad comunitaria andina el abordaje de las ordenanzas que tratan el laboreo indígena y por ellos hemos insistido en la validez de la transcripción de documentación edita e inédita, desde Toledo (1575) a Abreu (1576) y Alfaro (1612), a gobernadores tucumanos Juan Ramírez de Velasco (1597), Pedro de Mercado (1598) a Alonso de Ribera (1606)²⁶⁸. La elección por el derecho indiano —que integran dichos

²⁶⁷ Una versión anterior del presente capítulo en Adrián MERCADO REYNOSO “Estatidad del Derecho Indiano en la aplicación de sanciones a los encomenderos riojanos en la Visita de 1693”, en: *Actas de las XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino*, Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho, Buenos Aires, ed. Dunken, Setiembre de 2004. Agradezco los comentarios y sugerencias de Víctor Tao Anzoategui.

²⁶⁸ Pionero en las transcripciones del AGI fue el trabajo de Juan Carlos GARCÍA SANTILLÁN, *Legislación sobre indios del Río de La Plata en el siglo XVI*, editado por Biblioteca de Historia Hispanoamericana, Madrid, 1928. Las del virrey Toledo y las del Gobernador Ramírez de Velasco en mi trabajo, *Tierras, Cosas, Conussetudes...*(2003) pp.251-269; las del Gobernador Pedro de Mercado de Peñaloza en Josefina PIANA DE CUESTA, “La visita de los indios de servicio en Córdoba del Tucumán”, en *Historiografía y Bibliografía Americanistas*, XXXI-1, Sevilla, pp. 27-61; las del Gobernador Alonso de Ribera en Leticia Daniela CARMIGNANI, “Política colonial y sociedades indígenas en la Gobernación del Tucumán. El gobernador Alonso de Ribera, los tenientes de naturales y la elite encomendera durante la vigencia de las Ordenanzas de Abreu”, 108-117, en *Actas. Foro de Iniciación en la Investigación*, 2015, Aldana Calderón Archina ... [et al.] - 1a ed. – Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Editorial de la UNC, 2015, y Leticia CARMIGNANI, «Las visitas de los *tenientes de naturales* a los *partidos de pueblos de indios* de la gobernación del Tucumán. (1606-1607)», *Corpus* [En línea], Vol 3, No 2, <http://corpusarchivos.revues.org/548> (Consultado 12/12/2015).

dispositivos normativos—va entendida como una opción epistemológica que llamamos ius-política y de aplicabilidad local.

Con ya un siglo de presencia efectiva en La Rioja, el orden colonial estaba montado, como dijimos, en un eficaz equilibrio pendular como era el derecho indiano. He aquí entonces que, de manera abrupta, esta visita general ordenada por Mercado en febrero de 1667, fue suspendida en diciembre del mismo año por mandato del fiscal Portales amparado en un decreto de la Audiencia e inmediatamente la decisión fue acatada por el gobernador²⁶⁹. Se consideraba que la facultad de realizar visitas generales era privativa de las Audiencias, lo que desautorizaba la orden impartida por el gobernador a sus tenientes de las ciudades de la provincia quienes eran los que realizaban la visita a las encomiendas de sus respectivos distritos. En consecuencia, el gobernador no podrá delegar en un teniente de ciudad, que detenta, además, el *status* de vecino mercendero de tierras y encomiendas, el control fiscal y legal (como lo es una visita) de los asuntos públicos de bien general y las intervenciones estatales relevantes en la gestión de la política de indios.

De cualquier modo, La Rioja de la visita de Vargas fue una de las jurisdicciones con mayor número de encomenderos (53), antecedida por Catamarca (72) y precedida por San Miguel (31), Santiago del Estero (31), Córdoba (32), Salta (30) y San Salvador del Jujuy (9)²⁷⁰. Estas cifras, muy poco seguras debido al método de convocatoria a empadronamiento por parte del visitador²⁷¹, sirven de aproximación para establecer las

²⁶⁹ AGI; Escribanía de Cámara 874 A, pieza 1º, fol. 468.

²⁷⁰ AGI, Sec VI, Escribanía de Cámara 864 A y B, piezas y folios varios; (*Juicio de Residencia* de Peredo AGI, Sec. VI, Escribanía de Cámara 874 A, pieza 1º, fol. 468-469. En este documento el fiscal Portales ordena a Mercado la suspensión de la visita por “que la facultad de realizar visitas era privativa de las Audiencias y no de los gobernadores” que está en el juicio de residencia de Peredo. También en José Torre Revello, *Documentos históricos y geográficos relativos a la conquista....*, pp 269-270, donde puede encontrarse el informe que Mercado Villacorta dirigió a Peredo fechado en Salta abril de 1670.

²⁷¹ El visitador D. Antonio Martínez Luján de Vargas, mandaba a pregonar en todas las ciudades que visitaba la real cédula del 3 de octubre de 1690, en el que ordenaba que se presentasen los encomenderos con sus indios dentro de plazo estipulado en determinado lugar y una vez allí los interrogaba; AGI Sec VI, Escribanía de Cámara 864 A, pieza 5º, fol 3. «mando que dicha cedula se publique para que llegue a todos y los encomenderos recojan los Yndios de sus encomiendas Y los traygan adentro de Dos dias Los que no estan en pueblos formados sino en la haciendas de sus encomenderos Y dentro de ocho los de los Pueblos por las dificultades que ay (...) siendo presentes y por testigos el Maestre de Campo don

magnitudes, no solo en lo que se refiere a los aspectos institucional y demográfico de la encomienda, sino también al peso específico que este sector social, el de los “beneméritos”, tuvo en cuanto mercenderos de encomiendas y de tierras dado que estaban obligados como vasallos calificados, a cumplir con lo “que esté ordenado en materia de gobierno” por el virrey, las ordenanzas y el propio Auto General²⁷² dictado en La Rioja el 11 de julio de 1693 del visitador Vargas,

*“En la ciudad de La Rioja, en once dias del mes de julio de mil y seiscientos y noventa y tres años, el señor doctor don Antonio Martínez Luján de Vargas, su oidor más antiguo de la Real Audiencia de la ciudad de La Plata y visitador general de esta provincia del tucumán por especial comisión del Rey nuestro señor, etcétera”*²⁷³

Este auto, que transcribimos íntegramente en el apéndice final²⁷⁴, posee un valor singular, no solo porque menciona varias veces múltiples títulos de la recientemente impresa “Recopilación de Leyes de Indias” sino porque “es un momento de aplicación del Derecho —que al decir de Francisco Tomás y Valiente— esto es, el proceso logrado o frustrado de convertir valores, ideas y conceptos técnicos en normas sociales actuantes, prácticamente vividas”²⁷⁵.

La sola presencia del visitador imponía respeto y recato a los funcionarios, frenando el despotismo de virreyes, oidores y gobernadores²⁷⁶ e impidiendo las usurpaciones de

Francisco Moreno Maldonado, Theniente desta dcha ciudad Don Manuel Villafañe, Juan Clemente de Andrada Alcalde Ordinario, Don [ilegible] Bazan regidor, El Veinte Y quatro Don Juan de Herrera,, El Veinte Y quatro Don Diego Ignacio Bazan, El Veinte Y quatro Don Luis Gutierrez Gallego y otras muchas personas» AGI 864 A, fol. 630 y vuelta.

²⁷² AGI Escribanía de Cámara 864 A, pieza 5º, fol. 326-329v.

²⁷³ *Ibidem*, fol. 326.

²⁷⁴ Véase Apéndice, documento 11, 200, Auto General dictado en La Rioja el 11 de julio de 1693 del visitador Vargas.

²⁷⁵ Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Prólogo al libro de Paolo GROSSI, *El orden jurídico medieval*, Madrid, 1996, ed. Marcial Pons, 256, Trad. de F. Tomás y Valiente y Clara Alvarez.

²⁷⁶ Ismael Sánchez BELLA, *Eficacia de la Visita en Indias*, AHDE, 1980, 383-411.

tierras avaladas por los comisarios y jueces de tierras²⁷⁷. La complejidad administrativa del accionar de “justicia” puede ser descripta en forma sintética a partir del análisis de la causa que se le abriera a cada encomendero. A modo de ejemplo, tomemos la encomienda de Jacinto de Mercado y Reynoso, quien poseía formalmente, en la merced de tierras de Las Pampas, a tres indios de tasa quienes lo denunciaron por no recibir ni paga ni suficientes alimentos, ni prendas, ni se les había señalado tierras para su propio cultivo²⁷⁸, al tiempo que los hombres trabajaban medio día seis días a la semana, incluidos aquéllos que eran menores de edad. El visitador corrió traslado de descargo al imputado y, finalmente, lo condenó a pagar 100 pesos a la Cámara, más dos pesos a cada una de las hiladoras de tejidos, así como a cada una de las encargadas del servicio personal de la familia, otorgándole un plazo de tres días para que “asigne y señale tierras con agua” a sus encomendados.

“Fallo atento a los autos y méritos desta causa que por la culpa que resulta debo condenar y condeno al dho Jacinto Mercado en cien pesos de ocho reales aplicados a la Camara de su Mag Y en las costas de esta caussa. / Y por lo que le toca al interes de sus encomendados Mando que a cada una de las indias que ha tenido en su casa y repartido hilado (...) page dos pessos de occho reales en que por justas consideraciones lo modero. Y mando que dentro del tercer dia asigne y señale

²⁷⁷ John V. MURRA et al. (ed.), *Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562 [de] Iñigo Ortíz de Zuñiga, Visitador*, Huánuco (Perú), Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Letras y de Educación, 1967-1972, 2 vols.

²⁷⁸ «Don Jacinto de Mercado Reynoso,» / SELLO QUATRO VN QUARTILLO, AÑOS DE MIL SEISIENTOS Y OCHENTA Y NUEVE Y NOVENTA. POTOSI ANOS D1691.1692:1693Y1694. / *En La ciudad de La Rioja en dos días del mes de junio de mill y seis cientos y noventa y tres años el dicho señor oydor visitador en procecución dela visita de los Yndios repartidos de nacion calchaquí y mocobí labies de los Yndios del Capitan Mercado Y exuaminé a Juan Calchaquí y Agustín Mocobí y otro indio calchaquí de quienes (dicen) no recibio juramento por no estar enterados bastante de las cosas de nuestra santa fe Catolica ni saber la graueda del juramento y debajo de grotesca que se le bico dezir uerdad de al tenor del Ynterrogatorio y por la interpretación de mi el presente escriuano recesitorcapitan Don Diego de Salazar lo siguiente: / De la primera pregunta Dijeron son solo los tres que declaran y quatro indias que no tienen predio ni reducción ni tierras señaladas para sembrar que asisten en la chácara de su encomendero media legua desta ciudad, que no tienen capillaoyr misa en dcho paraje (...) / De la segunda pregunta Dixieron que no an pagado ningun tributo a su encomendero en plata ni en otra especie de tenor (...)*», *Ibidem*, AGI supra fol. 611.

tierras con agua en virtud de alegación que contrajo para que los dhos indios siembren y tengan sus aprovechamientos.”²⁷⁹

Como veremos en otro lugar del presente trabajo, la merced de tierras está emparentada con el mundo rural que no siempre es hacendístico (la producción es un producto para la venta) sino más bien ligado a la producción para el autoconsumo y pago de tributos, tal como surge de las respuestas del interrogatorio de Luján. En efecto, solo mencionaremos cómo era funcionamiento de una media de unidad doméstica en una familia “vecina”, titular, por “benemérita”, de merced de tierras y merced de encomienda. Familia que, en razón de la etnia de los encomendados —los mocovíes son indios de la nación guaraní de la región chaqueño paraguaya— pareciera haber recibido la merced a causa de su participación en “entradas” guaraníes tardías del tercer tercio del siglo XVII; merced compuesta por nueve encomendados verificados (tres indios de tasa mayores de 30 años, cuatro indias mayores y dos hijos de Juan Calchaquí, uno de 25 años y otro “menor de 18”) que vivirían al servicio de la manutención de la familia del mercendero, los varones distribuyendo sus actividades como arrieros²⁸⁰, agricultores y ganaderos, cultivando en seco zapallos, maíz y leña, criando cabras y ovejas en las tierras de pan llevar, mientras que las mujeres, hilaban y estaban al servicio doméstico de la familia²⁸¹.

²⁷⁹ *Ibidem*, AGI, *supra* fol. 640 v.

²⁸⁰ Meses después de la visita, Jacinto Mercado y Reinoso firmó un contrato de trato y fletamento con un mercader jujeño, proveyéndole 69 tinajas en cuatro carretas para transportar vino y aguardiente a Santa Fe, ante el maestro Maldonado,

«C[om]p[a]recieron presentes el Capitan Don Jacinto de Mercado y Reinoso Vesino feudatario desta dha ciudad y el Capitan Miguel de Freites vesino morador dela ciudad de San Salvador de Juxui y mercader tratante y residente en la dha ciudad a quien testifico y doi fee conosco a falta de escriuano publico y real; dixieron que habian celebrado trato y fletamiento y comunicados y concertados es asuues en que el dicho Capn Don Jacinto de Mercado y Reinoso le fleta a dicho Capitan Miguel de freites quatro carretas anuadas de porte bueyes y Vasijas y lo demas aperos nesarios para que en en ellas lleve y cargue desdeesta ciudad a la Santa Fee vino y aguardiente hasta cantidad de siento y quatro arrovas y por la carga de cada carreta a veinte y seis arrovas de vino; que hasen la dha cantida de siento y quatro arrovas las quales le a entregado el dicho Miguel de Freites al dho Jasinto de mercado y reinoso a saber que el vino son ochenta y nueve arrobas en sinquenta y sinco tinaxas mendasinas y el aguardiente veinte arrovas en catorce tinaxas rioxanas las quales a entregado serradas y selladas», . ACELR, Protocolo 1693-1811, foja 43.

²⁸¹ Debemos ser precavidos en el manejo del dato cuantitativo tanto de los padrones como de los instrumentos oficiales, ya que tiende a minimizar el número con evidentes objetivos anti-fiscales.

10.1. «LO QUE CADA VNO COGIERE, DEUE SER SUYO» LA “CONSUEITUDO EST IUS DISPONENS” DE LOS PATER FAMILIAS CONTRARIOS AL “IUS SCRIPTUM” DEL VISITADOR

Tal vez el ejemplo paradigmático de antagonismo entre sistema y orden colonial sea el razonamiento de quien fuera probablemente la persona más rica del Tucumán, el *patres familias* mercendero de tierras y encomiendas Don Gil Gregorio Bazán de Pedraza²⁸². Era titular por merced de las tierras de los dominios de los indios araupatis de la actual zona y departamento de Arauco, además de *titular depositario por real provisión y carga* de los sedentarios indios yuctabas, a quienes despojara de sus tierras de Bañado de los Pantanos. Era, además, encomendero de los indios malfines, andalgalás, araupatis y yuctabas sitiados en la estancia de Huaco.

Por ejemplo, el encomendero Juan de Herrera que figura con una encomienda de un solo indio de casi 45 años es condenado a pagar una multa “*por no aber señalado tierra y no aber concertado jornal*”, ¿con quiénes no había “concertado”? Con el grupo familiar del encomendado compuesto por Juana, la esposa, Pedro de Herrera, de “*20 años casado con Lucía, Diego de Herrera de 16 años casado con Camila, Micaela de 22 años y María*” menor de edad, es decir un grupo de 9 indios. AGI, Sec. VI, Escribanía de Cámara 864-A, pieza 5, f.69.

²⁸² Este personaje ha sido estudiado en varios aspectos, véase a A. BAZÁN, *Historia* ...142 y ss., en los más anecdóticos. Para la transcripción de su principal bien territorial véase, *Merced de Araupatis y Yuctuba o de Bañado del Pantano*, en R/JHLLR, año 1, núm. 2, Abril, Mayo, Junio de 1942, p 26-33, y Luis MARTÍNEZ VILLADA, *Los Bazán*, Córdoba, ed. Universidad Nacional de Córdoba, 1941. Mientras que para analizar las acumulación de los bienes patrimoniales y la estrategia de matrimonios y parentesco, siempre de la familia Bazán, Roxana BOIXADOS, “Herencia, descendencia y patrimonio en La Rioja colonial”, en la revista *Andes*, núm. 8, ed CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, 1997, 199-223. Y en un nuevo estado de las relecturas, Adrián MERCADO REYNOSO, *El inka volverá. Indios insurgentes y calceteros en el periodo de deintegración étnica del sud calchaquino, siglo XVII*, Imprenta del Estado y Boletín Oficial, La Rioja, 2013, 198 y ss., en donde analizamos en términos de economía política, la hacienda de Anillaco y su articulación de sus bienes territoriales y la fuerza de trabajo india encomendada.

de la merced de tierras de araupatis-yuctubas, denominación que referencia a las, hasta ese entonces, parcialidades de indios araupatis y yuctubas del actual poblado del Bañado del Pantano. A éstos, Gil sitió por composición y “real provisión”, en una imprecisa fecha a posteriori de la guerra Calchaquí, en su “hacienda” de Huaco y los “desterró” de los territorios ecológicos identificados como Bañado del Pantano y el de Sunchales. En estos territorios, los sedentarios indios araupatis, detentadores de sus tierras y bosques en las planicies del valle de Palcipas, ubicados en la línea de fortines del fuerte del Pantano, el de Andalgala y el de Pomán, ya producían especialidades como pimentón y panes de harina de algarroba llamados *patay* pero tuvieron la mala fortuna de que sus tierras fueran el campo de batalla de toda las Guerras calchaquíes (1630-1666 c.). Como veremos, el principal argumento del militar-hacendado se ubicará en la idea medieval de la validez de apriarse los despojos de la guerra.

En esta cosmovisión benemérita, centrada, en la segunda mitad del XVII, en la idea de “despojo”, no pueden ser sino otros que las “presas” y “despojos” aprehendidos en una “justa guerra” (como la calchaquí tucumana).

“Según el literal sentido de las palabras, Ca entonce, lo que cada vno cogiere, deue ser suyo”²⁸⁵, dirá el oidor mas antiguo de la Audiencia de Santo Domingo, Juan Francisco de Montemayor de Cuenca. Sin más necesidad que la simple confrontación de fechas en que el oidor *publicara* lo dicho en la ciudad de México —mediados de 1658—, Gil y su hermano, Gregorio eran convocados por su padre a través de un auto de gobernador Mercado y Villacorta “para que formen autos aparte sobre causa de guerra” y discutan, en *Junta*, los planes de invasión al Calchaquí (Sur del actual Tucuman, Catamarca y norte de La Rioja), territorio en donde vivían, entre otros, los yuctubas y abaucanes que luego serán despojados de sus tierras invocando el derecho de prioridad.

²⁸⁵ ...Cap III Qve COSAS SE SACAN ANTES DE DAR á SV MAGESTAD LO QVE LE TOCA DEL DESPOJO, de Juan Francisco MONTEMAYOR y CÓRDOBA DE CUENCA, *Discurso Político Histórico y Jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos aprehendidos en justa guerra. Premios y castigos de los soldados...*, México, ed. en México: por Ivan Rrviz, 6.

Más allá de las particularidades de la gestación de los bienes heredados y el acrecentamiento de los bienes patrimoniales y simbólicos²⁸⁶ de los Bazán de Pedraza, a continuación transcribiremos y comentaremos documentos de fuentes, en un intento por discernir cómo la ideología de las élites del Reyno es un factor que está relacionado con la elaboración y justificación de los derechos de unas determinadas familias a integrar la pertenencia —y el reconocimiento público de dicha pertenencia— al sector social que llamamos “mercenderos”.

Vimos antes cómo la petición es una instancia del corpus de la merced que nos facilita información histórica. Gil Bazán, nos dice en su petición de Merced de Yuctubas y del bañado de Sunchales, unos seis años antes de la visita de Martínez Luján, que:

“Parezco ante V. Md. En la forma que mas aya lugar en derecho y digo: que yo me allo cargado de hijos y, que no tengo tierras propias de que valerme para el sustento de mi casa y mi familia dilatada porque la tienen mis encomendados en el pueblo de Huaco donde están asistidos y reducidos por provisión real que su alteza les dio por natural, no son bastante para ellos y para mi, Y porque los indios Araupatis y Yuctuba de dicha mi encomienda fueron desnaturalizados por la paz pública de sus pueblos antiguos, y al estar las tierras yermas y despobladas y en contingencia de que otro tercero las pida por merced con menos derechos que yo; se a de servir V. Md. en nombre de Su Magestad y en virtud de los reales poderes que para ello tiene hacerme de las tierras y aguas de los pueblos Araupatis y Yuctabas que fueron de dichos mis encomendados, y igualmente pido el Bañado del Zuncha y lo que aya hasta Yuctabas cogiendo río arriba hasta dar con los médanos de la parte Norte que

²⁸⁶ En 1699, “Jil Bazan de Pedraza” obtuvo el grado de “Doctor en teología, derecho civil i canonico”, según Juan Cano en el *Primer Libro de Grados*, de la jesuitica Universidad de Córdoba. Este “Jil” es Don Gabriel Gregorio Bazán de Pedraza, nacido en 1634, fue el XVI^o graduado, Copias manuscritas de la Biblioteca Nacional (Buenos Aires) en <http://www.bibnal.edu.ar/paginas/pnc/Documentos.doc>. Desde 1629 la familia Bazán Pedraza integraba el tributo de su encomienda de Abaucán a una renta anual impuesta para el sostén de las actividades del Colegio y seminario cordobés. Y los padres de esta generación (de Jil y Juan) Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Doña María Inés Gutierrez de Rivera, fundaron una *capellanía* en La Rioja el 5 de junio de 1646.

coje para la ciudad de Londres, asimismo pido la siénaga y sus tierras unas y otras con sus aguadas y pastos, entradas y salidas, con su anchor y largor(.)”²⁸⁷

Se repite una estrategia común de petición: “No tengo tierras y estoy pobre y cargado con hijos” dirá Gil, al igual que la totalidad de las peticiones de ese siglo. No menciona que es integrante de una de las familias mas adineradas de las vecinas feudatarias lo que le permitió comprar el cargo de “regidor”, por lo tanto, es “regidor propietario” de la jurisdicción y “alcalde” ordinario por ausencia del electo²⁸⁸, al menos desde abril de 1687. Esta superposición de cargos de alcalde y regidor —el primero representando los intereses de la comunidad de cabildantes y el segundo los del rey— además de los otros como maestre de campo y oficiales de la Real hacienda en manos de familiares, hicieron del “cabildo” un ámbito institucional desde donde postular la condición de “merecedor” de tierras regias, desincentivando las potenciales oposiciones o contradicciones a la formal petición.

Las mercedes de tierras de araupatis-yuctabas o del Bañado del Pantano fue concedida a Gil por el gobernador Tomás Félix de Argandoña, previo pago de cinco pesos de media anata a Francisco Moreno Maldonado, quien ocupaba el cargo de “teniente tesorero juez y oficial real” competente en La Rioja y certifica “hoy día enteró en mi poder y real caja a mi cargo”²⁸⁹. Moreno Maldonado estaba casado con la hermana de Gil, Francisca de Pedraza y era mercendero de tierras de La Higuera y encomendero de los indios famatinas y anexos²⁹⁰.

²⁸⁷ “Merced de Araupatis y Yuctuba o de Bañado del Pantano”, en *RJHLLR*, año V, Marzo de 1943, pp 26-33.

²⁸⁸ RHCHP, Vol. I, núm. 5, diciembre de 1928, 72.

²⁸⁹ *Ibidem*, 29.

²⁹⁰ Según un documento del Archivo Nacional de Bolivia, E.C. núm.17, 1636, Pedro Ramirez de Velasco, hijo del fundador, era el último titular de la encomienda de los famatinas hasta 1667, fecha en la que pasó a manos de Francisco Moreno Maldonado y sus descendientes. Recogido por R. BOIXIADOS, “Indios Leales...” 169. En 1693, F. Moreno Maldonado figura con 14 indios de tasa, entre famatinas y sanagasta, AGI, Sec VI, Escribanía de Cámara, 864-A, pza. 5, f. 468, citado en Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras Cosas Consuetudes...*, 107.

En 1693, el Oidor Martínez Luxan en su interrogatorio a dos indios de sus estancias de Huaco que representaban a los demás encomendados, no notó otra anomalía:

*“Dixeron que no pagan tasa ni tributo sino de la chácara de la comunidad se hace pago el encomendero”*²⁹¹

Es decir que los casi trescientos indios de cinco parcialidades indígenas producían en la estancia de Huaco para Gil Bazán a *tanteo*, una forma de apropiación del 50% de todo lo que producen anualmente (cabras, zapallos, bayetas y frazadas o ponchos, etc.). Las deudas, las saldaba Gil, a favor de cada miembro de la encomienda en particular, ante la caja real proveyendo indios a la *mit'a*. Del tanteo, se descontaba el tributo, los insumos y gastos de traslado para la comercialización que también era de él o un mandatario suyo.

Un año antes, un hermano de Gil Bazán, Juan junto a sus sobrinos, habían sido condenados en su estancia de la merced de tierras de Pichana, perteneciente a la jurisdicción de Córdoba, en una sanción ejemplar cuya causa a llegado a nuestros días a través del Archivo de Indias de Sevilla y dice,

“Cargos que se hacen al Maestre de Campo don Juan Bassan encomendero de los indios de Pichana y a sus dos hijos Dn. Juan y don Joseph, administradores de dcha asienda por lo que resulta en la caussa de Uissita= / =Primero de no auer designado y señalado a los Yndios tierras propias para que tengan su reducción y ganados y que trabajen sus sementeras. / =Deaversse seruido de dhos indios en lugar de tributo contra su voluntad y con apremiso y estorsiones teniendo dispuesto cepo y cama para aprisionarlos como si fuesen esclavos =y de no auerles señalado jornal fixo ni dado paga correspondiente asiéndolos trabajar continuamente plantándoles unas viñas que tienen en esta hacienda y sacándoles una asequia sufriendo en sus labores juntos las indias a quienes tienen ocupadas en el imasijo y

²⁹¹ AGI Sec VI, Escribanía de Cámara, 864-A, pza. 5, f. 666.

cocina de sus cassas siruiéndose justamente de las muchachas que no tienen dies y ocho años”²⁹²

Las nociones de libertad de trabajo, concertación de jornal y todas las prohibiciones de castigo (o “justicia”) por mano privada²⁹³, así como el trabajo infantil, eran

²⁹² AGI, Sec. VI, Escribanía de Cámara, 864 B fol. 1177 (antes 635). La mentalidad de los encomenderos se ve reflejada en los descargos que elevan a Martínez Lujan de Vargas donde, básicamente, es posible observar que el *señalamiento* de tierras es contrario a la lógica económica de la hacienda porque ella se estructura a partir del monoproducción, por ejemplo de la uva de la encomienda de Atilas. Sintéticamente podemos transcribir, a continuación, la denuncia, los cargos y descargos, más la condena: / «[los indios denuncian] *Que no tienen pueblo, ni reducción, ni tierras propias para sembrar que en las tierras y viña del encomendero falta el agua y assi no siembran ninguno de ellos (...).* / *Cargos que se le hace a don Alfonso Moreno en la Visita de los indios de su encomienda.* / =Primeramente de no aver señalado tierras a los indios de su encomienda como hera de su obligacion. / =Y Ten[erles] *Por el servicio personal que esta prohibido por todas sedulas de su Magesta.* / =Y no aver hecho concierto con los Indios ni pagádoles bormal correspondiente y que Su Mag señala. / =Y por haberse servido de Margarita muger del indio Lorenzo. / [Descargo] / El Cap. M. Alonso Moreno Gordillo Vez^o Feudat. ° desta Ciudad encomendero de las familias Calchaquies por composission estan situadas desde que se desnaturalizaron del Valle Calchaquí, en la chacra que poseo.... / *Que por visita an sido Visitadas y caminadas, sobre el tratamiento que les bago y echecho de cuyas declaraciones han resultado los cargos que se me hazen De que por mandato de Visita El presente Escribano desector me notifico y dio traslado dellos y satisfaziendo a dbos cargos pareesco Ante Viss^o Como mas aya lugar en derecho y me convenga y digo: Que encunto al primer cargo q. Se me base de no auer señalado tierras a los indios como era mi obligasion es la causa No auerse Ni hecho con ninguna familias de la que están sitiadas en esta ciudad y sus chacras.....* / Despues [de la actividades de cosecha y] *siembra [señalaré] al Uno de ellos Vnos pedasos de tierra pequeña para su entretenimiento y si quisieran sembrar más lo hisieran pues yo nunca se los he estorbado pero como todo lo que siembro en mi chacra asi como mis esclavos como con la ayuda de los indios es todo para sustentarlos a ellos todo el año asi, no leyda en dado de sembrar aparte chacra ninguna Y los años difiziles de pocas cosechas compro el mais y el trigo para el sustento de debas Indias e Indios (por la obligazion q. Se tengo) primeramente faltara para mi y mis hijos que no para ellos, como lo declaran, Y estan en sus ranchos en tierras donde siempre las an tenido y tienen por suyas, con que satisfago y digo que si ellos sembraran aparte para su sustento de todo el año pudiera ser que alguno o los mas les faltara pero del modo que me e gobernado con ellos nunca les ha faltado y espero en Dios noles faltara el ayudado por mi quenta como acorrido que jusgo y pareseles esta ellos más conveniente para su alima q. El no siembren ellos aparte para su sustento de todo el año.* / [Condena] / Fallo atento alos meritos de la causa que por lo que resulta de dichos cargos se debe condenar y condeno en Diez pessos de a ocho reales aplicados a la camara de su Magd y en las costas de la caussa (...) Y que dentro de dos dias señale tierras con agua a los dbos indios para que tengan su reducción mas comodamente Y esten juntos los casados con sus mugeres y expecialmente la india margarita con su marido lorenzo guardando en esto lo que su magesta tiene prebenido y assi lo proueyo, Mando y Firmo Don Antonio Martínez Luxan Vargas.»

²⁹³ Como veremos en la discusión teórica sobre relaciones de producción feudales en América colonial, es de destacar la cita de C. Assadourian sobre el feudalismo europeo analizado por Max Weber, quién en su clasificación de las relaciones feudales, llama a una de ellas *feudalismo "libre"*, de *prebenda*, definiéndola como "sin relación personal de fidelidad, sólo en virtud de la concesión de tierras y tributos..." op.cit. p. 206 de Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, ed. MWG, 1923. *Economia e società*, edición de P. Rossi, Edizioni di Comunità, Milán, 1974 [3], vol. II, p. 694) (hay versión en español en dos volúmenes que coincide con el texto de la cuarta edición alemana publicada por Amorrortu y traducida por J. Medina Echavarría en 1964, de la cual Carlos Assadourian tomo la cita del tomo II, p. 861).

rigurosamente sancionados como leemos en el Auto General promulgado en La Rioja en 1693²⁹⁴. Las contradicciones de las encomiendas con las mercedes otorgadas, donde se sustanciaba con ellas la desposesión efectiva de sus tierras a los indios por parte de autoridades locales, no son señaladas al menos en la jurisdicción riojana²⁹⁵.

Los Bazán Pedraza podían concentrar la mayor cantidad de mercedes de encomiendas y de tierras de la región de altura riojana. Exhibían sus relaciones con los gobernantes de manera explícita²⁹⁶ y entre su familia exhibían un variopinto rol en el entramado del sistema colonial²⁹⁷: regidores perpetuos, maestros de campo, escribanos de la gobernación, doctores en teología. Eran encomenderos de los indios de

²⁹⁴ Véase el Apéndice Documental, documento N, p. 580.

²⁹⁵ Sonia Tell nos trae a colación un estudio en la jurisdicción de Córdoba, colindante con La Rioja, donde efectivamente Luján reposesiona a los indios de sus tierras. Dice “En 1607 el gobernador Alonso de Ribera concedió al capitán don Pedro Arballo de Bustamante, vecino de Córdoba, una merced de tierras denominadas Tuipichin en el “pueblo viejo de Quilpo”, cuya extensión era de dos leguas de largo por una legua de ancho, media legua a cada banda de un arroyo. Para fines del XVII, la estancia formada en esas tierras ya era conocida como *San Marcos*, en honor al patrono al que se dedicó la capilla construida por los indios, que databa de 1671 según ha podido rastrear Ayrolo. Cuando el oidor Antonio Martínez Luján de Vargas visitó la jurisdicción en 1693, la estancia de San Marcos pertenecía al capitán don Alonso Luján de Medina, vecino feudatario de Córdoba. En la sentencia dictada contra Luján de Medina por contravenir las Ordenanzas de Alfaro, Luján de Vargas dispuso que «el dicho encomendero les asigne los tres cuartos de legua de la dicha estancia que dize en su petición con el agua suficiente... otorgando instrumento autentico... de que me remitira testimonio dentro de quatro meses». En 1694 el capitán Manuel de Ceballos Neto y Estrada, juez de comisión nombrado por Luján de Vargas, ejecutó la demarcación y amojonamiento de las tierras de reducción”, en TELL, Sonia; “Conflictos por tierras en los “pueblos de indios de Córdoba: El pueblo de San Marcos entre fines del siglo XVII y principios del siglo XIX”, en *Andes*, 23(1) 2012, En línea en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-80902012000100003&lng=es&tlng=es (consultado el 15/02/2013)

²⁹⁶ Juan Bazán de Pedraza, en su descargo por la condena del visitador Vargas debido al uso de encargados criollos (“mayordomos”) en comunidades encomendadas, manifestaba su amistad de los últimos dos gobernadores “*al presente no hay mayordomo ni lo abrá en adelante mandándolo V.s. assi, Y la causa por lo que los e tenido a sido por el permiso y tolerancia que los señores presidentes D. Alonso de Mercado Y Don Joseph de Garro en sus bisitas no lo prohibieron y los a auído siempre en los mas de los pueblos desta provincia*” AGI, Sec. VI, Escribanía de Cámara, 864b, f. 57. “visitas” no debe entenderse como las que estamos tratando sino que cuando los gobernadores del Tucumán visitaban la jurisdicción riojana se alojaban en las casas privadas de la familia.

²⁹⁷ Alicia SOSA de ALIPPI, “Los méritos y servicios: herencia intangible de los primeros pobladores de la gobernación del Tucumán”, en Nora SIEGRIST y Hilda ZAPICO *Familia, descendencia y patrimonio en España y Hispanoamerica, Siglos XVI-XIX*, ed EUDUM-Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2010, 63-101.

Abaucan²⁹⁸, de Vichigasta²⁹⁹, de los yuctubas y araupatis³⁰⁰, de los guasungastas y vichingastas³⁰¹, de la encomienda de Huaco³⁰², de la de Amilgancho y Guaycama³⁰³, de Nacche y Mandojitas³⁰⁴; poseían la mayor merced de tierras del Tucumán (con una extensión que abarcaba parte de las jurisdicciones de La Rioja y de Catamarca), la llamada Merced de Anillaco del Valle de Abaucán (Fiambalá y sobras de Aimogasta y Tinogasta)³⁰⁵. Sus aproximadamente 100 leguas cuadradas o 250.000 hectáreas, de solo esta última merced de tierras³⁰⁶, comprendían una enorme extensión de territorio

²⁹⁸ Véase el § 11.

²⁹⁹ AHCo, Escribanía 1, Leg. 149, Expte. 5. (1699).

³⁰⁰ “Merced de Araupatis ...”, en *RJHLLR*,

³⁰¹ AHCo Escribanía 2, leg. 8, Expte. 5 (1690).

³⁰² AHCo Escribanía 2, leg. 5, Expte. 11 (1682). Sabemos por Serrano Radonnet que, jurídicamente, Gil era encomendero de Malfines y de Andalgalás establecidos en Guaco (sic) o Huaco, y que el 10 de mayo de 1680 se opuso a la vacante de esta encomienda, véase SERRANO RADONNET, *La sangre...*80.

³⁰³ Don Diego Gutiérrez Gallegos II, encomendero de Amilgancho y Guaycama, era hermano de Juan, Gil, José, Ignacia, Mariana, Francisca y Gabriel de Bazán y Pedraza. Desconocemos la razón por la cual adopta el apellido de su abuelo materno, Diego Gutierrez Gallegos, padre de Maria Inés Gutierrez de Rivera, MARTINEZ VILLALBA, *Los Bazán...* 56, y SERRANO RADONNET, *La sangre...*78.

³⁰⁴ Doña Inés Bazán e Pedraza estaba casada con el escribano mayor de la gobernación, Sargento Mayor Francisco de Olea, natural de Guipúzcoa, y primer encomendero de Nacche o Nacje y Mandojitas.

³⁰⁵ AHCa. Sección Gobierno, Carpeta N° 1, Leg. s/n, años 1681-1902, fs. 9 a 13 y vta.

³⁰⁶ “Esta merced [de Fiambalá y Tinogasta] no tiene nombre propio que comprenda toda la extensa región que abarcó. Tal vez el correcto hubiera sido el de ‘Valle de Abaucán’, pero el río que da nombre al valle cambia de denominación al sur por el de Colorado o Salado, por lo tanto preferí denominarla con los nombres de las actuales ciudades principales de este gran valle: Fiambalá y Tinogasta. En la legislación de Indias hay varias disposiciones reales que restringieron y trataron de uniformar las medidas de las mercedes pero sin mayor éxito. Sin embargo en Catamarca no excedieron en general las tres leguas de lado, es decir, nueve leguas cuadradas equivalentes a 16.874 hectáreas. En esta provincia la legua castellana tenía 4.330 metros y la vara 0,866 milímetros. Pero también hubo excepciones y una de ellas fue la merced que obtuvo Bazán de Pedraza de más de 100 leguas cuadradas y que comprendía parte de Aimogasta, actualmente provincia de La Rioja, y todo el departamento de Tinogasta de Catamarca. Una extensa región muy difícil de calcular en su real dimensión pero seguramente superaba las 200.000 hectáreas(...)” Félix A. Brizuela del Moral, *La Merced de Fiambalá y Tinogasta y los Mayorazgos de Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Tejeda*, Congreso Internacional V siglos de Hispanidad, Córdoba, 1990, ed. Imprenta de Univeridad Nacional de Catamarca, 1991, 24.

ubicado al norte de Tinogasta cubriendo todo el valle y lindando al oeste con la cordillera de los Andes y al norte con la de San Buenaventura y comprendía los pueblos ya entonces conocidos de Anillaco, Batungasta, Fiambalá, Abaucán, Singuil, a los que se sumarían, con posterioridad, los de San José, El Puesto, La Ramadita, Palo Blanco, Cazadero Grande, Chascuil, etc. Su familia también era mercedaria de la tercera merced más grande de la jurisdicción, la que, al igual que la de Anillaco, Fiambalá y Tinogasta, excedió los actuales límites provinciales, como lo fue la merced de Capayán³⁰⁷ y Allegas³⁰⁸. Rubio Durán y G. Madrazo han analizado en el Tucumán la relación entre las estrategias familiares para incrementar sus dominios territoriales y el consabido prestigio para que éste último diera nuevas oportunidades en el plano económico, llegando a limitar merced con merced con personas emparentadas³⁰⁹.

³⁰⁷ “Joan Ramírez de Velasco (1592) por quanto vos Alonso de Tula cervín ...qe sois vecino de la ciudad de todos Santos de la Nueva Rioja que yo poble en el Real nombre en la Provincia de indios Diaguitas que descubrí y conquisté y allané donde teneis el rrepartimiento de indios de Villapima y sus anexos... me abeis pedido e suplicado que os hiciese merced de os dar una Estancia de tierras para criadero de todos ganados mayores e emnores y para sementaeras de trigo e mais e cebada y de todas las semillas y para plantar eredades de viñas e otras arboledas frutales, que la dicha estancia cayese una legua por cima del dicho pueblo de Villapima rio arriba y tuviese tres leguas de largo y legua y media de ancho coxiendo en medio del anchor el dicho rio (...) para que en las tierras de dicha estancia pueda hacer e haga molinos y batanes e sacar e saque en ella heridos y acequias del agua del dicho rio para ellos y sus cementeras”, AHCo, Escribania de Gobierno, 2º Leg. 2, Exp. 9 1667, (“Padrón de indios jurisdicción Londres”).

³⁰⁸ “La merced de Capayan según los mismos títulos fue concedida por el gobernador y adelantado Don Juan Ramírez de Velasco en la ciudad de Santiago del Estero el veintinueve de septiembre del año mil quinientos noventa y dos a favor de Don Alonso de Tula Servin y comprende una legua próxima del pueblo de Villapima rio arriba tres leguas de largo y legua y media de cada lado de dicho rio. Los sucesores en el dominio y posesión del dicha merced fueron: Primero. Don Luis de Aspitia marido y conjiuntapersona de Doña Luciana Bazán, hija legítima de Don Alonso de Tula Servin. Segundo: Don Diego Gómez de Pedraza según escritura otorgada a su favor en mil seiscientos catorce por Don Luis de Aspitia. Tercero : El maestro mayor Don Diego Navarro de Velasco y Doña Mariana de Tula Bazán su esposa quienes como sucesores y a pedido de los herederos de Don Diego Gómez de Pedraza y estos sucesores de Don Alonso de Tula y Servin obtuvieron conla fecha veinte de marzo de mil setecientos treinta y uno , una copia autenticada del título primitivo. La Merced de Allegas, según los mencionados títulos fue concedida por el gobernador y adelantado Don Juan Alonso de Vera y Zarate en la ciudad de Santiago del Estero el siete de noviembre de mil seiscientos venti y dos a favor de don Diego Gómez de Pedraza y comprende las tierras que caen en el Valle y Cerro de catamarca desde el fin de las sierras que tien por merced Hernando de Pedraza ya fecha por el Gobernador Don de Quiñones Ossorio (sic) que se nombran Paso en el dicho Cerro de catamarca hacia la Punta que viene de La Rioja a esta ciudad de Santiago [del Estero] y hacia el sur que corran estas tierras desde el fin de dicha estancia de Hernando de Pedraza y cumbre de dicho cerro hasta La Punta, camino de esta ciudad, con sus entradas y salidas usos y llamadas. (...)” AHCa, Sec. Jud. Paq. 18, Expte. 28023, año 1911, fol. 173 a 173 y vta.

³⁰⁹ Hablando del mercendero Bartolomé de Castro, Gaspar Guzman nos relata “Se casa en La Rioja a principio de la decada de setenta del siglo XVII. Su esposa es Doña Magdalena Bazán de Pedraza, dama perteneciente a la familia histórica de los Bazán de Talavera de la Reina y por eso mismo pariente de Francisco de

Del resultado de los dos informes (el del maestro de campo mandado por el gobernador y el del oidor del consejo de indias) y su confrontación surgen dos valoraciones diferentes acerca las mercedes de encomiendas sobre un mismo fenómeno y idénticos motivos de visita. Demuestra que las propias élites ciudadanas locales mentían en la cuantía y estaban incapacitadas de autorregularse y “desagraviar” a los indios, quienes generaban la renta de la tierra y de éstas se constituía la base de la renta señorial de sustentación de sus propias familias. Por otro lado, muestra los límites de la burocracia del sistema colonial para imponer un orden normativo que no resultara antagónico entre los intereses regios y el referido a los señores mercaderos³¹⁰.

En síntesis, estos documentos públicos no son más que una prueba de la *convenientia* entre la Corona (Rey) —aquí también llamado “monarquía”— y el colectivo español (Reyno) —la mayor de las veces historizados como “encomenderos”— de inobservar los derechos a las tierras de los indios, tantas veces sancionada por ley, al tiempo de fortalecer su dominio sobre los rebeldes, independientemente del orden garantista emanado del Derecho Indiano Peninsular o del Derecho Indiano Criollo vigente en el Perú. La guerra calchaquí o “gran levantamiento” afectó de manera ostensible el dominio de los indios sobre sus cosas ‘terrieras’ (bañados, tierras acequiadas,

Aguirre, fundador de Santiago del Estero y de Diego de Villaroel, fundador de San Miguel de Tucumán; y además descendiente directo del General Juan Gregorio Bazán, descubridor del río Bermejo, y gobernador interino de la provincia, el que el año 1570 es muerto por los indios Pulares en Cianca. Es hija de Juan Gregorio Bazán Pedraza (hijo a su vez de Alonso de Tula y Cervín y doña Francisca Bazán, nieta del primer conquistador de ese nombre). Es a su vez hermana de Juan Gregorio Bazán de Pedraza, dueño, entre sus muchas propiedades, de la merced de Anillaco y Fiambalá, y muere siendo gobernador del Paraguay en 1719. Su primer marido es el Capitán Prudencio de Aybar, ensayador de la casa de la moneda de Potosí, vecino del teniente gobernador de La Rioja, entre sus muchos cargos obtenidos en su vida, y dueño de la Merced de Pitul Viejo, hoy día Copacabana, en el mismo Departamento de Tinogasta, por eso casi contigua, a la merced de su cuñado Juan Gregorio Bazán de Anillaco y Fiambalá.” Extraído de Jorge SERRANO REDONNET “Los orígenes españoles del linaje Castro” y “Los Villafañe y Guzmán”, en *Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas*, Buenos Aires, 1944, tomo III, recogido por Gaspar GUZMÁN, *Historia Colonial de Catamarca, Poblamientos, fundaciones y desenvolvimiento social*, Ed. Milton, Buenos Aires, 1985, 124.

³¹⁰ Antes de mis publicaciones *Tierras, cosas, consuetudes...* (2003) y de “Estatalidad... (2004)”, es Gastón Doucet (1980) es quien mejor ha profundizado en el estudio de la Visita de Martínez Lujan, concluye “El visitador debió enfrentarse, pues, con una realidad peculiar, ante la cual se mostró prudente. En general, aunque muchos encomenderos habían cometido transgresiones que las leyes castigaban con pérdida del fendo o con otras sanciones graves, se limitó a imponer penas pecuniarias (...) que sumaron 9.793 pesos”, en Gastón DOUCET, “Introducción al estudio de la visita del oidor Martínez Lujan de Vargas a las encomiendas de los indios del Tucumán”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana*, Buenos Aires, Segunda Serie, año XVI, Tomo XVI, N° 26, 1980, 205-246.

asentamientos, aguadas, etc.) y ello traspasó de manera nítida las instituciones de derecho como eran la merced de tierras e incluso la de encomienda. Ni todos los indios del Tucumán estaban desnaturalizados, ni los naturales eran aliados, mientras que aquellos que no eran ni naturales ni desnaturalizados —como fuera el caso de los yanaconas— recibieron un trato propio de la casuística de la situación particular.

10.2. POR MANDATO REAL.

Como dijimos, el propósito del análisis del impacto de la visita y la aplicación del derecho indiano en una jurisdicción del Tucumán hacia el mil setecientos posee la intencionalidad de visualizar ese derecho común, absorbente, de índole jurisdiccional y, como veremos, contruidos sobre materiales romanos, bizantinos, canónicos —Juntas de Obispos del Tucumán— y feudales. Usaremos como fuentes tanto los expedientes elevados por el encargado de la Visita al Consejo de Indias³¹¹ como también, y creemos de suma importancia, las actas capitulares locales inéditas, recientemente descubiertas en el archivo del Colegio de Escribanos Riojanos, siempre para el año de 1693³¹².

Por mandato de una real cédula de Carlos II, fechada el tres de octubre de 1690 y pregonada en la plaza mayor de la ciudad de La Rioja el 31 de mayo de 1693, los encomenderos riojanos se enteraron de que debían presentar ante el Visitador a sus indios encomendados. En base a los interrogatorios a éstos, se formularían los cargos contra aquellos titulares de encomiendas que hubieren violado la regulación indiana en lo referente a trato, tributo y obligaciones de adoctrinar con la religión católica y señalar tierras a los indios. Esos actos, refrendados en un puntilloso expediente elevado por el oidor del Audiencia de La Plata Don Antonio Luján de Vargas al Consejo de Indias, nos ha llegado hasta nuestros días.

Los procesos resultantes de la Visita resultan óptimos materiales para asomarse al

³¹¹ AGI, *Sec. VI*, Escribanía de Cámara, 864 A, pieza 5º, fol. 3 y ss.; 864 B, pieza 7º, fol. 1177 y ss.

³¹² Archivo del Colegio de Escribanos de La Rioja, Protocolo 1693-1811, fojas: 25, 27, 29, 30, 32, 32vta., 33, 33vta., 37vta., 38, 38, 39, 40, 42, 42 vta., 49, 49vta.

complejo tema de la aplicación de justicia y circulación cultural entre estamentos sociales y étnicos. Hoy conocemos, por esta fuente, la magnitud del régimen encomendil en la jurisdicción en cuestión, el número de indios de tasa y de reserva, nombre y cargos públicos de los titulares de la merced de encomienda y, por el descargo, su mentalidad ante la excepcionalidad de la *regulae in situ*.

Por estatalidad del derecho indiano entendemos el esfuerzo del estado monárquico colonial por implementar normas uniformantes y universales sobre un instituto como la encomienda, limitando primero, negando y sancionando después las particularidades locales que había adoptado esta institución en el Tucumán colonial, acorde al postulado legal vigente. Para ello debía enfrentar el derecho indiano, en efecto, con los preceptos puramente tradicionales y, como veremos, costumbristas, que hasta entonces habrían gobernado la sociedad riojana.

El método es invariablemente moderno por intentar desarrollar una ruptura en la visión estamental para exhibir la voluntad de universalizar una norma a todo un sector laboral, aunque clásico el instrumento de la visitación, consistente en la presencia en el lugar de un juez imbuido de poderes especiales que confronta los actos de los sujetos con la norma postulada y arbitra los medios para limitar la reproducción local del estigmatizado “servicio personal”. Todos los encomenderos son convocados, todas las encomiendas envían a representantes indios que responderán a un único cuestionario que se procederá a pasar vista al acusado de los cargos específicos que resultare, y, visto el descargo, el juez visitador emite sentencia absolutoria o condenatoria.

10.3. EL VISITADOR Y LOS ENCOMENDEROS

Antonio Luxan de Vargas es oidor “más antiguo” de la Real Audiencia de La Plata, “don” y “doctor”. Su designación es por real cédula y la Audiencia le asigna un escribano receptor, encargado de dar “testimonio de verdad”, certificar la validez de los interrogatorios y los dichos de los traductores, tomar notas etc.

Sobre los encomenderos, ya vimos que existen excepcionalmente algunos no feudatarios, es decir, residentes, quienes no provienen de las familias pobladoras iniciales, en cuanto tales vecinos con casa poblada. Pero la característica más destacada

es que todos los cargos públicos locales (teniente de gobernador, alcaldes de 1º y 2º voto y de la hermandad, justicias, alférez real, protector de los naturales, regidor) estaban en manos de encomenderos³¹³.

§. 10.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA “VISITA” COMO INSTITUTO

La eficacia de las visitas en el Reino del Perú ha sido sostenidamente estudiada³¹⁴, aunque ninguna como la de Lujan de Vargas tiene tan precisa y explícita misión de “ajustar”, el comportamiento y actuación del encomendero, “a derecho”. Los nudos de la evaluación serán, en menor medida, el adoctrinamiento cristiano, puntualizando la adecuada remuneración laboral al trabajo indio y la prohibición de que las mujeres de los indios encomendados paguen por sus maridos. Como veremos en las siguientes páginas, las citas de clásicos y la legislación utilizada exceden, in strictu sensu, al Derecho Indiano propiamente dicho para adentrarse en el Derecho Canónico Indiano.

³¹³ El listado de encomenderos sumariados, en orden de comparecencia: D. Jacinto de Mercado y Reinoso, D. Antonio de Almonacid, D. Santos de Toledo y Pimentel, Francisco de Barrionuevo, Domingo Calisto, D. Martín de Villafañe y Guzmán, D. Diego de Toledo Pimentel, D. Alonso Moreno Gordillo, D. Juan de Herrera y Guzmán, Jacinto de Contreras, D. Pedro de Luna y Cárdenas, D. Francisco de Herrera y Guzmán, Francisco Gonzáles de Vargas y Machuca, Esteban de Avila y Barrionuevo, Pedro Quintero, Antonio de Escobedo, Pedro Díaz de Alvarado, D. José de Toledo Pimentel, D. Luis Gutierrez Gallegos, D. Ignacio de Mercado y Reinoso, Isidro de Córdoba, Francisco del Moral, D. Baltasar de Herrera y Guzmán, Felipe de Luna, D. Sebastián Rufo de Sotomayor, Mauricio Beriel de Vega, D. Francisco de Villafañe, D. Diego de Salinas, D. Juan de Cabrera, Francisco Fernández Romero, Juan Nieto Principe, Manuel Alvarez de Ochoa, José Díez de Oviedo, D. Gil Gregorio Bazán de Pedraza, D. Baltasar de Villafañe, Juan Sánchez de Loria, Domingo Nieto Principe, Da. Clara Moreno Gordillo, Diego de Soto, Jose Gómez de Brito, Francisco Moreno Maldonado, Andrés Pérez de Arce, D. Francisco de Tejeda Bazán, Melchor Carrizo, D. Juan de Gregorio Bazán de Pedraza, D. Juan de Adaro y Arrazola, Juan Clemente de Andrada, Gregorio de Brizuela, Félix de Barrionuevo, D. Manuel de Villafañe y Guzmán, Juan de Vega y Castilla, José de Carrizo de Andrada, Nicolás Enríquez.

³¹⁴ Ismael Sánchez Bella, *Eficacia de la Visita en Indias*, AHDE, 1980, 383-411. John V. Murra et al. (ed.), *Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562 [de] Inigo Ortiz de Zuñiga, Visitador*, Huánuco (Perú), Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Letras y de Educación, 1967-1972, 2 vols. Para la evaluación de las visitas y el impacto de éstas en la desestructuración de los sistemas indígenas en Marta B. Anders, *Historia y etnografía: los mitmaq de Huanuco en las Visitas de 1549, 1557 y 1562*, Lima, ed. Instituto de Estudios Peruanos, 98.

10.5. PROCEDIMIENTO

En lo que respecta al procedimiento de las visitas debemos tomar en consideración dos aspectos: uno provincial, es decir del Tucumán como ámbito jurisdiccional donde se desenvolverá la visita y las ciudades cabeceras que la comprenden, cuyas actuaciones serán remitidas al Consejo de Indias; y otra, el procedimiento singular de comparecencia ante los estrados del visitador de los encomendados y sus encomenderos.

Como verificamos en la fuente documental más arriba, La Rioja fue una de las jurisdicciones tucumanas con mayor número de encomenderos y, muy probablemente, el número de los indios de tasa ha sido subregistrado. Estas cifras, muy poco seguras demográficamente debido al método de convocatoria a empadronamiento por parte del visitador, son a su vez muy certeras en la inclusión/exclusión de lo que es “oficialmente encomienda” de aquello que no lo es³¹⁵. Sirven asimismo como aproximación para establecer las magnitudes, no solo en lo que se refiere a los aspectos institucional, jurídico o demográfico de la encomienda sino también al peso específico que este sector social, el de los beneméritos de indias, también llamados aristocracia colonial³¹⁶.

³¹⁵ El visitador D. Antonio Martínez Luján de Vargas, mandaba a pregonar en todas las ciudades que visitaba la real cédula de 3 de octubre de 1690, en el que ordenaba que se presentasen los encomenderos con sus indios dentro de plazo estipulado en determinado lugar y una vez allí los interrogaba; AGI Sec VI, Escribanía de Cámara 864 A, pieza 5º, fol. 3. «*mando que dicha cedula se publique para que llegue a todos y los encomenderos recoxan los Yndios de sus encomiendas Y los traygan adentro de Dos dias Los que no estan en pueblos formados sino en la haciendas de sus encomenderos Y dentro de ocho los de los Pueblos por las dificultades que ay (...) siendo presentes y por testigos el Maestre de Campo don Francisco Moreno Maldonado, Theniente desta dcha ciudad Don Manuel Villafañe, Juan clemente de Andrada Alcalde Ordinario, Don [ilegible] Bazan regidor, El Veinte Y quatro Don Juan de Herrera,, El Veinte Y quatro Don Diego Ignacio Bazan, El Veinte Y quatro Don Luis Gutierrez Gallego y otras muchas personas*» AGI 864 A, fol. 630 y vuelta.

³¹⁶ “Beneméritos de Indias” llama a los mercaderos de tierras y de encomiendas Alicia Sosa de Alippi, en “Los méritos y servicios: herencia intangible de los primeros pobladores de la gobernación del Tucumán”. Pata una nueva generación de historiadores genealogistas la aristocracia local de Córdoba del Tucumán fue una cración inmediata al proceso mismo de fundación y patrimonialización “Allí (...) la consunción de individuos dotados simultáneamente de títulos de Castilla, de mercedes de tierra y de encomiendas de indios llevó casi de inmediato a la construcción de una aristocracia local que se abocó –tal como sucedía en las ciudades castellanas desde el siglo XV- a la creación de linajes y, sobre todo, a la reproducción de modos de vida de la nobleza castellana”, en Guillermo NIEVA OCAMPO, “Hortus conclusus, fons signatus: Las dominicas de Córdoba del Tucumán y el recambio de élites urbanas a mediados del siglo XVIII”,

10..6. LOS CARGOS Y LOS DESCARGOS.

Sin entrar a evaluar el modo de adquisición de las encomiendas ni su naturaleza en relación a los repartimientos de piezas, que en las décadas inmediatamente anteriores a su visita habían sido producto de las guerras calchaquíes o del Chaco, el oidor escucha las respuestas del interrogatorio a curacas y jefes tribales³¹⁷ y declara la absolución a una veintena de encomenderos como, diciendo:

*“No resulta cargo de donde poder aserle culpa lo absolvía y absolví de dcha Visita declarando haber cumplido con su obligacion y de Haber observado las Cédulas de Su Magestad leyes y ordenanzas dadas en esta razón”.*³¹⁸

Son 18 los encomenderos absueltos y declarados “buen encomendero”, los demás son acusados de diversas contravenciones como veremos a continuación.

10.6.A. LOS CARGOS O *AGRAVIOS* AL ORDEN ENCOMENDERIL PUGNADO POR LA CORONA

Los principales cargos que el visitador realiza al encomendero en relación a su población encomendada son que los segundos son agraviados por:

en en Nora SIEGRIST y Hilda ZAPICO *Familia, descendencia y patrimonio en España y Hispanoamerica, Siglos XVI-XIX*, ed EUDUM-Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2010, 221-263.

³¹⁷ Uno de los aspectos que por cuestiones de espacio no ahondaremos es la equiparación de la declaración del indio a la del blanco —borrando la estamental y étnica separación donde en procesos locales de fines del XVII y comienzos del XVIII— por la credibilidad de la declaración del testigo dependía de la pública fama de quién la emitía y la “calidad” de su persona. Véase Judith Farberman, “Etnicidad, prácticas mágicas y justicia periférica. Los procesos contra hechiceras de Santiago del Estero 1715-1761”. En el mismo sentido mi trabajo sobre la construcción de las facultades posesivas indias, véase Adrián MERCADO REYNOSO “Unicidad y diversidad en el sujeto patrimonial indiano: el pensamiento novohispano (s. XVI y XVII)” en Jornadas Experiencias de la Diversidad. Facultad de Humanidades y Artes, CEDCU—Centro de Estudios sobre la Diversidad Cultural— U.N.R., Mayo 2003. CD-ROM.

³¹⁸ Encomienda de Santos de Toledo Pimentel, sentencia dada el 3 de julio de 1693, AGI, pza 5, folio 651.

- el servicio personal (no pago de tributo establecido en moneda de la tierra sino en el sometimiento servicial a una persona o familiar o pariente o amistad del encomendado);
- la ausencia de pago de jornal en concierto medido en reales.
- el alquiler de indios (“saca” de indios de sus encomiendas para que trabajen para terceros);
- el repartimiento de materia prima para recoger hilados y tejidos;
- la saca de indios *traxinantes* sin licencia;
- el ser impedidos de la libertad de alquilarse;
- la aplicación de castigos corporales por parte de administradores y mayordomos (mal tratamiento);
- el no efectivizar el señalamiento de tierras para su propio laboreo.
- el poco cuidado del encomendero en las obligaciones de la fe católica (misa, ornamentos, etc.).

10.6. B. LOS DESCARGOS

A ojos modernos, los descargos no tuvieron asistencia letrada idónea y no son plausibles de ser sistematizados heurísticamente. Ningún descargo menciona un cuerpo normativo ni auto de gobernador para sostener sus actos³¹⁹. Giraron en torno a

³¹⁹ Es el entonces teniente de gobernador, el maestre de Campo Francisco Moreno Maldonado, encomendero de Famatina y Sanagasta, es quien recurre a la figura de los gobernadores provinciales sin mencionar, por ejemplo, a la condición de indios desnaturalizados declarados encomiendas por el Auto del gobernador Alonso de Mercado y Villacorta hecho en La Rioja el 17 de Mayo de 1667, Cfr. A.G. I., Sec. V., Charcas, 122; ni el “*Reglamentación para el reparto entre los que intervinieron en al guerra de Calchaquí de las familias de los pueblos de indios Yocabiles, Yngamanas y Tucumangastas*”; un articulado de 33 ítems de *regulae ius* para la distribución de ‘piezas’ indias a mercenderos, fechada en 1665 y promulgada por Mercado y Villacorta, AHCo, Escribanía de Hipotecas 2, Leg. 5, Expte. 12. Dice el encomendero “= Y en quanto al cargo que se me hace de haber tenido mayordomo (...) digo que desde que entre a esta Pcia del Tucumán con el Señor presidente Don Alonso de Mercado y Villacorta gob. Que fue en ella el año de cinquenta y cinco vi y he visto desde la ciudad de Jujuy y Salta, Santiago del Estero Tucuman y desta La Rioja y Londres en todas ellas y los pueblos de su jurisdiccion haber mayordomos y los señores gobernadores y

desacreditar a los indios que dieron testimonios desfavorables, o dieron excusas simples: a la acusación de falta de cuidado en cuestiones de la fe lo atribuyen a inexistencia de clérigos (algo ajeno a su ámbito de gobernabilidad) o a cargos de maltrato y castigos corporales acusan a los castigados de merecerlo por ser, sus encomendados, idólatras, embaucadores y borrachos. No obstante, los argumentos de descargo más elaborados, que podríamos admitir como un esfuerzo de especulación jurídica, giran en torno a la defensa de la acusación de tasas de hilado. Éstas se implementan, según los acusados:

1. por comodidad (son de fácil cobro de tasa y demasía de tasa); y,
2. por costumbres, entendidas éstas como las leyes ancestrales enraizadas con demasiada solidez en la memoria de los hombres y curacas —jefes étnicos no reconocidos oficialmente y definitivos organizadores de la fuerza de trabajo de algunas encomiendas del altiplano tucumano.

Bazán es el único mercendero, como veremos, que apela a la noción de costumbre como forma de norma consuetudinaria ante las acusaciones formales que el visitador Luján de Vargas le formula.

Juan Gregorio Bazán y Pedraza concurrió a La Rioja ante la convocatoria de Vargas y fue notificado de los cargos de tener mayordomos en los pueblos de indios de Tinogasta, Fiambalá, Saladillo, Chascuil, todos en el valle Abaucán y de obligar a hilar a mujeres y niñas para cubrir los tributos. Las acusaciones se ratifican en los Autos dictados en la culminación de su visita,

“Y porque e condena a algunos encomenderos con penas pecuniarias por los hilados que an rrepartido o hecho rrepartir a las indias de sus pueblos y especialmente a las casadas para la paga de estos tributos de sus maridos, y assi prohibo y mando se escusen estas repartisiones y no las agan los dhos encomenderos pues las yndias son libres y exentas del tributo y seruicio y se opone a todos los derechos la introducion y

visitadores los han permitido quizá atendiendo a lo que reconocían del estado presente y conveniencia de dichos indios (...) y cuando entré yo a ser encomendero allá esta costumbre de mayordomos que habia en dcho mi pueblo y aún el Señor presidente Joseph de Garro visitador general que fue desta provincia por particular cédula de su Magestad los vió y pemitió en los pueblos y no ordenó ni dejó mandado se quitasen ni hizo cargo de que los hubiese (...)” A.G.I. Sec. VI, Escribanía de Cámara, pieza 5, f.831.

abuso de que las muxeres pagan por los maridos, y esta prohibido por cedula del tres de mayo demil seiscientos y nueve y mill seiscientos seis.”

A la acusación de los encomendados y a los cargos formulados en el expediente que se le inició a Bazán y Pedraza, le siguió el descargado por puño y letra del mismo, diciendo:

“Y en cuanto al cargo de aber cobrado tributos en hilados de las indias de mi feudo digo que cuando entré halle costumbre generalmente introducida de cobrar las tasas de hilado por dezir que la real ordenanza lo dispone dándoles el algodón y llevar el hilado que [a]sí lo hallé entablado y así a proseguido en dcho mi pueblo pero con tanta suavidad y sin apremio.”

La ley —está diciendo el acusado— es solo un componente del orden jurídico como lo es la costumbre; así “cuando entré [a la titularidad de la encomienda] hallé costumbre” ya constituida por lo que así lo dejé “entablado y así ha proseguido”. Las declaraciones de los testigos indios no conforman elemento para cambiar el orden jurídico de mis ancestros y estas costumbres tienen calidad normativa, podría decirse que contrargumenta el acusado Gregorio, al puntualizar que no hay distinción entre *lex* y *consuetudo* al interior de su feudo.

Siguiendo a Mariluz Urquijo, recordamos las tres vías por las que los súbditos manifestaban sus “observaciones” al régimen vigente, como creemos es el caso del descargo anterior, y en un contexto de sacralización de la figura del Príncipe como sumo legislador, podemos reinterpretar que Bazán usa la vía de eludir el comprometedor enfrentamiento contra las disposiciones de la corona emanadas por sus burócratas Alfaro y luego Vargas. Al señalar la discrepancia, reclama tácitamente que las leyes e instrumentos de *regulae* al interior de la encomienda que estuvieren en contradicción con el derecho consuetudinario, sean modificadas. Advierte, con la mención a su “entrada”, que una vez concesionada una encomienda³²⁰, las relaciones de producción

³²⁰ AHCo, Escribanía 1ª, Leg. 71, Expte. 2. La encomienda estaba en poder de la familia Bazán desde 1632. Recogido por Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras...* 102. Fue el Gobernador Felipe de Albornoz quién encomendó “... los indios pueblos y Repartimientos de Abaucán y Sabuñ con pensión de diez pesos en cada un años”, integrándose la encomienda como una renta anual impuesta a un grupo de encomiendas de la provincia del Tucumán para el sostén de las actividades jesuíticas del Colegio y Seminario cordobés, Aníbal MONTES: *Encomiendas de Indios Diaguitas Documentadas en el Archivo*

entre el mercendero y los indios encomendados están regidas por un concierto “entablado” por, hoy diríamos, los particulares, sin la legitimidad de la intervención de la ius política del Rey.

10.7. LAS CITAS DE DERECHO INDIANO EN EL AUTO.

El Auto general del oidor y visitador Antonio Luján de Vargas es un mandamiento de autoridad competente por la Cédula hecha en Madrid el 6 de octubre de 1690 (“*para ello Os doy tan bastante Comision Poder facultad como de Derecho se requiere*”—dice el Rey³²¹) dirigido a todos los vecinos y habitantes de la ciudad y jurisdicción, que contiene un conjunto articulado de disposiciones sobre el tema de la encomienda³²².

Como dijimos anteriormente, concluida la suma de procesos singulares, el oidor pasó a proclamar el Auto tendiente a fortalecer “*las sentencias que âpronunçiado en ella*”, tanto por el tipo de sanción como en la individualidad del titular contraventor de la encomienda “*tiene prevenido el modo y forma que deuen observar los encomenderos en los casos que cada Vno a contrauenido a las leyes y las hordenanzas*” y con el fin de fijar la “*forma para portarse en lo adelante*”, manifestando que en el Tucumán se vivió con “*alguna ympericia de las cédulas y leyes que hay en esta materia*” de tratamiento de indios encomendados “*para que en algún tiempo no la puedan alegar [ignorancia] y queden sabidores de lo que es su obligación*”.

10.8. LEGISLACIÓN UTILIZADA

a) Cuerpos legales citados:

Histórico de Córdoba, Córdoba, ed. Dirección General de Publicaciones de la UNC, 1965, (la cita es de24).

³²¹ AGI, Sec VI, 864 A, pza. 5., f.629

³²² Véase “Sobre voces y denominaciones” una aproximación al concepto de *Bando* y la voz *Auto*, Víctor Tau Anzoátegui, *Los bandos de buen gobierno del Río de La Plata, Tucumán y Cuyo*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2004, 17 y ss.

El principal cuerpo legal citado es la Recopilación de la Leyes de Indias y algunas Ordenanzas del oidor Alfaro. Luján de Vargas fundó pues las sentencias en las siguientes disposiciones:

- 1º) Ord. 90³²³ ;
- 2º) Ord. 91³²⁴;
- 3º) la Junta de Obispos del Tucumán;
- 4º) Ley 24, tit. V, lib. 6º de la Nueva Recopilación³²⁵;
- 5º) Ley 47, tit. 12, lib. 6º³²⁶;
- 6º) Ley 49, tit.12,lib.. 6º³²⁷;
- 7º) Ley 1, tit.17, lib. 6º³²⁸;

³²³ “la tasa hecha por el Señor don Francisco de Alfaro, oydor de la Real Audiencia de La Plata, visitador general que fue de esta provincia, que son cinco pesos al año, como se expresa en la hordenaza nobenta,”

³²⁴ “exceptuando las encomiendas fechas en aquel tiempo, porque estas han de correr a razón de diez pesos de tributo hasta que vaquen, como declara la ordenanza noventa y una.”

³²⁵ “Junta de Obispos del Tucuman como Ley 24, tit. V, lib. 6º de la Nueva Recopilación que eliminan el servicio personal como forma de tasa de tributo. “y en la ley siguiente del titulo y libro citado manda que se alce y quite como quiera que se hallase introducido”

³²⁶ “= y por la ley cuarenta y siete, título doce del lib.ro sexto se impone pribasión de encomienda al que contraviniera a lo referido, y al ministro que fuese culpado en esto o lo disimulare en pribasión de oficio;”

³²⁷ “== y por la ley cuarenta y nueve de mismo título y lib.ro se manda a poner en las clausulas de la mercedes de encomiendas la calidad exclusiva del servicio personal, esforzando lo mismo por la ley diez y siete del mismo título y lib.ro.”

³²⁸ “== Y aunque estas leyes son generales para todo el reino del Perú, se expidió cedula especial para esta provincia el año de mil seiscientos y diez y ocho, muy posterior a las hordenanzas del señor don Francisco de Alfaro, y hoy está puesto en cuerpo de derecho, que es la ley primera del título diez y siete del lib.ro sexto de la Recopilación, en que su Majestad prohíbe expresamente este servicio a los de esta provincia, aunque sea por título de yanaconazgo, declarando por nulos los hechos de los gobernadores que contubieren semejante

8º) Cédula del 20 de diciembre de 1664³²⁹;

9º) Ley 12, tit. 17, lib. 6º³³⁰;

10º) Ley 20, tit. 9, lib. 6º³³¹;

11º) Ley 23, tit.9, lib. 6º³³²;

12º) Ley 14, tit. 9, lib. 6º³³³;

calidad, suspendiendo de oficio al que contrabiniere y privando del salario que desde la provisión de la encomienda le corriere, privando justamente al encomendero que le usare, poniendo desde luego en la Real Corona la encomienda.”

³²⁹ “== por lo que le toca a los indios calchaquies que se halla mucha parte de ellos reducida en las chacras desta ciudad, mando su Magestad por cedula beinte de diziembre de mill y seiscientos y setenta y quatro que estos se encomienden en forma questa dispuesto con los demás sin obligarles al servicio personal pues generalmente esta prohibido como se rreconocen de lo antesedente.”

³³⁰ “==Y asimesmo mando que cuiden los dichos encomenderos y el protector de los naturales que cuando estos se concertaren para servir o fueren a alguna mita se les pague de jornal a rreal y medio cada día en moneda de la tierra, y a los que sirvieren por meses quatro pesos y medio en la misma, como lo hordena Su Majestad en la ley doce del título diez y siete del lib.ro sexto de la nueva recopilación, porque aunque en la ordenanza sesenta se puso menor tasa, todaVía deue prevalezzer la ley, y está más proporcionada a los tiempos presentes, en que los indios, por usar diferentes vestidos que cuando se hicieron las hordenanzas, tienen mayor gasto.”

³³¹ ““==Y porque se ha reconocido perjuicio en que los encomenderos tengan en sus casas indias de sus rrepartimientos, porque he condenado a algunos, les mando guarden y cumplan la ley beinte, titulo nueve del lib.ro sexto de la Recopilación, que con expresión lo prohíbe, aunque se diga y se alegue que las tienen de su voluntad y que les pagan, imponiendose pena de cien pesos oro para la Cámara de Su Majestad.”

³³² “==Y porque tambien se ha perjudicado a los indios en alquilarlos y darlos a otras personas, especialmente para viajes, mando que no se haga, por prohibirlo Su Majestad por la ley veinte y tres de titulo nueve , lib.ro sexto, con pena de perdimiento de los indios y cincuenta mil maravedís aplicados a la Real Cámara.”

³³³ “==Y de la misma manera prohibo que los encomenderos, sus mujeres, padres e hixos y criados ni esclavos entren ni residan en los pueblos de sus encomiendas, porque demás de estar

13º) Ord. 29 y Ord. 73 y Ley 27, tit.3, lib..6º³³⁴;

14º) Ord. 32³³⁵;

15º) Cédula del 3 de Mayo de 1609 y Cedula (non data) de 1606³³⁶;

prohibido en la hordenanzas lo prohibe Su Majestad, pena de cincuenta pesos aplicados por tercias partes, Cámara, juez y denunciador, ordenando que las justicias reales no lo consientan ni permitan y que ejecuten la pena, por la ley catorce, título nueve, lib.ro sexto; y por la diez y seis quedan encomenderos obligados a estos daños y a pagar el interés y condenación hecha por esta causa, sin diferencia entre pena e interés”

³³⁴ “==Y que por la misma razón no deuen los encomenderos tener mayordomos o pobleros, mando que se guarde y cumpla la hordenanza veinte y nueve pena de privacion de la encomienda perpetuamente y que por los dos años quede ynábil para obtener otra, y al que lo aceptare diez años de galera y doscientos azotes. Y porque los yndios de los pueblos suelen exceder en su embriaguez y es bien que aya quien los contenga se observarra puntualmente la hordenanza setenta y tres que dispone el Justicia mayor o alcalde hordinario tenga ... dado de visitar los otros pueblos particulamente al tiempo de siembra y coger las sementeras y quando se cosecha algarroba y si toda Vía esto no bastare y se rreconosiere necesidad presisa de poner mayor domos Usaran los dhos encomenderos dela facultad que seles consede por la ley beinte y siete del título tersero de lib.ro sexto, ajustandose para no yncurrir en la pena desta ordenanza a las calidades con que la ley lo permite de que los dhos mayordomos ayan de ser personas tales y de tanta satisfazion que no hagan daño ni agrauio a los indios y luego que sean nombrados antes de entrar en el pueblo sean de presentar en la Audiencia o ante el gouernador para que se les de licencia y estos y los encomenderos daran fianzas legas llanas y abonadas en la cantidad que pareciere de pagar y satisfacer los daños y estar a derecho ==”

³³⁵ “==Y por esto no se sierra la puerta absolutamente al encomendero para entrar a los pueblos de su encomienda porque según la ordenanza treinta y dos lo pueden hazer en tiempo señalado que es en el de siembra y coxer la comida y coger la algarroba, ora ayan de coxerla en el pueblo o fuera de el y tambien para la cobranza de las tasas pueden estar en el otro pueblo ocho dias pero abran yncurrido en la pena de la ley si estubieren en otros tiempos ==”

³³⁶ “=Y porque e condena a algunos encomenderos con penas pecuniarias por los hilados que an rrepartido o hecho rrepartir a las indias de sus pueblos y especialmente a las casadas para la paga de estos tributos de sus maridos, y assi prohibo y mando se escusen estas repartisiones y no las agan los dhos encomenderos pues las yndias son lib.res y exentas del tributo y seruicio y se

16º) Ley 6, tit. 17, lib. 6º y Cédula del 8 de Octubre de 1681³³⁷;

b) Mandamientos propios del Oidor

Existen dos ítems donde el visitador no recurrió al ordenamiento indiano regulado y se atrevió a decretar mandamientos sin sustento específico en el *corpus iuris*, o cuanto menos, sin haberlo citado explícitamente y que podrían interpretarse como *iura propria*. Estos son:

1º) El señalamiento de tierras como obligatoriedad del encomendero, y,

2º) Prohibición a que los caciques repartan algodón de sus encomenderos para el hilado de sus subalternos³³⁸.

El primero, figura de “señalamiento”, no era más que la autorización oral del

opone a todos los derechos la introducion y abuso de que las muxeres pagen por los maridos, y esta prohibido por cedula del tres de mayo demil seiscientos y nueve y mill seiscientos seis =”

³³⁷ “=y porque tengo rreconocida la disposición y despendio de las rreducciones de los yndios Y que con esto rresulta de sacarlos de sus Pueblos a título de traxinantes o seruicio de los que lleban carretas o mulas-Mando se guarde y se cumpla la ley sexta del título dies y siete del lib.ro sexto de la rrecopilacion que da la forma y el modo con que se ande portar en estos biaxes ymonponiendo pena de sinquenta pesos al español y beinte asotes al yndio que contrabinere y antes estava preuenido por la ordenansa treinta y siete y assi no podran sacar los indios aunque sea de su voluntad sin preseder licencia expresa y por escrito del gobernador desta Prouincia El qual auiendo visto y examinado el efecto para que se la piden la podrá conseder y en esta conformidad señalara los yndios que le pareciere y el teimpo que se an de ocupar y los jornales que an de perseguir y rrescuira fianzas y seguridad dela parte de que los bolbera a sus pueblos al plaso que se señalare poniendo las penas a su advitrio y que se obligen, principal y fiador, a la paga de los hornales de los días que se ocuparen en estar y boluer a sus pueblos ==Y todas las calidades referidas reguardarán Inviolablemente y sesará la ocazión de pasarse los yndios al rreyno del Perú por ser esta la Uoluntad de Su Magestad expresada en la ley sitada y en cedula posterior del ocho de octubre de mill seiscientos y ochenta y Uno =”

³³⁸ “=Y mando que los caciques de dichos pueblos no rreciban ni rrepartan como lo an hecho hasta aquí algodón de sus encomenderos para estas contribuciones pena de beinte asotes y de quatro dias de carcel por cada vez, y al encomendero por perdido este hilado y con obligación de pagar el por texer a las muxeres casadas y de cien pesos aplicados por terzias partes Camara de Su Magestad, Juez y denunciador =”

encomendero quien fijaba las chacras, melgas o bañados, generalmente al interior de su hacienda, estancia o merced de tierra. No implicaba una política de resguardo de tierras comunales —clásica en el mundo andino— porque la naturaleza de la adquisición de algunas de las encomiendas había desnaturalizado las parcialidades tenedoras naturales disolviendo el vínculo con la tierra ancestral. La política de repartimiento de “piezas” indias en recompensa por los aportes a las “entradas” al “Calchaquí” y al gran Chaco, no había más que complejizado el cuadro étnico y su condición de no naturales les impedía poseer sus sembradíos y eventual fijación de agua de riego.

La segunda consistía en desestructurar la práctica de eludir la responsabilidad del encomendero en el trabajo de la mujer y de la niñez del pueblo encargado al concertar el titular con los jefes étnicos el número de prendas textiles tributarias independientemente de quienes las realizasen. Para ello, esta norma permitía el ingreso de los justicias en los conciertos privados, haciendo respetar la prohibición del tributo pagado en hilado con uso de fuerza femenina de trabajo.

10.9. EL IMPACTO LOCAL SEGÚN LA FUENTE DEL ESCRIBANO DEL CABILDO

Una de las formas de evaluar el impacto local es analizar las sanciones mismas y los cuerpos legados donde se fundamentas dichos cargos. De la confrontación de sanciones y absoluciones surge una extraordinaria equidad en el trato ya sea de encomenderos de varios pueblos y decenas de indios de tasa como aquel que poseía uno o dos indios de tasa. Asimismo, no permitió excepciones —v gr. modo de adquisición de la misma o el peso de las costas y *micion* en los servicios de guerra a Su Magestad— que pudieran menoscabar o atenuar la aplicación de la legislación. En efecto, los militares que habían desempeñado y desempeñaban roles destacados en el cabildo y la gobernación, titulares de mercedes de tierras, estancias y de esclavos y hasta iglesias con bienes amayorazgados o por fundar (por ejemplo, Juan Bazán de Pedraza, Adaro y Irasola, Brizuela y Doria, Gil Bazán, Luna y Cárdenas) fueron sancionados con penas de variado tipo. Es evidente que el enviado pudo ejecutar su mandato al margen de las disputas e influencias locales y ello se debe, efectivamente, a su condición de burócrata profesional designado por el prestigio de una real cédula del Rey con la suma de

poderes solo apelable ante dicho Consejo de Indias³³⁹.

Otra de las formas es analizar el impacto en el vida institucional, caja de resonancia de los debates y en otros institutos como el renacimiento de la figura del Protector de los Naturales que tendrá una destacada acción en las dos primeras décadas del siglo XVIII. Menos evidente, pero no menos efectiva, es la sustanciación de una veintena de “conciertos” entre indios e indias con particulares que se encuentran en el Archivo del Colegio de Escribanos de La Rioja, bajo el protocolo del lugarteniente local del año 1693: *“Lo firman dicho indio firmado por el protector de los naturales, con Testigos que tambien firmaron con migo y ante mi a falta de Escribano y en papel comun a falta de sellado, y queda en el registro de escrituras (capitular) que ante mi pasan (fdo. Lugarteniente)”*. De ellos hemos seleccionado cuatro conciertos de trabajos, fechados a continuación:

← 27 de julio de 1693, Juan (Francisco) del Moral (alcalde mayor), concertó con el indio Ignacio un jornal de *“Sinquenta y quatro pesos que es a rason de 4 y medio por mes como mando el señor oydor visitador, Que esde ellos los sinco pesos de tasa que debe dicho indio al dho encomendero Le a de dar a dho Yndio quaenta y nuebe pesos por dho año”*³⁴⁰

← 6 de agosto de 1693, Francisco Cordero c/ Domingo Indio (de las familias del Cptan Francisco Gonzales de Vargas y Contreras) por *“Un año 54 p a rason de 4,5 según lo hordenado Por su AutoGen. El Iltre Uisitador general desta Prouincia Antonio Lujan de Uargas del Consejo de Su Mgd.”*³⁴¹

← 11 agosto, Ignacio de Olmos y Aguilar concertó con Ignacio *“Indio Delas familias y encomiendas del S.M Francisco de Herrera y Guzman” por el período de “Un año” con paga de “Sinquenta y quatro pesos a rason de quatro y medio por mes como de lo mandado por el señor oydor y Visitador General en Todo*

³³⁹ “Y en tal caso es necesario con inhibicion a otros culesquiera Mis jueces y Justicias y si Vuestros autos y sentencias apelaren las partes le otorgareis la apelación en los casos que hubiera lugar de derecho para ante de los del dicho mi Consejo Y no otro tribunal ni juez alguno”

³⁴⁰ ← Archivo del Colegio de Escribanos, 1693-1811, foja 33 vuelta.

³⁴¹ ← ACELR foja 37 vuelta.

aquello”³⁴²

← 8 ...bre de 1693 , Juan de Luna y Cardenas, “*Cardenal y bicario de esta ciudad*” con “*Andres, indio del pueblo de Anginán encomienda de Felipe de Luna*” por “*Un año*” con paga de “*Sinquenta y quatro pesos en conformidad de lo dispuesto por el señor oydor*”³⁴³

← 10 noviembre, Joan Clemente de Andrada (alcalde ordinario) con “*Diego Indio Calchaqui de la familia del ayudante Duran*” por “*6 meses, a quatro pesos y medio como está dispuesto y mandado Por el Sr Uisitador General*”³⁴⁴

Estos conciertos confirman, *ipso facto*, la evidente modificación de las relaciones societales al interior del mundo encomendero-encomendado que, sumada a las sanciones pecuniarias y otras, más los ingresos a la real caja de hacienda de las penas, no son más que la cristalización de la voluntad regia de modificar las relaciones de explotación y marginación del vasallaje aborigen.

10.10. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA *VISITA*.

1º) La Corona, a través de un instrumento como la visita, se introduce en las relaciones sociales entre los dominantes y dominados intentando regular las relaciones laborales de la población vasalla y la sojuzgada mediante encomienda

2º) El funcionario apoderado Luján de Vargas invoca 27 leyes de la recientemente impresa “Recopilación...”, tres cédulas y cuatro ordenanzas, y Junta de Obispos, para fundar su aplicación de justicia en el marco del estricto derecho indiano

3º) La aplicación de justicia del “visitador”, a fines del siglo XVII y en el Tucumán colonial, es un intento humano por construir “codificación indiana”,

³⁴² ← Ibídem foja 38.

³⁴³ ← Ibídem foja 42 vuelta.

³⁴⁴ ← Ibídem foja 49.

independientemente de la casuística, con la elaboración jurisprudencial que sanciona comportamientos tipificados como ilegales (v. gr. presencia de pobleros o administradores no indígenas en pueblos de indios encomendados) y no hace lugar a argumentos o razones de índole costumbrista. Hizo Vargas que la ley fuese el eje estructurador de las sentencias originadas a raíz de una situación conflictiva que obligó a la autoridad colonial a dirimir la cuestión denunciada como “agravio” a un sector de la población indígena por parte de otra, ahora fielmente identificada y sancionada pecuniariamente.

4º) El argumento de descargo del encomendero Bazán podría esbozarse doctrinariamente en la estrecha relación que guardaba el mundo andino con la *consuetudo* y la tradición, ligadura que sumergía a la costumbre en los hábitos internos e inmanentes al funcionamiento de lo social y a una regla no separada de la vida misma indígena desde la ocupación *inka*. Dicho en otras palabras, reproducía una práctica de valor consuetudinario porque la memoria colectiva rastreaba su origen en la praxis misma de la reproducción material de sus encomendados. No obstante sea perceptible la huella medieval en La Rioja de fines del siglo XVII esboza una argumentación cuando menos no moderna. “Cuando yo entré a mi fundo” dijo, es decir cuando yo suscribí el pacto vasallico con el rey por el cual el me otorgaba la autoridad espacial en ese feudo, dice, “así lo hallé entablado” y “así [porque yo lo he decidido en respeto a la costumbre] ha proseguido”, argumentó en su descargo de las acusaciones que el secretario de la visita le enumeraba. Puede decirse que es el primer caso documentado de conflicto entre el la *lex* y la *consuetudo* en el marco de consolidación de la potestad codificadora indiana del monarca, en esta parte de sudamerica.

§ 11. LA *IUS* POLÍTICA DE LA APROPIACIÓN: RENTA DE INDIOS Y RENTA DE LA TIERRA EN LA HACIENDA DEL MAYORAZGO DE ANILLACO (1620-1714)

Hace varios años que venimos ensayando que la hacienda agrícola de Anillaco hubo un ejemplo paradigmático de que el factor productivo de la tierra y la renta extractiva

impulsada principalmente por el trabajo indígena encomendado en ella, supuso —para usar un feliz expresión de Assadourian— un pasaje práctico de *terre maiterie* a *terre capitale* en las últimas décadas del conflictivo siglo XVII tucumano³⁴⁵.

Describiremos como, a pesar de ser la hacienda un conglomerado empresario agroganadero y textil, con manejo selectivo de tareas, contratos comerciales, conciertos de jornales indios, administración de esclavos y, sobre todo, acumulación de plata en moneda acuñada o plata en piña, la tierra era el factor básico determinante con la aparición del *animus* del mercendero de vincularla a un mayorazgo.

Cuando Don Gregorio constató que su esclavo había concluido de tallar en el leño de algarrobo, IANOÐAVE MMSRAPINA 1702 (“*año de Ave Maria Purisima de 1702*”), frontispicio de la parroquia que había ordenado construir al frente de su hacienda, podía darse por complacido. Construir una capilla, a la que llamó “Nuestra Señora del Rosario”, era digno de su capital simbólico, del prestigio de su persona, de la “calidad” de su familia y de la renta de su encomienda-hacienda. El altar realizado en barro alisado, con techo de horcones curvos integraba el modesto espacio religioso; también incluía su casa, patio de armas y depósito agropecuario, ranchos de esclavos e indios encomendados y “concertados”, conformando un complejo residencial desde donde el “benemérito” administraba el mayorazgo de Anillaco³⁴⁶. Años después, le llegaría el

³⁴⁵ El presente capítulo forma parte del trabajo para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados desarrollado en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla); y la versión original ha sido publicado como capítulo titulado “La *ius* política de la apropiación de la renta de indios y la renta de la encomienda”, pp. 120-137, en Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras, cosas consuetudes...*. Una variante fue publicado en Adrián MERCADO REYNOSO, “La hacienda de Anillaco del Valle de Abaucán”, en DÁVILO, Beatriz *et al* (coords.), *Espacio, Memoria e Identidad* [recurso electrónico en disco compacto], Rosario, pcia. de Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario, 2006. En línea en <http://consulta.bcn.gob.ar/bcn/Catalogo.VerRegistro?co=645375&lg=fr>, (consultado el 13/05/2015) Otra versión reducida del mismo ha sido presentada en École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid) en el taller “Historia y Ciencias Sociales: los debates en historia económica” bajo el título de “La Hacienda de Londres de Anillaco en su pasaje de *terre matière* a *terre capitale*, Tucumán colonial (1660-1720)”, julio de 2016.

³⁴⁶ Sobre la instauración del mayorazgo de Anillaco léase a un trabajo pionero como lo es Jorge A. SERRANO REDONNET, “Los Ortiz de Ocampo”, en *Revista del Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires*, Año 1, núm.1, Buenos Aires, 1979, 30. Id. *La sociedad de Buenos Aires en sus derechos a mayorazgos...*, 142. Id., *La sangre del conquistador Juan Gregorio Bazán de Pedraza*, Buenos Aires, ed. Dunken, 1997.

nombramiento de Gobernador del Paraguay, que lo haría el más alto exponente a un nativo de La Rioja en el sistema gubernativo americano.

El proceso de apropiación del territorio había sido largo y complejo, y la constitución de la territorialidad hispana estuvo emparentada con los avatares de su familia consanguínea. En menos de dos décadas en el Valle de Abaucán —habitado por los indios abaucanes referenciados por las aguadas de Tinogasta y Fiambalá— este mercendero había reintegrado esta zona al mercado del espacio altoperuano tal como habían querido los generales incas al fundar, hacia 1470 la ciudad de Watungasta o Batungasta³⁴⁷, unos cinco kilómetros río arriba. La merced de encomienda estaba en poder de su familia desde 1629³⁴⁸, obteniendo real confirmación en Madrid, el año 1631³⁴⁹ y heredándola de su padre 24 años después con nuevas “parcialidades”³⁵⁰.

Con el aporte de una relectura crítica de fuentes ya trabajadas, se evidencia una relación factual entre encomienda y merced de tierras que, en este caso, deviene también de derecho. En efecto, debemos detenernos en el título de encomienda. Como dijimos, Juan Gregorio Bazán de Pedraza III (véase la Tabla núm 3) obtiene, luego de varias invocaciones de probanzas y méritos³⁵¹, la encomienda de los indios del valle de

³⁴⁷ Rodolfo RAFFINO *et AL.*, “Hualfín, El Sinchal y Watungasta: tres casos de urbaización Inka en el N.O. argentino”, en Cuadernos del Instituto de Antropología, núm. 10, 1983, Buenos Aires, en R. RAFFINO *et AL.*, *Inka, arqueología, historia y urbanización en el altiplano andino*, ed. Corregidor, 1993, 316.

³⁴⁸ AGI, Buenos Aires, 8; AHCo, Escribanía 1ª, Leg. 71, Expte. 2; AHCo, Escribanía 2º, año 1667, Leg. 2, Expte. 9. Fue el Gobernador Felipe de Albornoz quién encomendó “... *los indios pueblos y Repartimientos de Abaucán y Sabuil con pensión de diez pesos en cada un años*”, integrándose la encomienda como una renta anual impuesta a un grupo de encomiendas de la provincia del Tucumán para el sostén de las actividades jesuíticas del Colegio y Seminario cordobés, según Aníbal MONTES: *Encomiendas de Indios Diaguitas Documentadas en el Archivo Histórico de Córdoba*, Córdoba, ed. Dirección General de Publicaciones de la UNC, 1965, (la cita es de 24).

³⁴⁹ AGI, 74-6-10 según la antigua catalogación de los archivos microfilmados del Instituto de Historia Argentina Ravignani (2002).

³⁵⁰ Según Adolfo GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *La encomienda ...*, 245, los años de titulaciones fueron 1671 y 1673 por un total de 89 indios de tasa.

³⁵¹ Juan Gregorio Bazán de Pedraza (III) nació en 1594. En 1613 presentó al gobernador Luis de Quiñones Osorio una *relación de servicio* de sus mayores. En ella invocaba la probanza de su bisabuela

Abaucán en 1629 y la real confirmación en 1631. Su primogénito obtiene la merced de tierras del Valle de Abaucán en 1687, con lo cual se superpone efectivamente el título de merced de encomiendas con el de tierras³⁵² y, con estos *dominios*, su hijo funda un mayorazgo.

Según un documento aportado por Serrano Radonett³⁵³, hubo quien se opuso a dicha encomienda. Doña Isabel de Vidaurre, había sucedido en segunda vida a su padre, Miguel de Vidaurre. Este feudatario, por carecer de sucesión varonil y hallándose anciano e impedido, había renunciado a sus derechos en su mencionada hija, quien con su marido Diego Navarro, eran entonces moradores de Buenos Aires. Pero el gobernador Albornoz declaró la vacante por ausencia de servicios y atribuyó la encomienda a Bazán de Pedraza. Ya en la ciudad de La Plata (Charcas), Isabel y su marido y apoderado Navarro, el 31 de Julio de 1630, entablaron pleito con el nuevo feudatario ante el escribano Gregorio Martínez Campusano y con aporte de los testigos Gómez de Gayoso, Francisco Leiton y Juan de Melo. La demanda de los Navarro obtuvo de la Real Audiencia de La Plata una provisión contra Bazán de Pedraza reconociendo,

“el mejor y más antiguo derecho de los litigantes sobre los indios de Abaucán”³⁵⁴

doña Catalina de Plasencia y los méritos de su padre, Alonso de Tula Cervín. Junto a su hermano Diego Gómez de Pedraza, presentó una nueva relación de 1625 ante el teniente de gobernador de Santiago del Estero, Alonso de Cepeda. Ambas están resumidas en MARTÍNEZ VILLALBA, *Los Bazán*, Córdoba, ed. UNC, 1959; y que se encuentra, esta última relación en el título del repartimiento de Guasangasta y Vichigasta al capitán don José Bazán de Pedraza.

³⁵² A. MERCADO REYNOSO, *Tierras...*, 121. Tanto los genealogista Jorge Serrano Radonett como la antropóloga Roxana Boixados, quienes han trabajado sobre el Mayorazgo de los Bazan, no han advertido esta característica cuanto menos polémica de superposición del mercedes (de tierra y de encomienda) en un mismo espacio vallisto o no lo han tenido por relevante como atributo para la configuración de la familia como espacio, también, de territorialidad hispana. Véase R. BOIXADOS, “Familia, herencia e identidad. Las estrategias de reproducción de la elite en La Rioja colonial (Gobernación del Tucumán, siglo XVII y principios del XVIII)”, en *Revista de Demografía Histórica*, XIX, II, 2001, pp.147-181.

³⁵³ AGNA, IX-48-3-5, f. 15 vta y ss., citado en J. SERRANO REDONNET, *La sangre ...*,76.

³⁵⁴ J. SERRANO REDONNET, *La sangre del conquistador ...*77.

Citado el demandado y continuado el juicio, es muy probable que Navarro haya desistido de continuar debido a las acciones bélicas del valle calchaquí y al fuerte apoyo del gobernador tucumano Albornoz a vecinos portantes de las “costas” como los Bazán. Navarro renuncia a la misma y expresa que, haciéndose asesorar por letrados y “personas de ciencia y conciencia, así como de baqueanos de la parte en donde caen los indios” y “(...) por estar al presente alzados en guerra” halló por cosa cierta “ser en el corto número los que pudiera pretender su mujer por derecho” dado lo cual se apartó de su pretensión. En la documentación se transcribe una diligencia practicada “en el asiento y estancia de la Sierra, jurisdicción de Santiago del Estero que es del licenciado Diego Fernández de Andrada en 26 días del mes de setiembre de un mil y seiscientos y treinta y tres años” ante Martínez Campuzano, estando como testigos los capitanes Francisco de Gamboa y Gregorio de Luna y Cárdenas. Es sugestivo que sea este último testigo, a la sazón castellano de los Fuertes de Nonogasta y baqueano, encomendero de indios rebeldes y futuro mercedenro de tierras de Tudcún³⁵⁵, el que haya interiorizado al demandante de las dificultades materiales de sujetar a los abaucanes sin participar *in situ* y con grandes aportes a cajas de guerra. Su mujer, Isabel, ante Paulo Núñez y en Buenos Aires, ratificó lo actuado por su consorte haciendo *dejación* definitiva de los abaucanes. Es además significativo que el gobernador Jerónimo Luis de Cabrera pagara en nombre de Bazán seiscientos pesos de a ocho reales para resarcir los gastos incurridos por Navarro.

Tabla 3: Árbol genealógico de la familia Bazán de Pedraza (simplificada)

<p>Juan Gregorio Bazán I = Catalina de Plascencia</p> <p>(Natural de Talavera de la Reina, muerto en 1593 en Humahuaca)</p> <p>Primera Generación:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • María Bazán (única hija) = Diego Gómez de Pedraza
<p>Segunda Generación:</p>

³⁵⁵ Véase en el presente trabajo el *percorso* que hubo de la Merced de Tudcún y de su mercendero Gregorio de Luna y Cárdenas.

- Juan Gregorio Bazán II (muere siendo niño).
- Esteban de Pedraza
- Juana Bazán de Pedraza = Baltasar de Avila y Barrionuevo
- Maria Bazan = Juan Ponce de Córdoba
- Francisca Bazan de Pedraza = Alonso de Tula y Cervín (con 5 hijos, entre ellos el cuarto que a continuación se detalla)

Tercera Generación:

- Juan Gregorio Bazan de Pedraza III= Inés Gutierrez Gallegos

Cuarta Generación:

- Juan Gregorio Bazan de Pedraza IV= Mariana de Tejeda y Guzmán

Quinta generación:

- Juan Gregorio Bazan de Pedraza y Tejada V= Petronilla de Izarra Gaete

Sexta Generación:

- A.Leocadia Bazán de Pedraza y Tejeda = Juan José Brioso Quijano (español)
- B.Mariana Bazan de Pedraza y Tejeda = Andres Ortiz de Ocampo (español)
- C.Petronilla Bazán de Pedraza y Tejeda (soltera).

(A) Sucesora de las encomiendas de Pichana y Abaucán.

(B) primera “Señora” del Mayorazgo de Totox (Córdoba)

(C) primera “Señora” del Mayorazgo de Anillaco (La Rioja y Catamarca)

Fuente: Serrano Radonnet, *La sangre...* 1997.

Este triunfo legal (la dejación o renunciamento a la encomienda a favor de los Bazan en oposición al pronunciamiento de la audiencia de Charcas) de ninguna manera significaba una real apropiación³⁵⁶ de la fuerza de trabajo *abauca*. Había pues que

³⁵⁶ Como lo ha manifestado Garavaglia y Fradkin en relación —en el caso a la efectividad del poder burocrático virreinal pero que puede aplicarse a otros ámbitos locales coloniales— a que las designaciones desde España eran expresión local de la soberanía de la Corona, su poder efectivo no residía solamente en su investidura o en el origen de la nominación: debía ser pacientemente construido en el espacio mismo de las relaciones sociales coloniales. Cfr. J. C. GARAVAGLIA y Raúl FRADKIN, *Hombres y mujeres de la colonia*, Sudamericana, Buenos Aires, 2007, 174.³⁵⁶.

invertir costas en *sujetarlos* y hacer efectiva la encomienda hasta entonces nominal. La participación de Bazán en el financiamiento de la represión de la última Gran rebelión es notoria; Juan Gregorio Bazán de Pedraza participó en todas las *Juntas* de guerra y capitulación, con Bohórquez como aliado y luego como rebelde, negoció con indios aliados y hasta procuró, por vía de un regalo, conformar la guardia del Falso Inca con yanaconas de su propiedad, pero:

“Y murió en la guerra contra Bohorques, habiendo enviado dos hijos, un nieto y tres escuderos a la pacificación del Calchaquí”³⁵⁷

Estos dominios se encontraban desiertos a causa de las represalias y castigo de destierro producido por la participación anti-española de los indios abaucanes en el segundo gran levantamiento Calchaquí (1657-62 c.)³⁵⁸. Sin embargo, uno de esos hijos “enviados” no había podido ocupar definitivamente el espacio vallisto con “casa propia” por varias razones; la más importante quizás haya sido la hostilidad indígena, pero también tenía un impedimento legal: según una ordenanza de Toledo de 1572 se establecía que en “los términos y límites de su encomienda [los encomenderos] no pueden tener tierras ni heredades ni ingenios, excepto ganados”³⁵⁹. Por ello, Bazán poseía solo cuidadores o capataces, igualmente llamados mayordomos o pobleros, quienes administraban la fuerza tributaria de trabajo indio y su ganado, tanto de los mencionados pueblos del extremo norte del valle de Abaucán como del potrero del valle de Chaschuil hasta el norte del valle de Famatina.

³⁵⁷ Certificación de servicios del Gobernador Alonso de Mercado Villacorta ante Juan de Ibarra y Velasco, secretario mayor de la gobernación del Tucumán, en AGI, Sec. V Audiencia de Charcas, 74-6-10 y AHCo, Esc. 2º, Leg. 37, Expte. 1. cit. en J. SERRANO REDONNET, *La sangre del conquistador* ..., 79.

³⁵⁸ Federico ARGERICH, *Historia indígena de Catamarca*, San Fernando, ed. UNCa, 187.

³⁵⁹ La ordenanza fechada en Cuzco del 1 de marzo de 1572, en Roberto LEVILLIER, *Gobernantes del Perú...*, t. 1, 67. Consultese la reproducción facsimilar de Tomas de BALLESTEROS, *Tomo Primero de las Ordenanzas del Perú*, en Lima por Ioseph de Contreras, 1685. [En línea] en <https://archive.org/stream/tomoprimerodelas01peru> ; (Consultado el 21-02-15)

Antes de ser para propietario del valle de Abaucan es necesario destacar que la construcción social de la propiedad irá emparentada con los sistemas de herencia y la cantidad de bienes que este sujeto “llega” a la merced de tierras. Su erario era la encomienda de Pichana en la Jurisdicción de Córdoba, muy próxima al límite y flujo comercial con La Rioja y Cuyo. Esta encomienda era especializada en la cria de mulas y depositaria de una notable cantidad de indios desnaturalizados y que recibió en herencia de primera vida. Su cuñado era mercendero de tierras de Pituil-Copacabana que colindaba con el norte con la encomienda de los Abaucanes y anexos (fiambalás, tinogastas, etc.) también suya por herencia. La merced de tierras de Araupatis o Yuctubas de su hermano colindaba con la encomienda de Saujil (que se incorporará como anexo a la Abaucán) y la encomienda de Anguinán, en manos formales del marido de su hermana, colindaba con la encomienda de Famatina de su otro cuñado³⁶⁰.



Hacha-cetro de bronce de
fundación indígena,

³⁶⁰ Múltiples fuentes adscriben unidad de mando en Juan Bazán de Pedraza y Tejeda (IV). Una de ellas es la unificación de tres grandes encomiendas de Anguinán, Abaucan y Pichanas en su yerno a partir de 1722. Véase AGI, Charcas 242 y AHCo, Escribanía 2º, año 1758, leg. 28, Expediente 1.

(¿Sanagasta? ¿1650?). Museo
Inca Huasi, La Rioja.

El pasaje de mercendero de encomiendas a mercendero de tierras acontecerá en el año 1687. Para ello Gregorio hizo pesar las “cargas de vecindad” en aportes a las *caxas* de guerra³⁶¹, peticionando al gobernador del Tucumán Argandoña en ese año de 1687 la merced de tierras de Anillaco-Fiambalá. En dicho título —inérita por lo que creemos importante transcribirla—leemos:

“se ade servir U.s. de hacerme la dha mrd en la forma y manera sigiente: =del Pueblo biejo de Anillaco con dos arroyos uno bermejo q.e corre en dho paraje, y otro adelante con mas su potreros q.e esta a un lado y el Pueblo biejo de Guatungasta, y el paraje llamado Saladillo, y el otro Pueblo biejo llamado Fiambala con mas su potrero q.e cae rio arriba y al poniente y los Pueblos biejos de Abaucán Sunquil y Saujil desiertos que fueron de Yndios de mi encomienda, con dos leguas de tierra en contorno en cada uno de los dhos pueblos y sitios suso mencionados, todas las Aguadas q.e contienen montes y pastos [ilegible] aguadas y pertenencias q.e los dhos pueblos tubieron q.e les pertenecian en ambas sierras, las del poniente y oriente q.e forman el Valle donde estan los parajes con mas las sobras de ellos y sus [ilegible] entradas y salidas cazaderas y pescaderas y otras servidumbres de dhos pueblos especialmente el paraje q.e llaman el Cazadero delos Yndios de Abaucán de dha mi encomienda; y las sobras del Pueblo de Tinogasta del Capitan Juan de Vega,

³⁶¹ Aunque plausible de validación documental es verosímil la hipótesis de A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ —referida a la encomienda tucumana, acerca del peso diferenciado de las cargas fiscales “locales” (de guerra) en contraste a las “oficiales” (diezmo, año vacante, media anata, pensión a órdenes religiosas, limosna del vino y del aceite). Al respecto nos dice “*Así, desde el mandato del gobernador Alonso de Mercado y Villacorta (1664-1670), no tenemos constancia documental de que antes [de la guerra Calchaquí] se impusiera, fueron gravadas las encomiendas con distintas cantidades, según sus ingresos, con el único fin de mantener esos reductos militares [v.g. fortines y presidios] en buen estado para repeler posibles ataques indígenas, siendo, por tanto, la cuantía de esa nueva carga muy variable pues podía ser en dinero, lo normal fueron diez pesos, o en personas, especialmente indígenas que ejercían las funciones de soldados. Esta imposición [fue] hasta el siglo XVIII (...)*”. Adolfo GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *La encomienda...* 187-188. En el mismo sentido, concurre a fortalecer el aspecto diferenciado del impacto de la guerra en el orden jurídico, la “*Reglamentación para el reparto entre los que intervinieron en al guerra de Calchaquí de las familias de los pueblos de indios Yocabiles, Yngamanas y Tucumangastas*”; un articulado de 33 ítems de *regulae ius* para la distribución de ‘piezas’ indias a mercenderos, fechada en 1665 y promulgada por el gobernador Alonso de Mercado y Villacorta, AHCo, Escribanía de Hipotecas 2, Leg. 5, Expte. 12. .

*y el de Aymogasta, las Cuales mercedes son sin perjuicio de tercero de mejor D[e]r[ech]ō*³⁶².

Del pedimento anterior resaltamos la descripción del bien: los linderos de los pueblos, parajes y las “pertenencias” que fueron de indios, las leguas “en contorno”, sus aguadas y sitios de caza, en un esfuerzo por identificar el complejo patrimonial. El auto de concesión de Argandoña le otorgaba el dominio de pueblos, de los ríos y casamenteras —es decir de la tierra y del poder sobre ella-, cuya vigencia comenzó a partir del pago del impuesto de la media anata³⁶³ en la caja real de hacienda de la ciudad de La Rioja y el mandato y toma de posesión.

“hago merced a Voz el mtre de campo D. Juan Gregorio Bazan de Pedraza, p.a vos y Uuestros herederos y subsesores perpetuamente [ilegible] de heredad de los parajes y pueblos biejos de Yndios q.e los abitaron de Uuestra encomienda y de otras reducidos de años atrás en distantes parajes por Ordenes de esta Capitanía General por combenir así y tener sobrada comodidad p.a que sean vuestros el Pueblo de Anillaco con aguadas arroyos y potrero y el paraje del Saladillo y el de Guatungasta pueblo biejo y el pueblo así mismo biejo de Fiambala y su potrero río arriba y los pueblos de Abaucán Sunguil y Sabuil con dos leguas de tierra en

³⁶² AHCa. Sección Gobierno, Carpeta N° 1, Leg. s/n, años 1681-1902, fs. 10 y vta..

³⁶³ Tomás Félix de Argandoña fue uno de los gobernadores que mayor frecuencia de mercedes de tierra concedió en el Tucumán calchaquí. Su política estuvo enmarcada en una minoración de gastos y el aumento de ingresos lo que explicaría tal situación. Concedió sólo 4 mercedes de tierras en la Jurisdicción de La Rioja en el quinquenio de su gobierno de 1686-1691, y notablemente más mercedes de encomiendas, lo que nos hace suponer, un incremento de la capacidad recaudadora del fisco regio. Así como debió capear la oposición de los encomenderos a las imposiciones que, por real cédula del 2 de setiembre de 1687, se ordenó que de todas las encomiendas del Nuevo Mundo se cobrará durante cuatro años la mitad de la renta anual líquida “*Aplicar la media anata de todas las encomiendas que hay en las Indias*”, o sea, descontando las retenciones habituales de las encomiendas, para sufragar la defensa de los dominios ultramarinos, “AL VIRREY DEL PERÚ, PARTICIPÁNDOLE LA RESOLUCIÓN DE LA MEDIA ANATA DE LAS ENCOMIENDAS DE LAS INDIAS DE QUE V. M. HA RESUELTO VALERSE POR TIEMPO DE CUATRO AÑOS” AGI, Indiferente General, Legajo 431, libro 43, fs. 51vta al 54vta., Antonio MUÑOZ OREJÓN, *Cedulario Americano del siglo XVIII*, Sevilla, ed. E.E.H.A., 1956-1959, tomo 1, 301 y 302 [843]. Ante ello, Argandoña eleva al virrey, en 1688, la oposición por escrito de los encomenderos representados de los ocho cabildos tucumanos, que solicitaron que fueran relevados de lo estipulado en antedicha cédula, AGI, *Sec. V*, Lima 88, Carta de Félix de Argandoña al Rey, Salta, 26 de Agosto de 1688.

*contorno en cada uno de los parajes y pueblos mencionados con todas las aguadas rios y manantiales, montes pastos q.e comprenden y todos sus usos y costumbres casaderos y pescaderos y demas pertenencias y servidumbres que los dhos pueblos tubieron y debieron tener al tiempo q.e estuvieron pobladas y abitadas de los dhos Yndios dentro y fuera de los linderos q.e en cada Pueblo aaquíban señalados con los potreros sierras y aguadas q.e tubieron y poseyeron y hay en sus contornos y en ambas sierras q.e forman el dho Valle de Abaucán y Tinogasta y el Potrero del Cazadero de Abaucán, y lo demas enla forma q.e esta parte lo pide debajo de los linderos q.e sita con mas las sobras de los dhos parajes y Pueblos suso mencionados y de el de Tinogasta y Aymogasta q.e refiere q.e sea sin perjuicio de tercero y naturales(...)*³⁶⁴

La concesión transcrita arriba clarifica y perfecciona lo que de entonces en más será el justo título, para Voz y Uuestros herederos y subsesores perpetuamente. Por ello y con la seguridad jurídica que legitimaba aún más su señorío, solo entonces el mercendero ordenó la construcción de la casona sede de su hacienda³⁶⁵ en el centro del

³⁶⁴ Archivo Histórico de Catamarca (en adelante AHCa.) Sección Gobierno, Carpeta N° 1, Leg. s/n, años 1681-1902, fs. 10 y vta..

³⁶⁵ Como vimos, M. BURGA en *De la encomienda...* define a una hacienda a partir de la incorporación de capital constante (mano de obra estable, obras hidráulicas, edificaciones, instrumentos de trabajo) a unas “tierras” entendidas como factor de producción. En este caso de Abaucán, y siguiendo las fuentes de padrones de desagavios y tasaciones de 1667 o 1693, bajo cualquier situación, la mano de obra indígena ya estaba subordinada a emprendimientos agrícolas (fincas) o textiles (telares) que beneficiaron excedentariamente al encomendero titular o *depositario* y a las cajas reales; los bañados fertilizados artificialmente y las obras de canalización se incorporaron al erario de Bazán, cuyo último hito de consolidación del dominio es la merced de tierras. Sobre si la denominación del “sistema de Hacienda” deba ser “Anillaco-Fiambalá” ó “Abaucán” o “de los Bazán” estimamos que no es decididamente importante por cuanto no logró trascender tras la muerte del titular y el “casco” fue abandonado. Jorge GUEVARA GIL, en su estudio *Propiedad agraria y derecho colonial...*, hablando de la denominación, nos ilustra que “*Es moneda corriente encontrar laxitud en cuanto a las denominaciones de una misma propiedad agraria (...). El particularismo inicial, típico de la incertidumbre cognitiva de las primeras décadas de la ocupación española, se plasmó en el uso de topónimos quechuas. Ello se refleja en la documentación correspondiente a ‘cada pedazo de tierra’ (...). Luego, al consolidarse el dominio sobre los terrenos que formaron el casco de la hacienda, los topónimos originales fueron reemplazados por denominaciones descriptivas y literales, que posteriormente se hicieron más breves pero más abarcativas*”, J. GUEVARA GIL, *Propiedad agraria y derecho colonial: Los documentos de la hacienda Santotís, Cuzco 1543-1822*, Lima, ed. Fondo Editorial PUCP, 1993, 33.

Valle, en una localidad llamada “Anillaco” (*anyacuy*) en la confluencia de los ríos de La Troya y Abaucán. Desde allí podía controlar los bañados situados en los bajos del valle aprovechando el pasaje en las inmediaciones del “camino del inca” y de los potreros indios situados debajo de los algarrobales.

Dados los antecedentes judiciales que precedieron a esta transferencia de merced a favor suyo, es comprensible que Bazán haya procurado satisfacer todas las exigencias legales —petición formal, concesión, pago de gravamen y toma ritual de posesión— para asegurar la validez de la enajenación de tierras de sus encomendados. Concurría a su objetivo el tener sitiados a los abaucanes en otros pueblos del valle de Famatina, desterramientos legalizados por “*ordenes de esta Capitanía General por combenir asi y tener [los sitiados] sobrada comodidad*” y por haber confirmado el Rey su encomienda en tercera vida.

Hemos visto cómo la pugna entre la corona y los mercenderos puede ser observada a través de la ejecución de las visitas³⁶⁶. También, las visitas nos permiten conocer valiosa información de la opinión nativa y hay un aspecto digno de destacar acerca la mentalidad del encomendero de Abaucán. Bazán es el único mercendero, como veremos, que apela a la noción de “costumbre” como forma de norma consuetudinaria ante las acusaciones formales que el visitador Luján de Vargas le formulará seis años después de concedida la merced de tierras.

Gregorio Bazán y Pedraza concurrió a La Rioja ante la convocatoria de Vargas y fue acusado de tener mayordomos³⁶⁷ en los pueblos de indios de Tinogasta, Fiambalá,

³⁶⁶ Véase una evaluación de las visitas y el impacto de éstas en la desestructuración de los sistemas indígenas, en Marta B. ANDERS, *Historia y etnografía: los mitmaq de Huanuco en las Visitas de 1549, 1557 y 1562*, Lima, ed Instituto de Estudios Peruanos, 98.

³⁶⁷ En el caso de los mayordomos o capataces de haciendas o encomiendas, estaban inhabilitados para vivir con los indios. Ya desde las ordenanzas del Visitador Alfaro de 1611, aunque el caso de reducciones, se prohíbe que vivan en ellas españoles, negros y mestizos. “=Y de la misma manera prohibo —declaró en el Auto el visitador Luján de Vargas— *que los encomenderos, sus mujeres, padres e hijos y criados ni esclavos entren ni residan en los pueblos de sus encomiendas, porque demás de estar prohibido en la bordenanzas lo prohibe Su Majestad,(...)=Y que por la misma razón no deuen los encomenderos tener mayordomos o pobleros,(...)*”. J. Gregorio Bazán, ya había recibido, como anfitrión la “visita” de los gobernadores quienes habían, cuanto menos, consentido la actividad de los *pobleros* capataces tan esenciales en el cobro del tributo sostenedor de las costas públicas, por lo que en su

Saladillo, Chascuil, todos en el valle Abaucán y de obligar a hilar a mujeres y niñas para cubrir los tributos. Las acusaciones se ratifican en los Autos dictados en la culminación de su visita,

*“Y porque e condena a algunos encomenderos con penas pecuniarias por los hilados que an rrepartido o hecho rrepartir a las indias de sus pueblos y especialmente a las casadas para la paga de estos tributos de sus maridos, y assi prohibo y mando se escusen estas repartisiones y no las agan los dhos encomenderos pues las yndias son libres y exentas del tributo y seruicio y se opone a todos los derechos la introdusion y abuso de que las muxeres pagan por los maridos, y esta prohibido por cedula del tres de mayo demil seiscientos y nueve y mill seiscientos seis”*³⁶⁸

A la acusación de los encomendados y a los cargos formulados en el expediente que se le inició a Bazán y Pedraza, le siguió su descargado por puño y letra del mismo, diciendo,

*“Y en cuanto al cargo de aber cobrado tributos en hilados de las indias de mi feudo digo que cuando entré halle costumbre generalmente introducida de cobrar las tasas de hilado por dezir que la real ordenanza lo dispone dándoles el algodón y llevar el hilado que [a]sí lo hallé entablado y asi a proseguido en d[i]cho mi pueblo pero con tanta suavidad y sin apremio”*³⁶⁹(lo resaltado es propio).

La ley —está diciendo el acusado— es solo un componente del orden jurídico como lo es también la costumbre: *“cuando entré [a la titularidad de la encomienda] hallé ‘costumbre’ por lo que así lo hallé ‘entablado’ y así ha proseguido”*. Las declaraciones inmediatas de los testigos indios no conforman elemento para cambiar el orden jurídico de mis ancestros y estas costumbres tienen calidad normativa; podría decirse que

descargo dijo *“al presente no hay mayordomo ni lo abrá en adelante mandándolo V. S. Assi (...)”* AGI, Sec. VI, Escribanía de Cámara, 864b, f. 57.

³⁶⁸ A.G.I., Sec. VI, Escribanía de Cámara, 864-A, pieza 5º, f.945-948 vta.

³⁶⁹ A.G.I., Sec. VI, Escribanía de Cámara, 864-A, .También recogido por R. BOIXADÓS, “Los pueblos...” 35.

contrargumenta el acusado Gregorio, al puntualizar que no hay distinción entre *lex* y *consuetudo*³⁷⁰ al interior de su *feudo*³⁷¹. “Mi feudo” dice el encomendero, y remite, sin más, a un universo de dominio que muy pocos de los tres centenares de encomenderos tucumanos pueden aludir ante el visitador.

Las quejas de los encomenderos giraban en torno a la ausencia de indios de reserva como fuerza de trabajo encomendada lo que obligaba a concertar rústicas retribuciones (“*alqvileres*” jornalizados) con indios yanaconas o mitmaqkunus³⁷². Los yanaconas sujetos a la familia Bazán de Pedraza ya habían participado de sucesos previos a la rebelión calchaquí encabezada por el falso inca Pedro Bohórquez³⁷³.

³⁷⁰ Está claro que el tándem *Consuetudo-Lex* fue explicado como opuestos por la modernidad. No obstante nuevas investigaciones tanto del nacimiento del concepto de derecho consuetudinario Cfr. ROUMY, F. (2001), “*Lex consuetudinaria, Jus consuetudinarium. Recherche sur la naissance du concept de droit coutumier aux XIe et XIIe siècles*”, *Revue Historique des Droit Française et Étranger*, 79, 257-29; como los nuevos abordajes historiográficos como los de Kröschell permiten replantear la relación *lex-consuetudo* que si se me permite desde una óptica diversa a la tomista. En los años 90 también la historiografía alemana resaltó el vínculo que el derecho consuetudinario tenía con la tradición romano canónica. Kröschell planteaba que el concepto derecho consuetudinario mismo era un producto de la ciencia de derecho romano canónica y no valía como originaria proto-representación de los pueblos de la temprana Edad Media que los germanistas románticos pretenden visualizar. Cfr. KRÖSCHELL, K. (1994), Reseña de G. Dilcher y R. Schulze (eds.), *Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter* (Berlín 1992), en *RQE*, 23, 428-434.

³⁷¹ La noción de *feudo* y a su *costa y mención* en su relación con *Las Partidas* en los instrumentos públicos del Tucumán tardío la hemos desarrollado en Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras en nombre del rey*, 54º Congreso de Americanistas, Santiago de Chile, 2004.

³⁷² “Muchas veces los empresarios trataban de ‘atar’ por igual a los trabajadores indios contratados y los yanaconas en relaciones a largo plazo de endeudamiento, dependencia mutua y señoría personal. O se negaban a pagar el salario completo para aumentar las probabilidades de que un trabajador temporario volviese más adelante. Para cobrar un trabajo ya realizado, un indio podía tener que someterse a otra temporada de trabajo. Esas medidas eran frecuentes y difundidas [hacia 1640] pero no debemos exagerar su éxito. Muchos indios tenían suficientes fuerzas u opciones — comprendida la fuga— para cobrar algún salario y marcharse tras periodos limitados de servicios. Un colonizador que tratase de atraer y mantener el acceso a los trabajadores contratados, y en menor medida, a los yanaconas, tenía que aceptar esa realidad”, Steve STERN, *Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española*, Madrid, ed. Alianza América, 1982, 235.

³⁷³ En la monumental *Relación Histórica...* del padre Hernando de Torreblanca, éste describe como los encomenderos riojanos y londinenses, en un esfuerzo por “*ganarlo con dones para tenerlo grato*” a Pedro Bohorquez, les llenan de obsequios. En estas alianzas “incomodas” y juegos de lealdades entrecruzadas de la guerra Calchaquí, Gregorio Bazán de Pedraza le mandó un grupo de yanaconas propios para reforzar la guardia personal del falso inca, AGI, Charcas, 58, Carta del cura de

La encomienda de Anguinán, a mediados del siglo XVII, luchaba por ser rentable en una conflictiva zona de frontera³⁷⁴, pero como vimos, hacia fines ese siglo, las acusaciones de Luján de Vargas a Bazán de Pedraza refieren, en términos económicos, y solo en este caso, a jornales de indias y niñas tejedoras. Nada dice de sus patrimonios territoriales, pero sí de sus patrimonios salariales, que en sí mismos demuestran una rutina de trabajo y estandarización de actividades complementarias. Los indígenas situados en Anguinan no estaban tasados pero si existían una apreciable cantidad de indígenas agregados. Estos producían alimentos para el resto de los componentes de la hacienda que ya se habían especializado en familias tejedoras, en vides y en la cria de mulas. En consecuencia, no podemos pensar a la encomienda de Anguinán como una unidad autosuficiente sin relación con el mercado interno comercial, y donde están sitiados los indios abaucanes sin los aportes de las sementeras de sus mismos pueblos como Saujil o Fiambalá y sin una unidad de mando empresarial en manos del mercendero. Ello porque, siguiendo a Assadourian³⁷⁵, la relación dada entre el trabajo excedente y el trabajo necesario de las encomiendas se pone más de manifiesto en el sector de los objetos confeccionados con fibras, como en este caso, donde el producto lo

Famatina, Juan Gedeón de Guzman, fechada el 24 de abril de 1658. Sobre el particular véase a Hernado de TORREBLANCA, *Relación histórica de los sucesos que tuvieron lugar en la misión y valle de Calchaquí en el año 1656 en tiempo de la rebelión de los indios promovida por don Pedro Boborquez*, en Teresa PIOSSEK PRESBICH; *La rebelión de Pedro Boborquez. El Inca del Tucumán (1656-1659)*, Buenos Aires, ed. Juarez, 176 y 177 (258).

³⁷⁴ “Demuchos años a esta parte no a avido indio tributario ninguno ni reservado para poder solventar mi casa y mi familia y las cargas de la vecindad con los años de guerra que a avido enque por dicha vesindad sin indios e acudido a los socorros y entradas al valle calchaquí y fuerte de andalgalá y esto es muy notorio en la ciudad de la rioxa= para poder haver dichas sementeras de trigo a sido nessesario valerme de indios concertados y alquilados por no averlos naturales.”. Decía el “sargento maior Don diego de herrera y guzman encomedador del pueblo de Anguinan”, el 29 de diciembre de 1667, AHCó. Escribanía 2º, leg. 2, expte. 9. Diego de Herrera era en realidad administrador de la encomienda que le pertenecía a Juan Gregorio Bazan padre. Éste había reducido en Anguinan varias piezas de indios “*Binchinas*”, los abaucanes de “*Guatungastas*” y “*Fiambalás*”. Según un curaca de estos últimos denunció, en el empadronamiento y desagravio de 1667, “que [Herrera y Guzmán, *poblero* y casado con la hija del encomendero Francisca de Bazan y Pedraza] *había ocupado sus tierras y su agua con sementeras copiosas y de ellas no les había repartido nada*”, Aníbal MONTES, *Encomiendas de Indios...*, 17.

³⁷⁵ Carlos SEMPAT ASSADOURIAN, “La renta de encomienda en la década de 1550: piedad cristiana y deconstrucción”, en Assadourian, Carlos S, *Transiciones hacia el sistema colonial andino*, Lima, ed. El Colegio de México - Instituto de Estudios Peruanos, 1994, 171-208.

constituyen “piezas” de ropas tributadas por estos indios abaucanes confinados en Anguinán, como ponchos, colchas, aperos, etcétera, lo cuales, en cuanto mercancía eran destinados al mercado interno potosino³⁷⁶. ¿Es en el trabajo textil donde el encomendero obtiene más *excedente*³⁷⁷? Considerando el proceso de hilado y tejido, según la estimación más moderada que hallamos en la Visita de los indios chupacos, la producción de una pieza de ropa consume unos tres meses de trabajo en equipo de “marido y mujer en el cual tiempo trabajan en otras cosas” y dos meses, si es exclusivo “no levantándose de hacer dicha ropa sin entender en otra cosa”³⁷⁸. Estos datos sugieren una idea de las cantidades de horas de trabajo de los encomendados y magnifica la violación de la codificación indiana de concertación de jornales porque las trabajadoras indias “*son libres y exentas del tributo y servicio*” condenando el sistema colonial que “*las muxeres pagan por sus maridos*”.

Como advertimos, cada pieza textil valía entre 4 y 10 pesos de plata, mientras que una mula mansa de dos años costaba entre 2,50 pesos y 4 pesos. La dotación de factores pero sobre todo los tiempos eran mucho mas beneficiosos en el primer producto (provisión de hilado, uso, tintura y tejido, enfrente a manejo de asnos y yeguas, parición, cria y adomesticación). Las tasas de “hilado” eran pues, más efectivas, las cuales consistían en que el encomendero Bazán les propinarse el algodón y la lana a sus centenar de indios de tasa —o más de 500 si incluimos las mujeres y niños— y “retirase” sus tejidos producidos descontando la *demasía*, no solo denotaban violaciones

³⁷⁶ “Assadorourian es el punto de inflexión; en donde la perspectiva de cómo se configuraba el mercado interno hacía que el escenario de la región apareciera como un elemento susceptible para poder explicar procesos que habían estado vedados por los análisis generales muy macro y con otras periodizaciones” Conferencia inaugural de la Segunda Cohorte de la Especialización en Historia Regional. Facultad de Humanidades- UNNE. Conferencista, Sandra FERNÁNDEZ (UNR-Conicet). En línea en <https://www.youtube.com/watch?v=uU1LCAIToJk> (Consultado el 12/04/2016)

³⁷⁷ “*Excedente* es aquí igual a sobretrabajo, es decir aquel trabajo que se encuentra por encima del estrictamente necesario para el mantenimiento del productor directo,” en GARAVAGLIA, Juan “Las actividades agropecuarias en el marco de la vida económica del Pueblo de Indios de Nuestra Señora de Los Santos Reyes Magos de Yapeyú: 1768-1806”, en FLORESCANO, Enrique, *Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina*; México, ed. Siglo XXI-FLACSO, 1975, pp. 464-487.

³⁷⁸ J. MURRA, *et al.* (ed.), *Visita de la provincia de León de Huánuco ...*, t. 1. 38, 1967.

por ausencia de conciertos y por ende las Ordenanzas de Alfaro y de la Recopilación sino que consolidaban la práctica colonial del pleno dominio las tierras de los “pacificados” al movilizarlos forzosamente de sus detenciones territoriales.

Es posible entonces concluir que la hacienda de Anillaco-Fiambalá se articulaba sobre la producción textil final destinada al Potosí y que la producción agrícola-ganadera de las sementeras y crianzas de los demás pueblos abaucanes y los sitiados en Anguinán y Pichana³⁷⁹, se subordinaba al abastecimiento y manutención de la mano de obra india encomendada. Poco importaba pues, la pertenencia étnica de los ya entonces seleccionados indios de tasa (probablemente lo conformaban “piezas” de vichigastas, yocabiles, fiambalas y abaucanes más “alquilados” a otros encomenderos o “depositarios”) sino que sus productos manufactureros eludían los agentes negativos como el clima y la escasez de tierras fértiles. Es, asimismo, verosímil que los mismos

³⁷⁹ “el gobernador de Acosta [y Padilla] dio orden al general Pedro Nicolás de Brizuela, comandante de la frontera, para que, con su fuerza, marchase contra los indios, habiendo salido bien en la empresa y trasladando la población de Malfín, Abaugeán y Saugil al pueblo de Pichana, en la jurisdicción de Córdoba”, en A. ZINNY, *Historia de los gobernadores..* t. 1, 133. Un atento examen de los padrones de la visita de Lujan de Vargas establecen que los abaucanes fueron mayoritariamente sitiados en Anguinán y los malfines en Huaco, ambas de La Rioja, véase el folio 863 y 877 vta. para el primero, y f. 791, de AGI, Escribanía de Cámara, 864 A. La confusión está dada, probablemente, con la interpretación de un pasaje de la *Información de Méritos y Servicios*, del general Pedro Nicolás Brizuela, en AHCo, esc. 1, leg. 28, que dice:

“Como el Capⁿ Pedro Nicolas de Brizuela Theniente de Gobernador Justicia Mayor Capⁿ a Guerra dela Ciudad dela rioja Vno deella el año pasado con numero de soldados españoles peltrechados de armas y municiones por Orden del Señor don Gutierre de Acosta y padilla Gobernador y Capⁿ General desta prouincia, al Fuerte de San Blas del pantano desta Jurisdiccion allebar quatrocientas piasas delas naciones de Malfin y abaucan que auía muchos años que estaban deuelados y aviéndose traído de sus tierras estaban en dicho fuerte presos por Orden de dho Señor Gouernador; y en conformidad de su Orden el dho Capⁿ Pedro Nicolas de Brizuela llebó las dhas quatrocientas piasas Con mucho Cuydado u Vigilancia por Ser Yndios altibos Valientes y Soberuios y sin faltar ninguno llegó con ellos a la dha Ciudad dela Rioxa a donde los tubo mas de tres meses Con guardia de Compañias de Soldados Españoles, y es notorio que despues por nueba Orden del Señor Gouernador los despacho a la Ciudad de Cordoba a cargo de Vn Cap de una Compañía de soldados y numerosos Yndios amigos a donde oí estan Reducidos.”

indígenas ya sometidos a un fuerte proceso de aculturación y abandono de las prácticas de cultivo y recolección comunitarios hayan visto en los tejidos y telares una fuente segura de una mercancía fácilmente comerciable, por afuera de la mita y el tributo monetario que funcionaban como instituciones oficiales de extracción. En concurrence, el derecho indiano brindaba al mercendero Juan Gregorio Bazán y Pedraza todos los atributos jurídicos y simbólicos, además de los medios coactivos para transformar la hacienda de Anillaco en una sola unidad de producción, que se articulaba sobre la producción manufacturera textil de los telares y que ha este fin se subordinaban las tierras abaucanas.

Como ya ha sido señalado, el dueño de las haciendas fue nombrado gobernador del Paraguay en 1708, se trasladó a Asunción al año siguiente y permaneció allí, ahora como un despersonalizado burócrata colonial³⁸⁰ y empresario mercader yerbatero³⁸¹ en el siempre lucrativo tráfico potosino, hasta su muerte, en 1717³⁸².

Si abandonamos temporalmente este intento de abordar la hacienda de Anillaco desde la antropología jurídica del espacio³⁸³, y recurrimos a la materialidad del patrimonio (bienes, hijuelas, ventas, etcétera) tendremos que realizar algunas

³⁸⁰ AGI, Sec. V, Charcas, 217.

³⁸¹ Juan C. GARAVAGLIA, *Mercado interno y economía colonial*, México, ed. Grijalbo, 1983, 398.

³⁸² En el gobierno de Bazán en el Paraguay se destaca su disposición a fundar nuevas colonias españolas en dos regiones paraguayas: la del valle de Guamipitan, a ocho leguas al sur de Asunción y la de Curuguatí a más de cien leguas de esa última ciudad, la cual, según Zinny, “sirvió de frontera de los mamelucos del Brasil”. Murió a los 53 años y antes de concluir su mandato, véase Antonio ZINNY, *Historia de los Gobernadores del Paraguay, 1535-1887*, Buenos Aires, ed. Imprenta y Librería de Mayo, 1887, 513. Según la probanza de una de sus hijas, había fundado una Villa llamada San Felipe Neri (del) Valle del Baztán, y por otro nombre Guarnipitán, y que se halló en ella y vió poblada de casas y chacras con iglesia matriz”, Jorge SERRANO RADONNET, “*Los Ortiz de Ocampo*”, en Revista del Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires, año I, núm. 1, Buenos Aires, 1979, 0-62.

³⁸³ Para la conceptualización de “antropología jurídica del espacio” véase a Alejandro CASAGRANDE (2014), Reseña del libro de BARRIERA, Dario “*Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político. Santa Fe, 1573-1640*” Ed. Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y Museo Histórico Provincial “Brigadier Estanislao López”, Santa Fe, 2013, p. 422. En línea en <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n29a14> (Consultado el 12/05/15)

consideraciones económicas sobre la Hacienda de Anillaco hacia el 1700. La hacienda de Anillaco tenía un titular, el mercendero Juan Gregorio Bazán de Pedraza³⁸⁴. Poseía un centenar de indios de tasa encomendados, originados en tres encomiendas ubicados —indios y encomiendas— en otras tantas jurisdicciones (San Fernando del Valle de Catamarca, Todos los Santos de la Nueva Rioja y Córdoba), que a través de la *mita de lienço* permitía al encomendero obtener 100 mantas trimestrales por un valor de 10 pesos promedio la pieza³⁸⁵.

³⁸⁴ “Una hacienda es la propiedad rural de un propietario con aspiración de poder, explotada mediante trabajo subordinado y destinada a un mercado de tamaño reducido, con la ayuda de un pequeño capital. Bajo tal sistema los factores de producción no solo servirían para la acumulación de capital sino también para asegurar las ambiciones sociales del propietario” definición de Eric R. WOLF y Sidney W. MINTZ “Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles” en *Social and Economic Studies*, Vol. 6, núm. 3, 1957, pp. 380-412 En línea en <http://www.jstor.org/stable/27851111> (Consultado el 07/5/2013). Aunque la definición conceptual posee más de medio siglo, es para quien esto escribe la más idónea. Idéntica opinión recoge Magnus MONER, “La hacienda hispanoamericana: un examen de las investigaciones recientes” en E. FLORESCANO (coord.) *Hacienda, latifundios y plantaciones*, México, Ed. Siglo XXI, 1975, 15-48.

³⁸⁵ Para darnos una estimación de los precios en la última década del siglo XVI una arroba de vino costaba 4 pesos, una mula mansa de dos años, 2½ pesos, un salario minero en el Norte Chico (Copiapó chileno) 6 \$, Cfr. RJHyLLR, Año 4, núm. 1, p.23; AJLR, A-395. Folio 6 ; M. CARMAGNANI, *El salario minero en el Chile Colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: el Norte Chico 1680-1800*, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1963, 87.



Ilustración: “apero” o tejido de lana de oveja para uso de montura, Fiambalá, Catamarca, 2002.

La distribución interna de la hacienda, tendiente a maximizar las horas de hilado de las mujeres, consistía en varias unidades de producción destinadas a procurar alimentos (maíz, trigo, carne de cabra y guanaco) a los efectos de no distraer a las

familias más idóneas para el hilado. Sobre el carácter del intercambio entre el hacendado y los encomendados por los alimentos a cambio de las mantas anuales, no nos ha llegado ningún documento probatorio que nos permita analizar las equivalencias, sean éstas en moneda o en especies (v.g. una bayeta es igual a una arroba de aguardiente), aunque es indudable que el esquema de remuneración obligaba al hacendado a mantener satisfechos a los hogares indios tributarios y, sobre todo, a sus mujeres (siempre de los valles con tradición de tejedores como Abaucan y Famatina). Las fuentes que nos han llegado hasta ahora resaltan las quejas de algunos encomendados por falta de pago en moneda de la tierra, quejas esparcidas en todos los padrones e informaciones de desagravios levantadas por los funcionarios regios. La costumbre de cobrar “tasa de hilado” estaba introducida “cuando entré a mi feudo” como lo manifiesta y firma Bazán en su descargo ante el visitador Vargas en 1693. En efecto, hay evidencias de que la tasa de hilado estaba introducida en el *partido de Londres* desde la visita de los *thenientes de naturales* ordenada en 1607³⁸⁶, es decir, desde el periodo pre alfariano y anterior al inicio del levantamiento calchaquí de la segunda mitad del siglo XVII, lo que permite confirmar que la producción textil indígena existió antes, durante y después de las “guerras calchaquíes”.

El tributo estaba incorporado en el producto textil final, y esta característica nos obliga a replantear la valoración que tenemos de los costos de la producción para centrarnos principalmente en la cantidad numérica de indios encomendados. El coste del producto hacendístico se sitúa en la manutención de la mano de obra (el costo de alimentarlos) de esa cantidad de indios y sus núcleos familiares³⁸⁷. La hacienda poseía

³⁸⁶ Leticia CARMIGNANI, «Las visitas de los *tenientes de naturales* a los *partidos de pueblos de indios* de la gobernación del Tucumán. (1606-1607)», *Corpus* [En línea], Vol 3, No 2, (2015) <http://corpusarchivos.revues.org/548> (Consultado 12/12/2015)

³⁸⁷ “en muchas áreas el sistema laboral era conocido por su nombre prehispánico. En México se denominaba *cuatequil*, y en el Perú, Bolivia y Ecuador, *mita* (en Ecuador también se llamaba *Indios Quintos*). En Colombia, cuando se hacía referencia a las minas, se denominaba *mita*, cuando hacía referencia al trabajo urbano, se le conocía como *alquiler*, y al trabajo agrícola *concertaje*.” VILLAMARÍN, Juan y VILLAMARÍN, Judith; “El trabajo indígena, su papel en la organización social y política prehispánica y colonial”, en M. CARMIGNANI, A. HERNÁNDEZ CHÁVEZ y R. ROMANO (Coords.), *Para una historia de América III. Los nudos* (2), ed. F.C.E. – Fideicomiso Historia de las Américas- El Colegio de México, México, 13-72.

—además del conglomerado de bienes mulares, vacunos, bovinos, equinos y cultivos— indios abaucanes, guatungastas, fiambalás, aimogastas y tinogastas tanto en Abaucán, en el actual Catamarca, y en Anguinán, La Rioja. Por herencia poseía, además de los mencionados, los indios pichanas en Córdoba. El total de los indios de tasa “a la cabeza” de Juan Gregorio Bazán de Pedraza era de 118: en 1693, 61 indios³⁸⁸ de la encomienda de Abaucán y anexos. Si a los mismos se les aplica el coeficiente de 4,28³⁸⁹ por indio, tenemos un total de 322 indios entre los de tasa, los reservados, ausentes, muchachos, muchachas, mujeres, viudas, párbulos y *chusma*. De esta cantidad de trabajadores agrícolas y textiles, deben excluirse las *piesas*. Y, además: una encomienda de “parcialidad” de Anguinán, con 36 indios tributarios³⁹⁰, y la encomienda cordobesa de Pichana, con 20 indios de tasa³⁹¹. En suma, 623 indios estaban bajo su mando en tres jurisdicciones (Abaucán en Catamarca, Pichana en Córdoba y Anguinán en La Rioja). A diferencia de otros encomenderos y mayordomos administradores, Bazán no necesitaba alquilar o concertar jornales con indios libres ya que tenía en demasía reserva de fuerza de trabajo o podía recurrir a sus familiares directos. Como vimos en otro lugar³⁹², su hermano Gil poseía un centenar de indios hualfines, andalgalás y araupatis sitiados por “real Provisión” en su estancia riojana de Huaco, pero poseía la merced de tierras de araupatis-yuctubas que colindaba con la encomienda de Saujil del mismo J. Gregorio. Sus cuñados, ha su vez, colindaban con la merced de tierras Anillaco como la de Pedro Vega Aybar quien poseía la merced de tierras Pituíl de Copacabana. El otro colindante y cuñado, esta vez de mercedes de encomiendas era el encomendero Gordillo de los famatinas y próxima a la encomienda de Anguinán.

³⁸⁸ AGI, Sec. VI, Escribanía de Cámara, 864A, recogido por Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras...*, 130.

³⁸⁹ El coeficiente, elaborado por A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *La encomienda...*, surge de dividir la población total encomendada sobre los tributarios (población tributaria sobre población total). La información total y parcial se toma del padrón general ordenado por el gobernador Ángel Peredo en 1673.

³⁹⁰ AHCo, Esc.2, 1719, leg.13/exp.2.

³⁹¹ AGI, Escribanía de Cámara, 864-B

³⁹² Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras...*, 113 y 114.

Las principales mercancías producidas eran el poncho y aperos varios (calcetas, mantas, colchas, alforjas), en un conglomerado de unidades diferentes que producían, además de la lana de oveja y guanaco, tasajo, sal, cebo, cera, miel, queso, ovejas, cabras, trigo y alfalfa. Un pormenorizado desglose nos permitirá ilustrar el modo en que la encomienda de Anillaco se convirtió en una empresa eficaz y sacó ventaja de los recursos disponibles en la distribución de su producción: Pichana producía tasajo, Anguinán trigo y Abaucán mantas. Solo proveyendo los dos primeros para el sustento del tercero era posible alcanzar niveles de producción textiles sostenidos.

Los ingresos de la hacienda provenían de la venta de aperos mientras que el sustento de su población indígena se generaba a partir de un consumo interno de su producción propia agrícola-ganadera, muy diferente, por cierto, a otras haciendas tucumanas monopductoras³⁹³. Por otra parte, la ausencia de tasaciones reales de tributos ordenadas por la autoridad regia denotaría, a simple vista, un déficit estatal del poder público. Una interpretación más acorde nos sugiere que ellos, los Bazán Pedraza —uno teniente de gobernador y el otro regidor antes y alcalde de 1° voto después— eran los titulares de la *ius* política local, entre otras razones, por ser los sostenedores a su “costa” de los fortines “presidios” de Andalgalá y Pantano³⁹⁴, constructores de iglesias y capellanías, sostenedores de las pensiones a órdenes religiosas y de la actividad local de “policía”. Como vimos en el capítulo anterior, su condición social no impidió que el visitador regio Lujan de Vargas³⁹⁵ los condenara a ambos.

³⁹³ Dos haciendas riojanas de igual período comenzaron a especializarse. La hacienda de Atilés producía aguardiente y vino, mientras que la hacienda de San Sebastián de Sañogasta producía mulas mansas.

³⁹⁴ Atabiar un soldado para un presidio o fortín costaba en 1693 entre 150 y 300 pesos. Francisco Moreno Maldonado, encomendero de Sanagasta, afirmaba en su descargo de la visita “*pues aunque mis encomendados me paguen puntualmente los cinco pesos de tasa no alcanza con ello a la paga de dos reales al cura doctrinante pr cada indio, cda año 5 pesos de pensión al Colegio seminario y cont^{mente} a los más años aviar un soldado para el presidio de Esteco o entrada al Chaco que cuesta 150 pesos o 300*”, A.G.I., Sec. VI, Escribanía de Cámara, 864-A, f.830 v.

³⁹⁵ La actuación de Vargas —en La Rioja en 1593— representa una “intelligentsia sin ataduras sociales” (*freischwebende Intelligenz*, término derivado de Alfred Weber y Karl Manhein) y el oidor pertenece a un grupo social —burocrático-monárquico— especie de estrato intersticial al que consideramos libre de los intereses de clase y con capacidad relativa de trascender así sus propias

Entre 1690 y 1700 hubo una acumulación originaria del capital hacendístico. Se perfeccionó el mecanismo de selección de personal encomendado más idóneo para la generación de valor por encima de su tasa tributaria, sea éste “de la tierra”, servicio personal o de lienzo. También, se introdujeron esclavos en cargos jerárquicos de la producción con las no menos llamativas características de artesanos y letrados hasta ser designados administradores³⁹⁶. Ello significaba que los últimos estaban al tanto de la cuestión patrimonial por cuanto debían cobrar tributos en especies, básicamente mantas tejidas de lana animal (oveja, vicuña o guanaco), descontar los adelantos de alimentos y el sobrante, en “demasía”³⁹⁷, restituirlo al jefe de la familia tributaria, acumular el stock de productos y encargar a los arrieros los viajes en carretas cuando el hacendado lo indicase. Esclavo y empresa ejemplifica una mayor especialización del trabajo aunque sin llegar a constituir un “obraje”. Pero no todos los tributos se cobraban en mercancías cuya procedencia eran de tejeduría doméstica ligada a la vida de la familia indígena (lana escarpida, hilada y ovillada, paños, fajas, aperos, alforjas, calcetas), sino que, una parte de la renta monetaria de la encomienda se cobraba en productos de la tierra (maíz, trigo, zapallo, lana) a los indios de tasa de Pichana y Anguinán. Es allí donde creemos que apareció una diferencia en el desarrollo en comparación con otras encomiendas y

posibilidades limitadas al orden colonial impulsando (enmarcado en el derecho indiano garantista) un sistema colonial utopista. Para una conceptualización de “freischwebende intelligenz” véase a Peter BERGER y Thomas LUCKMANN, *La construcción social de la realidad*, ed. Amorrortu, Buenos Aires, p. 24 y ss.

³⁹⁶ Uno de ellos hizo de pregonero del auto general del Oidor Lujan de Vargas quien “*a son de caja de guerra y boz de pregonero que yssó el oficio de tal Asencio Negro esclavo del M'tre de campo don Jn Greg'o. Bazán de Pedraza en altas e Ynteligibles bosses y en concurso de mucha gente*”, “Ordenanza sobre el trato de los indios en la jurisdicción de la Rioja”, en *RJHLLR*, año I, núm.4, Octubre-Noviembre-Diciembre de 1942, 22.- Igualmente “*Yten una mulata llamada Barbula yja de Matiax que al presente [1629] está de capatax del Vinculo de Anillaco*”, “Juicio testamentario del Gobernador Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza, de su yerno Juan Brioso Quijano, su esposa Leocadia Bazán y de Isabel Brioso Quijano y su esposa Torres Gordillo”, en *REVISTA DE LA JUNTA DE HISTORIA Y LETRAS DE LA RIOJA*, año IV, núm 1, Enero-Febrero-Marzo de 1945, 19.

³⁹⁷ Sobre el concepto de *demasía* especialmente estudiado para el valle del Famatina de La Rioja, léase el trabajo de Roxana BOIXADÓS, “Indios rebeldes-indios leales. El pueblo de Famatina en la Sociedad Colonial (La Rioja, Siglo XVII)”, en *Xama*, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Mendoza. 1998.

haciendas que tendría que ver con la capacidad de maniobra del propietario Bazán de crear el mecanismo de autosuficiencia alimentaria sin adquirir productos básicos en otras haciendas o mercados (recursos extra-haciendales) y repartir forzosamente alimentos y mercancías a la población india femenina de Abaucán, conformando un único modo subsidiario de producción tendiente a maximizar el trabajo en telar, el uso y la tintura de tejidos. Es evidente que el hacendado conseguía un *surplus* no solo por vender la ropa y tejidos en metálico sino porque él y sus administradores concedían al indio encomendado la provisión abundante de productos alimentarios a precios superiores al valor de cambio, a los que sumaban el tributo y descontaban con productos tejidos (v.g. onzas de hilados de algodón) por lo que de la *demasía de tasa*, es decir, el derecho de los indios de recibir el excedente del valor del tejido entregado por encima de los cinco pesos anuales establecidos por las reales cédulas, se descontaba además la provisión de mercancía alimentaria básica sobrevaluada. De esta forma, obtenía una corriente de excedente continua de productos imperecederos y de alto valor agregado como beneficio a una inversión inicial mínima.

Tabla 4: Hacienda de Anillaco por tipo de encomienda y número de tributarios hacia la última década del siglo XVII

	<i>Encomienda de</i>	<i>Número formal de indios de tasa tributarios</i>	<i>Número de indios totales según coeficiente</i>	<i>Pueblos naturales de</i>	<i>Principales productos y servicios</i>
Hacienda de Anillaco	Abaucán y anexos	61 (1693)*	322	Sabuil Sijan Fiambalá Saladillo Chaschuil	Ponchos Mantas Calcetines Trajinantes
	Anguinán	37 (1698)**	192	Famatinas Araupatis Binchinas?	Maíz Trigo
	Pichana	20 (1692)*	105	Quilmes desnaturalizados Yanaconas	Cabras Vacas Tasajo

Fuente: Elaboración propia en base a (*)AGI, Sec. VI, Escribanía de Cámara 864 A, pieza 5º, fol. 3 y ss.; 864 B, pieza 7, f 1177; y (**) AHCo, Esc, 2, 1719, leg.13/exp.2

Desde el punto de vista productivo, ¿qué aconteció en la hacienda tras la muerte de J. Bazán de Pedraza? El único punto cierto es que en el segundo cuarto del siglo XVIII la Hacienda de Anillaco se disgregó³⁹⁸: Abaucán era, además, productora de aguardiente con una renta anual de 300 pesos. Las vides fueron introducidas por el mismo mercendero a través de un contrato con un administrador. En su testamento, Bazán pidió que se respetara el acuerdo consistente en que él se asociaba con otra persona aportando las tierras, el regadío y tres esclavos a cambio de un porcentual de la futura renta vitivinícola. Estimamos probable que el cambio en producto se hiciese en virtud de la inminente caducidad de la encomienda y, con ella, el acceso irrestricto a la fuerza de trabajo indígena; pero no tenemos elementos como variaciones de precios y ciclos en el período que apoyen esta hipótesis. Los indios sitiados en Pichana estaban, según su curaca, “vacos” hacia 1749³⁹⁹. La crisis del siglo XVII y la indudable declinación de la producción de plata, según propuesta de Assadourian⁴⁰⁰, significó un momento negativo en el proceso de reproducción del sector comercializado del espacio colonial con la disminución de la demanda de medios de vida y de medios de producción que conlleva

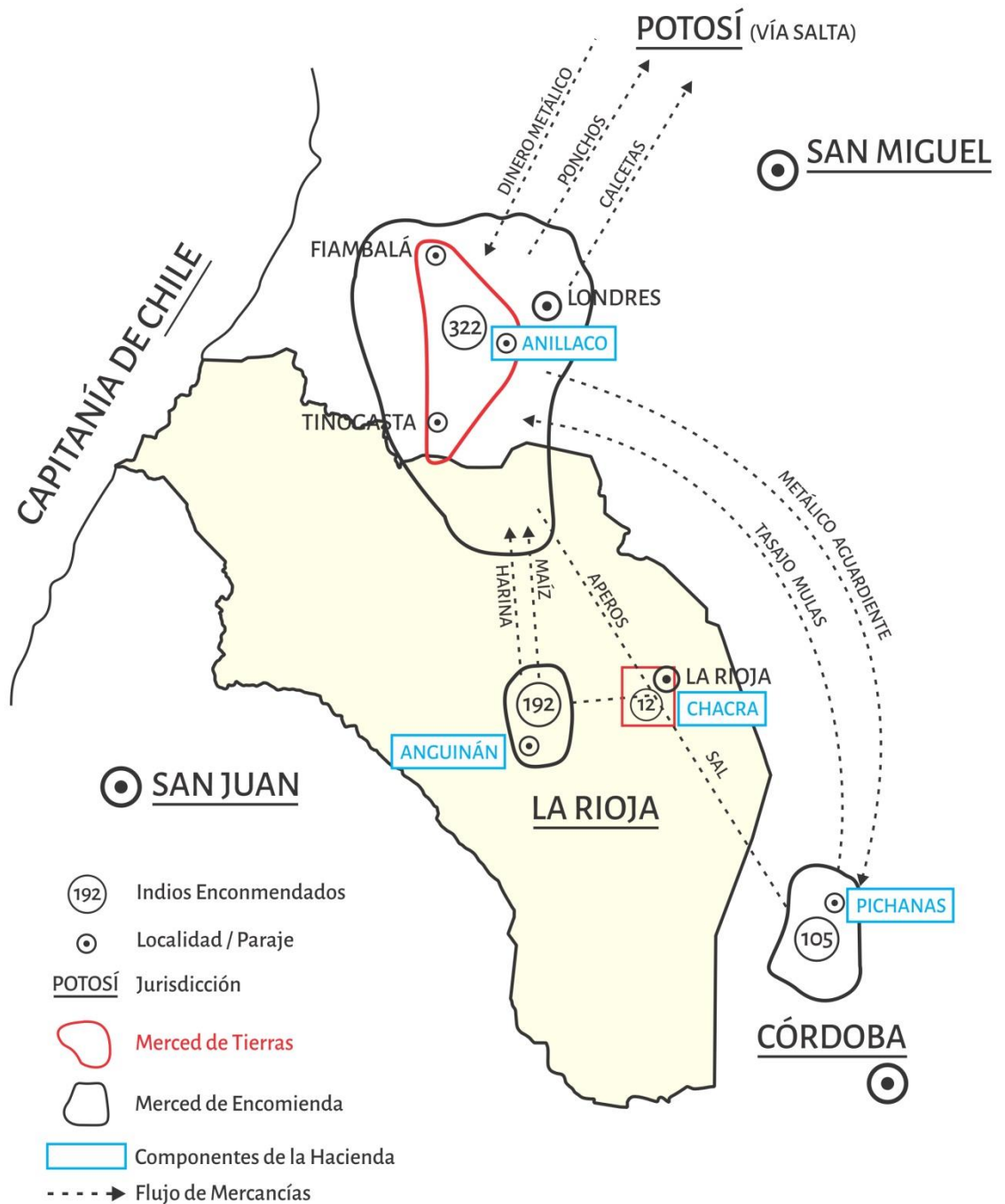
³⁹⁸ Estamos trabajando una hipótesis a partir de la relectura de la fuente de juicio testamentario de J. Bazan de Pedraza, donde se visualiza que la caducidad del mayorazgo se debe con el reclamo judicial de su esposa superviviente en primera instancia, al fallecimiento de la primera “Señora” heredera del mayorazgo de Anillaco y al también fallecimiento del primogénito del vínculo e hijo de su yerno Juan Brioso Quijano, tenedor y administrador del “paraje” (1721) de Anillaco. Véase la transcripción de la fuente en, “Juicio testamentario del Gobernador Don Juan Gregorio Bazan de Pedraza, de su yerno Juan Brioso Quijano, su esposa Leocadia Bazan y de Isabel Brioso Quijano y su esposo Tomás Gordillo”, en RJHyL, año III, núm. 4, pp.23-29, Octubre-Noviembre y Diciembre de 1944; año IV, núm. 2, pp.17-26, Abril-Mayo y Junio de 1945; año IV, núm 3, pp.36-45, Julio-Agosto y Setiembre de 1945; año IV, núm. 4, pp.9-27, Octubre-Noviembre y Diciembre de 1945; y Año V, núm. 3, pp.9-19, Julio-Agosto y Setiembre de 1946.

³⁹⁹ En el padrón que se levantó por orden del gobernador Juan Victorino Martinez de Thineo en 1749, la encomienda de Pihana tenía 180 indios, de los cuales 29 de tasa. Su curaca “Don Sebastián Chanquia” declaró que el pueblo estaba “vaco” hacía muchos años por la muerte “*Juan Quixano vecino de la Rioja quien había sido su encomendero*” AHCo, escribanía II, leg. 23, exp. 25. Este Juan Brioso Quijano había sido un sevillano que esposó a la hija del hacendado, Leocadia Bazán. Para el padrón general véase Ana Inés PUNTA, “La tributación indígena en Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII”, en ANDES, núm 6, 49-78.

⁴⁰⁰ Carlos SEMPAT ASSADOURIAN, *El sistema...*, 17

la fase menguante del ciclo de circulación del capital minero, lo cual determina un repliegue en las producciones regionales del mercado interior.

Mapa N°2 : Flujograma de mercancías del Hacienda de Anillaco, Indios encomendados y tipo de merced (1690 c.)



Fuente: Elaboración propia en base a documentación del Archivo Historico de Córdoba, Archivo Historico de Catamarca y AGI.

Para resumir, en la esfera de la producción de la hacienda de Anillaco, se dan tres expropiaciones: A) los encomenderos y el encomendero titular del emprendimiento recibían un porcentaje de la producción social de la población india como excedente convertido en tributo, lo que se conoce como renta de encomienda (“cobrar para sí los tributos de los indios”). B) una parte de la renta de la hacienda provenía del cobro sobrevaluado del tributo de la tierra a los encomendados de Pichana y Anguinán para transferirlos subvaluados a las familias hiladoras del Abaucán, proveyendo a los jefes étnicos de alimentos y lana. Otra parte, de la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta final de los tejidos acaparados y vendidos en circulante en el mercado potosino (calzones de cordelate, “cordobanes”, calcetes, paños, “colchas” o “frezadas” y ponchos) y, otro segmento, de la de la compra de estos tejidos a otros encomenderos a cambio de moneda de la tierra para venderlos por moneda de plata. La producción de tejido (hilado, teñido y tejido) constituía una mercancía llegada al mercado potosino siendo producida por la economía familiar india, constituyéndose en una mercancía de alta rentabilidad y fuerte uso de la fuerza de trabajo, pero sin ningún costo monetario ni de inversión para el mercader emprendedor, terrateniente y encomendero que convertía en dinero la mercancía textil con ínfimos costes de inversión y elevada privatización del excedente producido socialmente.

¿A dónde iba lo producido en la hacienda? Es muy probable que la mayor parte de las ganancias se gasten en un esquema de vida de las familias beneméritas. El mismo acto de designación de una jurisdicción tan importante como el Paraguay con el cargo de gobernador le haya insumido gran parte de su patrimonio. Como ha sido varias veces señalado, el cargo de gobernador mismo puede ser entendido como un alargamiento de la patrimonialización hacendística. Dicho de otras maneras, la *çabeza* de la hacienda coincidía con la principal jefatura política. Coincidente con el traslado físico de La Rioja a Asunción surge el testamento y voluntad de Bazán de Pedraza de instituir el mayorazgo de Anillaco en vinculo a una de sus hijas. A su muerte o a la muerte de la primera heredera *vinculada* Doña Petronilla Bazán y Gaete, surgió una oposición por la

cual “no podrá correr a lo que Gor. Juan Bassan Dispusso que fuesse Binculo” (1736) en el “juicio testamentario” iniciado por su yerno Juan Brioso Quijano⁴⁰¹.

Los siete mayorazgos que existieron en la Gobernación del Tucumán se instituyeron entre el siglo XVII y algunos pervivieron hasta el siglo XX como el Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta el cual fue, como vimos, declarado ilegal por la justicia riojana en 1920⁴⁰². Pero no todos tuvieron la suerte de mantenerse tantos años, Yavi⁴⁰³, en Jujuy; Totox⁴⁰⁴ en Córdoba; Ambato⁴⁰⁵ y Guasan⁴⁰⁶ en Londres (actual Catamarca) Cochangasta⁴⁰⁷ y el mencionado Sañogasta en La Rioja, tuvieron una vida relativamente calma en términos de derecho público indiano, por cuanto la monarquía no necesitaba autorizarlos como si lo debía hacer en la península⁴⁰⁸. El concepto clásico era que debía mantenerse unificado el mando territorial o no menoscabarse el dominio útil de las tierras productivas de la hacienda agrícola creadas en vínculo y otras prerrogativas de sangre y de linaje. No obstante la principal resistencia vendrá desde el mismo derecho privado común de los descendientes. El ejemplo documentado que tenemos es el del juicio sucesorio de Juan Bazán de Pedraza para lo cual la primera en oponerse es su esposa, y luego el sevillano Juan Brioso Quijano, su yerno. Al momento de fallecer el

⁴⁰¹ Revista de la Junta de Historia y Letras de La Rioja, “Juicio testamentario ...”, en *RJHyL*, año III, núm. 4, pp.23-29; y Octubre-Noviembre y Diciembre de 1944.

⁴⁰² Adrián MERCADO REYNOSO, *Tierras...*2003, 235

⁴⁰³ Guillermo MADRAZO, *Hacienda y encomienda en los Andes. La Puna de Jujuy bajo el marquesado de Tojo, siglos xvii-xix*, Fondo Editorial, Buenos Aires, 1982.

⁴⁰⁴ Jorge SERRANO RADONETT, *La sangre...*, 45

⁴⁰⁵ Felix BRIZUELA DEL MORAL, *Las mercedes...*, 56

⁴⁰⁶ Antonio LARROUY, *Autonomía*,

⁴⁰⁷ Roxana BOIXADOS, “Familia, herencia e identidad. Las estrategias de reproducción de la elite en La Rioja colonial (Gobernación del Tucumán, siglo XVII y principios del XVIII)”, en *Revista de Demografía Histórica*, XIX, II, 2001, pp.147-181.

⁴⁰⁸ José M. MARILUZ URQUIJO, “Los Mayorazgos”, en *Lecciones y Ensayos*, núm. 42, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1970, pp.55-77.
Abelardo LEVAGGI, *La enfiteusis en la Argentina (siglos xvii-xx)*. *Estudio histórico-jurídico* (Buenos Aires: Universidad del Salvador, 2012), 17-18.

ex gobernador estaban sus propiedades embargadas por causa de sentencias desfavorables de su juicio de residencia como gobernador del Paraguay. Su mujer, se presenta ante el *justicia* local y expone que no autorizó a su marido que sus dotes integren el vínculo. Contribuyó a que la heredera del vínculo de Anillaco muriera sin descendencia lo que fue aprovechado por su yerno para reclamarlo en la primogenitura de su hijo. Éste murió muy joven “en insania” según el testamento de su padre, quien había sido designado depositario de la hacienda de Anillaco del Valle de Abaucan.

Antes de adentrarnos en el mismísimo paraje de Anillaco y su mayorazgo conviene aclarar que el total de los bienes del difunto Juan Bazán de Pedraza y Tejeda ascendían a ciento diez mil pesos. Y sufre una primera división en tres: las encomiendas de Abaucan y anexos, de Pichana y anexos y de Anguinán heredó Leocadia Bazán de Pedraza (C); los solares urbanos y huertas de la jurisdicción de Córdoba fueron para Mariana Bazán de Pedraza (A); y las tierras y emprendimientos de La Rioja y de Catamarca fueron para Petronilla Bazan de Pedraza (A). Por ser soltera y morir sin descendencia asume, como era habitual, un administrador y este es el sevillano Brioso Quijano, esposo de Leocadia quien impulsará la disolución del vínculo ante la amenaza de embargos del juicio de residencia como gobernador de Paraguay y por la oposición de la viuda del mismo, Petronilla de Izarra Gaete. La esposa Petronilla pide al Justicia Mayor que el mayorazgo no se instituya porque al momento de su constitución no brindó acuerdo de que parte de su dote matrimonial y su parte ganancial lo integre.

¿Qué había pasado con la merced de tierras de más de doscientas veinte mil hectáreas llamada de Anillaco-Fiambalá? El fundador del mayorazgo quiso vincularla a su hija pero a posteriori de su muerte se encontró con coherederos porque aquella merced no había sido concedida al instaurador del mayorazgo sino a su padre de igual nombre Juan Gregorio de Bazán y Pedraza casado con Inés Gutierrez Gallego de Ribera, en 1687. Ahora en 1714 la pretensión de vincularla chocó con el impedimento de los coherederos hermanos como Gil, Melchora e Inés, hijos del mercendero inicial. A estas dos últimas fueron asignadas dotes y dinero pero Gil quedó usufructuando de la merced de tierras hecha hacienda porque:

“en las partijas q’e se hicieron de sus bienes de sus hermanos coherederos (sic) la cual se ha mantenido en un cuerpo por *no tener comoda diuision* y

aver vivido hermanablemente (sic) gozando sus frutos *partiéndolos* conforme sus cosechas” (...) atento q’ e los bienes (...) hasta ahora *proindivisos*”⁴⁰⁹ (la bastardilla es mia)

Goce familiar de los beneficios de las cosechas, una característica de la economía colonial⁴¹⁰. Aquí conviene detenernos en las características que tendrán las sucesiones para encauzar una conservación de una hacienda y encomienda previo acuerdo de partición de sus beneficios entre los “más aptos” para el trabajo “rural” y de campaña. A pesar de las leyes de Toro que habían servido para desvincular las tierras amayorazgadas no había pues reparto igualitario y se tendía a mantener la gran propiedad en manos de un solo poseedor, impulsado, a nuestro entender, por la crisis económica del primera mitad del siglo XVIII y (aunque de validación más acabada y un estudio más específico) la particular dotación de factores de la producción que hacen pie en la mano de obra y tierras regadas barata y abundante.

En este caso el yerno Briosó Quijano intentará la compra de las partes hasta reunir todo el patrimonio teniendo en cuenta que la su mujer era heredera de las tres más rentables encomiendas de la región. No obstante, deberá asumir la defensa de su suegro ante el mismísimo Consejo de Indias de Sevilla y dispondrá viajar para defenderlo de los

⁴⁰⁹ La Rioja, 17 /11/1720 testimonio de Capitán Enrique Bazán y su mujer Lorenza de Mercado y Reynoso ante el Alcalde Ordinario Diego Gutiérrez Gallegos, en “Juicio testamentario del Gobernador Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza...”, en *RJHyL*, Año V, núm. 3, Julio-Agosto y Setiembre de 1946, p.13.

⁴¹⁰ Para la relación entre la economía colonial y el modo de producción feudal y el mercado de capitales y productos, en este caso y periodo situado en la Capitanía de Chile, mercado de productos de la hacienda de Anillaco, nuevamente CARMAGNANI, Marcello. *Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: le Chili (1680-1830)*, París, ed. SEVEPEN, 1973, en especial el capítulo III «Formation d'un marché colonial et ses effets sur la croissance économique générale» (p. 263-278). Para una crítica a esta visión véase a VERLINDEN Charles. Carmagnani (Marcello), *Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale : Le Chili (1680- 1830)*. En *Revue belge de philologie et d'histoire*, tomo 55, 1977. Histoire (depuis l'Antiquité) — Geschiedenis (sedertde Oudheid) pp. 691-693; En línea en http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1977_num_55_2_5469_t1_0691_0000_2 (Consultado el 29/08/2016). Hay una traducción española de S. GREZ, L. REYES Y J. RIERA, en M. CARMAGNANI, *Los mecanismos de la vida económica en una sociedad colonial. Chile 1680-1830*, Ed. DIAB (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) y CIDBA (Centro de Investigaciones Diego Barros Arana) Santiago de Chile, 2005, p.421.

embargos preventivos del juicio de residencia⁴¹¹. La tierra y sus productos continuaban a defender la honorabilidad y el linaje aún adentrado el siglo XVIII riojano⁴¹².

§ 12. DOCTRINA SOBRE LA MERCED DE TIERRA SEGÚN JOSÉ MARÍA OTS CAPDEQUÍ.

Dentro de la doctrina articulada sobre la merced de tierras, sin lugar a dudas, el autor clásico es José M^a Ots Capdequí. Éste, en su capítulo “Las instituciones de derecho privado” del libro “El Estado español en las Indias”, se pregunta “¿Cómo imaginarnos a los indios poseyendo tierras en un plano aproximado de igualdad con los otros propietarios españoles, mucho menos beneficiando minas en provecho propio? Se respetaría a los indios la propiedad de sus tierras—concluye— sólo en tanto

⁴¹¹ Antes de viajar testará y por ese documento dijo “estando como estoy sano y con salud y con juicio y memoria y entera uoluntad respecto de estar para ase viaje largo ha haquellos Reinos (España) En que ai peligro de Muerte y Entodo la Ynsertidumbre dela bida (...) hordeno Este dcho mi Testan'to”(4/4/1736). “Juicio testamentario del Gobernador Don Juan Gregorio Bazan de Pedraza ...”, en *RJHyL*, año III, núm. 4, pp.23-29.

⁴¹² Estos rasgos marcaron desde el principio la diferenciación social entre los conquistadores del siglo XVII. Existía sin embargo la posibilidad de que la audacia y el coraje físicos se vieran señalados como factores determinantes en el ascenso dentro de los rangos militares de la hueste y por lo tanto en el monto de la recompensa ulterior. Los valores ético-sociales predominantes eran de carácter heroico, y, insistimos, en las “costas”. No hace falta que los Bazán mencionen los costos de “ataviar un castellano” como si lo hicieran otros encomenderos ante el oidor Lujan. Costaba entre 150 y 300 pesos de reales de a ocho anuales. ¿es mucho o es poco? En equivalentes al periodo eran entre 52 y 110 mulas mansas de dos años. Y eso era para sostener la línea de fortines de empalizada que en numero exageradamente honeroso de siete fuertes, sostenía la *pax* calchaquí. Naturalmente, estas fortalezas-presidios y postas no eran costeados por la Corona pero sí por los mercenderos de encomiendas y de tierras. Es propio del derecho común medieval el exigir una ganancia proporcional a la importancia *ius* política de estar allí, en la línea de frontera, defendiendo a la cristianidad y al rey. Por lógica, el beneficio era fundamentalmente en el acaparamiento de los excedentes de las economías indígenas. Desde muy temprano este acaparamiento se institucionalizó mediante el mecanismo de la encomienda y en el caso de Londres y la familia Bazan, de tierras también.

constituyeran éstas un medio para satisfacer con el fruto de su cultivo los impuestos que tenían obligados a pagar a sus encomenderos o a la Corona”⁴¹³.

Siguiendo esquemáticamente este paradigma *ius*-historiográfico en virtud del descubrimiento y conquista, las tierras de las Indias Occidentales se consideraron jurídicamente como regalía de la Corona castellana. De allí que el dominio privado sobre la tierra debía derivar de una gracia o una merced. En el régimen de tierras, la institución de derecho que hilvana los dos siglos sucesivos de la sociedad colonial riojana será la “merced de tierras”. Ots Capdequí señala “(...) según la doctrina articulada por los juristas más destacados de la época (se refiere a Juan Solórzano y Matienzo) ya hemos dicho que no es aventurado afirmar que todo derecho de propiedad privada de los colonizadores en las indias derivaba, originariamente, de la gracia o merced real”. Leemos la cautela en la afirmación del prestigioso historiador así como es posible detectar en el sintagma “no es aventurado”, el modo en que el derecho es derivado a las tierras de la merced. (...)

Dijimos, en otro párrafo ⁴¹⁴, que una de las atribuciones concedidas en las capitulaciones a los adelantados, jefes de las expediciones descubridoras, era la referida al reparto de tierras y solares y, en el caso que estudiado, fue posible observar cómo la “Capitulación” entre Juan Ramírez de Velasco y Blas Ponce otorgaría a este último, el título de Maestre de Campo y Justicia Mayor, y el principal beneficio o retorno a su inversión consistió en el reparto de tierras e indios en merced.

Ots Capdequí continúa diciendo que “de esta misma facultad gozaron las altas autoridades coloniales –virreyes, presidentes, gobernadores y cabildos- en los territorios de nuevo descubrimiento y población, con las circunstancias de que los *repartimientos* hechos quedaban sujetos a la confirmación de la Corona.”

“El repartimiento –y junto a él la Real Cédula de gracia o merced- fue el ‘título originario’ para adquirir en las indias la ‘propiedad’ de la tierra.” El párrafo se presenta como altamente complejo y taxativo: “merced” de tierras, “gracia” de tierras,

⁴¹³ Ots Capdequí, Jose M., *El Estado español en las Indias*, México, ed. F.C.E., 146

⁴¹⁴ Véase § 5.1.3.

“donación” de tierra o “repartimiento” de tierras son títulos originarios para adquirir propiedades de la tierra⁴¹⁵.

Como sabemos a través de algunos artículos de la “Novísima Recopilación”, la tierra y su dominio privado estaban condicionados a dos y tres elementos (depende del momento coyuntural) que consistían en residir en ella, hacerla productiva por cultivos y abonar, si hubiere lugar, las tasas de la media anata de la jurisdicción. “Pero el mero hecho del repartimiento –aclara Ots Capdequí- no se adquiría el pleno dominio sobre el lote de tierra adjudicado. *Era requisito indispensable para que el dominio se consolidase*, poner en cultivo la tierra recibida y residir en ella por un plazo de tiempo que cambió según los casos –cuatro, cinco y hasta ocho años-.” (Lo resaltado es mio).

“Estos repartimientos debían de hacerse sin agravio para los indios, sin perjuicio de un tercero (español), sin concesión de facultades jurisdiccionales sobre los habitantes las tierras adjudicadas y sin derecho alguno sobre las minas que en ellas pudieren hallarse. Al hacerse los repartimientos se había de procurar que a todos correspondiese ‘parte de lo bueno e de lo mediano e de lo menos bueno’”.

Tal como veremos más adelante, la afirmación anterior respecto del derecho eventual de los aborígenes adolece, en los términos cronológicos de la historia de la fundación de las gobernaciones del Tucumán, de atemporalidad. Es cierta, si bien sólo en el siglo XVII y en algunos “espacios” virreinales, dado que esa es la época en la que se promulgaban los ordenamientos reservistas de derechos de los pobladores autóctonos y se habían fundado y repartido en merced las tierras (y encomiendas) de las nuevas jurisdicciones nacientes tucumanas, ya fueren las denominadas urbanas y rurales como las llanistas y andinas. En otras palabras, cuando se intenta una *regula* de las instituciones en cuestión, éstas ya funcionaban *contra legem*.

Y Ots Capdequí continúa: “en los tiempos de Felipe II, dado un mejor conocimiento que se tenía de la realidad americana y de otro por el mayor valor económico de la tierra, con el aumento de la densidad de la población, y ante la necesidad de incrementar

⁴¹⁵ OTS CAPDEQUÍ, José M^a, *El régimen de la tierra en la América española durante el período colonial*, Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo, Trujillo, 1946, 20 y ss.

por todos los medios los recursos del tesoro para hacer frente a las costosas y frecuentes guerras sostenidas por España, se implanto el sistema de enajenar las tierras de realengo en pública subasta, adjudicándolas al mejor postor.”

“No solo esto, sino que, además, se exigió a los propietarios de tierras la exhibición de sus títulos de dominio, anulado las apropiaciones indebidas o la realizada con exceso al amparo de un título legítimo si el poseedor no legalizaba su situación con el pago de una cantidad en concepto de composición.

“Persistieron los repartimientos de tierras en los lugares de nuevo descubrimiento o nueva población, y las Reales Cédulas de gracia o merced, pero ahora ya como algo excepcional. Lo corriente fue, a partir de esa fecha –1591-, que las tierras baldías se adjudicasen en remate público al rematante mejor postor. Para ser admitido en la composición, se exigió que el interesado hubiera poseído y cultivado la tierra por lo menos durante el plazo de diez años.”

“En la Recopilación de las Leyes de las Indias de 1680 se permitió que en los remates se hicieran las adjudicaciones de tierras bajo la figura jurídica del Censo al quitar todos los títulos de adquisición originaria del dominio privado de la tierra –repartimientos, Reales Cédulas ordinarias o extraordinarias de gracia o merced, remates y composición- estuvieron sujetos a la Real Confirmación. Ante la resistencia pasiva opuesta por los particulares, se llegó a permitir en el siglo XVIII que la real confirmación fuera expedida por los propios Jueces privativos de tierras, sin necesidad de acudir precisamente al Real y Supremo Consejo de Indias.”

“(…) Tanto la Real cédula de 1591, como la recopilación de 1680, admitieron ‘la antigua posesión’, como causa de ‘justa prescripción’, para adquirir el dominio de las tierras. La real instrucción de 1754, que sometió a revisión el problema de los baldíos, solo admitió esa justa prescripción para las situaciones de hecho producidas con anterioridad a 1700, pero no para las que se hubieran producido con posterioridad de esa fecha.”

“La defensa del interés económico –posesión efectiva y cultivo- y las de interés fiscal –remates y composiciones- condicionaron todo el derecho indiano promulgado sobre la materia. Este intervencionismo del Estado fue mal visto por los particulares y por los

propios odores de las Audiencias –formadas en las doctrinas del derecho romano justiniano”⁴¹⁶.

La posesión originaria era tal, en virtud de la merced y repartimiento; no era ajena a los conflictos que se daban entre los nacientes actores privados y públicos ni entre éstos y la Corona a causa del usufructo material de tierras y encomiendas. A pesar de ello, denotará la solidez del instrumento legal mercedario.

El título, el acceso a él, la duración y la delimitación espacial serían las aristas de los futuros pleitos sobre la legalidad de las posesiones, si bien allí intervienen otras instituciones del Derecho a las que no nos animamos a llamar indianas propiamente dichas, sino coloniales con fuertes raíces en la alta edad media: nos referimos a la vecindad, la encomienda, el juicio de residencia y la real confirmación. Desde entonces, estas instituciones echaron, a su vez, luz sobre la continua casuística de la norma.

Desde el punto de vista positivo, el *corpus iuris* de la recopilación, posee todos los elementos constitutivos de la normativización futura de la asignación de tierras que, en un solo título, ordena la forma y el proceso, los requisitos y la *potestas* del Gobernador, de su representante real “o quién tuviere nuestra facultad” al tiempo que sistematiza los otorgamientos sobre la base del ordenamiento nobiliario o estamentatario (“conforme a su calidad” personal). Por último, relaciona estas tierras (en este caso también las encomiendas) con las tasas fiscales y establece la obligatoriedad de la residencia y subordinación formal del nuevo *status*.

Resulta llamativo observar el modo en que esta disposición establecía y reforzaba la potestad y el arbitrio del jefe local, del Gobernador militar quien verificaba la posible residencia del futuro beneficiario, identificaba las tierras de posible asignación para, finalmente, otorgarlas en Merced y en nombre de Su Majestad. Es de destacar que esta disposición *regia* —asentada más en una lógica militar que civil— delegaba la *potestas* al responsable del poblamiento esta única regalía, la tierra, mientras que se reservaba otras como, por ejemplo, las minas, las que al decir de Juan de Solórzano, “ora se hallen y descubran en lugares públicas, ora en tierras o posesiones de personas particulares”, el

⁴¹⁶ OTS CAPDEQUÍ; *Ibidem*, 26 y ss.

oro “que se coge, pesca o labra en los ríos” , salinas, *estancadas*, *mostrencos*, los *oficios públicos*, el *regio patronato*, todas estas sometidas a la confirmación real⁴¹⁷.

Como es posible observar, la residencia en vecindad era condición *sine qua non* para la validez del título. El propio gobernador de Tucumán poseía -dos años antes de ser sancionada aquella norma- una taxativa opinión sobre la relación entre vecindad y derecho a la tierra, tal como lo explicita en carta al Rey: “porque un repartimiento [de merced de encomienda o de tierra] que estuviese un mes sin dueño se pierde”⁴¹⁸.

De esta suerte, la entidad dominativa de la merced era puesta de manifiesto si existía una posesión efectiva de la cosa. Ambas, el título de merced más la efectiva apropiación a través de una posesión, significaban el dominio pleno o el *verum dominum*.

Quisiera resaltar las condiciones contextuales de la carta de Juan Ramírez de Velasco al Rey que encontramos en el Archivo de Indias, hasta ahora inédita. Es la de un funcionario formado, que ya ha planificado la constitución de ciudades y ha experimentado fracasos y sinsabores (aquí valga el termino grossiano medievalista “*di sperienza guiridica*”), la nominación de una *Lei* sin su efectiva “sustanciación” (diríamos hoy) hace papel mojado lo repartido, o en síntesis del paradigma propuesto por Hespanha, esta autoridad (gobernador por gracia del Rey) está impulsando una “*definición del Derecho Comun caracterizado por na practica*” porque la cosa “que estuviese un mes sin dueño —dice Ramírez de Velasco— se pierde”. O que es lo mismo decir: la sensibilidad jurídica local, más allá de las leyes formales del reino, establece que si la concesión no va acompañada de la posesión efectiva—ésta diríamos “desposesión o ausencia de aprensión”— invalida el repartimiento efectuado de la cosa. Y con ello trastabilla toda la política imperial hispana de conquista y poblamiento.

⁴¹⁷ OTS CAPDEQUI, “Las confirmaciones reales y gracias al sacar en la historia de derecho indiano”, en Estudios de Historia Novohispana, Vol 2, núm. 2 (1968), en línea <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ehn/article/view/3208> (Consultado el 12-03-2016)

⁴¹⁸ AGI, Sec. V, Charcas, 42, Carta del gobernador de Tucumán, Joan Ramírez de Velasco, al Rey del 4 de febrero de 1586.

§ 13. LA MERCED REAL COMO TIPO DE DOMINIO.

La merced real fue la facultad que el monarca castellano y luego español poseía para otorgar un bien inmueble a un súbdito. El Rey, con diversas alternativas seculares, gobernaba con poder absoluto, porque el monarca estaba absuelto de la fuerza obligatoria de las leyes. Las decisiones se concretaban en la Cámara del reino, que era la vía institucional que poseía una estructura territorial, con atribuciones específicas de funcionamiento. La Cámara fue la institución regia orgánica; el expediente era el procedimiento a través del cual actuaba la gracia, era la función que allí se preparaba, si bien sólo era el rey quien la ejerciera, otorgando, en merced, un bien a un particular y con ello generaba un derecho, es decir, una *iurisdictio de posesio* sobre esa cosa. Hasta aquí un enunciado explicativo que no pudo ser revadido. La fuentes histórica nos habla del “su majestad” aunque sabemos que quienes entregaban las mercedes (los gobernadores del Tucumán) eran “hombres del rey” o las caras de un sistema de gobierno que aún no habían convertido en un estado plenamente soberano. Sea como se considere al estado colonial como modelo tradicional del estado absolutista o una construcción continua de un estado policéntrico, no hay dudas que el Rey concedía. Pero ¿a quién y por qué razón de gobernabilidad?

Conceptualmente, los diccionarios históricos de la lengua española definen al vocablo merced, cuyo verdadero significado vale tanto para galardón cuanto para lo que se debe a alguien por sus trabajos o labores⁴¹⁹. “*Mercendear*” es un verbo transitivo antiguo, que significa hacer gracia o merced, por lo que “*mercendero-a*” es un antiguo adjetivo para calificar a quien daba merced y también a quien la recibía⁴²⁰. Salustiano de Dios⁴²¹, lo explica comparando el concepto de “merced” con el de “gracia”. En este marco, gracia significa, en uno de sus sentidos, don o favor que una persona hace a otra

⁴¹⁹ Sebastián de COVARRUBIAS, *Tesoro de la lengua castellana o española*, Madrid, 1611, con las adiciones de Benito Noydens, publicadas en la edición de 1674, Martín de Riquer (ed.) Barcelona, 1943.

⁴²⁰ Citado del *DICCIONARIO HISPÁNICO UNIVERSAL. con equivalencias en americanismos*, México, II tomos, ed. W.M. Jackson Inc., 1959, 947. [Tomo I].

⁴²¹ Salustiano de DIOS, *Gracia, merced y patronazgo real: la cámara en Castilla entre 1474 y 1530*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 274 (432).

sin atender al mérito ni esperar recompensa por lo que recibe; merced, en cambio, y basado en su rigurosa significación: es el premio o galardón que se otorga a alguien por el trabajo realizado. En consecuencia —prosigue textualmente Salustiano de Dios— y en función de su etimología, “gracia” sugiere “gratuidad”, mientras que “merced” responde a “merecimiento”, o con “su debida remuneración”. La merced regia, de estricta merced, consistía en el otorgamiento real del privilegio de una tierra, vivienda, jurisdicción, tenencia, renta, mina, etcétera, como resultado de una acción real de compensación y recompensa por los servicios prestados por el beneficiario, así como la justificación del referido otorgamiento⁴²².

Conceptualmente, ya hemos definido antes la noción de “mercendero”⁴²³: es el receptor y titular de una merced, mientras que otros autores mencionan, siempre al sujeto portador del título, como “mercetario”⁴²⁴ o “mercedero”⁴²⁵ o “mercificado”⁴²⁶ o “mercedario”⁴²⁷

En términos generales, se vulgariza la denominación (mercendero, mercedero, mercificado) a todos los sujetos beneficiarios de las mercedes (clérigos, militares, mercenarios, nobles, aborígenes) quienes se dirigían, vía cámara de peticiones y memoriales, en “solicitud” de merced. Simbólicamente, “merced” también llegó a

⁴²² “Por ende, acatando los muchos e buenos e leales servicios, que vos Lope de Conchillos, mi secretario y del mi consejo, me aveys fecho y haceys de cada dias, y en alguna hemienda e remuneración dellos”, se señala en la merced otorgada al citado Lope de ciertos “bienes de un morisco” que “por pasar allende” pertenecían al fisco regio. Por provisión de cámara, fechada en Logroño el 14 de set. de 1512, refrendada Almazán y señalada de Zapata y Carbajal (AGS,RGS, abril 1512). S. DE DIOS, *Gracia, Merced...*, 275.

⁴²³ A. MERCADO REYNOSO, *Tierras, cosas, consuetudes...*, 32.

⁴²⁴ R. VERA VALLEJO, “Memorias de vida forense”, en RJHLLR, año II, núm. 1,121.

⁴²⁵ M. HERRERA DE FLORES, *Tierra y propiedad en el Mendoza Colonial*, ed. Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, 1997.

⁴²⁶ F. BRIZUELA del MORAL, *Historia de las Mercedes de Tierra en Catamarca, Siglos XVI al XIX*, San Fernando, ed. Universidad Nacional de Catamarca, 1990, 237.

⁴²⁷ QUIROGA, L.; LAPIDO, G., “Las Aguas del Hualfin: Contradicciones y Conflictos en un año de seca”, en *Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina*, núm. 37, agosto, 2011, 60, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile; en línea en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371336247004>, (Consultado el 16/03/2016)

convertirse en sinónimo de voluntad real, por cuanto se prohibió por Cortes que otras personas pudieran emplear en sus documentos privados u oficiales las expresiones “es mi merced” o “so pena de mi merced” como una expresión coloquial dado que la misma era un atributo de la supremacía regia y absoluta⁴²⁸.

Esta primera etapa de conquista y ocupación del sur de virreinato peruano, coincide con el período fundacional de la primera docena de ciudades en el noroeste argentino, en el que el colectivo español participaba continuamente en el reparto de tierras. Ser portador de *status* de nacionalidad europea volvía factible poseer tierras *per se* dado que se consideraba fundamental para consolidar la política de poblamiento⁴²⁹. Esta accesibilidad estaba condicionada por una serie de requisitos –que otorgaban una rica variedad de contenido a instituciones tales como la merced o la composición. Todo acto jurídico válido de las autoridades colonizadoras era susceptible de transmitir dominio u otros derechos. En ese sentido, y siguiendo a Román Rieza y Alfonso García Gallo⁴³⁰, se puede afirmar que no existió el *numerus clausus* o enumeración cerrada de figuras jurídicas con efectos reales. Cuando las ideas de los romanistas en lo referente a sustituir esas fórmulas materializadas por otorgamientos de documentos van abriéndose camino a lo largo del primer siglo de colonización, todavía esas circunstancias eran consignadas y se valían por la entrega de posesión, como si realmente hubieran sido verificadas. Esto se hacía durante la entrega de encomiendas de “indios a encomendar” cuando el beneficiario era tal en la medida en que financiara y ejecutara la conquista del pueblo indio anteriormente encomendado.

Para Ots Capdequí —retomando de Hinojosa- la “composición” es una figura jurídica de origen germánico y el amparo no se constituye como una *institutio* delimitada;

⁴²⁸ En Cortes de Toledo de 1480 (CLC, IV, 119,) por Salustiano DE DIOS, *Gracia, Merced...*, 191.

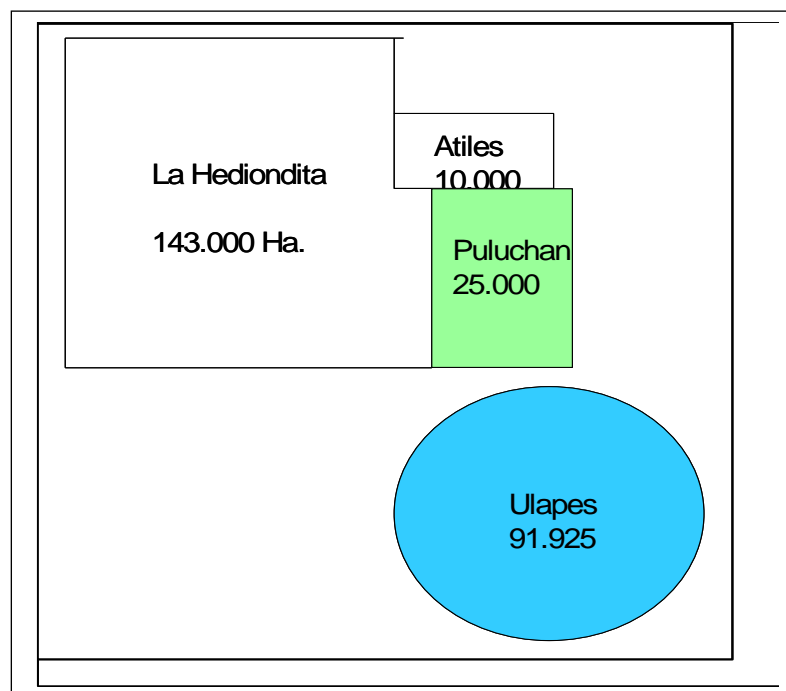
⁴²⁹ Aluden a una “política de poblamiento”, aún con matices pero siempre fundada en una política de la Corona, entre otros, Pedro LOZANO [1785] *Historia de la conquista ...*, Tomo V; Roberto LEVILLIER [1921] *Papeles ...*, Tomo 2; Francisco RUBIO DURÁN, *Tierra ...*, y Ana María LORANDI, *Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato del Perú en los siglos XVI y XVII*, Barcelona, ed. Gedisa –UBA, 2002, 222

⁴³⁰ Román RIAZA y Alfonso GARCÍA GALLO, *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, Librería Gral. de Victoriano Suarez, 1934. 666 y ss.

es decir que ambas figuras no revestían una enumeración cerrada, sino que daban lugar a formulismos resolutivos propios de las relaciones de poder locales.

Será, solo después de la indiscutida recuperación de la propiedad en el paraíso de las formulaciones éticas e independentistas del siglo XIX, que surja una renovada atención a los diversos estatutos diversificados de los micropoderes sobre los bienes, donde lo legal como sinónimo de *similitudo* con el *dominus iure*, representa sólo una parte, que habrá que verificar en cada caso concreto, mientras que, como veremos en el párrafos siguientes, en la Historia del Derecho Indiano *terriero* o fundario, existen una pluralidad de *domini parii* sobre la cosa. La titularidad de esa cosa, por un lado, y el *usufrutto* de ella, por el otro, no siempre van juntas, lo que dificulta la unicidad lógica de todo análisis del derecho medieval y del indiano, si es que no abandonamos algunas certezas propias del derecho moderno.

Graf. 4: Mercedes según relación de linderos y escala, por año 1963



Fuente: elaboración propia según IMTI, “Informe...” y Mercado Reynoso, *Tierras...*, 156.

§ 14. ESTUDIO DE CASO: CINCO MERCEDES DE LOS LLANOS RIOJANOS

En 1971, el Superior Tribunal de La Rioja encargó al entonces Subdirector del Archivo de los tribunales locales “un trabajo de búsqueda e investigación que comprenda todas las causas que se encuentran en el Archivo de los Tribunales y en las que obran antecedentes que de alguna manera se refieran a las distintas ‘Mercedes’ [comillado en el original] existentes en la provincia”⁴³¹. De los resultados de dicha investigación, es posible establecer el número de causas judiciales que se desarrollaron durante la segunda mitad de los siglos XIX y XX, las que totalizan 435 expedientes de variado tipo que invocan alrededor de 219 títulos de mercedes, solamente en la jurisdicción riojana.

Este número de mercedes de tierras da cuenta de la pervivencia de este título, no solo en la intersubjetividad circulante sino en los espacios institucionales públicos, donde se encuentra legitimado, como veremos más adelante, por los del Archivos de la Dirección de Catastro, del Judicial Provincial, del Colegio Notarial y en el corpus legislativo local provincial.

A los efectos de ilustrar la evolución histórica de esta institución, hemos elegido una región central de la región denominada “Los Llanos”, en la que se establecieron cuatro mercedes de tierras, las que, siguiendo la costumbre, se autodenominarían, otorgándose el nombre del campo, área o superficie rural-urbana actualmente definitivos. Ellas son:

1. “Atilés”
2. “Ulape” o “Ulapes”;

⁴³¹ Luis SOTOMAYOR, “*Poder Judicial – Superior Tribunal de Justicia: Mensuras y otras causas en que obran relación o antecedentes de títulos de la mercedes de la provincia de La Rioja*”. La Rioja, 16. Noviembre 1971. Acuerdo N°106/71. Mimeo, 46.

3. “Malanzán”, también llamada “Malanzán-Puluchán-Ichán”; y,
4. “La Hediondita”,
5. “Tudcúm”

Las cinco mercedes se situaron en una misma zona geográfica de la actual provincia de la Rioja, superponiéndose a dos alcaldías o departamentos municipales locales. Poseían la particularidad de no haber dejado de pertenecer a la jurisdicción de la ciudad de La Rioja, si bien esta última, antes de ser provincia había pertenecido a la Gobernación del Tucumán desde su fundación hasta 1677 para luego formar parte de la Gobernación de Córdoba (1677-1820), hasta su autonomía definitiva.

Tabla 5 : Mercedes o tierras indivisas de los Llanos de Provincia de La Rioja, por Municipio y superficie en hectáreas (1967).

<i>Nombre de la merced</i>		MUNICIPIO	<i>Superficie. en Ha</i>
1.	San Isidro de las Sierras de las Minas	Rosario V. Peñaloza	193.234
2.	Chepes y Amalán	“ “	8.640
3.	Santa Rosa	“ “	7.900
4.	Noqueve	“ “	9.260
5.	Salana	“ “	22.023
6.	San Antonio	“ “	6.138
7.	Mascasín y Medanitos	“ “	28.606
8.	Medanos Negros	“ “	65233
9.	Portezuelo de los Arce	San Martin	3105
10.	Amaya	“ “	140400
11.	Ulapes o Ulape	“ “	91925
12.	El Barranco o el Bagual	“ “	40857
13.	Sobrantes del Barranco o el Bagual	“ “	21481
14.	Pozo de Piedra	“ “	156000
15.	Salanita o Del Abra	“ “	24900
16.	La Dorada o Olta Chiquita	Gral. Ortíz de Ocampo	12382
17.	Balde del Milagro	“ “	2533
18.	Ambil	“ “	6476
19.	Bajo del Amarillo	“ “	21764
20.	Estancia Vieja	Gral Belgrano	17626
21.	Baldes de Pacheco o Toscala	“ “	10213
22.	La Tacanita	“ “	35804
23.	Cabeza de Novillo	“ “	10212
24.	Olta y Cazadero de la Sierra	“ “	22000

25.	El Simbolar	“ “	6000
26.	Don Gil	“ “	40855
27.	Puerta del Abra	“ “	10201
28.	Chañar	“ “	6096
29.	Pozo del Bordo	“ “	19937
30.	Nepes o Pozo de los Cordobeses	“ “	12985
31.	El Chusco	“ “	3671
32.	Pozo del Barreal	“ “	9072
33.	San Francisco	“ “	10203
34.	Tama	Angel V. Peñaloza	37500
35.	Alcázar y Tuizón	“ “	37567
36.	Catunita	“ “	8175
37.	Santa Cruz	“ “	26600
38.	Pozo de los Últimos	“ “	15320
39.	Puluchan	Juan F. Quiroga	15000
40.	Malanzán	“ “	10000
41.	Atiles	“ “	10000
42.	Carrizal	“ “	10000
43.	La Chimenea o Pacatala	“ “	61724
44.	Solca	“ “	8000
45.	Nacate	“ “	2500
46.	La Hediondita	“ “	143449
47.	Diego de Arroyo y Polco	Chamical	30489
48.	Cañada del Orejano	“ “	10203
49.	Telarito o San Marcos	“ “	28100
50.	Hedionda de Abajo	“ “	43550
51.	El Salado	“ “	40855
52.	Asamastín	“ “	10213
53.	Pozo del Garabato	“ “	10213
54.	Pozo del la Jarilla	“ “	10213
55.	Isla Verde	“ “	18518
56.	Los Quebrachos	“ “	19041
57.	La Cucharita	“ “	5106
58.	Amaná	Independencia	10000
59.	Pozo de la Loma	“ “	32548
60.	Padre Luna	“ “	273889
61.	Conasto	“ “	188668
62.	Paganzo	“ “	45775
63.	Coronel Ocampo	“ “	35025
64.	Capayán y Allegas	Capital	114402
65.	Tanin	“ “	10000
66.	Las Lomitas	“ “	10000
67.	Las Pampas	“ “	13000
68.	Juan Caro, Saladillo, Duraznillo y las Higuierillas	“ “	15000
69.	Tres Pozos	“ “	45000

70.	Pozo del Alba	“ “	31362
71.	Rio Salado	“ “	39498
72.	Barrialito de Bazán	“ “	22981
73.	Palo Cruz	“ “	22981
74.	San Bernardo	“ “	10000
75.	Anchico	“ “	18909
76.	Sierra Brava	“ “	91925
77.	Bombilla y Telarito	“ “	83644
78.	Aguadita de Ampiza	“ “	14683
79.	San Andres de los Palmares	“ “	24753
Total de superficie en hectáreas de mercedes de tierras en los Llanos riojanos			2.815.505 hectáreas

Fuente: Instituto del Minifundio y Tierras Indivisas – Gobierno de La Rioja, Mimeo, s.f. (¿1968?), sobre la base del informe del Consejo Federal de Inversiones (1964) y el informe de la consultora “Latinoconsult Argentina S.A.” (1967)

Tal como podemos observar en la tabla anterior, hacia el último cuarto del siglo XX, existen censadas 78 mercedes de tierra que totalizan casi tres millones de hectáreas, solamente en la región de los “Llanos” de La Rioja⁴³².

Los documentos que analizaremos a continuación⁴³³ aportan información novedosa sobre el título originario de la merced, sus titulares y las disputas sobre la delimitación de la tierra que aquella concesión supuso, además de la transmisión de derechos desde su otorgamiento originario hasta el último cuarto del siglo pasado.

⁴³² Unas de las últimas mercedes documentadas del periodo anterior la autonomía provincial, como las de *Anchico*, de 18.909 hectáreas concedida por el Cabildo en 1818 al igual que la Merced de *Aguango* o Coronel Ocampo de 35.025 hectáreas, otorgada en 1825, poseen igual particularidad de ser otorgadas en la zona de Los Llanos. Para Anchico, véase ADGC “Transcripta hoy, el 30 de noviembre de 1887”, folio 79, Libro del Registro Catastral del Departamento Capital, tomo 3, 1889.79; y para la de Aguango, Jorge SERRANO RADONETT; “Los Ortiz de Ocampo”, en *Revista del Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires*, Año 1, núm.1, Buenos Aires, 1979,30.

⁴³³ Todos los documentos se encuentran en el Archivo Judicial de La Rioja: Expte. “Merced de la Hediondita, año 1887 que se remite a 1755 – Macho Muerto.”; Documento N° 16 de la Caja “Campos”; Expte. F-5,1855.; Expte A-395, 1890; Expte A-410, 1888.

La copia de la Merced originaria La Hediondita, acordada en 1755 por el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Tucumán Juan Pestaños y Chumanero⁴³⁴, a Don Francisco Sánchez de Soria, dice lo siguiente en su petición,

“Señor Gobernador y Capitan General C. S. Maestre de Campo, Dn. Francisco Sánchez de Soria, vecino de esta ciudad, ante V.S.Sa. parezco manifestando crecida edad en que me hallo cargado de familia y sin medios suficientes para mantenerla, pues no tengo tierras ni hacienda alguna, que me pueda valer para ayuda del insoportable peso que sobre mis hombros carga, el que poniendo en la alta consideración de V.S.Sa. con los reales encargos de su majestad sobre remuneración de su beneméritos, leales vasallos y siendo yo voz de ellos por los servicios, que al Rey, mi Señor, tengo hechos a mi costa, así en la paz como en la guerra, en lo político y militar, en los empleos de Juez ordinario, ya de cabo militar, como encomienda de este tercio para las fronteras, y las entradas que como particular tengo hechas a perseguir el bárbaro enemigo, como es publico y notorio, y los instrumentos que en certificación de ellos tengo, lo que en caso necesario manifestaré, sin que se entienda que por ellos pido premio, si bien por los de mis antepasados que no son menos, por ello suplico a V.S.Sa. que aplicando su justificado celo y caridad, se sirva hacerme merced de una suerte de tierras realengas, que caen en los confines del partido de los Llanos de esta Jurisdicción, con todas sus entradas y salidas, pastos y montes, usos, costumbres, derechos y servidumbres, y una aguada corta que en dichas tierras se halla, cuyo titulo o nombre es de Hedionda”⁴³⁵

El peticionario eleva, en primera instancia, al Cabildo de la ciudad de La Rioja el escrito con la petición que contiene la delimitación del bien que pretende, incluyendo la jurisdicción de las tierras solicitadas, con fecha 21 de junio de 1755. El Cabildo le responde dos días después,

⁴³⁴ Según Manuel LIZONDO BORDA, *Historia del Tucumán S. XVII y XVIII*, serie I, 5 vols., I, 104, el nombre es Juan Francisco Pestañeda y Chumacero (y no Pestaños y Chumanero) y se desempeñó como gobernador del Tucumán entre 1752 y 1757.

⁴³⁵ AJLR, Doc. N°16, Caja “Campos”.

“El Cavildo Justicia y Regimiento de ésta ciudad, en vista al pedimento antecedente y el decreto a él proveído, halla conveniente se haga merced que se pide, y lo firmamos por nos y ante nos, a falta de escribano. - Rioja, y Junio veinte y tres de mil setecientos cincuenta y cinco .- Francisco Sanches de Soria, Melchor de Almonacid.- Tgo Bailón de Cabrera.”⁴³⁶

No es posible establecer si el peticionario Sánchez de Soria era integrante del Cabildo, pero lo que resulta evidente es que el uso de su cargo “Maestre de Campo” que manifiesta en su petición, revela una modalidad común en los funcionarios del régimen quienes, a pesar de haber caducado su mandato, continuaban utilizando el cargo detentado. Lo concreto reside en la existencia del aval que le otorga el Cabildo, que por cierto no es una práctica común en el Tucumán.

Salustiano de Dios menciona el cumplimiento del requisito —llevado adelante por parte de los beneficiarios de las mercedes (clérigos, militares, mercenarios, nobles, “aborígenes”) — de dirigir la solicitud de mercedes, por escrito, vía cámara de peticiones y memoriales, además de fortalecer la petición con el apoyo de los cabildantes.

El cabildo, según Nidia Areces⁴³⁷, era un espacio de constitución de la política local. Y no solo ello. Sabemos por Alfonso García Gallo⁴³⁸ que “gobierno”, “justicia”, “guerra” y “hacienda” constituyeron cuatro tipos de asuntos o negocios claramente diferenciados por el régimen monárquico y se erigieron como los principios rectores de la organización territorial de las Indias si bien, como veremos en lo sucesivo, la relación entre el repartimiento del bien —la tierra— estaba íntimamente relacionada con la Hacienda real. Toda evidencia histórica indica que la “media anata”, la mitad de lo que

⁴³⁶ *Ibidem*.

⁴³⁷ Nidia ARECES, nos ilustra “una de las características esenciales de la elite —lo que ta vez mejor permite identificarla— era el hecho de que tenía en sus manos los resortes del poder político de la ciudad. Otra característica, que por evidente casi se deja de lado, era el de ser un grupo urbano cuya existencia y poder emanaban de la misma ciudad al encabezar las actividades productivas y comerciales. El espacio de control de la política local es el cabildo que, al representar el conjunto de los que vivían en la ciudad, se erigía como el cuerpo político por excelencia y desde un “lugar de poder”, lo cual no significaba que los miembros de la elite en todo momento quisieran ocupar o alternarse en los cargos capitulares; (...)”, en N. ARECES, “Las sociedades urbanas coloniales”, 178.

⁴³⁸ Alfonso GARCÍA GALLO, *Los principios rectores ...*, 326.

produciría el bien concedido en merced, representada en pesos de plata, ingresaba al fisco regio, era el menor de los ingresos por regalías⁴³⁹. Los oficiales reales de Hacienda que dependían directa y exclusivamente del rey, cumplían una función legitimante en la acción de constatar *la* “media anata” fiscal.

“En la ciudad de La Rioja, en tres días del mes de Julio de mil setecientos cincuenta y cinco años, certifico yo el Maestre de campo Don Ignacio de Villafañe y Tejeda, que es verdad entera en derecho de la media anata, por una merced de una aguada, que consta en la vuelta de atrás [en referencia a la merced de la Hediondita, n. del r.] y se trazó en un peso de plata(...)”⁴⁴⁰

Como veremos a continuación, de las 219 mercedes relevadas por el Superior Tribunal de Justicia en 1973, hemos identificado como ciertas y originarias unas 97 las cuales, entre los casi dos siglos y medio de vigencia de esa manera de privatizar la tierra pública, nos dan una frecuencia casi quinquenal entre una concesión y otra. Esta secuencia de años proporciona un promedio de que cada 3,16 años se concedió una merced pero estaríamos subvaluando la totalidad de mercedes concedidas que, por la razón que fuere, se dicen mercedes pero de las que no hemos encontrado la documentación y fuente que nos permita aseverar ciertamente que lo son. Estas mercedes no verificadas son: Tacnín, Pampa Blanca, Aguadita de Ampiza, Almadán, Talamuyuna, Salana, Bombilla y/o Telarito, Sierra Brava, San Bernardo, Palo Cruz, Barrialito, Juan Caro, Las Lomitas, Rio Salado, Pozo del Alba, Coronel Ocampo, Paganzo, Conasto, Pozo de la Loma, Noqueve, Salana, San Antonio, Mascasín y Medanitos, Medanos Negros, Portezuelo de los Arce, Amaya, El Barranco o el Bagual, Sobrantes del Barranco o el Bagual, Pozo de Piedra, Salanita o Del Abra, La Dorada o

⁴³⁹ Andrés MURIEL, señala que ha fines de siglo XVIII “*las rentas ordinarias ascendían aproximadamente a 500 millones de reales a los que se le agregaban 100 a 120 millones más, procedentes de América, pero esa suma de 600 millones ni siquiera alcanzaba para cubrir los déficit de guerra. En 1798 el déficit fue de 800 millones según cálculos bajos y en 1799 los gastos llegaron a 1.823.344 reales siendo el producto de la renta de ese año 493.884 reales resultando un déficit de 1.329.659 reales monto imposible de enjugar*”, en *Historia de Carlos IV*, tomo IV, en “*Memorial histórico español*”, Madrid, 1894, tomo XXXIII, 91, cit. por José M. MARILUZ URQUIJO, *El virreinato del Río de La Plata en la época del Marqués Aviles (1799-1801)*, Buenos Aires, Academia Nacional de Historia, ed. Art. Graf. B. Chiesino, 1964.

⁴⁴⁰ «*que el Maestre de campo Dn Francisco de Sanches [y Soria], dió, como consta en el libro real de mi cargo que consta lo firmé yó, el Oficial Real, Ignacio de Villafañe y Tejeda*»; Doc. N° 16, Caja “Campos”, *Idem Ibidem*.

Olta Chiquita, Balde del Milagro, Ambil, Bajo del Amarillo, Estancia Vieja, Baldes de Pacheco o Toscala, La Tacanita, Cabeza de Novillo, Olta y Cazadero de la Sierra, El Simbolar, Puerta del Abra, Chañar, Pozo del Bordo, Nepes o Pozo de los Cordobeses, El Chusco, Pozo del Barreal, San Francisco, Tama, Catunita, Santa Cruz, Pozo de los Últimos, Carrizal, Solca, Nacate, Cañada del Orejano, Telarito o San Marcos, El Salado, Pozo del Garabato, Pozo del la Jarilla, Isla Verde, Los Quebrachos, La Cucharita, etc. de un total de aproximadamente 59 predios territoriales de los cuales la mayoría —si excluimos aquellos que no disponemos de datos sobre su superficie estimada—, posee más de diez mil hectáreas. Sospechamos que algunas mercedes fueron de composiciones o encomiendas, otras fueron parajes. El Simbollar figura en el mapa más antiguo que se conozca de La Rioja (1633) y fue, sin duda, posta de carretas. Tama, Nacate, Chañar fueron “parajes” que podrán haber estado habitados por poblaciones originarias sin llegar a ostentar el título de pueblo de indios. Otros pudieron ser partes originarias de mercedes de tierras de más extensión como las de Juan Caro, La Higuera y el Duraznillo ocupadas y saneados sus posesiones por parte de la Cía. de Jesús (gran saneador de títulos defectuosos), y encomiendas como las de Amilgancho de amplia significación dentro del siglo XVII como puesto o paraje, además, de tránsito hacia el Tucumán que desaparecieron y que hoy no figuran en el listado antes mencionado. Solo en los Llanos riojanos, estimamos que la superficie de éstas representa, según nuestra reconstrucción 1.512.910 hectáreas. Este millón y medio de hectáreas, repartidas en 57 mercedes y/o campos comuneros indivisos hacen un promedio de casi 26.084 ha. por predio. No obstante, como todo promedio es relativo porque las mercedes menores a 10.000 ha de las cuales disponemos de mensuras efectivas son las de El Simbolar (6000 ha), Chañar (6096 ha), Solca (2500 ha), La Cucharita (5106 ha), Catunita (8175 ha) y Balde del Milagro (2533 ha) siendo hoy, algunas de ellas, pueblos (Catunita es hoy Villa Santa Rita de Catuna, o Balde del Milagro es hoy Milagro que a su vez es cabecera del Municipio de Gral Ocampo).

En términos de modernidad discutida, buscamos afanosamente el título originario de las mercedes de tierras, aún sabiendo que hubo una destrucción total de los archivos capitulares y registrales porque también buscamos los instrumentos a ser tutelados por

la autoridad pública. Pero la autoridad pública que hubo de defender a los poseedores efectivos de la tierra en todo el siglo XIX fueron los caudillos, que a su vez se enfrentaron a las autoridades federales que pretendían imponer un nuevo derecho llamado nacional. Es altamente significativo que hayan sido precisamente las autoridades federales las que destruyeran el archivo general de los documentos coloniales. Como vimos en otro lugar, y ya a mediados del siglo XX, el IMTI (Instituto de Minifundio y Tierras Indivisas) inició un saneamiento de aquellas mercedes donde pudo reconstruir el título originario y lo condujo genealógicamente a los actuales nuevos propietarios⁴⁴¹. No pudo o no supo avanzar en aquéllas donde no disponía de títulos originarios, entre otras causas, debido a que el inicio del proceso de saneamiento debía salir por ley de la cámara de diputados usando el recurso constitucional de la expropiación por utilidad pública.

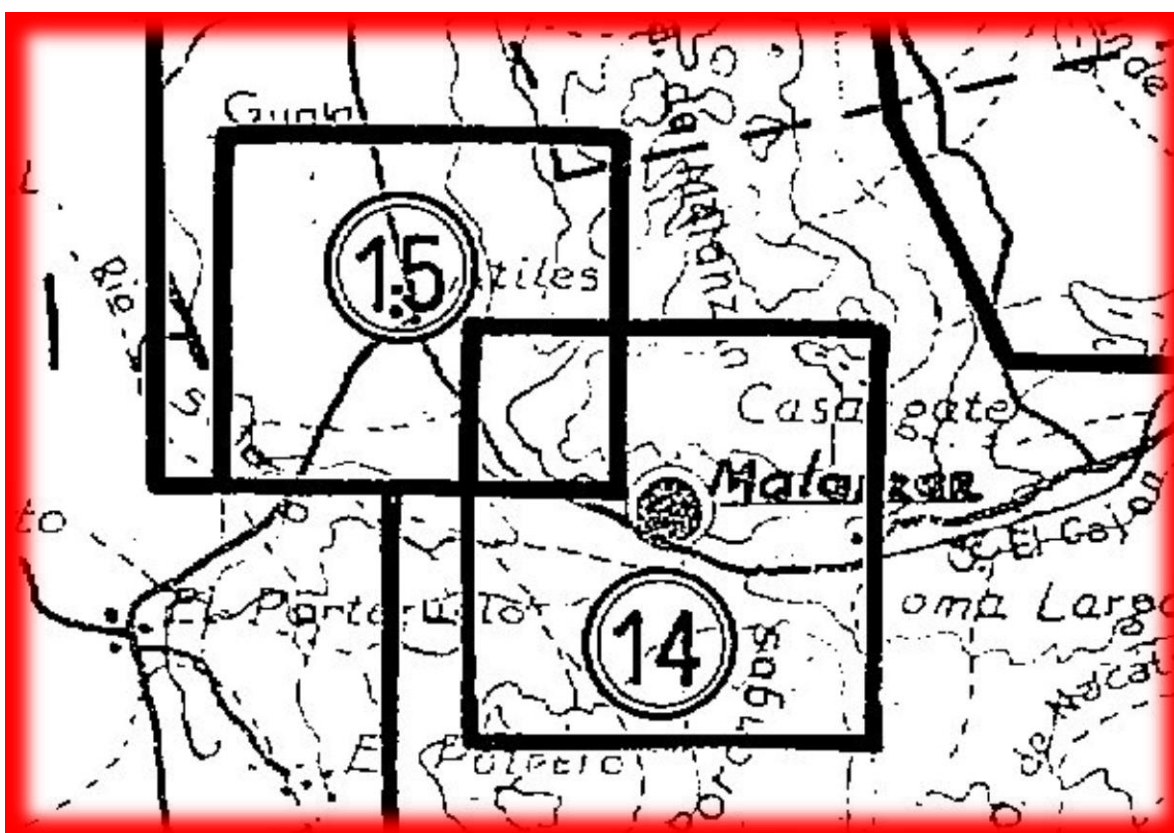
14.1. Atilés

Atilés fue uno de los cuatro espacios geográficos que devinieron mercedes, en este caso de encomienda, a favor del estrato jerárquico superior español. Como en los casos de los indígenas ulapes y los malanzanes, la *detentatio* de la tierra pertenecía a los habitantes naturales. El desarrollo jurídico y social más complejo se dio a causa de la presencia de los atiles en la alianza antiespañola o segundo levantamiento calchaquí (1631 circa). Atilés es famoso en las crónicas calchaquíes por ser el señorío que adhirió a los famatinos y los hualfines en la II fase de la guerra calchaquí y que señaláramos en otro lugar. Pero Atilés es también observado como el pueblo de indígenas que mantuvieron una práctica ritual colectiva (en esta zona de los valles centrales de los Llanos riojanos) hasta, al menos el primer tercio del siglo XVII y nos referimos a las “juntas” y “borracheras” según las crónicas. Y estas van revalorizadas como prácticas de festividades que permitían la manutención de una identidad colectiva. Lo demás es historia conocida. Lozano y Montes describen cómo el conflicto impidió la pervivencia

⁴⁴¹ Para el saneamiento de la merced de Tudcúm véase A. MERCADO REYNOSO, *Tierras...* 158 y ss.

de sus formas tribales y linajes y, a diferencia de otros poblados indígenas “amigos”, fueron diezmados con muerte, los desterramientos y desnaturalizaciones. En síntesis, el bloque documental analizado nos muestra que en contraste con lo que afirmamos en otro lugar y de manera equivocada, nunca fue mercedes de tierra. Fue *encomienda*, fue asimismo *hacienda* y por último *composición* de tierras.

Mapa n°3: Merced de Atilas (15) y Merced de Malanzán (14) en mapa cartográfico del año 1964.



Fuente: Roberto CATALÁN *et al.*, *Estudio sobre las mercedes de los llanos de La Rioja*, Buenos Aires, -Consejo Federal de Inversiones (CFI), 1964, Mimeo. Anexo G.

En términos poblacionales, hubo grandes señoríos indígenas en La Rioja en donde Atilés era uno de ellos (los otros son los *Famatinos* del valle de Chilecito y los *Guandacoles* o *Capayanes* del valle del Bermejo, los *Fiambalas* del valle de Abaucan o *Abaucanes*, por mencionar a los de mayor extensión). Sabemos de la presencia jesuítica en Atilés de manera temprana, incluso antes de la creación de la jurisdicción riojana y que se mutaba, en la característica de condición de errante de los mismos padres doctrineros. Hacia el 1600 podríamos decir que los atiles eran libres aún de ser sitiados y encomendados. Según la visita de 1667, Atilés integra una red de reducciones junto a Polco, Olta y Colosacán (a veces confundidos con sus “anexos” los *Pacatalas* y los *Colosacanes*) mientras que comienzan a consolidarse los Pueblos de Indios de Famatina, Anguinán y Malligasta⁴⁴², pero tres décadas después, hacia 1693, los atiles ya se encontraban desnaturalizadas la mayoría de sus parcialidades (colosacanes, pacatalas, puluchanes, ischanes, nacates, oltas) o encomendados o sitiados en las Reducciones de Olta y de Polco. Atilés figura en la visita de 1693 como encomendada a Moreno y pervive como la tercera en magnitud de indios tributarios sobre el total de cincuenta y tres encomiendas riojanas.

Indistintamente, el espacio de Atilés recibió el nombre de la comunidad de los indios allí asentada y, en el siglo XVII, se transformó en paraje con ese nombre llegando, en el XVIII, a la categoría de pueblo de indios mientras que a fines de ese siglo ya es concedido en composición por el régimen borbónico al entender este que había quedado *vaco* o vacío de indígenas. Existen numerosos relatos que la distinguen a los *atiles* —a diferencia de las otras parcialidades indígenas (los mencionados ulapes, puluchanes y los malanzanes) — por su “rebeldía” y resistencia al proceso de aculturación así como por ser una de las comunidades llanistas, es decir haber estado ligada, de manera geográfica, a la zona de valles y altiplanos pre-cordilleranos, que “se unieron en flecha”, y que pactaran una alianza con otras tribus nortenas en el gran levantamiento Calchaquí de 1628-1660 que azotó toda la provincia del Tucumán.

Las tierras de Atilés eran del dominio de la comunidad indígena y consistían en una aguada central donde se levantaba el asentamiento propiamente dicho, rodeado de unas

⁴⁴² AHCo, Esc. 2, leg. 2, exp. 9, fols. 231 a 238.

quebradas de bosques de algarrobos. Los cronistas no registran “tierras acequiadas” ni “maizales” (plantaciones de maíz) lo que hace inferir que sus habitantes fueran, a diferencia aquéllos de las zonas andinas y de altiplanicie próximas, más recolectores y cazadores que agricultores mientras que sus viviendas sean de palo plantado y barro más próximas a las rancherías campesinas del siglo próximo que de las construidas con piedras y pircas de tipo andino. De idéntica manera, no llegó hasta nuestros días información sobre la forma de gobierno pre-hispánico, pero es probable que un cacique-curaca ejerciese la representación colectiva y el liderazgo ante otras colectividades indígenas (pacatalas, colosacanes, etc.) así como un consejo de ancianos religiosos fuera el que tuviera la función de representación interna y el poder de la asignar el trabajo colectivo y la guerra.

Para la sociedad indígena en general, la Conquista significó su incorporación forzada a una estructura política más amplia —el estado colonial y la autoridad del Rey o Corona real— que, en el ámbito local, al contacto con los españoles, implicó el comienzo de un proceso de desestructuración de la sociedad prehispánica. Nos referimos al proceso de desintegración de las instituciones indias, la distribución de su trabajo y las reservas alimentarias, sus sistemas propios de estratificación y las relaciones sociales de producción. Si bien lo dicho es una obviedad, el abordaje del orden normativo desde un análisis de la discontinuidad y continuidad como propone Paolo Grossi, será el punto de partida.

A continuación, describiremos, de manera breve, el conflicto económico y cultural que se daría en torno al tema de la “chicha”, una bebida alcohólica, con funciones rituales, identitarias y recreativas por parte de las poblaciones autóctonas. La chicha se producía de manera comunitaria sobre la base de la recolección de los frutos del bosque de algarrobales. La algarroba se recolectaba, seleccionaba y, mediante un proceso de destilación, se convertía en bebida, que se acopiaba en tinajas o cántaros de arcilla cocida de 20 a 30 litros.

Hacia 1632, Antonio Torino fue el doctrinero estable de la proclamada Reducción de Atilas si bien no ha llegado hasta nuestras manos ningún documento que decreta tal entidad (Reducción de indios). Pasado el periodo del amigable contacto inicial, la prédica del religioso confrontó con la producción indígena de esta bebida por él

considerada como fuente de prácticas tenidas por “pecaminosas e incestuosas”. Al respecto un cura cronista de Cartas anuas⁴⁴³ cuenta que,

“En Atilés, aldea de un valle muy fértil, hemos sido recibidos con mucho entusiasmo. Jamás se oía la Palabra de Dios, nada de la otra vida, y apenas se sabe algo del bautismo (...) ¡Dios mío cuántas almas se pierden aquí! Después de haberles inculcado profundamente la idea de la vida futura, siguióse un gran cambio de costumbres. Dispuestos los ánimos a la confesión, la hicieron en seguida de muchos años a esta parte, revalidando confesiones sacrílegas, dejando los odios, incestos, y frecuentes amancebamientos. (...)”

Esta descripción pone de manifiesto el choque de culturas (“la otra vida”) con lo que puede haber significado el encuentro de las mismas, si bien no se perciben dificultades de aculturación dado que el clero regular había sido un sostenido aliado de los indios por las denuncias que realizaban en contra de los abusos⁴⁴⁴ de los “amos” de Atilés (probablemente la familia encomendera de la cual no nos ha llegado información). Así continúa diciendo, respecto a Atilés

“La gente [naturales o indios] tiene muy buena voluntad y es inclinada a oír la instrucción religiosa. ¡Oh, si se pudiera poner freno a la codicia de sus amos! Pues, apenas permiten resollar a la pobre gente trabajadora, y mucho menos les proporcionan el suficiente tiempo para las necesidades del alma”⁴⁴⁵.

Por otra parte, la relativa convivencia fronteriza del señorío de Atilés y padres religiosos se vio alterada por la llamada 2° Guerra Calchaquí (1632 c.-1666 c.), lo que

⁴⁴³ “Cartas Anuas” en “*Documentos para la historia argentina*”, tomos XIX y XX “*Iglesia*”; publicadas por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1927-29, II, 413.

⁴⁴⁴ “*Toda esta provincia Señor —dice el Obispo Dr. Julián Cortazar en carta al Rey en septiembre de 1620— esta totalmente rematada assi en lo temporal como en lo espiritual. En lo temporal no se guarda ordenanza ninguna de las que dejó don Francisco de Alfaro en nombre de su Magestad para el buen gobierno della. Los indios trabajan mas que los isrraelitas en Egipto y tras de esso andan desnudos y mueren de hambre y asi les luce a sus encomenderos que quiere Dios estén tan miserables como ellos*”, en Roberto LEVILLIER, *Papeles eclesiásticos del Tucumán*, 195, tomo 1.

⁴⁴⁵ *Ibidem*, 494, II sección.

prolongó la frontera espacial del período de conquista. Así, a lo largo del segundo y tercer cuarto del siglo XVII estarían empeñados en una feroz guerra de reconquista. El desvío de tributos destinados a la construcción de fortalezas y la asignación de tropas de la población española o la población indígena aliada, generaron un *impasse* en la consolidación del orden, el que –sin lugar a dudas– debió distraer mayores recursos destinados a la vigilancia y a la seguridad, lo que traería aparejadas huidas y desconfianzas que perdurarían durante todo el siglo siguiente.

A fin de tener idea de la magnitud del conflicto, transcribimos lo que nos cuenta el padre Lozano acerca del “martirio” que los indios atiles le aplicaron al cura doctrinero Antonio Torino así como lo que dice sobre la chicha y la guerra, la cautela de los pobladores encomenderos quienes (siendo una docena de españoles debían lidiar con mil indios) y la equiparación de la embriaguez con la idolatría⁴⁴⁶.

⁴⁴⁶ “Aplicose [el *fraile Antonio Torino cura doctrinero de la Reducción de Atilis*] con tesón al cultivo espiritual de sus almas, pero no correspondía el fruto a sus fatigas, pues se mantenían idolatras, aunque secretamente por su celo doctrinero, y reinaba en ellos con demasía el vicio abominable de la embriaguez que como se puede disimular menos, daba materia al celo de fray Antonio para empeñarse a desarraigarle y extinguirle. No pudo. No pudo del todo por mas diligencias que hizo, pero consiguió que cesaren las borracheras dentro de la reducción, porque registraba el párroco dónde guardaban sus inmundos brebajes y se los derramaban por quitarles el celo de su vicio: por lo cual los bárbaros los ocultaban donde no los pudiesen hallar su registro retirándolos á los montes más espesos donde celebraban sus juntas. Hasta allí, los persiguió Fray Antonio con esquisitas diligencias. Pero habiéndose rebelado el valle calchaquí, recibieron los Atilis la flecha, y se declararon por sus aliados con cuya ocasión se desmandaron tanto en sus vicios torpes que a cara descubierta se embriagaban. / No se acobardó el ánimo de fray Antonio, antes prosiguió con mayor fervor en afearlos sus abominaciones. Ciertos testigos de su celo, les aconsejaron se templase y que se retirase a La Rioja, porque aquellos bárbaros estaban ya coligados; y si insistía en reprenderles su idolatría y borrachera, le quitaran sin suda la vida. «Cuando yo más dichoso —respondió fervoroso fray Antonio—, que en perderla por tan justa causa y por el cumplimiento de mi obligación». Ofreciósele presto la ocasión porque determinando los Atilis declarar su rebelión, é ir á incorporarse con los rebeldes, dispusieron celebrar antes una gran borrachera á vista del doctrinante, y llamándole á ella se atrevieron a decirle, que él mismo la había de presidir y beber con ellos, después de hincar las rodillas al ídolo que adoraban. Enardecido fray Antonio con indecible fervor, les reprendió su atrevimiento sacrílego y echando mano de un palo, empezó a hacer pedazos los cantaros de la chicha. Acabaron entonces de perderle el respeto, y asiéndole furiosos, le llevaron á un algarrobo cercano que persevera hasta hoy, le desnudaron de su sagrado hábito, luego le colgaron, y vivo le fueron cortando miembro por miembro, poniendo debajo él habito para que en él cayese la sangre que recogían para sus supersticiones. Toleró constante el religioso esta inhumana crueldad, hasta entregar á fuerza del dolor su dichoso espíritu en manos de su criador. / Concluido el martirio, celebraron su borrachera, y se declararon rebeldes, habiendo sido los principales autores de esta maldad, Cativas y Asimin que indujeron a los demás á que le diesen muerte con este extraño rigor. No dejó la divina justicia sin el merecido castigo esta enorme maldad porque sabido el caso por el general don Gerónimo Luis de Cabrera en Calchaquí propuso vengar á su tiempo esta

Para el historiador riojano Juan Carrizo⁴⁴⁷, el “Atilés de 1632 sería estancia poblada por españoles, y de alguna importancia, puesto que tenía sacerdote doctrinero estable”, al tiempo que Manuel Lizondo Borda⁴⁴⁸ agrega que “convenía a los encomenderos [de Atilés] que los padres fueran a adoctrinarles los indios a fin de tenerlos en paz y asegurase de ese modo sus labranzas ó en la cría de ganados, oficios ambos desempeñados por los indios a las maravillas”.

El título originario de Atilés, ¿era una merced de encomendación o era una “reducción” entregada a Nuestra Señora de la Merced? Esto resulta crucial a los efectos de saber cuál sería el título o posesión que invocara originariamente el colectivo español si bien no han llegado hasta nosotros fuentes fidedignas que certifiquen la situación de dominio de las tierras de los naturales de Atilés previo al levantamiento (es decir entre 1592 y 1620). Lo que sí podemos asegurar, sin temor a exagerar, es que del pueblo de Atilés con su millar de indios adultos, fue diezmado una vez concluida la guerra. Y los vencidos fueron entregados en botín al capitán Luna, a sus treinta soldados⁴⁴⁹ y a cuarenta indios amigos que participaron de la represión de los alzados Atilés⁴⁵⁰.

muerte con ejemplar escarmiento y lo ejecuto puntual, porque luego que pudo, despachó contra los Atilés á Don Gregorio Luna Cárdenas, capitán de caballos y á Juan de Contreras capitán de infantería con sus dos compañías, y tuvieron tan buena suerte que los vencieron y ahorcaron á los siete que se averiguó haber sido cómplices en la muerte sacrílega y á los demás hicieron prisioneros. » Ctf en Pedro S. J. Lozano, *Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán*, Buenos Aires, 5 Tomos, 1874, tomo IV, 435.

⁴⁴⁷ Juan CARRIZO, *Cancionero...*, 127.

⁴⁴⁸ Manuel LIZONDO BORDA, *Historia de la gobernación del Tucumán (siglo XVI)*, Buenos Aires, ed. Coni, 308.

⁴⁴⁹ Antonio Larrouy certifica que “despachó luego a los Llanos al capitán Gregorio Luna y Cárdenas con treinta soldados y cuarenta indios amigos a que castigase la muerte del fraile doctrinante de nuestra señora de las mercedes” en A. LARROUY, *Documentos del Archivo de indias para la Historia del Tucumán*, Tomo 1, 1591-1700, Buenos Aires, 1923. Tomo 2, el siglo XVIII, Tolosa, 1927. La cita es de tomo I, 90.

⁴⁵⁰ Los principales cronistas de los acontecimientos son miembros del clero secular católico, que bajo la formula de “*nam quod vidimus testamur*” (solo de lo que vimos damos testimonio) no denuncian, (a diferencia del Paraguay o Chile) los repartimientos de indios como esclavos por los soldados, mientras que cunde en los militares instruidos la noción de derecho de conquista. Véase el sugestivo título y tantas veces reimpreso trabajo de Juan Francisco MONTEMAYOR Y CÓRDOBA DE CUENCA, *Discurso Político Histórico y Jurídico...* Cap II y V. En el mismo sentido, los treinta “soldados” no constituían una porción de un Ejército regular, sino, como dice Alfonso GARCÍA

Pero, ¿cuál era la condición jurídica de las tierras de los indios Atilis? Carecían de entidad y jurisdicción propia como toda aldea o lugar⁴⁵¹ sino a través de encomienda, estando integradas a alguna de las comunidades locales superiores como fuera, en este caso, la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. En 1600, según García Gallo “las ciudades y villas de Castilla se hallan, según el caso, en “realengo”, es decir bajo autoridad directa e inmediata del Rey o corona real, ó en “señorío” de algún noble, obispo o abad”⁴⁵². No es descabellado pensar que, en los años previos al Gran Alzamiento, el dominio efectivo del pueblo y el sitio de Atilis hayan sido concedidos a algún encomendero con jurisdicción en la ciudad de La Rioja.

*“El señor Maestre de Campo Don Josep de Garro Caballero de la Orden de Santiago Gouernador y Capitan General desta Provincia del tucumán Por Su Magestad que dios guarde, Auiendo Visto en estos autos dela bacante de los Yndios del Pueblo de Atilis en la guridisión dela ciudad de todos Santos dela nueva Rioxa que bacaaron por Fin y muerte del Capitan Don Sebastian de Adaro Y Arrasola Su hultimo encomendero que lo gosó en segunda vida (...)”*⁴⁵³

Esta vacante, producida en 1669, denota que fue el primer encomendero el capitán Adaro y Arrasola (también escrito Adaro y Irasola). En 1632, Jerónimo Luis de Cabrera organizó una campaña de represalia o entrada al valle de Famatina que se ejecutó en forma conjunta con Adaro y Arrasola, quien venía desde la Capitanía Chile, y su entrada fue sobre grupos rebeldes del Valle Fértil, jurisdicción de San Juan de la Frontera y

GALLO en *Los orígenes españoles de las instituciones americanas*...288, estaba constituida por compañías de paisanos alistados para ir a guerra, con actuación militar solo como subsidiaria y al participar con su coste otórgale derecho de participación en el botín.

⁴⁵¹ Alfonso GARCÍA GALLO “De la ciudad castellana a la indiana”, en *Los orígenes españoles de las ...* , 1993,1021.

⁴⁵² “La diferencia más importante que cabe de observar entre las ciudades de la nueva población de América y las existentes en España no es institucional o jurídica sino de hecho, que se manifiesta en varios aspectos. Por un lado, en la inmensidad del *territorio* jurisdiccional que se asigna en principio a cada ciudad indiana, que contrasta con mucho más reducido de las castellanas. (...) Por el otro la consideración como vecinos (...)”, Alfonso GARCÍA GALLO; “De la ciudad castellana a la indiana”, en *Los orígenes españoles de las ...* , 1021.

⁴⁵³ AHCo Escribanía de Gobierno N° 2, Legajo 7 “Remate de los indios del Pueblo de Atilis en la Rioja”, 2 bis, exte. 20, (1669).

Atilas. La conclusión del conflicto significó la muerte de los caciques y tuvo como consecuencia la “desnaturalización” forzada más grande de la jurisdicción de los Llanos. La alteración y / o modificación de los derechos indios de las tierras así como la ruptura de la *detentatio* comunitaria y *usufructo* de los recursos, es visualizada, desde una conciencia reductiva del fenómeno jurídico, como una consecuencia natural del complejo mosaico del que surgiera el derecho indiano y sus habituales órganos productores de derecho (virreyes, audiencias, cabildo, autos de gobernador, visitas).

Al estudiar acontecimientos similares en análogas situaciones latinoamericanas, Eric Wolf muestra el peso del factor subjetivo en los conquistados, quienes fueron “privados de su élite y de los elementos constitutivos de la vida urbana y comunitaria al ser relegados al campo. De este modo, los indios sufrieron no solo la explotación y decadencia biológica, sino también la pérdida de su cultura y, a causa de esta suerte desfavorable, experimentaron el sentimiento de no pertenecer a un orden social que hacía tan mal uso de sus recursos humanos. Se vieron transformados en extranjeros, separados de sus objetivos (y de sus objetos) y sus actos por un abismo de desconfianza. La nueva sociedad [española] podía obligarlos a trabajar, pero no exigirles lealtad (...)”⁴⁵⁴

“La tierra ¿pertenecía a los indios o a los encomenderos?” se pregunta, Zavala⁴⁵⁵. En Atilas, desde 1636 hasta 1669, a posteriori de los acontecimientos descritos, se puso fin al primer orden surgido de conquista misma. El título que fue –merced de tierra ¿a favor de los dominicos? y merced encomienda a favor del encomendero— había perdido su valor al desaparecer la fuerza de trabajo india, base de producción y de los tributos que percibía el tenedor del título. A los detentadores los habían vencido y desnaturalizado.

⁴⁵⁴ Eric WOLF, *Pueblos y culturas de Mesoamérica*. Ed. Era, México; 191.

⁴⁵⁵ Silvio ZAVALA, *La encomienda Indiana*, Madrid, Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, Centro de Estudios Históricos, Sección Hispanoamericana, 1935, 163; 2º ed. Porrúa. México 1973.

Mapa nº4: “La región del Tucumán” en una Carta del Gran Chaco e Paesi Confinanti.



de 1789⁴⁵⁶

⁴⁵⁶ “*Opera di Gioacchino Camaño, Dottorato nella Università di Cordoba del Tucumán, Soggetto, che oltre a essa nativo della provincia del Paraguay, ne e assai pratico*” dira el JOLIS en, *Saggio sulla Storia Naturale della Provincia del Gran Chaco*, Faenza, ed. Giuseppe Ballanti, 1789, referenciando al cartógrafo de este plano. Es verosímil, asimismo que el Gioacchino o Joaquín Camaño haya nacido en La Rioja. “En aquel Colegio riojano de la Compañía habría iniciado su preparación el jesuita riojano Joaquin Camaño (o Caamaño) y Bazán, historiador, geógrafo y docente de destacadísima actuación en Córdoba y Europa” dirá Carlos LANZILLOTTO, “Historia de la escuela pública”, en Francisco DE LA FUENTE (dir.), *Manual de Historia y Geografía de La Rioja*, La Rioja, ed. Compañía Editora Riojana,

La posibilidad jurídica de que los encomenderos adquirieran tierras dentro de la encomienda o reducción de Atilés —por merced del gobernador, así como del cabildo, del vice rey, de la audiencia o por compras— fue limitada por la ley que Felipe IV promulgara en Madrid el 31 de marzo de 1631, que disponía:

“Ordenamos que ningún encomendero pueda tener por sí ni por persona interpuesta, estancias dentro de los términos del pueblo de su encomienda, y si las tuviere, se le quiten y vendan y que no se sirvan de los indios, sobre que provean los virreyes, audiencias y gobernadores el remedio conveniente y hagan guardar las leyes”⁴⁵⁷.

El objeto de la prohibición real era el de proteger a los indios de las usurpaciones de tierra y del destino de servicios personales.

Lo paradójico fue que en los cincuenta años siguientes al ímpetu de los mercedarios dominicos y habiendo caducado por dos vidas las concesiones a encomenderos, la tierra fue un espacio jurídicamente vacío. Atilés adquirió un nuevo estatus jurídico al ser vendida a un grupo de criollos conformado ni por nobles ni por beneméritos sino quizá por sus descendientes: los estancieros o dueños de estancias —que en este caso significaba sitio de ganados— integraron el sector social en ascenso. El instrumento jurídico fue la “composición”⁴⁵⁸. En 1798 Atilés fue adquirida en composición por Nicolás Peñaloza.

1969, 303. [644]. Idéntica opinión en José DE LEONARDI, *Aporte para la historia de La Rioja*, La Rioja, ed. Tipografía Offset, 1966.

⁴⁵⁷ *Recopilación...*, ley 17, tít. 9, lib. VI.

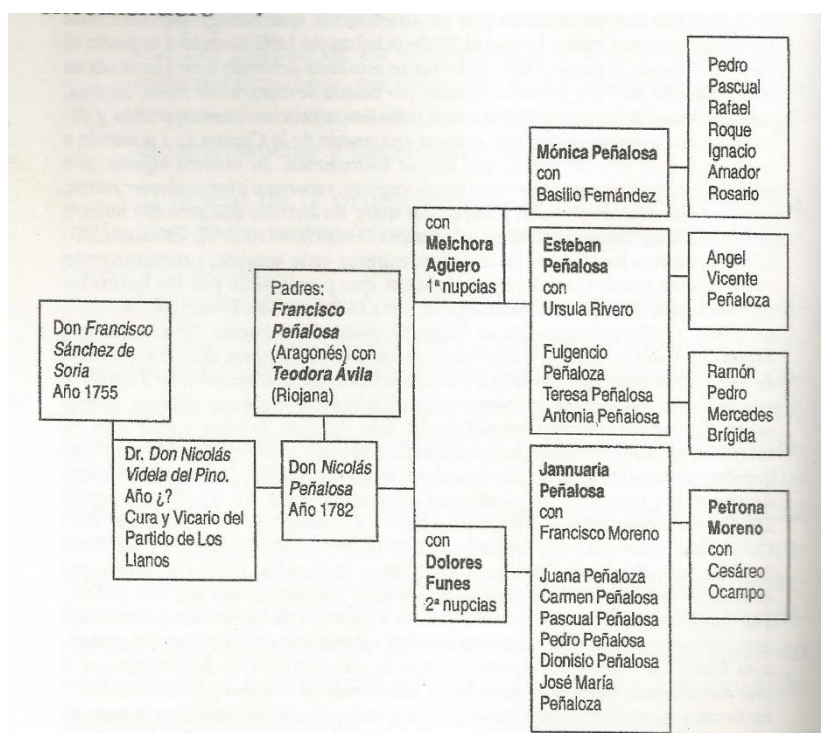
⁴⁵⁸ Tal como manifiesta Hinojosa, y retomado por Ots Capdequí, la *composición* es un instrumento de origen germánico y es una figura específica del régimen de tierras, que nace con órganos de administración y ejecución en el marco del derecho indiano peninsular. La facultad virreinal -extensiva a presidentes de audiencia, gobernadores y visitadores- de otorgar tierras a sus solicitantes fue recortada entre 1692 y 1754. Durante este período el régimen de tierras fue dirigido, desde España, por la *Superintendencia del Beneficio Y Composición de Tierras*, como una dependencia del Consejo de Indias, pasando al superintendente o sus delegados en Indias todo lo referente al ramo de tierras. La Audiencia de Charcas poseía un subdelegado que gestionaba todo lo referido a ese distrito, con despachos que concedían a éstos la facultad de conformar comisiones “para algunas prouincias”. Su legalidad fue sustentada por la *Recopilación* que recoge parcialmente las cédulas regias como la que el 30 de octubre de 1692 mandó a expedir el Rey “Os cometo el poner cobro en lo que se estubiere debiendo a mi Hacienda en las Provincias del Perú y Nueva España, por caussa de compras de villas,

Finalmente, José María Ots Capdequí, en su estudio “El derecho de propiedad en la legislación de Indias”, basándose de algunos pasajes de Solórzano y analizando el siglo XVIII en Colombia, afirma que: “La tierra de unos pueblos de indios dados en encomienda, ¿a quién pertenecía? Al hacer la adjudicación de una encomienda, ¿en qué situación quedaba la tierra del pueblo donde vivían los indios encomendados? La tierra era del indio, y seguía siendo del indio a pesar de la encomienda; pero sí por cualquier causa los indios abandonaban colectivamente el pueblo, la tierra volvía a ser propiedad de la Corona, del Fisco, nunca del encomendero”⁴⁵⁹.

lugares, jurisdicciones, debesas, tierras, bosques, plantíos, alcavalas, cientos, pechos y derechos y otras quiera cosas que se ayan enagenado de la Corona (...) y mando a todos, y a cada uno de por sí, que nos se Entrometan, en manera alguna, con ningún pretexto, aunque sea en por vía de excceso, recurso u otra cualquier forma, (...) sino que antes bien orden y hagan dar todos los auxilios que para ello hubiere menester, cumpliendo y egecutando Vuestros Despachos» AGI, Charcas, 221. Las reacciones locales no se hicieron esperar ante tamaño procedimiento excepcional, como las del virrey Velasco, que presionado por los hacendados, obliga a dimitir al subdelegado para el Perú Juan Javier de Palacios, en 1746. / «En consecuencia de hauerme mandado el Excmo. Sr Dn. Joseph Manso de Velasco, Birrey, y Capitan General de estos Reynos del Perú, en carta de fecha 12 de Mayo de 1746: Que por ahora zesase en la Comission de Tierras, Y que ordenase practicasen lo mismo mis subdelegados, hasta dar Quenta al Rey, según ha resuelto por voto consultivo del Real Acuerdo de Lima; Luego puse en execucion tan superior orden, suspendiendo a todos mis subdelegados, Mandandoles que luego comparecieran a esta ciudad y a mi Juzgado a dar Quentas con el pago de todos los caudales que hubiesen recaudado para El R. Haver: potosi 2024;cohcabamba 250; (...)chayanta 348; (...)Omasuyo 3064; (...)Chichas 892; (...)Vuenos Ayres 950; (...)Tomina 1108; (...)Porco 1232; (...)Pacages 1633. (...) / (...)Don Juan Xavier de Palacios al Rey Plata y Henero 25, 1747. / «el estado que se halla la comission de del distrito deesta Real Audiencia, que solo por indicios que tubieron del juez que nombré para la Prouincia de Larecasam pretextando esta, seria este tirano y que causaría muchas extorsiones a sus vezinos, ha passado a su Exa. El S. Virrey a Ympedir el curso de esta comisión; y ciertamente que si este subdelegado huviera empezado en dha prouincia a actuar, y su Azendados hubieran experimentado algunos agravios y molestias, justificadas que fuesen, no me causaría novedad (...) Sin embargo de la inhiuision conqueseballan los Señores Birreyes y otros jueces de este reyno (...) con otras cuasales bien fútiles, se reconoce que en ésta determinación del Real Acuerdo de Lima, mas á podido el empeño que la razón. / La tragedia que ha subcedido en Lima, el callao, el día 28 de Octtubre del año proximo pasado de 1746(...) el extrago es cierto y mucho de lo que contiene la relación es mas ponderación [de los hacendados] que realidad». Véase AGI Charcas, 221. Para una mayor profundidad del tema de composiciones, véase al tratadista indiano Antonio [RODRIGUEZ]LEÓN PINELO, *Tratado de confirmaciones reales de encomiendas, oficios y casos en que se requieren para las Indias Occidentales* [1629], Caracas, ed. Eduardo Arcila Farías para la Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 3, 1979; las recientes sistematizaciones de sus manuscritos por I. SÁNCHEZ BELLIA, *Recopilación de las Indias por Antonio León Pinelo*, México, 5 Vols., 1992.

⁴⁵⁹ J.OTS CAPDEQUÍ, “El derecho de propiedad en la legislación de Indias”, 124.

Graf. 5 Titular originario de la merced de La hediondita y árbol genealógico del caudillo Nicolás Peñalosa hasta Ángel V. Peñaloza



Fuente: A. MERCADO REYNOSO, *Tierras...*, 158⁴⁶⁰

⁴⁶⁰ La fuente de donde se extrajo este árbol genealógico es un documento de trabajo "I.M.T.I. Latinoconsult Argentina", T. III- Cap. 1.1. Lámina N°1, año 1968. Dos años más tarde de la impresión de esa fuente, dos autores, Marcelo Bazán Lascano y Ignacio Tejerina Carreras, descartan el origen aragones de Francisco Peñaloza. Con prolijo trabajo de fuentes inéditas de los padrones que existen el Archivo del Arzobispado de Córdoba y los libros parroquiales de Tama, sede del más antiguo curato de Los Llanos, sostienen que Francisco Peñaloza, bisabuelo del *caudillo* Ángel Vicente Peñaloza, pertenecía al linaje de los Mercado Peñaloza, "una de las familias fundadoras del Tucumán". Según un documento de 1759 Francisco Javier residía en los Llanos, dos años después figura en Malanzán con su mujer Mariana Mercado. El mayor de sus hijos fue Nicolás Peñaloza, quien fue propietario de la estancia de Malanzán, donde nació y residió hasta su muerte. En su primer matrimonio tuvo, entre otros hijos, a Juan Fulgencio y Esteban. El primero fue comandante de armas de los Llanos y miembro del Cabildo, y Esteban, nacido en 1771, progenitor del 'Chacho', M. BAZÁN LESCANO, "Aporte para el estudio de la familia Peñaloza", en *Revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán*, año III, núm 3, 1970, 211-218.

14.2. Merced de Ulapes y merced de Malanzán.

Los “Llanos” es mucho más que una zona determinada y su evocación trae a colación hasta elementos no solo espaciales sino culturales y simbólicos. El partido y curato de los Llanos en la zona sur de La Rioja limita con una frontera natural conformada por lagunas salitrosas que, desde la conquista, permitieron realizar una precisa demarcación entre esta jurisdicción y la de Córdoba de la Nueva Andalucía, por un lado, y la de San Luis de Loyola, por el otro. En el cuyo mendocino, San Juan de La Frontera marcaba el límite sureste.

“País donde las travesías arenosas y salinas alternaban con el monte virgen de algarrobos, quebrachos, talas y jarillas —describe el historiador A. Bazán— en medio de esa llanura, donde la aridez es la nota dominante, se alza la Sierra de los Llanos (...) algunas vertientes y aguadas recostadas dan al paisaje minúsculos manchones de humedad donde se agrupaban las más importantes concentraciones demográficas”⁴⁶¹. Allí encontramos, a fines del siglo XVII, varios pueblos de indios llamados ulapes, malanzanes, puluchanes, ichanes y polcos. Y tardiamente, la presencia de los primeros colonos españoles.

En 1697 un vecino feudatario y encomendero de los indios polcos situados en ese partido y curato como fuera don Gómez Camargo, se describía así en la petición de la merced de tierras:

“Don Thomas Camargo Vecino fe(u)detario de la Ciudad de todos Santos de la Nueva Rioja Paresco ante Su Señoría C(o)naquella forma que mas lugar alla con derecho y digo que (...) Soy casado (...) con Doña Maria Del Castillo hija legitima del Capitan Don Juan Del Castillo, ya difunto, y de Doña Agustina de Yllanes y por muerte del dicho su padre entro en la Suseccion del Encomienda de Indios del

⁴⁶¹ A. BAZÁN, *Historia de La Rioja...* op cit, 223.

Pueblo de Polcos Jurisdicción dela dicha Ciudad dela Rioxa donde así me hallo abesinado”⁴⁶²

Este vecino, encomendero por herencia de su mujer y vecino del mismo pueblo donde poseía 7 indios de tasa, pide que se le otorguen *circa* noventa mil hectáreas de tierras en merced. Dos años antes, había obtenido de otro gobernador, Don Martín de Juaregui, la merced de tierras de Malanzán con sus aguadas del mismo nombre, junto a las de Ichan y Puluchán. En el documento de petición también solicita las sobras de Atilés si bien no les fueron otorgadas.

Sin embargo, es evidente que el principal estanciero “llanista” de La Rioja era Gómez Camargo y el otorgamiento de dos mercedes de tierras en tan breve tiempo (1695 y 1697) podría ser interpretado como el saneamiento de una situación de hecho, debido a que era el principal propietario de cabezas de ganado. En la medida en que mecanismos compulsivos tales como eran el rol y título de encomendero perdieron significación por su propia perennidad —Gómez Camargo era encomendero de los Polcos de cuarta vida⁴⁶³— el control sobre la tierra se fue convirtiendo en un

⁴⁶² AJLR, Expte 5, letra F, 1753.

⁴⁶³ Polco es un pueblo de indios que está situado a unos 8 kilómetros al oeste del que después será el pueblo de españoles llamado Chamental, actual capital de municipio de Gordillo. Estos indios sedentarios fueron encomendados a principios del siglo XVII al sacerdote Diego de Arroyo Illañez. Un historiador local resume “el presbítero Diego de Arroyo tenía a su cargo los indios de Polco, a quienes debía cuidar y adoctrinar a cambio de lo cual estos tenían que trabajar para su beneficio personal. Por lo tanto lo producido por la tierra y el trabajo de los indígenas era del encomendero, lo que no significaba que la primera —la tierra— fuera de su propiedad, dado que, cuando finalizaba el periodo de la encomienda por muerte o alejamiento del encomendero, la tierra continuaba perteneciendo al Rey”. Los indios Polcos eran 31 indios de tasa cuando fueron heredados por Ignacio de Arroyo en 1637, mientras que para 1676 la titular era Castillo, esposa de Thomas Camargo, mercendero de tierras de Ulapes y Malanzán. Muy poco sabemos de Polco del siglo XVII aunque es probable que ha diferencia de los Atilés, hayan sido indios aliados o “amigos” en las guerras calchaquíes de mediados de ese siglo. Simultáneamente se establece muy próximo a este pueblo de indios una estancia o hacienda denominada “de las aguas hediondas” o “la hedionda de arriba” para diferenciarlos de otros arroyos de similar denominación, ya famosa como paraje cuando el padre Solís la retrata en su mapa, publicado en 1767 en Asunción del Paraguay. Además del pueblo de indios llamado Polco y la estancia la Hedionda de Arriba, acontece que el encomendero de Arroyo pidió y le fue concedida, una merced de tierras que llevará su nombre. Es así que cuando el gobernador Quiñones de Osorio le concede, en 1617, esas tierras, éstas pasarán a llamarse merced de Diego de Arroyo hasta nuestros días. En otras palabras, quien se desplazaba de la ciudad de todos los Santos de la Nueva Rioja a Córdoba de la Nueva Andalucía, antes de pasar por lo que los jesuitas describen como la travesía de Quilino que consiste en atravesar las semidesérticas salinas que separan ambas jurisdicciones, se atravesaba de sud a norte las tierras de la

instrumento que podía ser utilizado para ejercer el control sobre los potenciales trabajadores asentados en ella, es decir, los indios. Además, en zonas áridas y semiáridas, el factor clave del control del espacio territorial fue el acceso a sus aguadas, ya que el mismo uso del agua se regulaba entre aquellos a los que se reconocía derecho de vecindad. Las aguadas, como las del encomendero Gómez de Ulapes, Puluchán, Malanzán y Ichan garantizaban la producción ganadera y mulera, principal componente de los patrimonios de las nacientes estancias o haciendas, cuando no se consideraban a los esclavos.

El 22 de abril de 1702, Gómez Camargo transfirió la merced de Puluchán por escritura de venta a Don Pedro Ávila⁴⁶⁴ y, como viéramos más arriba⁴⁶⁵, vendió la de Ulapes a Antonio Reinoso en 1732. Estas transferencias de dominio territorial realizadas a través de una *rustica descriptio* serán las artífices de una construcción jurídica de transición, la propiedad territorial, donde los actores deberán tener presente no sólo la *facultas* para el *usus* y la *fruitio* de la tierra sino también la *causae*, lo que les permitiría habituarse a concebir el título de merced como una serie de construcciones lógicas y formales, es decir, “legales”. En el mismo sentido, los vendedores no solo venden la “cosa” —tierra— y sus eventuales beneficios, sino también la intitulación particular de ella a favor de un particular y nuevo mercendero privado adquiriente.

estancia de la hedionda, del pueblo de Polco y las de Diego de Arroyo. . AGI, Charcas 102, y AGI, Contaduría 1876 (concesión a Maria de Castillo en 1673). Américo Torralba, *Los dueños de Chamental*, La Rioja, ed. La Torre Blanca, 1982.11 .

⁴⁶⁴ «Merced de Malanzán y Puluchán» que se transcribe “a favor de Don Tomás Gómez Camargo por el Gdor. Martín de Jáuregui, Gobernador y capitan general de esta Provincia del Tucumán, en la ciudad de Santiago del Estero a diez y nueve días del mes de febrero de mil seiscientos y noventa y cinco años”; en REVISTA DE LA JUNTA DE HISTORIA Y LETRAS DE LA RIOJA, año III, núm. 4, Octubre-Diciembre. de 1944, 30. / “Mas en el documento que la Merced pidió Don Tomas Camargo, y que fue otorgada por el Señor Gobernador Dn. Martín de Jáuregui, es verdad que Camargo solicitó las sobras del pueblo de Atilas, pero como no es lo mismo pedir que otorgar, o no todo lo que se pide se conceder; el Señor Gobernador Jáuregui ante quien se solicitó esta Merced en su Auto de nueve de febrero de 1698 (...) no expresa, haber concedido sobras algunas de Atilas ni de otros terrenos, y solo lo hace Merced de las tierras y tres aguadas de Ichan, Puluchán y Malanzán, que el postulante menciona en su petición, sin perjuicio como dice de otro de mayor derecho” “Es verdad la escritura de venta que hizo Camargo a Dn. Pedro Avila de la repetida estancia el 22 de Abril de 1702.”. AJLR, Expte 5, letra F, 1753. fol. 217.

⁴⁶⁵ Véase § 14.2. “Merced de Ulapes y Malanzán”.

14.3 Merced de La Hediondita

La concesión de la merced de tierras de La Hediondita se realizó a mediados del XVIII y fue en 1755 concedida por el Gobernador y Capitán General de esta Provincia, Juan Francisco Pestaña Chumacero, a Francisco Sánchez de Soria (o Loria), constituyendo una de las extensiones de tierra llanistas más importante de las que fuera concedida a un solo titular: 150.000 hectáreas⁴⁶⁶. De ella hemos extraído los fundamentos del pedimento de Sanchez:

“con los reales encargues de su majestad sobre remuneración de su beneméritos, leales vasallos y siendo yo voz de ellos por los servicios, que al Rey, mi Señor, tengo hechos a mi costa, así en la paz como en la guerra, en lo político y militar, en los empleos de Juez ordinario, ya de cabo militar, como encomienda de este tercio para las fronteras, y las entradas que como particular tengo hechas a perseguir el bárbaro enemigo, como es público y notorio.”⁴⁶⁷

Así, recompensaba la administración colonial a este ex funcionario estatal y militar financista por las últimas entradas en la Guerra contra los chaqueños, la que concluyera en 1751, el anterior gobernador Tineo⁴⁶⁸. Este mercendero Sánchez, vendió a María Yacante y a Valerio Rojas. Miguel Molina viudo de la primera, la renuncia a sus derechos, y la viuda de Valerio Rojas, Bernarda Velizondo, en el año 1764, vende la merced de La Hediondita al eclesiástico del curato de Los Llanos, Videla del Pino, por

⁴⁶⁶ La Hediondita posee exactamente 143.449 hectáreas, mucho menos que la de “Anillaco Fiambalá Tinogasta” de 200.000 hectáreas, o “San Isidro de la Sierra de las Minas” con 193.234, pero igual que la merced de “Amaya” con 140.400 y la de “Capayán Allegas” la cual posee, en la parte riojana, 114.402 hectáreas.

⁴⁶⁷ AJLR, Doc. N°16, Caja “Campos”.

⁴⁶⁸ “Por la relación que de sus campañas al Gran Chaco hiciera el Gobernador Tineo, fechada en Salta a 25 de noviembre de 1752, se practicaron en su gobierno 33 corridas generales, al territorio del Gran Chaco, presenciando 10 de ellas como gobernador (...) Sacó de poder de los indios infieles 20 cautivos cristianos, quitándoles 197 caballos y apresándoles 240 mujeres, etc. Fundó cinco reducciones de indios y pacificó a los tobas. Trabajó seis fuertes de material sólido y otros seis de empalizada, que cubrían y defendían el país, impidiendo a los indios sus irupciones”, . Antonio ZINNY, *Historia de los gobernadores de las provincias argentinas*, Buenos Aires, ed Hyspamerica, 1987, tomo 1,153.

73 pesos, valor del entierro y funerales de su marido. Don Videla de Pino, por venta efectuada en Malanzán el 15 de marzo del año 1782, se la vende a Nicolás Peñaloza, padre del caudillo local Ángel Vicente Peñaloza, quien toma posesión el 9 de abril de ese año.

Prueba de la importancia, jerarquía y estatus de Videla del Pino y Nicolas Peñaloza en Los Llanos, son ellos quienes testifican la veracidad del padrón universal de españoles e indios ordenada por el Rey Don Carlos por real cédula del 9 de julio de 1764, “sabiendo en pleno Conosim^{lo}, que residen en este Veneficio el Numero de un mil dosciento noventa y seis adultos, y el de quatrocientos veinte y ocho párbulos (...) son las personas que se encuentran en todo este Uecindario.”⁴⁶⁹

Como afirma Moutaukias: “en una sociedad en la cual la desigualdad estaba jurídicamente sancionada, las regulaciones económicas del régimen procuraban asegurar un principio aristocrático de equidad según los ordenes y estado de la comunidad”⁴⁷⁰. La tierra integraba esas regulaciones económicas en órdenes sociales dentro de los cuales incluía -según la estratificación de clase dominante realizada por Víctor Tao Anzoategui⁴⁷¹- a funcionarios, beneméritos y eclesiásticos. Los mercenderos de La Hediondita estaban fidedignamente representados por el funcionario militar Sánchez de Soria (1755), el cura vicario Videla del Del Pino (1764) el ganadero y estanciero Peñaloza (1782).

14.4. Merced de Tudcúm

⁴⁶⁹ “Hauiendo Concluído el Padron Vniversal respectivo ha este Partido y Curato de los llans” el 4 de marzo de 1767, lo firman ademas de los mencionados, el comisionado Antonio Baigorri de la Fuente, Phelipe Zevallos, Francisco Xavier Peñaloza, . AHCo, Escribanía de Hacienda, 2, Leg. 37, expte. s.t. año 1763, folio 49 vta.

⁴⁷⁰ Zacarías MOUTOUKIAS, “Gobierno y sociedad en el Tucumán y en el rio de La Plata 1550-1800”, en E. TANDETER, *Nueva Historia ...*, 377.

⁴⁷¹ TAU ANZOATEGUI, V. y MARTIRE E.; *Manual de Historia de las Instituciones...*, 239.

Tudcúm está espacialmente ubicada en la frontera sudeste del Calchaquí. El Valle de Calchaquí era el nombre con que, en el siglo XVII, se designaba a un sector del área montañosa⁴⁷² (valles de Abaucán, Andalgalá, Arauco, Famatina, Guandacol y Vinchina) situado al este de la Gobernación del Tucumán, a pocas leguas del límite entre el Virreinato del Perú y la gobernación o Capitanía General de Chile.

Sobre el Calchaquí tucumano del siglo XVII gravitaban dos problemas de honda repercusión social. Uno era la carencia de grandes yacimientos auríferos en una época en que la riqueza minera se consideraba la producción primordial del suelo. Otro era la presencia de los indios calchaquíes, señores de los valles homónimos, flanqueados por altas montañas. Durante cincuenta años estuvieron sometidos al imperio incaico, sin embargo, los españoles no habían logrado sojuzgarlos a más de un siglo de iniciada la conquista y rechazaban cualquier menoscabo de su libertad como lo demostraron en los levantamientos generales de 1562 y 1630-1662. Misioneros jesuitas, en dos oportunidades, se instalaron en sus valles para intentar integrarlos mediante la catequización, pero sus métodos de captación, probados exitosamente con otros grupos aborígenes, dieron escaso o nulo fruto entre ellos, a pesar de la temprana adquisición de tierras de la Compañía en el valle Calchaquí de Famatina como lo fue la merced de Guanchín en 1629⁴⁷³. Como vimos en la reducción de Atilés de los homónimos indios, los padres mercedarios como Antonio Torino habían procurado catequizar a indios por métodos occidentales y coactivos, sin embargo, ellos reaccionaron matando a los intrusos. Pero la alianza de éstos, los indios atiles, con los indios guandacoles, famatinas, abaucanes y malfines tuvo consecuencias manifiestas puesto que, una vez vencidos, se legalizó la “saca” de indios en servidumbre y la alteración de dominio de dichos territorios creando un prolífico periodo de nuevas concesiones regias de tierras y encomiendas, en pago por servicios a los guerreros españoles quienes a su “costa” y

⁴⁷² El padre Cabrera asigna a Tudcúm el significado de “sierra bajita” en legua *allentiac*, P. CABRERA, *Los aborígenes del país de Cuyo*, Córdoba (Argentina), ed. Imprenta de la Universidad, 1929, 231.

⁴⁷³ Municipalidad de La Rioja, *Protocolización ∞ Escritura de permuta entre los padres jesuitas y el Capitán Pedro Nicolás de Brizuela*, 1943, La Rioja, ed. Imp. Valdés, 12.

“misión” habían batallado durante décadas⁴⁷⁴. Uno de estos guerreros fue Gregorio de Luna y Cárdenas, vencedor de los atiles, que obtuvo, por merced de tierras, unas 60.000 hectáreas llamadas por los indios Tudcúm.

Sobre Luna y Cárdenas, existe un reciente trabajo de varias décadas de fructífera investigación del historiador argentino Félix Luna titulado “Retrato de un guerrero”,⁴⁷⁵ del cual es posible ratificar por múltiples fuentes, como *pedimentos* y certificaciones de servicios militares, la estrecha relación de la actividad pública de este militar regio con los de bienes reales de los cuales era titular. Hacia 1620, poseía por casamiento y segunda vida las encomiendas de Guantungasta, Fiambalá y Alsapas, por un lado y la de Vichigasta por otra, ubicados en la zona central del valle Calchaquí. Dice Félix Luna de Gregorio de Luna y Cárdenas: “lo que sabemos es que, en 1627, el gobernador Vera y Zárate designa a nuestro personaje como alcalde ordinario de San Juan Bautista de la Paz (también llamada San Juan de la Ribera), una de las versiones previas de la actual Provincia de Catamarca, y lo hace por ser esa ciudad ‘frontera de indios rebeldes’. Le confiere atribuciones de Justicia Mayor y Capitán a Guerra, además de la Teniente de Gobernador de esa ciudad [de Londres]. En ese carácter, ayudó al general Jerónimo Luis de Cabrera —nieto del fundador de Córdoba de la Nueva Andalucía— a *castigar* a los indios que habían muerto a varios españoles en el Valle de Catamarca, lo que le vale la designación de Capitán de Caballería por el mismo Cabrera, a principios de 1632. (...) En adelante, la dedicación de don Gregorio a las funciones armadas será casi total”

⁴⁷⁴ El reciente descubrimiento, en el Tucumán colonial, del testamento escrito de un indio, revela otros aspectos ajenos al *usus terrae* y la adscripción de indios a parajes o señores, y es la participación de los yanaconas, y los aliados indios locales, en las “malocas” o expediciones “militares” que inicialmente se habían descrito como acciones punitivas y, por lo tanto, fundadas en *casus belli*, no obstante ser, según esta fuente, expediciones de “saca” y captura de indios con fines esclavistas. Véase, Margarita E. GENTILE, “El testamento del indio Domingo Chuca (Tucumán, 1620) Acerca de la costumbre como fuente del derecho” XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, septiembre de 2004, ed. Dunken. Aún releendo las fuentes de trabajos clásicos vid. “y preguntádolo como se llama por el nombre de su tierra dijo llamarse Yoyarri (...) cacique q’ fue cogido en la *maloca* de 1658” P CABRERA *Los aborígenes...* 231 (lo resaltado es mío).

⁴⁷⁵ F. LUNA, “Retrato de un guerrero”, en *Temas de Historia Colonial de La Rioja*, La Rioja, ed. Nexo Comunicación, 2004, 27-64.

⁴⁷⁶. Las certificaciones de “servicios” abundan en detalles de la campaña militar y dicen que don Gregorio es partícipe y “castellano” de tres de los nueve fuertes militares emplazados por varias décadas en la jurisdicción riojano-londinense del Calchaquí: San Blas del Pantano de araupatis y yuctabas, San Lucar o Lucas de Nonogasta, Santiago de la Quebrada⁴⁷⁷; que continuó con la represión del alzamiento de cacique Chemilin en el 1630; luego prosiguió en el de 1656 con el de Bohórquez o falso inca, y culminó, en 1664 cuando marchó a Esteco al frente de un contingente de riojanos.

Del conjunto de bienes de su patrimonio, nos detendremos en las tierras de Tudcúm por cuanto, como probaremos más abajo, podríamos dar por concluída la reciente polémica entre investigadores sobre el tipo de adquisición de dominio de las tierras de Tudcúm por parte de Gregorio Luna⁴⁷⁸.

Las tierras de Tudcúm fueron solicitadas al gobernador Acosta y Padilla por el General don Gregorio de Luna y Cárdenas en el año 1648 quien manifiesta en la petición que le conceda

“tierras para estancias de ganados mayores y menores y cementeras de trigo y maíz y porque al presente hay tierras que no han sido pobladas en la jurisdicción de la Dicha Ciudad de la Rioja que son el Puesto de Tudcúm sierra arriba hacia el norte hasta lindar con tierras de la estancia que fue del general Diego Gómez de Pedraza que al presente poseen sus herederos; y desde el dicho paraje de Tudcúm hasta la parte sur hasta los serros colorados, y de ancho toda la cordillera que cae en la sierra de la dicha ciudad de La Rioja, con todas sus aguadas y servidumbres y para tener las dichas tierras con legitimo titulo y en ellas poblar estancias; pido y suplico a Usía se

⁴⁷⁶ F. LUNA, “Retrato ...”, 27, (lo resaltado es mío).

⁴⁷⁷ AHCo, Escribanía 2º, Expte, 17, Leg. 4. A. Montes, identifica como idénticos a los fuertes de San Felipe de Andalgalá con el de San Pedro de Mercado, A. MONTES, *Encomiendas...*, 9.

⁴⁷⁸ Hacemos referencia a la ausencia, por parte de los investigadores del siglo pasado, de la distinción entre la merced de tierras de la merced de encomiendas ha generado contrapuntos entre Félix Luna y Dardo De la Vega Díaz. Dice Luna “*la circunstancia de que no estuviera poblada por naturales define la gracia conferida como merced de tierras más que una encomienda. Lamentablemente, De la Vega Díaz no cita la fuente de su información por lo que no sabemos gran cosa de esto y Tudcúm, por otra parte no se menciona entre los bienes de este personaje*”, F. LUNA, *Temas...*, 50, opinando sobre el texto sin fuente de D. DE LA VEGA DÍAZ, *Toponimia Riojana*, La Rioja, ed. del Autor, 1944. La nota al pie siguiente establece la fuente que hemos encontrado en el Archivo Judicial de La Rioja.

sirva hacerme Merced en su nombre de su magestad á dicha mi parte de dichas tierras en atención a los muchos servicios que ha hecho, que en ello recibirá merced con justicia que pido.”⁴⁷⁹

El gobernador le hizo merced por despacho firmado el 20 de marzo de 1648, refrendado por el escribano público y del Cabildo de Córdoba del Tucumán, Albarracin Pereira. He aquí que, entre la concesión condicionada de la merced y la puesta en posesión, este título transcurre en las vicisitudes propias del período. La puesta en posesión se produce recién el 28 de noviembre de 1656, ocho años después del despacho del gobernador. La razón de la demora es, según las palabras del mismo mercendero Luna, que la acciones de la primera puesta en posesión “se me ha perdido y desmembrado de dicho título” y ocho años después, solicita “para asegurar mi derecho con la misma antigüedad que las he tenido”⁴⁸⁰ por lo que tomó nuevamente Luna posesión en el paraje del Totoral y de la aguada homónima de Tudcúm, haciéndose acreedor de una docena de parajes o, como el mismo mercendero lo denomina, “puestos” que se llaman Talamuyuna, Tanin, Pampa Blanca, Ampiza y el norte inmediato de Patquía, girando alrededor de la cordillera hoy llamada sierra del Velasco hasta lindar con la merced de Conasto⁴⁸¹.

Tal vez, la razón más válida de la tardía posesión hayan sido las dificultades de eludir las oposiciones y “contradicciones” de los demás encomenderos, ente ellos, los herederos de la encomienda de Antonio Cejas. Éste último era un vecino feudatario de La Rioja y vecino de la *oncena quadra* de la merced de solares hecha por Blas Ponce apenas fundada la Ciudad y titular de una encomienda, cuya denominación no nos ha llegado hasta nuestros días, pero que poseía indios encomendados en Tudcúm trabajando en una “calera” (establecimiento primitivo de extracción de mineral de cal) en una de las variadas aguadas de esta lonja de tierra al pie de la serranía llamada

⁴⁷⁹ AJLR, “Lidoro Aguirre- (ilegible) s/merced de Tudcúm”, Expte. 3130, Juzgado de 1º Instancia, s.f., recatulado “Merced de la Aguadita de Ampiza”, Expte 745, letra “V”, año 1912, f. 10 y vta. (en adelante AJLR, V-745, f.10). También recogido por IMTI, *Boletín informativo* núm 2, Abril de 1968, La Rioja, Mimeo,2.

⁴⁸⁰ AJLR, 745 -V, f. 11 vta.

⁴⁸¹ ADGP, L.1, n° 1-135, esc. 229, f.253.

Totoralejo⁴⁸². Así lo manifiestan los testigos llamados a certificar el valor de las tierras de Tudcúm, tasadas, a los efectos de la media anata, en 200 pesos.

Por las certificaciones de servicios que su hijo Francisco hizo en la petición de las encomiendas de Pachioca y Colalao, sabemos que, desde marzo de 1645, tres años antes de la petición de merced de tierras de Tudcúm, el gobernador Acosta y Padilla había designado a Gregorio de Luna y Cárdenas, Superintendente de Cosas de la Guerra y Lugarteniente de la ciudad de Londres (en su cuarta fundación). Por la propia certificación expedida por el gobernador Acosta y Padilla se verifica que este “servidor público”, en 1645, había logrado “reducir” a unos 400 indios⁴⁸³.

A la complejidad de los eventos derivados del conflicto con los indios, de su condición de encomendero y ahora mercendero de tierras, de los atributos militares y civiles que significaron desterramientos y sacas de indios y alianzas incómodas con indios aliados, hay que sumarle la propia estrategia familiar y matrimonial. Cuando don Gregorio enviudó, contrajo nuevas nupcias con Juliana de Bazán y Pedraza, hija del general Diego Gómez de Pedraza y doña Jerónima de Albornoz, una de las familias más arraigadas de la jurisdicción local. Creemos que ese linde norte que menciona en la petición de Tudcúm —“hasta lindar con tierras de la estancia que fue del General Diego Gomez de Pedraza, que al presente posee[n] sus herederos— es la estancia de Cuchiyaco la cual, en fecha que dilucidamos en otro capítulo, ingresó, primero a través de una donación y después a través de una merced de tierras, al patrimonio de la Compañía de Jesús”⁴⁸⁴. El mismo Diego Gomez de Pedraza es testigo en el título de la merced en todos aquellos puntos donde, por ausencia de escribano, se lo requiere.

A la titularidad de tierras como la de Tudcúm debe agregársele la condición de ser titular de piezas sueltas de indios esclavizados ubicadas en su chacra, por composición

⁴⁸² Actualmente existe una quebrada denominada “La Calera” entre la merced de Cuchiyaco y la merced de Tudcúm. El paraje del Totoral podría identificarse con el actual denominación de “Totorita”. Com. pers. del comunero Polo Díaz (2006).

⁴⁸³ A.G.I. Sec V, Charcas, 104 (1681-1684); sobre el inventario de los bienes de Cárdenas en AHCo, Escribanía de Gobierno 2, leg. 3, exp. 12., recogido de la tesis de licenciatura en Antropología de R. BOIXADÓS, sin fecha, por F. LUNA, *Temas...*, 51.

⁴⁸⁴ Véase § 23, *Los bienes riojanos de la Societas Iesu*, y la tabla núm. 12: “Propiedades jesuíticas en La Rioja, por año y forma de adquisición”, del presente trabajo.

de los aportes propios de Luna y Cárdenas hechos para la guerra en 1667. En el documento titulado *“Reconocimiento y regystro que hizo personalmente el gobierno desta provincia chacras en que estan sitiados los indios y familias desnaturalizados de dcho Valle de Calchaquí por las composiciones que hicieron de ellas dando medios (los actuales titulares) para su passificación y conquista”*⁴⁸⁵, el funcionario “desagraviador” recoge:

“En la chacra del comisario Don Gregorio de Luna y Cardenas 4 indios casados con sus mujeres, Uno con tres hijos y una hija pequeña= Otro con hijo y dos hijas = Otro con una cría de pecho y Otro sin hijos. Todos muestran estar contentos y bien tratados= Y pidieron que se les señalase las tierras bajas de la chacra para poblarse y para sus sementeras las que les ofreció el dueño de esta chacra= y porque ninguno esta vestido nesessitan mas que otros dequese les ajuste la quenta de su seruizio personal y que se les lerga que encocordellatte= y también dijeron que tomarían después obeja para poder ilar sus mantas y bestir sus hijos (...)”

Es en su estancia en donde posee 16 indios en “composición” y que según interpretaciones contemporáneas se equipararían, jurídicamente, a “encomendados”⁴⁸⁶, mientras que sumado a los 43 indios de tasa de su encomienda de Guatungasta⁴⁸⁷, ubican a Cárdenas con un patrimonio de fuerza de trabajo tributaria considerablemente mayor a la media de los encomenderos.

Sean estos indios desnaturalizados en Tudcúm o en Ampiza, lo probado es su servidumbre a favor de Luna y Cárdenas y los sitiados se encuentran “en una chacra que linda con la chacra de los padres de la Compañía”⁴⁸⁸, es decir, Cuchiyaco. A continuación, transcribiremos lo recientemente escrito sobre la descendencia:

⁴⁸⁵ AHCo, Escribanía de Hacienda, Esc. 2, Leg. 2, 1664 a 74.

⁴⁸⁶ Ronald ESCOBEDO, *El tributo indigena en el Perú, Siglos XVI-XVII*, Pamplona, ed. Universidad de Navarra, 1979, 266 y ss. En la misma línea de este autor, A. GONZALES RODRIGUEZ, *La encomienda ...*, 296.

⁴⁸⁷ AGI, contaduría, 1876.

⁴⁸⁸ F. LUNA, *Temas...*, 55.

“El primogénito fue don Álvaro de Luna y Cárdenas, a quien su padre había designado ‘para que después de mis días’ entrara en posesión de la encomienda radicada en Vichigasta. Don Álvaro tuvo una actuación militar lúcida: entró en las expediciones contra los calchaquies en la última etapa de los alzamientos con el grado de teniente, y al poco tiempo ascendido a Capitán. Recibió heridas en el pecho y los brazos y fue encomiado por sus superiores. También participó en una entrada al Chaco. En 1680 fue nombrado jefe del tercio riojano que debió ir en socorro de Buenos Aires, cuyo gobernador había convocado a los vecinos feudatarios del Tucumán para expulsar a los portugueses de la recién fundada colonia de Sacramento, pero don Álvaro murió en esos días, todavía joven, a fines de 1680. (...) Había casado con doña Francisca de Vera y Aragón (...) tuvo dos hijos varones — don Felipe y don Gregorio— y seis hijas. El fallecimiento de su marido y la consecuente pérdida de la encomienda de Vichigasta, que don Álvaro apenas gozó durante dos o tres años, quedó vacante por cuanto era por dos vidas. La viuda y su prole quedaron en la pobreza: una estancia que doña Francisca tenía en Ampiza (entonces parte integrante de la merced de Tudcúm), en la falda de las Sierras del Velasco, se le destruyó porque el ganado se le alzó y se perdió en el monte; la parte de la viña que heredó de su suegro no tenía quien la cuidará. En la información que hizo levantar doña Francisca sobre su situación, dos testigos aseguraban que ‘no tiene quien le alcance un jarro de agua’. Pidió que se le alargase la encomienda de Vichigasta a favor de su hijo mayor, pero no tuvo éxito. El gobernador Mate de Luna (sin parentesco con los Luna y Cárdenas) otorgó entonces al joven don Felipe una pequeña encomienda de apenas tres indias en Anguinán y doña Francisca escribe en 1689 al rey pidiéndole que se la confirme y se le otorgue alguna otra ‘en remuneración de los servicios de su padre y mis antepasados, que todos sirbieron a Vuestra Majestad en esta provincia’ ”.

Ahora bien, dicho esto, la primera consideración sobre los “beneméritos” es la notable capacidad de pedir al Rey, es decir, las habilidades de formalizar un petitorio, relatar y atestiguar con relaciones sus propios intereses en detrimento, si hubiere, de las regalías y detenciones de indios aliados. En términos jurídicos, este procedimiento, tan acorde al derecho indiano, no se aplicó de manera lineal —en el sentido que siempre beneficiase al benemérito— ni mucho menos en continuo beneficio de Gregorio Luna y

Cárdenas sino que son dos los casos documentados en que la justicia indiana falló en contra de este vasallo: uno de ellos es la enajenación de las encomiendas salteñas ante un recurso de un vecino de aquella jurisdicción quien solicitó su reversión a la corona ante la ausencia y lejanía del titular riojano, lo que significó que, el 18 de mayo de 1636, el gobernador de entonces mande al Fuerte de San Joseph, lugar donde se encuentra en servicios Gregorio, una notificación para que escoja entre las encomiendas de Guatungasta y Fiambalá y anexos ubicadas en la efímera jurisdicción de Londres o las de Ambachaca y Tucumanao, situadas en Salta⁴⁸⁹; y otra, el fallo en contra de la petición de este actor de la revalida de la compra al cacique Padilla de tierras de Vichigasta, en detrimento de las sementeras de la comunidad decretado por el visitador de desagravio del protector de los naturales en 1667⁴⁹⁰.

Hacia el primer cuarto de siglo XVIII, tenemos a Felipe, hijo de Álvaro, y Pedro, hijo de Gregorio, con destacadas actuaciones en la compra de cargos y la asignación de nuevas encomiendas como la de Anguinán, confirmada por la audiencia de Charcas en 1690, pero nada sabemos de la merced de Tudcúm y el recorrido de la herencia. Comenzaba a cambiar el nombre con el topónimo de Tudcúm por el de Ampiza, nombre del paraje donde se había conformado una estancia de ganado menores y mayores como afirmaba la nuera, Francisca. Lo recientemente verídico es que, a mediados del s. XVIII,

⁴⁸⁹ F. LUNA, *Temas...*, 59

⁴⁹⁰ AHCo, Escribanía de Hacienda, 29 de diciembre de 1667, “Don gregorio de Luna y Cardenas encomendero del pueblo de Guatungasta, que pide la intervencion del juez para ...la revalida de una compra que hiciera al cacique Juan Padilla del pueblo de Vichigasta.”

En la causa y el padrón de gente y desagravios de los naturales que ante mi El general Nicolás Brizuela Juez de comisión por Excmo. Gouernador desta provincia del Tucumán en sus partes de protector de los naturales, y de la otra el Gral. Gregorio De luna Cardenas vecino feudatario de este pueblo de guatusangasta sobre los cargos y culpa que le hicieron (los indios): “Fallo que debo de condenar y condeno al General Don Gregorio de Luna Y cárdenas por lo que de los autos resulta cargos que le fueron fechos por todos ellos.....

Enquanto al articulo deque apela de aber yo el otro Juez adjudicaro las tierras que compro (...) llamadas san buenventura de bichigasta le otorgo libremente la apelación de aberlas adjudicado a los indios de dicho pueblo”

Y assimismo le condeno en ... 20 dias de salarios para los ministros y papel porque el juez no lleva ninguno=enquanto al proseder y tratamiento que ha hecho a sus encomendados declaro no aber abido quejas de asotes ni malos tratamientos por parte de don Gregorio por lo qual le declaro por Buen Encomendero por ballé assimismo la gente muy bien bestida y adoctrinada y por esta misericordia definitiva asi lo pronuncio

Pedro Niclas (sic) de Brizuela..”

ejerce el dominio de Tudcúm, Purificación Luna, fecha hasta donde llegó un estudio de títulos de tierras encargados por el IMTI, en 1968, a la consultora Latinoconsult.

Dice dicho informe: “A través del estudio de los títulos presentados y de la investigación de distintos antecedentes se han identificado cuatro ramas troncales y catorce líneas de sucesión sin vinculación con las ramas originales. Actualmente se estudia el procedimiento a seguir para el reconocimiento de cada derecho y su magnitud, por cuanto las sucesivas transmisiones, cesiones y ventas han ido fragmentando los valores.”

“En Tudcúm se ha hecho el estudio de todos los antecedentes que han presentado los presuntos derechosos”.

“En base a ello se han construido varios árboles genealógicos que llegan a los antiguos troncos.”

“Ese árbol se hecho en base a los títulos presentados y a las informaciones complementarias que han dado los derechosos.”

“El análisis final dirá si existe continuidad sin interrupción de las transmisiones, es decir, si existe la base jurídica para la división por acuerdo entre los derechosos. De lo contrario se hará la expropiación, como lo prevé la ley.”

“Como ejemplo se transcribe a continuación el desarrollo de una de las líneas troncales de la merced y de la cual derivan al final quince derechosos, con distintas fracciones del derecho original”⁴⁹¹.

De los troncales titulares de la merced de Tudcúm, tenemos a los descendientes de los Luna, quienes vemos graficados en “Derechosos descendientes de Purificación Luna”. Otro de los troncales es Andrés Bazán, quién presentó su título a efectos de su reconocimiento por la Subdelegación de Real Hacienda en 1786, lo que se hizo por despacho de ésta del 15 de febrero de ese año, mediante una Real confirmación.

⁴⁹¹ IMTI, Boletín informativo núm. 3, Mayo de 1968, s.p.

En el archivo parroquial de la iglesia matriz, existe una lista de confirmados en la religión católica por el obispo Orellana fechada el 27 de setiembre de 1812⁴⁹² en “Tutcum”, lo que denota la relativa importancia del paraje.

En 1825 acontece un litigio o *lis* sobre una pequeña porción de la merced en el que un grupo de tenedores pretenden el dominio sobre un “potrero” denominado Teleche o Cañada. Don Antonio Bazán, copropietario de la Merced de Tudcúm, presentó a las autoridades locales nuevamente el título, llegándose por último a una transacción fechada el 10 de abril, por la cual el lugar de la Cañada se reconocía como parte integrante de esta merced. La *convenientia* suponía un mutuo interés entre los actores, por cuanto los tenedores de este paraje no recibirían el contradigo de los poseedores mercenderos y éstos, nominalmente, continuarían como “dueños” condominiales de más de 100.000 hectáreas que habilitaban los linderos mencionados en el título de merced de tierras. Aún sin aparecer la palabra “condominial” ni “co-propietario”, hay en los litigantes una cesión recíproca por instrumento público de derechos hereditarios que pudieran corresponder sobre las 10.000 y 100.000 hectáreas objeto de la *disputatio*. A mediados del XIX, “los ‘dueños’ eran Don Antonio Bazán, Doña Dominga Bazán. Al primero, le sucedió su hermana Doña Dolores Bazán Montero de La Vega, a la que a su vez la sucedió su hija Doña Beatriz de la Vega de de la Vega; y a la segunda, su hija Doña María del Transito Bazán, a quien la heredaron sus hijos: Doña Concepción Bazán de Bazán, Doña Vicenta Bazán Luna de Paz y Doña Basilia Bazán de Zalazar”⁴⁹³. Los comuneros posteriores adquirieron derechos hereditarios por varios instrumentos privados y aún públicos, como Don Torres en 1887:

“Boleto de Alcabala, Conste por el presente q’Don Miguel Torres, ha ingresado a la Tesorería General nueve y medio reales (R 9½) derecho de alcabala correspondiente a 2 por ciento sobre la cantidad de sesenta pesos precio en que dice comprar a Doña

⁴⁹² Libro de Confirmaciones (Iglesia matriz de La Rioja) en A. ZINNY, *Los archivos ...*, 20.

⁴⁹³ Roberto CATALÁN *et al.*, *Estudio ...*, 252.

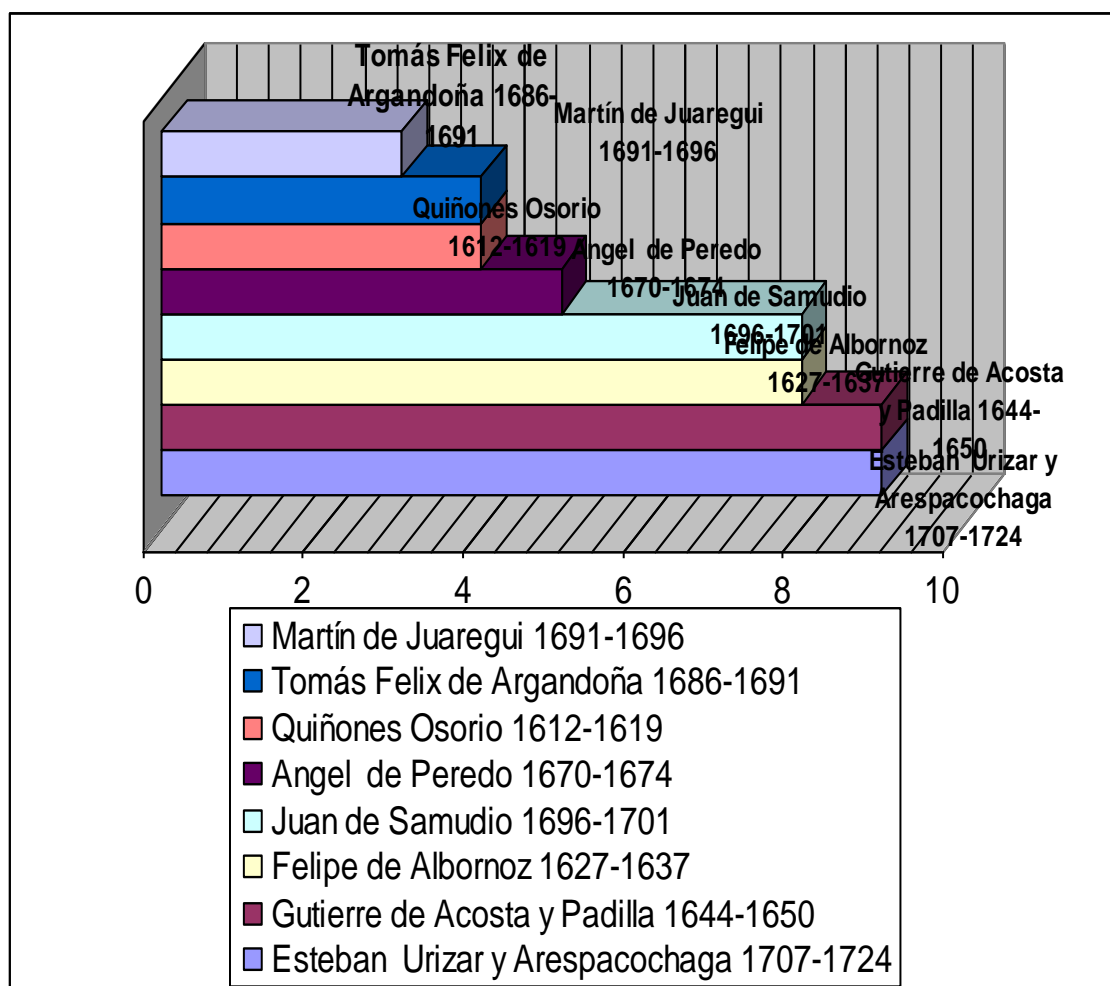
—de la Vega un derecho de estancia y campos y aguadas de toda ella, en un lugar denominado Tudcún y una huerta en la ‘Quebrada de la Calera’ (...),⁴⁹⁴

Los distintos sucesores, y acogándose a la Ley de Reposición de Títulos, promovieron la primera mensura practicada de la merced, la hecha en 1888 por el entonces agrimensor Juan Carponi. Al promoverse un nuevo juicio de mensura en 1912, se hicieron parte como comuneros, con derechos adquiridos de diversa índole y de varios parajes de la más asequible extensión, ahora cruzada por el ferrocarril, con estación ferroviaria en Talamuyuna, entre Tuanin y Ampiza y la carretera interestatal que la une a los parajes como El Tala y Las Lomitas. Nuevos “derechosos” fueron Domingo Vargas, Juan de Rosa Carrizo, Facundo Carrizo, Derminio Agüero, Benjamín Mendoza, Samuel Sánchez, Manuela de Vega, Juana Torres de Molina, Fermín Molina, Marqueza Bazán de Bazán, Tomás Agüero, Tomás Martínez, Emeterio Mercado⁴⁹⁵ y Edergisto Silva.

⁴⁹⁴ ACELR, Protocolo del escribano Miguel Jaramillo, sin folio, transcripto “el 30 (no dice el mes) de 1887”.

⁴⁹⁵ El 23 de junio de 1905, Don Solano Luna, cede y transfiere a Don Emeterio Mercado el campo Las Lomitas ubicado a 5 leguas al sur de esta ciudad capital. Además vende “Una acción y derecho En la Estancia denominada ‘Tudcún’ sita en el departamento ‘Independencia’ como a once leguas de ésta ciudad pasada por ante el Escribano Florentino Cáceres en ésta ciudad el treinta y uno de Julio de 1912, \$ 10.000.-El 19 de octubre de 1918 falleció Don Emeterio, siendo sus herederos su esposa Dolores Carrizo y sus hijos Segundo Emeterio, Otón, Justo, Nicolás, Oscar, Agustina, Dolores, Juana, Alfredo.

Graf. 6: Cantidad de mercedes otorgadas por gobernador y años de mandato



14.4.A. EL TARDÍO ARRIBO DEL ESTADO BURGUEÉS Y LA EXPERIENCIA JURÍDICA DEL *SANEAMIENTO* DE LA MERCED DE TUDCÚM

Como ensayaremos más adelante, es oportuno señalar que bien entrado el siglo XX, y ya solo en La Rioja y Catamarca, producto probablemente de la erosión del poder público estadual local debido a razones ajenas al presente estudio, se desarrolló una conciencia “privada” de uso comunitario de la tierra en aquellos espacios territoriales donde aún no habían sucumbido al dominio privado. Los comuneros eran, como dijimos, los habitantes de la campaña que poseían derechos (v.g. derechosos) con

diversas y larvadas formas propietarias e igualmente extrañas, para el absolutismo jurídico, formas de transmisión de esos presumibles derechos. Estas formas de propiedad colectiva⁴⁹⁶ de ninguna manera significaban igualdad de derechos de los usufructuarios, por cuanto los comuneros no poseían idénticos derechos de acceso, simplemente porque algunos lo heredaban de su padre, de su madre o de ambos y aún algunos, en años de bonanza, compraban a otros derechosos que emigraban del campo a la ciudad para reforzar su condición de *oikodespotas*, o gobernantes del sustento de la casa familiar. Es por ello deducible que, entre los vecinos comuneros se establecía intersubjetivamente una graduatoria o jerarquía en donde, generalmente, quien detentaba mayor cantidad de ganado y poseía bañados y represas dentro de merced, ejercía un mayor derecho. Esto supone, además, que es un absurdo económico y jurídico el adquirir precariamente nuevos bañados o potreros o corrales o represas de agua si no se posee el ganado para la utilización de esas adquisiciones. A la muerte de este *oikodespota* (σικσδεοπότης o *paters famili –pater familiae*), quien concentraba culturalmente los diversos estatutos singulares de relación con “estas” cosas, que, sumadas a la ausencia *ab intestato* de sucesiones, por un lado, y “declaratorias de herederos” por el otro, volvía *cuasi* a fojas cero, la acumulación que éste había juntado a lo largo de su vida de derechos y acciones sobre la tierra si es que no iba acompañada de la posesión efectiva. Las disposiciones de última voluntad eran orales y los herederos no solo eran natos sino elegidos que incluían a criados y parientes en las particiones de los bienes muebles y del ganado. No obstante, la naturaleza del dominio imprimió las características propias de los bienes de campaña, como represas, bañados, chacras, aún estos repartidos sin la intervención pública de un escribano o albacea. No fue raro que después de la muerte del causante, los varios herederos poseyeran la herencia en estado de indivisión como derechosos, con una porción ideal sobre cada uno de los bienes.

⁴⁹⁶ Para la conceptualización de la propiedad colectiva, véase § 27, y nota 885, pp. 447 y 448, del presente trabajo. Adelantándonos a ella y siguiendo a Grossi, la propiedad colectiva o comunitaria no es contraria a la propiedad individual sino que estamos ante perfiles distintos de las dimensiones apropiativas que, al igual que en el modo de producción feudal descrito por medievalistas, concede el derecho indiano toledano a la relación de los sujetos con las cosas. Cfr., Actas del Seminario *Proprietà comunitarie e usi civici: vicende e prospettive tra continuità e trasformazione*, Roma, 1990, s.e.

Estos “no actos”, como la inexistencia de una fehaciente declaratoria de herederos e inventario escrito del acervo patrimonial, por un lado, y por otro, la ausencia de una partición pública que eche luz sobre el origen del dominio, contribuyeron a generar una conciencia jurídica local reactiva de aquella situación descripta como anómala o simple desviación de la *regola* representada por el derecho civil codificado (y urbano), porque:

“Constituyen derechos hereditarios e hipotéticos e indeterminados y su aplicación a los inmuebles resulta prácticamente irrealizable”⁴⁹⁷

Las mercedes, en fin, no ingresaban en el cuello de botella que la centralidad legislativa y los operadores jurídicos que pretenden imponer leyes únicas a situaciones diversas “negando formas históricas de autonomía local y de grupos que a través del trabajo rural y la experiencia de siglos (...) han adquirido el derecho de regular por sí mismos los propios intereses”⁴⁹⁸, sufren de una casuística exacerbada. Económicamente, de ninguna manera estamos hablando de una sociedad opulenta sino de “pastores” de vacas y cabras, cuyos principales capitales son sus manadas, sus huertas “amelgadas”, sus represas, sus chacras de pastoreo y corrales. Poblacionalmente, tampoco hacen valer su peso electoral porque hablamos de un cuarto a medio millar de personas por merced, en donde es de común conocimiento a todos los comuneros que solo un puñado de personas de varias familias son los principales derechosos, ubicados en un extremo de la jerarquía o *status* autodefinido, mientras que, en otro extremo, era el foráneo o intruso generalmente hachero, carbonero o cazador. Por lógica, es indudable que a esta situación descripta acompañó una ideología constitutiva del grupo —la rural o, más apropiadamente, comunera— como estructura de pertenencia colectiva⁴⁹⁹.

⁴⁹⁷ Dictamen del fiscal de Estado de La Rioja de fecha 24/06/65, reproducido en varias sentencias, entre ellas, la de la Cámara Civil 2ª La Rioja, Secretaría B, Autos “Sotomayor Almicar: Información posesoria”, fallo de fecha 19/04/90, en Jorge BÓVEDA, *Estudios sobre el Proceso Civil Riojano*, ed. Pandemia, La Rioja, 2000, 131.

⁴⁹⁸ Giovanni BOLLA, “Le comunione familiare ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civili di 1947”, en *Scritti di diritto agrario*, 502.

⁴⁹⁹ La cultura rural del hombre habitante de las mercedes ha sido idealizada por su condición de solidaria y virgen de los problemas del capitalismo, por ejemplo, decía el antropólogo Mario Margulis, “*Para mí La Rioja fue un gran descubrimiento. La veo integrando con Catamarca una región diferente, aislada del resto del país. La caracteriza su pobreza y relativamente poca actividad económica: la contrapartida de ello son sus mejores vínculos humanos y la posibilidad que no deforme los elementos humanos que le son propios (...)*”

En todo lo dicho, la tierra, con esta consuetuda estructura de propiedad comunera y colectiva, será uno de los bancos de prueba del absolutismo jurídico: durante todo el siglo XX, la única reacción del Estado burgués provincial monopolizador de la producción jurídica fue la de remover los aspectos propios de la comunitarización que las mercedes habían originado.

Se inicia, a mediados de la década del '60, un creciente proceso de instauración de políticas públicas provinciales tendientes a destrabar, como lo consignaban los paradigmas desarrollistas en boga, aquellos obstáculos que impiden el camino progresivo al desarrollo capitalista del campo. Las tierras eran infértiles, no solo por condiciones climáticas adversas o por cuestiones de mercado, sino por una incapacidad de introducirse en el mercado de capitales por vía de la hipoteca debido a la intitulación necesaria o a sus títulos de dominio “imperfectos” o precarios.

“Para que las Mercedes dejen de ser retazos de tierra estéril, es indispensable, en primer término, poner fin a esa ‘situación confusa de la propiedad’, que impide la realización de cualquier trabajo de particular importancia”, dirá los folletos del IMTI.

La noción de saneamiento de algo que había pervivido como enfermizo encontraba su mejor ejemplo en aquellos campos que habían permanecido “indivisos”, originarios ya sea en mercedes o ventas de “campos fiscales” de fines del XIX y las primeras dos décadas del XX.

El eje angular para la explicación de la incapacidad de desarrollo agrícola giraba en torno a la idea de la ausencia de la empresa agrícola familiar como generadora de recursos genuinos y la ausencia de una “disponibilidad individual” de la tierra como factor de producción. Este paradigma se fortalece con la noción de unidad económica: había un mínimum de condiciones para que, en esta visión romántica del campesinado, se desarrollase económicamente y éste era un campo con una determinada superficie mínima, equipado con alambrado, con provisión de riego y tendido eléctrico. De él no

Hasta cierto punto su virginidad es positiva (...) La Rioja tiene pocos habitantes y carece de grandes concentraciones. En lo agrario está en condiciones de efectuar una reforma agraria que no choque con los inconvenientes que se encontraría el resto del país: la tierra pública e indivisa (...)”, Conf. de Mario Margulis de fecha 27/06/1967, citado en Ricardo MERCADO LUNA, Enrique Angelelli Obispo de La Rioja, ed. El Independiente, La Rioja, 1996, 6, (Folleto).

solo surgirían más impuestos sino que sería una fuente segura de recaudación impositiva inmobiliaria. El diagnóstico era paradójicamente dual y simple. En las zonas de valles regados artificialmente, había una excesiva parcelación que se denominó minifundio, es decir, estrechez productiva en donde era imposible planificar una *comondities* de envergadura y que superase el nivel de autoconsumo. El otro problema era radicalmente diferente: la tierra tenía que ser liberada del uso en común de los bosques, pasturas y aguadas por cuanto limitaba la inversión del capital individual.

“Es indispensable evitar males apuntados estableciendo un régimen claro de propiedad de la tierra, pues no se puede pretender la inversión de capital cuando son imperfectos los límites y las distintas propiedades, que este [el capital] no es fácilmente recuperable al quedar permanentemente adherido a la tierra bajo la forma de alambrados, aguadas, cultivos, praderas artificiales”⁵⁰⁰

La inversión individual era antítesis del uso en común de pasturas, de represas y aguas comuneras usadas por los derechosos u ocupantes de la campaña. La acción estatal debía ejecutar un plan de acción inmediata cuyo primer capítulo fundamental para promover el desarrollo económico debe comprender en primer término, “la liquidación de las Mercedes”⁵⁰¹

La indivisibilidad de la tierra en grandes extensiones de campos como así también la excesiva divisibilidad en pequeños y fértiles valles del altiplano riojano, dieron como resultado la creación de una institución de onda significación en nuestro tema de estudio, el Instituto del Minifundio y Tierras Indivisas (en adelante IMTI). Éste fue creado por Ley provincial número 3.207, sancionada el 12 de septiembre de 1967, cuyo artículo primero dice

⁵⁰⁰ La Rioja, *Plan de Gobierno de Acción inmediata*- Para el Excmo. Señor presidente de la Nación Teniente General D Juan Carlos Onganía. Informe del Gobernador Guillermo D Iribarren, Impr. de Estado, marzo de 1967, 255.

⁵⁰¹ Ibídem, 246.

“La provincia adopta las disposiciones de la presente ley con el objetivo de: a) Perfeccionar y otorgar el respectivo título de dominio de los actuales poseedores de los inmuebles llamados mercedes o campos comuneros;(...)”⁵⁰²

La ley definía un organismo estatal de aplicación con autarquía técnica, funcional y financiera, con entidad de derecho público, con capacidad para actuar privada y públicamente y con jurisdicción en toda la provincia (y por encima de los municipios o ayuntamientos); definía facultades y funciones con un marco de regulación del procesamiento; definía plazos máximos; regulaba el procedimiento para el saneamiento del “inmueble”; tomaba y otorgaba préstamos con garantía fiscal ante el banco de la provincia; declaraba de utilidad pública y, expropiaba y adjudicaba. Sus límites autoimpuestos —y eso es importante para la noción moderna de propiedad— eran que se exceptuaba de la expropiación a “las áreas bajo dominio de título perfecto” (Cáp. II, Sección I, Art. 4, inc. B).

De acuerdo con las facultades que la ley otorgó al IMTI en los artículos 43° y 45° el Directorio del mismo, contrató el 30 de diciembre de 1967 los servicios técnicos de una consultora privada llamada Latinoconsult Argentina S.A. para el inicio de la ejecución de “todos los trabajos necesarios que conduzcan al ordenamiento jurídico, económico y social”⁵⁰³. En antedicho contrato se referencia un procesamiento anual del orden de las 170.000 hectáreas con inicio en la merced de Tudcúm “con una superficie de 45.600 hectáreas continuando con la merced de la Hediondita de 165.000 hectáreas (sic)”⁵⁰⁴. Una de las primeras medidas fue proceder a realizar una mensura judicial de delimitación de las mercedes, quedando prohibido a partir de ese momento todo acto de nueva toma de posesión “de cualquier superficie dentro del inmueble, y sus poseedores deberán mantener, sin alteración alguna, el estado de su posesión a la fecha citada, con

⁵⁰² Ley 3.207, art. 1, inc.a.-

⁵⁰³ I. MERCOL (Comp.), *Los Derechos y Acciones* ..., 72.

⁵⁰⁴ *Ibidem*, 72.

prohibición de construir nuevos cercos o picadas, o ampliar las existentes, sin autorización expresa del IMTI”⁵⁰⁵.

Por primera vez, se contaba con una delimitación precisa de una superficie territorial que incluía quebradas, vertientes, arroyos, caminos, cercos, represas y por cierto, personas que habitaban en rancherías sin agua potable ni tendido de energía eléctrica. De manera simultánea, un grupo interdisciplinario de técnicos subcontratados identificaba la *población objetivo* del proyecto de saneamiento con un “Informe de situación socio-económica y cultural de los pobladores de Tudcúm” no menos importante que el “informe de la situación jurídica”. El primero sostiene que la economía de los pobladores de la Merced de Tudcúm constituye una típica economía de subsistencia, con problemas de migración hacia las zonas urbanas extra prediales. Se dice en el mismo: “La población de esta Merced ha sufrido en los últimos 30 años una fuerte emigración siendo esta mas pronunciada en la población o centro que diera su nombre a la Merced. Existen 8 puestos abandonados, y según datos obtenidos del censo, un total de 10 familias abandonaron la Merced en los últimos años. (...) Tudcúm que fuera en su origen un pueblo en expansión ha quedado reducido a solo tres viviendas habitadas, una abandonada y cinco en ruinas”. La economía de subsistencia a la que hace referencia era la economía pastoril de vacas, cabras y aves de corral, leña y caza. “La fuente principal de ingresos proviene de la venta de animales, y en algunos casos, de quesos (de cabra)”. Un relevamiento de animales por tipo y con carácter “propio” o “ajeno” revela el uso común de pastos y bosques —véase Tabla núm. 6— por cuanto los animales ajenos lo son en referencia a la titularidad de la posesión y sin llegarse a constituir en ningún tipo de arrendamiento precario. La Tabla 7 nos revela las ventas anuales y el precio obtenido por los propietarios de animales vacunos y caprinos en el año de 1966.

⁵⁰⁵ Ley 3207, Cáp. II sección II, Art. 9.

Tabla 6: animales por existencias y tipo en la Merced de Tudcúm

Tipo de animales	propios	ajenos	totales
Vacunos	907	835	1742
Caprinos	1483	581	2064
Equinos	77	50	127
Mulares	73	21	94
Ovinos	82	18	100
Porcinos	2	15	17
Aves de corral	268	76	344
Totales	2892	1596	4488

Tabla 7: Existencias y ventas de animales por tipo y por precio de venta en \$, de la Merced de Tudcúm

Tipo de animales	existencias	vendidos	Precio total
Vacunos	1742	128	1.054.500
Caprinos	2064	735	574.000
Totales	3806	863	1.628.500

Fuente: IMTI-Latinoconsult Argentina S.A. “Intervención operativa...” 1968.

Los abordajes a la problemática pública de las mercedes como espacios comuneros giraron en torno a doctrinas jurídicas y económicas que conllevaban diversas soluciones. Unas utilizaban como resorte esencial el poder de expropiación pública perteneciente al Estado. Otras se inspiraban en el tradicional instituto jurídico de la prescripción adquisitiva. Otras parten de la hipótesis de declarar, por ley, que las tierras sin otro titular “registrado” son tierras fiscales. Los gobiernos de algunas provincias habían de dictar leyes provinciales para regularizar la situación dominial. El gobierno de Tucumán hizo lo propio con relación a las tierras de Amaicha del Valle, concedidas en merced de tierras al cacique amaicheño en el último cuarto de siglo XVIII y reafirmadas en un discutido documento de 1716 por real cédula a “naturales”⁵⁰⁶ y en “comunidad indivisa”⁵⁰⁷. La Rioja lo hizo con leyes especiales para las Mercedes de ‘Tudcúm’ y de ‘San Isidro de la Minas’. No obstante el poder disuasivo y técnico del Estado, había un elemento que debía reconsiderarse y era la inperennidad de una práctica privada de transmitir los derechos y acciones a través de escribanos públicos. “La naturaleza de estos títulos varían desde transferencias de todas las tierras que componen la merced hasta porcentajes de los mismos derechos y acciones, observándose que la tarea notarial se ha limitado a transcribir los dichos de los intervinientes”. En otras palabras, es indudable que el Estado posee la capacidad técnica para precisar la “cosa” llamada merced (mediante mensura judicial), pero necesita, además, de un apartado o instrumento que precise la multiplicidad y *graduatoria* (orden de mérito) de las situaciones reales de los comuneros o mercenderos respecto a la “cosa” (siendo ésta ya precisada por ley). Consciente en la efectividad de la experiencia jurídica de la merced y del peso en la intersubjetividad cotidiana de los comuneros, hubo que desechar el uso del código civil y de la noción de derecho real y *dominium* perfecto del derecho romano

⁵⁰⁶ Para el título de Amaicha véase la edición de fuentes de Miguel FIGUEROA ROMÁN y F. MULET, *Planificación integral del valle de Amaicha*, ed. Universidad Nacional del Tucumán, 1949, Apéndices. Para una relectura crítica véase a Jorge SOSA, «La “cédula real de los Amaycha”. Contextualización, análisis y transcripción de un documento controversial», *Corpus*, Vol 5, No 1, 2015, en línea <http://corpusarchivos.revues.org/1374> (Consultado el 13/01/2016)

⁵⁰⁷ CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, *Diagnostico de las situación jurídica, económica y social de las áreas de comunidades indivisas de la Provincia del Tucumán*, Mineo, 2 tomos, 1974, Buenos Aires.

como esquema interpretativo de la realidad. Para eso, el equipo asesor del IMTI elaboró una metodología con un intento de categorizar a los sujetos con relación a la tierra. El centro de la escena la seguía ocupando el objeto, independientemente de la voluntad de los sujetos potencialmente potestativos de una parcialidad de la cosa, aunque validando sus títulos, privados o públicos. Se identificaron trece categorías posibles, que a la vez se someterían a un puntaje de valuación y que, asimismo, avaluará monetariamente la situación.

Recapitulando, el estado abandona la propia codificación nacional civilista de propiedad privada, dominio y condominio y adopta, esto es talvez lo mas trascendente, una visión la cual cosifica la pluralidad de situaciones reales estableciendo que estamos ante perfiles distintos de las dimensiones apropiativas cívicas, por cierto muy diferentes a la visión del absolutismo jurídico (y porque no decirlo, más próximas al derecho indiano toledano y al derecho canónico indiano que al 'Code'). Estas categorías son reproducidas en la tabla siguiente:

Tabla 8: Tipología de situaciones reales de los sujetos mercenderos ante la merced “procesada” 1967.

núm	sigla	Descripción de la situación individual potencial
1	D.O.R	Derechoso, Ocupante y Residente: comprende a los titulares de derechos que tienen un establecimiento en explotación en la Merced y residen habitualmente en la misma.
2	(D).O.R.	Herederero forzoso del derecho, Ocupante y Residente: comprende a los cónyuges e hijos de los titulares de derechos, siempre que este titular no pueda, por razones de incapacidad debidamente acreditada, ocuparse personalmente de la conducción de la explotación, o de los herederos forzosos de un titular de derecho fallecido. En ambos casos, deberán reunir las mismas condiciones de requeridas para el D.O.R.
3	D.O.	Derechoso y ocupante: comprende a los titulares de derechos que tienen un establecimiento en explotación en la merced, conducido por un encargado que vive en el mismo.
4.	(D). O.	Comprende a los herederos forzosos del titular de derecho, pero en las mismas condiciones que el D.O.
5	D.	Derechoso: comprende a los titulares de derechos que no residen ni tienen establecimiento de explotación en la merced. Corresponde aclarar que el mero hecho de tener animales en la merced a cargo de un residente no los coloca en calidad de D.O.
6	(D).	Herederero forzoso del derecho: comprende a los herederos forzosos de titulares del derecho fallecidos, que estén en condiciones de D.
7	D.B.	Derechoso con bienes: comprende a los titulares de derecho que poseen bienes —ya sean bonificaciones o mejoras— abandonadas, arrendadas, cedidas temporariamente a terceros.
8	(D).B.	Comprende a los herederos forzosos de titulares de derechos, pero en las mismas condiciones que D.B.
9	O.R.	Ocupante residente: comprende a aquellas personas que tienen un establecimiento en explotación con mejoras propias y que residen habitualmente en la merced en forma pacífica y aceptada por los demás derechos.
10	R.	Residente: comprende a aquellas personas que sin ser titulares de derechos residen en la merced y que poseyendo mejoras propias, no desarrollen trabajos que signifiquen ocupación con permiso o aceptación pacífica de los demás derechos.
11	O.	Ocupante: comprende a aquellas personas que sin poseer derechos y sin residir en la merced tienen una explotación con mejoras propias en la misma, aceptada en forma pacífica por los demás derechos.
12	B.	Propietario de bonificaciones y mejoras: comprende a aquellas personas que sin poseer derechos y sin residir en la merced son propietarias de bonificaciones y mejoras.
13	C.B.	Propietario de bonificaciones y mejoras que estando en relación de dependencia laboral (capataces, puesteros, familiares, etc.) de los D.O.R., D.O. o sus respectivos herederos forzosos, sean propietarios de bonificaciones y mejoras.

Fuente: I.M.T.I.-Latinoconsult Argentina S.A., “Intervención operativa para el procesamiento jurídico económico y social de la tierras indivisas...”, 117.

Además, se estableció una tipología de los llamados “elementos probatorios de derecho”, a los efectos de, mediante un puntaje numérico, evaluar y establecer un ranking de personas, según el valor de *su* derecho. Para ello, debían, los sujetos derechos mercenderos, arrimar los documentos probatorios que podían ser: 1). instrumento público inscripto: aquel que reúne las formalidades exigidas por el Código Civil y se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad o en el Registro Catastral del ex Departamento topográfico; 2) Ídem al anterior pero no inscriptos; 3) Instrumentos privados protocolizados inscriptos en protocolos especiales; 4) Instrumentos privados protocolizados o certificadas las firmas, no siendo inscriptos; y 5) Instrumentos privados no inscriptos realizados entre las partes, sin intervención de escribano público u otro funcionario. La asignación del puntaje (por ej. El punto 1 acreditaba 50 puntos mientras que el 5 solo 10 puntos) preveía unos grandes mecanismos compensatorios por cuanto estos instrumentos privados de ventas entre mercenderos no tenían la posibilidad de ser legalizados antes en cualquier discurso oficial. Ahora tenían un puntaje y legitimaban una práctica común de transmisión de derechos y acciones entre privados por un documento sin intervención pública y, a ojos modernos, llenos de errores intrínsecos y legales. Asimismo, reconocía los instrumentos públicos como los certificados del ex Departamento Topográfico que aún administraba de las comisiones de fomento de cada municipio y que compilaron los libros de cada Municipio en 1888, en los cuales se inscribían como bienes reales derechos y acciones sobre cazaderas, horas de agua etc. Consecuentemente, se prevé un mecanismo preciso de identificación del bien y mediante un esquema amplio ingresan en una tipología todos los tipos posibles de sujetos en relación con el bien (estaba contemplado hasta el familiar de un peón que se internó en la merced sin derecho y sin residencia y que hizo una mejora de p.e. un corral) y a todos los interesados que, censados, se le otorgan distintas puntuaciones parciales cuya sumatoria (siempre ya en el sujeto) da un puntaje al interesado. La suma de todos lo puntajes establece un coeficiente que, puesto en valor monetario, permitirá que cada interesado, por primera vez en siglos, sepa el valor de su porción. Luego se prevé que el “saneamiento” que culminará con una porción real de territorio, puede ser voluntario o por acuerdo mutuo o expropiativo, con la selección de

los nuevos adjudicatarios de parcelas saneadas y el pago de la indemnización a los expulsados.

Parece prudente dejar aquí este dato: los *gradines* de los estatutos particulares con relación a la cosa son normativizados en este procedimiento excepcional de incorporación de un territorio al ámbito de la propiedad privada catastral. Pero esta diferenciación, que desde la *ius* historiográfica echa luz acerca de los poderes sobre la cosa que, a su vez, es el lugar donde surge una percepción de renta diferenciada según la cantidad de capital utilizado, ya no es más una común unidad de comuneros sino una fotografía del heterogéneo y complejo paisaje agrícola de La Rioja⁵⁰⁸.

§ 15. ESFUERZOS LEGISLATIVOS LOCALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FISCALIDAD PROVINCIAL.

Entre 1810 y la codificación argentina, la acción legislativa se redujo a la implementación de una sala de representantes cuya actividad era, principalmente, la de legitimar las iniciativas del jefe jurisdiccional o gobernador⁵⁰⁹. Consolidada la noción

⁵⁰⁸ En el ejemplo de la Merced de la Hediondita, un estudio social focalizado muestra la heterogeneidad de las situaciones “*Del colectivo total de poseedores de derechos sobre la Merced consideramos en primer término a Residentes y No residentes. Así tenemos que sobre un total de 277 familias poseedoras de derechos, 126 son residentes quedando un remanente de 151 en la categoría de no residentes. Dejamos de lado a los residentes por considerar que cualquiera fuese su categoría (D.O.R. y sus correspondientes combinaciones) gozan del derecho supremo del que reside en la tierra. (...) De los 151 No residentes, los derechosos representan un 48,3% (73) de los cuales el 71,2% (52) son derechosos y el 28,7% (21) son derechosos con bienes. Si analizamos estos datos se advierte que se trata de un elevado porcentaje de tierras abandonadas donde no hay ni siquiera indicios de recientes mejoras. Se trata por cierto [como consecuencia] de la introducción de criterios marcadamente capitalistas, donde la tierra es considerada como un instrumento de ganancia. Dentro del mismo colectivo (151), el 9,9% (15) esta representado por los Derechosos y ocupantes. Se trata de una categoría de terratenientes que si bien explotan la tierra por medio de un sistema indirecto (capataz, mediero) revisten un cierto grado de eficiencia económica. Esto no contrapesa la negatividad social del poderio sobre la tierra, condicionada más por la posibilidades económicas que por la fuerza de trabajo. Los Ocupantes representan el 41,7% (63) del total. Este tipo de tenencia aceptada pacíficamente por los demás derechosos, puede ser considerado como un producto de la difusibilidad (sic) del derecho*”, Martha PEÑA, Selva T. de MARTÍNEZ y Elena C. de MERCADO LUNA, *Estudio Social de la Merced de ‘La Hediondita’: un enfoque de Reforma Agraria desde la perspectiva del Servicio Social*, La Rioja, ed. Norte S.C.A. 181.

⁵⁰⁹ Tal vez la acción legislativa mas importante de este medio siglo ha sido el intento de implementar un sistema tributario provincial. Como fuente puede consultarse la transcripción de las actas de la sala de representantes recientemente editadas por la Academia Nacional de Historia, ANA, *Actas de la Legislatura de La Rioja, años 1948 a 1852* (versión paleográfica de Beatriz Solveira), Buenos Aires, ed. Academia Nacional de Historia, 342.

de estado provincial “soberano” y instaurada la capacidad de producción independiente de derecho propio, la provincia de La Rioja ha intentado “solucionar los problemas de titulación insuficiente mediante los siguientes abordajes legislativos”⁵¹⁰:

- Ley de reposición de títulos (3 de mayo de 1886)[donación o denuncia con cargo];
- Ley de Tierras Públicas (20 de octubre de 1886) [poblarla, labrarla, evangelizarla];
- Ley N° 46 de Reposición de títulos y protocolización de documentos públicos (06 de noviembre de 1889) [condominio/coposeedor];
- Ley N° 258 (18 de agosto de 1915);
- Ley N° 497 de Tierras (23 de octubre de 1929);
- Ley N° 866 de Colonización (16 de mayo de 1941);
- Ley N° 2090 (23 de setiembre de 1953);
- Ley 2717 (29 de Setiembre de 1960);
- Leyes N° 3207 (1967); 3408 (72,73-76); 3810 (78); 3885 (84); 4426 (84); 5206 (94).

Este sucinto listado de leyes, omite los intentos por patrimonializar, a favor de la provincia, las tierras “sin dueños” o de “dueños desconocidos”, patrocinados por leyes de ventas de “campos fiscales” y sus varios intentos concentrados entre 1875 y 1878, culminando con la ley del 4 de Marzo de 1887, los cuales brindaron un complejo apartado legal para apropiarse privadamente de espacios aún, según los argumentos, vacos o vacíos y, por lo tanto, fiscales. Coincidiendo con otros autores⁵¹¹, el aparato

⁵¹⁰ Según una evaluación de la ADEZA-GTZ (Agencia de Desarrollo de Zonas Áridas y Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) en “Saneamiento de Títulos en la Pcia. de La Rioja” Proyecto Asesoramiento Agropecuario- M. y D. - GTZ, Mimeo, Mayo de 1994.

⁵¹¹ Pedro BAZAN, *El fomento económico de La Rioja*, Buenos Aires, ed. Prats, 1926; G. OLIVERA, *Por travesías...* 93.

legislativo del denuncio de tierras “fiscales”, aún con el objetivo explícito propuesto de transferir la tierra fiscal al dominio de los particulares, en realidad lo que se estaba haciendo era convertir en fiscal la tierra de los particulares, ya que el Estado provincial no estaba colonizando tierras deshabitadas sino despojando a los productores rurales de su estatus legal de para-propietarios y poseedores.

Ilustración Palabra dominio

domínio *a. fr. demaine, mod. domaine; sp. e port. dominio: = lat. DOMINIUM da DÓMINUS* *signore, padrone (v. Domino).*
Padronanza, Balía; Signoria, Giurisdizione, Governo.

Fuente: Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana,

En línea <http://www.etimo.it/?term=dominio&find=Cerca> (Consultado el 27/03/2016)

Una de las iniciativa legislativas provinciales más importantes del siglo XIX respecto a la tierra rural fue la ley numero 88 del año 1888 llamada popularmente de “Reparación de títulos perdidos”. Hacia 1880 y por razones ajenas al escenario estrictamente provincial⁵¹², existía una clara conciencia en la clase política local y

⁵¹² No hemos encontrado documentación pública de los ministerios nacionales que sugieran la desamortización de tierras comunitarias en la década del ochenta del siglo XIX. Las leyes de la Provincia de Córdoba, vecina a La Rioja y de amplia influencia sobre el *establisment* riojano, habían decretado que seis comunidades indígenas fueron afectadas por la expropiación y fraccionamiento en las décadas de 1880 y 1890: Quilino, San Marcos, Pichana, Soto, Cosquín y La Toma. Las tierras comunales mensuradas provenían de asignaciones hechas a grupos de indios encomendados y reducidos entre fines del siglo XVI y fines del XVII. Las dos leyes que dieron forma concreta a este proceso de desamortización —que datan de 1881 y 1885— ordenaron que las “tierras ocupadas por las comunidades de indígenas” fueran divididas —más explícitamente “expropiadas por razón de utilidad pública” en el texto de 1885—, se reservaran terrenos para edificios y lugares públicos de las futuras villas —o para extender la traza de emplazamientos ya existentes— y se dividiera el resto en lotes de villa y lotes de campo; de estos últimos, los comuneros empadronados recibirían gratuitamente un lote de villa con su título de propiedad y el resto de los solares y campos serían rematados al mejor postor, aunque quienes ya ocupaban y laboraban los terrenos serían preferidos en las posturas” Cfr. TELL, S., “Campos en común, campos contendidos. Significados y

burocracia jurisdiccional de la necesidad de instaurar una cultura registral pública y sistematizada acorde a un nuevo derecho que provenía, por un lado, del proceso de codificación nacional —Código Civil de 1871— y la consubstanciación con una política nacional, y por el otro, de un hecho o acontecimiento de profunda relevancia en la esfera de dominio de los riojanos con las cosas: la guerra “civil” acaecida desde mediados de siglo, su conclusión y la definitiva consolidación del Estado Nación como categoría superior a la cual el Estado provincial definitivamente se subordinaba.

Las condiciones de producción legislativa estaban profundamente influenciadas por los conflictos de las décadas anteriores. Ella —la guerra civil— no solo había traído zozobra a las clases poseedoras por la pérdida de patrimonios⁵¹³ y la destrucción total de los archivos públicos en donde estaban asentadas las adquisiciones de sus bienes⁵¹⁴ sino que el fenómeno de la persistente resistencia caudillesca a la política porteña había condicionado fuertemente, según esta mentalidad, el desarrollo de la legislación local y la aplicación de justicia con apego a una norma preestablecida, que navegaba entre el apego a un *ius gentium* y un derecho estatal provincial oficial.

Ya en la primera mitad del siglo XIX, la acción notarial en manos de los cabildantes sufre un cambio notable con la aparición del caudillo local y la fuerza de éste en la administración pública y simbólica de la coacción de las fuerzas armadas locales llamadas milicias, surgidas estas últimas de un campesinado de origen indio y criollos habitantes de campaña. El vencimiento de las resistencias locales al nuevo orden republicano trajo un formateo de las políticas públicas locales, universalizando los servicios educativos modernos (escuelas) y de transportes (ferrocarriles) que rompieron con el relativo aislamiento y autonomía con que los poseedores de bienes manejaban las

apropiaciones de la comunidad en Córdoba a fines del siglo XIX”, *Revista de Ciencias Sociales*, segunda época, año 7, N° 27, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, otoño de 2015, 67-86, edición digital, en <http://www.unq.edu.ar/catalogo/357-revista-de-ciencias-sociales-n-27.php> (Consultado el 02/01/2016)

⁵¹³ Documentada existe la petición de un vecino que le restituyan las cabezas de vacunos que las tropas militares, a su paso por el lugar, le habían consumido.

⁵¹⁴ La destrucción del Archivo provincial y capitular en la guerra civil ya hemos descripto en otro lugar. Véase mi trabajo *Tierras Cosas Consuetudes...*, 215. También consúltese las consideraciones de nota al pie 218 y 904 del presente trabajo.

transmisiones de esos bienes. Lógicamente, resurge la acción notarial con gran desempeño en la protocolización de los instrumentos públicos dispersos y perdidos por las contiendas bélicas, cuasi bélicas o delictuales, logrando recomponer la legalidad de la tenencia de los solares y espacios territoriales urbanos integrándolos (“enganchándolos”) con una la sucesión hereditaria, *ab intestato* o testamentaria de los privados.

Es en este contexto, es donde surge la primera iniciativa legislativa denominada ley de “reposición de títulos”, tendiente a ubicar y redactar con la aprobación judicial y testigos, los “títulos” perdidos. Obsérvese que el espíritu de esta ley local tiende, no a fundar un nuevo orden de tierras, sino a *recomponer* una situación idealmente descompuesta, tal como el derecho indiano lo había hecho con implementación de la composición.

Tabla 9: Registro de títulos de propiedad por Municipio en 1888-89 (a excepción de la Capital). Según libros disponibles creados por ley provincial 88.

<i>Municipio</i>	<i>Nº de propietarios</i>	<i>Ultima fecha de inscripción</i>
Lavalle	188	29 enero 1890
Chilecito	130	15 mayo 1897
Velez Sarfield	56	2 diciembre 1890
Juárez Celman	105	11 junio 1890
Gral. Belgrano	129 ⁵¹⁵	30 noviembre 18 89
Gral. Sarmiento	56	21 noviembre 1888
Sanagasta	33 ⁵¹⁶	Sin datos
Aimogasta ⁵¹⁷	132	26 febrero 1890

⁵¹⁵ “ N(umero de) orden 128, propietaria Doña Cevera Arias, Clase de propiedad, Un derecho y acción comun en la Merced denominada Baldes de Tacasla, Sup., No determina estención del título, No determ limites del titulo.” ADGC, *Registro de Titulos de Propiedad Depto Belgrano*, folio14, ed. Encuadernación Jacobo Peuser.

⁵¹⁶ En este libro departamental surge, a ojos modernos, una confusión sobre la distinción de derechos reales y personales. Hay, además, registrados vides o “viñas” independientemente de su suelo, e igualmente horas de agua. El registro es, ademas, emparentado con “el sistema de accesión” minero, porque certifica del derecho al acceso: “tiene derecho de campo en la Comunidad de esta Villa”, *Registro de Titulos de Propiedad Depto Sanagasta*, folio11, ed. Encuadernación Jacobo Peuser.

Fuente: Elaboración propia sobre base de AGDC *Libros del Registro de Títulos de Propiedad*.

Contemporáneamente, se establece el primer intento por sistematizar un elenco o listado de “propietarios” rurales, totalizando 667 para el interior provincial (sin la Capital), designándose un área estatal provincial receptora denominada “Departamento Topográfico” en 1888 (receptoría de rentas y de los libros).

La “Ley de Reposición de Títulos” poseía un procedimiento en donde un letrado intervenía ante el juez en representación de los poseedores y elevaba, a consideración, los elementos probatorios de sus representados. Previa intervención de “receptoría de rentas” del distrito provincial del bien inmueble en cuestión, de fiscal y eventual oposición convocada por edictos públicos, el juez sentenciaba, dando lugar a la “reposición” solicitada. Ello obligada al peticionante a argumentar en el marco de una nueva jerga conceptual y normativa con el uso de conceptos tales como propiedad, dominio, posesión, usufructo, etc., como vemos en el ejemplo, donde un letrado, A. Sanjuerjo, en representación de varios vecinos “comuneros” del pueblo de Anguinán, se dirige a al Juez a fin de solicitarle:

“Primero= me dirijo para pedir a Usia, reposición de títulos de campo denominado Anguinán. Segundo= Esta propiedad, Señor Juez, pertenece de hecho y derecho a los Sres. que represento, como asimismo a los demás condóminos por las razones que voi a esponer. Tercero= *Hace dos siglos y medio aproximadamente que los oriundos vecinos del pueblo de Anguinán, poseen el campo por justo título, y por generación en generación se han ido transmitiendo esos derechos que siempre fueron amparados en cercos, postes, bañados y todos aquellos actos posesorios que la ley designa; como también se han opuesto a todo aquel que quiera interrumpirlos.* Cuarto= El pueblo de Anguinán agraciado por el Rey de España, como todos los

⁵¹⁷ Hay anotados ‘campos de caza’ tales “Udpinango”, de don Eusebio Dias n°285, horas o “noche” de agua, merced de Sunchal a nombre de Juan Raco, “el título registrado no espresa dimensiones ciertas dice que está entre las provincias de La Rioja y Catamarca”.

demás tivo (sic) *títulos que desgraciadamente se han extraviado y en ellos estaba acordado el usufructo*; pero el nueve de Julio de 1816 cuando se declaró la independencia al ser denominados soldados de la Patria, (a) los indios de todos los pueblos indígenas el gobierno *les concedió el dominio de la propiedad y posesión de todo lo que tenían en usufructo y posesión*”⁵¹⁸

El apoderado Sanjurjo construía su argumento (usufructo de pobladores autóctonos, posesión inmemorial, propiedad y dominio a soldados de la patria que antes solo tenían usufructo y dominio) sin explicitar la condición de descendientes de indígenas o indios dichos ‘anguinanes’ —dato intrascendente desde el punto de vista jurídico moderno— que denotan los apellidos de los reclamantes, Ochova, Chancalay, Alive, e implícitamente reclama, sin mencionarla, a la legua de todos los vientos que las leyes de Indias reserva a las sementeras de la comunidad de los “Pueblos de indios” como Anguinán. Remite al año 1637 circa el “justo título” con lo que agració el “Rey de España” a Anguinán como Pueblo de Indios y que se “han extraviado”, es decir lo sitúa en medio de las dos guerras calchaquíes. Probablemente, este abogado desconocía —o por razones argumentales omitía— otros argumentos como los antecedentes de “diezmeros” de los indios ricos anguinanes, la condición de merced de encomienda “vacua” por lo tanto “en cabeza” de la corona y el rescate de \$704 que los anguinanes pagaron en 1786, como asimismo el amparo de la Real Audiencia de Buenos Aires del 1800⁵¹⁹. Solo recurre al procedimiento de forma y sin constituirse en oposición. Los testigos se apersonaron en el expediente para dar respuesta a la pregunta: “Digan si saben y le constan que ese campo pertenece a mis poderdantes por derecho de sucesión transmitida desde tiempo inmemorial, por sus antepasados oriundos y nativos de allí, cuyos derechos hubieren por derecho de merced, del Rey de España, en posesión de América entonces”. Brizuela, un “labrador” de profesión responde “Sé y me consta desde que tengo uso de razón que les pertenece por haberlos visto siempre pagar los derechos correspondientes y defender el campo como dueños en varias épocas, que he sido comisario de este pueblo he dado órdenes solicitadas por los vecinos de Anguinán

⁵¹⁸ AJLR, Expte, sin número ni letra: “Larrahona y Otros, Reposición de títulos”, 1887, f.251.

⁵¹⁹ Sobre las condiciones generales de los amparos a poseedores de tierras véase, en este trabajo, el § 21 *Amparos a favor del indigenado situado en Reducción de Indios*, del presente trabajo.

e sus representantes para despojar a gente que se introducían de afuera, ya sea por recoger algarroba o engordar hacienda”; otro vecino: “lo que sé es que los indios del pueblo de Anguinán han sido tributarios y el que sabía cobrar el tributo era Don José de San Ramón”,⁵²⁰.

Unánimemente, los testigos afirman que lo que se llama “campo” de Anguinán es “accesorio” al pueblo del mismo nombre. La principal oposición estuvo dada por Jazmín Ocampo, titular de la contigua “merced de tierras San Vicente” que adujo ser también condómino del campo de Anguinán, quien se presentaba, en ese expediente, para hacer “oposición a un denuncia” y que el objeto de la oposición era “que volviera a su poder”. Este opositor defendía el paraje de La Cuadra, y aducía que había perdido los títulos propios por cuanto los había entregado a su hermano, quien los consignó al gobernador de la época, Vicente Almandos Almonacid “para el objeto de la oposición y no volvieron a su poder”.

En conclusión, cuando la autoridad de aplicación procede a permitir la protocolización de la propiedad-dominio⁵²¹ y posesión de los solicitantes, introducirá la certeza de referenciar a este bien inmueble con un número de “condominios” que tributarán al fisco, pasando estos a ser, con el tiempo, propietarios.

Un análisis crítico, posterior de esta ley, toma en consideración que continúa a no describirse ni precisarse los límites de la cosa o bien real cuya reposición pretende reponer en un nuevo instrumento público. Más aún, aunque la protocolización generalizada practicada hacia fines del siglo XIX nos permite hoy conocer, al menos, los sujetos con *animus domini*, 25 años después y ya ingresado el siglo XX, Anguinán

⁵²⁰ En el Archivo Parroquial de la Catedral de La Rioja en el Libro de Diezmos 1791-1842, en el año 1815 José San Román efectivamente compró en remate el cobro de diezmo del *curato* de Anguinán en 1600 pesos a la *Junta de diezmos* compuesta por el Cura y Juez de Diezmos, “Maestro Nicolas Carmona, el Teniente de Gobernador Francisco de Brizuela y Doria, y Don José Prudencio Quiroga” este último padre de Juan Facundo Quiroga, en A. ZINNY, *Escritos inéditos...* 22.

⁵²¹ “autos y vistos: Las diligencias seguidas (...) sobre reposición de títulos (...) con el mérito de autos y dictamen del Agente Fiscal, y en atención de haber el solicitante acreditado suficientemente (...) el dominio propiedad y posesión de sus poderdantes en el campo que se trata, procédase por el Notario Público Don Miguel Jaramillo a la protocolización de estas diligencias en conformidad a lo dispuesto por el art. Sexto de la ley de reposición de títulos”), AJLR, Expte. “Larrahona...” citado, folio 258

no había solucionado la unicidad del dominio y a los condóminos protocolizados no les suceden, en su mayoría, herederos declarados por ley, quienes, en muchos casos, venden partes de “derechos y acciones” sobre Anguinán, perpetuándose el carácter comunero de su usufructo y la multiplicidad de titulares con pretensiones de dueño (y la indivisibilidad).

Por otro lado, se perpetúa y consolida una política estatal pública local de “acuerdo” extrajudicial entre las partes pretendientes⁵²². En el ejemplo anterior, el principal opositor a la protocolización de los reclamantes del campo de Anguinán cede a su reclamo a cambio de que se reconozcan a éste su dominio sobre la estancia de La Cuadra, una superficie inferior al campo en cuestión. Todavía en 1967, el Estado riojano escritura para sí donaciones de comuneros de Anguinán⁵²³.

“El problema no pudo ser aún resuelto” —dirá Armando Bazán en una publicación de 1967— “y siguió arrastrándose como una rémora para la expansión económica hasta nuestros días”, comentando el mensaje del Gobernador Wenceslao Frías (1904-1907) quien identificaba como un obstáculo que entorpecía el progreso de la agricultura, a las “propiedades comuneras (...) ingrato legado de los tiempos del coloniaje”⁵²⁴.

Hacia el primer cuarto de siglo XX, la ley 258, titulada “Expropiación de condominios procedentes de mercedes indivisas”⁵²⁵ y sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja el 19 de agosto de 1915, fue una incisiva del

⁵²² En el mismo sentido, AHLR, F-4- “Don Dionisio Fuentes s/unos potreros en Los Angulos”, 1844; AHLR, 408-M, Reposición de títulos: Don Antonio Mir Márquez en representación de los vecinos de Malligasta, 1887.

⁵²³ AHLR, C-508, “Convenio ante el Superior Tribunal de Justicia sobre agua entre comuneros de Anguinán, 1827 (Incluye un “Auto”); AJLR, “Donación- Comuneros del Campo de Anguinán a favor del Estado Pcial. de La Rioja (02/10/1967)—Escribano Gral. de Gobierno Hugo Ramón Nicolás Salguero Torres” ,6 fs., Caja Copias de documentos referidos a inmuebles, núm. 37.

⁵²⁴ Mensaje a la legislatura de Wenceslao Frías del año 1905, Biblioteca Particular de Cáceres Freyre, citado por Armando BAZÁN, *Historia de La Rioja y sus pueblos, 1862-1930*, Separata de la obra de la Academia Nacional de Historia, ed. Artes Gráficas Chiesino, Buenos Aires, 1967, 79 [107]

⁵²⁵ PROVINCIA DE LA RIOJA, *Leyes (Nº 258 y 259) Expropiación de condominios procedentes de las Mercedes Indivisas y de tierras comprometidas en la zona de riesgo de los diques de Anzulón y Portezuelo*, La Rioja, Imprenta del Estado, 1915, 32.

entonces gobernador Dr. Tomás Vera Barros. El espíritu de la ley no era identificar a los poseedores ni registrar su pago en rentas generales de la provincia, común al sentido de la mayoría de las iniciativas legislativas del noroeste argentino de fines del siglo pasado, sino el de impedir que se registren “situaciones enraizadas”, es decir, que se protocolicen por instrumento público los “derechos y acciones” comuneros. La estrategia de los comuneros fue la de inscribirse y registrarse y sobre todo abonar la tasa de rentas generales para perpetuar su situación de estabilidad condominial y/comunal. La protocolización, *per se*, no había generado una solución al problema de la indivisibilidad, sino que lo reproducía, reflejando, el acto notarial, una voluntad de la sociedad civil de compra-venta de uno, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{6}$ del “derecho y acción que pudieren corresponder” sobre tal merced de tierras.

La solución es, según el texto de la ley 258/15, la “subdivisión” de las mercedes. La ley fija, entonces, un procedimiento para la “liquidación” mediante la expropiación pública que, a la vez, permite el “perfeccionamiento” de los títulos de dominio; luego viene la adjudicación en venta de los lotes que resultaren de la subdivisión y se establece un orden de prelación que encabezan los ganaderos de la zona. El pago de esa asignación o adjudicación de tierras se distribuye en diez años y se hipoteca el predio hasta la cancelación de la deuda, según reza el texto normativo provincial.

En una disputa que puede ser leída como una discusión de funciones registrales entre el estado provincial y los escribanos públicos privados, surge la ley de catastro público. La ley 497, llamada de “Expropiación de Tierras Indivisas” y de “Catastro” —debido a la creación de ese organismo—, sancionada el 30 de octubre de 1929, por iniciativa del gobernador Dr. Juan Zacarías Agüero Vera, se crea con el objetivo de, Art. 1º “*la liquidación de Mercedes al dotar a la Propiedad Rural del título legal, en lo que se refiere a dominio, ubicación, mensura, deslinde, división y amojonamiento*”. En esto intenta perfeccionar el procedimiento de la Ley 258/15 y, sobre todo, amplía el territorio objeto de la ley de merced de tierras a aquellos títulos ya indivisos derivados de la venta pública de campo fiscales (con hitos de ventas con las leyes de venta de tierras públicas de 1887, 1890, 1913 y 1920) incluyendo implícitamente otras formas de adquisición de dominio irreguladas, como los denuncios, mercedes concedidas por autoridades ilegítimas entre 1810 y 1820, de cabildos hasta 1838, ventas abusivas de campos

fiscales indeterminados entre 1850 y 1870, y encomiendas (incluyendo a mercedes de encomiendas cuya naturaleza diferente a la merced de tierras no estaba aún precisada o, lo que es lo mismo decir, que sea merced de tierra, encomienda o campo fiscal apropiado). La caracterización se basará sobre la indivisibilidad, independientemente de la naturaleza de adquisición del derecho a tierras. Se autorizaba pues, en su art. 2º, la expropiación de “los dominios indivisos existentes (sic) sea cual fuere su origen”⁵²⁶. Se crea un juzgado letrado de tierras que daría lugar a problemas de competencia con los juzgados civiles. Dispone hacer reserva fiscal al interior de la mercedes sustrayéndolas del futuro poseedor privado y dispone la venta para procurar fondos destinados a la aplicación de esta ley. Establece la obligatoriedad (sic) de “la transmisión de los derechos por vía sucesoria en cualesquiera de las formas que establece el Código Civil” ante la evidente costumbre de cesiones de derechos realizadas de oralmente o “de palabra” —o de hecho— y crea un “Fondo del Empréstito de Fomento Urbano y Rural” con los ingresos “de acuerdo a lo que prescribe la ley”.

⁵²⁶ Art. 2º. Ley 497, AHLR, Tierras Fiscales 1913-1945. Véase, además, Apéndice Leyes provinciales, Doc. III, X. una variación de la ley que dice “sea cual fuere su origen”, mientras que la mayoría de las transcripciones afirman, “sea cual fuere su procedencia”.

31338

PROVINCIA DE LA RIOJA

21376

RECOPILACIÓN
DE
LEYES Y DECRETOS
— MAS USUALES ORDENADA POR —
DECRETO N° 1309 DE SETIEMBRE 4 DE 1929

GOBERNADOR

Dr. JUAN ZACARÍAS AGÜERO VERA

FOLLETO N° 2 — EDICIÓN OFICIAL



LA RIOJA
TALLERES TIPOGRÁFICOS DEL ESTADO
1930

RECOPILACIÓN DE LEYES Y DECRETOS MÁS USUALES... (Caratula), Gob. Juan
Zacarías AGÜERO VERA, La Rioja, Talleres Tipográficos del Estado, 1930.

Los informes de la década del '60 de consultores del Consejo Federal de Inversión —organismo técnico federal dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería argentino— son concluyentes sobre la utilidad de las leyes 258/15 y 497/29: “Estas dos leyes nunca tuvieron aplicación por falta de recursos (económicos)”⁵²⁷. Las dos fueron derogadas expresamente por el Art. 137 de la ley de Catastro Parcelario 2112/53 con la intencionalidad de sustituirlas por una legislación más simple y que armonizara con las nuevas disposiciones de racionalidad catastral, usando “nuevas” figuras jurídicas como la prescripción adquisitiva⁵²⁸ y la aprobación de la mensura técnica por parte de la Dirección de Catastro provincial.

Una mención especial merece las leyes específicas para un predio determinado lo que supone un acuerdo de las oligarquías provinciales sobre el lugar a expropiar y presupone un consenso con los comuneros particulares que allí habitan o residen. La ley 2717/60 que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación de la Merced de San Isidro de la Sierra de las Minas⁵²⁹. A diferencia de las leyes anteriores cuyo objeto de

⁵²⁷ CFI (1964), *Informe* ... 205.

⁵²⁸ La prescripción adquisitiva fue, en la región pampeana, la figura jurídica relevante en la conversión en propietarios privados de los poseedores de tierras originarios en derechos de mercedes reales. Véase al respecto el excelente alegato de Manuel PORTELA, *Tierras de la Costa o Bañados de Avellaneda, parte de la Antigua Estancia de los Padres Dominicos que la Provincia de Buenos Aires pretende despojar a los actuales poseedores y propietarios como sucesores de los Derechos del Rey de España — Memorial presentado a la Suprema Corte Provincial [de Buenos Aires] Marzo de 1929*, ed. Del Autor, La Plata, 1929, 67. Portela dice “Los dominicos y sucesores se vieron obligados a alegar prescripción, pues si bien era cierto que Doña María Arroyo al venderles y donarles entendió transmitirles todos sus derechos sobre las tierras hasta el Río de la Plata, y lo permiten suponer los términos de la escritura, ésta, forzoso es reconocerlo, no es perfectamente clara”.

⁵²⁹ El Gobernador del Tucumán Juan Francisco Pestañeda y Chumacero concedió la Merced de San Isidro de la Sierra de las Minas al vecino de La Rioja, Teniente Ignacio de Agüero, el 10 de julio de 1755. Este había petitionado

“un potrero vaco sobre la Sierra de Ulapes de tres leguas de ancho por seis de largo, [que] linda al sur con tierras de jurisdicción de la Punta [actual provincia de San Luis de Loyola], al norte con tierras y estancias de los Villaltas, que llaman Salar, al poniente Monte de las Salinas y Oriente camino Real a la Punta”

En el acto de puesta en posesión del mercendero Agüero por parte del comisionado por el cabildo Nicolás Espejo, hubo una inusitada oposición y *contradigo* por parte del vecino Felipe Ontiveros, pero como este no presentó —según el fundamento oficial del expediente que usamos de fuente— un traslado de los títulos en los cuales se fundaba su oposición, el alcalde ordinario de 1º voto Don Tomas Gordillo y Luna, produjo en el paraje de Ambil una resolución amparando la puesta en posesión de Agüero fechada el 15 de diciembre de 1756. Simultáneamente la Real

expropiación eran los “dominios indivisos”, los cuales eran innominados o in referenciados. Se comisionaba a equipos técnicos para que elaborasen y determinasen el/los objeto/s terrícolas a someter a expropiación, que era especial para esta Merced, claramente identificada con una indiscutida mensura. Además del texto legal y alejándonos de las condiciones de producción normativa de esta ley, existe un anecdótico popular que, a través del relato oral de los condóminos del actual paraje de San Isidro de la Minas, nos ha llegado hasta nuestros días⁵³⁰. Dícese que, a mediados del siglo pasado, había llegado al pueblo principal de la merced la información de que en los tribunales de la provincia de Córdoba se habría de comisionar a un descendiente de los Agüero para que tomase posesión de la merced, lo cual devino en una pueblada que consistió en movilizar a todos los “comuneros” de la sierra y del bajo de este extenso territorio.

Instrucción de octubre de 1754, que sometió a revisión el problema de los baldíos, solo admitió esa justa prescripción para las situaciones de hecho y *de iure* producidas con anterioridad a 1700, pero no para las que se hubieran producido con posterioridad de esa fecha, por lo que para componer los títulos se debía abonar al fisco. Miguel del Agüero, hijo de Ignacio, se presentó por sí y por sus hermanos a pagar la composición. Con este antecedente se ordenó la mensura de la Merced el 28 de enero de 1786, comisionándose para ello al Capitán de Milicia de Los Llanos Don Manuel Fernández Cabezas y al “práctico agrimensor” Juan Lorenzo de Villafañe. Toda la operación consistió en medir tres leguas al sur por tres al norte, omitiéndose medir al este y al oeste a petición del interesado, pero “a ojo de varón prudente la [parte de] serranía [de las Minas] tendrá un ancho de dos y media leguas desde el centro, y los campos abiertos y secos ocho leguas hasta las Salinas de Meno”. El Gobernador Marqués de Sobremonte aprobó la operación de mensura en la ciudad de Córdoba el 14 de diciembre de 1786, tasándola en 30 pesos y recién el 1791 se le dio a Agüero nueva posesión. Casi un siglo después, don José Agüero —no nos conta que sea descendiente del mercendero originario Ignacio de Agüero—, en virtud de la *ley de Reposición de Títulos*, solicitó la protocolización de la copia original, que fue ordenada por el Juez de Primera Instancia Serafín de la Vega el 19 de Julio de 1888 en el registro del escribano Emilio H. González. Hubo intentos fallidos de nueva mensura como la ordenada judicialmente al agrimensor oficial Ernesto de Holsteín que dio una superficie de 215.066 hectáreas, en 1889. El equívoco fue la consideración de uno de los linderos que hizo este agrimensor al entender “Salana” y merced de Salana en vez de “Salar” o Salinas como lo consignase la petición de 1755 lo que erró en la medición y determinó su no aprobación técnica. Una nueva mensura ejecutada por el agrimensor Benjamín Rincón ordenada por comisión del juez de primera instancia Aniceto Luna, estableció una superficie de 169.234 hectáreas en 1912. En base de esta mensura se declaró la expropiación por la ley 2717/60. Véase AJLR, A-410, 1888, Expte: “San Isidro de la Sierra de la Minas-Protoc. de títulos”; ACELR, Protocolo del escribano E.H. González, año 1888, f. 630 vuelta y ss.; y C.F.I. *Estudio sobre las mercedes...* 28.

⁵³⁰ Carlos LANZILOTTO, com. pers. 1999.

Tabla 10: Superficie ocupada por Mercedes o Campos Comuneros con relación a la propiedad privada, por región y en porcentaje, La Rioja, año 1963.

Ubicación	<i>Hectáreas de Mercedes</i>	%	<i>Hectáreas de Propiedad individual</i>	%
Región de los Llanos	2.330.000	75,4	760.000	24,6
Resto de zona ganadera	170.000	9	1.740.000	91
Total de la zona Ganadera	2.500.000	50	2.500.000	50

Fuente: IMTI-Latinoconsult Argentina S.A., “Intervención operativa para el procesamiento jurídico económico y social de la tierras indivisas de la provincia de La Rioja”, en *Procesamiento de la tierras indivisas-1968-* Tomo I Introducción y metodología, S. C. editora, La Rioja, 1968, p. 13.

La merced de tierras de San Isidro de las Minas atañe a cosas vivas y a problemas que tocaban de cerca a cientos de personas en el pasado (y a muchas todavía en el presente, pues los comunales distan de ser, en ciertos emplazamientos geográficos, un simple vestigio anacrónico a extinguir). Sin dibujar escenarios irreales, se recoge en varias leyes como presente, la funcionalidad social de estos terrenos comunales, cuyos aprovechamientos repercutían sobre el conjunto de los vecindarios, sobre las instituciones municipales, sobre la reserva de tierras disponibles y sobre la pluriactividad campesina. El orden pre moderno no siempre es visto como funcional a pesar de ser su principal característica. La transformación en propiedad privada intenta la disolución de una antigua constitución agraria, tendencialmente igualitaria y cooperativa. El ejemplo que traemos a colación es la representación idílica del hombre común de hoy, de un pueblo rústico como San Isidro de las Minas. Cuenta don Diego Amaya al autor, en el año 2001, “que en el siglo pasado (sic) ya corrimos a unos que se querían dueños (exclusivos). Un cordobés compró ‘los títulos’ de la merced de san Isidro de Las Minas y quiso venir aquí y lo sacaron ‘escarpiendo’. Entonces se quejó a la justicia de Córdoba que le puso un ayudante para que viniera aquí a tomar posesión. Vino y a las campanadas (el sonar de las campanas de la iglesia del poblado) se juntó

‘las gentes’ con sus mulares en la canchita (plaza rústica) y golpeando con los ‘chicotes’ (fustas) sus guardamontes (una especie de cobertor de cuero de la montura) alejaron al pretendiente de dueño y al justicia para no volver nunca más.” Hasta aquí, el relato de Don Amaya. Pero, nos preguntamos: ¿Quiénes son los golpeteaban amenazadamente sus guardamontes? ¿Los campesinos y vecinos eran o se consideraban los “dueños”? ¿Son los descendientes y sus familias del teniente Agüero al que le fuera concedida la merced en 1755? ¿Los reaccionarios al foráneo son los que se creen poseedores desde el “tiempo inmemorial”? ¿El que compró perfeccionó el título de dominio? Probablemente sea un poco de cada cosa, pero lo cierto es que esta fábula campesina se erige como una estrategia de impedir la privatización exclusiva de la tierra de las 215.000 hectáreas de la merced de san Isidro de La Minas.

Como ha señalado Paolo Grossi, “si hay un ordenamiento que repele a la límpida y monocorde cultura jurídica del siglo XIX es precisamente la propiedad colectiva en sus variadas formas”, ese otro modo de poseer que también defienden Rafael Altamira o Joaquín Costa. Aunque como veremos a lo largo del presente trabajo, el régimen de mercedes de tierras tucumanas adoptará una singularidad que difiere, sustancialmente, del bien común medieval (Grossi) o comunero ibérico (Salustiano de Dios) o el mismo *ayllu* aimara (Clavero)⁵³¹.

Volviendo a las iniciativas legislativas locales, en marzo de 1967, a sesenta días de su asunción como gobernador de La Rioja, Guillermo Iribarren elevó al presidente de la Nación Argentina un programa titulado “Plan de Acción Inmediata”. En la carta de elevación que acompañó este ambicioso programa de “reactivación de la economía de la provincia” se señalaba cuál era la situación de la economía riojana en el siglo pasado y las causas históricas que provocaron “la postración económica que presenta la provincia en la actualidad, haciéndose énfasis en la situación de la tenencia de la tierra, que

⁵³¹ Nos referimos al capítulo 4. Titulado “el Ayllu qamaña” del trabajo de B. CLAVERO “*El común y no su doble (a propósito de pasado y presente de los comunales y lo comunitario)*”, en RQF N° 31, 2003, 908-951.

gravita negativamente sobre la situación económica y social, asignándose a su solución primera prioridad (...) que no puede operarse lenta, aislada, ni parcialmente.”⁵³²

§ 16. MERCED DE ENCOMIENDA Y DE TIERRAS, MERCED DE BIENES

Conforme a las regulaciones del derecho indiano, las mercedes de encomiendas eran concedidas a través de dos vidas (la de su titular y la de su legítimo sucesor), excepcionalmente tres vidas, mientras que las concesiones de mercedes de tierras eran “por siempre jamás” y no podían ser revocadas sin “justa” causa. La presencia de las mercedes otorgadas por el estado colonial se plasmó en un intento de regulación de diseño monárquico pero cuyo implantación estuvo a cargo de una cadena de funcionarios e instituciones coloniales (v.g. el “thiniente de naturales”, el protector de los naturales o el protector de indios⁵³³, las visitas, etcétera) que intentaron poner un freno a las apetencias individuales y dinásticas de ciertas familias de beneméritos o vecinos feudatarios.

Esta visión, que se ve fortalecida por la existencia de las Ordenanzas del virrey Toledo, Abreu, Alfaro —cuyo tema en sí mismo requiere un análisis en otro ámbito— y que, como vimos con el Auto General del Visitador Vargas de fines del siglo XVII, se relacionan con la tenencia de tierra de las etnias subordinadas en la medida en que ordenaban el “desagravio” a través de la delimitación o “señalización” de las tierras y debían constituir la base patrimonial de los pueblos encomendados⁵³⁴, estableciendo un espacio territorial libre de toda vinculación con el dominio privado español o “blanco”. Los historiadores hemos tenido dificultades en reconocer el papel de las autoridades

⁵³² La Rioja, *Plan de Gobierno de Acción inmediata- Para el Excmo. Señor presidente de la Nación Teniente General D Juan Carlos Onganía. Informe del Gobernador Guillermo D Iribarren*, (La Rioja), Imprenta de Estado, marzo de 1967, 255.

⁵³³ Charles CUTTER, *The Protector...*, 30-59.

⁵³⁴ Pueblo encomendado no es sinónimo de pueblo de indios. Al igual que Fradkin y Garavaglia usamos aquí “pueblos de indios” en la acepción hispana del término, es decir, un espacio público sometido al control de la Iglesia y bajo la autoridad de la Corona, en R. FRADKIN y J. GARAVAGLIA, *La Argentina Colonial...*, p. 21.

cabildantes locales en la resistencia pasiva (dirá Ots) o la relativa autonomía de los gobernadores que tomaron decisiones significativas para beneficio de las comunidades autóctonas. Para complejizar el cuadro institucional, las *regulationes* aplicadas al Tucumán (*partidos* de *Londres* y *Rioxa*) intentan implementarse en medio de conflictos por la ocupación efectiva del suelo, a posteriori del levantamiento de Juan Calchaquí del siglo XVI y las tres fases del Gran levantamiento del gran parte del siglo XVII. En otras palabras, el “sistema” intenta dominar el “orden” colonial. El “sistema colonial”⁵³⁵, alarmado por la extraordinaria mortandad y creciente pobreza de la población tributaria, intentó preservar la estructura india configurando toda una *ius* política del resguardo al indio, en algún caso, meramente normativa pero sin menospreciar los extraordinarios esfuerzos por aplicarlas a través de tenientes como en el caso del gobernador Alonso de Ribera (1607) o los de Mercado Vellacorta (1667). Aún en el caso que tenemos evidencia fáctica que nos permite afirmar que la Monarquía construyó en suelo tucumano y durante todo el siglo XVII una política de contención indígena, debía, por lógica ser mediada entre los intereses de los cabildos, del gobernador (que no siempre estaba en desacuerdo con sus súbditos encomenderos) y la audiencia. De todas formas, al decir de Carlos Assadourian “no hay que tomar al pie de la letra estas normas, pues pueden ser mediatizadas en la vida real”⁵³⁶. Como señala Francisco Rubio Durán “de

⁵³⁵ Cuando nos referimos a la noción de *sistema colonial* en contraposición con el de *orden colonial* partimos de la conocida hipótesis de J. Marchena Fernández, “el Sistema Colonial es la estructura administrativa, política, legal y religiosa que relaciona territorialmente la metrópoli con las colonias. El Orden Colonial es el orden de las cosas. El sistema colonial debería generar el orden colonial. El sistema colonial siempre estuvo intentando alcanzar y dominar el orden para que opere en función con los intereses monárquicos. El sistema colonial, por lógica, es algo posterior al orden colonial”, Juan MARCHENA FERNÁNDEZ, *Papeles españoles para una revolución americana: intercambios intelectuales a fines del siglo XVIII*, Curso del Programa de Doctorado de Élités y Procesos de Convergencia Cultural y Económica 1450-1900, Universidad Pablo de Olavide, Julio 2002.

⁵³⁶ Carlos SEMPAT ASSADOURIAN, *El sistema de la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio económico*, México, ed. Nueva Imagen, 41. Inmediatamente C. S. Assadourian al relacionar el proceso de expansión territorial con el movimiento demográfico indígena, continúa... “Sin duda, alguna razón valedera habrá tenido aquel vecino que proclamaba en 1610 ‘...que en toda esta gobernación del Tucuman, y en esta ciudad de cordova y su jurisdicción, desde que se descubrió y pobló hasta oy ningunos indios de encomiendas han tenido hacienda propia tierras ganados ni otra ninguna cosa, ni trato ni contrato ni servicio en posesión ni propiedad ni derecho a un palmo de tierra ni más porque a los indios no se les hace merced de tierras ni tienen otra cosa...’ [AJC, legajo 94, expediente 3], y que en cambio trabajan las tierras de sus encomenderos ‘sin que por esto jamás los indios hayan tenido ni adquirido derecho de posesión...’ [AJC, legajo 25, folios 177 y vta y 178]”. En el mismo sentido vease la presentación hecha por Juan Bernal de Mercado en el pleito por las tierras indígenas de Guayasacate de la actual provincia de Córdoba, “porque a los indios no se les hace merced de

hecho estas disposiciones seguirán sin contemplarse ni cumplirse en el Tucumán donde, ni se procuró buscar la conveniencia de los naturales, ni se respetó el derecho de los aborígenes a sus pertenencias”⁵³⁷ y según algunos autores se perfeccionó la privatización la tierra⁵³⁸. No obstante, otros autores como C. Cluster atribuyen al derecho teórico del indio una parte integrante de la experiencia colonial porque “aunque resultara imperfecta la ejecución efectiva del derecho, existía y era de importancia fundamental en determinar la configuración de las relaciones en la sociedad colonial”⁵³⁹

Volviendo a La Rioja y a las fuentes consultadas ¿Hubo una influencia directa en lo referente a la Visita de Luján en los otorgamientos de nuevas tierras? Tal como viéramos más arriba, los límites impuestos a los encomenderos consistían en señalar las

tierras, ni tienen capacidad para ello, ni ellos venden ni compran tierras, ni tienen otra cosa” en AHCo, escribanía 1, leg. 25, expte. 4, fol. 177 y 178.

⁵³⁷ Francisco RUBIO DURÁN; *Tierra y ocupación...*, en la página 137 y ss., describe las formas de acceso a la tierra. Las mercedes de chacras y solares urbanos fueron mucho más numerosas que la de estancias, haciendas o simplemente tierras rurales. Durante la primera etapa de conquista y ocupación del territorio, el orden normativo indiano pretendió y lo logró con relativo éxito, que todo aquel sujeto de derecho habilitado (español, varón, mayor de edad y contribuyente al fisco) que participare en las fundaciones iniciales o en las campañas militares contra indios, tuvieran, al decir de Rubio Durán “*acceso a este recurso en concepto de gratificación en función del aporte que fuera a realizar para la culminación de dichas empresas* (colonizadoras)”. Pero ¿cuáles eran las formas de acceso a la propiedad de la tierra? Rubio Durán establece, para la gobernación del Tucumán, cuatro: / a.

Gracias y mercedes de tierras en remuneración de servicios prestados; / b. Repartimientos de tierras por reales cédulas ordinarias: el régimen de tierras comunales. / c. Apropiación, usurpación, ocupación y enajenación. / d. “Composiciones”, “reales amparos” y “confirmaciones”. Visto este listado de formas de acceso, como dijimos, nos limitaremos al primero, lo que no quiere decir que sea, la merced *regia* de tierras, más importante que las demás sino, valga recordarlo, la que ha pervivido al antiguo regimen en la provincia de La Rioja, el Noroeste de Argentina y el norte de Chile.

⁵³⁸ Macera identifica a las mercedes de tierra, compraventas, ocupaciones de tierras baldías, composiciones, y sucesiones como los “mecanismos de privatización” de la tierra, MACERA DALL’ORSO, *Trabajos de historia: Economía y sociedad*, ed. Instituto Nacional de Cultura (Perú), 4 v., Lima, 1977, 161 del t. III. Mellafe presenta, según Guevara Gil, una enumeración más comprehensiva incluyendo las donaciones, la conmutación de tributos por tierra y contratos fraudulentos, Rolando MELLAFE, “Frontera agraria. El caso del virreinato peruano en el siglo XVI”, en A. JARA (ed.) *Tierras nuevas. Expansión territorial y ocupación del suelo en América (siglos XVI-XIX)*, ed. El Colegio de México, México, 11-42; Burga es quien según nuestro parecer es más preciso en términos de lo que denominamos *ius política* a partir de que no desconoce la distinción de dominio directo y útil. Para Manuel Burga la merced de tierras y la composición fueron los “*único[s] título[s] con validez legal para obtener el dominio directo del suelo americano*”, M. BURGA, *De la encomienda...*, 90.

⁵³⁹ Charles CUTTER, *The Protector...*, 30.

tierras de sus encomendados, hecho éste que no llegó a alterar el orden colonial⁵⁴⁰. En realidad, se otorgaba prioridad a los derechos de los encomenderos sobre las tierras de sus encomendados cuando éstas estaban sujetas a repartimiento por merced o almoneda.

Todo parece indicar que hubo un reposicionamiento de los poderes locales a partir del siglo XVIII pero ya se habían repartido tierras durante todo el siglo anterior. La aristocracia local benemérita, durante todo el XVII ya había hundido sus raíces más profundamente en raíces territoriales. Se puede destacar que las concesiones de parte del soberano no siempre fueron expresiones de gratitud a un mercendero fiel —en palabras de la fuente misma “vecino feudatario”— sino que en ocasiones fue el reconocimiento de usurpaciones de poder ya avenido en periodos de lucha con los indígenas o de carencia de autoridad regia o fue consecuencia de la ineptitud y la corrupción de los facultativos o representantes del rey (Audiencias) que debían limitar, con el beneficio de la norma indiana, a los encomenderos y terratenientes. Pero la norma indiana estaba presente y lo veamos en el siguiente ejemplo.

En febrero de 1702, llegó un comisionado del gobernador al pueblo de Aminga con la orden de dar posesión de la merced de tierras de las “sobras” del pueblo al Alférez Andrés Luys de Cabrera, aunque, previo a ello, tuvo que levantar un nuevo padrón de indios de tasa y asignarles un “pedaso” de tierra a cada uno,

*“les asigne y señale el pedaso de tierras y parte de Agua q’paresiere suficiente para el mantenim’to de dhas Personas y que sea dha asignación de tierras y agua en Primasía alos dhos Indios y sus familias y Piesas sueltas de dho Pueblo ”*⁵⁴¹

Una vez cual cumplimentado el amojonamiento y comprobado el pago de la media anata, Cabrera tomó posesión de las tierras que restan en,

“cumplim’to del dcho titulo de mr’c”

Días más tarde Juan de Adaro y Arrasola, dueño de las encomiendas de Machigasta y de Aminga⁵⁴²,—enterado de la merced de tierras de las sobras de Aminga otorgadas a

⁵⁴⁰ *In extenso* en mi “Estatalidad del Derecho Indiano...”

⁵⁴¹ “Merced de Aminga”, *Revista de la Junta de Historia y Letras de La Rioja*, año 3, núm. 3, Julio-Agosto-Setiembre de 1944, 47. Las demás citas que refieren a Aminga son de esta misma fuente.

Cabrera en las que éste pretendía instalar terrenos de labranza usando las tierras y fuentes de agua de sus encomendados *amingueños*—, recurrió a una presentación a través de la cual él, Adaro, *contradijo* la concesión de merced de tierras a Cabrera. En ella expone su oposición,

“el Cap’n Dn Juan de Adaro y Arrasola Besino de los pueblos de Aminga y Machigasta por mi y en nombre de mis encomendados de d’ho Pueblo de Aminga prescripto lo q en d’ro nesess’o Paresco ante Vmd. y digo: que en auciensia mia cojio Posession el Capitan Dn. Andres Luys de Cabrera del Agua y tierras de d’ho Pueblo de Aminga con grave Perjuysio de d’hos mis encomendados con titulo de que tenian mrd de la sobras de dho Pueblo y hallo ser q’e sele dio Injusta por lo qual la Contradigo”

Al correr traslado y notificación de la *contradission* y el *contradigo* a Cabrera, se fundamentaba que se había vulnerado el derecho de terceros, en este caso los indios; por su parte, Cabrera contrargumentaría desde un mecanismo colonial que le permitía basarse en sus derechos mercenderos, que contemplaban que pudiera haber oposición pero que en este caso la encomienda estaba “vacando” podía peticionarse las “sobras”, alegando que la merced de tierras le había sido otorgada por el gobernador Juan de Samudio, porque

“Fue en cumplimi’to de reales Cédulas y Ordenanzas de Mg’d que disponen que conforme fueran bacando las tierras por muerte de los Indios se bayan incorporando en su real Patrimonio y se haga Mrd de ellas a sus basallos para que se baya poblando dejando a los indios que quedaren los ojos de tierra nesarios todo lo qual se hizo judicialm’té”

⁵⁴² Juan de Adaro y Arrasola, encomendero de Machigasta y Aminga, con 26 indios de tasa, había recibido, años antes una condena del Oidor Vargas de Luján de 10 pesos de ocho reales a la Cámara, por incumplimiento de la *Recopilación* en lo referente a la tributación de los indios Machigasta, véase AGI, *Sec. VI*, Escribanía de Cámara, 864-A, pieza 5°, fol. 611. Era estanciero y tropero, domiciliado en Pinchas, hijo, probablemente, de Sebastian de Adaro y Arrasola (o Adaro e Irasola) quién había gozado, como vimos más arriba, en segunda vida de la encomienda de Atilés, AHCo, Escribanía de Gobierno N° 2, Legajo 7, 2 bis, expte. 20, (1669) y que, comisionado por el alcalde ordinario de La Rioja, Alonso de Tula Cervín, había puesto en posesión a Don Gabriel Mercado y Reinoso de la Merced de tierras de Pinchas y Chuquis, concedida en 1646 por mandamiento del gobernador Gutierrez de Acosta y Padilla, recogido en “Merced de Aminga (sic) Pinchas y Chuquis”, *RJHLLR*, año 2, núm. 3, Julio-Agosto-Setiembre de 1943, 26-32.

Frente a testigos indígenas convocados a la ciudad de La Rioja, entre los que se encontraba el cacique del pueblo Pedro Aballay, el “Protector General de los Naturales”, Santos de Toledo Pimentel, se elaboró un dictamen que desaconsejaba la concesión porque “la introducción de ganados mayores de Cabrera por causar gravísimos perjuicios a las sementeras de los indios” de Aminga, afectándoles en el sustento y la “mita” que cumplían en la ciudad de La Rioja. Se pedía al maestro de campo Juan Gregorio Bazán de Pedraza, “Teniente de Gobierno Justicia Mayor y Capitán de Guerra de esta ciudad de La Rioja y su jurisdicción”, que se “*sirva de aver por el contra dha mrd*” (se oponga a la concesión) y mande a suspender la puesta en posesión de Cabrera hasta tanto “*mis Partes*” o indios amingueños comparezcan ante Samudio, que “*biendo las razones justas se Sirva revocar dha.Mrd*”.

No sabemos si existió una revocatoria de la merced de Aminga por parte del Gobernador, dado que si bien éste fue el único caso documentado de oposición a una concesión en La Rioja, desconocemos el modo en que llegó a su fin dado que sólo hemos obtenido un conocimiento parcial del tema y el expediente no figura en el Archivo de Córdoba consultado⁵⁴³.

En síntesis, acorde con el derecho indiano, la titulación de las tierras o *sobras* de Aminga mediante merced de tierras implicó un procedimiento reglado, de sujetos mercaderos que debieron asesorarse por letrados con la intervención de instituciones tales como: gobernador, teniente de gobernador, tesorero de la real caja de hacienda, comisionado de puesta en posesión, oposición, audiencia municipal o de cabildo y defensor de naturales y nuevamente el gobernador. Así, en el marco del complejo sistema de negociaciones del estamento dominante —*in strictu sensu* conflicto de intereses entre el mercadero de tierras y el encomendero— se reconocía el *imperium*

⁵⁴³ Alejandro MOYANO ALIAGA, “*Expedientes riojanos en el Archivo Histórico de Córdoba (siglo XVII)*”. Universidad Nacional de Córdoba. Mimeo, 2001, p 7; y “*Aportes documentales para el estudio de población de La rioja, Mendoza, San Juan y San Luis (siglo XVIII)*”, en Dora Celton (comp), *Fuentes útiles para los estudios de la población americana*, Simposio del 49º Congreso Internacional de Americanistas (1997), Quito, ed. Abya-yala, 1998, Ecuador; gentileza del Dr. Moyano Aliaga, Director del Archivo de Córdoba.

de la corona como poder de arbitraje que articulaba los diversos intereses, escuchaba a las partes y resolvía, en las más de las veces.

Otra de las formas de abordar el estudio del orden jurídico pre-moderno es el uso, a fines solo heurísticos, de las calificaciones grossiana aplicadas al orden medieval europeo tales como “*dominii terrae*” versus *superficiare usus*. Este tándem consistente entre el señor de la tierra y los usuarios del predio donde aquel ejerce su dominio, la trasladamos (con las salvedades del caso) al mundo andino del siglo XVII. Si partimos de la hipótesis que estos tipos de *dominii terrae* estaban desdoblados en partes asimétricas entre mercenderos españoles y caciques naturales o curacas indígenas (donde existía un acceso diferenciado y prelativo sobre un predio o extensión de tierra que era objeto de utilidades varias que van de la caza al uso de agua para riego, y varios sujetos privados pero uno inter partes que era el titular de la merced o comprador del título o sus herederos y, en simultáneo, un *pool* de derechos comunitarios de los habitantes de ella), llegaremos fácilmente a la conclusión de que no eran recíprocos ni equivalentes.

Ejemplifiquemos con la merced de Niquijao (o del Rodeo). Concedida en 1641 en el siempre impreciso límite entre las jurisdicciones de San Miguel y La Rioja en el Tucumán por el gobernador Avendaño por “dos leguas en quadro” quien inmediatamente subraya “*se entiende ser las dichas [tierras] dos leguas en cuadro, con tal que sea sin perjuicio de tercero de mejor derecho indios y reducciones reservando [a] estos que constase ser naturales de dicho valle, lo que constase estarles adjudicando conforme a Ordenanzas así para sus comunidades como para los particulares, con la prelación en la mejor parte de dicho valle, así en las mejores tierras, aguadas y montes*”⁵⁴⁴. Avendaño destaca la presencia de naturales (superficiarios) al interior del dominio concedido al mercendero llamado Andres Gil de Esquivel, vecino y alcalde ordinario de San Miguel quien en su petición no aduce que “están vacas y despobladas” como era la fórmula corriente. Los indios *amigos* no poseían el dominio como si lo

⁵⁴⁴ P. LARROUY, *Autonomía catamarqueña...*, 209.

tendría el peticionante Esquivel pero podían usufructuar del predio inclusive en las mejores “partes, aguas y montes” al interior de esas dos leguas cuadradas.

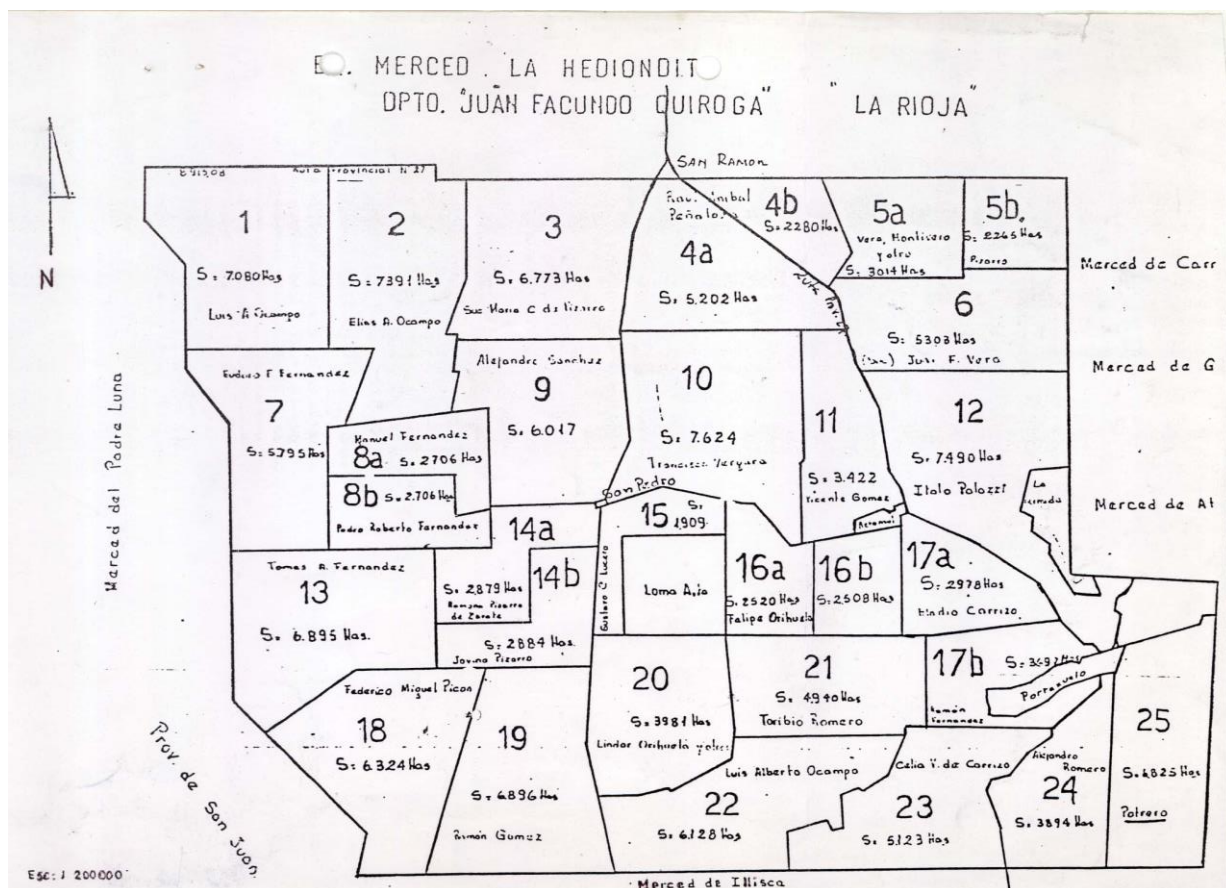
A los indígenas rebeldes en cambio la situación era de *manu militari*. Las desnaturalizaciones o traslados forzosos afectaron las nuevas concesiones de mercedes al diluir el vínculo “de tiempos inmemoriales” de los autóctonos. Nada afectó tanto como estos traslados (a veces complejizados por el mestizaje mismo de la sociedad colonial) y a las garantistas por inmemorial uso de tierras comuneras como las decisiones externas a la comunitarias como es el repoblamiento de sitios de naturales con indígenas (“sitiados”) no naturales de ese predio, valle o región. Al sud riojano los indios chepes, ischanes, puluchanes y malanzanes de la “nación” más *comechingona* que *calchaquí* (y que no se habían rebelado contra el español) veían cómo sus tierras eran habitadas o repobladas por nuevos indios no naturales que servían a algún mercendero. En sentido amplio del término, sus dominios estaban formalmente garantidos⁵⁴⁵, aunque, como afirma taxativamente Ots Capdequí al referirse a las facultades dominiales de los indios sobre las tierras que poseían, “no podían ejercitar sobre las mismas un verdadero dominio. Precisamente por ser considerados los indios, como personas necesitadas de cierta tutela”⁵⁴⁶, sus derechos a las cosas eran, diríamos modernamente, continuamente violentados⁵⁴⁷.

⁵⁴⁵ «Que a los indios se les dexen tierras con sobras de todas las que les pertenecieren, assi en particular, como por Comunidades, y las aguas, y riegos; y las tierras en la que hubieren hecho azequias, u otro cualquier beneficio, con que por industria personal suya hayan fertilizado, se reserven en primer lugar y por ningun caso no se les puedan vender, ni enagenar, y los juecezes, que a estos fueren enviados, especifiquen los Yndios que hallaren en las tierras y las que dexaren a cada uno de los tributarios, viejos, reservados, Caciques, Gobernadores, ausentes y Comunidades» Leyes XVIII, título. XII, libro. IV; de la *Recopilación* ...de 1680, En el mismo sentido véase leyes XXXVI, título. XVIII, libro. II; XVI, título. XII, libro. IV; IX, título. III, libro. VI, y XVII, título. XII, libro. IV.

⁵⁴⁶ J. OTS CAPDEQUÍ, *El Estado...*, 143.

⁵⁴⁷ Los derechos a las cosas de los naturales tiene una excelente fuente de estudio en las visitas y revisitas de desagrazos donde, el “sistema” legisla y controla para evitar los “agrazos” no solo a los sujetos individualizados sino que la norma indiana misma (“Ordenanzas”) es agraviada. Véase A Mercado Reynoso, “Estatalidad ..”. 2004.

Mapa n° 5: Mensura de subdivisión de la Merced de La Hediondita en los actuales propietarios



Fuente: “Instituto de Minifundio e Tierras Indivisas-“Latinoconsult Argentina”, Tomo III, Cap. 1.1, Lámina núm. 1, Año 1968, La Rioja, MS. Nota: Obsérvese que en la cartografía de 1968 de la Merced de la Hediondita figuran como límites la Merced del Carrizal, la Merced de Atil, la “Merced” de Illisca, la Merced del Padre Luna y el límite interprovincial con la provincia de San Juan.

A pesar de no existir impedimento *formal* para que el colectivo indígena, portador de la *detentatio*⁵⁴⁸ *algunas veces de inmemorial tiempo*, peticionara (a través de alguno de

⁵⁴⁸ Dentro de los nudos vitales descriptos por Grossi, sobre todo los relativos al orden jurídico de la relación hombre-cosa y a la forma de evaluación que partía del sistema de derecho romano, adoptamos con fines heurísticos las definiciones grossianas de *detentatio*, *possessio* y *dominium*. “Il sistema, che spicciativamente vogliamo qualificare classico, si costruiva individualisticamente proprio sulla volontà del soggetto agente, con un osservatorio sempre puntato ex parte agentis; e lo dimostra la tripartizione fondamentale in cui i romani hanno schematizzato il mondo reale: dominium, possessio, detentatio; dove dominium è sovranità individuale, è volontà potestativa esclusiva cui lo Stato dà il massimo rilievo rispettando e tutelando l'indipendenza e la libertà d'azione del dominus, dimostrando così che il macrocosmo statale assumeva a cardini

sus miembros) una merced de tierras al Cabildo, Gobernador o a la Audiencia, esto no se verifica en ninguno de los casos documentados en la jurisdicción riojana llanista⁵⁴⁹. En el universo en cuestión, —cinco mercedes de tierras como La Hedionda, Ulapes, Malanzán, Atilés y Tudcum— el dominio privado de la merced de tierras se ejercía de manera plena por parte del colectivo español o sus descendientes, siendo que, hacia fines del siglo XVIII, el despojo del dominio comunal indiano ya era un hecho consumado. El otorgamiento de estas tierras comprendió el dominio de los cursos de agua, lo que hizo más efectivo el despojo de tierras indias.

Una mirada más institucionalista al periodo y la región nos muestra cómo, en términos genéricos, instituciones como la merced de tierras, la encomienda, la mita y el tributo —obligación explícita de tributar a favor de los portadores de títulos que estaban sometidas la población india adulta—, conjuntamente con el “derecho” de los indios a permanecer en los dominios del mercendero, comenzaron a articularse de manera más racional en un modo de producción señorial a escala que giró en torno a la explotación-empresa privada: explotación denominada “estancia” o “rancho”, que, como vimos, se subordinó tempranamente a la mercantilización y comercio de alimentos y de mulares, a

portanti del proprio ordini i singoli microcosmi proprietari; dove possessio è un rapporto di fatto con la cosa che trova però la propria tipicità nella psicologia appropriativa che colora quel rapporto; dove detentatio è un fatto, un semplice fatto, perché è —rispetto alla cosa— soltanto contatto, familiarità, uso, godimento; e come semplice fatto, a differenza della due prime affermazioni di volontà, viene condannato nell'esilio dell'irrelevanza”.. GROSSI, Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale, Padova, ed. CEDAM, 1966, 7 y 220.

⁵⁴⁹ El *percorso* de la conformación de la territorialidad de jurisdicciones tan distantes como, por ejemplo, la de Tucumán y Tlaxcala, no ha sido aún analizado comparativamente. Estudios de la jurisdicción de Córdoba del mismo período confirman la ausencia de dominio indígena sobre las cosas. Josefina Piana de Cuestas dice “*Los silencios documentales de la época confirman ambas observaciones: en ningún momento los notarios asentaron en sus libros alguna propiedad inmueble perteneciente a los indígenas locales, o bien su participación en la actividad mercantil. Los pleitos judiciales y rendiciones de cuentas por tutorías señalan con claridad que el acceso informal de los nativos a las tierras españolas fue también inexistente*”, Josefina PIANA DE CUESTAS, “De encomiendas...”, 20. Contrariamente, Assadourian si revela las ventas de tierras de indios a españoles o entre indios, en la conformación de la territorialidad agraria de Tlaxcala, México. “*Para evitar los malentendidos que aún suelen confundir el análisis histórico, debemos distinguir entre legislación colonial o ‘derecho indiano’, que en las recopilaciones de leyes se abstuvo de adjudicar a los indígenas el pleno derecho de propiedad en su sentido europeo, y en una práctica que si la admitió en los hechos, como sucedió en la segunda mitad del siglo XVI y primeras décadas del XVII. Las cartas de venta de tierras de indios a los españoles o entre indios y las escrituras de trueque o donaciones, que colman los libros notariales, son una prueba documental indiscutible del arraigo de esta nueva práctica durante el periodo señalado*”, Carlos SEMPAT ASSADOURIAN, “Estructuras...”, 72. Para un análisis comparativo de periodo inicial entre Lima y Tlaxcala, véase a Karen B. GRAUBART “Competing Spanish and Indigenous Jurisdictions in Early Colonial Lima” en *Latin American History*, Oxford University Press, 2016, en línea en latinamericanhistory.oxfordre.com (Consultado el 21/04/2016).

la fuerza de trabajo (la manutención alimentaria de la tracción a sangre) para abastecer los ingenios mineros. Esta nueva unidad económica que inició el abastecimiento de un infinito mercado potosino con bienes y con semovientes, a una escala nunca antes vista, permitió una generación de excedente que benefició —al menos en la preservación de su tasa de manutención— a los propios indios (el *apartheid* normativo⁵⁵⁰ no implica necesariamente una marginalidad económica) y a sus apropiadores de excedentes producidos socialmente. El puñado de familias ricas y sus descendientes pretendieron (tarde o temprano) el pleno ejercicio de sus supuestos derechos de propiedad de estas tierras, perfeccionando los títulos o componiendo situaciones de hecho.

Tal como lo expone G. Madrazo, las relaciones interétnicas del Tucumán se desarrollaban en la región “en un nivel de comarcado y personalizado, y solo un conflicto entre intereses entre los españoles podía sacar a la luz las irregularidades de ciertas apropiaciones”⁵⁵¹.

En líneas generales, durante la primera fase del proceso de ocupación del suelo riojano, la inversión fue escasa y se realizó en base a una producción agrícola cultivígena ligada al autoconsumo. En este marco, la tecnología fue pobre y la racionalización de la empresa agrícola muy primitiva. Pero en los Llanos, zona sur de

⁵⁵⁰ Por *apartheid normativo* entendemos, siguiendo a Endrek, como la institucionalización de la segregación al acceso de algunos bienes materiales y culturales a partir del *ius sanguinis* que pretende o cree poseer el grupo dominante. Un ejemplo clásico de dicho *apartheid* es la normativa sobre la limpieza de sangre o de linaje para el acceso a la Universidad de Córdoba. Endrek nos comenta que “para evitar cualquier intento de filtración por parte de algunos individuos de oscuro origen (ya fuera ilegitimidad o “mala raza”) aunque de características de raza blanca, el grupo privilegiado se valía de un instrumento muy eficaz: la información de limpieza de sangre o de linaje. En la Universidad de Córdoba (Argentina) se nota —justamente hacia fines del siglo XVIII— un aumento de casos de individuos suspendidos en la colación de grados debido al rigor con que se aplicaba el requisito de la información de linaje. Llegó el caso que un simple rumor sobre el origen o condición de los abuelos de una estudiante (...) fuera suficiente para la suspensión de la colación. (...) La restricción siguió subsistiendo —lo mismo que la información de la limpieza de la sangre— aun después de la Revolución de Mayo y hasta mediados del siglo XIX”, Emiliano ENDREK, *El mestisaje en el Tucumán*, Cuadernos de Historia, núm. XXXV, Instituto de Estudios Americanistas, ed. Dirección General de Publicaciones (Universidad de Córdoba), 1967, 7.

⁵⁵¹ Guillermo MADRAZO, *Estrategias y falsa reciprosidad en el proceso de dominación colonial de los Andes. El caso del noroeste argentino*, en “Proyecto NOA El Noroeste argentino como región histórica. Integración y desintegración regional. Estudio de país interior”. N°1. Sevilla, abril 1992, 80 y ss.

La Rioja, se produjo un punto de inflexión en el 1700, cuando el colectivo español se percató de los beneficios que daba la tierra cuando estaba ligada a los circuitos mineros altoperuanos que demandaban, permanentemente, animales de abasto y de carga⁵⁵². Esta situación determinó que el encomendero-propietario dirigiese sus tierras, no ya a una producción de consumo familiar y servil (como había sucedido hasta entonces) sino que reorientase tierras y aguas a un dominio más efectivo del espacio vegetativo, tendiente a incrementar la producción ganadera (cría, engorde, invernada, matanza, secado de *charqui*⁵⁵³ y acopio de cueros, así como el traslado en pie al Potosí via Copiapó en Chile). Este periodo, que podría ser situado en los Llanos en siglo XVIII, nace conjuntamente con la merced de Ulapes (1697) y Malanzán (1695) pasando por la concesión de la merced de La Hediondita (1755) y culmina con la composición de Atilés (1798). En ese sentido, se acentúa la pérdida de entidad de la encomienda⁵⁵⁴ y se fortalece la del mercendero de tierras. Del mercendero al estanciero abríase producido un pasaje de “indios” a “naturales” acelerándose en las primeras décadas posrevolucionarias con la designaciones de “jueces de paz” o jueces territoriales como paso de disolución del orden colonial rural dependiente de Córdoba. Pocas excepciones indican que el ocupante de grandes extensiones de tierra no hubiera sido estanciero. La estancia es la unidad de los empadronamiento en la cual la autoridad rural designa a los residentes en ella, reiterando el concepto de “agregados”, “intrusos” en aquellos que no cumplen con los criterios de pertenencia y legitimidad de la persona en donde intervenía la genealogía, la percepción del color de piel, la residencia y su historia de vida. Como

⁵⁵² Para el análisis de los contratos de fletamiento de mulas, los “tratos” y “tratantes”, véase a Estela Beatriz TOLEDO, “El comercio de mulas en Salta: 1657-1698”, Rosario, en *Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas*, N° 6, Universidad Nacional de Rosario, 1962-1963, 166-190.

⁵⁵³ El charqui es una tecnología incaica de disecado de carnes, consistente en la exposición al calor y al frío de las heladas nocturnas. Esta técnica de deshidratación incluyó a carnes de peces y vernáculos, el cual podían almacenarlos hasta tres años y facilitaba el intercambio, Waldemar ESPINOZA SORIANO, *Los incas: economía, sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo*, Lima, ed. Amaru, 255 (508).

⁵⁵⁴ “Hacia fines del siglo XVII muchas encomiendas originariamente otorgadas en la fecha de la fundación de la ciudad de La Rioja ya habían desaparecido, las restantes se enfrentan al inicio del siglo siguiente en condiciones difíciles”, R. BOIXADOS; “Indios rebeldes-indios leales. El pueblo de Famatina en la Sociedad Colonial (La Rioja, Siglo XVII)”, en *Xama*, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Mendoza. 1998, 178.

señala Sonia Tell ⁵⁵⁵, hace la aparición la denominación de *comuneros* en la documentación de registro de las autoridades rurales que estaban en cotidiano contacto con estos quienes fueron antes “naturales”.

La “estancia”, institución *per se*, portaría una significación social que excede el título de merced. Es decir que el prestigio del titular no estaría dado por el linaje o por la perfección o extensión del título de tierra sino por la cantidad de cabezas de ganado, que poseía ⁵⁵⁶.

Jurídicamente, el cambio se manifestó en una necesidad de ampliar el *dominus* que antes se encontraba disperso en varios *dominii*. El título se fundaba en un bien real, pero el *dominus iure* del español no confrontaba con *dominio natural* de los indios, porque no existía competencia por los recursos naturales debido a que las pocas prácticas agrícolas ligadas a “bañados” próximos a “aguadas” estaban reguladas por una forma de tributo (a “tanteo”) ⁵⁵⁷.

⁵⁵⁵ Sonia TELL, “En defensa de la autonomía. Gobierno, justicia y reclutamiento en los pueblos de indios de Córdoba (1810-1850)”, en R. FRADKIN y G. DI MEGLIO (comp.) *Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense*, Buenos Aires, ed. Prometeo, 2013, p.145.

⁵⁵⁶ Existe profusa bibliografía que describe el proceso de valoración de las unidades económicas de cría extensiva de ganado, que dará lugar, inclusive a una resignificación de entes públicos y privados al interior de los “ranchos” (América del norte), o “estancias”. Véase a James LOCKHART, “*Encomienda and Hacienda: The evolution of the Great Estate in the Spanish Indies*”, en *Hispanic American Historical Review*, 49. N° 3. Durham, (N.C.), 1969, pp.411-429 ; Eric VAN YOUNG, *Hacienda and Market in Eighteenth-century Mexico: The Rural Economy of the Guadalajara Region, 1675-1820*, [1981] ed. Rowman & Littlefield, 2006; Susan RAMÍREZ, *Patriarcas provinciales: la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú Colonial*, Madrid, Alianza América. 1991,; David A. BRADING, *Haciendas y Ranchos del Bajío: León 1700-1860*, ed. Enlace Grijalbo, México, 1988, entre otros.

⁵⁵⁷ La modalidad de explotación de la fuerza de trabajo indígena adquirió una multiplicidad de formas, donde lo sustancial era la entrega de una parte de lo producido a cambio de protección política. Entre estas formas existían los “yanaconizados” tributarios (separados de su comunidad, sin tierras propias formalmente señaladas, adscriptos a la persona del encomendero o de su familia para los que cumplían tareas de diversa índole) producían beneficios mayores o más inmediatos (Juan C. GARAVAGLIA, *La guerra en el Tucumán colonial. Sociedad y economía en el área de frontera*, Lima, en HISLA: REVISTA LATINOAMERICANA DE HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL, N° 4, 1984) que los indios de comunidad o los de tasa. Cualquiera fuera el tipo de “pieza”, en las llanistas tierras de estudio, no poseían tierras señaladas de ningún tipo (ni de sementeras ni de otra clase) y el tanteo no era otra cosa que la asignación de bañados para cultivos de secanos en la cual el mercendero seleccionaba la mitad de los mejores frutos cosechados. Esta fórmula era diferente del régimen de encomiendas dado que, las llamadas “sementeras de las comunidades”, formalmente señaladas, se cultivaban y su producto era repartido por partes iguales con el encomendero, quien les proveía de

En consecuencia, ¿existía el dominio nominal de una gran extensión de tierras alrededor de una aguada o poblado cuyo titular era el mercendero y, además, un sujeto de derecho colectivo e identificado en el cacique, al que podríamos llamar “condominial”? En otras palabras, ¿puede decirse que los caciques más ilustrados, apoyados en el derecho indiano y las posiciones lascasianas de la iglesia católica hayan cercenado el dominium pleno del español? En la jurisdicción de La Rioja y de lo que fue Londres la respuesta es que no hay evidencias históricas durante los siglos XVII y XVIII, aunque sí existe constancia histórica de que existió en el mundo andino pre-toledano, durante el periodo de conquista, donde E. Ugarte transcribe la fuente más explícita de la voluntad indígena de establecerse como sujeto-agente de derecho en paridad al estamento “blanco” español, en la Charcas de mediados del siglo XV⁵⁵⁸.

La mayor parte del espacio territorial que hasta entonces había estado prácticamente sin ocupación efectiva por parte de los españoles a causa de la falta de incentivos económicos —en conceptos más precisos, sin *dominia* hispana—, cobra entonces un valor diferente. Los llanos y sus valles (sierras de Tuanín y quebradas como, por ejemplo, la de Puluchán) presentaban condiciones óptimas para el desarrollo de explotaciones ganaderas, a diferencia de las explotaciones agrícolas donde los españoles

semillas, bueyes y aperos. A los yaconizados habría que agregarles los desnaturalizados con posterioridad al “Gran Levantamiento” como capayanes, ingamanas, tucumangastas, yacoviles y abaucanes, que serían relocalizados en las jurisdicciones de La Rioja y Catamarca (Aníbal MONTES, “El Gran Alzamiento diaguita (1630-1643)”, en *Revista del Instituto de Antropología*, Tomo III, UNC. 1959). Un relectura de fuentes revela más alejadas jurisdicciones de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires también fueron destinatarias de los calchaquíes desnaturalizados, véase a A. MERCADO REYNOSO, *El Inka volverá*, p.67 y ss.

⁵⁵⁸ Nos referimos a la pretensión (pre-toledana) de los curacas incas del Alto Perú quienes durante tres reuniones realizadas en Mama, Huarochirí, el 12 de enero de 1562, otra en Juli, el 24 de Octubre y en Arequipa, el 13 de noviembre del mismo año, ofrecieron a los enviados del Rey, pagar las encomiendas que vacaren y las vigentes pidiendo la restitución de bienes y tierras, porque querían estar “*en cabeza de Su Magestad*” que significa tributarios del Rey y no de los encomenderos privados, “*y que nos den la dicha jurisdicción para que entre nosotros se elijan los alcaldes y jueces y regidores y otros oficiales de la manera que se elegían entre españoles y nos hagan otras mercedes que pretendemos pedir*” en Eduardo UGARTE Y UGARTE, “Los caciques de Chucuito y Arequipa, contra la perpetuidad de la encomienda”, en *Hombre y Mundo*, 2º época, Arequipa, 1966, 44. Para una ubicación contextual y relectura, con nuevos datos y un análisis de la coyuntura véase a S. STERN, “Paradigmas de la conquista: Historia, Historiografía y Política”, en BIIHAER, 3º serie, Núm. 6, 2º semestre de 1992, pag. 7-39, y para las dificultades de fuentes escritas de carácter indígena sobre su “cabildo”, siempre en el periodo colonial de conquista o temprano Karen B. GRAUBART “Competing Spanish and Indigenous Jurisdictions...” citado.

tuvieron menor incidencia (debido a que el cultivo de la tierra siguió estando restringido a los mismos sectores que, en la etapa pre-hispánica, ya se ocupaban de ello). En esta nueva relación de producción, se introdujeron técnicas de pastoreo e inversión colectivas desconocidas hasta entonces (entre ellas solo mencionaremos la construcción de tranqueras en la boca de las quebradas, el desbarrado de represas recolectoras de agua para el ganado y en definitiva la naturaleza misma del bien producido: un semoviente era un “producto” trasladable al lugar donde fuera demandado). Necesariamente, ellas impactarían en el orden normativo indiano forzando situaciones tales como la búsqueda del titular de la merced tendiente a fortalecer su *dominia*, perfeccionando su título y potenciando su vínculo con el colectivo dominante. Por otra parte, los indios y sus descendientes verían cómo se vulneraban sistemáticamente su *consuetudo terrae* y su *consuetudo casae* que obstruían aquella relación. La *detentatio* y el derecho indiano criollo permitían, al aborígen, el contacto nominal con la tierra, así como el uso, goce y usufructo de la caza y de la recolección. La *possessio* del mercendero los limitaron. Al decir de Carmagnani: “la tierra elemento comunitario de unión entre parientes, co-residentes y ancestros, ahora, las más de las veces se identificaba por estar adentro del dominio de un señor que decide sobre el trabajo, los usufructos y la vida al interior de ella”⁵⁵⁹.

Como vimos anteriormente⁵⁶⁰, Francisco Sánchez de Soria, en la parte argumental de su petición al rey a favor de la merced de La Hediondita (1755), solicitaba las tierras con todo lo que había plantado en ella, es decir que manifestaba *animus dominii* sobre los cercos, las aguadas, los sirvientes, etcétera. La merced concedida por el gobernador, en nombre del rey generó, en efecto, una alteración de los eventuales derechos de los *superficiarios* sobre los bienes reales preexistentes. Con ella, los bienes y las formas jurídicas de pertenencia sufrieron una inequívoca transformación. El título más la toma de posesión, enmarcados en la ritualidad de las formas escritas y simbólicas, se ubicaron, de allí en más, en el centro de la escena.

⁵⁵⁹ Marcello CARMAGNANI, *Para una historia de América 1. Las estructuras*, M. CARMAGNANI, A. HERNÁNDEZ CHÁVEZ, R. ROMANO (Coords.), México, ed. Fideicomiso Historia de las Américas-El Colegio de México- F.C.E., 1999, 567.

⁵⁶⁰ Véase § 14.3. “Merced de La Hediondita”.

§ 17 LA MERCED DE TIERRA EN EL ORIGEN DE LA ACTUAL PROPIEDAD TERRITORIAL

Como viéramos en el § 12, Ots Capdequí en su pionera obra sobre el régimen de propiedad en el derecho indiano⁵⁶¹ no tiene dudas de que la merced constituyó el origen de la propiedad privada. E invoca a la doctrina *articulada* por los juristas más destacados de la época como Solórzano⁵⁶² y Matienzo⁵⁶³. El hispanista Ots recurre a estos ilustrados sin adoptar una posición estadocéntrico y le dá lugar al civilista tándem *possessio-propietas* que —desde Las Partidas— naturalmente consolidan la aprensión jurídica del objeto. El absolutismo jurídico moderno y local sostiene una genérica e idéntica opinión tal como vimos en las sentencias del máximo tribunal argentino que reclama para el estado el dominio heredado de España y en contra del reclamo de comuneros o indígenas. Igualmente para publicaciones técnicas, académicas y de divulgación y en casi todos los casos, la merced de tierras fue el instrumento de acceso a la propiedad privada⁵⁶⁴. No obstante, desde la perspectiva de la historiografía del

⁵⁶¹ José María OTS CAPDEQUÍ, *El Regimen...*, 121.

⁵⁶² Juan de Solórzano, que antes (parágrafo 4) referenciábamos como la “doctrina solorziana” reafirmaba de manera tajante los derechos de la monarquía sobre las tierras americanas, en una cita muy comentada. Dice “*No es digno de menor consideración otro derecho, que compete y está reservado à los Reyes, y Soberanos Señores por razón de la suprema potestad de sus Reinos, y Señoríos, conviene a saber el de las cierras, campos, montes, pastos, ríos, y aguas publicas de todos ellos. El cual obra, que todas estas cosas en duda, se entienda, y presuma ser suyas, e incorporadas en su Real Corona, por lo cual se llaman de Realengo. Y que por consiguiente, siempre que se ofrecieren pleitos sobre ellas, o parte de ellas, así en posesión, como en propiedad, entren fundando su intención contra cualesquiera personas particulares, que no mostraren in continente títulos, y privilegios legítimos, por donde puedan pertenecerles*” (480) Cfr. Juan de SOLÓRZANO PEREIRA, *disputationem de Indiarum iure tomus primus siue De iusta Indiarum Occidentalium inquisitione acquisitione et retentione tribus libris comprehensam*, D.E.C, Variante del título: *De Indiarum iure*, ed. typographia Domin, Garciae Morras, 1653, 387-400 y *D. Ioannis Matienci ac Peraltae iunioris ... Repetitiones tredecim in varia iurisconsultorum responsa, imperatorum sanctiones et pontificum decreta ...*, ed. Antverpiae apud Martinum Nutium, 1628, 308. También el hasta hace poco inédito de Juan de SOLÓRZANO PEREIRA, *Libro primero de la Recopilación de Cédulas, Cartas, Provisiones y Ordenanzas Reales*, t. I y II [1622], Buenos Aires, Introducción de Ricardo LEVENE, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Argentino, Colección de textos y documentos para la historia del derecho argentino, V, ed. Imprenta de U.B.A., 1949.

⁵⁶³ J. MATIENZO, *Gobierno ...*, 132.

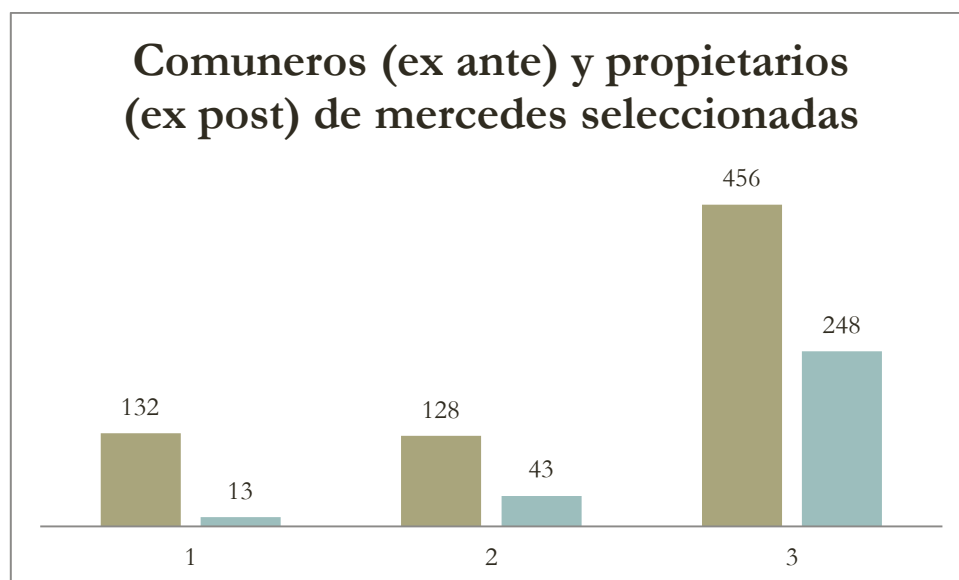
⁵⁶⁴ Por ejemplo, el sociólogo ruralista M. Margulis, refiere que “*la gran mayoría de la tierra en la provincia de La Rioja no cuenta con títulos perfectos. El origen de los derechos de propiedad se remonta en casi todos los casos a la conquista y la colonia y proviene de las mercedes reales*”. En Mario MARGULIS, *Migración y marginalidad en la sociedad argentina*, ed. Paidós, Buenos Aires, 1968, 62.

derecho indiano, podría ser una respuesta cuanto menos incompleta a un problema mal planteado. El planteo erróneo parte de la presuposición lógica de la universalización de conceptos válidos en todo tiempo. En efecto, la concepción de la propiedad renace con la abolición posrevolucionaria del señorío⁵⁶⁵ y el discurso triunfalista burgués que se basará en el individuo y en la concepción relacional hombre-cosa. Como veremos, esta “cosa” no posee una dimensión jurisprudencial unilineal porque el derecho indiano posee una percepción histórica del espacio territorial diversa de aquel francés, no vé la “tierra” como modernamente tendemos a espaciarlo-objetivarlo. Visualiza, aquella, como un conjunto sistémico derivante de un único eje ordenador, por ejemplo, en Solorzano no hay *en* la tierra sino “sierras, campos, pastos, montes” el dominio regio. “*No es digno de menor consideración otro derecho, que compete y está reservado à los Reyes, y Soberanos Señores por razón de la suprema potestad de sus Reinos, y Señoríos, conviene a saber el de las cierras, campos, montes, pastos, ríos, y aguas publicas de todos ellos.*”. Esta comentada cita fundará la jurisprudencia de Audiencias y a la potestad de conceder de los gobernadores, entonces ¿hay en *esa* concesión graciosa bajo forma de merced de tierras un origen de la propiedad *actual*? Dicho de otra manera ¿hay propiedades catastrales riojanas contemporaneas cuyo origen haya sido efectivamente una merced? Efectivamente si. La pretensión de que la merced “fuera” el título originario de la propiedad de la tierra es una afirmación que ha sido convalidada por varios antecedentes históricos, entre ellos el de La Hediondita, donde observamos que, si en el tardío colonial de 1755 la concesión alcanzaba a un titular mercendero, en el año 1967, asciende a treinta ocho titulares propietarios privados⁵⁶⁶.

⁵⁶⁵ Nos referimos en efecto, al decreto del 15 de marzo de 1790 sobre la abolición del régimen señorial en Francia y el *Code Napoleon*, véase, GROSSI, *Propietà*..., 418..

⁵⁶⁶ Al respecto véase los informes de *Latinoconsult*, 3 tomos, citado, el § 14.4.a., y el mapa N° 5 con la nueva mensura de subdivisión de la Merced de La Hediondita en 43 propiedades exclusivas materializando la exclusión del uso común de 128 de comuneros “residentes” en ella, y por último, la Tabla 14 “Ejemplos de mercedes privatizadas por número de comuneros (residentes) y numero de nuevos propietarios”.

Graf. 7 Mercedes seleccionadas por comuneros (ex ante) y nuevos propietarios (ex-post) siglo XX.



Fuente: elaboración propia según datos disponibles, en donde las mercedes de tierras son: 1, Tucucún; 2, La Hediondita y 3, Araupatis o Bañado del Pantano.

Pareciera ser el típico territorio intersticial —entre una situación real de dominio y otra— que se avaluó con la ganadería llanista con el consiguiente incentivo para que un vasallo fronterizo lo solicitara tardíamente en una provincia fronteriza del Tucumán lindante con la capitanía de Chile. Literal y formalmente la merced territorial está en la línea de frontera entre la Capitanía chilena y el Tucumán. En ese sentido, la situación de no-dominio privado previo a la concesión regia otorga a la merced un modo de adquisición fundacional y originario por cuanto no existe la posibilidad de la existencia de un adquiriente anterior por cualquiera naturaleza. Hay, si se quiere, una situación fundante en este proceso de ocupación del *hinterland* agrario: quien recibe una merced en supone que no hubo ni habrá otro dueño con la máxima facultad potestativa que llamamos para-propietaria. ¿Pero qué acontece con los pueblos originarios asentados en ese territorio? Leemos a Fradkin y Garavaglia que:

“Esta reorganización del territorio original realizada por los empresarios europeos muy pocas veces tuvo en cuenta las necesidades indígenas. En el caso santiagueño, al dificultar (o coartar totalmente) el acceso de los indios a los recursos ‘silvestres’ o con alto grado de comensalidad (estadio intermediario entre silvestre y doméstico) – algarrobales, chañares, recolección de miel y otros productos, además de pesquerías, caza, etc.– que les eran indispensables como complemento obligado de sus sementeras, siempre dependientes de precipitaciones escasas, aceleraron la crisis alimentaria indígena. Existió aquí una ruptura o al menos una fractura grave del patrón original de subsistencia”⁵⁶⁷.

Se les concedían tierras a cambio de contraprestaciones públicas (como la *encomendatio* o como en sostén de *castellano* en el medioevo europeo), ellas eran “los pastos, montes, cazaderas” a un mercendero que a su vez era sujeto ajeno al equilibrio ecológico andino. Se le concede lo que por tradición pide. Tal como viéramos en el análisis exegético realizado, el peticionante (guerrero contra los indios chaqueños) de La Hediondita, pide una merced de tierras realengas incluyendo sus “pastos, montes, usos, costumbres, derechos y servidumbres”. Y allí creemos adentrarnos en lo que hemos calificado como versatilidad y elasticidad del título de merced de tierras, dado que Guzmán podía desdoblar el *dominio* sobre la *encomendatio* de algún paraje de indios y sobre las tierras siempre que respetase los cuerpos legislativos que se habían promulgado para la región que taxativamente prohibían la titularidad de las tierras a favor de su encomendero. Arribamos pues al siglo XVIII, donde la mayor parte de la superficie de la jurisdicción riojana ya fue ocupada *legalmente* por concesiones de merced, inclusive de tierras de población indígena encomendada vallista. No obstante queden algunos espacios sin conceder, especialmente en los Llanos riojanos. La población llanista, antes indígena reducida y ahora “agregados” y mestizos, comienza a ocupar por derecho propio tierras disponibles “vacas” y un nuevo ciclo de guerras con el Chaco le brindará la oportunidad de apropiárselas cualesquiera haya sido grado de aporte real o fictio, o, inclusive, haberle comprado o intercambiado a uno que lo realizó o creyó realizar el

⁵⁶⁷ Raúl FRADKIN y Juan GARAVAGLIA, *La Argentina colonial: el Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX* Buenos Aires, ed. Siglo Veintiuno Editores-Fundación OSDE, 2009 p. 276.

aporte de costas de guerra de fronteras y pasar a ser, de ahí en el derecho patrio, un “derechoso”.

§ 17.1. UN DERIVADO DEL DERECHO INDIANO LLAMADO “DERECHOS Y ACCIONES”

Existe en la “cultura” rural o de campaña riojana el calificativo “derechoso” que se utiliza para referenciar a aquella persona que es titular, por compra o herencia o trueque de supuestos derechos de tierras otrora concedidas originariamente en merced de tierras. Es un derecho quien posee “derechos y acciones” y a fines del siglo XIX y comienzos del XX esta idea jurídico-política (ius-política) se constituyó en una eficaz construcción intersubjetiva que incluía tanto una visión de autoctonía comunera del mundo rural frente al urbano como un sentido de pertenencia a ese terruño. Esta noción de “derecho y acción” se construyó socialmente durante el periodo colonial y se sostuvo, veremos, al margen de la normativa lega moderna y paradójicamente con una inusitada vitalidad, en el Tucumán surandino y de peculiar presencia en la jurisdicción en estudio.

Múltiples fuentes nos advierten de la presencia de la transferencia de bienes entre privados invocando derechos y acciones, desde el siglo XVII hasta adentrado el siglo XX⁵⁶⁸. La más antigua documentada data de 1601, en la jurisdicción de Córdoba, donde dos vecinos encomenderos se presentaron ante un escribano para dejar asentado un trueque. Por el mismo instrumento, Alonso de Cámara entregaba una chacra a tres

⁵⁶⁸ A modo de ejemplo y solo para el año 1913 se registraron en la Dirección General de la Propiedad del estado provincial de La Rioja (en adelante ADGP) las siguientes traslaciones de *derechos y acciones*: ADGP, 1913, L.1, n° 1 al 192, folios 1-139, Esc. 45: “Vicente Morán a Jose Antolin Caceres, Depto. Rivadavia, lindantes sobre Merced de Olpas”; L.1, n° 1 al 192, folios 1-139, Esc. 159: De sucesión de Justo Rufino Zárate a favor de José E. Paz, “todas las acciones y derechos pro.indivisos que por heredad de los antecesores correspondiente en el campo ‘Merced de Olpas’ en Departamento General Ocampo”; 1913, L1, n° 1 al 192, Esc. 158, f. 69, “protocolización escritura de Merced: el Gobierno de la Provincia a favor de Doña Maria Anastasia Ávila”, Ibíden Esc. 77, “Compraventa: los cónyuges Jesús Nieto y Ramona Barrionuevo a favor de Vicente Gregorio de una represa y derecho y acción del campo común en la merced denominada ‘Chañar’; 1913, L.2. 193 al 927, Esc. 20, f. 25 y 26, “Campo Indiviso de Tanín”, Ibíden, Esc. 408, f. 487 a 488v., Protocolización escritura de merced: el Excmo. Gobierno de La Rioja a favor de Jenuario Molina”, etc..

leguas río arriba de la misma ciudad de Córdoba. A cambio de ello Juan de Burgos, como administrador de los bienes de su hijo Diego Celis de Quiroga, cedía el *derecho y acción* que tenían sus encomendados sobre las tierras de,

“Guanosacate como encomendero de los indios de su encomienda y el derecho y acción que los dichos indios tienen e pueden tener a las dichas tierras en cualquier manera”⁵⁶⁹

Este intercambio no equivalente —a ojos modernos— suscitado entre los derechos de merced de una chacra por hipotéticos derechos de tierras de una merced de encomienda, la que, a su vez, fuera certificada ante escribano público, sería la fuente, durante los siglos venideros, de todo tipo de *litis* sobre tierras, principalmente si éstas no iban acompañadas de la posesión efectiva y si tampoco se precisaba la naturaleza de las “cosas” en cuestión —diríamos hoy—. Comienzan entonces a manifestarse problemas de transmisión⁵⁷⁰ de derechos mercenderos sobre tierras, porque aquellas mercedes de indios encomendados expresaban la intrínseca caducidad de las “vidas” concedidas. En la merced de tierras, uno podía “trocar”, “enajenar” para “por siempre jamás no ser desposeído”. Los herederos de los titulares iniciales se llamaban *derechosos* hasta tanto se verificara la porción de derechos sobre la universalidad de la herencia. Estos derechos, cuyo origen podía ser precisado, por ejemplo, por consanguinidad, adolecían —según la modernidad— de “vicios” originarios a causa de la imprecisión de la cosa heredada y ante la ausencia de repartición legal mediante instrumento público entre el coheredero previa a la transmisión. Esta repartición era

⁵⁶⁹ AHCo., Registro 1, protocolo de 26/2/1601, . en Josefina Piana de Cuestas, “De encomiendas....”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 'Dr. E. Ravignani'*,

⁵⁷⁰ Mario MARGULIS, *Migración... op cit.* refiere que “.(...). Las tierras se fueron repartiendo por herencia, y actualmente un enorme porcentaje de las mismas es poseído en condominio por los descendientes de los primitivos propietarios». «Las enormes extensiones de tierra sin riesgo pertenecen en condominio a muchas personas; a veces todo un pueblo o gran parte de sus habitantes son propietarios de grandes extensiones. Cualquiera de los condominios tiene derecho a cercar una parte de la tierra comun y explotarla. En ese caso se le denomina “derechoso”. Pero el sistema no alienta las inversiones por cuanto existe el peligro de tener que compartir los beneficios de la inversión con los otros condóminos. Como la mayor parte de las tierras en condominio son baldías, secas y sin vegetación, hasta ahora no ha habido mucho incentivo para modificar el régimen de tierras”, C. LANZILOTTO, “Las Mercedes Indivisas ... , 7.

exquisitamente privada y legitimada en base a las costumbres locales de transmisión y en una población mayoritariamente rural y analfabeta.

A un siglo de transmisiones (mediados del s. XVII), los “derechos” provenían de cualquier naturaleza, hereditaria o compra, y las “acciones” referidas a actos o hechos que significaran, *per se* o por mandato de *actiōne(m)* : 1) el resultado o efecto jurídico del hacer mejoras físicas y materiales *in re* (en la cosa, en este caso la tierra) del tipo “bañados”, rancherías, corrales, cercos, acequias, “líneas”, etcétera, o la misma “acción” de, por ejemplo, *vaquear*, que fueron plausibles de ser transmitidos⁵⁷¹; 2) era una redundancia al ser parte esencial de toda relación jurídica persona-cosa-acción, donde esto último es el medio o instrumento para reclamar el derecho⁵⁷²; 3) era una acción “mixta”, es decir real y personal, en suma “el Derecho de exigir alguna cosa y el modo”⁵⁷³. Asimismo, eran plausibles de ser transmitidos a través de instrumentos privados, regulados consuetudinariamente, llegando a convivir con los procesos de codificación del siglo XIX hasta entrar en colisión con el carácter exclusivo de la

⁵⁷¹ Un ejemplo de “acción” de vaquear como objeto real de transacción fue la venta de la merced de Tres Arroyos, otorgada por el gobernador Hernando Arias de Saavedra a Alonso Fernández Montiel, que donó a Tomas Gayoso. Cuando éste le vende a Antonio Vera Mújica, los Fernández Montiel no solo habían establecido mejoras en la merced sino que además habían introducido 2000 cabezas de ganado. Se hace explícito en la escritura de venta de Gayoso a Vera Mújica, que la transacción de las tierras incluye “la propiedad, sus ganados y la acción de vaquear”, . AGNA, Sala IX, Archivo del cabildo de Buenos Aires, año 1722, f. 264, recogida por Mariana CANEDO, “Propiedades, propietarios y ocupantes. La tierra y la familia en la campaña de Buenos Aires”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’*, núm. 7, 3º Serie – 1º semestre de 1993, 7-28. Sobre esta experiencia judicial, y los “esfuerzos particulares dedicados a la construcción de la probanza en su derecho” ya sea por poseer la posesión “quieta y real de las tierras y ganados cimarrones” y el amojonamiento de acciones de vaqueo, véase a Dario G. BARRIERA, “Herederos: esfuerzos de justificación, presentación de sí ante la justicia y criterios de legitimación de ‘lo justo’, Santa Fe, siglo XVII”, en Avances del CESOR (Centro de Estudios Regionales) año II, núm 2, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, 1999, pp 23-40.

⁵⁷² Gayo nos expresa que “*omne autem jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones*” (D.1.5.1.) es decir —interpreta Luis Moisset De Espanés— que todo el derecho se refiere a las personas, las cosas y las ‘acciones’ vocablo con el que se hace referencia a las acciones procesales, es decir, no a los hechos que dan nacimiento a esa relación, sino al medio o instrumento con que se cuenta para reclamar el cumplimiento de los derechos”, L. MOISSET DE ESPANÉS, “La legislación sobre hechos y actos jurídicos: evolución histórica”, en Cuadernos de Historia, año 12, núm. 12, Córdoba, 15-31.

⁵⁷³ Joaquín ESCRICHE, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, Paris, ed. Librería de Garnier Hermanos-Typ. Pillet et Domuulin, 48 [p.1787].

propiedad establecido por la constitución y la codificación civil republicana. En el siglo pasado, la jurisprudencia riojana sancionó la incapacidad de dominio pleno de los “derechos y acciones” catalogándolos de derechos personales y no reales.

“los títulos que se refieren a derechos y acciones, sin determinación de su naturaleza, y cesión de los derechos hereditarios de tales derechos y acciones, no son aptos para transmitir el dominio de un inmueble ya que a través de ellos no se transmiten derechos reales sino meramente personales. El art. 2.762 del Código Civil establece categóricamente que no son reivindicables los bienes que no sean cosas”⁵⁷⁴,

En los estrados judiciales jurisdiccionales no hubo una definición de fondo sobre el carácter y entidad de la merced: en términos del *volks* savignano el pueblo provinciano acordaba una entidad que el código federal no contemplaba. Pero para usar la expresión de Barrera, ya había pasado más de un siglo de “construcción de ‘lo justo’ en la probanza en su derecho”. Y el derecho provenía de una espacialización común llamada merced. “Merced” fue una dimensión espacial, aunque el régimen de regularización a través de mensuras judiciales contribuyó a delimitar la “cosa” en cuestión. Y, de paso, fortalecer la pertenencia de los comuneros a ese espacio geográfico.

En vista a cómo se sitúa la merced ante el Código, hay dos discusiones doctrinarias. La primera es si el título es un derecho real y segunda sobre si es requerida la transmisión acorde a los mecanismos que prevé el código. Sobre la primera es indudable que si la afirmación es positiva —es decir que el título de merced regia es un derecho real— éste es uno de aquellos no incluidos en el artículo 2503 del Código Civil Argentino, *corpus* que, por obvias razones establece la codificación del derecho. Sobre la segunda, los mecanismos de transmisión poseen una vitalidad de formas y símbolos íntimamente emparentados con sucesos históricos a los que nos referiremos en parte, en el parágrafo 25 en donde situamos a las transmisiones de situaciones reales más próximas a la cultura registral y consuetudinaria que a la del código.

⁵⁷⁴ del fallo dictado por la ‘Cámara Segunda en lo Civil y Comercial’ de La Rioja que ha tenido oportunidad de estudiar la cuestión en la causa en la Merced de Mascasín «Carrizo de Gez Elvira Rosa c/ Manuel Filomeno Gonzalez-Reivindicación», Cfr. *Jurisprudencia Riojana*, ed. Del Norte SRL, núm.1, 1969, 15-17.

Más atentas las circunstancias en que se desarrolló la vigencia de los aludidos derechos y acciones, lo importante sería considerar la validez de las sucesivas transmisiones hechas por los sucesores universales del titular de la merced quienes, según la práctica establecida, no se limitaron a ceder la cuota indivisa que les correspondería en la universalidad jurídica que constituye la herencia, sino un derecho referido a un bien no determinado; un derecho que luego es objeto de sucesivas transmisiones, resultando así los famosos derechos y acciones. Tales derechos y acciones, nos adelanta el abogado del foro local y ex juez, Jorge Bóveda⁵⁷⁵, constituirían a lo sumo cesiones de derechos hereditarios nacidos con un vicio originario puesto que nunca podría asegurarse, considerando las sucesivas transmisiones a título hereditario, que el bien sobre el cual se trata de transmitir los derechos y acciones, sería adjudicado al transmitente de los referidos derechos y acciones.

Para dar cuenta de las magnitudes, ya hemos hablado de las superficies informando de más tres millones de hectáreas solo para los municipios de los Llanos. Pero, ¿quiénes eran los sujetos titulares o derechosos?, ¿los comuneros eran derechosos?

El censo de población que habitaban las “casas” del territorio riojano del segundo censo nacional (10 de mayo de 1895) nos permite reconstruir el escenario rural y relativizar la vida citadina. La población de la provincia de La Rioja había aumentado en forma considerable desde el último censo de 1869 (un crecimiento de más del 40%), pero su crecimiento no había ocurrido en sus dos ciudades principales. Contaba con dos centros urbanos de similar importancia: la Capital con 6.625 habitantes y Chilecito con 5.410. Junto a los demás centros “urbanos”, llegaba a 14.000 habitantes lo que redonda en 55.496 habitantes en el campo o más precisamente agrupadas en pequeñas unidades productivas (parajes, chacras, estancias, pueblecillos, “puestos”) que se articulaban en base economía doméstica (caprina y bovina) y comercial (carbón, cueros, vides, aceitunas, leña) cuyas formas de participación mercantil han sido descriptas como oasis y travesías⁵⁷⁶. Pero el interrogante por responder es: ¿cuál era la situación de las

⁵⁷⁵ Jorge BÓVEDA, *Estudios sobre el proceso civil riojano*, La Rioja, ed. Pandemia, 2000, p 183.

⁵⁷⁶ Hacemos referencia a la tesis doctoral de Gabriela Olivera (2000), *Por travesías y oasis. Mercados, producción agraria y actores sociales de La Rioja (Los Llanos y Arauco, 1900-1960)*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.

unidades domésticas y consuntivas o comerciales con respecto a la tenencia de la tierra?, ¿se trataba de arrendatarios? No, no significativamente. El nuevo contexto de crecimiento demográfico y expansión del sector exportador no dio lugar en La Rioja a una valoración de la tierra que trajo aparejada la formalización de tenencias precaria en arrendamientos⁵⁷⁷ ¿Eran ocupantes precarios? El “ocupante” como sinónimo de intruso no lo era, ni simbólico ni jurídicamente. Menos, propietarios, tal como vimos anteriormente. Eran “derechosos” y concierne a uno de los aspectos menos conocidos del mundo rural riojano del siglo XX. Este derecho le provenía por descender o ser familiar de un mercedero o titular de merced o por creer descender o simplemente por haberse casado con una derechoa que lo heredó y si, este no servía, se invocaba la posesión inmemorial de la cosa (bañado, represa, acequia) y, por último, se adquiría, por compra, un derecho y acción de algún derechoso que pudiese argumentar una hijuela o folio protocolizado por escribano. Si bien no disponemos de un estudio seriado de operaciones de transferencia de tierras protocolizadas para inicios del siglo XX, es de suponer un ingreso masivo a dicha condición sobre todo por la relativa mejoría de los precios de los productos rurales ante la llegada del ferrocarril y la inauguración del primer cablecarril sudamericano que transportaba mineral del cerro Famatina operado por *The Famatina Development Limited*. Para ser más precisos: no hay transferencia de tierras sino de “derechos y acciones” sobre éstas, protocolizados en folios de registros de escribanos o notarios.

Desde el derecho público, surge con más evidencia la preocupación sobre el manejo de la tierra pública (o fiscal) sin que se desprenda que la estructura de los grandes propietarios se ve afectada por acciones recaudatorias. Es significativo, en ese sentido, cómo una ley del 11 de enero de 1905 prohibió al ejecutivo provincial “disponer de la tierra (vaca o fiscal) bajo el título de merced o concesión graciosa”⁵⁷⁸.

⁵⁷⁷ Por mencionar dos trabajos conclusivos en ese sentido de describir el proceso de precario a arrendatarios y el pasaje de habitante rural a peón rural e inquilinos, cfr. en J. BORDE y M. GÓNGORA, *Evolución...* 29 y ss; y Sonia TELL, *Córdoba rural, una sociedad campesina (1750-1850)*, Ed Prometeo, Buenos Aires, 2008, 355 y ss.

⁵⁷⁸ Véase *Leyes y Decretos, 1890-1905*, 391

Un informe del Ministro de Obras Públicas, dirigido al gobierno nacional de 1923 es elocuente:

“La tierra en La Rioja no es ni de dominio particular, ni del Estado, ni está siquiera en el comercio; es una tierra que se posee en comunidad a título precario, o mejor consuetudinario, cuando no sin título alguno”⁵⁷⁹.

El pesimismo de este funcionario local, ya da cuenta de tres décadas de iniciativas legislativas y autoritarias tendientes a expropiar y vender en subasta porque habían fracasado debido a la resistencia de los ocupantes-comuneros a pagar por tener lo que ya poseían, y tampoco existían “compañías” (capitalistas rentistas) tendientes a pagarlas⁵⁸⁰.

Por otra parte habían consolidado su situación ante el fisco provincial. Por ejemplo los comuneros de San Isidro. En 1927 figuraban inscriptos en el padrón para el pago del impuesto territorial en la “Receptoría de Chepes”, hoy Municipio de Rosario Vera Peñaloza, Derechos y Acciones de la Merced de San Isidro de la Sierra de las Minas: 264 derechos y acciones, 14 medios derechos y acciones, 6 tercios de derechos y acciones, 2 cuartos de derechos y acciones, 11 séptimos de derechos y acciones y 9 novenos de derechos y acciones. La consulta de los *Libros de Registros de Contribuyentes* (Hoy Dirección General de Rentas Provinciales) muchas veces ha confundido a los historiadores al asociar el pago impositivo a su condición de propietario exclusivo, tal es el caso de Ariel de la Fuente en su libro *Children of Facundo*., quien afirma que la *merced de tierras de Tama*, en 1926, alojaba a 75 propietarios⁵⁸¹ cuando en realidad eran “accionantes” que contribuían impositivamente

⁵⁷⁹ Enrique ZULETTA, Informe sobre situación de La Rioja, 1923, (Mimeo),6.

⁵⁸⁰ Ya hemos estudiado el proceso llamado de “colonización” de predios fiscales en A. MERCADO REYNOSO “Analisi del capitalismo agricolo sulla base de la produzione aziendale delle aziende prediale della Colonia ortifruticola ‘Las Parcelas’”, 1989, Università degli Studi di Cagliari (tesina de licenciatura). No obstante, queda aún por estudiar los procesos de inmigración externa europea planeadas para insertarse en las mercedes: por ejemplo el de la empresa “Altos estudios colonizadores Fernando Sanjurjo” quien, este último, junto con el rentista Juan Cafferata diseñan el loteo y venta a extranjeros de la Merced de Aguas Calientes en 1920. Cfr. Manuscrito de Fernando SANJURJO, “La Colonia ‘Aguas Calientes’”(Mimeo) 1921, (Archivo Histórico casa de Joaquín V Gonzales).

⁵⁸¹ A DE LA FUENTE, *Los hijos* ..., 96

al recaudador delegado. Por razones de evasión y subregistro no todos los contribuyentes son comuneros ni todos los comuneros pagaban impuestos. Pudo haber comuneros, sobre todos los ganaderos, que no contribuían al fisco simplemente porque no tenían que revalidar ni fortalecer su título por público y notorio mientras que algunos contribuyentes lo hacían, justamente para fortalecer su posesión comunal. En el siglo anterior Tama sufrió la más cruenta represalia de las tropas federales y por ley del 12 de noviembre de 1869 se declara cabecera del creado Departamento (Municipio) de Vélez Sarsfield, es sede parroquial y se la denomina oficialmente Villa del Rosario de Tama. En la postrimerías de la ley de reposición de títulos de 1888, los vecinos “comuneros de la Merced de Tama don Indalecio Mendoza, don José Ignacio Vera, don Anastasio Bazán, don Plácido Romero, don Tristán Bazan y don Benigno de la Vega” solicitan que “Habiéndose extraviado durante las guerras civiles” los títulos y mensuras de 1786 y de 1817, piden al juez que les dé una “extensión de tres leguas de norte a sud por cinco de este a oeste”. El 3 de diciembre de 1887 el juez resolvió declarar a los actantes “en propiedad y posesión” dentro de los límites mensurados y ordenó la protocolización de las actuaciones ante el escribano Miguel Jaramillo⁵⁸².

La *inteligentzia* local más cosmopolita (v.g. Joaquín V. González, Pedro Bazán, Guillermo Iribarren) ya había pensado en la inviabilidad de aplicación “lisa y llana” del Código Civil. En su búsqueda, en clave explicativa de los “derechos y acciones”, la entendían como condominio de una “comunidad indivisa”, aunque no tardarán en advertir que este resabio de derecho indiano no tenía la determinación de la parte alícuota como sí lo tiene la propiedad común indivisa del código civil argentino. Pero conviene que leamos en extenso a Pedro Bazán (1926):

“Las extensas mercedes indivisas, se han transformado con el tiempo en enormes condominios, sin que nadie sepa quién es el dueño, el intruso; porque ora están en posesión de derechos legalmente constituidos por compra o herencia (derechos y acciones), ora de usurpados por los que no lo tienen (...) y como la mayor parte de los establecimientos ganaderos son de poca monta o de escaso valor, ubicuos en campos indivisos, sin mensuras ni alambrados ni cercos que lo limiten; el propietario

⁵⁸² AJLR, M-407, “Indalecio Mendoza y otros”, 1887.

prefiere no medirlos a fin de que el pastaje de sus haciendas se verifique en el campo del vecino (...). Propietarios sin títulos y esperando la prescripción treintanario, hay millares, de modo que prefieren hasta que esto se cumpla, obstaculizar toda operación de mensura, o hacer una campaña contra las operaciones de catastro, so pretexto que de que ellas son un negotium, una mediación combinada de los gobiernos con los empresarios, para arrebatárles las tierras a sus dueños”⁵⁸³

Así, dicho en el primer cuarto de siglo XX, sin el ánimo de desacreditar lo manifestado por Bazán por su oxímoron de “propietarios sin títulos”, “tierras sin dueños” y “miles de propietarios”, también está manifestando la extraordinaria, al usar palabras de Iribarren “semillero de discordias, demandas y pleitos” que los comuneros desatan ante el intento de reapropiación privada. Dice que el propietario prefiere no medirlos y acá es significativo cómo no se advierte que la resistencia a los procesos de mensuración iba acompañada de muestras de rebeldía de los comuneros ante lo que consideraban una apropiación privada que los dejaba afuera. La “oposición” a la mensura siempre iba acompañada, en sus fundamentos, en “antiguos títulos” concedidos y heredados o comprados y que recaían, indudablemente, en las mercedes de tierras concedidas por el rey en el marco del sistema colonial. La oposición no era más que el seguimiento de la costumbre de practicar, en el derecho indiano peruano, del “contradigo” o “contraposición” que manifestaba el vecino afectado por la concesión de un derecho que vulnera su posesión. La defensa de comuneros ricos por parte de abogados atrofiaba, por decirlo de alguna manera, la argumentación indiana de que el orden legítimo era el orden anterior o *status quo*. Tal como lo manifiesta Jame Scott, la percepción de un orden social injusto no provenía de un estándar abstracto de justicia individualista posesiva sino de uno comunal y concreto que en este caso tampoco era sinónimo de igualitario. Estos planteos comuneros encarrilados en formalismos procesales y litigiosos lo hacían con miras de reclamar que “no se invadieran las reservas de subsistencia de gente pobre”⁵⁸⁴ o comuneros pobres representadas por

⁵⁸³ Pedro BAZÁN, *El fomento económico de La Rioja*, Buenos Aires, ed. Prats, 1926 21 y ss.

⁵⁸⁴ James C. SCOTT. *Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Haven, Yale University Press, 1976, 52 y ss.

comuneros ricos⁵⁸⁵. Como veremos más adelante, este proceso de comunitarización que podríamos catalogar de “comunal no igualitario” se ha desarrollado en los siglos XVIII y XIX en La Rioja, amparado en una visión tomista de la justicia (o una visión mediaevalista del derecho que Santo Tomás de Aquino⁵⁸⁶ hace suya) y que puede servirnos para entender mejor el mundo de las ideas en la que se movieron los comunitaristas defensores del “*país inalambrado*” como nos refirió Felix Luna⁵⁸⁷ a La Rioja de los caudillos. Siguiendo con este autor es plausible de comprender mejor el periodo de “religión o muerte” abandonando el estereotipo clásico de “conservadurismo” para tipificar la acción de las rebeliones montoneras las cuales, para 1869 defendían no una “vacancia de ordenamiento” sino su propio ordenamiento

⁵⁸⁵ Vid. Por ej., en 1907, también en la Merced de Aguas Calientes, ya denominada como *Villa Mazán*, los comuneros más pudientes deciden unificar la personería en uno solo de ellos, el Sr. Pedro de La Fuente, para que “deslinde y amojone la merced de Mazán”(.) “para que proceda (a tratar) la línea divisoria (...) de la Merced de Mazán con la Estancia del Carrizal”(.)”Para que cobre y persiba el pago de los terrenos de comunidad ocupados por el trazado del Ferrocarril de Chumbicha a Tinogasta y Andalgalá” (...)”Para que proceda al arrendamiento de las canteras que se hallan dentro de la comunidad”(.) “Para pedir el lanzamientos de los ocupantes intrusos”, en AJLR, “Protocolo de Escrib.”; Villa Mazán, Año, 1907, f. 1640.

⁵⁸⁶ Una interesante reflexión en ese sentido se da en Manuel RODRIGUEZ PUERTO, *La modernidad discutida. Iurisprudencia frente al iusnaturalismo en el siglo XVI*, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1985 63 y ss.; y que nos brinda claridad en los que se denomina escuela del derecho realista (de *res*, cosa). La base de la realidad jurídica estaría formada por la relaciones sociales que forman la vida humana y de las cuales surgen las “cosas justas” que son objeto de virtud de la justicia. De todos los teólogos, quizás fue Santo Tomas de Aquino quien comprendió el proceder prudencial de los juristas “Respondeo dicendum quod iustitiae proprium es inter alias viertutes ut ordinet hominem in his quae sunt alternum” [Lo propio de la justicia es ordenar al hombre en las cosas relativas al otro].

⁵⁸⁷ F. LUNA, *Los caudillos*, Buenos Aires, ed. Planeta, 1993, “(...) el conservadurismo de los caudillos merece aclararse. (...) Pretende salvar ciertos valores el conservadurismo de los caudillos bárbaros era otra cosa. No había ninguna estructura que sostener, en sus tiempos. Había, en todo caso, un vago ordenamiento casi consuetudinario —las grandes leyes organizadoras empiezan a partir de 1869, derrotado ya Felipe Varela, el último montonero— y un débil mecanismo de poderes locales. Los bárbaros tendían, entonces, a salvar sólo ciertas modalidades populares de conducta, ciertas formas patriarcales de gobierno: en definitiva una no estructura. El ordenamiento hispánico colonial era, bueno o malo, un ordenamiento; la emancipación y los hechos revolucionarios lo dejaron sin efecto: era esta vacancia de ordenamientos lo que defendían los caudillos. Frente a esta vacancia, frente a este desierto legal tan repugnante a los hombres del orden como el desierto geográfico que aterraba a Alberdi, la gente del liberalismo aparecía sustancialmente renovadora y progresista, al luchar por la imposición de otro ordenamiento o, mejor dicho, de *un* ordenamiento.”, 23.

comunero. En consecuencia, en las reformas iniciadas en la ley 1888 de reposición de títulos impulsaran una priorización de identificar a los pretendientes dueños sobre todo enmarcándoles en una mensura topográfica, prorrogando para mas adelante la discusión sobre el carácter y el orden prelativo de quienes tienen más que otros. Contemporáneamente y como sugiere Sonia Tell⁵⁸⁸ para el norte de Córdoba, habrá un “fuerte movimiento interno de derechos” que no habría llevado necesariamente a la desarticulación de la tenencia comunal sino que con la figura de “derechos y acciones” ahora protocolizada en folios de escribanos (instrumentos privados protocolizados en escribanías públicas) podía ser compatible con la continuidad del uso colectivo de tierras, aguas y pastos⁵⁸⁹.

Los derechos y acciones, como dijimos, adoptaron varias estrategias para hacer frente a la fuerte individualización del uso de tierras bajo forma de parcelas y podría inferirse que ha partir del establecimiento de la doctrina y jurisprudencia local que declaró a los derechos y acciones como derechos personales, ubicó a estos derechos situándolo afuera de la cosa, y, pasó más a dar credibilidad a la legitimidad de la posesión que ha ser parte del dominio directo. Siguió y se sigue usando con una alta dosis de auto regulación pactista entre “Productores (agrícolas) Sin Título”. Concluye un informe del BID de 1998 sobre La Rioja en el capítulo “Conflictos derivados de la

⁵⁸⁸ “(...) estaba en marcha un lento proceso de diferenciación de tipos o especies de derechos sobre tierras y aguas; una de sus orientaciones se dirigía a la individualización, privatización y mercantilización de esos derechos, pero en coexistencia con otros usos y prácticas de carácter colectivo. Lo notable es que, al menos hasta mediados del siglo XIX, esta diferenciación no ocurrió como resultado de imposición de un nuevo marco legal por parte de los gobiernos provinciales, sino de la propia dinámica de relaciones dentro de las comunidades, de las prácticas de tenencia, uso y distribución que estas desarrollaron y de la forma en que sus miembros se reapropiaron de los marcos legales vigentes, cuando no se adelantaron a ellos. También notamos un uso novedoso del vocabulario desde los últimos años de la década de 1810, principalmente el empleo frecuente de los términos “derechos” y “acciones” para designar la parte correspondiente a cada individuo sobre los recursos de usufructo común”, cifr. Sonia TELL, “Campos en común, campos contenidos: Significados y apropiaciones de la comunidad en Córdoba a fines del siglo XIX”, en *Revista de ciencias sociales*, segunda época, núm. 27, otoño de 2015, pp. 67-86.

⁵⁸⁹ Nos referimos a 1) los Instrumentos privados protocolizados en libros de escribanías, 2) Instrumentos privados sin protocolizar, 3) Instrumentos privados de cesión de “derechos y acciones” y de derechos posesorios, y 4) Instrumentos privados de cesión de derechos hereditarios. No nos olvidemos del “apretón de manos” descrito por el comunero Andres Cejas de pueblo de Jagüe (Comunicación personal, 2013) donde se intercambian ganado vacuno por tierras ¿hay un instrumento privado?

titularidad imperfecta de las tierras” que “es importante destacar que no obstante la gran magnitud de las situaciones de titularidad anómala de los predios rurales en las áreas bajo análisis y que supera con creces a las de las titulaciones perfectas de dominio en la zona, no se han presentado un número representativo de conflictos jurídicos derivados de esta situación.”⁵⁹⁰ El siglo XX se terminaba y los documentos que acreditan los tenedores de tierra en este informe multidisciplinario de agrimensores, abogados, agrónomos e informáticos catastrales siguen escapándose al Code y a los informes normalizadores de catastros.

§ 17.2. DE LEY AGRARIA, IURE PRECARIO A IURE DOMINI VEL QUASI (DEL 1400 AL 1600).

Como vimos, la cultura jurídica indiana fue influenciada por la comunitarización andina prehispánica y propiciada por el virrey Toledo (y la cultura católica de los “justos”). No obstante, la guerra de colonización reintrodujo la idea de propiedades romanista que acompañaba al despojo o desposesión del vencido, tradición reintroducida tanto en la reconquista peninsular sobre los moros como lo señaló López de Coca Castañer⁵⁹¹ como en las guerras calchaquies contra los indígenas tucumanos como afirmó el militar e historiador argentino Montes⁵⁹². En la literatura jurídica local, nos dice Escriche que *lex agraria*, entre los romanos, se llamaba a la que ordenaba el repartimiento entre ciudadanos “de tierras conquistadas a los enemigos”⁵⁹³. La merced de tierra de la “reconquista” ibérica (y, valga decirlo, europea) irá emparentada con esta

⁵⁹⁰ E. GALERA, H. HERRERA, L. CIPPITELLI, M. ALTAMIRANO y M. ARGERICH, *Programa de Titularización de Tierras, Perfil 1, Provincia de La Rioja*, Mimeo, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de La Nación (Argentina). Unidad Multisectorial de Preinversión, Buenos Aires, Mayo de 1998, p. 63 y 64 [198].

⁵⁹¹ José LÓPEZ de COCA CASTAÑER, “Tenencia de fortalezas...”, 939 y ss.

⁵⁹² A. MONTES, “El gran alzamiento..”, 142.

⁵⁹³ J. ESCRICHE, *Diccionario razonado...*, 1220 [p.1787].

visión militar. Los *milites* u hombres de servicios de armas a caballo comenzaron a ser recompensados mediante la concesión *beneficial* de tierras⁵⁹⁴, siendo esto, por cierto, muy diferente al pago en metálico reservado a los mercenarios. Estos beneficios territoriales eran, diríamos, un resultado de una “acción” de pago. Su disfrute no fue ni siquiera vitalicio por cuanto eran cesiones de tierra *iure precario*⁵⁹⁵. En cuanto tierra de frontera, los sesionados recibían un área territorial del cual extraían para sí los tributos, en carácter de tenencia temporal y con legitimidad del Rey. Sánchez Albornoz, por ejemplo, sitúa —sin ser tan explícito— a estos *typus*, “en un paralelo con el sistema de pagas del Al-Andalus implementado para recompensar a los nietos de los sirios balch y tropas mercenarias”. El disfrute por parte de los “potentes” de estas mercedes, sin embargo, dependía de la perduración del vínculo que lo unía al príncipe, y eran “precarias” carta-signo por su condición de revocables. Suficientes textos de archivo tucumano nos advierten que, junto con la consolidación del sistema colonial, se erige el privilegio de la cesión “por siempre jamás”, es decir irrevocable. La *missio in possessionem* componía una miscelánea tanto el acto ritual del corte de ramas, bebida de aguas y tirada de piedras con una no menos importante enunciación, por escrito, del *iure domine vel quasi*, en la compulsa de todos los títulos de mercedes riojanas del siglo XVII.

En fin, el origen Al andaluz que refiere Sánchez Albornoz nos aleja, sin quererlo de la peculiaridad indiana, pero, sin proponérselo, nos introduce de lleno al tema de la personalidad/territorialidad/particularidad del derecho indiano de las mercedes de tierras tan común en la crítica renacentista del derecho medieval. En otras palabras, no hubo un dueño en el sentido moderno, pero sí hubo un derecho sobre la cosa terrea que recaía en

⁵⁹⁴ Sin duda, la experiencia jurídica más importante emprendida por Alfonso X fue la repoblación del antiguo reino de Sevilla, que permitió consolidar las conquistas de Fernando III. Nada más rendirse la ciudad hispalense, se procedió al reparto de las casas de su casco urbano y de las tierras de alrededor entre los soldados de las huestes reales y nobiliarias, así como entre gentes procedentes de todos los rincones de la Corona de Castilla. Este modelo se ha llamado también como “repoblación”, Véase el manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, *Repartimiento de la ciudad de Sevilla y sus términos, echo Por el muy alto y poderoso Rey de Castilla Don Alonso el dézimo, Emperador de Alemania í XV...*

⁵⁹⁵ C. SANCHEZ-ALBORNOS, *España...*, V.2,56.

una persona y en la cual comportaba una serie de obligaciones al príncipe, siendo, su derecho, el más importante mas no el único, por lo quedará abierta la puerta al dominio dividido entre él y los otros usufructuarios.

Tenemos entonces a un sujeto en la máxima instancia potestativa sobre una cosa térrea, cuya cristalización, en términos documentales, significaba que la posesión del bien de raíz se plasmaba en tres instrumentos: el título de merced, el mandamiento de autoridad (“justicia”, corregidor, cabildante, benemerito) y el acta de posesión.

La posesión es una de las nociones de típica raigambre romanista importada por el Derecho Indiano⁵⁹⁶. Las Partidas (1256-1265) la definían,

“Como ponimiento de pies (...) es tenencia derechura que home ha en las cosas corporales con ayuda del cuerpo et del entendimiento” que para “ganar queriendo alguno posesion de castiello o de casa o de otra cosa cualquier” era menester “que faga dos cosas: la una que haya voluntad de ganar; la otra que la entre por si corporalmente et la tenga”.⁵⁹⁷

En este “ponimiento de pies” posesorio, que se cristalizaba con el ingreso del sujeto en el predio, debían concurrir tanto el *corpus* (elemento objetivo) como el *animus* (elemento subjetivo). Mientras el primero era la disponibilidad material, la relación fáctica de la persona con el bien, el *animus* era la voluntad y la intención de ejercitar las facultades inherentes a la relación posesoria, que “haya voluntad de ganar”, que entre “por si”, y la “tenga”

En el acta de posesión o en la toma de posesión (parte integrante de la *unidad documentarie* del título), figura calificada como un derecho real, corporal, actual, *jure domini vel quasi*. El primer adjetivo hacía referencia al carácter de derecho real que tenía dentro de la clasificación (no siempre tan clara) romanista que versaba sobre los derechos patrimoniales (en oposición a los derechos personales o crediticios), lo que en términos abstractos es real por ser absoluta porque su ejercicio no demanda el concurso de otros sujetos, sino que se circunscribe a la relación entre titular y su objeto. Al ser

⁵⁹⁶ Es opinión de GUEVARA GIL, *Propiedad Agraria*...201 y ss.

⁵⁹⁷ LAS SIETE PARTIDAS... III, TIT. XXX, LEY I Y LEY VI.

una relación omnímoda, debe ser respetada por todo el resto de los agentes jurídicos involucrados en un universo indiano determinado (oponible *erga omnes*). El adjetivo “corporal” remitía a la posesión natural, es decir, material y fáctica de aprehensión del bien. Por su parte, “autual” o actual describía la realidad misma que estaba emergiendo en ese momento y era opuesto a lo “virtual”. El adjetivo *iure domine* establecía la juricidad del acto, mientras que la frase *vel quasi* hacía alusión a la cuasi posesión o cuasi dominio⁵⁹⁸, pero no de la cosa sino de los demás objetos inmateriales, como los derechos crediticios, las acciones, y servidumbres que recaían sobre un predio, eran abarcativamente consolidados bajo este rótulo de la alocución *iure domine vel quasi*⁵⁹⁹. En el sentido romanista, el “*iure domini vel quasi*” inserto en este documento indiano, podría significar también, siguiendo al humanismo medieval de Ullrich Zasius⁶⁰⁰ “*re iud. lib. vj. post medium, ubi petita fuerat res iure dominij vel quasi;~ ...super dominio agere, hjc potest optimo iure alternatiue experiri, dicere, Petore*”, en donde desde la experiencia jurídica medievalista, el titular adquiere el dominio exclusivo (“super dominio agere”) pero siempre —nunca más válida la redundancia— a merced de la decisión del Príncipe (*decidere Pretore*).

⁵⁹⁸ ESCRICHE, *Diccionario...*t. 1 191. Otros especialistas como Miceli (Universidad Nacional General Sarmiento) opinan que el “iure dominio vel quasi” hay que pensarlo como una fórmula. “Tanto en derecho romano como en el derecho medieval castellano existía una diferencia entre el dominio y el cuasi dominio. El dominio remitía a lo que los romanos llamaban “cosas corporales” y el cuasi dominio a las incorporales es decir a las hipotecas, las servidumbres, la enfiteusis, en términos de derecho el cuasi dominio sería el ius in re aliena, es decir el derecho que se puede tener en la cosa del otro. Por ejemplo en la enfiteusis el enfiteuta tendría un cuasi dominio dado que sería el titular del dominio útil sobre la tierra y no tendría el dominio eminente. Daría la impresión de que la frase que se cita hace referencia al derecho de dominio y al de cuasi dominio. La forma de enajenación entre el dominio el cuasi me parece que no es la misma. Justamente que se hable luego de derecho real corporal es un indicio de la referencia al dominio”. Paola MICELI, com.pers. 2015.

⁵⁹⁹ Es la opinión de entre otros, PONSSA DE LA VEGA MIGUENS, *Manual de derechos reales en Roma*, ed. Lerner,-Córdoba, 1977, 57.

⁶⁰⁰ Hemos de referirnos a Ulrich ZASIUS, que nació en Costanza el año 1461 y murió en Friburgo de Brisgovia el 24 de noviembre de 1536. Es considerado uno de los más grandes juristas de la Alemania del siglo xvi. Sus escritos, tanto de derecho romano como canónico: *Commentaria in Pandectas*, *Enarrationes in titulum Inst. de actionibus*, *In usus feudorum Epitome* (aquí citado), *Lectura in titulum Digesti Novi de verborum obligationibus*, *Consilia*, fueron recogidos y publicados el año 1550 en una *Opera Omnia*. La cita es del volumen 4,40 § 38, de este último, también llamado *Jure Consulti Clarissimi Operum Omnium* [1550].

En la gobernación del Tucumán a lo largo de los siglos XVI y XVII, el valor de la tierra estaría determinado, entre otras causas, por la mano de obra (“servil”, “indígena”, “yanacona”, “esclava”, “mitaya”) efectiva o potencialmente disponible en ella⁶⁰¹. Tal como lo sintetizara Maceda, “las tierras valían no tanto por su extensión sino por los hombres que tuvieran”⁶⁰². Mientras que la tendencia patrimonialista en el Tucumán colonial parece ya haber sufrido los efectos ordenadores de separar los derechos reales sobre los indios, atribuido al *ordo* toledano que, como veremos, impidió que la titulación jurídica contuviese mención alguna a los indios (“por escrito ni de palabra”) como mano de obra integrante del terruño o capital de venta⁶⁰³. En otras palabras, el discurso *ius* político sobre el patrimonio privado había logrado institucionalizar penas a aquellos escribanos y funcionarios que legalizasen actos de ventas de bienes terruños que incluyan disposición coactiva de la fuerza de trabajo india ligada por tradición a esa tierra.

En términos no oficiales, el valor de la tierra dependió de su productividad ligada a un mercado, la que, debido al modo de producción imperante, estaba determinada por la cantidad de mano de obra asentada sobre de ella.

⁶⁰¹ Desde un estatuto epistemológico diferente a la historiografía jurídica la idea no es descabellada. En Inglaterra, un siglo más tarde, los teóricos de la denominada “economía clásica” interpretaron que el precio de un bien estaba determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo.

⁶⁰² MACERA DALL’ORSO, “Feudalismo colonial americano. El caso de las haciendas peruanas”, en *Trabajos ...*, t. III 122.

⁶⁰³ Las ordenanzas toledanas de 1574 y las reales cédulas de 1593, 1601 y 1609 eran restrictivas a la transferencia de tierras e indios, v.g. Toledo estableció “*que en las ventas que se hicieran de las dichas chacras no hagan mención por escrito ni de palabra de los yanacunas*” porque “*Todos los indios son libres, aunque son yanacunas conforme a las leyes*” mientras que se penalizaba a escribano con la privación del oficio, La Plata 1574, en Sebastian LORENTE (ed.), “Memorial y Ordenanzas de Francisco de Toledo”, t.1, p 227, en *Relaciones de los Virreyes y audiencias que han gobernado el Perú*, 3 t., ed. Imprenta del Estado, Lima, 1867-1872. La cita es de la página 201 del tomo 3.

Cuando hablamos del valor de la tierra, no lo estamos asimilando al precio de la tierra⁶⁰⁴ —o valor de cambio— sino al valor de uso, dado que no todo lo producido era destinado a la mercantilización, sino que también lo estaba para el consumo o para el autoconsumo⁶⁰⁵.

Existe una estrecha relación entre la mano de obra, la movilidad de los indios y el tipo de fundo o hacienda, sobre todo si se tienen en cuenta medidas coercitivas tales como la retención por deudas, la servilidad, las “desnaturalizaciones” de los colectivos indios⁶⁰⁶.

“Sin duda alguna, escaseaba más la mano de obra en el siglo XVII que en el XVIII. ¿En esta retención había coerción?” se pregunta Françoise Chevalier⁶⁰⁷. Existe también una tendencia moderna a vestir con ropajes del siglo actual, lo que aconteciera en siglos anteriores. Al decir de Ots Capdequí, uno de los erróneos vectores de análisis se ubica en privilegiar el análisis en función a la movilidad o el libre tránsito de personas independientemente a la condición de residencia. Desde el medioevo hasta bien adentrada la modernidad, la residencia en un lugar determinado era una condición estructural a la que estaban subordinados los derechos. Pensemos, por ejemplo, en el *getvere* germano, a través del cual, simplemente se poseía o no derecho en la medida en

⁶⁰⁴ “El tratamiento de los precios es un tema engañoso, no solo a causa de las dificultades para conseguir series homogéneas de precios, sino también por la artificiosidad y el peligro mismo de considerar la naturaleza como mercancía: en el caso de la tierra es manifiestamente falso el postulado según el cual todo lo que se compra y vende debe haber sido producido para la venta”, Giovanni LEVI, “La transformación de la tierra en mercancía: El caso piamontés (1680-1717”, en *Hispania*, LV/3, núm. 191, 1995, 821-844.

⁶⁰⁵ Para conocer la relación entre valor de la tierra, el autoconsumo y ingresos de la producción agrícola en La Rioja de fines del siglo XX, véase Adrián MERCADO, *Analisi del capitalismo agricolo sulla base dello studio della produzione aziendale di ‘las Parcelas’*, *La Rioja*, Cagliari, Dipartimento di Ricerca Economica Sociale, Università degli Studi di Cagliari, 1992 (tesis de grado).

⁶⁰⁶ En términos más ortodoxos, la relación directa entre las fuerzas productivas de la tierra y el trabajo.

⁶⁰⁷ Françoise CHEVALIER, *La formación de los latifundios en México: Haciendas y sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII*, México, F. C. E., 1999, 3º ed., 645. (...) La crítica a Chevalier tendió a pensar que éste había privilegiado el estudio de las haciendas muy grandes o de los latifundios, descuidando las pequeñas parcelas. El mismo Chevalier en su descargo afirma que puso el acento en los “hombres ricos y poderosos” que le interesaban particularmente puesto que “acumulaban los recursos económicos, las funciones militares y los poderes de justicia”.

que se perteneciese a la comunidad y, cuando ésta era abandonada, perdían todos los derechos que se habían detentado “dentro” de ella.

“En el llamado trabajo servil había cierta seguridad, pues como en el Medioevo, si el peón no podía abandonar la tierra, tampoco se la podían quitar, como veremos en el caso de los yanaconas peruanos o sus equivalentes *novos hispanos*”⁶⁰⁸.

En definitiva, para un análisis del valor de la tierra, entran a estimarse otras variables como el crecimiento de la población colonizadora, la introducción de sistemas de intensificación de la producción y la monetización de la fuerza de trabajo, íntimamente ligado a los intentos de privatización de la tierra. Haciendas y plantaciones (insertas en un territorio rural habitado mayoritariamente por indígenas y políticamente marginal) deben reinterpretarse, como veremos en el siguiente capítulo, desde viejos y nuevos marcos interpretativos.

§18.1.LAS MERCEDES DE TIERRA EN LA GOBERNACIÓN TUCUMANA ¿EN UNA FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL DE CARÁCTER FEUDAL?

Existe consenso entre historiadores de variados paradigmas (Ots Capdequí⁶⁰⁹, Levene⁶¹⁰, Sánchez-Albornoz⁶¹¹, Macera⁶¹², Chevalier⁶¹³, Nickel⁶¹⁴, Van Young⁶¹⁵,

⁶⁰⁸ F. CHEVALIER, *Actualización de la obra, op. cit.*, 11.

⁶⁰⁹ J. OTS CADEQUÍ, *Las instituciones sociales en la América española durante el periodo colonial*, La Plata, 1934, 42.

⁶¹⁰ R. LEVENE, *Lecciones de Historia Argentina, Periodo Colonial*, Buenos Aires, ed. J. Lajouane & Cía, 1920, 292.

⁶¹¹ C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, *España: un enigma histórico*, ed. EDHASA (8ª reimpresión), Barcelona, 1983, Vol. II, 56 y ss.

⁶¹² P. MACERA, “Feudalismo colonial americano...”, 145.

⁶¹³ Françoise CHEVALIER, “Structures agraires antiques...” en *Mélanges de la Casa Velasquez*, Volumen 8, Editor Casa de Velázquez (Madrid), Ed. E. de Boccard, 1972, 129 y ss. En una de las última disertaciones, Chevalier afirma que “Estas estructuras sociales [latifundios e ‘infraestructura psicologica’ del complejo de ocupación] impiden el arraigo de un régimen feudal, pero no de señoríos. Desde Sevilla, todo esto pasa a América...”, cf. F. Chevalier “El Latifundio en Andalucía y en

Rubio Durán⁶¹⁶, Assadourian⁶¹⁷, Garavaglia⁶¹⁸, Romano⁶¹⁹, Ciro Cardoso⁶²⁰, Carmagnani⁶²¹, Weckmann⁶²², Bertrand⁶²³, en que el alto medioevo se “trasladó” a

América”, en CHEVALIER, Françoise; “El latifundio en Andalucía y en América”, p. 17, en Bibiano TORRES RAMÍREZ (comp), *Propiedad de la Tierra, Latifundios y Movimientos Campesinos: Actas de Las VIII Jornadas de Andalucía y América* (Universidad de Santa María de la Rábida, Marzo, 1988), Sevilla, ed. Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 1991.

⁶¹⁴ Hebert NICKEL, *Soziale Morphologie der mexikanischen Hacienda. Morfología social de la hacienda mexicana*. Wiesbaden, Fundación Alemana para la Investigación Científica, Franz Steiner Verlag, 1978, 432, ilustraciones, mapas. (Publicación XIV del Proyecto México) Edición en español, *Morfología social de la hacienda mexicana*. Trad. de Angélica Scherp. México, ed. Fondo de Cultura Económica, 1988, 485.

⁶¹⁵ Eric VAN YOUNG, *Hacienda and Market in Eighteenth-century Mexico: The Rural Economy of the Guadalajara Region, 1675-1820*, ed. Rowman & Littlefield, 2006, 23 y ss.

⁶¹⁶ Francisco RUBIO DURAN, *Punas, valles y quebradas: tierra y trabajo en el Tucumán colonial, siglo XVII*, Diputación Provincial de Sevilla, 1999, 221 y ss

⁶¹⁷ Carlos ASSADOURIAN, *El sistema...*, 254.

⁶¹⁸ Juan GARAVAGLIA, *Mercado interno y economía colonial*, Grijalbo, 1983, remite e a Peter KRIEDTE, *Spätféudalismus und handelskapital: Grundlinien der Europäischen Wirtschaftsgeschichte von 16 bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts*, Göttingen, 1980; traducido al español como: *Feudalismo tardío y capitalismo mercantil*, Barcelona, 1989, para quién “el capitalismo comercial (generado por la dinámica de la manufactura y el comercio) se transforma en capital inmobiliario (y) en la renta que producían se unían en un tejido inextricable la renta del suelo capitalista con elementos de la renta feudal”, en Peter KRIEDTE, *Feudalismo tardío y capitalismo mercantil: líneas maestras de la historia económica europea desde el siglo XVI hasta finales del XVIII*, Barcelona, ed Planeta, 1994. La cita es de la página 34.

⁶¹⁹ Ruggero ROMANO, *Coyunturas opuestas. La crisis del siglo XVII en Europa e Hispanoamérica*, México, ed. FCE- El Colegio de México- Fideicomiso Historia de las Américas, 1993, 17 y ss. Antes, “Séame permitido, por lo tanto precisar qué es lo que entiendo por feudalismo. Diré antes que nada que, para mí, se trata de un modo de producción (pero, esta expresión no me liga automáticamente y por completo al pensamiento de Karl Marx [porque] no existe ningún monopolio de las palabras!)» Un modo de producción en el cual; a) la propiedad de la tierra se adquiere prevalentemente mediante un acto de donación por parte del soberano o pura y simplemente» a través de la ocupación abusiva; y b) la “...obligación impuesta al productor por la fuerza e independientemente de su voluntad, de cumplir ciertas exigencias económicas de un señor, ya cobren éstas la forma de servicios a prestar o de obligaciones a pagar en dinero o en especie...Estos dos factores están acompañados de una situación de prevalente economía natural.” En RUGGIERO Romano, “American Feudalism”, *Hispanic American Historical Review*, 64 (1), 1984, 121-134, traducido por Juan Carlos GARAVAGLIA como “Entre la encomienda castellana y la encomienda indiana: una vez más el problema del feudalismo Americano (siglos XVII-XVIII)”, *ANUARIO del IEHS*, III, Tandil, 1988, 1-31.

⁶²⁰ La tesis doctoral de Ciro Flamarion Santana CARDOSO, *La Guyane française (1717-1817): Aspect économiques et sociaux. Contribution à l'étude des sociétés esclavagistes d'Amérique*. Paris, institut des hautes études de l'Amérique Latine. Université de Paris X, 1971, Cap. II.

América⁶²⁴. Más precisamente, que hubo una traslación de las “prácticas societarias” y de sus “modos de producción” según algunos —o “institucionales”, dirán otros— de tipos medievales o señoriales⁶²⁵, los cuales fueron transportados en las carabelas colombinas en la época en que ya habían comenzado a declinar o se habían eliminado en Europa. Ots Capdequí lo ejemplifica con la figura del “adelantado”⁶²⁶; Sánchez Albornoz⁶²⁷ lo ve desde la “encomendación”, así como Bloch lo hace a través de la

⁶²¹ Marcello CARMAGNANI, *L'America Latina dal'500 a oggi, nascita, espansione e crisi di un sistema feudale*, ed. Feltrinelli, Milan, 1975. Trad. al español de Félix Blanco, como *Formación y crisis de un sistema feudal*. Siglo XXI Editores, México. 1976.

⁶²² Luis WECMANN, *La herencia colonial de México*, México, El Colegio de Méjico- FCE, 188-189.

⁶²³ Michel BERTRAND, *Grandeza y miseria de un oficio: Los oficiales de la Real Hacienda de Nueva España, Siglos XVII y XVIII*, México, ed. FCE, 2013, dice “La dialéctica constante entre las tendencias feudales liberadas por el mecanismo de conquista y la voluntad de la afirmación de un Estado entonces entre los más modernos en Europa impregnó verdaderamente la construcción de la estructura estatal americana desde sus orígenes” p. 282.

⁶²⁴ Sin el ánimo de hacer una muestra de erudición, la propuesta de yuxtaponer estos variados autores, intenta mostrar cuanto ha perdurado en los americanistas del siglo XX, una imagen de traslación de un orden social de occidente europeo y cristiano a ultramar (más allá del mar).

⁶²⁵ Aun tomando acto de que una conceptualización de lo señorial como sinónimo de lo feudal es objetable desde el punto de vista de la tradiciones historiográficas clásicas, desde la *ins* historiografía las distancias (lo feudal de lo señorial) son irrelevantes, porque en ambos casos —si hubiere distinciones entre ambos y siguiendo a Hespanha— “a lei permanecia letra morta”. No obstante, vale lo que manifiesta Sánchez Albornoz, en el capítulo 5, titulado “Instituciones feudales en Castilla”. Dice “Castro [por Américo Castro, *La realidad histórica de España*, 1948, n. del r.] confunde régimen feudal y régimen señorial. El primero abarcó las relaciones personales de tipo contractual, anudadas entre hombres (...). El segundo vinculaba a los habitantes de una tierra con quien poseía el dominio sobre la misma o la ‘justicia’ sobre los moradores de ella”, C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, *España: un enigma histórico*, ed. EDHASA(8ª reimpresión), Barcelona, 1983, Vol. II, 56 y ss.

⁶²⁶ OTS CAPDEQUÍ, *Instituciones*, 54.

⁶²⁷ Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, *En torno a los orígenes del feudalismo*, Mendoza, 1942, II vol. reeditado en un único ejemplar como *Estudios sobre las instituciones medievales españolas*, ed. Instituto de Investigaciones Históricas –UNAM. México. 1965. 830. Sobre el estudio de la *commendatio*, producto de una *miscellanea hispaniensis-romana* y su mutamento en el mundo musulmán ibérico véase SÁNCHEZ ALBORNOZ, *En torno a los orígenes*, 234 y ss., mientras que en el mundo romano-visigodo, consúltese el ensayo de Francesco di Martino que ubica a esta institución en el régimen señorial, “I primi germi per rapporti di tipo signorile si hanno nel período visigotico con la *commendatio*, che era un retaggio dell'antico patrocinio romano, se non dei rapporti caratteristi della clientela. La troviamo nel codice Euriciano (Cod. Eur. frgm. CCCX;) e poi nella lex Visigothorum (L.V. V 3, 1 e 4). Il vincolo non era perpetuo, esso aveva termine se il comendato si allontanava dal patrocinio del signore. Dal lato giuridico la libertà di movimento era assicurata, se lo fosse dal lato pratico è un'altra questione”, en Francesco DI MARTINO, *Uomini e terra in occidente*, Nápoles, ed. Jovene, 1988, 144.

organización del trabajo servil. R. Romano, en una sugestiva crítica al eurocentrismo y su implícita monopolización de las palabras-signos (tal caso *féodalisme*) postula la noción de “refeudalización”⁶²⁸ ya en uso para analizar la transición del capitalismo en Castilla⁶²⁹. Por su parte, Carmagnani teoriza sobre la implementación de un modo de producción feudal, con “características propias latinoamericanas”, con un punto de inicio (¿1600-20?), expansión y consolidación (¿1730-50?) hasta su declinación (¿c.1860?)⁶³⁰.

Inscripto en una tradición materialista, el aporte de Carmagnani propone que el modo de producción feudal no nace en América Latina “durante” la conquista, sino “después” de ella: “El invasor ibérico, portador de un modelo de comportamiento feudal, no es, de hecho un señor feudal aunque sea encomendero”, sino que el proceso del “modelo” o

⁶²⁸ El uso del término “refeudalización” identifica, en Ruggiero Romano, “*un refuerzo de la presión de los señores sobre las clases subalternas*” en la Europa occidental del siglo XVII, y para identificar idénticas acciones en las “*estructuras americanas*”, R. ROMANO, *Coyunturas opuestas. La crisis del siglo XVII en Europa e Hispanoamérica*, México, ed. FCE- El Colegio de México- Fideicomiso Historia de las Américas, 1993, 17 y ss. Romano, ha defendido su derecho a denominar las realidades que estudia y se ha defendido de quienes lo critican por lo que él denominó el “monopolio de las palabras” (p.160). “*Aquí, en el contexto americano, no hay feudalismo centralizado, lo que no significa la liquidación total del feudalismo del sistema feudal no centralizado, mismo que, con diferentes intensidades, siempre fue característico de la vida colonial americana*” (p. 167). Para mayores datos sobre la noción de feudalismo, además de los clásicos estudios empíricos de este autor sobre precios y comercios [R. ROMANO, “*algunas consideraciones sobre la historia de los precios en América colonial*”, BHAAER 3º serie, 2º semestre 1992], ahora relacionados con la propiedad de la tierra, véase R. Romano, “*Acerca de la ‘oferta ilimitada’ de tierras: a propósito de América central y meridional*”, en A. FLORES GALINDO y O. PLAZA (eds.) *Haciendas y plantaciones en el Perú*, Lima, Cuadernos del Taller de Investigación, Mimeo, 1975, 1-7.

⁶²⁹ Bartolomé YUN CASALILLA, “*La aristocracia castellana en el seiscientos: ¿crisis, refeudalización u ofensiva política?*”, en *La gestión del poder...*, 2002, (1987), 197-219, citado en Luis SALAS, *La fiscalidad, el estado moderno y la historiografía nobiliaria: estados fiscales y nobleza castellana*, TIEMPOS MODERNOS: Revista Electrónica de Historia Moderna, núm. 8 (mayo-septiembre 2003) , en <http://www.tiemposmodernos.org/include/getdoc.php?id=163&article=32&mode=pdf>; y B. YUN CASALILLA, *Sobre la transición ...*, 75 a 82. [671].

⁶³⁰ Marcello CARMAGNANI, *L'America Latina dal'500 a oggi, nascita, espansione e crisi di un sistema feudale*, ed. Feltrinelli, Milan, 1975. Trad. al español de Félix Blanco, como *Formación y crisis de un sistema feudal*. Siglo XXI Editores, México. 1976, Este análisis fue reformulado por el autor en “*Elementos característicos del sistema económico latinoamericano. Siglos XVI-XVIII*”, en E. FLORESCANO, (comp.) *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina*, ed. FCE. México, 1979, 138 y ss.

ideal typus funciona a partir de “la conclusión del proceso de redistribución de los factores productivos que permitieron que se conjugaran finalmente el principio jerárquico y con éste, la lógica económica ibérica”⁶³¹. De allí que, principalmente, se estructure sobre la lógica de extracción de metales destinados a la metrópoli y la repartición de tierras e indios a los colonizadores. Y continúa diciendo “(...) sólo a partir de este momento inicia su existencia el sistema económico feudal en América Latina (¿desde 1600-20?). Esto significa que variables tan importantes como la demográfica (crisis de la población indígena) y la vinculación de las economías latinoamericanas con la economía internacional [con la producción de oro y plata], no son elementos del sistema económico feudal; se inscriben en cambio, en el proceso de redistribución de factores productivos”⁶³².

“Si hay una cierta unanimidad en los estudios históricos latinoamericanos —continúa Carmagnani—, ésta reside en considerar el período de la conquista como una unidad distinta de la época colonial. Esta diferenciación es esencial para comprender el sistema económico en América Latina y la forma que asume, puesto que, durante la invasión ibérica, el sistema no adquiere aún la forma feudal por el simple hecho que no se da todavía la dominación del modo de producción feudal sobre los restantes. La invasión ibérica, no obstante su matriz económica medieval —y no solo económica—, no se configura como un fenómeno suficiente para dar nacimiento a un sistema económico

⁶³¹ M. CARMAGNANI, *Elementos...* 201.

⁶³² M. CARMAGNANI, *Elementos...* 202. Respecto a la cuestión demográfica, la región del Tucumán colonial se encuentra comprendida en estudios ya clásicos que abordaron el problema demográfico del Tucumán colonial —ROSENBLAT 1959, SÁNCHEZ ALBORNOZ 1977, entre otros— puestos a punto en Raquel GIL MONTERO, “La población colonial del Tucumán”, en *Cuadernos de Historia de la Población*, 3-4, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2005, pp. 65-122. Además de la información cuantitativa, se analizaron las causas que provocaron la reducción de la población indígena a partir de la invasión de los conquistadores: guerra, apropiación de las reservas alimenticias, pestes, cambios forzados en el sistema de vida, ruptura y desarticulación de normas y pautas culturales que estructuraban las relaciones sociales de producción, religiosas y políticas, de las diversas comunidades o reinos indios. Nuevas relecturas como las de Roxana Boixados (1999) sobre la base de estudios de Antonio Gonzalez Rodriguez (1984) nos dice “No resulta fácil, empero, evaluar cómo se conjugaron estas variables en las distintas jurisdicciones de la gobernación del Tucumán a lo largo del tiempo, ni tampoco establecer con certeza el piso demográfico sobre el que actuaron. Tratando de superar esas dificultades González Rodríguez (1982) plantea que, para el caso de la jurisdicción de La Rioja, entre 1607 y 1673 se produjo una caída demográfica del orden del 65,48%. Se trata de una cifra realmente elevada, sobre todo considerando que desde 1665 se habían incorporado a la jurisdicción 180 familias de yocables desnaturalizados del valle calchaquí, después de las campañas de pacificación” citado en R. BOIXADOS, “Indios rebeldes ...” 176.

feudal, porque no pudo simultáneamente imponer el principio jerárquico feudal y desarticular la lógica económica preexistente. En este sentido son significativos los recientes estudios que plantean la existencia, durante la invasión, de una fase caracterizada por la alianza entre reinos indios e invasores” dirá en referencia a los trabajos de Stern⁶³³.

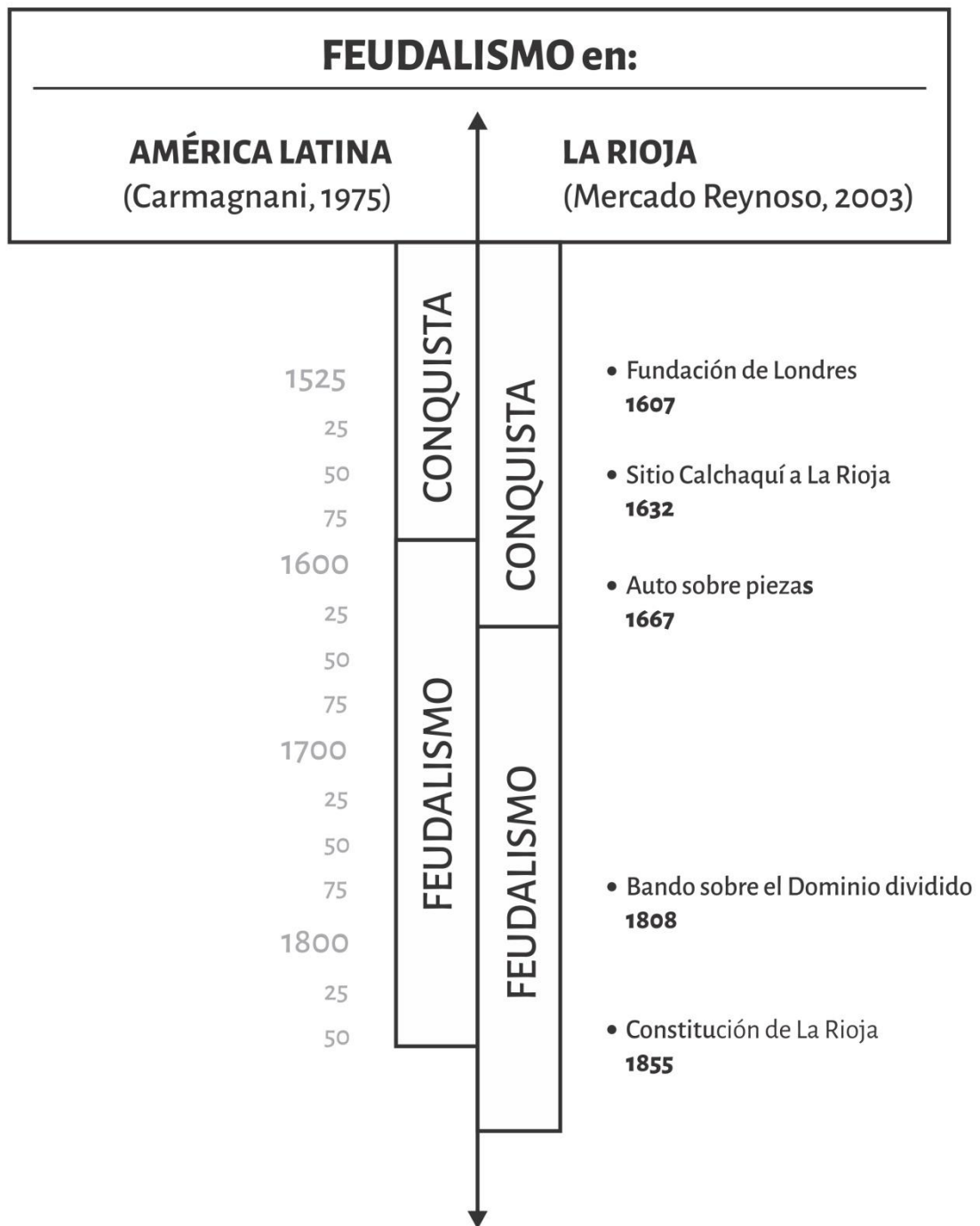
Aun valorizando los poderosos instrumentos de la occidentalización llevada a cabo por los hispanos en territorio tucumano de principios de s. XVII, el *ordo* toledano se encontraba en un escenario propicio para ahondar el particularismo de miscelación entre lo hispano y lo indio, alejándonos de la categorización clásica de feudalismo (esta es del “tipo franco”⁶³⁴): esto es un sistema de “producción para el uso” en contraposición al de “producción para el mercado”⁶³⁵. Ese particularismo fue pergeñado —siendo una de las zonas que más tardíamente se sometieron al control de la corona— teniendo presente una elemental *cultural materialism* de apropiación jurídica de las nuevas tierras conquistadas.

⁶³³ Se puede consultar un análisis detallado de algunos debates actuales en Steve STERN, “Feudalism, Capitalism and the World System in the perspective of Latin America and the Caribbean”, en *American Historical Review*, 93:4, 1988, 829-872.

⁶³⁴ R. Romano es quién explicita la crítica al feudalismo franco como *ideal typus*. “Confieso una vez más que no alcanzo a entender la razón de esa centralidad ¿Dónde está escrito el dogma sobre el verdadero y único feudalismo? ¿en la vanidad o en la ambición de tal o cual escuela historiográfica nacionalista [reside]?”, en R. ROMANO, “Entre encomienda...”, 25.

⁶³⁵ Kohachiro TAKAHASHI, “contribución al debate”, 93 y ss., en Rodney MILTON (ed.), *La transición del feudalismo al capitalismo. Las aportaciones más recientes al célebre debate sobre los orígenes del capitalismo*, Barcelona, ed. Crítica Grijalbo, 5ª edición, 1983, [278].

Graf. 8: Feudalismo en América Latina y La Rioja



Fuente: elaboración propia en base a M. Carmagnani, *La América Latina dal 500 ad oggi...*, 1975 ; y A. Mercado Reynoso, *Tierras...*, 2003

En relación con el derecho indiano local, existen elementos —como los principios de dominio dividido— que nos corroboran la impresión inicial de que la *praxis* normativa

sobre merced de tierras y merced de encomienda, la reglamentación de las “composiciones” de “piezas”⁶³⁶ y repartimientos o señalamientos de tierras antes indígenas, resultó una respuesta jurídica a las exigencias sociales de los conquistadores devenidos en mercenderos que imponían el diseño de un ordenamiento normativo “pactista” de tipo vasállico y vehiculizado consuetudinariamente por su condición de vencedores. Conllevó, por parte de los cabildos, una parcial interpretación en las disposiciones del Derecho Indiano (por ejemplo las alfarianas). Vino a suceder así que en las zonas tucumanas del sud calchaquino, las experiencias jurídicas estimuladas por la lucha militar contra los indios calchaquíes de ese primer cuarto de siglo XVII (1630-1660) motivaron —siempre en la relación de sujetos usufructuarios y la tierra como cosa— la aparición de un particular derecho indiano señorial-feudal y, más tarde, de un vital derecho consuetudinario (que como vimos con el fiel representante de la intersubjetividad de los *ricos omnes y homines terrae*, como Juan Gregorio Bazán de Pedraza), que coexistió con el primero, asumiendo características “*preservativas*” del carácter usufructuario preexistente. Dicho de otra manera, a las características del beneficio de la *fidelitas* del señor (colonizador, componedor y financista militar de la guerra al “infiel”) con el rey, mientras que en su *acervum* terrícola —antes regio— se mantuvo el modelo de explotación comunal de tradición india (*mit’a* de la tierra) y cuya principal fuerza productiva fue el trabajo indígena (*mit’a* de lienzo, servicio personal).

Llevado al plano de lo simbólico y ritual, tal vez, el resultado de una negociación interrumpida, una serie de “compromisos con la realidad india” en palabras de Gruzinski⁶³⁷, que significan la conquista de lo imaginario, donde en el plano cultural

⁶³⁶ El repartimiento de “piezas” según Adolfo González Rodríguez son los repartos de los indígenas rebeldes desnaturalizados, es decir, “los indios que lucharon hasta el final (entre 1665 y 1670) sin aceptar las propuestas de paz y a los que se les aplicó el servicio personal en contra de las leyes vigentes”, en A. GONZALEZ RODRIGUEZ, *La encomienda...*, 28 y 29.

⁶³⁷ Serge Gruzinsky ha polemizado recientemente con el abordaje de la colonización desde una óptica novedosa: en lugar del “triunfo de Occidente”, tenemos aquí el triunfo de las adaptaciones y acomodaciones en un proceso de mundialización ibérica, “*La colonización española fue una negociación ininterrumpida, una serie de compromisos con la realidad india*” Serge GRUZINSKY, *El pensamiento mestizo*, Barcelona, Paidós, 2000, 312.

domina lo religioso cristiano, pero, bajo la forma de una ritualidad mediada, llamada en La Rioja del siglo XX, el *Tinkunaco*⁶³⁸, liturgia católica presidida por “Inca Mayor”.

Pero volviendo al modo de producción, el mercendero de tierras y encomiendas, garantiza la continuidad de las “situaciones reales” de dominio efectivo del territorio o de la tierras, siempre en la meritocracia guerrera y con una jerarquía étnica hispánica (limpieza de sangre, etc.) que asegure la redistribución de factores productivos, la apropiación del excedente social y permita/promueva el *usus terrae* comunitario rústico, preservándose para sí, en cuanto clase dominante, las prerrogativas sociales y jurídicas ligadas al empoderamiento de la tierra —tal como “dueño”, como “feudatario”, como “encomendero”—. En un *ordo iuris* de aparentemente desordenada superficie, se muta con el poder político de los detentadores y poseedores, indios e hispanos, que encuentran en el derecho de conquista, en el derecho natural⁶³⁹ y, agregamos, en el derecho divino, toda la riqueza de principios normativos que orienten su conducta.

In fine, si nos detenemos pues en el Tucumán del 1700, es bastante tendencioso no ubicar u omitir situar a la sociedad colonial —y su régimen de tierras— en el interior de un modo de producción feudal (aún a costa de recibir una posible crítica desde los

⁶³⁸ Festividad religiosa de La Rioja que significa “encuentro” en lengua quechua. Se festeja el inicio de año nuevo y su particularidad es que, además de la ritualidad católica clásica, se incorpora la imagen del *niño dios* vestido de “Alcalde” y seguido por doce *ayllus*, que representan, esto últimos, las comunidad indias riojanas. La procesión de la estatua de un dios cristiano con el atuendo del alcalde colonial seguido por los 12 caciques de ayllis de la jurisdicción, es producto de la rebelión de los diaguitas de 1593, según el testimonio del maestro clérigo y presbítero Manuel Nuñez en un testimonio levantado en 1610 por una causa de santidad de Francisco Solano. Véase, entre otros, un resumen del estado actual de la discusión en Adrián MERCADO REYNOSO “El eterno retorno a la sociedad colonial de blancos e indígenas en el origen de la celebración religiosa del Tinkunaco riojano”. *JOURNAL OF THE SOCIOLOGY AND THEORY OF RELIGION*, Año 2013, Vol. 2, Número 1, en red ISSN-e 2255-2715, Vol. 2, N°. 1, 2013, pág. 45-71 Texto completo (pdf) en internet <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4760179> <http://sociologia.palencia.uva.es/revista/index.php/religion/article/view/19> (Consultado el 16-6-2016)

⁶³⁹ El pactismo es, según D. Santamaría y referenciando a la tucumana Quebrada de Humahuaca, el que habían desarrollado los iusnaturalistas del siglo XVI; en un sentido moderno que nada tiene ya que ver con las obligaciones impersonales propias de las comunidades populares medievales. Es un pacto de no agresión entre la comunidad devenida cabildo y el Estado representado, en una esfera mucho más vasta, por la Real Audiencia de Charcas y la Gobernación del Tucumán, D. SANTAMARÍA, *Memorias...*, 128.

conceptual y, aun cuando no se ha estudiado en los aspectos materiales que propuso Kula⁶⁴⁰ que enfatizan la fundamental contradicción estructural en el seno del feudalismo a gran escala y la pequeña tenencia campesino/indígena que funciona como unidad de producción, y de aplicación de justicia privada por parte de los propietarios sobre los usufructuarios que señaló Romano⁶⁴¹). Aun así, pareciera que estuviéramos más cerca de haber ahondado en los vínculos “no materiales” de sangre y solidaridad de linaje que postula Bloch⁶⁴². No obstante, ponemos en duda que estos abordajes diferenciados conlleven un soporte hermenéutico que concurra a idénticos objetivos, sobre todo *ius* historiográficos, como descifrar el orden normativo indiano y su nexo con los mecanismos apropiadores de regalías (térreas, tributarias, laborales, etc.). Ello parece ser el talón de Aquiles de la hipótesis de Carmagnani: no posee un anclaje en una teoría del derecho indiano, a excepción de, según lo antedicho, la particular “fidelización” (jurídica) del “señor” con su “feudo”, origen, eso sí, de la naturaleza simbólica (documento-símbolo) de la merced de tierra. Si llevamos la cuestión hasta el límite y analizamos las motivaciones de los actores (peticionantes y concedentes), deduciremos, sin demasiado esfuerzo, que esa estructura discursiva encaja en el sistema diferenciado que en los trabajos de Georges Dub⁶⁴³ situaron admirablemente entre las formas de pensamiento indoeuropeo de lo feudal. La hacienda de San Sebastián de Sañogasta, perteneciente al Capitán Pedro Nicolás de Brizuela y Doria, o la de Anillaco del Londres de Abaucán del maestre Juan Gregorio Bazán de Pedraza, con sus títulos de encomenderos, de mercenderos y sus mayorazgos testamentarios, se construyeron en confluencia de semejante evidencia casuística, estrechamente ligada a la estructura del lenguaje, del poder, los modos de expresión simbólica: el *vecino feudatario* era el *rico*

⁶⁴⁰ Withou KULA, *Teoria economica del feudalismo*, México, ed. UNAM, 1978.

⁶⁴¹ Romano RUGGIERO, “Entre la encomienda castellana”, 16

⁶⁴² Marcel BLOCH, *La sociedad feudal*, México, ed. UTEHA, 1958, “Parte Segunda, Los vínculos de hombre a hombre, Libro 1, Los vínculos de la sangre, Capítulo Primero: La solidaridad del linaje, I. Los ‘amigos carnales’”, 143-156.

⁶⁴³ Georges DUBY, *Los tres órdenes o Lo imaginario del feudalismo*, Madrid, ed. Taurus, traducción de A. Firpo, 1992, 19.

ommes o el señor de la tierra de las Partidas⁶⁴⁴ como el combatiente (*pugnant*) o guerrero (*pugnatoribus*) con función (*officium*) en el orden medieval de constituir, junto con los iglesia (*oratoribus*) y con los que trabajan (*laborant*) los tres sectores de este imaginario feudal. Para decirlo con Duby:

“Treinta, cuarenta generaciones sucesivas han imaginado la perfección social bajo la forma de la trifuncionalidad. Esta representación mental ha sabido resistir todas las presiones de la historia. Es una estructura”⁶⁴⁵

Esta estructura imaginaria —muy bien reseñada en cualquier epocal *Sumaria Información de Méritos y Servicios*— no era patrimonio de los poseedores de los medios de producción altoperuanos de los siglos XVII. Lo era también de los cronistas indígenas como Felipe Guaman Poma (1615):

“Fue la ley de Castilla, y son hijos de pecheros aunque fuese conquistador, deben pagar y es justo que lo paguen. No hay que tener miedo porque Dios y la ley está fija ya en este reino; porque no querer guardar la ley ni lo que manda Dios y su Majestad ni su Consejo Real es mentira y se engaña en ello; obediencia, pero, el caballero

⁶⁴⁴ En las Partidas veremos que no solo las ideas angulares en relación a la tierra como las de *fendo e ius del rey* son definidas sino también las de *costumbre*: se dice, en primer lugar, que debe tratarse de un uso que persista por un lapso de tiempo de diez o veinte años; en segundo lugar, debe ser llevada adelante por el pueblo o una parte de él; en tercer lugar, debe ser confirmada por la jurisprudencia («*Si en estos tiempos fueron dados dos juicios por ella*»); en cuarto lugar, la costumbre debe ser con razón y no contra el derecho natural o contra el de la tierra; por último, un requisito que añade particularmente el código alfonsí, debe existir el consentimiento del señor de la tierra («*ni contra señorío ni contra derecho natural ni contra procomunal de toda la tierra del lugar do se faze, »*) Textualmente en *Partidas* I.2.5: “E tal pueblo como este o la mayor partida del, si usaren diez o veynte años a fazer alguna cosa como en manera de costumbre sabiéndolo el señor de la tierra y no contradiciendo, e teniendolo por bien pueden la fazer, e debe ser tenida y guardada por costumbre, si en este tiempo mismo fueren dados, concejaramente de dos juyzios arriba por ella de omes sabidores, ey entendidos de juzgar. E no aviendo quien gelas contralle, esso mismo seria cuando tal costumbre, en el tiempo sobre dicho, algunopusiesse demanda, o su querella: o dixiesse que non hera costumbre que debiese valer ...E otrosi dezimos que la costumbre que el pueblo quiere poner, e usar della, debe ser con derecha razón e non contra la ley de dios, ni contra señorío ni contra derecho natural ni contra procomunal de toda la tierra del lugar do se faze, e deven la poner con gran consejo, e non por yerro ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva, sino derecho e razón e pro, ca si de otra guisa la pusieren non seria buena costumbre, mas dañamiento dellos e de toda justicia”.Cfr. Paola MICELI, *Derecho consuetudinario y memoria, : práctica jurídica y costumbre en Castilla y León (siglos XI-XIV)* Dykinson, Madrid, 2012, p 298. Agradezco a Paola Miceli (Universidad Nacional General Sarmiento) sus comentarios y orientación.

⁶⁴⁵ G. DUBY, *Los tres órdenes* ... 24 y 25.

como caballero, el hidalgo como hidalgo, el pechero como pechero, cada uno a su calidad como manda el Dios y el rey.”⁶⁴⁶

Como dice Felipe Guaman Poma, “a cada uno según su calidad”, que, ya sin susceptibilidades europeístas ha dejado de ser medievalismo franco y “ahora” (siglo XVII) es andino.

Dice Rubio Durán: “parecen lejanas —aunque no resueltas— las polémicas sobre el carácter de la formación económico-social colonial”⁶⁴⁷. ¿Cuáles son esas polémicas? Varios autores latinoamericanistas, basándose en un borrador que Marx nunca quiso publicar, (*Formaciones Económicas precapitalistas*) han llegado a sostener que Marx sólo reconocía cuatro modos de producción: el asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Además, afirman que la categoría de Modo de Producción sólo es aplicable a sociedades de clases. Superado ese debate de los límites eurocéntricos (Cardoso, Assadourian, Laclau, Gonzalez Casanova, Garavaglia) es posible afirmar que el paradigma del materialismo histórico ha llegado para quedarse en los debates de la América Colonial⁶⁴⁸.

⁶⁴⁶ Felipe GUAMAN POMA DE AYALA, *Nueva Corónica...* f.471, tomo II, página 359, versión 2008, FCE, Lima, ed. y pról. de Franklin PEASE, traducción de Jan SZEMINSKI.

⁶⁴⁷ RUBIO DURÁN, Francisco, *Tierra y ocupación*, 259.

⁶⁴⁸ “En los textos de Marx no se halla una teoría estructurada de los modos de producción coloniales. Se encuentran, sí, numerosas referencias al asunto. Ahora bien, éstas podrían constituir elementos útiles y suficientes para la elaboración de una teoría propia de los modos de producción en América Latina; sin embargo, la obstinación en adoptar esquemas explicativos surgidos de procesos ajenos (eurocéntricos, sobre todo) ha entorpecido el análisis y culminado en una lamentable proliferación de enfoques extraños entre sí. Las sociedades latinoamericanas son reacias a entrar en los moldes teóricos clásicos. Si a ello agregamos el hecho ya mencionado de que Marx nunca expuso en forma completa, acabada, una teoría del concepto modo de producción, se vuelve entonces impostergable la elaboración de una serie de precisiones encaminadas al logro de esa teoría de conjunto que aprehenda en su especificidad los modos de producción de América Latina. Los ensayos que conforman este libro apuntan en esa dirección”, dice en la Introducción un trabajo pionero en Sudamérica (1972) como lo es el de ASSADOURIAN, Carlos Sempat; CARDOSO, Ciro; CIAFARINI, Horacio; GARAVAGLIA, Juan Carlos; Ernesto LACLAU: *Modos de producción en América Latina*, Cuadernos del Pasado y el Presente, Córdoba, 1973, reeditado por Siglo XXI editores, Mexico (Decimotercera edición), 2005, p 234.

Hay una versión peculiar del modo de producción “colonial” —iniciada por Garavaglia en 1973 con el concepto de “modo de producción subsidiario” —pero, según nuestro entender, la superadora de los paradigmas de la modernidad es la representada por la de Álvaro García Linera, de 2008, quien después de reseñar un siglo de marxismo peruano y boliviano, plantea con mayor claridad el modelo multilíneal de la historia que precede al capitalismo⁶⁴⁹.

En definitiva, el Modo de Producción no puede estar limitado a las sociedades clasistas. Con este criterio, las comunidades indígenas del siglo XV no estarían insertas en un Modo de Producción⁶⁵⁰, como tampoco los anteriores a los Modos de Producción asiático, esclavista y feudal.

Las culturas agro-alfareras tucumanas del siglo XIV y XV tenían claramente un modo de producción, que podríamos denominar Modo de Producción Comunal, en lugar del peyorativo nombre de “comunismo primitivo”. Estas sociedades no sólo tenían unas determinadas formas de posesión de la tierra, sino también un modo de producir colectivo, tanto en la producción agraria como artesanal y la elaboración de metales. En estas culturas había una articulación del excedente del trabajo común y una no-

⁶⁴⁹ “[Las notas de Marx a Kovalevsky] en primer lugar, reafirman y desarrollan la concepción de Marx sobre el contenido ‘multilíneal’ de la historia que precede al capitalismo, o mejor, semejante a la de un espacio continuo y orientado, en donde el devenir de los pueblos iniciado en un punto común —la comunidad primordial— ha avanzado por múltiples y distintos caminos hasta un momento en que el curso de uno de ellos, el desarrollo capitalista, comienza a subordinar al resto de los cursos históricos a sus fines, disgregándolos, sometiéndolos e imponiéndoles a su propio devenir. Diversos cursos no capitalistas de la historia, empujados y obligados a ser parte de un devenir histórico capitalista”, en Alvaro GARCÍA LINERA, *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares de Bolivia*, ed. CLACSO-Prometeo, Buenos Aires, 25 y ss.

⁶⁵⁰ Nos llevaremos aquí por la definición de Ernesto Laclau para quien un Modo de Producción es: complejo integrado por las fuerzas sociales productivas y las relaciones ligadas a un determinado tipo de propiedad de los medios de producción. Dentro de este complejo hay cuatro elementos componentes (articulados en torno al tipo de propiedad de los medios de producción, -a)-excedente económico es producido por una fuerza de trabajo sujeta a coacciones extraeconómicas; b) determinada forma de apropiación del excedente económico; c) determinado nivel de división del trabajo; d) determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Para Laclau, existe algo denominado “sistema económico”, este incluye a diversos modos de producción, Véase Ernesto LACLAU, *Feudalismo y capitalismo en América Latina*, Centro de Estudios de Economía Política, Buenos Aires, octubre de 1971, transcripto en C. S. ASSADOURIAN *et al.*, *Modos de producción...* 23-47.

propiedad, tal como manifiesta Hectór Noejovich⁶⁵¹. No había propiedad privada de las fuerzas productivas, ni relaciones de producción en las que hubiera explotados y explotadores —al menos en el sentido moderno—. “De este modo, parece impropio extrapolar linealmente, como única y necesaria alternativa apriorística, el modelo de evolución histórica de Europa y caracterizar en consecuencia América Latina como una formación feudal. ¿Qué grado de validez puede tener ello si las condiciones históricas de su génesis son distintas en ambos espacios? Mientras en el espacio dominante el régimen capitalista de producción se gesta y adviene sobre las ruinas del feudalismo europeo, las mismas fuerzas que lo disuelven allá implantan formas feudales de explotación en América”⁶⁵². Si observamos las especificaciones o localismos latinoamericanos, hubo un modo de producción esclavista en las haciendas antillanas de la Guyana francesa, según la conocida tesis de Ciro Cardoso⁶⁵³, como también hubo, para el espacio altoperuano rioplatense y según Garavaglia⁶⁵⁴, un modo de producción subsidiario por parte de las comunidades guaranizadas del actual Paraguay, noreste argentino y sud brasileño.

Como veremos, el siglo XVII riojano-londinense sud tucumano es un siglo largo, por cuanto se inicia un periodo de conquista del espacio indígena (desestructurando el Modo de Producción —llámese comunal o despótico-comunitario— de los señoríos

⁶⁵¹ NOEJOVICH, Héctor, “La noción abstracta de propiedad en América: una visión desde Los Andes”, *Derecho*, 56, 2003, 54.

⁶⁵² AA.VV. *Modos de producción y formaciones sociales en América Latina*, en Cuadernos Marxistas Latinoamericanos de Educación Política, ed. El Topo Obrero, Disponible en: <<http://www.www.rebelion.org/doc/51654.pdf>> (Consultado el 21/01/2016)

⁶⁵³ CARDOSO, Ciro “El modo de producción esclavista colonial en América”, extraído del capítulo III de la tesis doctoral de Ciro Flamarion Santana CARDOSO, *La Guyane française (1717-1817): Aspects économiques et sociaux. Contribution à l'étude des sociétés esclavagistes d'Amérique*. Paris, institut des hautes études de l'Amérique Latine. Université de Paris X, 1971, en ASSAUDORIAN, Carlos S. *et al.*, *Modo de Producción*, 193-211. Ésta última, ha sido reeditado como C. F. Cardoso, *La Guyane française (1715-1817): Aspects économiques et sociaux. Contribution à l'étude des sociétés esclavagistes d'Amérique*. Petit-Bourg, Guadeloupe. Ibis Rouge Éditions, 1999, p. 221.

⁶⁵⁴ GARAVAGLIA, Juan C. “Un modo de producción subsidiario: la organización económica de las comunidades guaranizadas durante los siglos XVII y XVIII en la formación regional altoperuana-rioplatense”, en ASSAUDORIAN, Carlos S. *et al.*, *Modo de Producción*, 161-193.

hualfines y anguinanes-famatinos) en el que se establecen relaciones de producción señoriales en un modo de producción feudal hasta que, como probaremos en el capítulo concerniente a la Hacienda de Anillaco del Valle de Abaucán, las haciendas se integran al mercado mundial a través de la producción de mercancías para el mercado minero potosino.

La Rioja es feudal, al menos durante gran parte del siglo XVII, porque hubo un pasaje de indígenas libres y yanaconas a indígenas tributarios de servicio personal e “indios de estancia”⁶⁵⁵ capitaneados por hacendados mercaderos y “acompañados” por “indios amigos”. y, en definitiva, el poder de los propietarios de mercedes de tierras y mercedes de encomiendas se traducía en una red de punciones realizadas de diversas maneras sobre los excedentes de la producción indígena o sobre los beneficios del comercio.

Adopté, en este trabajo, un paradigma crítico del orden social en construcción impulsado por lo ibéricos. Por lo que, vista la aparente obviedad de las articulaciones establecidas en los documentos oficiales, conceptualicé como feudal a la formación económica riojana que hace centro en haciendas. Después de describir detenidamente el proceso de constitución de las haciendas riojanas del siglo XVII, éstas definen al modo de producción como feudal, es decir, empresas colonizadoras articuladoras de fuerza de trabajo indígena en la producción de mercancías para el “área consumidora del Alto Perú (Potosí)” que convierten al espacio vallisto sudcalchaquino en un modo de producción feudal (si se concede, con características propias) cuya durabilidad y perdurabilidad es tan discutida como la encomienda misma.

Lo interesante, en términos paradigmáticos (y no ya conjeturales), es asociar a dos tradiciones historiográficas: una que proviene del materialismo histórico (Carmagnani, Romano, Garavaglia) y otra del debate historiográfico del dominio dividido (Grossi, Tau Anzoátegui), y válgase el término, “aplicarlo” a nuestro campo de estudio (Sudoeste del Tucumán) como lo son las mercedes y para un siglo aquí en cuestión (el XVII), donde a nuestro entender sigue prevaleciendo como productora de mercancías la fuerza productiva tierra. Podrá denominarse agraria, rural, colonial, campesina,

⁶⁵⁵ La noción de indios de estancia, en Mario Góngora, “La tendencia a la ruralización en el siglo XVII. Yanaconas, indios de estancia y peones”, 152-161, en M. GÓNGORA *Estudios sobre historia colonial de Hispanoamérica*, ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1988.

indígena, pero que su principal distinción es la tierra como el elemento o “factor de producción principal” (para usar un concepto pre moderno de los economistas ingleses del siglo XV) mientras que la fuerza productiva trabajo, y dentro de él el indígena, es la segunda fuerza productiva en importancia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el dominio dividido? Que mientras no prevaleció el capital, no se introdujo el dominio exclusivo sobre la tierra y el trabajo y esto impregnó el carácter precapitalista de las relaciones de producción dominantes.

En el capítulo 13 del presente, “La *ius* política de la apropiación: renta de indios, renta de hacienda”, tomamos el caso de la familia Bazán de Pedraza, y vimos cómo ellos representan el pasaje de los colonos guerreros a emprendedores coloniales.

Se había retrasado la tardía colonización del sur tucumano que conllevó, como analicé, a una tardía refeudalización del sur calchaquino.

Insistimos, cuando el *hacendado* Gergorio hace mención de entrada a mi “feudo”, por escrito de puño y letra y bajo la forma de descargo ante la acusación del mismísimo oidor, no solo se está definiendo como vecino feudatario sino que se diferencia de los vecinos domiciliarios por que ha juramentado fidelidad, ha sostenido castellanos y solventado curas doctrineros.

Decía Solórzano,

"...infiero en primer lugar la razón que ha podido tener el uso común de hablar en las Indias, y en algunas Cédulas Reales llamando á estos nuestros Encomenderos Feudatarios y á los demás habitantes de las Provincias de ellas Domiciliarios; porque sin duda se ocasionó esto, de que hacen al Rey nuestro Señor el juramento de fidelidad que vamos diciendo por razón de las Encomiendas, que son los feudos que se usan en ellas"⁶⁵⁶

Si a estas Cédulas Reales les atribuimos un peso diferenciado como generadoras de normatividad en la estructura del derecho indiano (un “feudatario” de Santiago de Chile no era lo mismo que un “domiciliado” en Santiago de Chile), creemos, que de configurarse el hipotético “*indiaunum iure proprium*” toledano, debemos incorporar,

⁶⁵⁶ Juan de SOLÓRZANO PEREIRA, *disputationem de Indiarum iure*, tomo 2, 281.

además de las regulaciones laborales, salariales y del trabajo tan bien señaladas en “Código Peruano” de Gaspar Escalona Agüero⁶⁵⁷, el juramento regulado por el propio Toledo. Las encomiendas que Toledo concede en el Perú van acompañadas de un juramento por el cual “...demás de la obligación que tenéis de servir a Su Magestad como Rey y Señor Natural, le seréis fiel y leal [...] y os meteréis bajo del real estandarte con vuestra familia, armas y caballos y pelearéis por el servicio de Su Magestad en defensa destos reinos a vuestra costa”⁶⁵⁸. Como afirma un conocido modernista como Samperes y Guarismos, en 1805, la transcripción de estas fórmulas en *Cartas dotales y escrituras* adquieren significado práctico en la mentalidad circulante, llenas de costumbres e instituciones feudales⁶⁵⁹.

Creo, que no es ingenuo pensar —siempre siguiendo a Romano— que este deber militar a cambio de la concesión de un privilegio tal como la merced de encomienda nos habla de una “feudalización del Estado”⁶⁶⁰. Los artífices materiales del feudalismo tucumano del XVII no se encuentran en el estado (colonial y policéntrico) sino en el concepto hegeliano de sociedad civil (aquí, por cierto, colonial). Es en éste donde se ubica un objeto que es figural, una “representación” laclaudiana: la hacienda de Anillaco de Bazán, los 500 indígenas en la unidad de mando del benemérito, las 200 leguas cuadradas de tierras, las 60 a 70 tejedoras especializadas y 200 indios de tasa, el mercado potosino, las encomiendas en tres jurisdicciones, las tierras concedidas en merced, sus castellanos en las empalizadas llamados “fuertes”, articuladas en un modo

⁶⁵⁷ Alfonso GARCÍA-GALLO DE DIEGO “El Proyecto de «Código peruano» de Gaspar de Escalona y Agüero”, en *AHDE* núm. 17, 1946, 889.

⁶⁵⁸ Tanto Mario GÓNGORA como Ruggero ROMANO transcribieron la fórmula del juramento de encomiendas del virrey del Perú, de GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco *Historia de la tenencia y explotación del campo desde la época precortesiana hasta las leyes de 6 de enero de 1915*, ed Conasupo, México. 1971, vol. I, 200.

⁶⁵⁹ Juan Sampere y Guarimos dice “y de otros muchísimos llenos de costumbres, é instituciones feudales. Otros, en que se trata expresamente de feudos; se explica lo que eran, y sus diferencias, y aun se copia la fórmula de las carta; ó escrituras con que se otorgan” J. SAMPERE Y GUARIMOS, *Hisotria de Vínculos y Mayorazgos*, en la imprenta de Sacha, Madrid, 1805, edición facsimilar del la Biblioteca digital del Instituto de historia del CSIC, en <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcz6104> (Consultado el 30-05-14).

⁶⁶⁰ Ruggero ROMANO, “Entre la encomienda castellana...”, 13.

único aquí descriptas (aunque no tengamos fuentes más confiables), en definitiva, estamos configurando un modo de producción feudal de fines del siglo XVII y para el sud calchaquino.

§ 18.2 ¿PRINCIPIO JERÁRQUICO PARA LA ASIGNACIÓN DE TIERRAS?

En un intento por construir un *percorso grossiano* (P. Grossi) del mundo andino tucumano llamado ‘punas, valles y quebradas del Tucumán Colonial’ (F Rubio Durán), tomaremos como propia la idea de ‘imperialismo jurídico’ (A. Hespanha) y los saludables debates sobre sus modalidades y límites (B. Clavero) pero, incorporaremos nuevas visiones ajenas a los *ius* historiadores como las provenientes de la tradición materialista (M. Carmagnani) sopesado con la convicción de que las normas, incluso aquellas consuetudinarias, son establecidas en motivos racionales que no pongan en duda el *agire sociale* (M. Weber) y contengan el imaginario de los individuos del grupo inspirador (G. Oexle) que, para nosotros, son la clase dominante identificada aquí como “benemérita”.

Si tomamos como válida la hipótesis del americanista Marcello Carmagnani, y antes de adentrarnos en ella, debemos remitirnos a los extensos debates sobre los modos de producción en América Latina, acerca de la existencia de un “régimen señorial” en América y, en su interior, una “renta” señorial que se componía de dos rentas provenientes de fuerzas productivas diferentes: la renta de la tierra y la renta del trabajo servil situado en ella, es decir, el trabajo doméstico de aquellos sujetos ubicados en el predio terrero, que, simplificado en extremo son rentas superpuestas en un mismo espacio de dominio —característica medieval o premoderna—. ¿Cuál era el principio “jerárquico” del “régimen señorial-feudal” en la América Latina del s.XVII? El principio jerárquico estaba, además de esta renta dual, basado en la diferenciación étnica entre españoles e indios como resultado de una concepción aristotélico-tomista. “En primer término esa jerarquía racional en que descansa la servidumbre se relaciona con un orden general de la naturaleza que exige la sujeción de lo imperfecto a lo más

perfecto”⁶⁶¹. Tal principio explica, por ejemplo, “el predominio del alma sobre el cuerpo, el macho sobre la hembra, etc. Lo mismo debe necesariamente ocurrir entre los hombres. Los prudentes o que poseen plenamente la razón deben dominar a los imperitos o bárbaros que no la alcanzan en igual grado”⁶⁶², por lo que esta diferencia natural, en “instituciones tales como la esclavitud, la encomienda, etcétera, es la premisa que sostiene a las relaciones productivas, el desigual desarrollo de las fuerzas productivas, y el intercambio no equivalente, que acompañan al sistema económico feudal desde su nacimiento hasta su disolución”⁶⁶³. Volviendo a lo señorial como sinónimo de lo feudal, Emmanuel Leroy-Ladurie señala que “lo señorial nace, entre otras ‘causas’, de la baja economía de mercado durante el primer milenio” y sigue diciendo que el señorío “luego se adapta admirablemente al gran auge de esta economía mercantil en los siglos XII y XIII” añadiendo, “entienda quien pueda”⁶⁶⁴. Por su parte, Chevalier considera que “quizás no haya contradicciones internas entre el régimen señorial y la apertura al mercado exterior. Así dicho señorial no sería sinónimo de baja rentabilidad”, sino que ésta puede ser entendida, en términos weberianos, como economía consuntiva⁶⁶⁵, de consumo o manutención material, que la moderna visión capitalista tiende a menospreciar.

A pesar de ser complejo y estar sujeto a revisión, el vínculo entre lo señorial feudal, la decadencia de la economía de mercado y el orden normativo está amparado por una doctrina de la diferenciación. Mientras que en Europa el mercado es resignificado a partir de un mayor peso de la jurisdicción, fuera ésta de realengo o señorial y su puesta en discusión por el poder regio, en el Tucumán colonial se asistió a una formidable consolidación de los intereses de grupo del nuevo colectivo, bajo una única jurisdicción regia.

⁶⁶¹ Silvio ZAVALA, *Por la senda hispana de la libertad*, México, ed. FCE, 1993, 28.

⁶⁶² S. ZAVALA, *Por la senda ...* p. 28-29.

⁶⁶³ M. CARMAGNANI, *Elementos ...* 391.

⁶⁶⁴ E. LEROY-LADURIE, en “Cahiers Marc Bloch”, *Bulletin de l'association Marc Bloch*, núm 3, año 1995, 49.

⁶⁶⁵ M. WEBER, *Historia...*, 135 y ss.

En la América colonial del siglo XVII, los lazos económicos se complejizaron y mutaron al atravesar una época de transición, época que abarcaba el pasaje del medioevo arraigado en la España rural —con sus proyecciones de ultramar— y el renacimiento que florecía con el poderoso “auge” de la economía “capitalista” en Europa.

La discusión de los modos de producción del periodo “cuestionan los modelos que postulan un retorno a la agricultura de subsistencia [que en el Tucumán se verifica ante la crisis de la demanda del mercado potosino de la segunda mitad del XVII] y el surgimiento de un sistema de hacienda ‘feudal’ [señorial] en México”⁶⁶⁶.

Sin extendernos en el análisis de factores económicos —la evolución de los precios de los productos agrícolas, con obvias implicancias en el mundo agrícola y por extensión, al valor de cambio de las tierras productivas e improductivas— y, siguiendo a Chevalier, recordemos que los factores no económicos “que en lo señorial o feudal hay un aspecto social y político, patriarcal o paternalista, de protección o fidelidad y de clientelismo complejos”⁶⁶⁷. Este aspecto, de profundo impacto en las relaciones sociales de producción de las parcelas productivas, llevarán a Van Young a plantear que, a pesar de enmarcarse en relaciones de intercambio en una economía de mercado (tanto de las “haciendas” de Nueva España como de las “estancias” y “chacras” del Tucumán, y los “ranchos” de California), las relaciones sociales podían ser “socialmente feudales”, lo

⁶⁶⁶ H. KLEIN, *Las finanzas americanas del imperio español 1680-1809*, ed. Instituto J. M. L. Mora , México.. 1994. También del mismo autor, *La economía de Nueva España, 1680-1809. Un análisis a partir de las cajas reales*, Historia Mexicana, el Colegio de México. Vol. 136, 4, 1985, 561-609.

⁶⁶⁷ Sobre las motivaciones no económicas de las haciendas, véase la redefinición de hacienda colonial. “Una hacienda es la propiedad rural de un propietario con aspiración de poder, explotada mediante trabajo subordinado y destinada a un mercado de tamaño reducido, con la ayuda de un pequeño capital. Bajo tal sistema los factores de producción no solo servirían para la acumulación de capital sino también para asegurar las ambiciones sociales del propietario” definición de ERIK WOLF y S. MINTZ en: “Haciendas y plantaciones en Mesoamérica y las Antillas”, 493, recogido por MAGNUS MÖRNER, “La hacienda hispanoamericana: un examen de las investigaciones recientes” en E. Florescano (coord) *Hacienda, latifundios y plantaciones*, México, ed. Siglo XXI, 1975, 15-48.

que, según Gibson, volvía a estas relaciones sociales en el interior de estos espacios fundarios, “inaccesibles a la ley”⁶⁶⁸.

En este sentido, importa no sólo la titularidad y forma del dominio de la tierra —a la que se accedió a través de una merced o composición hecha por el Gobernador en nombre del Rey para conformar una historia de los grandes propietarios o, más apropiadamente, una historia de los *grans domaines*— sino lo que ocurría con los derechos de estadía o posesión de bienes de otras personas jurídicas (indios o indígenas) en el interior de estos grandes dominios de tierra⁶⁶⁹. El ejemplo que ilustraremos a continuación tiene que ver con los que en el siglo XIX y XX se volvieron “intrusos”, pero que, en el marco del Derecho Indiano peninsular y criollo, eran “residentes” originarios o indios, y que en el discurso jurídico de la época, por el tipo de servidumbre y colaboracionismo con la guerra se denominaron “yanaconas”. El segundo ejemplo será sobre el particularismo⁶⁷⁰, de la regulación de la fuerza de trabajo indio y del qué hacer con el “factor productivo tierra” dejado vaco por el sistema de reducción, del período toledano.

Sobre lo económico, en relación a *les grans domines*, podríamos seguir reseñando mucha más profusa bibliografía provenientes de la economía política, arqueología y etnohistoriografía, pero no ahondaríamos en la *Lei indiana*, ¿ella habilitaba a las extensiones térreas sólo a colonos, blancos (españoles), cristianos (bautizados) y con méritos (aportantes a la caja real)? ¿Es un *mero* imperialismo jurídico?

⁶⁶⁸ C. GIBSON, “Indian Societies under Spanish Rule”, en *The Cambridge History of Latin America*, Leslie Bethell (ed.), Tomo II, “*Colonial Latin America*”, Cambridge, 1984, 381-419.

⁶⁶⁹ F. CHEVALIER, “Servidumbre de la tierra y rasgos señoriales en el Alto Perú: apuntes comparativos sobre los yanaconas”, en *Historia*, vol. XIII, núm. 2, 153-171, Dic. 1989.

⁶⁷⁰ “al hablar de particularismo de las leyes de Indias se hace alusión al hecho de que la inmensa mayoría de las normas legales se dictaron con vigencia limitada a una provincia o a un lugar determinados, siendo muy pocas las que se emitieron con carácter general para todas las indias. Hasta tal punto fue esto así que, como ha escrito García Gallo, ‘cuando se estimó conveniente aplicar una misma medida en varias provincias, en lugar de promulgarla con carácter general, se dictó repitiéndola para cada provincia’. Esto fue debido en parte a que la inmensa mayoría de las leyes eran disposiciones administrativas, cuya vigencia se estimaba restringida al ámbito de competencia de la autoridad indiana (un virrey, un gobernador, una Audiencia) a la cual iba dirigida. Pero también se debe este particularismo a la enorme diferencia existencia entre las diversas partes territoriales del nuevo mundo. Lo que podía ser válido para Nueva España no tenía porque serlo de igual forma para el Perú.”, Francisco TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, ed. Tecnos, 7º reimpresión, 1996, 338.

¿Es parte del imperialismo jurídico -que unas líneas más arriba denominamos Derecho Indiano peninsular y criollo- que la concesión de 97 mercedes de tierras en La Rioja tucumana haya sido a sólo españoles, blancos y católicos? ¿O es una problemática que desde la “modernidad” pretendemos focalizar olvidando su carácter estamental y señorial?

Ante la idea de que el mundo colonial es un espacio débilmente estructurado e ineficaz, en la clásica autocrítica de António Hespanha quien, hablando de su Leviatán, nos advierte que el mundo nuevo es...

“Uno spazio politico spezzettato, plurale, debolmente strutturato dalla corona, di cui il potere, senza essere direttamente messo in questione, è espropriato, nel quotidiano (per riprendere una bella espressione di una poetessa portoghese, Sophia de Mello Breyner) da «formas tao subtis e tao peritas / que nao podem sequer ben descritas». Dall’efficacia dei mezzi di controllo molecolare e omeopatico del potere ecclesiastico, dalle più visibili pretese giurisdizionali dei signori (servite a meraviglia da procedure giudiziarie interminabili), dai modelli popolari di composizione dei conflitti al di fuori delle vie giudiziarie regie, dalla sottrazione di competenze a loro proprio favore da parte dei (se-dicenti) ufficiali del re, dalla mancanza di mezzi della corona di portare a compimento un quadrillage politico dello spazio. E si potrebbe ancora allargare il ventaglio dei meccanismi di decentralizzazione, ricorrendo a temi che non hanno nel libro Io spazio che meriterebbero: in particolare, le strategie politiche inter-familiari e la trama delle reti clientelari. Meccanismi che non soltanto organizzano l’interno del regno, ma dominano i suoi rapporti esterni, come prova la dipendenza (...). In ogni caso, la corona esiste ed ha, anch’essa, i suoi mezzi...”⁶⁷¹

La impugnación más frontal proviene de Mello e Souza, que acusa de “neocolonialistas” a todos aquellos paradigmas que, hablando de sistema pluralista de toma de decisiones, “soterren” la violencia institucional de la colonización misma⁶⁷².

⁶⁷¹ A. HESPANHA «Heautontimorumenos Scienza & Politica, per una storia delle dottrine», Vol. 3, núm. 5, Università di Bologna, pp 107-113. <http://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/3066/2463>

⁶⁷² Laura de MELLO E SOUZA, *O sol e a sombra...*, 54 y ss.

Hespanha le responde hablando de expoliación, jerarquía, tensiones sociales, desigualdades, privilegios y segregación:

“Do que acabo de escrever já se deduz que continuo a pensar que a chave interpretativa que este livro fornece pode servir a historiografia brasileira, sem querer obrigar –o que seria grave- à ocultação da violencia colonial. Ou dito de outra forma, sem sequer impedir a consideração da diferença entre (uma entidade indefinida a que alguns historiadores chaman) ‘colonos’ (i.e. colonizados, vítimas da colonização) e (outra a que sos mesmos chamam) ‘reinós’ (i.e. colonizadores, agentes beneficiarios da colonização). (..) Mas, a pesar das tensões, desigualdades e espoliação entre uns e outros, eles conviveram, uns e outros, nessa sociedade hierarquizadea, fundada na desigualdade e non privilégio, internamente dominadora e marginalizadora, que foi a sociedade corporativa; no seio da qual uns explotaram tranquilamente os outros, os segregaram e dominaran, os silenciaram e gozaram com o seu silêncio”⁶⁷³.

El debate y posterior polémica sobre el alegato de Hespanha “*a lei permanecia letra morta*” le brinda a nuestro profesor la oportunidad de insistir en que su noción de derecho es otra. El derecho es, si se me permite, una constelación de órdenes mucho más abarcativa que la *lei*, en este caso, indiana. Pero no hay *lei* indiana, ni andina, ni altopervana, ni en el entonces *direito luso-portugues* (o derecho indiano portugués, para afirmar una noción localismos preconstitucionales de Clavero⁶⁷⁴). En efecto, si nosotros esbozamos una teoría del derecho indiano toledano como un *ius propium*, de carácter localista y de amplia repercusión en el ámbito de Córdoba del Tucumán, la merced de tierras no está esbozada en una *lei* de aquél, no podría serlo en ese universo casuístico del altiplano pero sí sería *ius terrae indianorum* o simplemente derecho a tierras indiano. Nuestra mente codificadora y moderna busca, la regularidad que brinda subjetivamente la ley indiana en el siglo XVI altoperuano, o aunque sea, unas Ordenanzas Generales del vicerey sobre el cómo se han de repartir y recompensar a los

⁶⁷³ A. HESPANHA, *Depois do Leviathan*...438.

⁶⁷⁴ Bartolomé CLAVERO, “*Gracias y derecho. Entre localización, recepción y globalización (lectura coral de la vísperas constitucionales de António Hespanha)*”, en RQF núm. 41, 2012, 677-767.

beneméritos de tierras. No la hay, de hecho no hay un registro de mercedes de tierras (excepto que algún cabildo, *motu proprio* haya decidido listarlas). Es parte del la “*estructura absorvente e esponjosa do direito común*” en donde “*os antigos também dizian « quad non est in libris [in actis], non est in mundo» O que não está nos livros [nos processos] não está no mundo*”⁶⁷⁵. Justamente en el capítulo de componentes de la merced intentamos descifrar el *actis-processos* del título: a los criterios hermenéuticos de tiempo, lugar, atribución (*dispensatio*), instrumento, folio oficial (papel sellado) y toma o puesta en posesión de la merced de tierras, que según cualquier comentarista (vg. Graciano), ha de interpretarse como norma con sus múltiples facetas de derecho público, privado y tributario. En otras palabras, hay ambivalencias en las formas de acceso o modos de acceso a la propiedad de la tierra: no hay evidencias de mercedes de encomiendas que devinieron en propiedad de sus encomenderos⁶⁷⁶, ni composiciones de tierras ni enfiteusis. Hubo en La Rioja, un centenar de concesiones de mercedes de tierras en trescientos años sin diferencias sustanciales entre Austrias o borbones⁶⁷⁷.

“*Spezzate le catene che lo legavano al carro marxista della sovrastruttura, il giuridico ha reconquistato la sua autonomia ...*” dirán S. Mannoni y M. Martínez Neira en la *presentazione della XXVI Revista dei Quaderni Fiorentini*⁶⁷⁸. Pero il giuridico no explica el comportamiento ni la imagería de los mercenderos terratenientes de fines del XVII. Esta *Gens du Parlement*, inclusive uno de los más ilustres burócratas estatales como Mercado y Villacorta, quien apañó a uno de los también burócratas regios más destacados del Tucumán, Juan Gregorio de Bazán y Pedraza, construyó una

⁶⁷⁵ A. HESPANHA, *Depois do Leviathan*...433.

⁶⁷⁶ A excepción de Nonogasta y Anillaco del Valle de Abaucan que vemos en otro lugar y de la de Araupatis-Yuctubas que veremos en el capítulo siguiente.

⁶⁷⁷ La diferencia sustancial está dada por el impulso de la cartografía que significó la decisión de mensurar en un plano o mapa, acompañando el título, que se vislumbra en el último cuarto del siglo XVIII, en el Tucumán y en la naciente Córdoba del Tucumán.

⁶⁷⁸ Stefano MANNONI- Manuel MARTÍNEZ NEIRA, “Presetazione” al Dossier “Percorsi del centralismo borbónico in Francia e Spagna nel XVIII secolo”, *RQE*, XXVI, Dott. A. Giuffré Editore,13. En línea en <http://www.centropgm.unifi.it/quaderni/26/index.htm> (Consultado el 21/03/2016)

identificación de que la “justicia” y la “administración” iban de la mano de la exclusión de los “indios bravos a guerrear”. Éstos iban a ser reducidos, desterrados o como le llaman ahora *desintegrados* o desestructurados etnicamente de su ecosistema andino y se los asignarían en reducciones, en encomiendas, sitiados por real provisión o en pueblos de indios. Pero ahí me detengo: hay un *agire social*, descontado el móvil económico y no tanto un problema de construcción del poder o del *stato*, sino un accionar humano inspirado en motivos racionales (y racional-religiosos) direccionado por valores y con el objetivo y realización de normas autónomamente establecidas⁶⁷⁹. Dicho de otra manera, los mercenderos (aquí va remarcada la horizontalidad entre sus miembros, su corporación, entendida como confraternidad, *convivium*, memoria y culto de sus muertos, ayuda, paz, protección entre ellos y su no armonía reglada a que las disputas vayan saldadas entre ellos mismos) debieron construir en las tierras conquistadas el elemento comunitario de unión entre parientes, co-residentes y ancestros. Debieron, en definitiva, construir ancestralidad. Y la merced de tierra fue el haz (Góngora) legitimador.

⁶⁷⁹ En ese sentido hemos tomado parte de esta interpretación weberiana de la cultura jurídica de Otto Gerhard Oexle, Cfr. O.OEXLE “Vom ‘Staat’ zur ‘Kultur’ des Mittelalters. Problemgeschichten un Paradigmenwechsel in der deutschen Mittelalterforschung”, 15 y ss, en Natalie Fryde, Pierre Monet, Otto OEXLE y Leslek ZUGNER (coords) *Die Deutung der mittelalterlichen Gesellschaft in der Moderne- L’imaginaire et les conceptions modernes de la société médiévale*, 2006, ed. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

§ 19. MERCED DE ARAUPATIS-YUCTABAS O DEL BAÑADO DEL PANTANO



Foto de un torreón o atalaya del fuerte Pantano o Bañado del Pantano, en Julián CACERES FREYRE, “El fuerte del Pantano”, en *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, I, Buenos Aires, p. 119, 1937

Partiendo de un análisis estructural del espacio llamado *Bañado del Pantano*, probemos detenernos unas líneas por fuera del *ius* y referirnos a elementos contextuales y discursos emitidos ante y sobre dicho desértico enclave, también llamado valle de Pacipas o Paxipas. Como leímos, ya la local “Revista de la Junta de Historia y Letras” tuvo dificultades para designar la transcripción de fuentes del título de la merced a la que denomina de “araupatis-yuctubas o bañado del Pantano”. Es decir, la denomina con las dos parcialidades indias —los araupatis y yuctubas— que habitaron el valle de Palcipas y adjunta, a estos dos topónimos indios, la denominación hispana posterior de Bañado del Pantano. El entonces Bañado del Pantano referencia unas tierras bajas, regadas estivalmente por el arroyo Salado que desciende de las quebradas y valles de Abaucán y de Pomán, y del salar de Pipanaco, que perteneció a la antiguas jurisdicciones de Londres (de Zurita en 1556, Nueva Inglaterra, San Juan Bautista de la Ribera del Pomán 1633, Andalgalá, para después repartirse entre las de San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja). La simple enumeración de los primeros intentos por efectivizar el *dominia hispania* en este espacio da cuenta de las resistencias y discontinuidades del

proceso de apropiación del espacio. La zona fue escenario principal de las guerras calchaquíes con las continuas escaramuzas durante toda la mitad del siglo XVII. Asimismo, para el proceso de ocupación efectiva del espacio, dependió de dos eventos no muy claros, aunque decisivos, como lo fueron la construcción del Fuerte de San Blas del Pantano con el establecimiento anexo de una reducción de indios —desnaturalizados y amigos— en el *presidio* del mismo nombre, en 1633, y la concesión, en 1687 de la merced de tierras al vecino Gil Bazán que la ubican en la más grande superficie, medio millón de hectáreas, de una merced de tierras documentada⁶⁸⁰. Es probable que haya sido el mismo Cabrera, vencedor de los indios calchaquíes rebelados a la cabeza del cacique Corenhuilla⁶⁸¹, quien haya ordenado la construcción del fuerte. Después de refundar Londres, en 1633, el general ingresó en el valle de Pacipas donde estableció el presidio de un millar de indios con tres docenas de españoles. Dice Lozano, quien documenta explícitamente el periodo,

“asentadas las cosas de la nueva población [Londres del Pomán], se resolvió [el gobernador Felipe de Albornoz que] el general Jerónimo Luis de Cabrera pasar a pacificar el valle de Paccipa, donde siendo precursora su fama, causó tal terror su marcha, que trataron de adelantarse a ganar su gracia con el rendimiento antes de experimentar con la resistencia sus iras armadas. Acertados consejos que les libro de grandes trabajos y les granjeo la benevolencia del General quien, olvidados sus enormes desaciertos, los trató benigno, y recogiendo de todo aquel valle con mil y doscientas almas las redujo a una población distante veintiséis leguas de La Rioja y doce de Londres, en donde puso un presidio de treinta y cinco españoles que a ellos

⁶⁸⁰ Para el título, “Merced...”, en *RJHLLR*, La Rioja, 1942, año I, núm 3,32 y ss.. En 1909, el agrimensor Hilarión Furque tradujo las medidas de los títulos “dos leguas de ancho y largo” por dieciséis leguas cuadradas, más la superficie del bañado de Sunchales y la Ciénaga lindando al norte con los médanos de Londres, y las marcas naturales de las sierras (v. gr. “de cerro a cerro”) determinando en el juicio de mensura que la *propiedad* tenía 569.635 hectáreas, AHCa, Paquete 1, expte. núm 18.390, año 1905, f.5.

⁶⁸¹ Coren Huilla, según Samuel Lafone Quevedo “el que habla o avisa del oro”, S. LAFONE Y QUEVEDO, *Londres y Catamarca*, Buenos Aires, ed. Imprenta Mayo, 1888,34.

les sirvieren de freno contra los demás rebeldes de defensa, y le llamaron fuerte del Pantano”⁶⁸².

Este fuerte debió ser importante vía de comunicación (comercial, militar y étnica) entre la tercera y quinta década del siglo XVII, y figura en el primer mapa del *Tucumania*. Allí se cartografía, por primera vez, la ciudad de Rioja, y las estancias riojanas de Musit(i)án, Symbolan, (A)Milgancho, Minas de Famatina, Valle de Pacipas propiamente dicho, el Fuerte (del Pantano), Chumbicha y Capayán, mapa realizado por encargo del padre Diego de Torres en 1636, y que constituye la más antigua representación cartográfica de la jurisdicción de Todos Los Santos de la Nueva Rioja⁶⁸³.

⁶⁸² LOZANO, *Historia de la conquista...* op.cit, IV, 94.

⁶⁸³ Fue Furlong, quién reprodujo el mapa en cuestión aquí reproducido, Guillermo FÜRLONG, *Cartografía Jesuítica del Río de La Plata*, Buenos Aires, ed. Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tomo I, 221 y II, VI, 1936.

Mapa N° 6: *Tucumanía* en 1636



Los cronistas y documentos públicos que mencionan acontecimientos situados en el fuerte del Pantano abundan. En 1643, el padre Tello bautizó a numerosos naturales en él⁶⁸⁴; en 1654, el teniente de gobernador de San Juan Bautista de la Paz (Londres), avecinado en el “Fuerte de San Blas del Pantano”, comisiona la puesta en posesión de Gonzalo de Barrionuevo de la merced de Acnín o de las Campanas concedida por el gobernador Roque de Nestares Aguado⁶⁸⁵, como asimismo las numerosas cartas hacia y desde el fuerte, entre ellas una que da el alarma de que los indios pacidas (*paxipas*) sitiados del fuerte se habían “alzado y unido” a la rebelión del falso inca en abril de 1658⁶⁸⁶. Hacia el momento de la concesión de la merced de tierras de araupatis, yuctabas o Bañado del Pantano en 1687, el fuerte estaba destruido y los indios reducidos en masa en Huaco.

A partir de que el arqueólogo Eric Bonam informara, en 1914, el descubrimiento de las ruinas del fuerte, se han sucedido variados estudios sobre el Bañado del Pantano⁶⁸⁷.

⁶⁸⁴ Nicolás DEL TECHO, *Historia de la provincia del Paraguay de la compañía de Jesus*, Madrid, 1897, t. V, 220.

⁶⁸⁵ *Merced de Acnín o de Las Campanas*, en RJHLR, año II, núm. 3,28.

⁶⁸⁶ AGI, Charcas, 58, Carta del cura de Famatina, Juan Gedeón de Guzman dirigida al Sr. Maestre de campo, Juan Gregorio Bazán de Pedraza, alcalde ordinario de Los Santos [de la Nueva Rioja] fechada el 24 de abril de 1658; Hernado de TORREBLANCA, *Relación histórica*; Teresa PIOSSEK PRESBICH; *La rebelión...*; el padre Castells cita “una carta de Francisco de Nieva y Castilla, teniente Gobernador y Capitán á Guerra” de la ciudad de Londres dirigida al Capitán Alonso Doncel. Da cuenta del alzamiento de las reducciones del Pantano y que Luis Enriquez, mestizo y líder indio de amplia participación como aliado “se ha ido con su gente y familia a Calchaquí”, pide gente de guerra, armas y municiones y que se dé aviso al gobernador, fechada en Londres, 3 de mayo de 1658, PASTELLS, *Historia de la Compañía de Jesus en la provincia del Paraguay*, Madrid, ed. Librería General de Victorino Suárez, 1915, t. II, 119-120.

⁶⁸⁷ Eric BOMAN, “El fuerte del Pantano”, en LA NACIÓN, del 9 de julio de 1914. Ya había publicado E BOMAN, *Antiquités de la region andine de la République Argentine*, 2 tomos, Paris, 1908; Id. “Estudios arqueológicos riojanos”, en *Anales del Museo Nacional de Historia Natural Bernardino Rivadavia*, t XXXV, Buenos Aires, 1927-1932; Julián CACERES FREYRE, “El fuerte ...” 107 y ss; Id.

Antes de que el orden jurídico indiano le confiera al sujeto Gil dispositivos y poderes prelativos del espacio terrícola de Palcipas mediante la merced de tierras, ya habían pasado casi tres décadas del alzamiento (1658 a 1687) y siete gobernadores⁶⁸⁸, y solo a Mercado Villacorta, en sus dos períodos gubernativos, se le atribuye la desnaturalización efectiva de once mil indios⁶⁸⁹. Si enfatizamos el aspecto bélico, nos encontraremos en la necesidad de insistir sobre la dualidad indios rebeldes e indios amigos y el *asistiamiento* por composición de las familias de los primeros, en aposentos de los españoles con capacidad económica y simbólica para *asistiarlos* en los propios dominios, cuya desnaturalización, huelga reiterarlo, modificó la percepción jurídica del espacio del valle de Pacipas o del Pantano por parte de la élite dominante. Pero dentro de ésta no todos habían aportado a las *caxas* de guerra como los Bazán Pedraza, y si lo hicieron, fue con variada intensidad. De allí que sea más entendible el razonamiento de Gil, que en su petición invoca un orden prelativo: ante la eventualidad de que las tierras de sus encomendados sean de alguien de la élite, él está en preferencia por sus cargas y servicios, entre ellas, las de tenerlos sitiados por Provisión real a los desterrados, en su estancia de Huaco.

Si los discursos judiciales de principio del s. XVII comienzan a negarle entidad al indio (“ningunos indios de encomiendas han tenido hacienda propia tierras ganados ni otra ninguna cosa, ni trato ni contrato ni servicio en posesión ni propiedad ni derecho a un palmo de tierra” declaraban en 1610, o “porque a los indios no se les hace merced de tierras, ni tienen capacidad para ello” decía otro en 1623)⁶⁹⁰, hacia 1670 los yuctabas ya habían sufrido la despatrimonialización efectiva del valle de Pacipas y la

“Fabricación del Patay en los Algarrobales del campo de Palcipas (La Rioja y Catamarca)2, Lima, ed. Médica, 1955, 3-28, separata de la *Revista Folklore Americano*, año III, núm.3.

⁶⁸⁸ Alonso de Mercado y Villacorta, Jerónimo Luis de Cabrera, Lucas de Figueroa y Mendoza, Angelo de Peredo, Juan Diez de Andino, Antonio de Vera y Mújica y Fernando de Mendoza y Mate de Luna.

⁶⁸⁹ A. ZINNY, *Historia de los gobernadores...* t.I,140

⁶⁹⁰ Véase § 16, nota 536. Y la comentada sita de Bernal de Mercado “*porque a los indios no se les hace merced de tierras, ni tienen capacidad para ello, ni ellos venden ni compran tierras, ni tienen otra cosa*” en AHCo, escribanía 1, leg. 25, expte. 4, fol. 177 y 178.

desestructuración de su jefaturas étnicas. Solo podemos hipotetizar que el eje de esta desestructuración étnica se basó en que la fuerza de trabajo más óptima (jóvenes y sanos) había sido trasladada forzosamente a Huaco en 1666, mientras que los viejos y algunas familias aliadas perduraron en sus tierras, cuidando las acequias y participando de las algarrobeadas para la elaboración del principal producto de la región al que los cronistas españoles llamaron, como vimos, pan de San Juan.

La historia inmobiliaria del territorio pacipeño —y de ahora Bañados del Pantano— en 1691 nos muestra un instrumento público como el título de la merced que transcribe la puesta de posesión —y de paso historiza—:

“POSESIÓN—en el pueblo viejo de araupatis (...) sobre el rio bermejo que llaman del Pantano (...) yo el comisionado D. Sebastian Maldonado (...) mandé comparecer al actual cacique quien dijo que ahora años vivió con muchos sobre el dicho rio una legua rio arriba del dicho pueblo de Araupatis donde dice que fue reducido con los indios de su parcialidad desnaturalizados del pueblo viejo de Aimogasta, muchas leguas distante de este parage, y en presencia de dicho cacique (...) con el titulo de merced real en mano, leído, visto y reconocido lo contenido en él cogí de la mano al capitan (...) y le dí posesión en nombre de dicho su parte, judicial, real, actua, corporal, juere domini vel quasi del dicho pueblo de araupatis paeandolo como a las nueve de la mañana de dia claro; asimismo tomó posesión del pueblo de yuctabas que cae de la otra banda y del bañado del sunchal (...) y el dicho aprehendió arrancando yerbas y cortando pastos, mandó a los circunstantes desembarasasen aquellas tierras y pertenencias contenidas en dicha Merced”⁶⁹¹

Aún sosteniendo que podemos sobrevalorar la documentación pública (y la fuente édit) en la constitución real del orden jurídico histórico, es temporalmente evidente que a partir de esa fecha los naturales de ese espacio devenían en “circunstantes” y la autoridad de aplicación del sistema colonial mandaba a que esas “tierras y pertenencias” sean desembarazadas, es decir, no embarazos de dominio ni comunal ni regio. El peso en la intersubjetividad parroquial es aplastante. ¿Por qué el Cacique de Aimogasta Don

⁶⁹¹ Merced de Araupatis y Yuctabas o de los Bañados del Pantano, en *RJHLLR*, núm. 331

Alonso no se opuso o la contradijo y dejó que firmara por sí el alferez? ¿Son los araucanos unos indios amigos? ¿Son aliados de los españoles contra los de nación calchaquí?

Sabemos, por las parcialidades que acompañaron a los yuctabas en su sitio de Huaco (como los Andalgalás), que en 1720 hubo una desmovilización y migración hacia sus tierras de origen los que llevó a sus dominios del Bañado del Pantano. Es allí que los indios desterrados, en contacto con los jesuitas de Huaco habrían adquirido los conocimientos sobre el cultivo de especies tales como pimentón y comino, que reintrodujeron acompañando las clásicas tareas de tala, caza, recolección y elaboración de derivados de la algarroba (chicha y patay).

¿Qué había pasado con la merced de tierras concedida a Gil en 1687 y puesta en posesión en 1691? ¿Hubo una conmutación de tributos por tierra? ¿O los entonces ocupantes fueron aliados de los españoles como ejércitos de auxiliares de frontera y, en cuanto tales, incapaces de reclamar posesión inmemorial?

Independientemente de los reclamos de pretendientes herederos de Gil en 1909, estamos en condiciones de afirmar que hasta 1983 hubo un uso colectivo de la tierra⁶⁹².

⁶⁹² Existe una cantidad importante de estudios -producidos principalmente desde el campo demográfico y sociológico- que, desde diferentes perspectivas teóricas, abordan la problemática de articulación de los sectores campesinos comuneros con las empresas agroindustriales, que, como en este caso, documentó Cáceres Freyre en relación a la producción de patay para los obreros de los ingenios azucareros tucumanos. Tsakoumagkos plantea, en un artículo sobre campesinos que integran ramas agroindustriales en Argentina, que estos presentan ciertas características comunes al noroeste argentino. Ello nos permite ubicar a los actores sociales de nuestro caso en un contexto conceptual, geográfico y temporal más abarcativo, llamado mercado extrapampeano o zona extrapampeana. Constituyen en su mayor parte agricultores del norte o pequeños ganaderos de zonas áridas. Aunque son productores domésticos de subsistencia, ello no implica que predomine el autoconsumo, ni que se encuentren aislados comercialmente. En cambio, producen para el mercado de manera subordinada al modo de producción capitalista de, por ejemplo, azúcar, aportando harina de algarroba y valor agregado en el patay para el consumo de la mano de obra *cañera*. Hacia el 1900, los egresos de patay mensuales a la zonas azucareras indujeron al Estado provincial a tasar en un centavo el patay, lo que demuestra serialidad y una constancia que no poseían otros productos extractivos como el carbón vegetal ni la producción caprina. Véase TASKOUMAGKOS, Pedro. "Sobre el campesinado en Argentina", en: POSADA, M (comp), *Sociología rural argentina*, Buenos Aires, ed. Centro Editor de América Latina; 1993. También, Gabriela OLIVERA , "olivo, políticas sustitutivas y heterogeneidad agraria (La Rioja 1940-1970)", en Mundo agrario, núm. 2, <http://www.fahce.unlp.edu.ar/mundoagrario/nro2/Olivera.htm>

La entrega de 166 parcelas a propietarios en 1984 supuso el fin del pueblo de indios y la incorporación al mercado de tierras de predios comunales. No obstante ello, aún hoy pervive la práctica comunitaria de arreglo anual de la “toma” u obra de canalización del río a las diversas chacras individuales, donde es probable que no hubiera sido menester modificar en gran medida la red de acequias construida desde tiempos prehispanos⁶⁹³.

Etnográficamente, es posible trazar algunas hipótesis. Los araupatis, denominativo que llegó hasta nuestros días en virtud del nombre de Arauco de la actual alcaldía, era una versión quichuizante y apelativo englobado de las parcialidades de yuctubas, pipanacos y pacipas, y éstos no eran tan homogéneos como tribu identitaria y única. Eran, tal vez, un conglomerado reducido y reasentado allí por un plan general de poblamiento y desnaturalización (como estrategia militar imitada de la de los incas para con sus adversarios) atribuida al orden colonial que incluía el repoblamiento de zonas hostiles con indios amigos (del cual los autos del gobernador Mercado⁶⁹⁴ sobre composición de piezas y reconversión de éstas en encomiendas serían el emergente de dicho plan). Aunque la guerra no sea incompatible con el tráfico de patay, aloja, chicha y maíz, la presión por devenir en aliados de los españoles pudo romper la mentalidad inicial de resistencia y rebeldía que enfrentaban a los indios mitimaes mercenarios amigos de los españoles y mayordomos de encomiendas de aimocaj —pueblo del cacique Aimó— que pugnaban por “serviciarlos” y encomendarlos.

En otras palabras, el descuartizamiento del jefe famatina Corinhueilla en 1630 y la exhibición de los miembros de su cuerpo en los pueblos indios, como escarmiento a las nuevas rebeliones, habría creado un estado de circunscripción social de la población india. De allí que los curacas tuvieran cada vez más dificultad de mantener la unidad de

⁶⁹³ Los estudios arqueológicos han descubierto utensilios de diversa índole (pipas, alforjas, morteros) y cementerios (huacas) que, además del complejo del fuerte y la ramada, integraron el espacio ecológico en cuestión. No hay, sin embargo, estudios arqueológicos de datación de las obras de irrigación. Comunicación personal de la Ing. Hídrica Cecilia Mercado Díaz (2005).

⁶⁹⁴ Los argumentos expuestos por el gobernador Mercado sobre las “piezas” indias “*para que los hayan y posean por propia merced y feudo*”, contenidas en AGI, Charcas, 122 y fechadas en La Rioja el 17 de mayo de 1667, han sido ya descriptas como un pasaje de composición de piezas indias a encomendados por medio de este auto, por A. GONZALES RODRIGUEZ, *La encomienda*, 29 y ss.

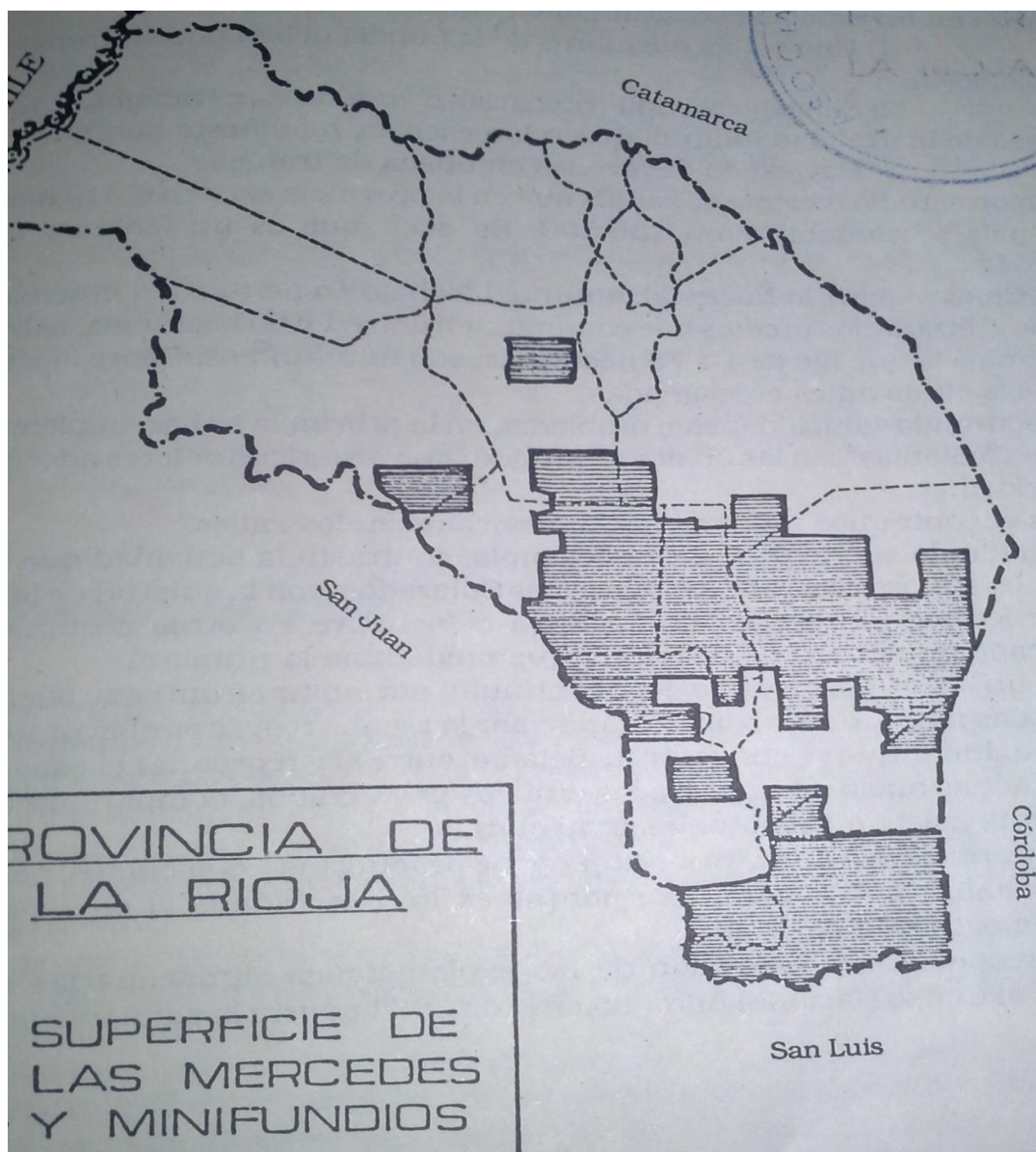
criterio opositor ante el invasor, y hayan aceptado la tarea de “sujetarse”, hayan construido un fuerte en el centro de sus dominios y se hayan comprometido a relocalizar a su gente, toda junta en chozas o ramadanes, con tres atalayas de barro y adobes de unos diez metros de altura, a las que los foráneos llamaron “reducción”.

Pero en este intento inicial de dos décadas (1630-1656) en que los invasores alegaban cuestiones de “doctrina”, no solo se comprometían prácticas de algarrobeada y las celebraciones de chicha y la introducción de nuevos cultivos como el trigo en reemplazo del pan de harina de algarroba, ahora había entre ellos “mestizos”, hijos de indias nobles que oportunamente los expedicionarios, en prenda de paz, habían tomado y “servido” en 1607 y 1608. Y, en algunos casos, hubo mandones mestizos (es decir hijos de madre india y padre español) como Luis Enriquez, autoridad e los yuctabas de destacable actuación entre las filas hispanas o traidor a su etnia india, según la relectura que demos del período⁶⁹⁵.

Contrariamente a lo que suponíamos, es a mediados del siglo XVII donde, desde el punto de vista legal, afirmamos que se sustancia la efectiva despatrimonialización del bien jurídico de la tierra yuctuba: el sujeto (este colectivo indio o su jefe indio o jefes indios o el conjunto de individuos que las fuentes describieron como yuctubas, araupatis, asampatis, paxipas o andalgualas) ha sido privado de su tierra por el mercendero por este acto formal de posesión de merced de tierras mencionado (y eso es “indebido” según el sistema colonial). La ausencia de un “litigio” motivado por una causa concreta de desposesión de un bien raíz no se debió a la falta de interés de los desposeídos sino en la imposibilidad de éstos de oponerse, contradecir o accionar —en uso de los recursos de amparo— a favor de sus intereses jurídicos en contraposición de

⁶⁹⁵ Luís Enríquez, mestizo y *mandón* de los Yuctabas, fue uno de los estrategas locales en la guerra calchaquí encabezada por Bohórquez y la Gobernación tucumana. Casado con la hija del *curaca* de los Malligastas, Aballay, en el fuerte del Pantano por el cronista jesuita Hernado de Torreblanca en 1639, será años después, suegro de Bohórquez al casarse este con una de sus hijas y general —por portador de una replica del bastón o manopla de mando del falso inca— de los rebeldes para luego negociar con los encomenderos sus propios privilegios de volver a *sujetarse* a los encomenderos. Véase a H de TORREBLANCA, *Historia...*, P de PASTELL, , T PIOSSEK, , A MONTES, . Para un resumen del estado de las investigaciones sobre el señorío de los araupatis, véase Adrián MERCADO REYNOSO, *El inka volverá...*233 y ss.

Gil. Los perjuicios derivados por la ausencia de tutela de los vasallos indios yuctubas por el sistema colonial tucumano (v.g. acciones de oficio del protector de los naturales) habría que buscarlas en la naturaleza misma del derecho de conquistador y del desterramiento de 1667 y la pérdida —de allí en más— del vínculo posesorio “inmemorial” para 1691.



Mapa 7: mercedes según representación gráfica del geógrafo R. Díaz

fuelle: Ramón DÍAZ, ET AL, *La Rioja. Encrucijada de aridez y esperanza*, ed.

Magisterio del Rio de La Plata, Buenos Aires, 1989, 123.

§ 20. LOS FUNCIONARIOS JURISTAS

En el estudio de las ideas impresas y del lenguaje global americano sobresalen los teólogos y los juristas, las únicas profesiones posibles del *intellighenzia* colonial. Un caso destacado fue el del funcionario peruano Juan de Matienzo, oidor de la Audiencia de Charcas y visitador del virrey Toledo, fuente inexcusable para describir con precisión cómo se implantó un sistema jurídico de derecho indiano.

Matienzo, rigorista e imparable, “fiel representante de Escuela clásica española que se distingue por vincular poder político al bien común, frente a doctrinas posteriores que acentuaron el carácter incondicionado del poder” quiso “entender de raíz las cosas de este reino”⁶⁹⁶. y “amoldar las colectividades española e indígena” en un sistema de convivencia justa⁶⁹⁷.

Según Matienzo, los indios, “*de cuyo sudor nos mantenemos*”, con el sistema de visitas del virrey Toledo “*osaron pedir su justicia de muchos agravios que se les hazian*” y, ya al ver las respuestas del virrey “*los naturales se començaron a asegurar y a entender que thenian el gobierno que les combenia*”⁶⁹⁸.

Antes de fines del siglo XVI, los indios llamados yanacones, desarraigados por la Conquista y después por las rebeliones de *Mango Ynca*, aliados del colectivo hispano, llegaron a ponerse bajo la protección de estos grandes mercaderos, recibiendo, entonces, concesiones de mercedes de solares, chacaras o parcelas para el cultivo personal a cambio de trabajos logísticos de guerra para el amo. Tal como vimos en el § 7, dos indios de los cincuenta y cuatro repartimientos iniciales de tierras de La Rioja

⁶⁹⁶ G. LOHMANN VILLENA, *Juan de Matienzo, autor de 'Gobierno del Perú': (su personalidad y su obra)*, Sevilla, ed. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1966, 32.

⁶⁹⁷ E. ACEVEDO, *Barroco y terminología en Hispanoamérica*, Buenos Aires, ed. Ciudad Argentina, 1967, 167.

⁶⁹⁸ Carta de la Audiencia de Charcas a Su Majestad, firmada por los licenciados Matienzo, Recalde y Pedro Ramirez, La Plata, 16 de mayo de 1575 años, en R. LEVILLER, *La Audencia de Charcas, correspondencia de presidentes y oidores, 1580-1589*, Madrid, ed. Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino, 1919, t. 1, 515.

eran portadores de derechos, inclusive, mercenderos de solares y cuadras en la cuadrícula de la ciudad⁶⁹⁹.

Según Juan de Matienzo —quien deseando justificar este sistema, describe vívidamente el modo en que se arraiga un sistema señorial paralelo al del Viejo Continente—, los amos, respecto a los ocupantes locales: “les tratan bien, como hixos, para que no se les huyan” añade, “porque sin ellos no tienen haciendas”.⁷⁰⁰

Además de darles “simientes y doctrina, les visten, les curan” y cuando no “se coge pan suficiente les dan de comer a su costa”. Inmovilidad y mano de obra barata que limite su movimiento libre; así, nosotros los funcionarios regios...

“no les consentimos hacer mudanza”, lo que “ni es quitarles la libertad, ni ir contra las leyes reales mandan” (...) “Ningún indio se pueda salir de su repartimiento sin licencia de la Audiencia, so pena de dozientos acotes por las calles de sus pueblos”⁷⁰¹

No obstante, a los efectos de centrarnos sobre el régimen de la tierra, por cierto, muy emparentado con el sistema de tasación del tributo, y del orden jurídico contextual en el que se hallaba inserta, el valor de aquella era mayor si poseía mano de obra indígena repartida a que si carecía de ella, como está históricamente comprobado. En cierto sentido, el indio allí asentado (yanacona o no), valorizaba o capitalizaba la tierra porque cuando el español vendía las tierras,

“dan más por ellas teniéndolas [a las comunidades indias amigas o yanacones] que sin ellas” (...)“Suelen tambien dezir que el que tiene chacaras y yanacunas en ellos los suelen vender juntamente con la chacra y asi dar más por ello, lo cual no es

⁶⁹⁹ J. Mariluz Urquijo comenta, avalando un principio de no exclusión del indio que “*En principio puede ser beneficiario de la merced cualquier vasallo sea español, indio o negro libre. En los primeros tiempos de la Ciudad de Mendoza, por ejemplo, se concede un solar a Juan Indio, aborigen de Cuzco y en Botaví (...)*”, J. MARILUZ URQUIJO, *El régimen...*, 37.

⁷⁰⁰ J. de MATIENZO, *Gobierno...*, 19.

⁷⁰¹ J. de MATIENZO, *Gobierno...*50; aunque también del mismo autor, *Gobierno...(1567)*, ed. por Guillermo Lohmann Villena, *Juan de Matienzo. Su personalidad y su obra*. 1966.

inconveniente, y aunque el nuevo amo lo quisiese hechar de allí y quitarles las tierras que labran para si, no se les consentiría, ni esto es cosa nueva”⁷⁰²

El nuevo titular de la tierra que hubiera comprado al beneficiario de una merced con indios asentados, no quitaba (ni podía hacerlo) de la tierra a los yanacones, cuyos hijos y descendientes permanecían en ella. Finalmente dice Matienzo:

“lo mesmo hacen en España señores que tienen vasallos solariegos...”⁷⁰³

Y recomienda que esto debería ser reconocido por la ley.

En toda América, la colonización fue muy rala y extensiva, reducida a varios centenares de miles de españoles sobre millones de aborígenes de varias naciones. Ello influiría en las formas jurídicas y el carácter definitivo de la toma de posesión del suelo, si este suelo estaba espacialmente situado en comunidades excenditarias. En otras palabras, hubo un campo más propicio para las “formas” de títulos regios de mercedes de tierras y de encomiendas en las zonas de dominación de los imperios aztecas, incaicos y en áreas guaraníes que en las regiones donde existían indios no sedentarios, quienes dificultarían la asimilación religiosa, política y legal hasta el siglo XIX , como sucediera con los araucanos de la Patagonia⁷⁰⁴.

Por ejemplo, otro oidor, Alonso de Çorita, describe las relaciones sociales y jurídicas de los aztecas, ocupantes del valle de México, en particular respecto a las tierras

⁷⁰² J. de MATIENZO, *Gobierno...*, 39.

⁷⁰³ J. de MATIENZO, *Gobierno...* 79.

⁷⁰⁴ Junto al traslado forzado, la misionalización religiosa fue un parte fundamental de la política de dominación de la corona española sobre los indígenas en América. Sin embargo, no en todos los casos se encontraron comunidades sedentarias, que permitiera un rápido sometimiento y cristianización. En las zonas desérticas de la Baja California y la costa del Golfo de México, los misioneros jesuitas, dominicos y franciscanos intentaron establecer, con poco éxito, comunidades estables basadas en la agricultura, que permitieran la congregación de los pueblos errantes de la zona y el desarrollo de la evangelización. Véase Robert H. JACKSON, “Una frustrada evangelización: las limitaciones del cambio social, cultural y religioso en los ‘pueblos errantes’ de las misiones del desierto central de Baja California y la región de la costa del Golfo de Texas” [*A Frustrated Evangelization: The Limitations to Social, Cultural and Religious Change Among the “Wandering Peoples” of the Missions of the Central Desert of Baja California and the Texas Gulf Coast*], State University of New York, Oneonta, *Revista Fronteras de la Historia*, Vol 2, No 2, ICCH Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 1998.

llamadas *pilalli* y *pilales*, de gran importancia durante la llegada de los españoles y que consistían en bienes raíces, poseídos como propiedad privada y a título individual, constituyendo los “patrimonios de los principales y venían de padres a hijos”⁷⁰⁵. Además, a diferencia del particularismo peruano, podían venderse o cambiarse y existían unos planos catastrales que reflejaban esta diversidad de distritos aldeanos representados por colores según fuesen de carácter público, de Moctezuma o privados. Sus titulares, además, constituían una verdadera nobleza hereditaria de sangre tolteca, pues eran “señores”, “no porque tengan señorío ni mando, sino por linaje”, según nos explica el oidor Alonso de Zorita.

Es absolutamente trascendente la división que hace Zorita entre la titularidad y el beneficio de quien las trabaja, estos segundos no dejaban por ello de considerar como personales las tierras que trabajaban, como describe el oidor Zorita, “poseían el ‘dominio útil’ de ellas” mientras que los dueños “tenían el ‘dominio directo’”⁷⁰⁶

La trascendencia de esta distinción demuestra que el derecho indiano no es inmune a la discusión europea⁷⁰⁷ respecto a que si el “dominio útil” es una creación magistral o una aberración ante la tradición romana⁷⁰⁸.

⁷⁰⁵ Alonso DE ÇORITA, “Breve y sumaria relación de los señores... en la Nueva España por el doctor Alonso de Çorita”, publicado en la *Colección de documentos para al historia de México*, de Joaquín GARCÍA ICAZBALCETA, México, ed. Porrúa, 1980, vol 1. 85; también en G. Pomar-Zurita, *Relaciones de Texcoco y de la Nueva España*, México, ed. Chávez Hayhoe, 665. José BARRIENTOS Grandón, en *Literatura jurídica indiana y el ius comune*, en “Historia de la literatura jurídica en la España del antiguo régimen” (Javier Alvarado ed.), Madrid, 2000, ed. Marcial Pons, ubica a Alonso de Çorita como tratadista civilista, y señala “Fue autor de una inédita *Suma de los tributos, relativa a los indios*, desconocida hasta ahora”, la cursiva del autor. Alonso de Zorita ha escrito un manuscrito titulado *Leyes y Ordenanzas reales de la Indias del mar Océano por las cuales primeramente se han de librar todos los pleytos civiles y criminales de aquellas partes y lo que no estoviese determinado se ha de librar por las Leyes y Ordenanças de los Reinos de Castilla*, reproducido de facsímil que se encuentra en la Biblioteca Real, Palacio de Oriente, Madrid, fechado en México en 1574, y ed. por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, 1983-1984, 645; también, *Relación de algunas de las muchas cosas notables que hay en la Nueva España y de su conquista y pacificación y de la conversión de los naturales de ella*, México, E. RUIZ MEDRANO-Wiebke AHRNDT- J. M. LEIVA (ed.), Conaculta, 1999, 2 vol.

⁷⁰⁶ Alonso DE ÇORITA, *Breve y sumaria ...*, 152-154.

⁷⁰⁷ Véase a Edmond MEYNIAL, *Notes sur la formation de la theorie du domaine divise, domaine direct et domaine utile, du 12. au 14. siecle dans les romanistes: etude de dogmatique juridique*, Estr. Melanges Fitting, II, Montpellier, 1908, 411 y Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI, *Propietà e diritti reali- Usi e tutela della*

“*Il dominio utile* —nos señala Grossi— *è creatura tutta ‘magistrale’, è cioè uno dei frutti più tipici e rilevanti del lavoro creativo dei maestri del diritto comune classico e la testimonianza dela capacità di invenzioni teoretica sensible alla prassi cotidiana e protessa a ordinarla*”⁷⁰⁹.

En el Nuevo Mundo del año 1600, la praxis cotidiana no podía ser solamente contemplación de la vida jurídica o a la disquisición abstracta en torno a toda la organización feudal del dominio de la tierra, donde florecerán situaciones de precariedad, enfiteusis, locaciones y colonias perpetuas de largo plazo, concesiones atípicas *ad longum tempus*, nunca antes vistas, que mostraban “situaciones reales” de acceso a la tierra, y que varios *speculatores* habían descubierto como *dominia utilia*. Es por ello que, *iurisconsulti* como el oidor Zorita pudieron diferenciar el dominio útil de la tierra, por parte de los indios, mientras que el dominio directo —en una moderna visión estatalista— era preservado para la corona castellana, en tanto ésta era “depositaria” de las entidades para-estatales inca o azteca⁷¹⁰.

Chevalier nos dice que esta situación *de facto*, descripta largamente por el oidor Matienzo, reproduce casi exactamente el primitivo señorío europeo: esencialmente una tierra dominada por un señor y poblada por siervos de la gleba (*villa* en latín). En ella había dos partes: la poseída por el señor (*indominicatum*) y las tenencias de los

proprietà fondiaria nel diritto romano, Roma, ed. Il Cigno Galileo Galilei, 2002, especialmente el cap 6, “I Giuristi spagnoli del XVII secolo” 212 y ss.

⁷⁰⁸ Un regla del famoso fragmento de Ulpiano (D. 13, 6, 5, 15) en el cual fija que no se puede dar más de un dominio a la misma cosa.

⁷⁰⁹ GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milán, ed. Giuffrè, 1992, Vol. 41, 246 y ss.

⁷¹⁰ José BARRIENTOS GRANDÓN, (ut *supra*), al intentar una clasificación sobre los juristas indianos y sus obras, los divide en comentaristas de fuentes romanas y de fuentes reales, y una multiplicidad de tipos prácticos “Las obras de los juristas del *mos italicus* tardío, es decir de los siglos XVI y XVII, se caracterizan, entre otras cosas por la declinación de los grandes comentarios a textos justinianeos, por el auge de los comentarios a la legislación real y por la aparición o fortalecimiento de diversas obras de carácter marcadamente más práctico que las escritas por los glosadores y comentaristas”. Estas obras las divide—siguiendo una clasificación de Gerhard Holtöfer— en ‘consiglia’, ‘responsa’, ‘controversiae’, ‘quaestiones’, ‘allegationes’, ‘practicae’ y ‘tractatus’. Alonso de Zurita (c.1511- c.1585) nació en Córdoba, Andalucía y murió en Granada. Se graduó de licenciado en la Universidad de Salamanca y de Doctor en la de México.

naturales (siervos). Estos no podían salir de la parcela de tierra asignada o de las que ya eran tenedores —por ejemplo, de casas, bañados y bestias— si bien tampoco se los podía expulsar de ellas. Según Bloch, el señorío, como categoría analítica muy anterior al feudo, no era sólo una “empresa económica” sino “un grupo de mando”⁷¹¹.

Siguiendo a Chevalier podemos afirmar que, en lo esencial, el régimen señorial era sencillo. Tanto en América como en Europa habían surgido nuevas necesidades de cultivo estable de la tierra, así como de acumulación de excedentes más vastos debido a las necesidades de un imperio jamás visto en su extensión y perteneciente a una sociedad jerárquico colonial cuyo orden normativo se situaba en función de ese orden y esa jerarquía. El sometimiento material y cultural de los indígenas —que en el siglo siguiente devendrían campesinos— tuvo, sin que haga falta ahondarlo aquí, como contrapartida, la protección —adoctrinamiento— y relativa seguridad proporcionada en tiempos difíciles por los vencedores, a través de políticas de inversión pública e instrucción y que hoy llamaríamos de “compensación”. Ello se daría como consecuencia de los graves desórdenes de la conquista y la culminación de los últimos focos de rebelión como lo fueron las guerras calchaquies de mediados del siglo XVII, en un sistema que oscilaba entre protección y opresión.

Si el modo de regirse era señorial, la merced real sería el instrumento jurídico funcional del régimen. Un régimen que no era feudal —“la feudalidad no se implantó de hecho en el mundo hispánico” (F. Chevalier⁷¹²). “No hay que olvidar que aún cuando en Castilla y León no hubo feudalismo en el sentido político de la palabra, —desmembración de la soberanía— sí existió una acentuada influencia feudal en el orden social y en el orden económico” (J. Ots Capdequí⁷¹³). Un régimen, finalmente, que era señorial, en cuanto tal, dado que apenas establecidas, las relaciones entre el “Señor” y

⁷¹¹ M. BLOCH, *Les caractères originaux de l'histoire rurale française*, T. 1, cap. III, y t. II, “*Supplément établi d'après les travaux de l'auteur par Robert Dauvergne*”, París, 1956, 79 y 97.

⁷¹² F. CHEVALIER, *La formación...*, 96.

⁷¹³ J. OTS CAPDEQUÍ, *El régimen de la tierra...*, 20.

súbditos “estaban regidas por la costumbre” (M. Bloch⁷¹⁴). Esta costumbre local no escrita, “inaccesible a la ley” (C. Gibson⁷¹⁵), no era producto de la voluntad de las personas, sino que fue un producto histórico del poder del Estado⁷¹⁶, por lo que necesariamente debemos detenernos para precisar siglo y espacio. Así, la gobernación del Tucumán, bajo la Audiencia de Charcas y el Virreinato de Toledo, en una constante guerra de ocupación, conflicto y alianzas fueron, tal vez, el escenario propicio para que se diera el desdoblamiento entre título de tierras y el *status* dominante, relegando la *detentatio* a los indios.

§. 21. AMPAROS A A FAVOR DEL INDIGENADO SITUADO EN REDUCCIÓN DE INDIOS

A favor de los derechos personales de los indígenas, “todo lo quo se Ordena en su bien se convierte en su daño y lo que se Previene en su alivio se tuerce en su ruina” dirá Gaspar Escalona Agüero en su “Código Pervano”⁷¹⁷ de 1635.

Las medidas cautelares del derecho indiano aplicadas en el Tucumán colonial requieren de un estudio específico que aquí no haremos. Más aún, la magnitud de los amparos a favor del indigenado ubicado en pueblos de indios o en reducciones en La Rioja no puede ser evaluada por los relativamente pocos expedientes de amparo que nos

⁷¹⁴ M. BLOCH, *La société féodale*, t. 1 “*La formation des lignes de dépendance*”, Paris, ed. Col. L’Evolution de l’Humanité, 1940, 81. Traducción al español *La sociedad feudal*, México, ed. UTEHA, 1958, “Libro III, Los vínculos de dependencia de las clases inferiores, Capítulo Primero: El Señorío, I. La Tierra Señorial”, 279-293.

⁷¹⁵ C. GIBSON, *The Inca Concept of Sovereignty and the Spanish Administration in Peru*, Austin, The University of Texas Press, 1948, 145 . Y del mismo autor, *España en América*, Barcelona, ed. Grijalbo, 1977, 368.; Idem, *Los aztecas bajo el dominio español: 1519-1810*, México, ed. Siglo XXI, 1986, 531.

⁷¹⁶ Nuevamente a Tomás y Valiente “*El Estado es desde los últimos decenios del siglo XV el aparato supremo desde el cual se ejerce el poder político; es un conjunto de instituciones a través de las cuales actúa imperativamente la soberanía atribuida al monarca (...).Lo cual es una simplificación; porque desde el Estado actúa no solo el poder personal del rey, sino que a través de él y bajo su manto, ejercen ese poder los más destacados miembros de los estamentos privilegiados, la naciente y creciente burocracia y las oligarquías financieras. El poder político centralizado en el Estado ampara preferentemente los intereses de todos esos grupos y las conveniencias y aspiraciones de la dinastía reinante*”, F.TOMÁS Y VALIENTE, *Manual ...*, 262.

⁷¹⁷ Alfonso GARCÍA-GALLO DE DIEGO “El Proyecto de «Código peruano» de Gaspar de Escalona y Agüero, en AHDE 17 (1946) 891.

han llegado hasta nuestros días. Hubo instancias de mediación que no necesariamente se transcribían en documentos públicos ni instrumentos privados.

Según las ordenanzas X, del *Visorrey* Toledo⁷¹⁸ y la normativa alfariana, las reducciones recibieron asignaciones de tierras comunales en usufructo que pertenecían al dominio regio⁷¹⁹; sus ejidos alcanzaban a media legua de contorno respecto del punto central y se destinaban a pastizales de cría de ganados menores (cabras y ovejas), a las chacras de comunidad (maíz y zapallo) –cultivadas a medias con el encomendero que aportaba aperos, semillas y bueyes– y a las chacras de los indios “para sí”. Ya en el gobierno borbónico, la implementación del régimen de intendencias generó un cambio en este sentido que dispuso un empadronamiento de los hombres que vivían en los pueblos de indios y adoptó una serie de medidas como identificar las tierras vacas (vacías) y exigir la regularización de aquellas concesiones que poseían irregularidades mediante, como ya vimos, la “composición”. Ello significó, casi palmariamente, la potencialización de conflictos por la tenencia de la tierra y el recrudecimiento de una serie de mediadas administrativas como el deslinde y amojonamiento (público) tendiente a amparar derechos ya instituidos e instituir otros.

La visita de 1667 descubre a indígenas aliados o desnaturalizados en “pueblos de indios” ya consolidados como Famatina, Anguinán y Malligasta, o los establecidos en “reducciones de indios” como Polco, Olta, Atilés y Colosacán. Olta puede haber sido una reducción para después, a partir del fin de las guerras calchaquíes, instituirse como pueblo de indios con agregados de otras parcialidades onlongastas del norte de Córdoba más los remanentes (“agregados”, según la normativa toledana y alfariana) de

⁷¹⁸ “Ordenanzas Generales para la vida común en los pueblos de indios”, Arequipa, 6 de noviembre de 1575. “Don Francisco de Toledo, Mayordomo de Su Magestad, su Visorrey, Gobernador y Capitán General en estos reinos y Provincias del Perú y Tierra Firme, etcétera (...) ORDENANZA X.— *Como se han de repartir y recompensar las tierras cuando los indios se reducen de unos pueblos a otros. Y porque en las reducciones que se han hecho por los vistadores comisarios por mí nombrados en este reino, convino pasar de unos pueblos y repartimientos, parcialidades y ayllus á otros, juntándolos y haciéndolos dejar sus chácaras y pueblos antiguos y repartiendo las tierras cercanas a sus reducciones (...)*” Transcribimos en el apéndice.

⁷¹⁹ Es la taxativa opinión de Abelardo LEVAGGI, “Marco jurídico de la propiedad comunal civil en Hispanoamérica hasta el siglo xix”, *Revista Chilena de Historia del Derecho*, No 22, 939-948. 2012.

tributarios de origen colosacanes, pacatalas y atiles en cabeza de un encomendador, para favorecer su recuperación sociodemográfica, el sostenimiento de la vida comunitaria y su definitiva conversión religiosa. En otras palabras, una reducción o un pueblo de indios podía estar, en la primera mitad del siglo XVII, en la “cabeza” del Rey o de un encomendero lo que le daba entidad jurídica fortalecida por alguna visita que elaboraba un padrón, “desagraviaba” a los indígenas, y concretaba la “fiscalidad”

A lo largo del siglo XVII, se consolidan pueblos de indios como los mencionados Anguinán, Famatina, Malligasta y Aimogasta, pero hay otros cuya entidad es determinada por el derecho local y la definitiva *sapienza* de los cabildantes. Por ejemplo, de Huaco fue una estancia y luego una hacienda donde el mercendero poseía por “real provisión” indígenas allí sitiados (asampatis, yuctubas y hualfines). Otros ejemplos son Sanagasta y Vichigasta. Este último se fundó en tierras compradas por el encomendero para naturalizar a sus tributarios, que las pagaron con su trabajo personal. El primero, Sanagasta, tuvo la poca fortuna de ser elegido como predio donde fundar la mismísima cuadrícula de la ciudad y en la cual el escribano Hoyos en su comentado descripto fundatorio menciona al “país de los çanagastay”⁷²⁰ y sus tierras acequiadas.

No obstante la importante ausencia de fuentes, estimamos probable que los científicos sociales localistas del s.XX que han historiado el Tucumán colonial (por ejemplo, Dardo de la Vega Díaz, Armando Bazán y Félix Luna) y que han descripto los aspectos contextuales del régimen de las tierras, no siempre distinguieron jurídicamente entre merced de encomiendas y merced de tierras como así tampoco, los *reales amparos* de tierras comunales. Ha contribuido a complejizar el análisis, la existencia de discursos epocales de “merced” con una vasta intencionalidad que ha contribuido a confundir la merced de tierras de la merced de encomienda. Por parte de los encomenderos, subyace la idea considerar como “una forma de posesión” propia la relación de dominio de las tierras que pertenecen a sus indios encomendados y es, como vimos intencionada y *factual*⁷²¹. La pérdida de los documentos originales de derechos reales y sus testimonios

⁷²⁰ AGI, Sec. V, Charcas, 25.

⁷²¹ Por usar una expresión de Jean BORDE y Mario GÓNGORA, *Evolución de la propiedad rural en el Valle de Puange*, t. I, Santiago de Chile, ed. Universitaria, 1956, 29.

o traslados fedatarios parciales, pareciera ser una causa más que agrava aquella situación de confusión *ius* historiográfica (sin contar con la intencionalidad de los participantes de ocultar por conveniencia u otra cuestión sus propios títulos que desprovistos del amparo público y el *traslado* –copia- ineludiblemente desaparecieron).

Hay, entonces, en términos de derecho indiano, instancias locales que no están regidas por el la *convenientia rerum aequitas* de las normas toledanas y alfarinas, sino por una idea, que ya ensayamos en otro lugar⁷²², y ésta es que “todas” las tierras tenían un señor (*nulle terre sans seigneur*). Esta idea “feudal”, como vimos, surge con mayor intensidad, en el discurso del Gregorio Bazán (el orden), en el que le contesta a Oidor Lujan de Vargas (el sistema). Pero, también para el cabildo (del cual no tenemos archivos) que sin enfrentarse a la justicia lega resolvía que, para solucionar un conflicto al interior de un pueblo de indios o reducción, primero debía consultársele al mercendero de tierras o de encomiendas⁷²³.

Variadas pueden ser las vicisitudes de la conformación del “escrito-signo” llamado “escritura pública” y, junto con el problema de la inestabilidad del texto jurídico de este instrumento, son causas evidentes con las que toca cualquier abordaje absolutista

⁷²² Mercado Reynoso, *el Inca Volverá...*, (2011)

⁷²³ Se verifica lo que un paradigma de justicia “auténticamente lega”, que nos evoca intensamente las reflexiones de Hespanha acerca de la “alteridad jurídica de las sociedades tradicionales”. Recordamos que el historiador portugués ha contrapuesto la justicia autónoma de municipios y señoríos con aquella impartida desde los tribunales centrales y regida por el derecho culto. La primera, dominante durante siglos, dificultó la transición hacia un derecho técnico que tropezaba con la deficiente cultura jurídica de los magistrados locales, formados en la costumbre y en los valores consensuados en el seno de sus comunidades de pertenencia. Esta representación sin mediaciones transformaba el carácter de los conflictos judiciales: toda la comunidad se sentía involucrada en ellos, cancelando las fronteras entre el derecho, la moral y la costumbre (y el sentido común). “En tanto que tradición difundida entre la comunidad local, propagada por bando, materializaba la tradición colectiva sobre lo justo y lo injusto: era pues en principio, un derecho intensamente vivido y conocido por todos. Su aplicación no requería entonces estudios académicos sino más bien sentido común y un cierto conocimiento del derecho practicado” Cfr, Hespanha, Antonio HESPANHA, A.M. “Justiça e Administração entre o Antigo Regime e a Revolução” en CLAVERO, B., GROSSI, Y TOMÁS Y VALIENTE, F. (coords.), *Hispania, entre derechos propios y derechos nacionales*, Atti dell’incontro di studio, Firenze – Lucca 25, 26, 27 maggio 1989, Milán 1990, v.1, 135-203.

jurídico. Este instrumento se transforma en fuente, a veces inubicable, aunque un problema de fuentes documentales del derecho indiano no es un problema, in *strictu sensu*, del *indianun iure*.

Como ejemplo de esta confusión narrativa y apreciativa sobre las formas de acceso al dominio del predio y los avatares de las fuentes documentales, tomaremos las del *pueblo de indios* de Olta, ubicado en la región más o menos central de los Llanos riojanos. Mencionaremos, además, la llamativa pérdida de un expediente judicial⁷²⁴ de fines de siglo XIX. En este expediente (hoy perdido), se documentaba como el “mandón” de Olta, al indio Don Juan Aballay quien presentó sus “títulos” en 1786, oportunidad en la que debió hacerse el deslinde en la que colocó un mojón y que no se respetó, al mensurarse, la colindante merced de la Estancia Vieja. Este mandón, convocado por la cédula de composición de tierras, desempolvó y mostró los escritos o “títulos” que muy probamente y celosamente guardaba como jefe étnico heredero de los oltas. De allí sabemos que, a mediados del siglo XVII, Olta era un paraje con tierras bien acequiadas del homónimo pueblo de indios, declaradamente “vacas” al ser desterradas sus indiadas “al [San Miguel del] Tucumán”. Ocúpalas entonces el cacique Gonzalo Chatán, con sus indios, que a su vez abandonan las suyas de Nungulo y Moga, una legua al “naciente” de éstas, siguiendo la frecuente práctica de la desnaturalización⁷²⁵. Al pretender desalojarlos Don Antonio Luis de Cabrera, el gobernador Acosta y Padilla amparó a los indios: les extendió título de merced con fecha 6 de Setiembre de 1647, y se les dio posesión, en la Quebrada de Olta, por el comisionado Melchor de Ávila Barrionuevo. Veinticinco años después, Don José Luis de Cabrera, hijo de don Antonio, obtuvo del gobernador Peredo el desconocimiento del

⁷²⁴ La pérdida o las pérdidas de expedientes judiciales, en las controversias sobre derechos reales, parece configurarse como una estrategia judicial en sí misma.

⁷²⁵ Aunque plausible de nuevos estudios, ya de carácter demográfico o etno-historiográfico nos advierten que estos movimientos poblacionales no se dan a causa del alguno de los levantamientos llamados Calchaquies sino de la presión demográfica de los araucanos sobre huarpes y comechingones, véase Catalina Teresa MICHIELI, *Realidad socioeconómica de los indígenas de San Juan en el Siglo XVII*, ed. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, San Juan. 1996.

título de los indios. Pero don Andrés Chantán, hijo de Don Gonzalo, solicitó del Gobernador Garro la devolución de las tierras; esto llevó a un pleito que se ventiló ante el Alcalde Don Diego de Navarro de Velasco, quién falló restituyéndoles las tierras a los indios el 3 de diciembre de 1675⁷²⁶. Esta documentación, testimoniada en un expediente judicial del Archivo Judicial de La Rioja⁷²⁷, está actualmente extraviada. La situación de desnaturalización, consistente en una movilidad física de los naturales, poseía una intencionalidad tanto pública como privada. Los encomenderos podrían haber incitado a sus encomendados a traslados a cambio de prebendas o conciertos. Concretamente, estas parcialidades *olongastas*⁷²⁸, como los indios Oltas, ingresaron al conocimiento público, a fines del siglo XVI, cuando fueron encomendados a Gonzalo Duarte de Meneses quien, aún antes de la fundación de la Rioja, poseía una merced de tierras de Najche, en jurisdicción de la ciudad de San Miguel de Tucumán, dedicada a la carpintería y construcción de carretas. Allí llegó comisionado Onofre Suárez, levantando información a pedido del Gobernador Gutierre de Acosta y Padilla, certificando que “se consumieron” los indios oltas de allí sacados por su encomendero “desamparando sus tierras” riojanas. Este funcionario había llegado hasta allí por un incidente presentado por el heredero del encomendero. Antonio Luis de Cabrera se presentó ante las justicias riojanas solicitando el desalojo de los indios de Nungulo Moga, capitaneados por el cacique Chatán. Invocó los derechos de sus encomendados indios Oltas, concedidos en segunda vida a su mujer Valeriana Duarte de Meneses, hija de Gonzalo Duarte de Meneses, primer encomendero de Olta. A su vez, el titular por

⁷²⁶ D. DE LA VEGA DÍAZ, *Toponimia...*, 232; A. BAZÁN, *Historia...* 51 ; R. CATALÁN et al., *Las mercedes...* 152.

⁷²⁷ AJLR, O-1, s/a, s.f. Parece evidente que los autores arriba mencionados tuvieron acceso a él por cuanto su sistema de catalogación “letra O, núm 1” denota que estuvo en el archivo judicial del La Rioja entre 1960 y 1971. Para esta última fecha ya no figura en el inventario de L. Sotomayor, *Mensuras y otras causas en que obran (...)*...19.

⁷²⁸ Para una mayor precisión sobre el origen étnico de los indios llanistas, véase a Salvador CANAL FRAU, “El grupo Huarpe Comechingón”, en Anales del Instituto de Etnología Americana, Mendoza, tomo V, 9-34; y del mismo autor, “La antigua población de los Llanos [riojanos]”, en Anales de Instituto Étnico Nacional, año 1950, Buenos Aires, tomo III, 67-81.

tercera vida de la encomienda de indios Nungulo Moga, Francisco Núñez de Yllañes⁷²⁹, obtuvo dos años después de la denuncia de Cabrera, la merced de tierras de Yoque y Pacatala, subdividida en merced de la Estancia Vieja también conocida como merced de los Núñez. ¿Es sintomática una la concesión de una merced de tierras al mismo encomendero que movilizó a sus indios tenedores desde las tierras concedidas hacia Olta, solo dos años antes? Si bien no poseemos la prueba documental que afirme que los indios Nungulo Moga habitasen las tierras de Yoque y Pacatala, lo evidente es que éstos no eran del pueblo vecino y, ante el reclamo del encomendero de los indios del nuevo paraje asiento de los Nungulo Moga, la Corona falla una secuencia de amparos dentro del espacio ecológico llanista, tendiente a contentar a todos, indios y beneméritos, pero que al largo plazo, perjudicaría a los naturales, aunque por otras razones, como la incapacidad dominial de éstos *ad lungus tempus*. No está de más inferir que estos traslados se legitiman como una estrategia militar fundada, no tanto, en la improbable hostilidad de los naturales de Nungulo Moga asentados en Olta sino en sus belicosos vecinos Atiles (de activa participación en las Guerras Calchaquíes) y los originarios Oltas, sostenedores de vínculos de intercambio pacífico que pagaron su resistencia con el traslado forzado. Pero esta práctica de desnaturalización tuvo sus consecuencias jurídicas en el régimen jurisdiccional de tierras que se complejiza al introducir el concepto de indios “amigos” e indios aliados y los amparos que benefician a éstos en detrimento de los rebeldes o neutrales originarios. En otras palabras, la “desnaturalización” iba acompañada por los amparos de los “nuevos” predios terrieros y la concesión de tierras de los desnaturalizados al quedar éstas “vacas”.

Creemos que es técnicamente erróneo afirmar que hubo título de “merced” (tal como lo afirman las transcripciones de expedientes posteriores) cuando hubo, en realidad, un real “amparo” a indios “amigos”—excepto que el uso del concepto de merced sea entendido ampliamente como gracia de, en este caso, también el amparo tutelar a los indios— provenientes de las serranías de Nungulo y Moga para el usufructo de la quebrada de Olta, situación fortalecida con puesta en posesión de dicho amparo. Nada dice de tres elementos faltantes para que, efectivamente, sea una merced de tierras: la

⁷²⁹ ADGC, MJ-20-P14, f. 14 y ss

relación de los méritos del cacique Chatán, el pago de la media *annata*, y la fórmula común “para vos como cosa propia y tus descendientes...vender, trocar como cosa tuya”⁷³⁰ las que, de existir, presupondrían un instituto como la merced de tierras a un particular indígena. Estas fórmulas, atenuadas a un procedimiento de solicitud real en 1687, sí efectivamente están contenidas en la que el gobernador tucumano Félix de Argandoña otorga a español Ávila, como la “merced de tierras” de Olta, años después, y sustentadas jurídicamente en sus méritos, entre los de haber servido a “su costa y mención” de una entrada al Chaco ordenada por Juan de Díaz de Andino. En términos solorzianos⁷³¹, la concesión de “bienes de la corona como las tierras, los pastos i aguas”, reservadas al Rey, pueden enajenarse, como en este caso, legal y legítimamente para pagar “servicios”.

Leamos entonces el documento tucumano,

“se sirba en nombre de su magestad a aserme merced de un pedaso de tierras que estan bacas y realengas en el paraje de Olta jurisdicción de la rioja que lindan por la parte del poniente con los de Colosacarez , [Colocasan, ndr.] y por la otra parte con la [merced] de al tener Francisco Plasido de Bergara y por la parte del oriente con la de Olta con sus pastos y aguadas y usos y costumbres y derechos y servidumbre para que los pueda poblar con ganados maiores y menores y sean confesas y lomas queami me paresiere que son dos leguas asi de largo como de anchoY pido y suplico se sirba de haserme merced de dichas tierras[fdo:Pedro de Abila]En la ciudad de Cordoba a los doce dias del mes de julio de mil seisiento y ochenta y siete Don Thomas Felis de Argandoña Gouor. Y Cap. General de la Provincia el Tucuman por su magestad que dios guarde abiendo visto la petission presentada por el ayudante Pedro de Avila morador de la ciudad de la Rioxa. Y alegado y pedido por el susodicho digo que en atension a sus meritos y servicios hechos a su Magestad en todas las ocasiones que sean devido tomar las armas como lo alega en su petición; En

⁷³⁰ “La merced que nos ocupa carecía en su título de una fórmula común otorgada a las otras otorgadas a los españoles: aquella por la cual el beneficiarios y sus herederos la podrían ‘vender, trocar y enajenar como cosa suya habida por justo título’ ”, en J. PIANA DE CUESTAS, “De encomiendas ..., 15

⁷³¹ Véase Juan SOLÓRZANO PEREIRA, *Disputationen*....200 y 992.

nombre de su Magestad que dios lo guarde el Gouer. Capitan General de estas Provincias y en virtud de los Reales poderes que para ello tiene le hara y dio merced al dicho ayudante don Pedro de Abila para el y paras sus herederos y susesores para siempre jamas del las tierras mencionadas en su petission En el paraje y debajo de los linderos mencionados en su petición con todos sus pastos y montes y entradas y salidas, Sinperjuicio de indios ni tercero alguno de mayor derecho tenga”⁷³²

No sabemos si el ayudante Ávila realmente tomó posesión de la merced, pero lo que nos interesa resaltar aquí es el hecho de que este vasallo español se cuida de establecer, en su petición, como lindero o conlindante, las tierras amparadas años antes de los ahora reubicados indios olteños. El gobernador la concede bajo los términos de los “linderos mencionados.... sin perjuicio de indios”. Pero éstos —los naturales de Nungulo ocupantes de Olta— no poseían una merced de tierras ni poseían la potestad étnica para obtenerlas, sino que su título se centraba en un mero amparo de las tierras poseídas, devenidas ahora oficialmente de uso comunal y casamenteras, inmediatamente aledañas a su hábitat, cuyos límites naturales eran, al sud, la merced de encomienda de los indios Polcos y la merced de tierras de Diego de Arroyo. Cualquiera sea la condición de estos indios, el amparo a “vasallos antiguos” se produce en el marco de una redistribución periódica del poder del sistema colonial. La vía usual era una Información [sumaria] en la cual testigos declaran que, desde “antiguo”, los indios de esa parcialidad ocupan y siembran las tierras en cuestión y su resolución es un auto de puesta en posesión. El mismo ha sido descripto como producto de alianzas con curacas o mandones, en clave comercial por parte de encomenderos quienes incitan al protector de los naturales, y hasta en opiniones que revalorizan los ayllus y el curacazgo como corporaciones locales con derechos reales sobre tierras que ocupan los indios amparados⁷³³.

En términos más generales, la preservación del uso colectivo de predios comunales ha sido evaluada como una política de la corona de “resguardo” del sistema de tenencia

⁷³² AHCo, Escribanía de Hacienda N° 2, Leg. 7. Expte. 9

⁷³³ D. SANTAMARÍA, *Memorias...* 21.

de las tierras prehispánicas que fueron “reguladas y legalizadas por la Corona sobre todo por razones de orden público y de ajuste con la nueva figura jurídica de los nuevos reinos americanos”⁷³⁴.

Ausente aún un estudio específico de los amparos a tierras indias, existen varios libramientos de autos de amparos documentados en el Tucumán⁷³⁵, aunque en La Rioja habrá que llegar al año 1800.

A pedido del protector de naturales, el Alcalde de 2º voto de La Rioja, Don José Noroña y Lozada⁷³⁶ midió y amojonó el pueblo de Anguinán, dándole una legua a cada viento como éjido; esta mensura fue aprobada por la Audiencia de Buenos Aires⁷³⁷. En rigor, estos amparos se sitúan, en el marco del estudio de propiedad en el derecho

⁷³⁴ “De hecho, la Corona había dispuesto toda una serie de medidas legales y administrativas para preservar la propiedad predial amerindia, y en este terreno recordaremos solo, como ejemplos, que en 1560 Felipe II decretó que los amerindios campesinos debían imperativamente devolver aquellas tierras que hubieran sido otorgadas a españoles en perjuicio de sus primeros dueños amerindios. Política que fue mantenida pasado ya el periodo fundacional, pues en 1601 Felipe III prohibiría aún con renovada energía toda alienación de tierras en detrimento del campesinado aborigen (Cédula del 19 de febrero de 1560 y Ley 9, tít. 3, del Libro VI de la Recopilación de Leyes de Indias, Cédula del 11 de junio de 1594 y Ley 9, tít. 12 del Libro VI de la recopilación y Cédula del 6 de abril de 1601, y Ley 18, tít. 4, de ese mismo Libro VI)”, Georges BAUDOT, *La Corona y la fundación de los reinos americanos*, Valencia, ed. Asociación Francisco López de Gómara, 1992, 166 y ss.

⁷³⁵ Solo a modo de ejemplo los de Conaista, en la Jurisdicción de la Ciudad del Tucumán, fechado en 1597, transcrito en JUNTA CONSERVADORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL TUCUMÁN, *Documentos ...*, t. II, 23, hasta el tardío de los Tilcara, jurisdicción jujeña, en 1833, en Archivo de Tribunales de Jujuy, “1830-Expte. de los Naturales de Tilcara”, G. MADRAZO, “Historia de un despojo. El indigenado del noroeste argentino y su transformación campesina”, en ANDES, núm. 6, 1996, 138.

⁷³⁶ La religiosidad y la defensa del derecho natural del indio parece ir emparentada en manos de un laico como Noroña y Lozada, integrante de un cofradía riojana desde fines del siglo XVIII, véase en el Archivo Parroquial de la Catedral de La Rioja, sección Libros de Cofradía, “*Libro corriente de cargo que formó D. José Noroña y Lozada actual Mayordomo de la Limosnas que se recaudan a favor de las benditas almas del Purgatorio...*” inicialado a partir de 23 de noviembre de 1795 hasta el 1 de Octubre de 1821, en A. ZINNY, en *Escritos inéditos...*, 21. Anteriormente, en 1786, fue *tesorero de la caja menor del tributo de indios puestos en cabeza de su Magestad*, A. Bazan, *Historia...* 41. En 1780, Noroña aparece como administrador de la *Hacienda de Viña* del finado Don Francisco de Herrera y Guzmán, RHCHP, Vol I, núm. 5, 73 [1928].

⁷³⁷ D. de la VEGA DÍAZ, *Toponimia riojana*, ed. Junta de Historia y Letras de La Rioja, La Rioja, 1944, 67.

indiano, en las regulaciones de la propiedad indígena (con fuerte correlación entre la tenencia de la tierra y su categoría de tributarios), estableciendo también sus límites y la incapacidad relativa de los indios al *dominium* individual y caracterizado por un tutelaje objetivo del sistema, fortaleciendo el uso común⁷³⁸.

Hacia mediados del siglo XVII, Gaspar de Escalona Agüero describe la condición jurídica de los indios cuyas tierras han sido repartidas —como las de los indios de Noguyo establecidos en Olta—. En una consulta que el Virrey Conde Chichón hizo al Consejo en donde se solicita suspender la composición de tierras baldías que hubiere y componer las poseídas sin justo título “*por conuenir que precedieffe la reducción general de los indios*” se resolvió que se:

*“executaffe el arbitrio referido [es decir que no acepta la suspensión, n.d.r.], por parecer que los indios auian uenido en gran disminución, y que serían muchas y muy confiderables las tierras q’ sobraffen por su falta, y fallecimiento; mediante q’ siempre se ha ido con opinión y resolución que faltando los Indios, q^{ue} son precarios possededores, y nudos vsufrutarios, bueluen a la Corona Real las tierras que se les reparten”*⁷³⁹.

Solo “usufructuarios” y “poseedores precarios” cataloga Escalona Agüero a los indios titulares de “repartimientos” y señalamientos de tierras donde el Estado colonial intervino. En esa consulta *ut supra* de 1631 y su resolución por real cédula de 1634, es posible advertir gran parte del devenir normativo del *ordo* indiano: la tensión entre el Consejo de Indias y el de Hacienda en la Península, los múltiples intereses por ralentizar la “composición” por parte de virreyes y audiencias, pero denota que se ha instalado, de manera concisa, la doctrina según la cual es solo el Estado colonial, con vector en la Corona, el asignador de regalías y titular del dominio directo de la tierra y que sus vasallos son *nudos* usufructuarios. La doctrina mediante la cual el Rey heredaba la potestad del Estado Inca para asignar recursos pervive aún con fuerza doctrinaria al

⁷³⁸ Me remito nuevamente a A. de AVILA MARTEL, “Plan para...” p 132

⁷³⁹ Gaspar de ESCALONA AGÜERO, *Gazophilatium Regium Perubicum* (Gazofilacio Real del Peru), Madrid, 1646. La cita es de la pág. 210 de la edición impresa en Madrid existente en la Biblioteca Nacional Argentina Mariano Moreno.

reinstalarse en la Corte Suprema Argentina, en el primer tercio del siglo XX, cuando se analiza un pedido de reivindicación de los indios jujeños de Casavindo y se sostiene que el Estado hispano-colonial era heredero del incásico, y, el argentino es heredero del hispano, por lo que aquéllos no podían reclamar como suyo algo que no lo era antes de la Constitución de la Argentina⁷⁴⁰.

§ 22 INTENSIDADES APROPATIVAS HEREDADAS DEL PERÍODO TOLEDANO⁷⁴¹.

La política económica del Virrey Toledo, como vimos en otro lugar⁷⁴², vino a insidir en los sujetos potestativos y sus cosas materiales. Puede decirse entonces que el mundo andino, representado por la jurisdicción del Virreynato del Perú, ha desarrollado un patrón político⁷⁴³ toledano sobre la problemática de las regalías en tierras en las que se ha consolidado, en el siglo XVII, en el Tucumán. En 1569 llegaba al Perú un nuevo virrey, esta vez cuidadosamente seleccionado quien “tenía el propósito de organizar

⁷⁴⁰ En la sentencia del supremo tribunal se lee: “3º, *En el antiguo Perú y sus dependencias no hubo otro propietario territorial efectivo que el Inca y las comunidades indígenas del régimen Incásico, como las invocadas por los actores, solo tenían, sobre una tercera parte, una especie de dominio útil o usufructo; pero ese dominio no era, como no lo fue durante el periodo colonial, el del derecho romano, ni el de las leyes de partidas, ni el del Código Civil Argentino.*”, Sentencia de Corte Suprema Argentina del 20 de setiembre de 1929 en el caso “*Don Lorenzo Guari y Otros c/ la Provincia de Jujuy, sobre reivindicación*”, en FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, t. XXIX, 303-319.

⁷⁴¹ Al solo efecto heurístico, ubicamos el ‘período toledano’ entre los años 1575 y 1770, y nos referimos a él para designar todas aquellas disposiciones que emanaron de los funcionarios virreinales (Abreu, Ramírez de Velasco, Pedro de Mercado de Peñalosa, Alonso de Ribera, Alfaro, Martínez Lujan, etc.) las que constituyen un *ius propium* toledano posterior al de la conquista propiamente dicha si bien anterior al período borbónico, siempre referenciándonos al espacio que llamamos *localismo preconstitucional* (CLAVERO) del Tucumán aunque sin abarcar todo el mundo andino. No obstante hay autores que la han englobado como *política económica toledana* (NOEJOVICH) al cual han subordinado el derecho.

⁷⁴² Adrián MERCADO REYNOSO, “Unicidad y diversidad en el sujeto patrimonial indiano...” p, 13

⁷⁴³ Sobre la noción de patrones políticos o “patterns politics” véase a A. M. HESPANHA, “A Note on Two Recent Books on the Patterns of Portuguese Politics In the 18th Century” en E-Journal of Portuguese History, Volumen 5, num. 2, Verano 2007, en línea en https://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/contacts.html

definitivamente el virreinato y en buena medida lo consiguió”⁷⁴⁴. La “aleccionadora” acción de Toledo generó juicios de valor extremos como el de Levillier (1942), quién lo denominó “Supremo organizador del Perú” o el de Valcárcel (1940), quién llamó “El gran tirano del Perú”.⁷⁴⁵

El virrey Francisco de Toledo arribó a la Ciudad de los Reyes con un crítico diagnóstico sobre el orden normativo indiano, en general, y explícitamente se propuso encarar “lo que es justicia y gobierno que tan notablemente está falto y confundido”⁷⁴⁶. El referido diagnóstico no sólo evaluaba la evidente erosión de la autoridad *regia* en temas de las regalías (minas, tributos y tierras) y la ausencia de la aplicación de la voluntad legislativa del soberano, sino que también lo hacía en torno a temas de administración de gobierno, la corrupción, el excesivo poder de los encomenderos así como del clero, y la implementación de un procedimiento para evitar la adulteración de monedas.

Una evaluación ajustada del derecho generado por la propia autoridad virreinal destaca una serie de reformas. Levillier⁷⁴⁷ le hace decir al virrey que sus reformas serán “no para aumentar el número de leyes existentes, como para descubrir la manera de que se hicieran efectivas”.

Fenomenológicamente, se destaca por haber enviado a sesenta ilustres españoles a recabar información en las comunidades indígenas del Perú a fin de iniciar un diagnóstico como paso previo a las reformas, y sus célebres *instrucciones*. Uno de estos sesenta oidores era Juan de Matienzo, comentador regio, por excelencia, del periodo.

⁷⁴⁴ A. LORANDI, *Ni ley, ni rey...*, 134.

⁷⁴⁵ Para un juicio de valor en contrario, véase Luis Eduardo VALCARCEL, *El virrey Toledo: gran tirano del Perú, una revisión histórica*, Lima, Imprenta del Museo Nacional, 1940. Y uno de los más actuales, Estela SALLES y Héctor NOEJOVICH, “Las lecciones de la Historia: repensando la política económica del Virrey Toledo”, *Actas del Congreso de la Asociación de Historia Económica*, San Martín de los Andes, Julio 2004.

⁷⁴⁶ de ZABALBURU-SANCHO RAYÓN, *Nueva Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España*, Madrid, 1896, t. VI, 294.

⁷⁴⁷ R. LEVILLIER, *Don Francisco...* Tomo 2, 77.

Lo importante es que, a pesar de la formación romana⁷⁴⁸ de Toledo, “las instrucciones” poseen el objetivo de entender cómo estaban establecidas las costumbres incaicas sobre tributos, y, para llegar a ellos, la descripción y dominio de los instrumentos como la *mit’a* y las tierras de donde se extraían aquellos. El orden incaico tributaba más y mejor⁷⁴⁹ pero la explotación intensiva del colectivo europeo sobre la fuerza de trabajo indígena, en las décadas inmediatamente precedentes, no benefició a la hacienda real, a los indios ni tampoco a los españoles. “Estableció reglas de laboreo de las minas, trabajos, ingenios, etcétera, para que los naturales que en ella trabajasen tuvieran toda seguridad (...) Noventa y dos Ordenanzas se refieren —comenta Bartolomé Martínez y Vela⁷⁵⁰— a las minas de plata y son innumerables las otras”.

Tabla 11: Fecha de disposiciones y referencia de fuentes de Toledo 1569-1574 según E. Salles y H. Noeovic⁷⁵¹

⁷⁴⁸ A su llegada como virrey del Perú, el virrey Toledo sabía de la riquísima discusión político-teológica sobre la validez de los títulos castellanos sobre las Indias. Entre 1558 y 1568 fue en Italia, Caballero de la orden de Alcántara y de Santiago, enviado del emperador Carlos V ante el Concilio de Trento y procurador general en Roma en defensa de los Estatutos españoles de Indias ante el Papado. Era, lo que se dice, un hábil negociador que se había empapado de Derecho Justiniano. Director de la Junta especial de Indias, desde donde había participado como parte estatal, en las discusiones y resoluciones de temas sustanciales del orden normativo como era la perdurabilidad de las encomiendas, acontecida con posterioridad a la *Leyes Nuevas*. Se lo consultaba sobre tasas, residencias, asuntos de la guerra y elección de personas para el servicio de justicia para casos vacantes, amigo personal del Papa, de lo que se deduce que fue una de las personas más influyentes en la monarquía. En particular sobre la personalidad de Toledo, véase a R. LEVILLIER, *Don Francisco de Toledo, Supremo organizador del Perú*, Tomo 1 “*Su vida y su obra 1515-1582*”. Espasa-Calpe. S. A. Madrid 1935, 487; T. 2 “*Sus informaciones sobre los Incas*” (1570-1572”) Buenos Aires. p 507. T.3. “*La Historia Indica de Sarmiento de Gamboa que el Mandó escribir cotejado con los comentarios de Garcilazo y otras crónicas*”. Espasa. Buenos Aires. 1942, 379 (19 láminas y 49 grabados).

⁷⁴⁹ J. MURRA, *La organización económica del Estado Inca*, México, ed. Siglo XXI, [1955] 1978, 426. C. S. ASSADOURIAN, “La producción de la mercancía...” y J. BRODHA, “Las comunidades indígenas y la forma de producción del excedente ...”, ambos en E. FLORESCANO (comp.), *Ensayos sobre el desarrollo económico...*, y A. LORANDI, *Ni ley, ni rey...* -

⁷⁵⁰ Bartolomé MARTÍNEZ VELA, *La historia de la Villa Imperial de Potosí*, Lima, Manuscrito s. XVII, cit. en Vicente QUESADA, *Crónicas Potosinas: Costumbres de la España Medieval Hispano-americana*, París, 1890, ed. Biblioteca de la España y América, 2 vol. También editado como, *Escenas de la vida Colonial en el siglo XVII*, Buenos Aires, ed. Huarper (Talleres Gráficos A Baiocco y Cía.), 1945, 241; y como Bartolomé ARZÁNS DE ORSÚA Y VELA, *Historia...*, editado por Lewis HANKE y Gunnar MENDOZA, Brown University Press, Providence (Rhode Island), 1965, Vol. 1,174.

⁷⁵¹ E. SALLES y H. NOEJOVICH, “Las lecciones....”,5

Fecha	Documento/evento	Referencia
Sin fecha (1569-1570) Los Reyes	Instrucciones a los Visitadores	AGN BA IX-17-2-5; Romero 1924.
15.09.1570	Los Reyes Provisión con los privilegios dispensados a los gentiles hombres de las compañías de los Lanzas y Arcabuces	Colección Mata Linares, tº XXI.
16.10.1570	Los Reyes Glosas de la Instrucción General a los visitadores para determinar las tasa	AGI, Lima 28 (A), D.º 46
23.10.1570	Inicio del Viaje de Toledo hacia el Cuzco por la Sierra Central	
26.11.1570	Huancayo Provisión para que en el Convento de Jauja se enseñe a los naturales a Leer y Escribir	AGI, Lima 28 (A), D.º 53
11.11.1570	Huamanga Ordenanza para la reducción de los indios de Huamanga	AGI, Lima 28 (A), D.º 63
05.01.1571	Huamanga Provisiones sobre la erección de un convento franciscano en Jauja y la apertura de una escuela en el repartimiento de los hananhuancas	AGI, Lima 28 (A), D.º 50
19.01.1571	Huamanga Provisión para el servicio de los tambos de Huamanga	BNP, Mss B511
20.01.1571	Huamanga Ordenanzas sobre el beneficio de las minas de Huamanga y Huancavelica y regimen laboral de los indígenas	BNP, Mss B511
22.01.1571	Alocución a los vecinos de Huamangas	AGI, Lima 28 (A), D.º 28
00.01.1571	Huamanga Ordenanzas para la ciudad de Huamanga	BNP, Mss B511
15.03.1571	Cuzco Provisión para que no se planten más chacras de coca	BNM Perú, Mss 3035
16.06.1571	Cuzco Apuntamientos a la instrucción general	AGN BA IX-17-2-5;
27.08.1571	Cuzco Ordenanzas para los oficiales reales de Huamanga	BNMPerú, Mss 3035
28.08.1571	Cuzco Disposiciones sobre la construcción de la Catedral del Cuzco y Centros educativos	AGI, Lima, 300
08.09.1571	Cuzco Instrucción nueva para los visitadores	AGN BA IX-17-2-5; Romero, 1924
07.11.1572	Cuzco Carta al provincial Alonso de la Cerda ; expulsión de los dominicos	Noejovich, 2002
08.12.1572	Zepita Se inicia visita secreta de Chucuito	Noejovich, 2002

00.02.1573	Termina visita secreta de Chucuito	Noejovich, 2002
01.04.1573	Primer repartimiento de mitayos	Crespo Rodas, 1955-56 15.02.1574 Ordenanzas de Minas BNP Mss. B 511
05.07.1574	Asiento de la Tasa de Chucuito autorizada por Toledo	AGN BA IX-17-2-5, fs. 323v.

Fuente E. Salles y H. Noejovich, “Las lecciones....”,⁵

¿Por qué, entonces, son importantes las ordenanzas, instrucciones, despachos que sustancialmente no alteran el procedimiento de otorgamiento de mercedes de tierras a los colonizadores que una década después descenderán hasta la Nueva Rioja? Porque regularon sobre el trabajo encomendil, el tributo y la propiedad del salario y al hacerlo se estableció una nueva relación normativa del indio con las cosas.

En principio, es de destacar una dimensión personal que contrasta con la de los antecesores porque ocupar el sillón virreinal significó el uso de la facultad legislativa que se le dispensaba para,

*“hazer y proueher todo aquello que Nosotros mesmos [v.g. Felipe II] podríamos hazer y proueher”*⁷⁵²

Ese proveer y hacer, como el mismísimo Rey, explícitamente declarado en la propia designación, convertía, según la *traditio*, la voluntad de éste en *lex* o norma y, de manera indudable, generó su propio *ius*. Este *ius propium* generado⁷⁵³ “reguló” el

⁷⁵² R. LEVILLIER, *Gobernantes del Perú. Cartas y papeles*, Buenos Aires, ed. Espasa, t. III, 647.

⁷⁵³ “Las normas toledanas forman un corpus estatutario de instrumentos concernientes a la población autóctona, de jerarquía complementaria o supletoria, dentro del ámbito jurisdiccional del Virreinato peruano, de disposiciones promulgadas por la corona con carácter genérico para todos los dominios ultramarinos, y por su índole y volumen forman un digesto único en su género dentro de la literatura jurídica indiana”, señala Guillermo LOHMANN VILLENA, en la introducción a: Francisco de TOLEDO, *Disposiciones gubernativas para el Virreinato del*

trabajo indígena y el usufructo de la mano de obra (en el sentido pre-moderno del concepto), de las parcelas cultivables, de las acequias de riego y del ciclo agrícola de esas tierras. Una primera respuesta al interrogante arriba enunciado sería: al regular aquéllas, se regulaban éstas. En términos del materialismo dialectico, Toledo reguló las relaciones de producción y con ello insidió estructuralmente en la sociedad indiana.

Las disposiciones del Virrey Toledo para el *Reino* del Perú de 1574⁷⁵⁴ precisaban — instituciones del derecho laboral tan progresistas para la concepción moderna como el salario “que los indios reciban el jornal en sus manos”⁷⁵⁵, en un escenario típicamente esclavista— la dura obligación que tenían los indios de trabajar para el dueño de la tierra todos los días laborables de la semana excepto uno para “el cultivo de su propia tenencia”. ¿Pero cuál tenencia? La tenencia de chacras o bañados que se encontraran en el interior de las mercedes de tierra, composiciones de tierras o eventuales compras. Ello generó *de facto* dos partes en la posesión: aquélla que poseía el titular de la merced y las “tenencias” de los indios. No había dos titulares, el dueño era uno (el señor), limitado a la posesión de dos partes donde la parte de la posesión indiana era inalienable o in-enajenable y, la mayor de las veces, colectiva.

En las reformas propiciadas, se irían solucionando, de manera notable, las contradicciones entre el orden real existente y el propiciado. Situándonos sólo en la tierra, se eliminaron los atributos de la jerarquía incaica pre-hispánica sobre ella; las tierras “del Inga” pasaron a la corona española con fundadas argumentaciones jurídicas, etc. Pero qué sucede cuando, por ejemplo, debido a necesidades estatales de restablecer reducciones de indios, éstos fueron trasladados de sus dominios naturales a aquellos nuevos, ¿con qué entidad quedaba la tierra originaria y la nueva ocupada? Toledo, en 1578, a nueve años de arribado, sanciona en Arequipa un corpus de diez Títulos y ciento setenta y siete Ordenanzas. La respuesta a aquella pregunta la encontramos en el Título

Perú. 1569-1574, Sevilla, publicado por EEHA-CSIC y El Monte de Piedad y Caja de Ahorros, (transcripción de María J. Sarabia Viejo), EEHA, 1986, Tomo 1, p 502, y II, 507.

⁷⁵⁴ Francisco de TOLEDO, *Disposiciones..* Provisión de Felipe II del 6 de Febrero de 1574.

⁷⁵⁵ Ordenanza XIII, Los Reyes (Lima), 30 de mayo de 1580. Documento 86, en Francisco de TOLEDO, *Disposiciones.., op cit*, T. II, 419.

II, Ordenanza X, que reproducimos íntegramente en el apéndice⁷⁵⁶, y que, en general, prueba la elasticidad del derecho indiano criollo para formar una visión autónoma y dual del dominio territorial reforzado por la autoridad de aplicación. Por último, tan importante como la *regula* del trabajo fue la tributación indígena⁷⁵⁷, campo ajeno a nuestro análisis.

G. Lohmann Villena resume la trascendencia jurídica de las pautas legales dictadas por Toledo. En primer lugar, ellas venían a “confirmar las directivas éticas que guiaron la acción de los gobernantes españoles, ratificándose el sentido paternalista que inspiró la obra de transformación espiritual y material de la población aborígen y su promoción a niveles superiores,...). En segundo término —continúa el ilustre historiador— se pondrá de relieve el mecanismo de adaptación de los cánones legislativos españoles a las sociedades autóctonas y a la inversa, la incorporación al caudal de la teoría jurídica castellana de elementos provenientes de la normativa jurídica prehispánica. En tercer

⁷⁵⁶ Véase Apéndice, documento A, p.545 y ss.

⁷⁵⁷ Nos estamos refiriendo al tributo y al cambio que impuso Toledo en su parámetro, en gran parte desconocido por la ausencia de comentarios en Solórzano y Pinelo (respecto a la tasación, pago de costas y media anata “*Solórzano no aclara nada, así como tampoco Antonio León Pinelo en su Tratado de las confirmaciones reales de encomiendas, oficios y caso en que se requieren para las Indias Occidentales*”), Francisco de SOLANO “Selección documental sobre el régimen de tierras...” 105., Ello puede haber contribuido a que no existieran estudios específicos sobre la tributación post-hispánica, a excepción de Gaspar de Escalona Agüero, *Gazophilacium* El mismo Toledo afirma «*En lo de la tasa de los tributos, así de los indios repartidos como lo que están en nuestra Corona, se debe hacer como esta muchas veces ordenado y se entiende que conviene, para dar asiento en un punto de que han resultado tantas ocasiones de turbación (...). Y que dicha tasa no parece que conviene que se haga generalmente por cabezas, como en la Nueva España, que aunque aquella se representa que sería más cierta, estable u común, en lo del Perú no se tiene por tan justificada y sería baja y más dispuesta a fraudes y con menos disposición a crecimiento; y la igualdad que resulta de la personal sería desigual en justicia y razón; y de la forma de la tasa que parece más conveniente es que aquella se haga por junto todo el repartimiento*» . Instrucción en la Ciudad de los Reyes en 1570, en F de TOLEDO, *Disposiciones...* No solo eliminaba el tributo per capita o la tasa por persona india sino que introducía una visión colectiva de la producción minera o agrícola ajena a la unicidad del *dominium*. Independientemente al cumulo de razones de esta reforma social, reconoce que las regalías son producto de un conjunto de actores sociales cuya regulación es necesaria pero que su naturaleza no es individual sino de conjunto. De esta colectivización del tributo a la propiedad colectiva (dicha también comunal) de las tierras de los pueblos indios de sus tierras hay solo un paso. Se incrementará la disposición de los vasallos (indios o españoles) al crecimiento del excedente tributario si “*conforme alcanza la negociación*” los tributos “*no son uniformes y generales por la diferencia de las tierras y las personas*”. Nada más explícito que el sentido positivo de esta instrucción hecha a los visitadores.

lugar —concluye, con referencia a la población nativa— (...) habida cuenta de la necesidad de regularlas fue preciso conocerlas y auscultarlas”⁷⁵⁸.

Convenientia parece ser la regla. Ideas corrientes de defensa de los indios y sus posesiones parecen avanzar *in crescendo* a lo largo del siglo XVI. Del indio irracional de Sepúlveda⁷⁵⁹, a la protección de las comunidades indígenas. Las conclusiones de la nueva doctrina fueron sencillas, claras y fundamentales: fuera de las verdades reveladas existía un orden natural y un derecho de gentes que podía conocerse a la sola luz de la razón humana. Esta ley natural, reflejo de la ley divina y fundamento del orden y concierto universal, era la misma para todos los seres racionales, fuesen cristianos o no: “*Jus gentium aequale est christianis et infidelibus*”, escribe Soto⁷⁶⁰. Así, para estos *homini novi*, los indios tenían derechos semejantes a los de los españoles⁷⁶¹, puesto que, como decía Francisco de Vitoria,

⁷⁵⁸ *Ibidem*. Introducción..., XVIII y XVIII.

⁷⁵⁹ “*Que cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente y saludable que el de quedar sometido al imperio de aquellos cuya procedencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos (...) de torpes y libidinosos (...) de impíos y siervos del demonio, en cristianos y adoradores del verdadero Dios*”, Juan Gines de SEPÚLVEDA, *Tratado sobre las causas de la guerra contra los indios*, México, Fondo de de Cultura Económica, 1979,13.

⁷⁶⁰ Domingo de SOTO, *Philosophi, ac theologi praestantissimi, in inchoyta Salmanticensi Academia professoris, & sacrae caesareae maiestatis a sacris confessionibus, Super Octo Libros Physicorum Aristotelis, praeclarissima commentaria, cum indice locupletissimo*, Salamanca, ed Venetiis: apud Franciscum Zilletum, 1582; y *Libri decem De iustitia & iure. Nunc postremo post omnes omnium editiones summo studio, fide, exactaque diligentia recogniti. Quibus recens accessit liber octauus, De iuramento, et adiuratione, septimo nimirum in sextum reiecto. Cum indice questionum & articulorum locupletissimo*, ed. Venetiis : apud Gratosum Perchacinum, 1568., 259, s.c.

⁷⁶¹ Grossi nos ilustra acerca de que el debate ente puristas y utilistas, eminentemente cultural, se encuentran diversos modos de concebir la ciencia jurídica. En el tardo medioevo se confrontan y se batallan a la luz de la erosión continua de las categorías romanas fundamentales, siendo éstas los materiales más seguros en otro tiempo, si bien a la luz de nuevas adquisiciones culturales y nuevos hechos políticos y económicos, como por ejemplo, el dominio hispano en América. Y el dominio útil está en el centro de la escena por su doble calidad de “*tradimento romanístico*” y fiel espejo de las instancias medievales. A estos jurisconsultos Grossi los denomina *homines novi*, quienes “*variamente ma sicuramente, per tutta l'Europa, hanno orecchiato il nuovo dei tempi e si son lasciati conquistare dalle fitte discussioni sul metodo, sui compiti della interpretatio e sul ruolo del giurista, sui rapporti fra diritto romano e diritti e prassi nazionali*” GROSSI, *Il dominio...*, 1992, 248. En la *praxis* nacionales, tanto de Europa como en las Indias, la cuestión de la tierra, se basara en el *rapporto senior/vassus* y en la discusión sobre el *vassallus usufructuarius* y el *dominium rei*. La relación es una relación de subordinación y el dominio es un dominio dividido. La reducción del feudo a un *dominium utile* cunde de adeptos en

“Barbari nec propter peccata alia mortalia, nec propter peccatum infidelitatis impediuntur quin sint veri domini, tam publice quam privatim”, dice Francisco de Vitoria, *Relectiones...*, 42.

la Alemania como e. J. Schneidewin (1595) quien rehace expresamente la reinterpretación de los doctores persuadido que la relación superior/inferior típica de las relaciones sociales feudales encuentra su traducción más fidedigna en el plano patrimonial de la articulación de dominio directo /dominio útil, en cuanto este último sea “*directo subalternatur*”, literalmente: «utile dominum transeat in recipientem vasallum scilicet accipiendo secundum Doctores ibi usumfructum pro utili dominio, quod scilicet dominio directo subalternatur et ita recognoscit superiorem dominium» Ioannis Schneidevini, *Epitome in usus feudorum*, Hanoviae, 1595, 21. Otra idea que aparece con fuerza en estos homini novi es la figura del *superficiario*, ese vasallo o siervo predial que disfrutaban del usufructo de la tierra sin ser sus *dominii directi*, que es como decir, tienen la tutela cualificada, real que no tiene nada que ver con la propiedad del fundo. Los maestros españoles de la segunda escolástica como Soto y Vitoria, tratan el problema hombre-bien y dedican capítulos a situarse ideológicamente en la disputa sobre la pobreza del tardo medioevo. El *dominium* venía poco observado desde Santo Tomás que lo había confinado al interior de los pecados que pueden cometerse sobre los objetos, sobre el hurto y la rapiña y que devenía en una noción marginal de su magistral *Summa* (Tomás de AQUINO, *Tratado sobre la justicia*, México, ed. Porrúa, 1990, cap. 10 art. 2, 3 y 4, 182 a 184, trad. de C. Gonzales.). En aquellos la aparición del indio no solo como sujeto portador de dominio sobre sí mismo sobre su cuerpo sino que deviene propietario, idea fundamental del dominio y su plataforma patrimonial, y su *translatio dominii* por contratos, liberalidad de su voluntad, *successioni mortis causa*, etcétera. Ya con Francisco Suárez «Idem esse censetur nostros actus esse liberos et nos illorum habere dominium» Francesco USARES, *Quaestiones de iusticia et jure*, XII, 34. c. 1584 Freiburger theologische Studien, LXII. Si nos detenemos un momento sobre este significado de la preposición podemos imaginarnos el terremoto de las certezas del derecho castellano e indiano sobre el patrimonio de los sujetos conquistados. La libertad del *singolo* es una posición esencialmente dominativa, ya que el sujeto libre es esencialmente un *dominus*, *dominus sui*, *dominus suorum actuum*. Véase al respecto, Manuel CALVILLO, *Francisco Suárez: La filosofía jurídica [y] el derecho de Propiedad*, México, ed. El Colegio de México, 1945, 114. Grossi hablando de estos maestros españoles dice que no hacen más que retomar, porque les es funcional, una idea base que constituye una renovación antropológica y la intuición fundamental de toda esta *koinè* cultural de la naciente era nueva. El ‘libre arbitrio’, construido en clave voluntarista para garantizar la autonomía del sujeto, es el presupuesto insuprimible de cada *dominium*, porque es eso mismo *dominium*. Siempre, en esta nueva *episteme*, existe intercambio posible entre *libertas* y propiedad, tal como lo afirman todas las corrientes individualistas burguesas modernas. Mi libertad coincide con la libertad que yo tengo de mí mismo y de mis acciones, y mi existencia como persona libre conlleva una serie de comportamientos *dominativi* de la propiedad que yo tengo de mí mismo, como dice Soto; / «homines suapte natura et jure coeperunt esse domini suarum actionum ut illa libertate» Domenico de SOTO, *De iustitia et jure*, lib. IV, quaest. III, 85. Como leemos, la identificación del libre arbitrio se presenta como una ecuación entre libertad y dominio de sí mismo; inequívocamente “*dominium corporis sui* y de *dominium membrorum*”, lo cual, basta como pequeña acotación, no toda la visión teológica se acogió fácilmente y hubo un rechazo de las élites locales por cuanto era *communis opinio* lo contrario.

De todo lo dicho hasta aquí —concluirá Vitoria en *Relectiones*..⁷⁶²— “los bárbaros ni por causa de pecado mortal alguno, ni por razón de infidelidad, se hallan impedidos de ser verdaderos dueños, tanto publica como privadamente”⁷⁶³. Así, afirma que, al momento de estas palabras, las Instrucciones de los virreyes y del Consejo preguntaban, a través de los oidores, de qué forma los indios ejercían el dominio sobre sus tierras y cómo tasaban el tributo a los incas. Surgen en América las “premisas categóricas”, tales como la República no otorgó al emperador la propiedad de sus campos y cultivos sino que las retuvo para sí, aunque fueran incultas, tal como lo manifiestan los catedráticos de la recientemente creada Universidad de México⁷⁶⁴.

El régimen de tierras señorial, en tanto la renta de sus titulares, proviene de la servidumbre devenida en detentadora⁷⁶⁵, pudiendo amparar una concepción en la que las

⁷⁶² Francisco de VITORIA, *Relectiones tredecim in duos tomos distributae, per quendam Ingolstadianorum theologorum ab innumeris propemodum & grauibus mendis & vitijs vindicatae*, ed. Vveissenhorniana apud Vvolfgangum Ederum, 1580, 648.

⁷⁶³ Francisco de VITORIA, *Relecciones de Indios y del Derecho a la Guerra con trozos de la referente a la Potestad Civil*, versión al español del Marqués de Olivard, Madrid, ed. Espasa-Calpe S.A., 1928, 43. Para una lectura crítica véase Ada LAMACCHIA y Luciano PERENA, *Relectio de Indi : la questione degli indios. Francisco de Vitoria*, Bari, ed. Levante, 1996, 136.

⁷⁶⁴ Por ejemplo Fray Antonio de VERACRUZ, *De dominio infidelium et iusto bello*, manuscrito de recoge las enseñanzas de una elección que expuso, este Maestro en Sagrada Teología, Prior de la Orden agustina y catedrático de Prima de la Universidad de México, en la misma Universidad recién fundada (1553-1554). Dice que / «republica non dedit dominium agrorum aut arborum suorum, sed sibi retinuit. Ergo non potest imperator aliis dare. (...) avra seu terrae populi non sunt tributa sed sunt illa ex quibus solvunt debita tributa (...) Dubitatur utrum ille qui haber dominium populi iustum per donationem regiam, possit, pro libitu, occupare terras eorum, etiam si sunt incultae, vel ad pascua suorum pecorum vel ad colendum et colligendum frumeta, etc. [La republica no otorgó al emperador la propiedad de sus campos y cultivos, sino que la retuvo para sí. Luego tampoco el Emperador puede cederla a otros (...) la tierra aun inculta, no es del señor que tiene derecho a los tributos sino del pueblo. Luego no puede, por capricho [según la versión de Zavala], o a su talante [según Almazán Garmendia] ocuparla (...) los cultivos o las tierras del pueblo no son tributos sino bases de donde se proceden los debidos tributos (...) se duda si el que posee justamente, por donación real, un pueblo, puede, por capricho, ocupar tierras de él, aunque sean incultas, o para pasto de sus rebaños o para cultivar o recoger grano, etc.». Se presenta *supra* la versión del texto latino de Ernest BURRUS, *The Writing of Alonso de Veracruz*, St. Louis, ed. Jesuit Historical Institute of Roma, 1968, 2 t.; la versión española de Jose A. Almazán GARMENDIA, “Fray Alonso de Veracruz y la encomienda indiana en la historia eclesiástica novohispana 1552-1556”, Madrid, ed. José Porrúa, 1971; y por último Silvio ZAVALA *Fray Alonso de Veracruz. Primer maestro de Derecho Agrario en la incipiente Universidad de México*, México, Centro de Estudios de Historia Condumex Chimalistac, 1981, 88.

⁷⁶⁵ Este dominio dual es descrito por Charles Gibson como una paradoja de la historia mejicana de las relaciones entre las haciendas y las comunidades indígenas, por cierto, incomprensible si no

tierras y los cultivos no eran tributos sino las bases de donde procedían los debidos, justos y lícitos tributos (*est tributum iustum*).

En definitiva, tanto la escuela de los *uomini nuovi* como la de los oidores de audiencia indianas van abriendo camino a la conformación de un derecho de accesión a las tierras que ampare al superficiario en detrimento del absolutismo jurídico que impondrá la modernidad, en sus dos más grandes ejemplos: uno el que hace referencia al “dominio útil” y otro, a la apreciación creciente de que los tributos no son del rey sino de los tributarios⁷⁶⁶.

§ 23. LOS BIENES RIOJANOS DE LA *SOCIETAS IESU*

Al intentar discernir los vínculos entre los derechos de propiedad *fondaria* y el orden normativo —constitutivo sustancial de la ius-historiografía— en una determinada jurisdicción como La Rioja del Tucumán, algunos acontecimientos puntuales (o coyunturas sociales) nos permiten nos permiten echar luz sobre ciertos elementos a fin de interpretar la incidencia de la esfera normativa estatal indiana en la sociedad civil tucumana. Uno de ellos, como vimos, es la “Visita” del oidor Vargas, enviado con la suma del poder público regio para aplicar justicia a los mercenderos que, según la codificación indiana de la Recopilación, violaban los derechos de los indígenas encomendados, y en términos de Pietschmann, puede decirse que la Corona procedió con una política de limitar las tendencias feudalizantes en las sociedades conquistadas⁷⁶⁷. El otro acontecimiento de significativa importancia fue la expulsión y confiscación de los bienes de la Compañía de Jesús, cuya abrupta ruptura o

incorporamos elementos heurísticos de la ciencia jurídica como las categorías duales de dominio útil y dominio directo, de mercendero y de superficiario. Gibson plantea, en un puntual ejemplo histórico, como “*algunas haciendas y ranchos nunca se emanciparon de la tenencia original indígena de la tierra sino que mantuvieron una situación comparable a la de un barrio o estancia sujetos a una cabecera. Así [por ejemplo] en la región inmediatamente adyacente a la capital, las dos haciendas de San Antonio Aragón y Santa Ana Aragón permanecieron bajo la jurisdicción formal de los gobiernos indígenas de Tenochtitlán y Tlaxtebolco respectivamente. Fueron incluidas como subdivisiones tributarias de las comunidades indígenas y, sin embargo, sus propietarios españoles rentaron todos los establecimientos a las mismas comunidades indígenas*” (la negrita es mía), en C. GIBSON, *Los aztecas...op.cit*, 300 (traducción de Julieta Campos).

⁷⁶⁶ En mi trabajo “Unicidad y diversidad en el sujeto patrimonial indiano...”-

⁷⁶⁷ H. PIETSCHMANN, “El ejercicio y los conflictos...” , 674 y ss.

discontinuidad nos brinda pistas, idealmente, sobre el estado de la cuestión de la propiedad fondaria eclesial y su relación con el instituto de la merced de tierras.

Estos dos acontecimientos, conviene reiterarlo, son importantes para nuestro objeto de estudio porque afectan a los sujetos situados en los estamentos coloniales y a su particular esfera patrimonial, elemento cons

El archivo de la Junta Municipal de Temporalidades⁷⁶⁸, que nos ha llegado hasta nuestros días, demostró que los expulsos poseían bastante superávit de autoridad en términos de poder para hacer exigibles las decisiones que se adoptaban sobre su “hacienda”, de desarrollar los controles de precios de sus productos agrícolas y de evaluar informes escritos de los administradores que gerenciaban las haciendas. En contraposición, no hemos encontrado los legados de las “capellanías”, con los respectivos “enteros” de la feligresía, que nos ayudarían a una mejor interpretación de lo relación con el cabildo (recordamos nuevamente la pérdida de los archivos del cabildo de La Rioja) y con las familias “principales”.

Compulsando la, por cierto, rica producción historiográfica sobre la presencia de la Compañía en La Rioja⁷⁶⁹, en el Tucumán y en el Virreinato del Río de La Plata, con //

Tabla 12: Propiedades jesuíticas en La Rioja por año y forma de adquisición, Siglo XVII y XVIII

Id	año	propiedad	Ubicación	forma de adquisición
I	1612-1619	Hacienda de Viña	Extramuros de la Ciudad de La Rioja	MERCED del gobernador Quiñones de Ossorio
II	1620	Tierras de ENCÓN	Ronda de la Ciudad de La Rioja	COMPRA a Engracia Garzón y Andres de Mendoza

⁷⁶⁸ En el Archivo General de la Nación Argentina (AGNA IX.22.7.1 y X.22.7.2), Buenos Aires.

⁷⁶⁹ Nicholas CUSHNER, *Jesuit ranches and the agrarian development of colonial Argentina, 1650-1767*, Albany, ed. State University of New York Press, 1983, 234; Magnus MÖRNER, *Actividades políticas y económicas de los Jesuitas en el Río de la Plata*, Buenos Aires, ed. Hyspamérica, 1986 [1968] 162; Félix LUNA, “Los jesuitas en La Rioja”, en *TODO ES HISTORIA*, núm 229, 66-73; Lía QUARLERI, “Los jesuitas en La Rioja colonial: los mecanismos de adquisición de tierras, integración y conflicto (1624-1767)”, en *Memoria Americana* núm. 8, año 1999, 101-131. Ernesto J. MAEDER, *Los bienes de los jesuitas*, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET, Resistencia, 2001, 228.

III	1624	Fundación del Colegio	Ciudad de La Rioja	BENEFACTOR Quiñones de Ossorio
IV	1628	Tierras de GUANCHÍN/ Aguada de GUANCHIPA	Sud Oeste de Chilecito	MERCED del Gobernador Felipe de Albornoz
V	1927-1937	Aguadas de ANGUATTA y CAPALGAPAN	-	MERCED del Gobernador Felipe de Albornoz
VI	1633	Hacienda de NONOGASTA	Sud de Chilecito	COMPRA a Andrés de Mendoza
VII	1630-1640	Estancia de CUCHACO	Sud de la Ciudad de La Rioja	DONACIÓN de mensiana de Cháves
VIII	Antes de 1637	TIERRA para Hornos	Ciudad de La Rioja	MERCED del Gob. Juan Alonso de Vera y Aragón o de Felipe de Albornoz
IX	1647	Aguadita de HAPACHA	Próxima a la Ciudad de La Rioja	TRUEQUE con Nicolás de Brizuela
X	1647	Estancia LAS LOMAS	-	TRUEQUE con Nicolás de Brizuela
XI	Anterior a 1660	Potrero EL DURAZNILLO	Falda del Famatina	COMPRA a Damian Pérez de Villaroel
XII	Anterior a 1664	Estancia LA SALADILLA	NO de la Ciudad de La Rioja	TRUEQUE con Nicolás de Brizuela
XIII	1672	Potrero de Massangano	SO de Chilecito	MERCED del Gob. Angel de Peredo
XIV	1660-1680	CHACRA Y VIÑA	Ciudad de La Rioja	COMPRA a Francisco Maldonado
XV	Anterior a 1680	Estancia EL DURAZNILLO	N. de la Ciudad de La Rioja	COMPRA
XVI	Anterior a 1680	LAS HIGUERILLAS	N. de la Ciudad de La Rioja	-
XVII	1687	Ejido del MOLINO	NO de la Ciudad de La Rioja	MERCED del Gob. Thomas de Argandoña
XVII I	1693	Hacienda de MALLIGASTA	E de Chilecito	DONACIÓN de Leonor de Ibarra y Velasco
XIX	1683-1724	Estancia y de HUACO	NO de la Ciudad de La Rioja	COMPRA
XX	1757	SOLAR Casa de Ejercicios	NO de la Ciudad de La Rioja	COMPRA a Agustina de Sotomayor
XI	-	Media Cuadra y Medio Marco de Agua	Ciudad de La Rioja	COMPRA a Damián de Castro y Bazán

Fuente: L. QUARLERI “Los jesuitas en..”, 109.

/// los archivos de Córdoba y del Catastro provincial, nos encontramos con una característica importante para nuestro objeto de estudio: la solicitud de tierras a través

de mercedes de tierras fue sustancial en el modo de adquirir dominio de tierras de la Compañía, pero, también, la petición formal de merced de tierra al Rey sirvió para sanear algunas compras de hecho, transacciones sin “pruebas de derecho”, usurpaciones y hasta litigios con colindantes, es decir, el título regio sirvió para perfeccionar la ya posesión efectiva y aún ampliarla con las “sobras”. Este dato es por sí mismo revelador de la importancia del título de merced como el más perfecto *dominium* posible para una corporación eclesial, cuyos integrantes de “mando” estuvieron bastante en contacto con comentaristas de leyes canónicas, de derecho de gentes, de derecho romano, leyes reales, la literatura jurídica crítica con el derecho vigente y las técnicas legislativas en general⁷⁷⁰. Una solicitud de merced de tierras era más factible que una solicitud de “prescripción” adquisitiva, por cierto, parte integrante del derecho indiano⁷⁷¹.

Claramente, en la “obra” de construcción social de la propiedad⁷⁷², los jesuitas visualizaron en la merced de tierra un recurso o expediente o modo más idóneo de

⁷⁷⁰ Nuevamente, el índice o listado de libros de la biblioteca jesuítica del Colegio de La Rioja se encuentra perdido, aunque sabemos que una de las doce habitaciones del solar central del Colegio era ‘biblioteca’. No hay datos de esta jurisdicción eclesiástica en el *Fondo Jesuita de la Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba* (Argentina). Para una reciente revaloración de la relación entre la *intellighenzia* local y los catálogos de las bibliotecas jesuitas tucumanas, siempre en relación al derecho, véase la introducción al trabajo de Esteban LLAMOSAS, “Las obras jurídicas en la biblioteca del colegio jesuita de Arequipa”, en *Rudimentos legales-Revista de Historia del Derecho*, Jaén, núm. 3, 2001, 91-159.

⁷⁷¹ Quien ha advertido, al referirse al corpus de normas que la Corona dicta para las “*tierras adquiridas sin títulos bastantes*” (Pinedo) ha sido Altamira, para quién “la única excepción a la norma fundamental de poseer justos títulos, que consta en la ley citada [tít. 12, Libro IV] es la prescripción, tal y como ésta podría funcionar, según las leyes castellanas, para convertirse en dominio”, en R. ALTAMIRA Y CREVEA, *Diccionario castellano...*, 78. En rigor, la doctrina de los *títulos justos y verdaderos* a los que alude la disposición dice:

“...se señalen términos competentes para que los poseedores exhiban.. los títulos de tierras, estancias, chacras y caballerías, y amparando á los que con buenos títulos y recaudos, ó justa prescripción poseyeren, se nos vuelvan y restituyan las demás”, Cfr. RECOPILACIÓN DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS,...[1596] 39

⁷⁷² Para usar una demodé concepción, reiterada por Rosa CONGOST. Conferencia “*Tierras, hombres, leyes. La construcción social de la propiedad de la tierra*”, Instituto Ravignani – Sala de Investigadores, Ciudad de Buenos Aires, Mayo 2006.

revalidación de actos lícitos (como las compra venta anteriores a poseedores sin título) como los no ajustados al derecho vigente (donaciones *in aposento mortem*).

A modo de ejemplo, historiemos brevemente un caso: la estancia de Cuchiaco. El padre Pedro Pimentel solicita y obtiene del Gobernador Lucas de Figueroa de Mendoza en 1663 la merced de *Cuchiaco*⁷⁷³ o (en quichua “Aguada del jabalí o cerdo salvaje”). Pero a estas tierras la compañía ya las había recibido por donación desde hacia más de treinta años. Fue el futuro fundador del mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta, Don Pedro Nicolás de Brizuela quien, a pedido de su suegra, Doña Mensiana de Chávez y Salcedo, que estaba casada con don Juan Tomé Doria y Farfán de los Godos, padres de su mujer Mariana de Doria⁷⁷⁴, y en nombre de Mensiana, realizó la donación a favor de la Compañía en la primera mitad de la tercera década del siglo XVII. Según una mensura moderna del año 1870⁷⁷⁵, este predio surgió a partir de la merced de tierras de Ponchauil, que el teniente de gobernador Gonzalo Duarte de Meneses hizo a Juan Patiño de Mendoza en el año 1593, para estancia de “ganado mayor y menor”. Pocos años después Juan de Mendoza vendió “el aguas y tierras de Cuchiaco” a Juan Gómez de Chaves, vecino de la ciudad de Santiago del Estero y hermano de la donataria. Ambos eran hijos del vecino feudatario de La Rioja Francisco Gomes de Chaves y María Bautista Ranesso. Juan de Chaves no dejó descendencia por lo que debió heredar su hermana Mensiana Gomes de Chaves y Salcedo. Esta última fue, en definitiva, quien donó a la Compañía. Varias décadas después, la Compañía “perfecciona” el título de dominio utilizando la vía de la solicitud de merced de tierra. ¿Por qué la perfecciona? Ya es poseedora de la estancia cuyos donatarios se remontan a 1593 pero es plausible que, la falta de una buena identificación del bien, sus linderos, la corrupción o perdida de los títulos invocados y fecha cierta hicieran necesario peticionarla en 1663.

La Compañía de Jesús, era, en términos modernos, el principal propietario de La Rioja. Llegados en 1618-19 a la ciudad, a mediados del siglo ya tenían residencia y

⁷⁷³ R. CATALÁN et AL, *Mercedes...*, 106.

⁷⁷⁴ Eduardo COGHLAN, “Los Brizuela y Doria”, en *Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas*, núm. 14, 1965, 20.

⁷⁷⁵ AJLR, J-327, “Cuchaco- Mensura”, año 1870, f. 16.

Colegio, y administraban las estancias proveedoras de insumos y excedentes, por lo que deducimos que eran los principales productores agrícolas de vino, trigo y frutas secas de la jurisdicción. Su ímpetu y *animus* emprenditorial se manifiesta en los fundamentos de la petición de una merced de tierras dado que, mientras la generalidad de los otros mercenderos vasallos argumentaban (en similares escritos) sobre la necesidad de “tener sustento”, la Compañía pedía, en 1687, la tierra para construir otro molino y una caballeriza con la cual articular las demás unidades productivas. Dice el documento de petición:

*“El P. Francisco Busges Rector de la Cia de Jesus desta ciudad de la Rioja paresco y digo, que entre el hejido del molino, que el año de quarenta compro el general don Juan de Adoso, y la chacra, o quadra de cochangasta, que caen a la parte sur de la acequia o rio principal desta ciudad que viene dela boca dela quebrada, ay en la parte del norte desta acequia, o rio, un salto, y un pedaso de tierras vacas, que son aproposito para poder poder fabricar en ellas un molino y un canal para tener, y pastar algunas cavalgaduras, y buies necessarios para el arrio de un molino; las quales no se sabe sean de persona alguna, y assi son realengas. Por lo qual a Usd. Pido y suplico, que como Gouernador y Capitan general que es desta Provincia de Tucuman, por su Magestad, que Dios guarde, que en nombre desa Magestad haga merced a este collegio dela comp de jesus de dicho salto, y pedazo de tierras como tengo dicho, para edificar un molino, y hazer un corral para tener el ganado necessario para el arrio de otro molino, y poder pastear en otra tierra, por tener este collegio necesidad de un molino para sustento de sus sujetos”*⁷⁷⁶

Como leemos, estas tierras eran solicitadas para construir un molino y potrero para los semovientes así como arreo, mulas y bueyes; además, usarán los marcos de agua necesarios para riego, construcción de adobes, ladrillos y tejas para abastecer y cocer en los hornos proyectados en esa misma merced.

Como sucediera en otras regiones, el “extrañamiento” de los padres jesuitas y la expropiación de sus bienes fueron cumplido rigurosamente por la Junta Municipal de

⁷⁷⁶ AHCo. Escribanía de Gobierno 2, Leg. 6 –Tomo II, Expte. 22 [(“Expte. 114. 1687. La Compañía de Jesús pide merced de mas tierras, en La Rioja. Escribano Olca”)].

Temporalidades, órgano rector⁷⁷⁷ que fuera, al decir del obispo Abad de Córdoba del Tucumán,

“erigida en dicha ciudad [La Rioja] para la disposición de los bienes y demás que pertenece al Colegio que tenían en la referida ciudad los PP Jesuitas expulsos y hoy pertenecen a Su Magestad,”⁷⁷⁸.

Estas providencias nos permiten conocer la estructura administrativa y contable que se articuló para esta operación de enajenación, por cuanto, el decreto de Carlos III que determinara la expulsión de los jesuitas de España, América y Filipinas, supuso dos procedimientos simultáneos. Por una parte, la detención y extrañamiento de los sacerdotes, coadjutores y estudiantes de la Compañía de Jesús y, por la otra, “la ocupación de las temporalidades de la Compañía en mis dominios”. El primer paso fue dado por el comisionado Juan Calixto Ruiz Gamboa⁷⁷⁹, mientras que, según el procedimiento, se designaban tasadores a posteriori del inventario practicado, quienes se describían a sí mismos como,

“Nos los tasadores D. Domingo de Morales, tasador nombrado por parte del defensor de Real Hacienda y Don Alvaro de Luna Bazan, asimismo nombrado de parte de D.

⁷⁷⁷ *Colección General de las providencias, hasta aquí tomadas por el gobierno sobre el extrañamiento y ocupación de la temporalidades de los regulares de la Compañía que existían en los dominios de S. M. de España, Indias y Filipinas, a consecuencia del real decreto del 27 de febrero y pragmática sanción del dos de abril de este año*, editadas en Madrid, constan de cinco tomos; el I en 1767 con 104 páginas, el II de 1769 con 91 pág., el III también de 1769 con 135 pág., el IV de 1774 con 144 pág., y la V y última con 1784 páginas y un índice.

⁷⁷⁸ AGNA. IX.22.7.1

⁷⁷⁹ Este regidor de la Ciudad de Salta fue comisionado por el gobernador Campero, quien fue acusado de fraude en el inventario de los jesuitas. Procesado por ello, se lo condenó, por sentencia del 9 del Agosto de 1772, a doce años de presidio en Malvinas y a restituir el desfaldo con la declaración de ineptitud para desempeñar cargos públicos. Los legajos del proceso son parciales y el principal está titulado como “*Contra Don Juan Calixto [Ruiz] Gaona por sustracción de bienes en la expulsión para que fue comisionado en virtud de su oficio del 29 de Oubre de 1767. Testimonio de los Autos seguidos contra Don Juan Calixto comisionado nombrado para la expulsion de los Jesuitas de la Ciudad de La Rioja y sequestro desus temporalidades sobre los vienes*”En uno de estos legajos se dejó constancia que “*el reo, Juan Calixto Ruiz Gaona, contenido en estos Autos, hallandose preso en esta Real Fortaleza el año de 73, se descolgó de sus murallas y se hizo fuga. Su causa, que se consultó el Ecmo. Sr. Virrey de Lima, original, y no han vuelto sus results*”, AGNA. IX.22.7.2.

Francisco Xavier de Herrera en los vienes que constan de la Sumaria Ynformación recibida de los vienes que fueron sequestrados a los Padres Jesuitas”⁷⁸⁰

El detallado registro de los bienes tasados, como ya dijimos, se vio enriquecido con los informes de contables responsables de las “Haziendas” que incluían la cantidad y precio de los productos como así también los gastos en, por ejemplo, conchabos, enseres y fletes. No obstante, la administración de las temporalidades, poseía cuadernos contables: el “*Quaderno Segundo de vienes muebles*” y el “*Quaderno quarto, donde consttan las retassaciones, de las estancias, potreros, ganado mayor y menor y Cavallares, pertenecientes a las temporalidades de la ciudad de La rioja*”. De este último, podemos concluir que las propiedades de la Compañía eran, básicamente, cuatro grandes haciendas o estancias y, al menos, una cuadra urbana más varios solares, cuyo origen fue de mercedes de tierras, de cartas de compras y de donaciones de particulares.

Veamos qué “haciendas” de los jesuitas fueron, por esta administración de temporalidades, listadas:

1. Nonogasta⁷⁸¹, ubicada en el departamento Chilecito “Su territorio, ubicado a 25 leguas de la ciudad hacia el oeste, que se ocupa en sementeras, es de

⁷⁸⁰ AGNA IX.22.7.1 y X.22.7.2

⁷⁸¹ *San Lucas de Nonogasta* se llamó al Fuerte que en el pueblo de indios *nonos* o *nolos* hizo construir Jerónimo Luis de Cabrera, casi en simultáneo con fuerte del Pantano, es decir, entre 1632 y 1633, como parte de acciones contra los indios rebeldes en el *Gran Alzamiento* (véase § 9). El primer intento por consolidar el dominio hispano fue llevado por un tal Garzón. Siguiendo un trabajo de R. Vera Vallejo [1943] y D. de la Vega Díaz [1944], Diego Garzón se dijo a sí mismo como conquistador de “*Salta, Esteco, Córdoba, San Juan de la Ribera y Rioja*”, y que hacía más de 20 años había poblado en las tierras de los nonogastas una chacra con viñas y arboleda de *castilla*, y, según dirán sus herederos por “*fuera del límite las Ordenanzas*” que impide a los encomenderos construir casa propia en las tierras de sus encomendados. Lo ocupado por él era “*desde las casas, viña y huerta, media legua de travesía con el agua necesaria que riega dichas tierras, sin perjuicio [de indios o terceros] por ser postrero*”. Era hijo del capitán Gonzalo Sánchez Garzón y su hija, Doña Engracia Garzón, se había casado con un militar que había participado de las entradas de Cabrera y Albornoz al Calchaquí, llamado Andrés de Mendoza, quien es que argumenta lo antedicho en una petición que el gobernador Felipe de Albornoz recibió en Tolombón el 16 de marzo de 1631, en la cual se solicita la merced de tierras de Nonogasta. Mendoza había hecho la guerra en Chile, asistió al socorro de Buenos Aires y acusa el acompañamiento a Albornoz en su entrada en Calchaquí en donde dice ser lisiado por heridas de lanzadas que le atravesaron la mano y la pierna. Mendoza aduce que su suegro

pan llevar”, constatando que sus dimensiones “alcanzan dos leguas a cada viento”, dirá el ‘Quaderno’. En esta hacienda vitivinícola había viñas (8.338 vides)⁷⁸², frutales, las casas y la bodega. La estancia disponía —y

tuvo posesión y para su seguridad pedía merced. El Gobernador Alborno, ante esta petición y “para mejor proveer”, pide informes al teniente de gobernador de la jurisdicción riojana, Capitán Diego Fernández de Riva Martín, quién le informa, con fecha 26 de junio de 1631, que no hay perjuicio de terceros, porque el pueblo de indios de “*Sañogasta, encomienda de Juan Fernández Picón, está de éstas tierras cuatro leguas, y del pueblo de Vichigasta, encomienda de la mujer del Coronel Gonzalo Duarte de Meneces, cinco leguas, y del pueblo de Anguinán tres, y del de Ampatá otras tres, que en todos estos dichos pueblos hay tierras y aguas suficientes donde siembran y tienen sustento sin daño ni perjuicio alguno. Y asimismo informo a Usía que los indios del pueblo de Nolo, encomienda que fue del dicho Capitán Diego Garzón, que hoy posee en segunda vida doña Engracia Garzón, mujer del dicho Andrés de Mendoza, está a dos leguas poco más o menos pegado al molino de Juan Ramírez de Contreras, y hoy día, según el padrón, no son más que tres indios viejos que los demás se han consumido y éstos están en estas tierras de Nonogasta sirviendo a su encomendero en la labranza de ellas, donde se sustentan muy bien dándoles tierras y aguas, de lo demás podría Usía hacer merced al dicho Andrés de Mendoza*”. El gobernador Felipe de Alborno hizo la merced de tierras “de media legua de una parte y media de otra en cuadro”, fecha en Santiago del Estero el 2 de setiembre de 1631. La posesión fue dada el 4 de diciembre de ese año, y en 1633 Mendoza vendió a los jesuitas, firmando y tomando posesión el cura Rector de la Compañía, padre Juan de Humanes, siendo testigos de venta Hernando de Arroyo, alguacil mayor, el tesorero Alfonso de Torres Briceño, ante el Alcalde García (¿Gabriel?) de Mercado y Reynoso. En 1671, los jesuitas piden las demasías de sus tierras de Nonogasta “y agnadas que hubieren en el contorno de al estancia del Colegio” la cual Peredo la confiere en La Rioja, el 23 de enero de 1672, incluyendo otros potreros que los religiosos habían comprado u ocupado desde hacia dos décadas, citado en Ricardo VERA VALLEJO, “Memorias...” ; y D. DE LA VEGA DÍAZ, *Toponímica Riojana*, Córdoba, ed. Imprenta Pereyra, 1944, 338, 1era. Reedición, La Rioja, ed. Canguro, 1994, 222 y ss.- Aunque si bien ningún Garzón o Garçon, figura como encomendero en los padrones que nos han llegado hasta nuestros días, Vide A.G.I., Charcas, 26, copia del Teniente de Gobernador Gaspar Doncel al gobernador del Tucuman, Capitán Alonso de la Ribera, fechada en San Juan Bautista de la Ribera, 4 de noviembre de 1607. Tampoco en los apéndices de extranjeros de A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *La encomienda...* 199 a 346; ni R. ESCOBEDO, *El tributo...*, es verosímil la afirmación del yerno Mendoza respecto a su suegro y suegra eran encomenderos de las tierras que él mismo peticiona, y relaciona factualmente —es decir de hecho o de facto— las mercedes de encomienda y tierras de Nonogasta.

⁷⁸² Puede decirse que las tierras del valle de famatina conformaban parte del complejo vitivinícola del espacio peruano potosino, espacio que, hacia el 1600, deja de importar vino de España, y es el país de Cuyo más La Rioja, Chile y los valles de una gran franja desértica peruana de Ica, Pisco, Nazca y Arequipa, los que abastecen de vinos y aguardientes a la constante demanda local. Representan estos dos productos y en todo el siglo XVII el mayor de los cultivos comerciales riojanos. La producción de vino se habría mantenido estable y la gran cantidad de esclavos de los jesuitas responderían a una radicación masiva de negros, producto de la caída demográfica indígena y las enormes exigencias de mano de obra barata destinada al mantenimiento de los cultivos y acequias, la recolección y colocación de abonos de guano, la cosecha, la fabricación de botijas de barro y el acarreo hasta los lugares de comercialización. Para adentrarse en el fenómeno de la sobreproducción y su efecto sobre los precios agrícolas vimos a Aleksandr CAYANOV, *La*

esto es lo novedoso para la mentalidad posesora de la época— de dos potreros, en Agua Negra, en la falda del cerro Famatina y el Duraznillo⁷⁸³, lo que denota el carácter hacendístico independientemente del modo de adquisición de las tierras. Nonogasta había sido comprada, en el año 1633, por el Colegio de La Rioja a Andrés de Mendoza, vecino de esa ciudad. Esta propiedad, que fue una de las más importantes entre las que adquirió la Compañía de Jesús en esa jurisdicción, estaba ubicada en el valle de Famatina, al igual que la denominada Malligasta. Estas dos propiedades conformaban un núcleo productivo cerealero, y ambas estuvieron varias veces en la mira de los vecinos encomenderos. En el área de influencia de Nonogasta, los jesuitas tenían potreros para ganado mayor y menor. El potrero de Massangano, que había sido obtenido por merced en el año 1672 junto a las demasías de Nonogasta, y el Duraznillo, como vimos, al menos la petición de merced está fechada en 1678. La tasación fue de 12.350 pesos incluyendo el ganado⁷⁸⁴, su producción de trigo, maíz y frutales por un valor de \$ 220 anuales, mientras “que juntas estas partidas en los quatro años [1768 al 1771] hazen la cantidad de 158 arrovas de vino y 6@ de aguardiente”⁷⁸⁵. La junta arrendó esta hacienda a los vecinos Inocencio Gordillo y Brioso y Juan Antonio de San Román y Zeballos,

organización de la unidad económica campesina, Buenos Aires, ed. Nueva visión, 1974, 342, [traducción castellana de *Putesestvie moego brata Alekseja v stranu krestjanskoj utopii*, Nju-Jork, ed. Serebrjanyj vek, 1918, 93.] y estudiado esta economía campesina en La Rioja en mi tesis de grado (aunque citando a Chayanov en la versión en inglés), Cfr. Adrián MERCADO REYNOSO, *Análisis del capitalismo agrícola...*, 56; C. S. ASSADOURIAN, *El sistema ...* 178-183; y G. LOHMANN VILLENA, *Apuntaciones sobre el curso de los precios de los artículos de primera necesidad en Lima durante el siglo XVI*, Lima, 1967, 12-16.

⁷⁸³ Véase la petición de merced y amparo del Duraznillo, en Apéndice Documental J, p. 566 y ss.

⁷⁸⁴ AGNA IX.22.7.1

⁷⁸⁵ La información requerida de lo producido (en otros términos, del capital circulante de cada unidad productiva que, hasta tanto sea puesta en venta, generaba beneficios anuales o estacionales) provenía de un Real Orden del 31 de enero de 1784. Véase AGNA B N 92214 mientras que la respuesta riojana se halla en AGNA IX. 21.7.1.

contrato que caducó el 26 de mayo de 1803⁷⁸⁶. En 1805, Inocencio Gordillo pagó por Nonogasta, de la que era depositario, la suma de \$ 8.038 al presidente de la Junta Municipal de Temporalidades y subdelegado de la Real Hacienda, Don Manuel Vicente Bustos.

Hacia 1810, se cosechaban en la hacienda de Nonogasta veinticinco mil litros de vino y cinco mil arrobas de maíz. A la muerte de su titular Gordillo, la heredaron sus hijos y se dividió en cuatro partes iguales siguiendo a las leyes castellanas. Una de estas fracciones correspondió a la esposa del coronel Nicolás Dávila, hijo del titular del vínculo de mayorazgo de Sañogasta don Francisco Javier de Brizuela y Doria. Un historiador familiar de fines del siglo XIX, Guillermo Dávila de San Román, atribuye el apogeo del espacio nonogasteño a los años 1872/1878, en los cuales la producción de vino llegó a doscientos cuarenta mil litros y dos mil quinientas arrobas de trigo y maíz, además de los alfalfares. Después de este periodo, la hacienda entró en un periodo de decadencia que el autor le atribuye a “la muerte de sus dueños, por una parte, la escasez de agua por la otra, el bajo precio de sus productos y las malas cosechas de los Llanistas, sus compradores de vino, hizo que las personas vecinadas buscarán trabajo en otra parte”⁷⁸⁷. Es evidente la existencia de la clásica crisis de tijeras de la que habla Chayanov⁷⁸⁸ en donde la caída del precio debido a la sobreproducción de vid/vino impulsó la necesidad de incrementar la superficie sembrada y la necesidad del agua de riego recobrará una nueva dimensión como objeto de conflicto⁷⁸⁹. Pero no era la

⁷⁸⁶ Guillermo DÁVILA SAN ROMÁN, *Breves apuntes del pueblo de Nonogasta, 1598-1890*, en *Revista de la Biblioteca*, núm. 4 y 5, ed. La Constitución, La Rioja (1890), citado por A. BÁZAN, *La Rioja y sus historiadores*, Buenos, Aires, ed. Platero, 104.

⁷⁸⁷ G. DÁVILA, *Breves...*, 109,

⁷⁸⁸ A. CAYANOV, *Putesestrie...*, 5 y ss.

⁷⁸⁹ Los conflictos por el agua entre los jesuitas de Nonogasta con el colindante mayorazgo de Sañogasta habían sido fuente de *lis* durante todo el siglo XVIII siendo de resolución de la mismísima Audiencia de Charcas. Pero, a fines del siglo XIX las situaciones reales de dominio de la

falta de agua la causante de la crisis. A diferencia de las tradicionales tierras comunales del resto del valle de Famatina y de Guandacol, la hacienda de Nonogasta, con las características de *grans domaines* de la sociedad colonial, era, a principios del XIX, un conglomerado de medios y pequeños propietarios con “dominio perfecto” de su predios porque el antepasado Gordillo había “compuesto”, por compra en subasta pública, los derechos de propiedad de la hacienda en cuestión en 1805, legalizados mediante el pago de una suma “justa” y “moderada” al erario real, constituyéndose éste el título originario y no la imprecisa, a ojos “parapropietarios”, merced de tierras peticionada y otorgada a Antonio de Mendoza en 1629-31⁷⁹⁰.

2. La Viña, era un “establecimiento” más próximo a la ciudad de Todos los Santos, estaba ubicada a seis cuadradas y ocupaba unas 400 varas de largo por otras 150 de ancho. Estaba dotada de agua de la acequia principal y era una bodega con sus viñedos, aperos, huertas y herramientas. A ella se le incluía la cuadra de las tierras “de Encón” que eran de la merced solicitada por el padre Burges, antes mencionada. Allí había un molino “con todo lo necesario” y los hornos “uno para cocer tejas y otro para tinajas” con sus respectivos ranchos y ramadas. Fue tasado en \$ 13.281 y Francisco Moreno fue el “Arrendatario Real de la Chacra Hazienda de Viña”.

tierra se dará en un marco de estabilidad inicial de la tenencias de la tierra con dominio pleno (debido a la nueva patrimonialización por subasta de los bienes de los expulsos) y la aparición de minifundios que obligaron al Estado provincial a realizar estudios de optimización de las tomas de la vertientes y consolidar la canalización del agua, además de, como es sabido a “unir” el derecho de agua al derecho a la tierra en un solo derecho real. Estos determinaron que el caudal en el pie de la serranía de la cordillera era de 206 litros por segundo pero que se reducía, por variadas razones, a 40 litros por segundo al llegar a la “población de Nonogasta”, en G. DÁVILA, *Breves...*p.109,

⁷⁹⁰ Hacia 1940 los productores de vides nonogasteños ingresaron a la Cooperativa La Caroyense-Riojana, siendo estos inicialmente 7 titulares de tierras viñateras, mientras que ahora lo integran más de 600 productores, aunque ya de todo el valle famatinense, siendo esta cooperativa, en el 2005 el primer productor de vino de la provincia, con más de siete millones de litros anuales.

3. Guaco o Huaco, era una estancia ubicada a 11 leguas al oeste de la ciudad cuyo valle producía fruta seca, trigo, harina, maíz y novillos por \$527 anuales, tenía “tres leguas del oeste a este y otro tanto de norte a sur en circulo redondo que forman un potrero con dos puertos, donde se halla la población de otras estancias a expensas de un arroyo”. No tenemos datos acerca de quién fue su arrendatario o comprador posterior pero sí sabemos que era del mismo puesto del encomendero Gil Bazán y, es probable, que llegara a la Compañía a través de una donación. Su valor era de \$ 6.025. Era una unidad productiva representativa de la capacidad emprenditorial de la Compañía, por cuanto este pueblo de Huaco, que antes había sido encomendado, y su producción de maíz estaban destinados, por mitad, a la tasa tributo, con la administración jesuítica que se especializaba en “uva pasa” y demás frutales disecados y arropes para la venta a los demás Colegios del Tucumán. Su molino y producción de harinas y ganado menor estaban destinados a su autosustentación. Fue vendida, en 1783, a Mariano de Vega por \$ 822, incluidas las deudas de réditos anteriores (posiblemente de arrendamiento) y los esclavos. Pero como ha sido recientemente analizado, los “censos capellánicos” no solo significaron una popular forma de “devoción religiosa” sino también una forma de acceso al crédito⁷⁹¹ al hipotecar los inmuebles en los conventos de la ciudad. Con las fuentes disponibles, no es fácil determinar si el préstamo hipotecario sirve para aumentar el giro comercial para pagar deudas vencidas o para comprar el inmueble. En menos de un cuarto de siglo, esta hacienda de Huaco vuelve al poder de la iglesia. A Huaco arriba en 1796 el religioso Nicolás Carmona, juez eclesiástico y de diezmos de La Rioja, comisionado por el Obispo de Córdoba Moscoso, en aceptación de la “capellania perpetua” sobre la hacienda de Huaco que había ofrecido, en

⁷⁹¹ D. SANTAMARÍA, *Memorias...*181 y ss. ; M. HERRERA DE FLORES, *Tierra y propiedad...*87. Para un análisis de capellanías de Alonso de Tula y Cervín (1667?), Pedro Avila Brandan (1640), Diego de Gómez de Pedraza (1720), Ignacio de Herrera (1793) Alonso Navarro Velasco (1809), véase Nilda CORREA DE GARRIGA, *Capellanías riojanas en territorio catamarqueño*, San Fernando, Catamarca, 1993, Mimeo.

fecha 12 de enero ese año, Don Blas González. Inventario y tasación *in situ*, por cuanto la tierra parece ser la garantía más sólida de cualquier préstamo, Carmona elabora un detallado inventario que nos ha llegado hasta nuestros días, y describe las superficies: “consta un poco más de diez leguas y de latitud desde dicha cumbre hasta las caídas que se dirigen hasta el valle de Anguinán, otros con poca diferencia y en este centro se contienen varios potreros, divididos unos con otros, y de suficiente capacidad, con abundancia de arroyos y ciénagos de manera que en dicho terreno pueden invernar toda clase de ganados”⁷⁹².

4. “Cuchiaco”, “Estanzuela” cuyo historial de dominio ya fue descrito en las páginas iniciales, también arrendada inicialmente por Francisco Moreno, aunque comprada por Agüero, era un ámbito territorial con varias quebradas y serranías, ubicada a unas dos leguas al sur de la Ciudad. Su tasación fue de \$ 2.159, incluido el ganado vacuno. Fue comprada el 17 de marzo de 1789 por Gervasio Agüero en \$ 482⁷⁹³.

⁷⁹² Carmona describe la capilla, utensilios, “edificios de vivienda”, bodega, despensa, alambique, “1822 cepas frutales rodrigonas”, “viña de 735 pies de parra sobre encatrado de madera”, 59 manzanos, 400 duraznos, 65 perales, tres nogales, tres albarillos, 3 higueras, 40 ciruelos, 3 peramotas, etcétera. El 20 de julio de 1796, Carmona nombra tasador a don Andrés Ortiz de Ocampo Isfran, y Gonzáles a don José Baigorri, quienes evalúan “Primeramente, el terreno y el casco de esta Hacienda, que a más de su potrero comprende muchas tierras de pan llevar con el agua de su regadío, apreciamos en tres mil pesos. Ytem. Todo lo que se halla edificado en dicha hacienda de Guaco lo apreciamos en 700 pesos (...)”. En 1796 Huaco vale 8.048 pesos, en D. De la VEGA DÍAZ, *Toponimia...*, 162

⁷⁹³ Según Bravo Tedín, “La estancia de Chuchiaco o Cuchaco que perteneciera a los jesuitas y que habia sido comprada al Rey en Remate Público el 18 de Marzo de 1798 por el abuelo de su mujer” en referencia a Carlota Recalde “descendiente de hidalgos españoles”, “que aporta en herencia [o dote] la Estancia” al casarse con Jose Maria Jaramillo el 26/11/1834., en “Tribulaciones de un comerciante en las guerras civiles”, *Todo es Historia*, núm 109, abril de 1976, reproducido en M. BRAVO TEDÍN, *Historias de La Rioja*, ed. Talleres Gráficos de la Dirección de Imprenta y Boletín Oficial, La Rioja, 197. En los “Libros de Títulos creados por ley... se encuentra asentado con fecha 27 de Julio 1890 la venta de Abel Jaramillo a Ramon Gómez “Por su finada madre doña Carlota de Jaramillo, Abel Jaramillo *venta de uno y todo derecho y accion* que tenía y le correspondía a al campo de la estancia de ‘Cuchaco’ por eredad de sus finados padres (...) por heredad de su finada madre un derecho de campo en el cerro, en el bajo, en la represa, aguadas de la “quebrada Grande, la Sombra el Toro, la de la Lachiguana, la del Condor y de el agua Colorada, la de pozo de pierda y algarrobo blanco, que la superfice de la estancia es a cuatro leguas a todo viento tomado como punto centrico Cuchaco y sus linderos por el poniente es “potrero de los Bazanes”, por el otro con el campo de Pampa Blanca, por el norte con campos de esta ciudad y de “potrero de las colinas” y por el naciente con campos

5. Por último, Serrezuela, ubicado en la actual provincia mediterránea de Córdoba que fuera retasada como “La Zerressuela, Massau, Sachamuyo y bañado de Tulián , todo en quatrocientos pessos, y se advierte, que el agua de dicha estancia de la Zerressuela es llobediza, y las demas son unos Ojitos muy cortos, de manera que solo su valor lo tiene por sus campos, que son buenos Quando se Junta Agua”⁷⁹⁴. En una nota al pie del expediente de la Junta de Temporalidades, se deja constancia de la oferta del vecino Francisco Loyola que daba \$ 300 por Serrezuela y se remató en 1803 en \$ 400. Sin embargo, E. Maeder señala que “Joaquín Moreno desde Córdoba pidió el 22.III.1810 la nulidad de la venta por haberse ocultado que allí había ‘ojos de agua’ que valorizaban esa propiedad. Esta situación de incertidumbre se mantenía en 1812, ínterin se buscaban antecedentes”⁷⁹⁵. No obstante, este latifundio de diez leguas de ancho por seis de largo nos muestra, por un lado, el bajo valor económico que tenía cuando no se poseían indios ni esclavos aplicados a la producción ganadera o cultivígena, ni agua; y por el otro, el relativo desinterés de las élites por espacios fronterizos de las jurisdicciones de la ciudades de Córdoba y La Rioja. Esta disputa por las tierras intersticiales se verá reflejada en la novel constitución provincial cordobesa de 1821⁷⁹⁶.
6. Casas y moradas varias. El patrimonio netamente urbano era, más bien, un complejo de edificaciones en “el territorio en el cual se halla”, es decir,

desconocidos”, ADGC, 212 FOLIO, DEPARTAMENTO CAPITAL Y MUNICIPIO, TRAMO N°21,212. Ejemplo es de que aún Cuchiaco, estancia que fue merced de tierras, con la venta por parte de la Junta de la Temporalidades en pública almoneda ingresó, esta propiedad en un certero propietario en 1789, un siglo después, 1890, se celebrara no la venta de la unicidad del dominio sino el *derecho de campo por venta de uno y todo derecho y acción* en el cerro, en la represa, y cada una de las aguadas mencionadas.

⁷⁹⁴ AGNA. IX.22.7.1.

⁷⁹⁵ E. MAEDER, *Los bienes ...*, 56. Y en AGNA. IX.21.10.4.

⁷⁹⁶ En la Constitución de la Provincia de Córdoba de 1821, existe un articulado que establece la intervención de las *justicias* de ambas ciudades cabeceras jurisdiccionales cuando existen problemas de delimitación jurisdiccional. Véase Juan RAMOS, *El derecho público de las provincias argentinas, con el texto de las constituciones sancionadas entre los años 1819 y 1913*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, t.1, 344; t. 2, 398; t. 3, 364, 1914.

150 varas en cuadrado o la manzana asignada a los jesuitas, como había sido, según “la echura en quadro” también asignada una a los dominicos, franciscanos y mercedinos. Este solar se componía de un patio principal, al que daban doce aposentos incluidos la biblioteca y aulas del Colegio, circundado de una galería sostenida por horcones en cuyo centro había naranjos regados por medio marco de agua por semana. En ella se encontraba la iglesia, edificio de características modestas. En una segunda cuadra, también asignada originariamente por el gobernador Ramírez de Velasco (“*Cuadra para el Servicio de la Compañía de Jesús*”) se hallaba un edificio de adobe que servía de aposentos, una casa de ejercicios espirituales, un patio que daba a la carpintería, la herrería, cocina y refectorio y, posiblemente, la ranchería para los esclavos. Se integraban algunos predios como medias cuadras o cuartos de cuadras, recibidas en donaciones, como la de doña Agustina de Sotomayor.

El rol del Cabildo fue determinante en el destino de los bienes inmuebles, fueran urbanos o rurales, por cuanto la Junta estaba representada por integrantes de éste más un veedor del obispo y uno de la Real Hacienda. Las comunicaciones entre la Junta municipal y el Cabildo tenían que ver con la tasación y destino de los bienes, así como con otras preocupaciones como la educación.

“Nos los señores presientes y vocales de que componen esta Real Junta Municipal.....Hazemos sauer a VS Mui Illtre. Cauildo y Justicias como en la Real Cedula librada por su Mag. En cinco de octubre del año pasado de seecientos setenta y siete, que con la veneración devida intimamos a VS. se previene alas juntas Municipales; que para efecto de subrogar la enseñansa..(...)”

Superada la primera etapa de la expatriación de los jesuitas, la ocupación de bienes e inventariado de los mismos y, debido a las necesidades de la Junta Superior de disponer de fondos para remitir a España para el pago de las pensiones vitalicias a los jesuitas, se acordó en febrero de 1772, la venta de bienes raíces y esclavos. Sin embargo, las indicaciones remitidas a sus subalternos (acerca de los edictos correspondientes, las retasas, pregones y ventas de almoneda) chocaron con las opiniones contrarias a la venta con argumentos de variado tipo, como los expresados por la Junta Municipal riojana

acerca de la oposición a la venta de la merced de los hornos Ancón, declarándola de utilidad pública y bajo supervisión del Cabildo:

“Lo sexto, es, que hemos hallado por combeniente assi mismo, no cede® contra el R’ Servicio, que los Dos hornos con sus Ramadones y Ranchos, que dichos Regulares Expulsos fabricaron para la quema de ladrillos y texas, en tierras de S. Magd por Merced temporal, que para su oración les concedió cierto Governador de esta Prov.a la qual se entendía hasta en tanto se concluyessen la Hedificación, de su Yglesia, y demas fabrica Material del Colegio que estos respecto de que se hallan capaces de poder servir y mantenerse, se destinen, y apliquen para la Propia de Ciudad de que totalmente se careces, siendo de este modo Beneff.io Publico, atento, à que por hallarse fabricado dichos hornos en tierras de las Prohibidas, para que se puedan vender, por las Ordenanzas y estatutos Municipales desta Ciudad no se puede colocar, ni dar en Propiedad a Perssona Alg.a pues delo contrario fuera alterar el Gobierno Publico, en q.hasta el presente se ha continuado Cuio Peculio q.contribuyeres el que los necessitare, al respectibe de su Labor, se irà depositando para dicho efecto, y que el Reparo Cuidado y atencion de todo ello corra para Ynspección del Cavildo, de manera que haiga de ser obligado à celar esta causa, como una de las de Primera Atención”. / Juan Jph Sedano de la Torre; Mtro Miguel del Moral; Manuel Garcia Tagle; Jph Ant. de Medina Montaban, Ante mi Pedro Jph Escalante 17 jul 1771”.⁷⁹⁷

“No ceder ante el Real Servicio” es el mensaje común de los mercenderos cabildantes que intentan impedir el ingreso de nuevos poseedores, reeditando un mensaje de primacía de su vecindad sobre eventuales nuevos propietarios que alteren el equilibrio interno de la jurisdicción, “por las Ordenanzas y estatutos Municipales desta Ciudad no se puede colocar, ni dar en Propiedad a Perssona Alg.a pues delo contrario fuera alterar el Gobierno Publico”. Una vez más, “será nuestro o de nadie” pareciera el lacónico desafío a la inminente serie de transformaciones de la nueva casa reinante.

⁷⁹⁷ AGNA IX.17.2.1. folio 17 y vuelta.

En síntesis, las relaciones de las cosas con el orden normativo sufrieron una ruptura en el pasaje del orden de los Habsburgo al de los Borbones, al imponerse una visión más fiscal-estatal sobre la comunera. La expulsión y el reintegro de los bienes “a mis dominios regios” fue un excelente laboratorio para una inaudita transferencia de bienes y cosas. En esta expropiación y reapropiación, los intereses locales fueron afectados por cuanto los colegios jesuíticos de las ciudades, como era habitual, operaban como caja de depósitos y préstamos a distintas personas y realizaban actividades —como los fleteros y troperos— por lo que las élites se colocaron en una situación expectante ante la administración y destino de las temporalidades. La Compañía, principal productor agrícola y principal terrateniente de la jurisdicción, también lo era como el principal titular de esclavos. La venta de los esclavos sumó tanto como todos sus otros dominios⁷⁹⁸, lo que resignifica el hecho de que las grandes extensiones de tierras no eran sinónimo de riqueza. Huaco, valía en tanto existiese la mano de obra (esclava o indiana) con tradición cultivígena articulada con una producción de subsistencia y especialización de productos. Al momento de su expulsión, había consignadas más de doscientas mulas de carga en la ciudad de Salta, que iban o venían con arrobas de vino y arrope, fanegas de trigo, a cambio de la plata potosina la que, a su vez, servía para sostener las múltiples actividades rituales, seculares y educativas de la Compañía.

§ 24. DE LA MERCED REAL EN LA CAPAYÁN (1591) A LA MERCED PATRIOL EN LA DE BAJO LOS PEDERNALES (1861).

Dentro de la documentación que poseemos y que efectivamente hemos relevado, cuales las noventa y dos títulos de mercedes de tierras, calculamos que representan aproximadamente 3,3 millones de hectáreas.

⁷⁹⁸ Los 303 esclavos fueron vendidos a \$ 36.627 y representaban el 44% de los valores asignados por los tasadores a la totalidad de bienes, mucho más que Nonogasta con sus potreros y ganado con el 14% (12.350) o la misma cuadra con el Colegio con el 9% (7900\$), AGNA IX.22.7.1.

Por otra parte, existen aproximadamente unas 550.000 hectáreas pertenecientes a treinta y un mercedes que no hemos, por diversas razones, probado científicamente que el título fuera de merced de tierras. En éstas últimas, si bien la documentación moderna las ubicada en expedientes judiciales o expedientes catastrales podrían pertenecer a títulos efectivamente perdidos o a los demás modos de adquirir o son composiciones de tierras o ventas en almoneda o las llamadas ventas de campos fiscales o “denuncios”. Como vimos, la ley de 1888 de reposición de títulos facilitó que los comuneros ricos declarasen la pérdida de los títulos originales y se aventarán a mensurar catastralmente tierras que fueron originariamente encomiendas o espacios ganaderos comuneros. El uso comunero de sus pastos y tierras de los mencionados sitios ha inducido a confundirlas como mercedes de tierras propiamente dichas, descriptas como posesiones con título perdido, viciado, incompleto o aparente; pero que su acceso de los pretendientes iniciales no fue a través de la petición formal al Rey y concesión regia. En algunos casos, ingresaron al patrimonio particular por instrumento de compra a usurpadores o usucapiadores o que compraron al fisco provincial las tierras denunciadas como fiscales aunque ya en el periodo republicano del siglo XIX⁷⁹⁹.

Dos siglos y medio o 270 años pasaron entre la primera y la última merced de tierras: desde la merced realenga de *Capayán* de 1591, concedida por el Gobernador Ramirez de Velasco a Tula y Cervín, hasta la merced patriolenga de *Bajo los Pedernales* dada por el Gobernador provincial Ramón Angel en 1861.

El promedio es de una merced cada cinco años por este título y periodo. Pero como veremos en el gráfico posterior (véase Gráfico 9 “Dispersión y cantidad por año”), la concesión de mercedes de tierras se mantuvo constante durante todo el dominio hispano y parte del periodo patrio precodificado. La ausencia de concesiones de mercedes de

⁷⁹⁹ Son “mercedes” indocumentadas(en orden alfabético): Aicuña, Argañaraz, Asamantín y Telaritos, Baldes de Pacheco o Toscala, de Los Bazanes, Cabeza de Novillo, Carrizal, Catinzaco, Cerrillos, Corral de Isacc, Del Pie o Del Moral, Illisca, Isla Verde, Macho Muerto, Mascasín, Mascasinito, Orilla, Portezuelo de Los Arce, Potrero de De La Colina, Pozo del Jarillal, Salina de Moreno, Salina del Duarte, San Antonio, Santa Rosa, Sierra Brava, Simbollar, Sunchal, Tacasala, Tosquea, Vinijiao, Viuda Agustina. Por certeza histórica, hemos excluido a los espacios comuneros que originalmente fueron “Pueblos de Indios” (vg. Anguinán), o encomiendas (vg. Pituill), etc.

tierras que datan de las primeras décadas de la fundación fortalece la idea de que las mercedes de encomiendas y repartimientos de indios tuvieron más importancia inicial que las de tierra. Juan Ramírez de Velasco había otorgado la merced de Autigasta (1591) y Capayan (1592). El sucesor de Ramírez, Mercado Peñaloza concedió Cigalí (1594); y Quiñones Osorio otorgó siete mercedes: Chacra (1613), Balagasta (1613), Ispillango (1613), Diego de Arroyo (1615), Acnín (1615) y Pocle o Miranda (¿1619?); seis mercedes de tierras Don Felipe de Albornoz, las de Alcázar y Tuisón (1627), Guanchín (1627), Amilgancho (1628), Nonogasta (1629), Aimogasta (1633) y Tuani (1637); mientras que el gobernador Gutiérrez de Acosta y Padilla, en solo cinco años concedió seis mercedes: Chuquis y Pinchas (1646), Pacatala-Solca-Yolque (1648), Guandacol (1649), y Cargoya (1647), Mascasín (¿1650?) y Cuchiaco (1650). El Gobernador Roque Nestares otorga la de Acnín o Campanas (1654) y Santa Cruz (1655). Ángel Peredo y Thomas Félix de Argandoña, también concedieron mercedes en territorio riojano Famapay (con la inclusión Amantalca, Ajpampa y Anchumbil dada en 1672), Olta (1687), Massangano (1672), Duraznillo (1672) o Araupatis y Yuctabas (1687), Anillaco del Valle de Abaucán (1687) y San Nicolas del Capayan del Valle de Famatina (1688) a vecinos riojanos residentes en la reciente jurisdicción de San Fernando del Valle de Catamarca. Martín de Jáuregui concedió cuatro: Machigasta (1694), Ambil, (1694) Catunita (1695), Malanzán (1695); Juan de Samudio bien siete mercedes de tierras, cuales, Ulapes (1696), Jague (1697), Salana (1697), Sobras de Chimenea (1699), Sobras de Aminga (1701), Aguango y Humanguo (1702). Aunque ya en el siglo XVIII existe una, las demasías o Sobras de Anguinán (1707), que figura como concedida por el Virrey del Perú, es muy probable que haya sido otorgada por el gobernador Esteban de Urizar y Arespacochaga, al igual que Yatguit (1707), la de Santa Rita de Chilecito (1710), Tuyubil (1710), Arauco o Los Hornillos (1713), Angulos o Cayabil (1713). Culminan a fines del siglo XVIII, Manuel Feliz de Abarca, José Pestaños y Chumacero, Joaquín de Espinosa, y Juan Fernández Campero figuran como otorgantes. Ya en el XIX, y en esta nueva instancia de Provincias Unidas del Sud América, tenemos la concedida por el Cabildo: la llamada Anchico (1818), mientras que el gobernador Dávila concede la merced de Amaya (1818), siendo seguido por el gobernador Baltazar Agüero con la merced de Desiderio Tello (1822). A mediados de la tercera década del s. XIX se conceden las a Aguango (1828), Tacanita (1828) y Sobras

§ 25 LOS MERCENDEROS DE TIERRAS Y ACCIONES PARA-PROPIETARIAS:
CRIOLLOS Y GANADEROS EN CONFLICTUS DE IURE PROCEDAT.

Existe un acuerdo generalizado entre varios investigadores⁸⁰⁰ acerca de que las prácticas intensivas de la producción ganadera mular y vacuna y la necesidad de grandes espacios de pastoreo y circulación de semovientes, provocaron fuertes enfrentamientos entre vecinos terratenientes que el orden normativo había facultado como parapropietarios⁸⁰¹. Dichos enfrentamientos tenían varios niveles de resolución. Uno de los niveles recientemente revalorizado por la iushistoriografía es el local de mano del gobernador, montado en sus bandos de buen gobierno⁸⁰², también llamado autos de buen gobierno⁸⁰³.

⁸⁰⁰ Por ejemplo, C. SEMPAT ASSADOURIAN, *El sistema...*; E. ROSENZVAIG, *Historia social.*; F. RUBIO DURÁN, *Tierra y ocupación.*; y M. CANEDO, “Poner en valor. La territorialidad en un ecosistema agrario de la campaña de Buenos Aires. El partido de los Arroyos (1600-1850)”, en D. BARRIERA y D. ROLDÁN, *Territorios, Espacios, Sociedades*, ed. UNR Editora, Rosario, 2004, pp 47-78.

⁸⁰¹ Siguiendo a P. GROSSI definimos “parapropietario” a quien ejerce acciones de moderno propietario sin que el absolutismo del código civil lo califique como tal. Podría establecerse un amplia gama de acciones parapropietarias de sujetos de derecho (comuneros, ganaderos, estancieros) que van de las denuncias policiales o judiciales por pérdida de posesión territorial hasta el pago de impuestos territoriales al fisco provincial.

⁸⁰² Por ejemplo, V. KLUGER, “Disciplinamiento familiar y social en el Río de la Plata, Tucumán y Cuyo: amancebados, casados ausentes e hijos fugitivos en la mira de los bandos de buen gobierno”; S. L. DÍAZ DE ZAPPIA, “El auto de buen gobierno de Joaquín de Soria y Santa Cruz (1801), R. ZAMORA, “Los bandos de buen gobierno y el control social. San Miguel de Tucumán, 1790-1810” y R. POLOTTO, “La familia rioplatense y el reformismo borbónico en el derecho local: la situación de los hijos de familia en los bandos de buen gobierno”, en Actas de las XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino, (Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, septiembre de 2004, ed. Dunken).

⁸⁰³ «¿Que pretendían los que gobernaban? Los bandos y autos de buen gobierno intentan trazar una respuesta coherente:

“Mantener y conservar las repúblicas y jurisdicciones de esta provincia en la debida sujeción a las leyes, paz, concordia y justicia y que sus habitantes vecinos y moradores de ellas vivan como verdaderos hijos de nuestra Santa Madre iglesia, como leales vasallos de tan católico monarca al mayor servicio de la divina Magestad” (*) Bando del gobernador de la provincia del Tucumán, teniente coronel don Juan de Santiso y Moscoso. Salta. 7 de julio de 1738», en Víctor TAU ANZOÁTEGUI *Los Bandos...*, 352., citado en *Marvela ASPELL*, “Los espacios ingratos. La cárcel y los ‘montes de espesura’ en Córdoba del Tucumán, Siglo XVIII”, en *Revista de la Facultad*, Vol. III N° 2 Nueva Serie II (2012) 1-23.

En este nivel provincial y en la aplicación de justicia local, el sistema colonial sufrió los embates de los litigantes sobre derechos de tierras y aguas, las que, durante el primer siglo, habían permanecido desocupadas o subutilizadas o en las que la potencial conflictividad con el indígena había desincentivado, por decirlo de alguna manera, la inversión hispano criolla y la extensión del *dominia* que ello conllevaba. Esta conflictividad o, sería mejor decir, la disputa por la construcción de la legalidad de los espacios terrícolas, ahora llamados “bienes inmuebles”, que nació producto de un no acuerdo entre partes usufructuarias, obligó a una juridificación⁸⁰⁴ de los actos

Tabla 13: Censo General de la Provincia de La Rioja de 1855. Población por tipo de actividad (“Profesiones”)

Censo General Que manifiesta el número de habitantes de la Provincia de La Rioja (*)		CAPITAL Y SUS DEPARTAMENTOS						
		Capital	Famatina	Llanos de la Costa Baja	Llanos de la Costa de Arriba	Guandacol	Vinchina	Costa de Aranco
Profesiones	Comerciantes	33	30	5	8	2	-	-
	Hacendados	22	231	276	345	20	120	-
	Agricultores	100	59	641	129	283	500	518
	Molinos de Pan	4	12	1	-	1	4	10
	Máquinas de Metales	-	13	-	-	-	-	-
	Mineros	-	228	8	4	14	15	2
	Arrieros	149	-	-	11	20	-	28
	Carpinteros	13	38	16	4	6	7	7
	Herreros	11	19	3	10	-	4	4
	Plateros	7	7	3	17	10	10	1
	Sastres	15	17	4	1	-	-	1

⁸⁰⁴ Sobre el concepto de de *juridificación* de la sociedad, *judicialización* del conflicto social y *sociedad de derechos*, con su respectiva tradición europea, véase Bernardo SORJ, “Juricidad, política y sociedad”, en *Prohistoria*, núm 5, año V, Rosario, 2001, 251-264.

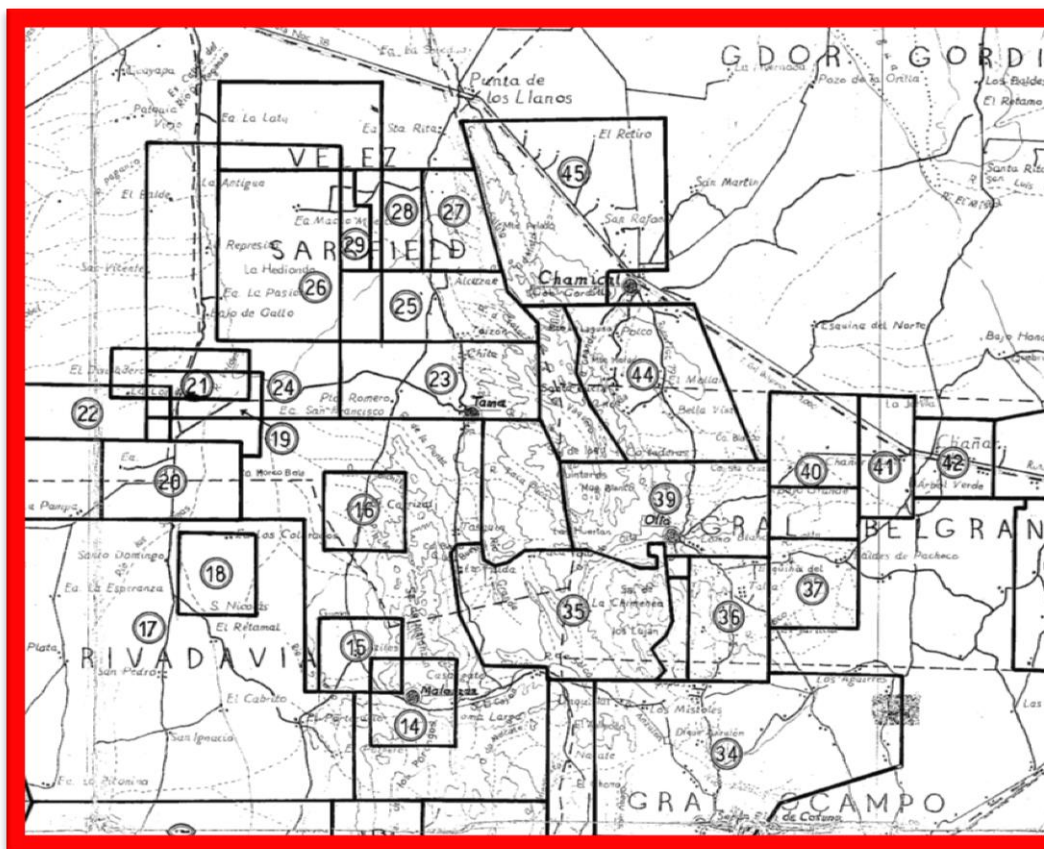
	Carniceros	29	-	-	-	-	5	-
	Albañiles	5	-	11	-	-	-	-
	Zapateros	23	41	29	2	4	9	19
	Sombrereros	2	-	-	-	-	-	-
	Escuelas	1	-	-	1	-	-	-
	Iglesias	6	9	6	8	2	2	7
	Escultores	-	-	-	3	-	-	-

Fuente: *Registro Oficial de la Provincia de La Rioja, Tomo IV de los años 1866, 1867, 1868 y 1869*, Buenos Aires, ed. Imprenta de Pablo Coni e Hijos, 1890, p. 125.

posesorios y la exhibición de los títulos en las demandas, los cuales podían siempre ser “defectuosos” según la autoridad que los examinara y determinara sobre ellos. Los títulos de mercedes comienzan a verificarse como “imprecisos” en sus delimitaciones (la necesidad de una técnica de grafica catastral es un invento de la cultura registral, fiscal y mercantil “moderna”), pero donde surgían inconvenientes de mayor envergadura era en las disputas derivadas de la superposición de derechos sobre una parte o sobre la totalidad de un predio que pretendían dos o más mercenderos, derechos que se invocaban en títulos de mercedes concedidas por diferentes gobernadores sobre un mismo predio.

Esta situación, de la sociedad de derechos pluriordamentales —por la diferenciación de los estatutos jurídicos personales propia de la llamada sociedad de los estados o *ständische Gesellschaft*⁸⁰⁵—, se encuadra en un procedimiento de resolución pertinente a su estado, por cuanto la disputa se daba en el mismo estamento y entre mercenderos titulares: los dos cabildantes, vecinos, aportantes para las “entradas”, con justos títulos y pago de su media anata a la Hacienda Real de la ciudad, lo que los situaba afuera de las “justicias”, del sentido común, de la costumbre y en los valores consensuados en el seno de sus comunidades de pertenencia, el ámbito de resolución.

⁸⁰⁵ Helmut COING, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, ed. Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Munich, 1973, vol. II “Neuere Zeit (1500-1800)”, 25 y ss., recogido por A. HESPANHA, *Cultura jurídica...*, 277.



Mapa 8: Concentración y superposición de mercedes de La Rioja identificadas en un plano cartográfico (1964) de los municipios riojanos de Dalmacio Veléz Sarfield, Gobernador Gordillo, General Ocampo, Rivadavia y General Belgrano.

Descripción: De este a arriba a abajo y de izquierda a derecha: 29) Merced de Portezuelo de los Arce, 25) Merced de Alcazar y Tuisón, 26) Merced del Macho Muerto, 27) Merced de Catunita, 45) Merced El Agua Hedionda de Abajo, 22) Merced El Pozo de los Ultimos, 23) Merced de Tama, 24) Merced de la Hediondita o San José del Agua Hedionda, 13) Merced de Puluchán, 14) Merced de Malanzán, 15) Merced de Atilas, 16) Merced del Carrizal, 17) Merced de la Hediondita, 34) Merced de Olpas, 35) Merced de la Chimenea o Pacatala, 36) Merced de Estancia Vieja, 37) Merced de Baldes de Pacheco o Toscala, 38) Merced de Tacanita o Pozo Ultimo, 39) Merced de Olta o Cazadero de la Sierra, 40) Merced de Simbolar, 41) Merced de Chañar, 42) Merced de Cabeza de Novillo y 43) Merced de Don Gil. Fuente: Latinoconsult, 1964, grafica sobre mapa de la Dirección Nacional de Geología y Minería de La Rioja, 1962, escala 1: 400000.

Fuente: Latinoconsult, Informe..., 1967.

En situaciones como las descritas, el gobernador era la instancia de resolución de las *lis*, tal el caso de Bartolomé Ramírez de Sandoval, encomendero de los indios de Machigasta⁸⁰⁶ que entabló contra Alonso de Alanís, mercendero de tierras de Ispillango⁸⁰⁷, y llevó ante, el gobernador Tomás Felix de Argandoña, la disputa según expediente en el cual, el vecino de La Rioja y Maestre de Campo Ramírez de Sandoval exponía que,

“...hará un año poco más o menos que habiendo vendido yo una estancia al Capitán don Juan de Villacorta (...) reservándole dos aguadas que están inmediatas y que lindan con ella, y parece que en la una de ellas se ha poblado Alonso de Alanís, por decir que el señor gobernador don Fernando de Mendoza, antecesor de V.M., le hizo merced y tomó posesión de ella, la cual, conforme a derecho, es de su naturaleza nula y ninguna, pr cuanto Su Majestad (...) dispone que todas las mercedes se den sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, y yo he sido perjudicado en dicho título y merced por cuanto la dicha estancia y aguada con las demás anejas a ella son mías, heredadas de mi padre y abuelo, como consta en el título y merced que con ésta presento”⁸⁰⁸

El argumento de Ramírez de Sandoval no es concurrir con un derecho más válido que el de Alanís, sino demostrar que en el otorgamiento de su merced invalidó aquella posterior de su contendiente porque “en la misma constitución la merced reserva y dispone que no deberá perjudicarse a un tercero que mejor derecho tenga” y él la obtuvo en primacía. El 25 de abril de 1687, el gobernador Argandoña resolvió el pleito a favor de Ramírez de Sandoval al constatar que dicha tierra de Ispillango estaba incluida en la merced que el 8 de julio de 1613 hizo el gobernador Quiñones Osorio al

⁸⁰⁶ AHCo, Escribanía 2, leg. 6, tomo 1, Expte. 2 (1685).

⁸⁰⁷ AHCo, Escribanía 2, leg. 6, tomo 1, Expte. 4 (1685).

⁸⁰⁸ AHCo, Escribanía 2, leg. 6, tomo 2, Expte. 33. (1687).

Capitán Cristóbal de Contreras, abuelo del peticionante, disponiendo además que se despachara,

“mandamiento de lanzamiento contra él [Alonso de Alanís] y cualesquiera personas que las tuvieran pobladas, para que sean lanzados con sus ganados de sus tierras”⁸⁰⁹

En el más amplio sentido, el gobernador resolvía y su resolución podía ser apelada ante la Audiencia, dado que estamos ante la autoridad que otorgaba las concesiones y poseía, como vimos, la acreditación suficiente para efectuar y revocar dicho repartimiento, así como también ser fuero competente al escuchar a las partes y desposeer al tercero por los vicios de superposición con el bien ya regamente concedido.

Hacia fines del siglo XVIII y primera década del XIX, en La Rioja se hace más evidente la inexistencia de la clásica contraposición propiedad de indígenas-propiedad de españoles (o de sus respectivos descendientes) o de la alianza entre mercaderos de encomiendas y caciques para la defensa de las tierras ante las pretensiones de terceros españoles⁸¹⁰, como había acontecido en otros lugares del virreinato del Perú⁸¹¹, en Nueva España, Nueva Galicia y Nueva Granada. En general, la respuesta del derecho indiano peninsular (Leyes y Cédulas) y del derecho indiano criollo (Ordenanzas)⁸¹² continuó siendo una clara defensa de los dominios de los indios, enmarcada en la crisis del antiguo régimen, coincidiendo con una oposición cada vez más contradictoria entre la forma oficial y la sustancia efectiva (Grossi “*forme ufficiale e sostanza effettuale*”);

⁸⁰⁹ *Ibidem*.

⁸¹⁰ La excepción fue la oposición del cacique Aballay a la concesión de la merced de tierras de Aminga a favor de Andres Luys de Cabrera, incentivado por su encomendero, Juan de Adaro y Arrasola, está muy bien documentada en “Merced de tierras y aguas del pueblo de Aminga” en *RJHLLR*, año III, núm. 3, Julio-Setiembre 1944, 42-51; y en el núm 4, año IV, Abril-Junio de 1945, “(continuación)”.

⁸¹¹ “3. La propiedad de los indios en las encomiendas: Algunos ejemplos anteriores han demostrado que el Marques del Valle y los encomenderos incitaban a los indios a defender sus tierras contra los españoles intrusos, porque en ellas se granjeaban los cultivos con que pagaban los tributos de las encomiendas. La defensa de la propiedad de los indios coincidía entonces con el interés del encomendero, y éste, de buen grado reconocía el derecho de propiedad indígena enfrentado a las ambiciones de los terceros españoles”. Aquí transcribimos ZAVALA en “De encomiendas y propiedad territorial”, en *Estudios Indianos...*, 258.

⁸¹² Aquí hacemos referencia a la clasificación expuesta por Abelardo LEVAGGI, *Manual* ..., 141.

entre el hecho y el derecho (Ots Capdequí); entre la ordenación y lo ordenado (García Gallo); entre orden y sistema (Marchena Fernández) en lo referente al régimen de tierras. Paradójicamente, esto no conllevaba tensión social entre la población india, quien era la principal afectada y, en este contexto, la que detentaba el uso “inmemorial” de las tierras. Como veremos, la competencia a favor de la tutela efectiva de las tierras se dio entre criollos de origen hispano, y sería lo que llevaría a la tensión en el interior del ordenamiento jurídico tardío colonial. En otras palabras, la *lis* por el dominio efectivo de la tierra no fue interestamental indio-español, sino que se dio en el interior del estamento mercenario. Por cierto, estos eran calificados como sujetos-agente titulares de derechos y patrimonios y opacaron, inclusive las disputas patrimoniales entre los mismos indígenas⁸¹³.

En los Llanos riojanos no había en número o en importancia económica mercedes de encomiendas (sólo encontramos datos significativos de dos de ellas: la de los Atilos y de los Polcos) que conllevaban la protección gubernativa tanto en el orden territorial como en el de suministro de mano de obra. Sí existían, en cambio, una treintena de mercedes de tierras a través de las cuales sus titulares, los mercenarios, sustituían al tipo de encomenderos y grandes comerciantes que daban nacimiento a una nueva clase terrateniente, por ejemplo, la salteña en el Alto Perú⁸¹⁴.

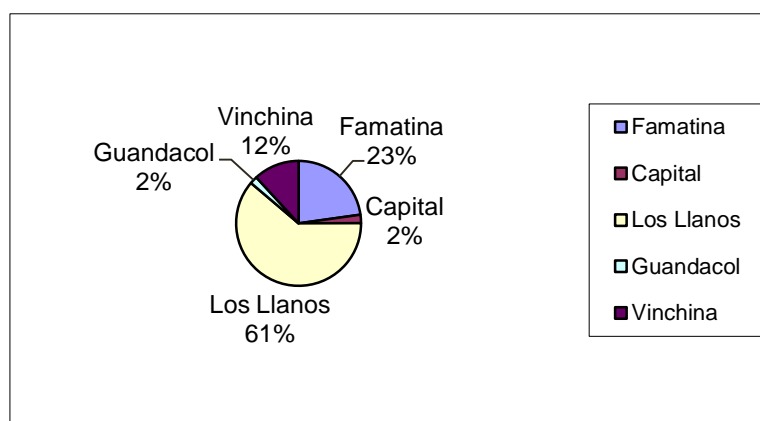
La hacienda ganadera en los Llanos no había nacido sobre las sementeras de los indios en *comendatio*, sino que lo había hecho sobre la sujeción de los indios desnaturalizados (atiles, yocables) y naturales (ulapes, malanzanes, puluchanes) o

⁸¹³ “No hay que olvidar que la constitución social misma [de la república de los indios], su organización económica y la inexistencia de la propiedad privada, disminuían al *minimum* las controversias de derecho privado, que las más de las veces eran resueltas por los curacas”, . Francisco PI Y MARGAL, *Historia General de las Américas desde los tiempos más remotos*, Barcelona, 1888, p 377, citado por Humberto VAZQUEZ MACHICADO, “El primitivo derecho hispano-indígena”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, ed. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, núm. 9, 1958, Imprenta de la Universidad, 103-112.

⁸¹⁴ Véase los estudios más representativos como los de M. BURGA DÍAZ, *De la encomienda a la hacienda...*; mientras que para Nueva España, en especial el Marquesado del Valle, F. CHEVALIER, *La formación de los latifundios...*, y S. ZAVALA, *De encomiendas y ...*, entre otros. Para el marquesado de Tojo, I. RUTLEGDE, *Cambio agrario e integración: el desarrollo del capitalismo en Jujuy (1550-1960)*, Proyecto ECIRA, 2 T, Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, Ed. Antropología social e historia, Buenos Aires, 1987; También de G. MADRAZO “Hacendados y Comerciantes del Noroeste”, en *ANDES*, núm. 8, ed CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, 1997, 101-121.

“piezas sueltas”, hecho que le otorga, al “título” de merced de tierra, el principal vector en el régimen de tierras inmediatamente pre-republicano. “Hacienda” es sinónimo de poseedor de “hacienda ganadera” y “hacendado” le gustará llamarse al comunero criollo rico que descende de la mestización con el indígena.

Graf. 10 : Porcentaje de Pobladores “Hacendados” [Ganaderos Vacunos] de La Rioja por departamentos, año 1855



No hay dudas históricas sobre el hecho de que un puñado de mercenderos de tierras —siete u ocho personas (“señor de ganados”) — con sus familias, ejercieron no solamente el dominio sobre las tierras (entendido éste en el marco de derecho indiano) sino, sobre todo, asumieron el efectivo control de la *ius* política del sistema colonial tardo toledano y borbónico bajo la figura del “caudillo”⁸¹⁵, sin descuidar la eventual

⁸¹⁵ José Carlos Chiaramonte es quién encabezó una renovación de las lecturas del caudillismo y su relación con el orden normativo, véase J. CHIARAMONTE “Legalidad constitucional o el caudillismo: el problema del orden social en el surgimiento de los estados autónomos del Litoral argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en *Desarrollo Económico*, vol. 26, núm. 102, julio-setiembre 1986, 176-196. Específicamente para La Rioja, en igual planteo, Noemí Goldman ha probado como, en el *partido* de los Llanos riojanos, ante el primer ensanchamiento del sentido estamental de la representación política mediante el voto cantado propiciado por el gobierno revolucionario, es elegido legalmente un hombre de campo, Juan Prudencio Quiroga, padre de Juan Facundo Quiroga, con lo que la participación de la campaña en la vida local y municipal es previa al ascenso del poder del caudillo, y rescata la legalidad de los actos, en contraposición con la visión

ligazón, de este “hacendado de ganados”, con el mercado regional interno potosino⁸¹⁶. En el ejemplo que sigue veremos cómo es posible confirmar esto en una historia del

clásica del caudillo operando solo nominalmente dentro de un orden institucional (monárquico o republicano), y constituyéndose en el agente político militar que corrompe dicho orden. Véase Noemí GOLDMAN, “Legalidad y legitimidad en el caudillismo. Juan Facundo Quiroga y La Rioja en el interior rioplatense (1810-1835)” en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera Serie, núm. 7, 1º semestre de 1993, 31-58; igualmente Ariel DE LA FUENTE, *Children of Facundo. caudillo and gaucho insurgency during the Argentine state-formation process, La Rioja, 1853-1870*, ed. Duke University, Londres, 2000. Solo cabe mencionar que Quiroga padre ya era *caudillo llanista* antes del ascenso de su hijo. Independientemente de la connotación que le atribuyamos a ese concepto, el Estatuto provisorio de Santa Fe denominaba *Caudillo* al gobernador, Cfr. Julio LAFONT, *Historia de la constitución argentina, anarquía-tiranía-organización*, ed. FDV, Buenos Aires, 1953, 44. Sin embargo, creemos que la interpretación de Goldman, aunque innovadora, sobredimensiona dicho “ensanchamiento” del sentido estamental. En un muy interesante estudio de las familias principales de la región de los Llanos riojanos llevado adelante por Bazán Lescano en 1976, establece que los más ricos hacendados con base en la economía ganaderil vacuna figuran Nicolás Peñaloza (véase § 25 y § 31, y gráfico núm. 5 del presente trabajo), Cayetano Ontiveros, Pascual Quinteros y José Prudencio Quiroga, abuelo el primero y padre el cuarto de los respectivos líderes y caudillos Juan Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peñaloza. Precisamente, fue Pedro Antonio Peñaloza —hijo de Nicolás— el primer llanista que ocupó un cargo en el cabildo riojano como Alcalde de 2º voto, en el año 1816, hecho que sirvió para demostrar la *tardía* participación de los vecinos *llanistas* en el gobierno de la ciudad. Más que ensanchamiento estamental, podría entenderse como una búsqueda de aliados rurales en los Llanos ante las disputas jurisdiccionales y centrifugas del cabildo riojano con su homólogo y subsidiario cabildo cordobés. De todas maneras ya se habla de una *nobleza* “pastora” enfrentada a las familias beneméritas y feudatarias monopolizadoras de tierras con riego en contraposición a las tierras comuneras donde pastaban los ganados marcados y cimarrones del sur riojano. Véase a Marcelo BAZÁN “La sociedad riojana en las postrimerías del Virreinato y en la época de la independencia”, en ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, *Primer Congreso de Historia Argentina y Regional*, Buenos Aires, 1973, s.p.-

⁸¹⁶ Como se ha insistido y huelga reiterarlo, el siglo XVIII y hasta la integración definitiva de la Argentina con el mercado internacional a través de un régimen agro exportador hacia países centrales, la región y la evolución de la economía regional de los llanos riojanos se basó en una ganadería extensiva “de monte” y bajo la tutela de vaquerías del ganado cimarrón, en amplios espacios comuneros o de “campo abierto” ligados a una economía minera y andina, (Cfr, Pedro TSAKOUMAGKOS, Pedro; SOVERNA, Susana y CRAVIOTTI Clara “Campesinos y pequeños productores en las regiones agroeconómicas de Argentina”. *Serie de Documentos de formulación 2. PROINDER*. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2000, Buenos Aires). Se criaba allí ganado vacuno, lanar, caballar y mular; este ganado criado en las estepas llanistas, el norte sanjuanino y de San Luis, y el oeste de Córdoba, cuyos terneros eran destetados y engordados en las pasturas naturales eran un excelente producto para abastecer a un nuevo ciclo minero chileno. Según datos existentes ya el año 1894, 18.000 vacunos de Los Llanos se exportaron al “Norte Chico” de Chile, lo que ampliamente potenciado a partir del segundo cuarto del siglo XIX. Dice Tulio Halperin Donghi,

“...desde 1831 comienza en Chañarillo un nuevo ciclo minero chileno, apoyado en la plata y desde la década siguiente también en el cobre, esta expansión de la economía chilena permite el surgimiento de prosperidad en las zonas ganaderas Riojanas”, T. HALPERÍN DONGHI,

derecho donde se consolidaron los poderes de los “terra-tenientes” y la preocupación por sanear sus grandes dominios a través de la composición o nuevas mercedes de tierras que coincidieron con la respuesta jurídica del ordenamiento indiano. A nivel de la gobernación del Tucumán, existían otras motivaciones ajenas al mundo inmediato y local (como las fiscales) y es por ello que llevan adelante la tutela como propietarios ordenados, aunque, formalmente, no lo fueran y respetando la nueva función de protagonistas efectivos de la vida económica colonial. La separación del dominio múltiple de la tierra, ejercida por protagonistas —entre ellos los ocupantes indígenas, ya mestizos y sus descendientes— fue dando paso a una resolución uniforme entre empoderamiento de hecho —poder sobre la cosa— y de derecho; ello sería homologable a lo sucedido, *grosso modo*, en el alto medioevo metropolitano. Grossi lo ejemplifica calificando a estas acciones de para-propietarias visualizándolas como munidas de una vistosa efectividad.

“Per la individuazione dell ‘proprietà il segno catastrale è soltanto un fatto presuntivo. Proprietà è infatti, in ogni caso, potere sulla cosa (terra), e potremmo tranquillamente definirla come situazione diretta e immediata sul bene tutelata dall ‘ordinamento nella maniera piu intensa. A quale situazione l’ordinamento altomedievale concederà la propria attenzione e, di conseguenza, la tutela più intensa? Alla proprietà-segno, o al complesso di situazioni di effettività sul ben (le chiamino pure gewere, o vestitura [en cursiva en el original]), nelle quali è condensata una vasta gamma di poteri?. Non c’è dubbio che l’ordinamento opta per le seconde, e con questa opzione soffre d’una contraddizione insanabile: nella separazione (che è anche opposizione) tra forme ufficiale e sostanza effettuale, tutela como proprietari assetti che non sono formalmente tali rispettando la loro funzione di protagonisti della vita economica. La risposta giuridica dell’ordinamento altomedievale è in questo

Historia Argentina. De la revolución de independencia a la confederación rosista, Buenos Aires, ed. Paídos, 1985, 59.

Prosperidad riojana en un área potencialmente deprimida por la guerra civil, donde la venta del ganado en pie será determinante en la nueva monetarización de la economía rural. Ya sea en la cría, engorde o transito, o arrendamiento de los alfalfares a arrieros y ganaderos y comuneros riojanos del valle de Vinchina y Famatina que se vendía a través de la cordillera de los Andes a las chilenas ciudades de Atacama y Copiapó, cuyos establecimientos mineros requerían la carne de La Rioja.

spostamento dell'attenzione e della tutela, ed è qui la sua voce significativa per lo storico dei rapporti reali e anche dello stesso rapporto di appartenenza: quella tutela, dapprima informe e fattuale, è il primo passo che si innesta su un itinerario che sboccherà succesivamente nel conferimento d'una dignità formalmente proprietaria alle sostanze economico-giuridiche già percepite come proprietarie"⁸¹⁷

Esta constelación de poderes sobre la tierra arrastró las contradicciones y las oposiciones existentes entre el orden jurídico y el orden de hecho mientras confrontaban la plena potestad del dominio del mercendero sobre los “bienes” en ella, “plantados” o “clavados”. En términos modernos ¿Cómo resuelve el orden indiano en el Tucumán tardo colonial la coexistencia entre el usufructuario (con posesiones sobre manadas, bañados y ranchadas, aguas, recolección y caza) y la unicidad del *dominium* territorial?

El 4 de abril de 1800, Nicolás Peñaloza (padre del futuro caudillo Angel Vicente “El Chacho” Peñaloza) presentó una demanda ante el Juez de Alzada contra don Juan Vera, don Agustín Rivero y don José Brizuela, quienes poblaran y edificaran sus viviendas en el paraje del “Río Salado o Portezuelo”, “en el mismo camino y entreches por donde bajaba el ganado de Peñaloza a beber de la única agua por cuya acción se desbarrancó el ganado y aún se perdió buena parte de él”⁸¹⁸. Así, lo que comenzó como una *litis* por el pasaje de una aguada y el brebaje del ganado vacuno, rápidamente se transformó en una discusión sobre el régimen de propiedad que cada uno invocaba. En 1782, Peñaloza hijo de un aragonés llamado Francisco era, como ya vimos, mercendero de la La Hediondita por compra⁸¹⁹. Había adquirido la mitad de la merced de Malanzán y había comprado por composición el pueblo de Atilas, lo que lo convertía, además de sus 6000 cabezas de ganado, en uno de los principales terratenientes de los Llanos.

⁸¹⁷ GROSSI, *Le proprietà e...*, 388. Sobre una definición de *Gewere* elemento básico del derecho germánico de investidura como forma de concebir un dominio múltiple y graduado sobre una cosa, véase in extenso H. BRUNER y C. v. SCHWERIN, *Historia...*, especialmente el cap. II. “El derecho de cosas, § 46, La «gewere»”, p 195 y ss.

⁸¹⁸ AJLR ,Expte. Letra “F”, N° 5,”P. Fernández-V. Peñaloza-La Hediondita, 1854”, en adelante, F-5.

⁸¹⁹ Véase gráfico 5 “Titular originario de la merced de La hediondita y árbol genealógico del caudillo Nicolás Peñalosa hasta Ángel V. Peñaloza”, del presente trabajo.

“La duda –continúa el dictamen del asesor de justicia- por la que se formó esta acalorada cuestión estuvo en que Peñaloza fundaba que el terreno y el agua que ocuparon los Riberos y los Brizuelas le pertenecían por estar dentro de los linderos de la Merced de la Ediondita de su propiedad”⁸²⁰.

El terreno y el agua eran de “propia herederad” y de “solo” uno de ellos, o debería serlo así, en un intento procesal por unificar las formas disociadas de propiedad de las aguas, leña, aves de caza situadas sobre la tierra mercendera. “De su propiedad”, dice. Y ese era el propietario y portador de la razón y solo a él debemos garantizar la tutela frente a la apariencia de un derecho o una simple manifestación exterior de un disfrute. En ese sentido, el juez mismo perfecciona la demanda. Lo que estaba en cuestión era quién sería el titular de dominio de las cosas, el propietario del heredamiento mueble e inmueble.

Obsérvese que en el expediente, la mención de los actos y de titularidad es siempre colectiva, haciendo referencia a familias “los Argañaraces”, “Brizuelas”, “Peñalozas” o “Veras”, que referenciaban a sus *pater familias* como Juan Argañaraz, José Brizuela, Nicolás Peñaloza y José Vera, quienes en definitiva eran los que litigaban. Esto muestra una mentalidad local y la mirada de la forma de organización social rural donde las familias habitaban en parajes no distantes de otros, es decir, eran vecinos (por lo tanto, de pretendido origen español o criollo, no indígenas) lo que viene a convalidar la afirmación de Madrazo⁸²¹ acerca de que los conflictos emergentes sólo se dieron entre españoles. Además, existían múltiples aspirantes consanguíneos que habitaban en torno de la vivienda paterna, dando lugar al fenómeno del arranchamiento como estrategia de ocupación intersticial del espacio⁸²².

⁸²⁰ AJLR, Dictamen anónimo (posiblemente del asesor letrado Dr. Juan Luis Aguirre) fechado en 1804, en AJLR, F-5, f. 93.

⁸²¹ Guillermo MADRAZO, *Estrategias y falsa reciprosidad...*, 80 y ss.

⁸²² El arranchamiento que genera posesión en el siglo XVIII y en la pampa húmeda, es definida por Raúl Fradkin ...“*Aparece así un mecanismo reiterado: un conglomerado de productores que realizan un seguimiento meticuloso de la disponibilidad de tierras suburbanas y que las disputan palmo a palmo. Estas disputas expresan un proceso de apropiación de la tierra que tiende a exceder los límites legales de las propiedades y extenderse hacia tierras que debieran ser de uso común. Por otro, manifiestan un proceso de ocupación intersticial del espacio por parte de pobladores utilizando en su favor las contradicciones normativas del uso de la tierra. Ambos no son*

Si, como propone Paolo Grossi, definimos la propiedad de la tierra, en efecto, como el poder que se ejerce sobre ella —la situación directa e inmediata sobre el bien tutelado por la normativa de la manera más intensa—, es posible inferir que los Peñaloza tenían tutelados sus derechos por ser titulares, precisamente, de la merced de la Hediondita, mientras que José Vera invocaba primero la posesión sobre cercos, aguadas y represas amparados en la condición de vecinos del paraje de Malanzán y segundo, de herederos de los derechos mercenderos del primer mercendero de tierras de Malanzán, Don Thomas Gómez Camargo, otorgada en 1695.

La resolución de la *lis* fue a favor de Peñalosa y acarrió la puesta de posesión, entendida como una acción de recuperación de la posesión, donde el Juez de Alzada comisionó a un oficial público, el quien,

“(…) hará y pondrá en posesión conforme a derecho convenido A Nicolás Peñalosa de los lugares nombrados Aguitas, Mangas Sercos Corrales (...) y Portezuelo notificándose a los posesionados destos lugares q’ dentro de ocho dias salgan destos lugares principalmente del lugar del portezuelo bajo apercibimiento q.l sino lo verifican podrá el comisionado espulsarlos y dar a las llamas lo edificado (..). En la Rioja a nueve de noviembre de mil ochosiento cinco. Contestigo afalta de Ess [cribano]”⁸²³

La justicia colonial borbónica había fallado, una vez más, en proponer la relación hombre-tierra como la más elemental y simple, con individualidad y titularidad precisas: el *dominium* como una *relatio simplicissima*, una cosa, un dueño. Y los demas posesionados se convierten en “intrusos”, ajenos a aquella relación simple.

El *dominium re* de La Hediondita fue concedida desde la Corona a Soria, quien vendió vía *relatio intervivos* a Del Pino y de éste la compraría Peñaloza. La *missio in*

utilizados por cierto exclusivos del área de casa quintas y testimonian en pleno suburbio de la Capital fricciones harto frecuentes de la campaña. (...) De este modo el arranchamiento ha generado verdaderos derechos de posesión.” Raúl O. Fradkin, “*Las quintas y el arrendamiento en Buenos Aires (siglos XVIII y XIX)*”, en R. FRADKIN., M. CANEDO y J. MATEO (comps.), *Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX*, GIHRR (Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense), Facultad de Humanidades. Departamento de Historia. Universidad Nacional de Mar del Plata. 1999, 263.

⁸²³ AJLR, F- 5.

possessionem, con testigos y ante la vista del oficial público, se desarrolló siguiendo la ritualidad de la práctica señorial:

“Yo [el comisionado] M. Feliciano y en presencia de los testigos quel presente fueron ala operación, tomé de la mano a Don Nicolas Peñalosa lo pasié em aquel lugar denominado el Portezuelo y puse en posesion real, actual, corporal Jure domine vel quasi, y en señal de haberla tomado, bebió agua arranco muchas yerbas tiró piedras asiendo otras demostraciones de dueño y señor absoluto la qual la dí yo y el la tomó en día claro y sereno como a las nueve de la mañana”⁸²⁴

Lo que se pone de manifiesto en esta sentencia del Estado colonial tardío, (la que, probablemente, fuera una reiteración en la justicia borbónica), es que todas ellas tienen algo en común, algo que no era marginal dentro del orden de tierras y que por ello queremos resaltarlo transcribiéndolo *ut supra*. A través de ellas se pretendía eliminar las dudas de la multiplicidad de los micropoderes sobre la cosa territorial, subrayando la fuerza de la matriz romanística “*Jure domine vel quasi*”, acompañándola de la *missio in possessionem*, ritual y consuetudinaria. En consecuencia, es posible verificar cómo ya desde doscientos años antes —como viéramos con Ramírez de Velasco— se daban señales de *imperium* con demostraciones de la puesta *in nomine re*. Pero será *il re/Señor Absoluto/Pretore/Principe* quién, según voluntad del operador jurídico, desdoblará el *dominium* en *utile* y directo, en usufructuario y eminente.

Junto con esta renovada fortaleza del sujeto poseedor que las acciones para-propietarias de la justicia local tienden —“para” justamente porque instan a un sostén o soporte— a coadyuvar a los poseedores efectivos con un *rapporto* o relación pura con la tierra, la civilidad indiana mete la cola con la instalación simultanea de la teoría de la propiedad dividida en el marco normativo de un Bando tucumano. El rey no solo era el fundamento de las sentencias de los jueces capitulares sobre tierras ubicadas en áreas rurales, sino también de las urbanas, de las cosas, de la jurisdicción local y provincial y del cosmos (u *ordo*) indiano. Como lo manifestara Hespanha, con anterioridad al siglo XIX existía un mundo de poderes —sobrenaturales, naturales y humanos—, distintos y

⁸²⁴ AJLR, F-5, folio 67.

autónomos, donde el proceso de las normas se realiza a diferentes niveles. Uno de esos niveles era el provincial con raíz en el orden local y éste en la ciudad, entendida como república y corporación, con su propia entidad y privativo derecho. La provincia del Tucumán, separada ahora en dos, con sede en Salta del Tucumán y Córdoba del Tucumán heredaba un modo de creación del derecho y la gobernación —con su gobernador y sus operadores, entre ellos, los jurisconsultos— era un lugar donde se producía y originaba las normas, que han sido recientemente revalorizadas y conceptualizado su producción jurídica como lo fueron los Bandos de Buen Gobierno⁸²⁵.

En Salta, en los años 1800 y 1806, el gobernador intendente formuló mediante Bando los límites a la pretendida propiedad de los titulares de merced de tierras⁸²⁶. En lo que podríamos considerar la principal norma local y mandamiento de autoridad competente dirigido a todos los vecinos y habitantes que estableció una limitante del dominio absoluto de las tierras en merced. Este artículo del bando es, dirá Tao Anzoátegui, “afiliado a una línea claramente comunitaria —entonces en retirada—, trazaba una prudente limitación tanto a los derechos del dueño como a los pobladores que aprovechaban los bienes silvestres”.

El auto de buen gobierno del gobernador intendente de la provincia de Salta del Tucumán, don Rafael de la Luz, fechado en la ciudad de Salta el 9 de enero de 1800, establece y ordena que:

“hecho en consecuencia de bien meditadas consideraciones y con dictamen de mi teniente asesor, he dictado los siguientes artículos que ordeno y mando que se cumplan, guarden y ejecuten en todas sus partes durante el tiempo prefinido por la ley real... (...) art 25. Porque las enérgicas providencias que con arreglos a superiores terminantes declaraciones expidió en diferentes tiempos este gobierno no han bastado para que los dueños de estancias y chacras franqueen los montes silvestres (...); que las mercedes que al tiempo de la población se concedieron de los

⁸²⁵ Víctor TAU ANZOÁTEGUI, *Los bandos de buen gobierno del Río de La Plata, Tucumán y Cuyo*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2004, 564.

⁸²⁶ Agradezco este dato al Prof. Víctor Tau Anzoátegui.

terrenos que comprenden los montes y los ríos, se concedió el usufructo de ellos, más no el dominio absoluto exclusivo, que no podía transferirse con perjuicio del señorío real y del interés público, [y] ya que en las sucesiones y en las compras que haya habido no pudo adquirirse más derecho que el que tuvo el primer poseedor;”⁸²⁷

El trasfondo de este articulado pone en la discusión sobre el uso comunitario del territorio para que, como dice, “el público se provea de la madera, rama, leña, piedra, laja y pescado de que necesita” que inevitablemente relativiza el *dominium* de los “dueños de estancias y chacaras”, al “dueño de la estancia” o “el dueño del terreno”, como lo menciona en este artículo al titular de la merced de tierras. Lo que antedicho bando resalta para nuestro tema de investigación es extraordinariamente importante porque, en el 1800 y el 1806 la autoridad jurídicamente competente desglosa el dominio de la mercedes de tierras en absoluto y usufructuario, o lo que es lo mismo decir, en directo y útil. Explícitamente —y en un dispositivo normativo— establece que el rey concedió el segundo reservándose el primero. Y reafirma —modernamente— que ningún otro modo de transferir el dominio desde “los dueños”, sea éste por compra o herencia, pudieron perfeccionar más derecho que el originariamente concedido.

Siguiendo a Grossi⁸²⁸, el punto va subrayado una vez más para no entrar en un pantano de equívocos: la teoría del dominio útil (y consecuentemente del dominio dividido) no puede ser cosa de los alquimistas ni producto de un *flatus vocis* ni reducida a *rara avis* en los márgenes del *corpus iuris* indiano. Es, más bien, el ingreso prepotente de una mentalidad jurídica circulante que adscribe a una tradición del *ius* hasta arribar a distorsionar a éste y corromperlo ya por sí mismo, concepción pseudo-romana de dominio dividido. El bando, rescatado del olvido al que fue enviado por el modelo cultural burgués, por la transcripción de Tau Anzoátegui, da testimonio de un sistema de derechos reales contruidos partiendo de la cosa, la merced de tierra, confirmando un máximo de relevancia a la cosa: si el sujeto, en su unicidad y singularidad, pide a su medida un *dominium* unitario e irrevocable (que viene acompañado de la cultura

⁸²⁷ Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Sección manuscritos, I, 28, 35, 52, Recogido, impreso y comentado por V. TAU ANZOATEGUI, *Los bandos ...*, 452. Asimismo el Bando de Buen Gobierno del 9 de diciembre de 1806, en 470-477.

⁸²⁸ GROSSI, “Le proprietà ...”, 397.

individualísima), la cosa, en su complejidad estructural y en su estratificación de *substantia* (tierra, frutos, caza, aguas) e *di utilitas* (sembradíos, leña, riego, paso), impone la incomodidad de las diversificaciones propietarias según las distintas dimensiones en las que ésta se articule.

La lógica jurídica del dominio dividido encajará en la cultura comunitaria de los ganaderos riojanos. Las singularidades de los Llanos se manifiestan en la descripción de los comuneros ganaderos que realiza un cura informante en 1805, y es la más significativa para nuestro objeto de estudio. Éste afirma:

“Los vecinos de este curato no son labradores, y solo se ocupan en correr el campo al cuidado de sus ganados vacunos y menores siendo muy pocos los de esta porción de Almas los que tienen algún ganado, como son don Nicolás Peñalosa, en Atilas que dicen pueden tener hasta cinco mil cabezas, don Prudencio Quiroga en San Antonio 2.000, don Clemente Galban en Ambil otras tantas (2000), don Cayetano Ontiveros en Catuna, ya difunto, hasta cinco mil, En Chepes la Viuda Casilda Flores mil cabezas, en Colozocán (sic) Pascual Quinteros tres mil, en Solca don Juan de la Vega hasta mil y quinientos pero todos estos tienen su ganado alzado o simarrón. Los demás vecinos, y estos muy pocos tienen de 100, 200, 300 y 400, que los demás tienen de 6, 10, 20, 30 y otros ni una cabeza y son los mas”⁸²⁹

“Estos muy pocos” vecinos que tienen entre 100 y 400 unidades que generalmente hacen referencia a vacas paridoras y tambeas (y no a crías menores de dos años o terneros) son, en el balance de la estructura social agraria, el medio millar de comuneros que han salido de la práctica del autoconsumo y se permiten una venta anual de reses

⁸²⁹ *Estado General de este Curato de los Llanos, del presbítero Sebastian Candido Sotomayor, Tama, 16 nov 1805*, en ROLDÁN María del valle, *Aportes para un historia de Tama*, La Rioja, Nexo Ediciones, 2006, 43-47. Un mimeo de esta fuente fue documentada en Pelanda GÓMEZ, *Historia de la Iglesia riojana*, sin fecha reproducida por Miguel Angel PERALTA, *Aportes para una historia de la Iglesia de La Rioja*, Córdoba, ed. Pandemia, 2000; A. de la FUENTE, usa el mismo documento pero en un traslado sito en el archivo del Arzobispado de Córdoba, titulado “matricula del curato de los Llanos echo por su cura vicario”, 16 de noviembre de 1806, en A de la FUENTE, *Children ...*, 89.

para la manutención de su casa poblada. En la cúspide de la pirámide aparecen nuevos actores como los Quiroga, De la Vega, Peñaloza que, siendo los principales ganaderos aquí descritos, son los que usarán el mecanismo de la merced de composición de tierras para reclamar la exclusividad de las tierras todavía aptas para el ganado de extensivo.

Como vimos, Nicolás Peñalosa o Peñaloza, con más de 5000 cabezas de ganado había reafirmado su derecho a la merced de La Hediondita y ahora comprado, en subasta, Atilas (y que, a partir de ese momento deja de ser pueblo de indios encomendado y luego hacienda de vides y algodón para convertirse en merced de tierras por composición y de carácter comunera). Prudencio Quiroga, exitoso ganadero de más de 2000 cabezas de ganado vacuno y “arreador” de ganado en pie y comerciante de tasajo de carne seca (charqui), cueros y sal se erigía, por composición con la merced de Mascasín. El hermano de Gualverto Vega, Juan Vega y propietario de 1500 cabezas adquiere la merced de Solca y en 1789 el capitán de milicias Bernardino Fernández Cabezas “compone” la merced de Santa Rosa de Chepes.

Sobre la base del padrón de 1878 y del informe de 1805 es posible estimar unos noventa mil vientres de ganado vacuno (exceptuando el ganado mular, el bovino y el caprino) distribuidos en 3866 “Almas” y 264 familias, según Cándido Sotomayor. Huelga afirmar que el informe del Curato a sus superiores dice y reafirma que “no son Labradores” e intenta explicar que sus ganados no están en predios precisos, sino que son “cimarrones” o “alzados” es decir libres de circular por todos los Llanos riojanos y que, los que nosotros denominamos modernamente “comuneros” en realidad “se ocupan de correr el campo en cuidado de sus ganados maiores (vacas) y menores (mulas, burros, yeguas, cabras y ovejas)”. Si bien no son, en *extrictu sensu*, cimarrones es decir, ganado silvestre que se reproduce sin dueño (también definido como *mostrengo*), porque pervive una propiedad muy precisa de los comuneros con su ganado en un complejo mecanismo de marcas a hierro caliente en el cuero del vacuno y señal de “sangre” por cortes en las orejas, que, el presbítero quiere resaltar con ese concepto mal usado —el de cimarrón— porque, estimamos, desea insistir que son libres de pastar en campos y aguadas, a nuestro entender, en el sentido de comunidad de tierras.

En síntesis, a fines del XVIII y primera década del XIX, en los Llanos riojanos había casi 20 vacas de vientre por cada habitante distribuidos en unas trescientas familias. Varios autores, entre ellos Golman⁸³⁰ y De la Fuente⁸³¹, dejaron sentado que existe una relación estrecha entre esa estructura agraria y el caudillismo montonero: nosotros pretendemos agregarle a esa peculiaridad, la relación expresa entre comuneros y el dominio útil del derecho común indiano objetivado en la subjetividad jurídica “comunera” y apropiado localmente en el instrumento público como “derechoso” o portador de “derechos y acciones” que, como demostramos, proviene de las mercedes de tierra. Análogamente, estos comuneros (que en palabras de Ariel de la Fuente son “the rural lower classes”) serán los que se opondrán al proceso de la formación del estado nacional y a la imposición de reformas liberales absolutistas que atentarán a los derechos colectivistas.

¿Es razonable definir una tradición comunitaria de índole iusnaturalista en términos de su relación con cierto territorio?

Sin embargo, resulta inevitable preguntarse si es necesario apelar a la excepcionalidad histórica de una comunidad/provincia/jurisdicción para sostenerlo. Sobre todo ¿desde cuándo?, ¿en qué periodo?, ¿por cuánto tiempo?

La temática de la presencia de lazos en fracciones desfavorecidas por la codificación moderna (los comuneros, montoneros, campesinos) y del efecto de esos contactos ha recibido un impulso que vale la pena señalar frente a las visiones que acentúan la disolución de vínculos. Efectivamente, una de las respuestas al retiro o ausencia del estado colonial (y su cosmovisión Rey-Reyno) es la búsqueda de formas organizativas nuevas o conocidas como montoneras –porque se mueven de “a montones”–, en una espacialidad de contactos o redes entre los afectados. La valoración de tales contactos se pone de manifiesto a través del uso generalizado del concepto de capital social pero no

⁸³⁰ Noemí GOLDMAN, “Crisis Imperial, Revolución y Guerra (1806-1820)” 21-69, en *Nueva Historia Argentina*, tomo III *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2002, 403.

⁸³¹ Ariel DE LA FUENTE, *Children of Facundo...* 89 y ss.

se pueden ni medir ni listar en parámetros de variables hipotéticas. Solo podemos hipotetizar vagamente que, en vista de la documentación relevada, la existencia de una fuerza laboral temporal (la “peonada”) con fuertes vínculos locales que aumenta la facilidad para consolidar los principios comunitarios. Estos han sido estigmatizados como bárbaros (D. Sarmiento) y la personalización misma de la obstinación de un país inalambrado (F. Luna).

§. 26. BORBONES Y EL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO DE CIUDADES.
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y PASAJE DE CIUDAD A PROVINCIA, 1810-1867.

Dice Levene: “Con la invasión de los franceses en España y la prisión de Carlos IV y Fernando VII, prodúcese la gran crisis del Derecho Público Indiano. El rey era el origen nominal de todas las leyes. Y el rey estaba preso. Como a impulsos de un toque mágico, el edificio institucional de España e Indias desplomóse con estruendo”⁸³².

La *ius* política del derecho indiano entró en un proceso de re-legitimización cuyo principal referente serán, para los partidarios del mantenimiento del poder virreinal, las Cortes de Cádiz. El derecho público indiano como tal, inició un proceso de búsqueda de nuevos argumentos ante la deslegitimación que avanzó a medida que el proceso revolucionario de los americanistas republicanos fue tomando cada vez más fuerza y adeptos, durante las primeras décadas de siglo XIX. El justo título de dominación hispana y el código indiano, bases jurídicas del Estado desde los últimos decenios del siglo anterior y aparato supremo desde el cual se ejerció el poder político e instituciones a través de las cuales actuó imperativamente la soberanía atribuida al monarca, sirvió de “orden” colonial que, como dice Tomas y Valiente, “a través de él y bajo ese mando

⁸³² R. LEVENE, *Historia* T. II “*Historia de las Instituciones del Derecho Público y Privado Indiano*”, 297 y 298 (1935).

ejercen ese poder los más destacados miembros de los estamentos privilegiados, la naciente y creciente dinastía burocracia y las oligarquías financieras”. Y ese orden jurídico, cuya más concreta plasmación escrita era la “Recopilación...” albergaba los intereses de todos estos grupos y las aspiraciones y conveniencias del la dinastía reinante, dinastía reformista desde los borbones y de ilustres defensores americanos para mejorar la eficacia del Código indiano⁸³³, en todas sus ramas, que el mismo Levene ve como las de Derecho Político, Público Eclesiástico, Administrativo, Penal, Financiero, Minero y todas las demás ramas de Derecho Privado, tales como Obligaciones, Contratos, Matrimonios⁸³⁴, etcétera, más los Bandos de Gobernadores, Autos de Audiencias y Disposiciones de los Cabildos de ciudades, conformando el orden legal de lo que algunos autores han denominado el “pacto colonial”⁸³⁵.

⁸³³ Véase sino el docto Victorino VILLALBA; *Apuntes para una reforma de España sin trastorno del gobierno monárquico ni de la religión*, Charcas, 1797. Reproducido en Buenos Aires con prólogo del sacerdote riojano, Doctor en Sagrada Teología, Pedro de Castro Barros, y editado en Imprenta de Álvarez, de Buenos Aires, 1822. De Villalba también conmocionó a los mineros un fuerte alegato contra la mita, de profunda significancia social en los círculos potosinos, en su popular *Discurso sobre la Mita del Potosí*, (1795) véase a TANDETER, *Historias de la vida privada*, núm 1. LEVENE en *Vida y escritos de Victoriano de Villalba*, ed. Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, afirma “Para estimar la importancia de este aspecto revolucionario de la nueva legislación, bastará recordar que Victoriano de Villalba, fiscal de la Audiencia de Charcas, desde 1790 hasta 1800, autor del docto *Discurso sobre la Mita del Potosí*, escribió en 1797 el trabajo *Apuntamientos para una reforma del reino*, en la que propuso los medios para modificar la monarquía española, dar a América la participación en el gobierno y reformar el Código indiano. Pedía la separación del poder judicial de todo poder. De américa decía que el gobierno que se le ha impuesto es el medio ‘para perderla como súbdita y amiga’. Consideraba que en las audiencias, la mitad de los oidores debían ser americanos y la otra mitad europeos y que América debía tener derecho a enviar diputados a España, que intervinieran en la redacción de la ley destinada a su gobierno” Ricardo LEVENE, *Historia..T. II* , 362.

⁸³⁴ R. LEVENE, *Historia...*, 311.

⁸³⁵ La noción de pacto colonial la extraemos de Nils JOCOBSEN; *Landtenure and Society in the Peruvian Altiplano, Azángaro Providencia: 1770-1920*, Tesis doctoral, Berkeley, ed. University of California, 1982. Y del mismo autor, ya para el periodo independentista, “Campesinos y tenencia de la tierra en el altiplano peruano en la transición de la Colonia a la República”, en ALPANCHIS, año XIII, núm. 37, Lima, 1993, 25-93.

¿Qué continuó y qué se reformó de los dispositivos normativos del régimen de tenencia de la tierra? ¿Cuáles leyes patrias reformaron las leyes indianas en materia de propiedad territorial?

¿Es plausible excluir conceptualmente la hipótesis ensayada por Grossi que preanuncia la existencia de elementos de continuidad entre el Derecho del Antiguo Régimen y el *Code Napoleon*⁸³⁶? ¿Es discontinua la vitalidad del derecho privado indiano colonial in *continuum* al periodo republicano?

Nuestro tema de investigación, la merced de tierras, fue, como vimos en páginas anteriores, una institución del Código indiano, que podríamos *grosso modo* situar en la rama del derecho privado indiano (como la encomienda o el mayorazgo), que no va sufrir radicales transformaciones hasta la codificación republicana del Código Civil argentino vigente a partir de 1867. Aunque estamos hablando de un instrumento perenne, en cuanto acceso a las tierras realengas, se verá reformado por los borbones mientras que, con el republicanismo independentista o pragmatismo de los líderes y cabildantes que el nuevo marco constitucional dificulta catalogar, las tierras reales devendrán en tierras “públicas”. Las mercedes concedidas fueron perfeccionadas con nuevas compras, fraccionamientos, sucesiones y ventas y cuentas privadas, inobjetadas por el nuevo orden más preocupado por las bayonetas y la financiación de la guerra que por ahondar en la búsqueda de la legitimidad de las posesiones de los hacendados.

Veremos cómo nos introduciremos en un periodo de profunda fragmentación del orden jurídico instituido desde las Provincias de Sud América, pasando por Provincias Unidas de Sudamérica, a la Confederación y República Argentina, donde, por profusa bibliografía histórica, coexisten, pasada la coyuntura revolucionaria, en el actual territorio argentino dos bandos políticos en pugna como lo fueron los unitarios y los federales⁸³⁷, cuyo esquema es más o menos simple: el líder adscribía uno u otro bando

⁸³⁶ A. LOPEZ Y LOPEZ, *Prologo...*12.

⁸³⁷ Véase a V. TAU ANZOÁTEGUI, *La Codificación en la Argentina (1810-1870). Mentalidad Social e Ideas Jurídicas*, ed. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. Colección de Estudios para la Historia del Derecho Argentino, t XI, Buenos Aires, 1977, Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, 408.

y procuraba que su jurisdicción respondiese a su opción, lo que constituyó la primera utilización del esquema de distribución territorial de las varias ciudades o cabeceras de jurisdicciones del ex virreinato. El peso de la tradición hispano-colonial y su relación con la emergencia de distintas “soberanías” que se correspondían con el ámbito indiano de las ciudades, por más que la élite iluminista pugne por identificarlo como lo caduco, necesariamente debe ser reexaminado a raíz de los nuevos indicios que revelaron la ambigüedad en que se encontraban las élites oligárquicas urbanas y su sentimiento público respecto de fundar una nueva autoridad legítima supletoria de la soberanía del monarca cautivo⁸³⁸.

Las autoridades partidarias del mantenimiento del poder virreinal y los partidarios de establecer una opción netamente “americana”, aún salvaguardando la soberanía de Fernando VII, se dirimían en conflictos económicos y comerciales metropolitanos y las necesidades planteadas por los grupos de poder en determinados puertos y capitales americanas hicieron evidente el pasaje del debate ideológico al sangriento lenguaje de las armas⁸³⁹.

26.1 CADA UNO EN SU *IURIDICTION*

Someramente y a los efectos de hacer un poco más inteligible el proceso de descomposición-recomposición del orden jurídico indiano en el Virreinato del Río de La Plata —en donde La Rioja estaba inserta— y la relación de este proceso con el orden

⁸³⁸ Noemí GOLDMAN, “Crisis Imperial, Revolución y Guerra (1806-1820)” 21-69, en *Nueva Historia Argentina*, tomo III *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2002, 443.

⁸³⁹ Juan MARCHENA FERNÁNDEZ, “Militarismo y constitucionalismo en el ocaso del orden colonial en Sierra Andina”, en Julio Valdeón Barúque et al., *Acta Salmanticensia: Estudios históricos y geográficos*, núm 97, septiembre de 1995, Salamanca, ed. Universidad de Salamanca, 100-139. Para una descripción comparada de los intereses oligárquicos en pugna, véase Id. “The Social World of the Military in Perú and New Granada: the Colonial Oligarchies in Conflict”, en *Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru*, ed. Allan Kuethe, John Fisher y Anthony McFarlane, 54-95, Louisiana State University Press, Baton Rouge y Londres. 1990.

jurídico de tierras, usaremos dos dimensiones. La dimensión temporal, que clasificaremos arbitrariamente en tres etapas del siglo XIX: la primera anterior a 1810 o año de la emancipación de España, la segunda de 1810 a 1855, es decir hasta la consolidación constitucional de 1853, y una última de 1853 a 1871, año de implementación del Código Civil. La otra dimensión será la territorial o jurisdiccional, por cuanto estos nuevos sujetos de derecho como las ciudades Estados tales como los de la Banda Oriental, Corrientes, Salta o Charcas, adoptarán posiciones similares o antagónicas antes las nuevas exigencias generadas por la retroversión de la autoridad regia. Sus líderes (intelectuales o caudillos, cabildantes, terratenientes) y las instituciones heredadas, como los cabildos, adquieren una resignificación institucional con la aparición de nuevas formas de representación política impulsada por los revolucionarios. Aunque de ninguna manera esta evolución jurídica es lineal, ni desde el punto de vista jurisdiccional ni doctrinario: la Constitución riojana de 1855 ordena reestablecer los cabildos⁸⁴⁰.

Durante la primera década, las provincias del imperio pugnan por afirmarse como estados autonómicos y ello conlleva la explícita facultad de disponer de sus tierras en cuanto espacios soberanos. Afirma Goldman, “Los estados autónomos surgidos a partir de 1820 no fueron producto de una disgregación de una nación preexistente sino un punto de partida para una organización político-estatal sobre la única unidad socio-política existente en el periodo: la ciudad-provincia. El conjunto de normas fiscales, legislativas y de representación política que las provincias se otorgaron, luego del fracaso por constituir un Estado rioplatense, testimonia los esfuerzos de las élites provinciales por consolidar, mas allá de la voluntad de los caudillos militares, espacios soberanos, aunque sin perder la denominación de ‘provincias’. Esta designación (de provincia) equívoca deriva, por un lado, de la tradición administrativa española aún vigente en el primer periodo independiente para la designar a las Gobernaciones Intendencia, y, por el otro, de la calidad de provincias que le otorgaron los gobiernos centrales durante los breves lapsos de su existencia. Pero la provincia autónoma no fue una prolongación de la antigua provincia de intendencia, sino la ampliación de del papel

⁸⁴⁰ Sobre el constitucionalismo provincial nos llevaremos por los *notos* trabajos de Ricardo MERCADO LUNA, *Constituciones de La Rioja*, La Rioja, ed. Cámara de Diputados, 1984, 67.

político de las ciudades soberanas –mediante la definición de un nuevo régimen representativo- al punto de configurar una soberanía independiente.

Las provincias no surgieron como partes de un Estado superior a ellas, sino como Estados independientes que llegaron inclusive progresivamente a asumirse como sujetos de derecho internacional”. De modo que la tendencia a confluir en lo que será el futuro Estado Nacional argentino convivió, en la primera mitad del s. XIX, con la tendencia a la autonomía de la ‘*provincia*’ ”⁸⁴¹

Esta soberanía independiente, como veremos, no se manifiesta en prácticas autonómicas que la historiografía argentina solía interpretar como resistencias de los partidarios del antiguo régimen contra partidarios de un nuevo orden revolucionario. La resolución de febrero de 1811, dada por el poder central revolucionario de Buenos Aires, había creado las juntas provinciales con el objeto de reglamentar y determinar los alcances de los gobiernos locales. Las Juntas Provinciales se creaban en las capitales de las gobernaciones-intendencias y las juntas subordinadas en las ciudades subalternas. La Junta de La Rioja estaba subordinada a aquella de la gobernación-intendencia de Córdoba, asimismo Jujuy a la de Salta, desde donde comenzaron a surgir voces de “igualdad” de trato entre las ciudades del ex Virreinato, aunque sin cuestionar el vínculo con el gobierno central⁸⁴².

En terminos de *ius* política, la ausencia del derecho indiano fue ocupada por el liderazgo del caudillo⁸⁴³

⁸⁴¹ N. GOLDMAN, “Crisis imperial...”, 444.

⁸⁴² Juan Ignacio de Gorriti, diputado por Jujuy en la Junta de Buenos Aires, expuso en un escrito fechado el 4 de mayo de 1811, “*exponiendo los graves males que entraña la aplicación del decreto sobre la creación de Juntas provinciales y subalternas*”, en Ricardo LEVENE, *Las Provincias Unidas del Sud en 1811. Consecuencias inmediatas de la Revolución de Mayo*, Buenos Aires, 1940, 204 y ss.

⁸⁴³ En la búsqueda de “justicia” los vecinos se dirigían a los caudillos provinciales. Puede consultarse en *RJHLLR*, año III, núm 5, 89-101, transcripciones de fuentes donde se solicitan, por carta las menos veces, la intervención del caudillo Juan Facundo Quiroga casos de justicia civil o penal. Estas mismas acciones han sido reinterpretadas —erróneamente a nuestro entender— como una contribución a la magnanimidad del líder y prueba de su “humanismo” en contraposición al estereotipo sarmientito de “sanguinario”; véase M. BRAVO TEDÍN, *Don Juan Facundo*, La Rioja, ed. Nexo, 2005, 169-176.

Podemos convenir que, desde la revolución de mayo de 1810, hubo interregno hasta la consolidación de los liderazgos provinciales en caudillos (1810-1825) en donde se pusieron en discusión los problemas de escisión de la soberanía regia hasta los de representación política. Todo ello matizado con un gran debate teórico e ideológico sobre la transformación y continuidad de la tradición política y jurídica de la nueva nación.

Las últimas rebeliones del campesinado indígena andino —como las de Tupac Amaru— habían desaparecido conjuntamente con el contrato colonial y las medidas ilustradas de los borbones en pos de “nuevos” sujetos reales de soberanía no serán más que las “ciudades” y su tentativa de organización política como Provincias-Estados. Gorriti, quien es tal vez el más lúcido representante de las oligarquías provinciales de herencia tucumana ante Buenos Aires, afirma en el documento antes citado,

“Excmo. Señor. Movido de las reiteradas instancias de la Ciudad, que tengo el honor de representar, hago en nombre suyo una formal reclamación de sus derechos (...)”⁸⁴⁴

La retroversión de la soberanía regia a “los Pueblos” —entendidos como jurisdicciones estatales— es una causa, según estos nuevos indicios historiográficos, del proceso de disgregación del orden colonial dirán algunos, o pacto colonial dirán otros, representado en lo emergente, es decir, en las antiguas provincias del régimen de intendencias, cuyo corpus unitario era de naturaleza imperial —es decir, así lo quería el monarca, el virrey o la Audiencia o el Consejo— quien establecía la jurisdicción sobre la base de los intereses coloniales. Desaparecido este último interés, las demandas de los cabildos⁸⁴⁵ harán que el mismo triunvirato revolucionario con sede en Buenos Aires

⁸⁴⁴ Gorriti, en LEVENE, Ibidem.

⁸⁴⁵ Véase la exposición del Cabildo de Jujuy del 18 de febrero de 1811, cuyo encabezamiento textual dice «*Excmo Señor. Si Los Pueblos que constituyen la Nación Española; por carecer de su amado Rey Don Fernando, se hallan autorizados por la misma Naturaleza, para recobrar sus derechos que depositaron en él, dándose las Leyes que un gobierno fatuo mercenario, por su propio interés, no ha podido, o no ha querido dictarles. Si toda esta gran parte de nación, a juicio de todo el universo, se halla autorizada para velar sobre su conservación no encuentra este Cabildo una sola razón que desautorice a este pueblo para promover la grandeza a que puede llegar bajo un Gobierno establecido*»; en igual sentido las manifestaciones de autonomismo del Cabildo de Mendoza “*El Cabildo de Mendoza pidiendo la separación de la Intendencia de Córdoba*”, en R. LEVENE, *Las Provincias Unidas...*, ob.cit. 256 y ss.

separe a Mendoza, San Juan y San Luis del Gobierno Intendencia de Córdoba, para formar uno nuevo. En 1814, el director Posadas crea las provincias de Corrientes y Entre Ríos, desprendiéndolas de Buenos Aires. Por otra parte, segrega a Tucumán de la Intendencia de Salta del Tucumán. En 1818 Santa Fe se separó, por “voluntad propia”, de la Intendencia de Buenos Aires. Así que, desde el inicio de la Revolución, lo que tejió gran parte de la trama política del periodo fue la coexistencia conflictiva de soberanías de las ciudades y, dentro de ellas, los cabildos y las juntas, con los gobiernos centrales que dirigieron sus esfuerzos a definir una acción unitaria del Estado sobre una única soberanía de la Sudamérica rioplatense.

De esta manera, lo que nos planteamos discernir, es en qué medida la emergencia de soberanía de los pueblos durante el periodo emancipador puede ser vinculada a una tradición consuetudinaria, por lo tanto, más ligada al orden indiano, de autogobierno de los pueblos o el derecho de Gentes, ampliamente identificado con la codificación indiana. Paradójicamente, la emancipación de la Corona española y su extensión virreinal, fortaleció instituciones de tradición hispana como el cabildo y en ellas se resolvieron las juntas, la delimitación de jurisdicciones y por lo tanto de soberanía. Y el orden territorial debía ser, al igual que la representación política y el comercio, resuelto en una nueva codificación que clarifique los ámbitos locales: nacen así las nuevas constituciones como manifestaciones autonómicas de la “provincias” en un escenario crítico de guerras, conmoción general y “desorden” nacional.

26.2. LAS CODIFICACIONES PATRIAS PROVINCIALES LLAMADAS *CONSTITUCIONES.*

Durante muchos años, la historiografía local tucumana ha centrado sus esfuerzos en analizar instituciones como las encomiendas, la esclavitud, el tributo, las haciendas o mayorazgos de la Gobernación tucumana. La indiscutible importancia de estas instituciones en nuestro pasado justificaba esta preferencia y llegó a convertirse en

exclusividad. Pero dicho abordaje no pudo apreciar, ante la ruptura del contrato/pacto/orden colonial, los nuevos pactos de representación de los mercaderos y hacendados, ni el valor de la producción normativa local y la (búsqueda) de legitimidad de la actuación de gobierno, ni el redimensionamiento del peso de la jurisdicción.

En la actualidad, sin embargo, el estudio de nuestra historia político-constitucional contemporánea ha empezado a cobrar relieve, aunque este enriquecimiento de los estudios histórico-jurídicos ha estado acompañado de importantes carencias. Así, por una parte, se aprecia una falta de estudios jurídicos centrados en espacios de frontera del imperio como el Norte argentino y el sur de Bolivia, ya que los historiadores del Derecho se han ocupado, ante todo, de analizar el desarrollo institucional de los modelos constitucionales “patrios” o de inventiva “nacional”, en tanto que los constitucionalistas han optado por estudiar principalmente los textos normativos modernos, es decir, ya situados en la segunda mitad del siglo XIX. A esta carencia habría que sumar otra no menos importante: la ausencia de un análisis comparado en los estudios histórico-constitucionales de las diversas jurisdicciones que se “autonomizaron” a partir de la emancipación de la corona.

Clara Álvarez, por ejemplo, para España, se centra en el análisis doctrinal del origen y evolución del movimiento político constitucionalista; un movimiento orientado a la defensa de las libertades subjetivas y cuyo logro más señero, aunque no único, será la creación de una nueva forma jurídica, la Constitución. No se trata, por tanto, de estudiar la “historia constitucional”, que llevaría al análisis, no sólo del constitucionalismo, sino de otras líneas de pensamiento que plasmaron su ideario en documentos constitucionales y en una particular manera de concebir la propia Constitución.

Y, lo más novedoso, establece los vínculos entre el derecho de propiedad y el constitucionalismo.

El principio estructural del “Estado social” moderno que ha impregnado gran parte de las Constituciones occidentales, ha reducido el contenido objetivo y subjetivo del derecho de propiedad. Éste ha perdido gran parte de su valor jurídico, hasta el punto de abandonar la categoría de los derechos fundamentales para convertirse en una mera garantía institucional, con la consiguiente merma de sus garantías normativas, orgánicas

y jurisdiccionales. Así, el derecho de propiedad ha dejado de ser el más sagrado de los derechos liberales, para convertirse en una libertad condicionada en su ejercicio por el interés social.

La propiedad ha quedado reducida, entonces, a su regulación en el Código Civil (una regulación, pues, de rango legal), en tanto que su protección iusfundamental ha perdido relevancia⁸⁴⁶. Esta pérdida de valor jurídico iusfundamental (que es el que aquí interesa) ha propiciado que los constitucionalistas nos olvidemos, en ocasiones, de la importancia que revistió en los primeros estadios anteriores al liberalismo rioplatense, y su contribución a la génesis del constitucionalismo moderno. Dicho en otros términos, el constitucionalista ha tendido a preterir el “fin” del constitucionalismo (protección de la propiedad) a favor del estudio detenido de los “medios” (organización estatal, positivización de los derechos subjetivos, formulación de un nuevo sistema de fuentes – de legitimidad-...).

En efecto, en las “Lecciones” late la idea de que el derecho de propiedad es la base del resto de derechos subjetivos, y el objeto primero de protección del constitucionalismo. Pero, al mismo tiempo, la autora lo concibe como el núcleo y génesis del concepto de “ciudadano” y un derecho capital para dar una cobertura doctrinal a las relaciones de poder público. La propiedad actuaría, así, como aglutinante de todo el entramado conceptual del constitucionalismo, puesto que define la esfera individual y, con ella el ámbito social y sus relaciones con el poder público.

⁸⁴⁶ Nos dice Clara ALVAREZ ALONSO, 234 “*Algo muy distinto a lo que sucedía durante el apogeo del pensamiento liberal, que consideraba que tanto la Constitución como el Código Civil tenían por objeto proteger la libertad, lo que generaba una confusión en el ámbito material de ambas. Esta confusión tenía unas consecuencias de primera magnitud, puesto que, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la relación entre ambas normas no era de jerarquía formal, sino de distribución material y aplicabilidad. En la actualidad, la Constitución se caracteriza por su supremacía jurídica, y no por las materias que regula, de modo que cualquier contraste material entre dicha norma y otras disposiciones (como el Código Civil) ha de superarse a partir del criterio de validez jerárquica. Sin embargo, en el movimiento liberal –al menos en el europeo– la Constitución no se definía por su posición en la jerarquía de fuentes, sino por las materias que regulaba (“Constitución en sentido político-material”). Al coincidir con el Código Civil en la regulación del derecho de propiedad se entablaba entre ambas normas una relación conflictiva de difícil solución, que en muchos casos acabó resolviéndose con la idea de que el Código Civil era una norma materialmente constitucional que se aplicaba preferentemente en atención al principio de ‘norma más especial’*”.

Esta contribución de la profesora Álvarez Alonso permite que volvamos a tomar conciencia de que gran parte de los conceptos básicos del Derecho Público tienen causa en categorías procedentes del Derecho Privado: la idea de contrato (que en su vertiente de “contrato social” ha sido tan estudiada por los iuspublicistas), la distinción entre titularidad y ejercicio de la soberanía y de los derechos fundamentales (derivada de la distinción civil entre capacidad jurídica y capacidad de obrar), el concepto de representación política... La autonomía que ha cobrado el Derecho Público ha implicado un paulatino olvido del Derecho Privado, un descuido que, si bien justificable para quien se dedica al Derecho público positivo actual, no lo es tanto para los historiadores del constitucionalismo, que han de acudir a un pasado donde Derecho Público y Derecho Privado se imbricaban.

A pesar de que pueda ser más o menos cuestionable que el derecho de propiedad sea la verdadera génesis de los derechos subjetivos (como más adelante veremos), lo cierto es que la relación entre la propiedad y el Derecho Constitucional resulta evidente. Al menos existen cuatro sectores donde se puede apreciar este vínculo. En primer lugar, el derecho de propiedad sirvió para “describir y fundamentar el poder público”. La idea de soberanía como *suprema potestas* y el concepto de poder público como “capacidad para disponer unilateralmente” son claramente tributarios de la idea de propiedad, y alcanzan su máxima expresión en el concepto de “Estado patrimonial”, que veía al Rey como propietario del Estado. En segundo lugar, el derecho de propiedad sirvió para “fundamentar el sistema representativo” que, como es bien sabido, se legitimó en sus primeros momentos a partir de la máxima *quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debent*⁸⁴⁷. Esto es, el sistema representativo nació a partir del interés de los estamentos “beneméritos” en participar en la adopción de decisiones que podrían afectar a su esfera patrimonial.

⁸⁴⁷ Para un excelente tratamiento de esta máxima, *de lo que interesa a todos debe ser aprobado por todos*, en verdad, aforismo que testimonia una etapa de pre-personificación del Reino, véase a Antonio HESPAÑA, “Portugal y la política de los Olivares. Ensayo de análisis estructural”, en, Julio Valdeón Barúque *et Al.*(comp.), *Acta Salmanticensia: Estudios históricos y geográficos*, núm. 97, setiembre de 1995, ed. Universidad de Salamanca, 58-81.

Desde una perspectiva social, el derecho de propiedad sirvió para complementar las dos ideas anteriores. En efecto, frente al “Estado patrimonial”, el derecho de propiedad originario en las mercedes se configuró como un derecho subjetivo reaccional, que actuó como “límite a la acción del Estado absolutista” y como norma de distribución de competencias entre el Estado y la Sociedad⁸⁴⁸. Ésta fue, precisamente, la tercera repercusión de la propiedad en el Derecho Constitucional. La cuarta, por su parte, complementó el sistema representativo, sirviendo como “fundamento a la participación política individual”. Así pues, no sólo sirvió para construir el sistema representativo, sino para reconocer *uti singulis* el derecho subjetivo de los ciudadanos a participar en la adopción de decisiones jurisdiccionales-estatales. El derecho de propiedad, por tanto, no sólo se concibió como un derecho civil, sino que adquirió un contenido subjetivo de participación política, por cuanto habilitaba el ejercicio del derecho a tomar parte en los asuntos públicos a través del sufragio activo y pasivo. El sufragio censitario, como exigencia de la participación política del Estado liberal, suponía que el sistema jurídico tomase en consideración aspectos pertenecientes al “entorno social” (como era la riqueza), admitiendo que sólo quienes fuesen propietarios pudieran ejercer la función pública de expresar la voluntad nacional a través del voto (sufragio activo) y del acceso a la condición de representante (sufragio pasivo). Puesto que el Cuerpo Electoral y el Cabildo-Parlamento se consideraban órganos de la Sociedad, y no del Estado; tampoco es sorprendente que se tuvieran en cuenta elementos propios de la estructura social, como la riqueza.

Independientemente de las disquisiciones antedichas, y, volviendo a la *ex-ante* Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán, en el segundo cuarto del siglo XIX se destacan, como veremos, el florecimiento de las constituciones provinciales. Sin ahondar aquí en las causas, es indudable prueba del deseo y voluntad de las élites

⁸⁴⁸ Se ve con suma claridad esta situación en la legislación minera indiana y patria que nos remota a las *Partidas*, Las *Ordenanzas Reales de Castilla*, las indianas *Ordenanzas Reales del Perú* y las *Ordenanzas Reales de Nueva España*, y la aceptación tácita, por parte de la república Argentina, de las *Ordenanzas de Méjico* hasta el Código de Minería de 1887 (sancionado por el Congreso el 25 de Noviembre de 1886 y vigente desde el 1 de Mayo de 1887). Véase en extenso y con especial énfasis en su aplicación específica en La Rioja, en Joaquín V. GONZALES, “Exposición y comparación de las fuentes de las leyes de minas”, OO.CC, Buenos Aires, 1936, ed Congreso Nacional-Impronta Mercatali, t IV, 99-197 [t.XXIV].

ciudadanas (conformadas por lo más floripinto de las clases dominantes locales) de expresar en una constitución sus diferentes ideales y preservar la legalidad y legitimidad de sus actos de *gubernacum*. De estos deseos, nacieron las siguientes constituciones:

1. Santa Fe (1819),
2. Salta (1821),
3. Córdoba (1821 y 1847),
4. Entre Ríos (1822),
5. Catamarca (1823),
6. Corrientes (1824),
7. San Juan (1825),
8. el proyecto de constitución de Buenos Aires (1833),
9. San Luis (1832),
10. Jujuy (1839)
11. Tucumán (1852).
12. La Rioja (1855).

No obstante, para arribar a estas *constituciones* y hasta estatutos de cabildos rebeldes como los de Jujuy y Orán, como dice Marchena Fernández, literalmente se abrió una caja de Pandora, en donde los “acontecimientos producidos en España, Europa, incluso Estados Unidos —fenómenos que también olvidamos a veces en análisis más que precipitados—, muchos de estos grupos se vieron obligados —o decidieron, en procura de defender mejor sus intereses— a la vez abrazar y a rechazar, a tejer y a deshilar, a amarrar y a desatar, a seguir y a abominar, banderas, ideologías, héroes, himnos y hasta constituciones”⁸⁴⁹. Las subsiguientes y sucesivas descomposiciones y recomposiciones

⁸⁴⁹ J. MARCHENA FERNÁNDEZ, “El día que los negros cantaron la marsellesa. El fracaso del liberalismo español en América. 1790-1825”, en AAVV, ed. Universidad de Salamanca, 1993.

de las nacionalidades desprendidas del poder virreinal no siempre han sido abordadas desde una perspectiva de *ius historiografica*⁸⁵⁰. Las experiencias institucionales innovadoras de organización (republicana) brotan con ímpetu. El Tucumán, como es conocido, quiso ser una República autónoma integrando las jurisdicciones de San Miguel, San Fernando del Valle de Catamarca, y La Rioja (1821), fallido intento que expresa, en sí mismo, la efervescencia institucional del periodo⁸⁵¹.

26.3 DERECHO PATRIO Y DERECHO PRECODIFICADO NACIONAL.

En la historia de la codificación del noroeste argentino, podemos plantear un *percorso istituzionale del Code o* o recorrido que va desde las autoridades regias de la Audiencia de Charcas, el virreinato del Perú, gobernaciones e intendencias, virreinato del Río de la Plata, las juntas provisionales revolucionarias y reaccionarias, la declaración de a independencia en la muy central San Miguel del Tucumán (1816) hasta el triunfo del la Codificación (1853-1871), todo esto complejizado por una pervivencia de un derecho existente, el derecho de gentes, un *ius propium* local y la costumbre. La costumbre que viene institucionalizada en *Bandos de Buen Gobierno*, es parte del derecho existente y no reconoce las clásicas distinciones colonial-patrio: baste el

⁸⁵⁰ A excepción de algunos autores aglutinados en el IIHD, como Ezequiel ABÁSULO “La cultura jurídica indiana en el Estado de Buenos Aires. Un examen de la cuestión a partir de los diarios de sesiones de la legislatura porteña (1852-1861)” Este trabajo integra el Proyecto de Investigación “Nuevos campos de investigación en la historia del derecho indiano: el derecho indiano provincial y local y la pervivencia de la cultura jurídica indiana después de la emancipación iberoamericana”, que dirige el doctor Víctor TAU ANZOÁTEGUI y que cuenta con una subvención del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos de la Fundación Carolina (España).

⁸⁵¹ El 11 de noviembre de 1819, tuvo lugar en la ciudad de Tucumán, el movimiento revolucionario que depuso la Intendencia regida por las ordenanzas de su creación, creando una *República del Tucumán*. Así, la «Constitución de la *República del Tucumán*», sancionada el 18 de septiembre de 1820, proclama la soberanía e independencia provincial subordinada a las resoluciones del «Congreso General de la Nación» y establece que el gobierno jurará por la *Constitución e Independencia* de la provincia bajo la forma de gobierno que prescribe la Nación”; en Sec. V, Cap. I, art.2 y Sec. III, Cap. I, art. 4, en el texto de la constitución, en Ismael SOSA, *Historia Constitucional del Tucumán*, ed. Universidad Nacional del Tucumán, Facultad de Ciencias Sociales, 1945, San Miguel del Tucumán.

ejemplo de un bando que el Gobernador tucumano Matorras dirige al cabildo jujeño en 1775: “Y siendo preciso que según uso y costumbre se gratifique anualmente a los caciques, mandones y oficiales y demás indios de estas reducciones con ropa [...] a fin de tenerlos gratos porque con esto resulta la seguridad de estas fronteras”⁸⁵², como en el siglo posterior dirá un Bando del gobernador-intendente de La Rioja Miguel Dávila de 1818: “Artº Primero: Siguiendo el Orden de la Costumbre (...)”⁸⁵³. La costumbre ordena las relaciones sociales entre estamentos. Lo hará ante la irrupción de la cultura registral de bienes reales, por la naturaleza de esta investigación de los derechos reales, los primeros registros de propiedad inmobiliaria⁸⁵⁴ de jurisdicción provinciales.

A continuación, y a los efectos de abordar el derecho existente a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX en el Tucumán sudamericano, desarrollaremos dos tesis doctorales recientes: una de San Martino de Dromi y otra de G. Verdo⁸⁵⁵.

⁸⁵² “Bando de Gregorio de Matorras, Cabildo de Jujuy, Jujuy, 6 de abril de 1775,” Archivo Histórico de Jujuy, Archivo Ricardo Rojas, Caja 40, legajo 2, legajillo 2., en CRUZ, Enrique, “Diversidad en el Conflicto Social. La Rebelión Toba de 1781 en el distrito de Jujuy”, II Jornadas Experiencias de la Diversidad, Rosario, 11, 12 y 13 de mayo de 2006

⁸⁵³ AHLR, “Auto de Miguel Davila de 27 de Noviembre de 1827: Después de algunos días de mediataciones, y con mejor deceso de acertar acercándome a lo posible a los mas justo y equitativo en la distribución, y consultando especialmente el medio de poner término a desavenencias tan tenaces, procurando el descanso general de este vecindario, y aún del mismo gobierno, oi [ileg.] he venido a mandar y mando se lleuen adebido efecto desde hoy y para siempre los Articulos q. sigue=1ª Siguiendo el Orden de la Costumbre se bolcará el arroyo en la quebrada de Noche a Malligasta y de día à Anguinan...(…) Malligasta alzarà tres dias entre naturales y españoles.(…)Se previene que la asignación a Malligasta de tres dias es provisoria, hasta que los Españoles situados allí maniefiesten los Documentos, q.P entonces según ellos se harà mas apuntada partición (...) Fdo: Miguel Davila,” AHLR, C-508, “Convenio ante el Superior Tribunal de Justicia sobre Agua entre Comuneros de Anguinan” [1833]-27 Nov 1827.

⁸⁵⁴ El primer registro de la propiedad inmueble de una provincia tucumana fue el de Jujuy, que se estableció en el año 1855, G. MADRAZO, “Hacendados y comerciantes del Noroeste”, en ANDES, núm 8, 1997, 113.

⁸⁵⁵ Las tesis doctorales del referencia son las de Laura San Martino, *Constitución indiana de Carlos III*; y de Geneviève Verdo, *Les Provinces 'désunies' du Rio de la Plata. Souveraineté et représentation politique dans l'indépendance argentine (1808-1821)*.

Entre los historiadores del derecho para el periodo y región sudamericana, San Martino es quién ha avanzado en ensayar una explicitación sobre el peso del derecho indiano en la sociedad tucumana. La autora manifiesta que “la Real Ordenanza de Intendentes de 1782 de Carlos III es una Constitución Indiana”⁸⁵⁶. Sin mencionarlo, la autora discontinúa una tradición de abordaje constitucional que denominó, clásicamente, Constitución Colonial⁸⁵⁷. Y anticipa su tesis en reconocer a tal ordenanza el rango de constitución material, así como también que el sistema intedencial implementado entre 1764 y 1787 dio un rasgo constitutivo del federalismo “argentino”.

“La defensa que formulamos al título de la obra radica en nuestra convicción de que, sustantivamente, la Real Ordenanza una auténtica Constitución de las autonomías regionales en el Virreinato del Río de La Plata”⁸⁵⁸. Atribuye a este documento el haber materializado la organización nacional argentina. “Reiteramos —continúa San Martino— que estamos ante una Constitución material, donde no cabe indagar sobre la causa fuente del poder constituyente, porque es un documento dogmático de la monarquía absoluta pero que, en la realidad operativa y existencial del virreinato del Río de la Plata, fue un documento de organización social, administrativa y política de las comunidades integradas por las ciudades y luego provincias.”⁸⁵⁹ En varias de sus obras defiende conceptualmente la noción de *constitutionis*: si partimos de una definición abstracta y racional de constitución que contenga el componente de poder constituyente y poder general, esto acarrearía una definición restringida de

⁸⁵⁶ Laura SAN MARTINO DE DROMI, *Constitución Indiana de Carlos III*, Buenos Aires, ed. Ciudad Argentina, 1999, 412.

⁸⁵⁷ “§ Constitución Colonial. 1. El Rey : hállese depositada en el Rey de España la suprema potestad gubernativa y la suma de la soberanía, en cuya virtud legislaba y administraba, por intermedio de autoridades, las colonias de América, así en lo político, como en lo espiritual y material”, Joaquín V. GONZALES, *OO.CC*, citada t III, 125.

⁸⁵⁸ Laura SAN MARTINO DE DROMI, *Constitución...*, 9.

⁸⁵⁹ Laura SAN MARTINO DE DROMI, *Constitución...*, 10.

constitución⁸⁶⁰. Define “Indiana” por el lógico lugar de aplicación, diciendo “decimos además que es una constitución ‘Indiana’ porque fue un ordenamiento jurídico destinado a regir la vida institucional del Virreinato del Río de la Plata, que luego se transformaría en Provincias Unidas del Río de la Plata y sucesivamente en Confederación Argentina y República Argentina. El sistema político y administrativo de las Intendencias que instala la Constitución de Carlos III, tuvo incluso vigencia luego de la emancipación. Hubo una ultra actividad normativa y una perdurabilidad de la norma indiana durante los gobiernos patrios. La Real Ordenanza es un derecho pre patrio. Es un derecho local de matriz lo es por su vigencia, es decir española para los residentes en la América Hispana. (...) Los efectos jurídicos de la *Constitución de Carlos III imperaban en el Río de La Plata. El Derecho lo es por su vigencia, es decir por su ámbito de validez temporal, espacial y personal. Carlos III era Rey de España pero su ordenanza era del Río de La Plata y su vigencia se proyecta a varias Constituciones Provinciales sancionadas ente el periodo que va de 1810 a 1860, entre la emancipación y la organización constitucional*”.

A los efectos de analizar positivamente el ordenamiento carolino de creación virreinal, nos remitiremos a aquellos articulados que tienen, a nuestro entender, una incidencia en la *ius* política del régimen de tierras, al estar éste implicado en la nueva distribución de las tierras realengas y de los privados que, por definición, fueron o realengas o de señorío que devinieron en privadas a través del pacto de las mercedes y *Gratia Relum* a merecidos vecinos. Nos referimos a los artículos que ratifican la potestad de los ahora Gobernantes Intendentes de conceder tierras y composiciones de tierras a la nueva fiscalidad de la cajas reales, creando nuevas y anuando otras, siempre en la Intendencia de Córdoba del Tucumán. Ellos son los artículos 78⁸⁶¹ y 91⁸⁶². En

⁸⁶⁰ Que por cierto invalidaría las calificaciones de constitución del mismo Aristóteles que en Libro Segundo de “La Política” así las califica a las de Lacedemonia, de Hipodamo de Mileto y de Faleas de Calcedonia. Véase L. SAN MARTINO DE DROMI, *Constitución...*, 11 y ss

⁸⁶¹ Art. 78, «También serán los Intendentes Jueces privativos de las dependencias y causas que ocurrieren en el distrito de sus provincias sobre ventas, composiciones y repartimiento de tierras Realengas y de Señorío, debiendo los poseedores, y los que pretendan nuevas concesiones de ellas, deducir sus derechos, y formularizar sus solicitudes ante los mismos intendentes para que, instruídos legítimamente estos negocios con un promotor de mi Real Fisco que nombren, lo determinen, según derecho, con dictamen de sus Asesores ordinarios, y admitan las apelaciones á

ellos se fortalece la potestad estatal en asignar y regular el procedimiento para su concesión con una visión moderna de fiscalidad. La unidad administrativa va reformada con la creación de nuevas cajas reales y la anulación de otras. La subordinación de la acción de concesión a un distrito consolidará las pretensiones de las futuras llamadas provincias.

En este sentido la historiográfica jurídica de este periodo preconstitucional ha sido opacada por la visión moderna de disputa caudillesca de líderes provinciales usando

la junta Superior de Hacienda, ó la den cuenta, en defecto de interponer recurso lo interesados, con los autos originales quando lo estimen en estado de despachar el Título, á fin de que, vistos por ella, se los devuelva, ó bien para que le expidan sino se la ofreciere rearo, ó para que, antes de ejecutarlo, evacuen las diligencias que echare ménos la Junta y les previniese: mediante lo qual podrán recaer sin nuevos embarazos las confirmaciones correspondientes, que librárá a su debido tiempo la misma Junta Superior, procediendo ésta en el asunto, como también los Intendentes, sus Subdelegados y demás, con arreglo á lo dispuesto en la Real Instrucción de 15 de Octubre de 1754 en quanto á lo resuelto por ésta, sin perder de vista las saludables disposiciones de las leyes que en ellas se citan, y de la 9, tít.12, lib. 4.»

⁸⁶² «Las doce Caxas Reales Propietarias que actualmente hai establecido en el distrito del expresado Virreinato, y están situadas en Buenos-aires, Santa Fe de la Veracruz, la Asunción del Paraguái, la Paz, Chucuito, Carabaya, Mendoza, la Plata, Cochabamba, Oruro Carangas y Potosi, han de permanecer por ahora en calidad de otras tantas Tesorerías y Contadurías de Real Hacienda, y además las que mando crear, tambien Propietarias, en las Ciudades de San Miguel del Tucumán , Córdoba y Santa Cruz de La Sierra, donde las hay Sufragáneas; pero con la diferencia de que las de Buenos-aires han de ser las Generales del Ejército y Real y Real Hacienda de todo el Virreinato, y las de las Capitales del resto de las ocho Intendencias, y en que éstas se han de situar como va prevenido, quedarán en la clase de Principales de Intendencias y Provincia, y en la Foraneas, y subordinadas á ellas respectivamente, aquéllas que de las demas nominadas se hallan en el distrito de cada Intendencia fuera de sus Capitales, aun quando hasta aquí hayan reconocido á ótras por Matrices. Y sunsitirán, tambien por ahora con el nombre de Tesorerías Menores las demas Caxas subalternas que igualmente se hallan establecidas, y servidas, por Tenientes, en la comprehension de cada Intendencia respecto de que son Sufraganeas de las Propietarias de sus mismos distritos. Pero supuesto que, así de las que éstas quedan en la clase de Foraneas, como de las dichas Sufraganeas, deben resultar por conseqüencia de este nuevo establecimiento algunas no necesarias y acaso perjudiciales, y tambien utilidad á mi servicio de variar las inmediatas dependencia de todas ó parte de las ultimas, dándosela á las Principales de Provincia, será de especial cuidado de los Intendentes obsevar con detenida reflexion las que, sin perjuicio de los haberes de mi Erario, puedan extinguirse, ó admitir variación en su inmediata dependencia, y lo propondrán al Superintendente Subdelegado en los términos que regularen más oportunos, para que, tratado y resuelto en la Junta Superior de Hacienda, lo mande ésta executar, y me dé cuenta por la Via reservada para que recaiga mi Real aprobación, ó resuelva Yo lo que fuese de mi soberano agrado, así como lo es que de las dos Caxas Propietarias de Jujúi y de S. Felipe de Montevideo, la primera se convierta desde luego en Sufraganea de la Principal de S. Miguel del Tucuman con un Teniente, y la segunda se suprima, puesto ser ya inútil mediante el establecimiento de la Aduana creada en aquel Puerto con su correspondiente Tesorería».

como fuentes sus cartas privadas. “Esto se ve estimulado —dice Chiaramonte⁸⁶³— en el caso rioplatense, por la dificultad que significa ahondar en el significado que implica el proceso de institucionalización con pretensiones estatales por parte de las llamadas provincias, en la medida que su ahondamiento nos lleva a enfrentarse con el carácter soberano independiente de las mismas”⁸⁶⁴.

Pero el mundo rioplatense dista mucho del altiplano tucumano y ello se verá en una no nítida diferenciación entre reformistas y realistas al interior de las élites locales del puñado de ciudades del noroeste argentino.

Las élites provinciales intentan replicar sistemas de entidades públicas de carácter registral que podríamos interpretar a intentos por “propietarizar” los patrimonios terrícolas. Pero, cuando brevemente analizamos el texto legislativo y la implementación de la ley provincial de 1888 podríamos concluir, previa verificación de los nombres de los propietarios anotados en el registro (véase tabla 9: Registro de títulos de propiedad por Municipio en 1888 y 1889), que aquellos grandes dominios no se anotaron ni se registraron públicamente, como, por ejemplo, las tierras del Vínculo del mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta que duró hasta entrado el siglo XX⁸⁶⁵. Una primera

⁸⁶³ Jose CHIARAMONTE, *Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, ed. Ariel, Buenos Aires, 139 y ss.

⁸⁶⁴ “Lo que ocurre es, entonces, la sustitución de los que debería ser una historia de prácticas políticas autonómicas y los consiguientes conflictos políticos y luchas armadas inherentes a la naturaleza de las partes, por la tradicional historia de los caudillos, lugar común de la historiografía latinoamericanista, por más que ella sea renovada por el recurso de recientes avances metodológicos que favorecen un mejor tratamiento del papel de lo individual en la historia”, J. CHIARAMONTE, *Ciudades...*, 140.

⁸⁶⁵ Como vimos, atribuimos la duración hasta 1917, mientras que otros autores, como G. IRIBARREN, *Temas riojanos...*, 74, ubican la duración del vínculo del mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta hasta el año 1926-28. Para la sentencia que anula dicho mayorazgo, véase el expediente del archivo judicial de La Rioja, donde uno de los herederos denuncia la pervivencia del vínculo encubierto por cesión privada de derechos hereditarios al “señor “de vínculo mediante contrato de permuta. El juez sentencia

«XVII. Que las medidas para mejor proveer decretadas por el juzgado a petición del Dr. Armando Ocampo con anterioridad al llamamiento de autos y cuyo resultado no entro a considerar, no es posible aceptarlas como elemento de solución en este pleito porque de hacerlo sería dar margen para introducir una prueba sobre hechos que no se han alegado, aparte de que el concepto de las diligencias como la que se trata solo

interpretación nos sugiere un boicot de los señores de la tierra contra un registro fiscalizador e impositivo que, desde lo local, comenzaba a husmear a qué bienes raíces imputarles cargas impositivas. Una interpretación más moderada apunta a que los titulares de situaciones reales no lo registraron porque no necesitaron del certificado emitido por la Comisión Municipal a posteriori de su registración, entidad pública integrada voluntariamente por servidores públicos sin instrucción. Los titulares de dominios remisos tenían otros medios más eficaces para hacer valer sus derechos, como su alianza con la corporación de escribanos públicos.

§ 27. SIGUIENDO EL ORDEN DE LA COSTUMBRE. PRAXIS Y TRANSMISIÓN DE SITUACIONES REALES

No conocemos estudios “registrales” que se hayan realizado en base a muestrarios de escrituras públicas del s.XVI a XIX en el Tucumán, en los que, además, se hayan estudiado las peculiaridades de cada tipo de transmisión⁸⁶⁶. Sin embargo, algunos estudios han encontrado gran similitud entre las estructuras formales, destacándose,

deben producirse y tomarse en cuenta aquellas que “surjan de las constancias de autos” lo que no ocurre en el subyudice, Rodríguez, *Comentarios al Código de Procedimientos de la Capital*, Tomo 1º Ley 1º Tomo 14 *Partida Tercera Ley II Título 16 Libro II Novísima Recopilación*.

Por lo expuesto y citas legales consignadas en los precedentes considerandos, Resuelvo: No aprobar el contrato de permuta realizado en el escrito de fojas 335 a 340 del Segundo Cuerpo, *por ser nulo y declarar inconstitucional la cuenta particionaria y declaratoria de herederos de f. 318 a f. 340 en cuanto reconoce la existencia del mayorazgo porque afecta el régimen sucesorio y la Constitución Nacional*, con costas a cuyo efecto se regulan los honorarios de (...) Domingo Tarruela». 06/02/1926,

AJLR, AR-Nº196-letra B-1917: “Declaratoria de herederos de Ramón Brizuela y Doria”, fol. 530, (lo resaltado es mío).

⁸⁶⁶ La excepción está dada por Carolina FERRERO y Silvina NICOLINI, “Transferencias de tierras rurales durante el siglo XVII en Córdoba”, en CUADERNOS DE HISTORIA, Serie Economía y Sociedad, núm. 4, CIFYH-UNC, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2001, 105-130.

sobre todo, la pervivencia durante tan dilatado tiempo de las llamadas prácticas escritas de efectiva patrimonialización⁸⁶⁷.

Si examinamos la documentación dispersa disponible de la jurisdicción riojana, sobre las escrituras efectuadas por funcionarios públicos en función de notarios, desde 1690 a 1820 —la anterior se perdió—, notaremos que las transacciones más corrientes no son precisamente de inmuebles, sino de otros bienes, ventas y operaciones comerciales de diversa índole. Si intentásemos establecer un orden, surgirá: 1) poderes generales (de variado tipo), 2) ventas de bienes muebles, 3) conciertos de indios, 4) contratos de fletamientos y venta futura (compañías comerciales estacionales) y 5) donaciones⁸⁶⁸. Es evidente pues, que el mercado de tierras era bastante más inmóvil, si es que aceptamos la idea de la existencia de un mercado de bienes raíces, cosa bastante improbable hasta bien entrada la modernidad.

En general, en La Rioja del siglo XIX, las prácticas de transmisiones de tierras se realizaban de múltiples formas, siendo éstas privadas, informales y testimoniales.

La propiedad de la tierra, conjuntamente con los bienes muebles ligados a la producción agrícola, no se transfiere, usualmente, sino hasta la muerte del dueño o pretendido dueño, lo que sitúa, a la transmisión por *mortis causae* como la principal causa de transmisión de bienes inmuebles. Las partes iguales de la sucesión testamentaria de la ley castellana acababan con una sintomática división de bienes raíces y de los otros. La costumbre —en tanto hecho usual y por lo tanto tangiblemente normativo— dictaba que el padre de familia decidía sin variaciones. Generalmente la casa familiar quedaba para la hija menor a cambio del tradicional empeño de ocuparse de los padres ancianos. Aún en los mayorazgos, el heredero del vínculo respeta el

⁸⁶⁷ Pensamos en estudios como el de Pilar ESTEVES SANTAMARÍA, “Transmisiones de escribanías en Madrid (siglos XVI-XIX)”, en CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO, núm. 7 (2000). Los tipos de transmisión estudiados, en este caso, son el de compraventa, arrendamiento, sucesión mortis causa, renuncia.

⁸⁶⁸ Archivo del Colegio de Escribanos de La Rioja, Protocolo 1693-1811. Hemos trabajado esta fuente en Adrián MERCADO REYNOSO, “Estatalidad...”, 33; ACELR, año 1693, fojas: 25, 27, 29, 30, 32, 32vta., 33, 33vta., 37vta., 38, 38, 39, 40, 42, 42 vta., 49, 49vta. En este único protocolo se encuentran un millar de documentos dispersos y sin foliar. No hay en este archivo documentos anteriores a 1693.

derecho legal a una dote, pero la propiedad permanece esencialmente intacta cuando pasa al heredero principal. Los hermanos solteros que continúan laborando en las actividades rurales de la estancia o hacienda no gozan nunca de plena madurez social sino hasta cuando se casan y, pocas veces, pueden empeñarse en una nueva casa poblada. Las disputas por el patrimonio corren sí por cuenta de instancias sociales que nunca son jurídicas, y menos que menos, judiciales⁸⁶⁹.

El peso de la oralidad misma en una sociedad no letrada, como forma convenida, siempre existió, ayudado por el poder mismo sobre la cosa, mueble o inmueble, y el peso de la tradición comunitaria, basta recordar que en la actualidad (2004) es todavía posible encontrar transmisiones de bienes por “apretón de manos” entre los campesinos del valle de Jagüé⁸⁷⁰. Aunque, como dice Foster, el empleo de fórmulas orales (verbales) hasta las escritas están en función al grado de sofisticación y linaje del testador.

La transmisión de bienes raíces, aún no siendo objeto específico de nuestra investigación, en la cual queremos dar cuenta de la privatización⁸⁷¹ de la tierra pública regia y no el intercambio o pasaje entre “privados”, no es ajena a nuestra delimitación problemática de los sujetos y sus bienes territoriales, por obvias implicancias de índole

⁸⁶⁹ Un caso judicial de gran relevancia historiográfica ha sido publicado, y del cual ya hicieramos referencia: “Juicio testamentario del Gobernador Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza, de su yerno Juan Brioso Quijano, su esposa Leocadia Bazán y de Isabel Brioso Quijano y su esposa Torres Gordillo”, en *RJHYLLR*, año IV, núm 1, Enero-Febrero-Marzo de 1945, 19 y ss. Cfr. Adrián MERCADO REYNOSO, “La hacienda de Anillaco del Valle de Abaucán”, en DÁVILA, Beatriz *et al* (coords.), *Espacio, Memoria e Identidad* [recurso electrónico en disco compacto], Rosario, pcia. de Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario, 2006. En línea en <http://consulta.bcn.gob.ar/bcn/Catalogo.VerRegistro?co=645375&lg=fr>, (consultado el 13/05/2015)

⁸⁷⁰ Comunicación personal del comunero Gustavo Casas al redactor. Según él, se da así por “la tradición”, en la cual la venta o permuta podía darse entre bienes diversos como semovientes y tierras, e. dos vacas por un “bañado” o pedazo de tierra cercado y el instrumento era simbólico: los titulares se daban un apretón de manos en la iglesia o en la escuela del pueblo y en la presencia de testigos. Las tierras de Jagüé, fueron expropiadas y declaradas de bien público en 2001 y se encuentra actualmente en fase de parcelación entre sus 300 habitantes de los dos parajes, “Jagüé de arriba” y “Jagüé de abajo”, situados en el punto mas elevado habitado de la cordillera de Los Andes ubicada en la jurisdicción La Rioja.

⁸⁷¹ Véase § 27 “Siguiendo el orden de la costumbre. Práxis y transmisión de situaciones reales”, del presente trabajo.

ius política: de las normas y discursos jurídicos que intersubjetivamente establecen el amparo de los titulares sobre sus cosas. La transmisión de “situaciones reales”⁸⁷² derivadas de la praxis de los negocios *inter vivos*, en sus múltiples formas —cartas de compra venta, testamentarias e hijuelas ab intestato, “escripturas”, donaciones— es, además, una de las principales formas de acceso al dominio de la tierra en la Rioja colonial, junto con la herencia⁸⁷³. Independientemente de su naturaleza jurídica, el “acto” de transmitir “derechos”, reales o supuestos, se sustanciará durante toda la primera mitad del siglo XIX como un evento consuetudinario, es decir, como un hecho normativo⁸⁷⁴, con características de ser escrito⁸⁷⁵, refrendado por un funcionario comisionado o ante testigos, que aún ilegalmente, tendían a clarificar el objeto de dominio, describiéndolo con nuevos paradigmas de medición y más claros conlindantes y nombres para las mismas cosas según la funcionalidad (*chácara*, solar, quinta, suerte, bañado, potrero, estancia, *afalfar*) y con una mejor adecuación a su ubicación y extensión física. Con ello, no pocas veces se omitía el origen del derecho del transmisor: Si A vendía a B una chacra, no siempre el primero establecía el origen de su dominio. B podía, entonces, alzarse como pretendiente propietario perfecto,

⁸⁷² GROSSI, *Le situazioni reali*, 7.

⁸⁷³ “La transmisión del patrimonio ocupa un lugar central en la intersección de la economía y la sociedad agraria, donde, en primer plano, emerge la familia en su doble función de reproductora biológica y social. Por otro lado, la tradición jurídica de las leyes castellanas constituye una herencia indiscutible de nuestra propia ley. Es más, dichas leyes tuvieron vigencia hasta la promulgación del Código Civil de Vélez Sarsfield, quien habría de recoger dicha tradición de división y transmisión obligatoria e igualitaria de los bienes entre los hijos. Las leyes de Castilla habían incorporado, además, el concepto de bienes gananciales, es decir, los obtenidos desde la constitución del matrimonio hasta la muerte de uno de los cónyuges. Distinguen claramente el aporte conyugal a la sociedad, la dote de la mujer, o los propios bienes incorporados por el marido”, José Luis MORENO, “La transmisión patrimonial de la pequeña propiedad agraria en la campaña del oeste bonaerense en el período de transición 1800-1870: un estudio de linajes familiares”, Actas de la AHEA, San Martín de Los Andes, 2004, (CD-ROM).

⁸⁷⁴ N. BOBBIO, *La consuetudine como fatto normativo*, ed. CEDAM, Padova, 1942. 31.

⁸⁷⁵ Un Auto del Gobernador Davila sobre aguas establece que el orden se basa en la costumbre. Dice “he venido a mandar y mando se lleuen adebido efecto desde hoy y para siempre los Articulos q. sigue==1ª *Siguiendo el Orden de la Costumbre* se bolcará el arroyo en la quebrada de Noche a Malligasta y de día à Anguinan...” AHLR, C-508, “Convenio ante el Superior Tribunal de Justicia sobre Agua entre Comuneros de Anguinan” [1833]-27 Nov 1827. Lo resaltado es mio.

perfeccionando mediante una nueva transmisión el derecho originario. Esta situación se vio complejizada con el nacimiento de la provincia de La Rioja como entidad federal en el marco de las Provincias Unidas del Río de La Plata, o lo que es lo mismo, con la paulatina deconversión del *ordo* indiano⁸⁷⁶ sin un reemplazo “racional” por un derecho patrio o espontáneo que se sintetizará en el principio de que el orden es igual a la costumbre⁸⁷⁷. La pervivencia de institutos como el acto de posesión por comisión oficial o pública a la cual ya hicimos referencia, durará hasta la aparición, en el último cuarto de siglo XIX, de una lógica pública consistente en la inscripción de una mensura privada ejecutada por un técnico colegiado idóneo en la medición espacial, reconocida (o) públicamente y transferida por “escritura”. Como vimos en el ejemplo histórico del

⁸⁷⁶ Siguiendo a Robert Castel, y refiriéndose al pasaje de los sistemas de regulación, preferimos el término “deconversión” “*al de ‘crisis’, demasiado vago y al de ‘descomposición’, muy exagerado, pues la especificidad de la situación indica justamente indica que la armadura de la sociedad no se ha derrumbado*”, R. CASTEL, *Metamorfosis de la cuestión social*, ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, 82.

⁸⁷⁷ En especial puede observarse que el sistema post colonial, en la década inmediatamente posterior a la emancipación del Río de la Plata de España, se hallaba limitado para actuar de mediador entre los actores-ciudadanos-sujetos de derecho de las diversas ciudades de la región sudamericana. Esta declinación de la efectividad del sistema de resolución de conflictos va acompañada de un crecimiento simultáneo de otras formas de participación de masas como por ejemplo, las milicias. Los propietarios de tierras y privilegios comerciales ya no estaban garantidos —v.gr. la Audiencia celaba, al menos formalmente la voluntad del príncipe de guardar el derecho natural y de gentes impidiéndoles quebrantar la voluntad empeñada en no enajenar bienes antes regios quitándoles a los sujetos patrimoniales los que era suyo sin antes ser “*oído y por fuero y derecho vencido*”— de las arbitrariedades inter-locales ni de engaños de las *lis* entre concurrentes poseedores por lo que decidieron, pasadas las cargas de guerra y demás costes de financiamiento de los ejércitos, buscar y fortalecer a líderes locales que garanticen que sus sostenimientos y sirva de disuasión a los potenciales apetencias de bienes territoriales de los no poseedores. El caos y la guerra —descrito clásicamente como “anarquía”—, ya civil en vez de emancipadora, generaba un temor en las elites ciudadanas ya no solo por sus costes sino del uso político de ella y su mecanismo local de expropiación y confiscación como punición política, tan caro a los poseedores de bienes y titulares de derechos patrimoniales situados, la mayor de las veces, en la cúspide de las mismas elites. En términos de la ontología jurídica, al periodo podríamos adscribirlo en el nacimiento de un derecho nuevo, fragmentario y anárquico, totalmente ausente de su positividad, entendida esta última como el derecho puesto por fuentes formales, un derecho diverso, esto es aquel que emana directamente del comportamiento de los sujetos establecido bajo determinadas circunstancias espaciales, el llamado derecho espontáneo, que reinó en las ciudades de “las provincias unidas” el interregno entre la independencia hasta la victoria militar de Urquiza sobre Rosas que desencadenó, entre otras, la Constitución de la Nación Argentina con ella a un inevitable unificación de *style* y de concepción del *droit du patrimoine*. Sobre la teoría del derecho espontáneo “la cual es expuesta como una crítica de las teorías formales de las fuentes del derecho, según las cuales el derecho sería solo aquello establecido en determinadas circunstancias y, según procedimientos particulares, por órganos de la producción jurídica disciplinados por las llamadas normas sobre la producción jurídica”, véase a N. BOBBIO, “Sul positivismo giuridico”, en *Rivista di filosofia*, LII, 1961, 14-34.

parágrafo anterior, mientras que el mandato y la puesta en posesión a Nicolás Peñaloza, en 1806, preserva la unicidad del dominio original de la merced de tierras y estancia de la Hediondita de 1755, otra será la situación de la merced de Tosquea, también estancia hacia fines de 1856. Cuarenta años habían pasado de la declaración de la independencia y las provincias unidas adscribían al Río de la Plata. El curato de Los Llanos se había dividido en dos: Costa Alta de los Llanos y la Costa Baja; el juez de paz de la primera, Santiago de Vargas, comisionó a José Herrera para que pusiera en posesión a la hija del fallecido caudillo Facundo Quiroga llamada Saturnina Quiroga de Fernández:

“En dicho lugar de Tosquea, (...) con citación de todos los interesados lindantes y colindantes, en prosecución de las diligencias antecedentes, puestos en el ojo de agua principal tomé de la mano a Doña Saturnina Quiroga de Fernández y p[asián] dola la puse en posesión diciendo le daba en nombre de Dios Nuestro Señor y como comisionado la ponía en ella, actual, corporal ius domine vel quasi en aquella parte que le fueron vendedores los Alvasea de la Testamentaría Da. Juana Rosa Argañaraz, ya finada”⁸⁷⁸

En esta pública puesta en posesión —trastocado “el Rey” por “Dios Nuestro Señor”— se preserva el *iure domine vel quasi*, el llamado a contradecir de los colindantes o con mejor derecho, y en ritual de dicha posesión:

“tiró piedras, arrancó yerba, bebió agua é izo las demás señales que para eso se requieren, y mandé a los circunstantes que salieran de sus tierras, y la dejasen en quieta y pasífica posesión, la que aprendió en día claro y sereno”⁸⁷⁹.

En lo que respecta a esta “forma”, como bien lo ha manifestado Félix Luna⁸⁸⁰, “Su Magestad”—como fundamento último de todas las cosas— es reemplazado por “Dios” en los documentos públicos, y que, en los años posteriores se transformará en “nombre

⁸⁷⁸ Archivo particular de Bravo Tedín, COLECCIÓN ZACARÍAS AGÜERO VERA, sin catalogar; citado en Miguel BRAVO TEDÍN, *Llanistas del 19. Vida cotidiana en los Llanos de La Rioja en el siglo XIX*, ed. Nexo, La Rioja, 2004, 148-149.

⁸⁷⁹ *Ibidem*, 149.

⁸⁸⁰ F. LUNA, comunicación personal.

de La Patria”⁸⁸¹ o “La Patria”, lo que hace —aún sin que conozcamos estudios sobre la formulística notarial— que el esquema sea el mismo: lo que antes eran gobernadores los que instruían a justicias o tenientes para que dieran posesión, ahora eran jueces de paz o escribanos de gobierno que, a petición del titular, autorizaban la pública posesión ¿Qué es lo que ha variado respecto a *l’ancien droit*? ¿hay un redescubrimiento de la percepción del uso alterno o colectivo de determinado espacio territorial? El mandamiento, ahora “provincial”, esconde u oculta el objeto e introduce una “promiscuidad” en el goce del dominio territorial.

Como dijimos en otro lugar, la posesión de “un bien de raíz” se plasmaba en tres instrumentos: el título —dentro de él la petición, la concesión y el pago de la media anata—, el mandamiento del oficial real (corregidor, justicia, etc.) y el acta de misión o puesta de posesión, de la cual no solo posee un valor simbólico, sino que de ésta se recoge “testimonio”. A mediados del siglo XIX, todavía ésta, ahora llamada “misión de posesión”, será un acto público de unción privada de aquel bien raíz, que continuaba siendo practicado por las autoridades republicanas, no solo de las ciudades tucumanas sino de ciudades importantes como Cuzco, a mediados del s. XIX⁸⁸².

El objeto mismo de la transmisión “mutaba” con mandamientos de posesión y amparos⁸⁸³. Ya no estaba en discusión la propiedad, única y excluyente, de, por ejemplo, las tierras de Tosquea ahora devenida en estancia de ganados, sino “una porción” territorial: “*iure vel quasi* en ‘aquella parte’ que le fueron vendedores...” Es decir que la estancia tenía, además, otros dueños (y no solo los herederos de uno de ellos) que no eran los clásicos usufructuarios campesinos, indios o comuneros precarios sino otros titulares de otras, también imprecisadas, partes de un todo territorial. El objeto terrícola sigue siendo el centro de la escena y no la volitiva intención de los

⁸⁸¹ AELR, Protocolo Gaspar Villafañe 1845 y Blas Gonzáles 1848-51, f. 8.-12 vta.

⁸⁸² La puesta en posesión al indio noble de Ayamaca de tierras (1848) dice “*tomo el Señor Juez de Paz por la mano derecha he hizo entrar a dichas tierras [al curaca, quién] se paseó por ellas, tiro terrones, arrancó yervas e hizo otros actos de posesión (...) y de que así la aprehendió [y] me pidió testimonio*”, en Archivo Sub Dirección Comunal Campos y Nativas, Región Agraria XX, Cuzco, Expte. 9992, fjs. 69 y 69 vta, en GUEVARA GIL, *Propiedad agraria y.., Ob. Cit.* 212.

⁸⁸³ Como los interdictos de adquirir, de recobrar y de conservar.

sujetos pretendientes. Y esta señora, (Doña Saturnina), había comprado unas partes de un todo que la habilitaba, juridificación mediante, a la introducción de sus ganados a voluntad, al uso de pasturas y represas de la estancia de Tosquea y probablemente, su nuevo estado de derecho la obligaba social y culturalmente a enfrentar los gastos proporcionales de las anuales reparaciones de picadas, caminos, cercos y canales, atributos reservados consuetudinariamente a los “dueños”. Pero antes debía dar por satisfecho el elemento de aprehensión material del predio. Sin embargo, este fundo, que era uno y continuo, ya no era diviso. En otras palabras, lo que en términos modernos significó una profundización de la precarización dominial al sustanciarse un condominio indiviso, en razón del *ius* espontáneo de raíz indiana, encaraba una mutación del perfil de la intensidad de la dimensión apropiativa de carácter comunitario.

Un cronista francés visitante de La Rioja a principios del s. XX, describe:

*“Algunas veces el número de ‘co-propietarios’ es restringido; conocen los lazos de parentesco que existen entre ellos y el valor de los derechos de cada uno; la merced entonces sólo una ‘propiedad indivisa de derecho común’; otras veces, cuando el número de ‘comuneros’ es más importante, han perdido la noción exacta de la parte de la merced a la que cada uno tiene derecho. La ‘merced nutre’ todo un pueblo donde se mezclan herederos legítimos y usurpadores. En este caso se trata de una verdadera ‘propiedad comunal’, semejante, a pesar de su origen distinto, a las comunidades indias que existen en el territorio argentino”*⁸⁸⁴

La situación descripta —entendida confusamente por la civilidad jurídica moderna como la institucionalización pública de un condominio de una imprecisa superficie en la cual viven los otros condóminos más campesinos usufructuarios que gozan de una “propiedad colectiva” de la tierra⁸⁸⁵ y uno de los bancos de prueba más iluminantes del

⁸⁸⁴ Pierre DENIS, *La République Argentine: la mise en valeurs du pays*, ed. Armand Colin, Paris, 1920, 102 (lo resaltado es mío).

⁸⁸⁵ “Dopo tutte queste precisazioni sembra arrivato anche il momento di intenderci su questa benedetta nozione di proprietà collettiva, una indicazione che non può esser lasciata così fumosa e generica (...) giacché si corre sicuramente il rischio di non capire la alterità su cui si è ripetutamente insistito. Proprietà collettiva e proprietà individuale non sono infatti due sostanze antitetiche perché ‘collettivo’ significa esattamente l’opposto di ‘individuale’ (il che sarebbe di un semplicismo banalizzante), ma per ragioni più essenziali. Andiamo, dunque, per gradi e tentiamo una

absolutismo codificador del siglo veinte, cuya reacción monopólica de productor de derecho provincial fue, como vimos, aquella de remover los aspectos comunitarios del uso de la tierra mediante el saneamiento y expropiación— ofrece una explicación convencional: ella se encuadra en la mutación progresiva de los usos judiciales inveterados y de patrones unificantes del mundo andino (el sistema colonial) y por lo tanto tucumano y riojano. Es aquí donde las estrategias privadas de posesión y las posibilidades mediadoras de los funcionarios —o mejor sería decir, funcionarios mediadores de circulación de capitales en el mercado de tierras— aprovecha/n los intersticios administrativos para reinterpretar la ley, diluir la conducta pública-privada, tomar ventaja del caos administrativo provincial o parroquial, aprovechando la debilidad del Estado provincial de constituir un orden cívico común que se reapropiase de la campaña, lugar a donde se había transferido el poder político ciudadano, antes en el cabildo, ahora en mano de los “caudillos” y del buen precio del ganado vacuno. Las mínimas regulaciones, ya provinciales y dentro de ellas, por ejemplo, las tributarias⁸⁸⁶, permiten especular sobre la diferencia (ficta) entre este periodo patrio y el *ancien*

comprensione piú profonda, puntualizzando quelli che ci sembrano aspetti comuni e tipicizzanti di un fenomeno che si incarna in figure differenziatissime anche sotto il profilo della *intensità della dimensione appropriativa*: (...) fan parte di una nozione lata ma corretta di proprietà collettiva sia comunione che hanno ad oggetto una ‘servitù’ di pascere, di seminare, di spigolare, di legnare e via dicendo con un contenuto diventato nel tempo —per fattori esterni o contingenti— ridotto o addirittura ridottissimo di godimento del bene, od altre che costituiscono effettivi condominii con la totalità del godimento dei fondi e l’organizzazione della gestione agro-silvo-pastorale nelle mani dei condomini”, P. GROSSI, “Assolutismo giuridico e proprietà collettive”, Conf. y Actas del Seminario *Proprietà comunitarie e usi civici: vicende e prospettive tra continuità e trasformazione*, Roma, 1990, reproducido en RQF, núm. 19, 1990, 541, (lo resaltado es mío).

⁸⁸⁶ Aparecen los productores independientes de derecho. La sala de representantes provinciales asumió la producción legislativa de las normas de impuestos locales, generalmente inspirados en la obtención de réditos inmediatos para hacer frente a las erogaciones de tareas mínimas estatales. En el Tucumán prima, en este periodo, la ausencia de impuestos a la tierra reforzándose aquellos como los de tránsito o aduanas internas como el “pase” de cargas o “ganado bacuno pagará un real por cabeza” art. 3º Sala de Secciones Rioja diciembre de 1848. En una nueva provincia llamada Jujuy, separándose de Salta y constituyéndose como tal, establece un sistema tributario no innovador o si se quiere no liberal, por ejemplo, restablece el impuesto de 1 real el cesto de coca y en 1857 en el art 18. reintroduce la alcabala, el 4º y el 5º el derecho nacional y de consulado. Art. 37 grava un 10% las herencias transversales. Véase *COMPILACIÓN DE LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY DESDE EL AÑO 1835 HASTA EL AÑO 1884*. Publicación Oficial, Jujuy, ed. Tip. La Libertad de José Petruzzelli, 1885. III tomos. En esta jurisdicción, su Sala de Sesiones — como ámbito donde se construye legitimidad ius política— establece que “*Las sentencias del Superior Tribunal, del Juez de Alzadas i de los Jueces de 1ª Instancias serán fundadas en lei, o a falta de lei escrita, en el espíritu del derecho (...) Sala de sesiones en Jujui, a 9 de julio de 1855*”.

regime, en esta misma jurisdicción riojana. El mecanismo de transmisión mutaba lentamente. Saturnina Quiroga a diferencia de su abuelo no había abonado la *alcabala* (elemento legitimador de la transacción) que sí José Prudencio Quiroga había pagado en 1811 por la compra de un esclavo⁸⁸⁷, bien real por excelencia. Ella, en su carta de compra-venta no había sufrido en “embarazo” obteniendo la no objeción de la “tesorería provincial de hacienda” por su pago de la alcabala para el “pase” de Su Majestad previo al *otorgamiento de escritura de uenta*⁸⁸⁸. Al igual que la merced, el mandamiento de posesión se libraba previo pago de la media anata cuya certificación del oficial de la caja real antecedió al acto. Irregularmente, acontecía con la alcabala en los contratos de compra venta. Dice una escritura:

“á consecuencia de la mejor seguridad de los referidos compradores Nina y Mercado, presentó el Boleto del Señor Ministro de Hacienda, que á la letra es, del tenor siguiente.«Uiva la Confederación Argentina=Mueran los salvages unitarios=Ministerio de Hacienda=Rioja 13 de mil ochocientos cuarenta y cinco. Al señor Jues de primer orden Don Gaspar de Villafañe=No hay em(baraz)o para que proceda V. al otorgamiento de la Escritura Publica de Venta Doña Andrea del Moral Hace a Don Benito Nina y Don Manuel Mercado de todo el Dr□ō. que por heredad obtuvo del finado su Padre Don Miguel del Moral del Potrero que llaman de los Morales, que enfrenta a Juan Caro y Calera por haber satisfecho dos pesos tres reales de Alcabala, que le han correspondido al cuatro por ciento sobre e l principal de los cinquenta y nueve \$ en que ha sido vendido el citado Dr□ō. del potrero de los Morales=»⁸⁸⁹

⁸⁸⁷ AELR, Protocolo 1693-1811, foja s/n. Jose Prudencio Quiroga .Comparecen “Baltasar de Villafañe y Moral, Alcalde Ordinario a José Prudencio Quiroga, el primero vecino de la ciudad, el segundo de los Llanos”, vende “un esclavo sapatero llamado Manuel, mulato, 290 pesos de escritura y alcabala”.

⁸⁸⁸ ACELR, Protocolo 1693-1811, foja s/n. “Dos reales. HISPANIARIARUM REX CARUS IV. DG. SELLO TESORERIA, DOS REALES, AÑOS DE MIL OCHOCIENTOS, DOS Y OCHO-SIRVA PAR EL SELLO 4 PARA BIENIO DE 1810 Y 1812, Y VALGA PARA EL REYNADO DEL SR. D. FERNANDO VII. (...) No hay embaraso por esta Tesoreria de la Real hacienda para la escritura de venta que Umg pase al otorgamiento de la escritura de venta que pretende hacer doña Mariana Camaño al Padre Fray Juan Antonio Suarez” fechado en 1812, de un solar por 200 pesos con 8\$ de alcabala.

⁸⁸⁹ ACELR, Protocolo Gaspar Villafañe 1845 y Blas Gonzales 1848-51, fjs. 8.-12 vta.

No se vendía un *fundo* sino el derecho a él o “Drō. del potrero de los Morales” al que, la autoridad gubernativa le había cobrado, en concepto de alcabala, el 4% del valor de venta con lo cual le emitía el certificado de no “embarazo” o no embargo del bien. El documento, que transcribimos íntegramente en el apéndice, reproduce fielmente el periodo descripto. Su aplicación no requería entonces estudios académicos sino más bien sentido común y un cierto conocimiento del derecho practicado. La ausencia de escribano y papel sellado se suple con la del Juez de paz, y, para incrementar la certeza legal, se integran al documento de transmisión, una serie de formulas romanisticas como la donación “*inter vivos*”, “*in solidum las Leyes de la Non Numerata pecunia del dolo*”⁸⁹⁰, “*Hoc Ha fidei jussoribus rebus deventi*”⁸⁹¹, *Drōs. deella y que dice: que General Renunciación non Vala fha. de Leyes, y con protesta*⁸⁹², y, por cierto, la *ius vel quasi*, instrumentos ya modernos para una sustentación de los derechos posesorios posteriores y su disfrute jurídico por los nuevos dueños.

En clave explicativa, desde una perspectiva más macro, la cuestión del ocaso del *ordo* indiano es clara en acontecimientos (revolución, proclama, nueva fuente legislativa) pero no lo es el supuesto también ocaso de la “estatalidad” indiana y su pasaje a una *estadualidad* provincial. La transmisión, en cuanto entidad pública parece adecuarse más a la pervivencia de esta estatalidad indiana. Evitando trampas nominalistas, hacia 1820 la ciudad de La Rioja se erige como autónoma de Córdoba y

⁸⁹⁰ fjs. 8. Correctamente *Excepción (ley) de la innumerata (non numerata) pecunia*, que consistía en la acción (primero fue una excepción) que tenía el deudor de una obligación para desvirtuar el contenido de un instrumento anterior en el que reconocía haber efectivamente recibido una prestación. Cuando funcionó como excepción, el demandado la planeaba arguyendo que no la había recibido (*in numerata*, no contado) la suma que se le exigía, pese a la existencia de una acción previa de haberla recibido. Véase Joaquín ESCRICHE, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, ed. Impr. Eduardo Cuesta, 3 tomos, 1874-1876 ([“Nueva edición reformada y considerablemente aumentada (...) por León Galindo y de Vera y José Vicente y Caravantes, primera edición de 1851 editada por Rosa Bouret y Cía)], Véase en el tomo II, p 295 y ss..

⁸⁹¹ Ver la ley *de duobus reis debendi*, Tomado de las *Instituta*, Libro III, tít XX, “*de pluribus fidejussoribus*” y recogido en Partida V, tít, ley 10.

⁸⁹² Correctamente “*Ley y regla del Derecho en que diz que General renunciación de leyes que ome faga non vala*” Esta cláusula significa que las prorrogas de jurisdicción, en donde el renunciante se sometía a cualquier juez que pudiera ejecutarlo, fueron recortados en función del domicilio de las partes y del lugar del bien dejando sin efecto la voluntad de los contratante. Lo regulaba la Real Cédula del 20-2-1573 dada por Felipe II y recogida en la *Novísima Recopilación*. Libro XI, TXXIX, ley VII de 1805.

en el marco de unas provincias unidas, luego “Confederadas”. Buscando ex profeso los aspectos continuos, vemos un cabildo que deviene en sala de representantes y en la “corporación” que elige el gobernador y capitán general de la provincia de La Rioja. Es, esta autodefinida corporación, la que le devuelve a la autoridad ejecutiva la potestad de cobrar impuestos (y de avalar las transmisiones y las transacciones) y en ella se vuelve al mecanismo de lo conocido, papel sellado, sisa, consulado, aduana⁸⁹³ para el pago de los gastos corrientes del estado, el mantenimiento de las guardias (ejércitos provinciales) y el establecimiento del porcentaje alcabaltorio; en síntesis, de la facultad ejecutiva de gobierno para el sostenimiento coersitivo de un espacio de institucionalidad pública. Es en este espacio institucional donde retorna la facultad de concesión de tierras⁸⁹⁴.

El cabildo, excepcionalmente otorga la merced de tierras de Anchico al vecino Matías Herrera en 1818⁸⁹⁵. Y el gobernador D’Avila concede la merced de tierras de Amaya (1822); Agüero concede la de Melados (1824); Galván, la de Tacanita (1826) y Aguango (1828), las de Sobras del Bagual (1829); y, por último, las concedidas por el

⁸⁹³ (“Viva la Confederación Argentina!! Mueran los salvages unitarios. Sesión 12. Sala de Sesiones Rioja Marso 16 de 1848 Año 39 de la libertad 33 de la Independencia 19 de la Confederación Argentina. (...) Habra en esta capital una aduana prinsipal, y en cada departamento una subalterna [sic] con dependencia a esta.” . *Actas de la legislatura de La Rioja, años 1848 a 1852*, ed ACADEMINA NACIONAL DE LA HISTORIA, Buenos Aires, 1986,61.

⁸⁹⁴ Como lo venimos afirmando, la facultad pública de concesión de tierras públicas, requirió de la construcción del aparato estadual y una jurisprudencia de lo público basada en la noción de soberanía popular, por un lado, y la definición de cuales eran las tierras públicas por el otro. Un interesante debate sobre la rediscusión de estos principios se da en el Senado argentino a mediados del s. XIX cuando el Estado federal ocupa la Patagonia, el chaco y algunas zonas de alturas de los Andes nórdicos y, en plena competencia con algunas provincias como Santa Fe o Tucumán que reclaman para sí éstas nuevas adquisiciones de territorios, se decide la creación de entes jurídicos nuevos llamados “Territorios Nacionales” de “Los Andes”, “Chaco”, “Neuquén”, “Patagonia”. Todavía hacia el 1900, algunas reparticiones del Ministerio del Interior regulaban las facultades de los delegados nacionales en esa jurisdicción. La *Oficina de Colonización* federal debía estar al tanto de la “concesiones de tierras” que los delegados continuaban a otorgar a los ciudadanos ahora devenidos en colonos.

⁸⁹⁵ «En la ciudad de la Rioja a los ventiocho años del mes de febrero de mil ochocientos diez y ocho el Ilustre Cabildo de esta ciudad hizo merced al Capitan Don Matias Herrera de un campo situado al naciente de esta ciudad como a veinte leguas cuya dimension es de una legua a todos los vientos tomando por punto centrico el pozo que llaman del finado Don Juan Gregorio Moreno y hoy llamado de Anchico y que tiene por lineros al norte el alcalde Juan Gregorio Abumada y poso de Bailon. Al este campos despoblados. Al sud campos despoblados. Al oeste Poso del Mistob». ADGC, Transcrita el 30 de noviembre de 1887, en el folio 79, Libro del Registro Catastral del Departamento Capital, tomo 3, 1889, 79.

Gobernador Tomás Brizuela, las mercedes de las Aguada de los Coloraditos (1838), Pozo de los Últimos (1838) y Chañar (1839). La Merced de Don Gil (1846) fue dada por el gobernador Mota. El confrontamiento con las disposiciones del año 1813⁸⁹⁶ de la Junta revolucionaria que suprime formalmente el mayorazgo, el tributo, la encomienda, la mita, etc., hace evidente la vitalidad —en términos de dominio de los sujetos sobre las cosas— de las mercedes de tierras como instrumento del poder político local y gubernamental que otorga dominio sobre bienes raíces.

§ 28. DON DESIDERIO TELLO, DE “PATRÓN” A NOMBRE DEL PUEBLO

Para fortalecer nuestra hipótesis de que el derecho indiano habilitó al derecho patrio a pagar servicios públicos con tierras —en términos solorzianos, como vimos, la concesión de bienes de la Corona puede legal y legítimamente enajenarse para pagar “servicios”⁸⁹⁷—, mencionaremos algunos ejemplos de mercedes de tierras en el periodo de derecho patrio precodificado tales como la merced de tierras de Desiderio Tello y la merced de tierras de Milagro.

Recientes debates locales sobre las fechas de origen de algunos pueblos, (y que no fueron “pueblos de indios”), conllevaron la creación de comisiones municipales para el establecimiento de la fecha oficial de creación del pueblo⁸⁹⁸. “Los pueblos que no

⁸⁹⁶ ley de la asamblea general constituyente del 12 de marzo de 1813, que ratificó el decreto del 1º de setiembre de 1811, que extinguiera para siempre el tributo que pagaban los indios a la corona de España, y que además declaró “*derogada la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios bajo todo respecto y sin exceptuar aún el que prestan a las iglesias y sus parrocos o ministros, siendo la voluntad de esta soberana corporación el que del mismo modo se les haya y tenga a los mencionados indios de todas las Provincias Unidas por hombres perfectamente libres, y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan*”, Emilio RAVIGNANI, *Asambleas constituyentes argentinas*, ed. Peuser, Buenos Aires, t. 1, p. 24.

⁸⁹⁷ J. SOLÓRZANO PEREIRA, *Disputationen*....200 y 992.

⁸⁹⁸ Por ejemplo, la Comisión del Municipio Rosario Vera Peñaloza o que establece la creación de Chepes en la compra venta de la merced de Almazán; o en la lectura de la ordenanza municipal N° 1.056/04 que establece como día fundacional de Aicuña al 23 de enero, etc. El caso más emblemático es la asignación de día de fundación al día y hora de la puesta en posesión, tal es el

nacieron con ‘acta de fundación’, siempre arrastraron dudas respecto a su origen”. Con esa convicción, Margarita Massud se ha propuesto rastrear el nacimiento de una comunidad llanista, el pueblo llamado Desiderio Tello, y reflejarlo en un libro en proceso de producción⁸⁹⁹. La autora reveló el contenido de algunas páginas de su obra, en la cual destaca la búsqueda del “punto geográfico” donde “espacializar” su ubicación —un elemento sustancial o centro desde el cual se “mide” y elemento de cosmovisión que nos remite a una tradición indiana— en el que tuvo origen este pueblo llanista. Massud se remontó, vía documentación existente, al 8 de febrero de 1884 cuando don Desiderio Tello —vecino de Ambil (departamento Ortiz de Ocampo)— se presentó ante la Justicia en la ciudad capital para solicitar “la protocolización de una escritura de merced de una área de campo situada en el antedicho departamento y conocida como Los Melados o bajo de los Melados” que “le fuera concedida en 1824 a su padre, don Hipólito Tello, por el entonces gobernador de la provincia, don Baltazar Agüero”.

La autora transcribe el título y, en principio, nos detendremos en los considerandos de esa decisión gubernamental, los cuales fueron que Hipólito Tello, vecino llanista prestó servicios al estado como militar “a su costa” y sin sueldo en el escuadrón de la reciente creada y autónoma provincia de La Rioja.

“capitán graduado de la segunda compañía del tercer escuadrón del Regimiento número primero de esta provincia, sirvió más de diez años en la milicia, en clase oficial (...) su intervención en la expedición para la jurisdicción de San Luis [al mando de Juan Facundo Quiroga] fueron sin sueldo alguno y parte sosteniéndose a su costa” y “se desempeñó como corresponde en todas las comisiones que le confiaron...”. [Además, se tuvo en cuenta que] “su padre, don José Tello, ha servido al Estado de un modo distinguido en cada ocasión...”

caso de la segunda ciudad de la provincia de La Rioja, Chilecto, la cual festeja su creación hace 219 años, el decir el 19 de febrero de 1715, día de posesión de la *merced de Santa Rita del Balle de Anguinan* al peticionante y encomendero por segunda vida de los indios Malligastas, Don Domingo de Castro y Bazán. Para la merced véase el Anexo, Doc. N° X , mientras que para la reseña fundacional, Francisco DE LA FUENTE, *Manual de Historia y Geografía de La Rioja*, 1969, La Rioja, ed. Cía. Editora Riojana.

⁸⁹⁹ Margarita MASSUD, *El origen de las tierras de Desiderio Tello*, MS, 2005.

Nos interesa acá resaltar que el interés público representado por el gobernador premiaba a un servidor del Estado, a su padre, a sus diez años de miliciano, y la participación en una expedición: todo a su costa. Por supuesto que esta concesión debe enmarcarse en los vínculos entre política y defensa de amistades aliadas, pero siendo ésta la causa última, debió revestirse de un procedimiento y argumentación enmarcándolo en la institución merced de tierras ya no dada por el Rey sino por la Patria.

Esas tierras, que “las poseía don Desiderio Tello en comunidad con su madre, doña Bernabela Arias de Tello, y su hermano, don Tránsito Tello”, se encontraban ubicadas dentro de los siguientes linderos: “Desde el bajo de Los Melados, campo de Ambil tres leguas al sur y otras tantas al norte; por el naciente a lindar con tierras de la jurisdicción de Córdoba y, por el poniente, a lindar con tierras de dicho Ambil”. Para robustecer su petición, Hipólito Tello hizo hincapié en que “resultará un beneficio para el público, con dar agua a la travesía que gira a Córdoba”. A la postre, se le concedió “por merced un pedazo de campo yermo, con título en papel sellado”, bajo de los linderos que Massud dice: “el bajo de los Melados se ubica en la actual población, cruzando el paso nivel Norte, entre un potrero llamado Las Vizcacheras, propiedad de Vitaliano Echenique, y la estancia El Balde, de las hermanas Luque Vera”. En otro tramo de la interpretación, la autora comentó que “estas tierras fueron -desde siempre- signadas por la adversidad” por cuanto, habiendo transcurrido un año desde que Hipólito Tello tomó posesión legítima de esos campos, “el capital don Fabián Arias, cumpliendo órdenes, da posesión en los mismos terrenos a don Dionisio Luna” quien aseguró haberlos adquirido “al Gobierno”. Massud corroboró en la documentación que Luna “se manejó ilegalmente”, motivo por el cual... “haciendo justicia”, el gobernador Baltazar Agüero encomendó al capitán de milicias Fabián Arias “para que le dé posesión nuevamente” a Hipólito Tello, lo que ocurrió “en Ambil el 1º de junio de 1825 ante dos testigos”.

Otro episodio recogido por Massud ocurrió a la muerte de Hipólito Tello. En razón de que “el decreto que acreditaba su propiedad estaba mal redactado y se prestaba a confusión”, su esposa Bernabela Arias de Tello pidió que “se declare válida y legítima la escritura de la merced de bajo de Los Melados” pero lo hizo a través de una solicitud

firmada por su hermano, Pantaléon Arias, “tal vez porque los derechos de la mujer, en ese entonces, estaban muy relegados”. El trámite se efectuó el 18 de marzo de 1856 con el fundamento de que constituía “el único patrimonio de la familia”. Años más tarde, los hermanos Desiderio y Tránsito Tello reiteraron la solicitud y el primero de ellos fue notificado de la aceptación el 8 de febrero de 1884. “Desde esa fecha”, según Massud, “este terrateniente ya pastoreaba toda la zona”⁹⁰⁰. De este estanciero del cual deriva el actual nombre del pueblo, que, en efecto, hoy se denomina “Desiderio Tello” (345 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda’ 2001), menciona, en 1886 y amparado en la Ley 88, que las tierras las posee en “comunidad” con su madre Bernardela y su hermano Tránsito, e intenta protocolizar mediante el mecanismo legal establecido. En el expediente se establecen copias de documentos que certifican la “expresión de motivos” por lo cuales su padre, en fecha cierta —*facta* o fecha de hecho o acto de concesión—, obtuvo el campo por “merced” y de una autoridad nueva: la del Gobernador Intendente General de La Rioja y no la de Córdoba del Tucumán, sin que esto sea un problema por cuanto éste heredó las facultades autonómicas de aquel. Además, Hipólito Tello fue años después, él mismo, gobernador⁹⁰¹, fiel a la “Santa Causa de la Federación”, elegido el 19 de diciembre de 1841 por una asamblea popular que pronto tuvo una ortodoxa ratificación legislativa por cuanto el 18 de enero de 1842 la Sala de representantes confirmó el pronunciamiento popular, invistiéndolo legalmente con los poderes de Gobernador y Capitán General de la Provincia.

Por ausencia de archivos público, no están aún claras las formas de funcionamiento de las redes de vínculos sociales en temas y momentos decisivos, como las guerras entre *patres familias* por el control de la renta de la tierra o al menos el afianzamiento iuspolítico de la posesión de la misma; es poco aún lo que sabemos sobre las raíces de la combinación de lealtades y recursos que está en la base del poder rural desde mucho antes de 1810, pero que sólo en medio de las luchas políticas del caudillismo de siglo

⁹⁰⁰ M. MASSUD, *Tierras...*,

⁹⁰¹ Nos remitimos en todo al capítulo XV: “el Gobierno de Hipólito Tello”, de A. BAZÁN, *Historia de La Rioja*, 354-380.

XIX saldrá a la luz con la crítica sarmientina al “bárbaro feudalismo” riojano en particular, pero en el siglo “posterior” al de dominio del derecho indiano.

Desde el punto de vista de los estudios empíricos recientes sobre el espacio rural, es necesario desterrar definitivamente el mito de la monopolización de la tierra por parte de “terratenientes”⁹⁰². Aún para un período de auge de la ocupación privada de la tierra como es el siglo XVIII y expansión de la frontera del XIX, tal proceso fue mucho más complejo de lo que jamás se había creído, ya que la preeminencia de los terratenientes en la toma de decisiones políticas y en el aparato productivo, así como en la inversión, fue por lejos mucho menor de lo que se afirmaba⁹⁰³. No obstante, las guerras quiroginas, que interpretamos como problemas de organización política o metamorfosis entre el liberalismo y el antiguo régimen⁹⁰⁴, la conexividad entre el poder político y la tierra es evidente. Una historia agraria —o más precisamente de la propiedad terrícola—, desbordada de sus límites y demarcaciones parroquiales de origen, parece estar en condiciones ahora de plantear mejor un tema clásico: las relaciones entre la estructura agraria y el caudillismo. Es evidente que éste no puede ya derivarse directa y

⁹⁰² Esta es la opinión mayoritaria de la escuela del *Instituto de Estudios Histórico-Sociales* (Facultad de Cs. Humanas - Universidad Nacional del Centro, Tandil - Argentina), de varios trabajos sobre ruralidad publicados en su ANUARIO IEHS (Véase siguiente nota al pie).

⁹⁰³ Como bien lo desarrollan los trabajos supra sobre el capitalismo agrario pampeano, ya ha incursionado en relacionar caudillismo, soberanía política y régimen de tierras, véase BROWN, J. *Historia socioeconómica de la Argentina. 1776-1860*. Buenos Aires, Instituto Di Tella / Siglo XXI, 2001; MIGUEZ, E. J. “La expansión agraria de la pampa húmeda (1850-1914). Tendencias recientes de su análisis histórico”, en *Anuario IEHS*, 1, Tandil, 1986; SÁBATO, H. *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar, 1850-1890*. Buenos Aires, Sudamericana, 1989; GELMAN, J. “Unos números sorprendentes. Cambio y continuidad en el mundo agrario bonaerense durante la primera mitad del siglo XIX” en *Anuario IEHS*, 11, Tandil, 1996; HORA, R. *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1945*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2002; INFESTA, M.E. “Estrategias de apropiación privada de tierras nuevas en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX”, en GIRBAL, N. y VALENCIA, M. *Agro, tierra y política. Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil*. Buenos Aires, 1998. Una síntesis reciente en BARSKY, O. y DJENDEREDJIAN, J. *Historia del capitalismo agrario pampeano. T. I. La expansión ganadera hasta 1895*. Buenos Aires, Siglo XXI-Universidad de Belgrano, 2003.

⁹⁰⁴ HESPANHA, Antonio; “Pequenas repúblicas, grandes estados. Problemas de organização política entre antigo regime e liberalismo”, 93-109, en István JANCOS (comp), *Brasil: Formação do estado e da nação*, San Pablo, ed. Huicitec, Brasil, 2003, [p.703].

simplemente de las estructuras económicas y menos aún del funcionamiento interno de la gran hacienda agraria⁹⁰⁵. Pero no ha sido ahondado el rol militar en este incipiente capitalismo “ecuestre”⁹⁰⁶ de carácter comercial que domina en el Tucumán de mediados del siglo XVIII al XIX.

Pero volviendo a La Rioja, veamos un breve racconto contextual de las coyunturas del periodo para situar los problemas de legitimación del orden jurídico.

En julio de 1820, La Rioja declaró su autonomía de la Gobernación de Córdoba del Tucumán y eligió Gobernador Intendente al general Francisco Ortiz de Ocampo. Lo reemplaza el coronel Nicolás Dávila (1820-1823), quien traslada el Poder Ejecutivo de La Rioja a Chilecito y se niega a entregar su mandato de gobierno una vez vencido el término para el que había sido designado. La Sala de Representantes (Poder Legislativo) ordena a Juan Facundo Quiroga la destitución de Dávila la cual se resuelve en un combate militar entre leales a uno y otro poder. Quiroga, hijo de un comerciante sanjuanino de vacas y mulas, con tierras en Valle Fértil y estancias familiares declaradas en San Antonio⁹⁰⁷, Tosquea, Ñoqueve⁹⁰⁸ y Mascasín, tenía bajo su mando el cuartel de

⁹⁰⁵ Ver Ana FREGA, Caudillos y montoneras en la revolución radical artiguista y MATA DE LOPEZ, S. “La guerra de independencia en Salta y la emergencia de nuevas relaciones de poder”, en *Andes*, N° 13, Salta, 75-112 y 113-144, respectivamente. Jorge GELMAN, “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comps), en *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*. Buenos Aires, EUDEBA, 1998. 223-240; El fracaso de los sistemas coactivos de trabajo rural en Buenos Aires bajo el rosismo. Algunas explicaciones preliminares, en *Revista de Indias*, Vol. LIX, N° 215, 1999. 123-141; Jorge GELMAN, “Las condiciones del crecimiento estanciero en el Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX. Trabajo, salarios y conflictos en las estancias de Rosas”, en GELMAN, J, GARAVAGLIA J.C y ZEBERIO, B (comps) *Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX*, Buenos Aires, ed. La Colmena-UNICEN, 1999. 75-120.

⁹⁰⁶ Capitalismo ecuestre o tipo de capitalismo en donde prima la apropiación militar, Max WEBER, “Die Sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur”, de *Gesammelte Aufsätze zur Social-and Wirtschaftsgeschichte*, Tubinga, 1924, resumido en Karl Polanyi, *El sustento del hombre*, Madrid, ed. Mondadori, 1995, 371.

⁹⁰⁷ Archivo particular de Bravo Tedín, Colección Zacarías Agüero Vera, doc 04238 (en adelante CZAV, 4238).

⁹⁰⁸ CZAV, 4238 “Informe del Juez de Paz Favian Gosales a Pedimento de D. Juan de la Cruz Fernández, Ñoqueve, 21 de octubre de 18[5]3 años”

San Antonio “con 123 plazas entre soldados, sargentos y cabos”⁹⁰⁹, entre quienes se encontraba Amador Montiveros, un vecino con paraje en el Pozo de Los Últimos de los Baldes del Milagro. Amador, durante el gobierno de Dávila solicitó que se le concedan, en merced de tierras, los campos desiertos que circundan a su casa poblada, petición que es acogida por el gobernador “en atención a los méritos de Montiveros el cual ya había escalado varios grados en el escalafón de ejército”. Dice el autor Quinteros que, caído en desgracia, Dávila le acarrearía a Montiveros algunos trastornos, rodeado de vecinos celosos que le debían al nuevo arbitro militar y político de la provincia (Quiroga), hasta el extremo de secuestrarle el título de merced que le había concedido el “amigo” Dávila”⁹¹⁰. Esta práctica pareciera haber sido común del período y de la región, es decir, el de destruir a los adversarios políticos sus bienes: los ranchos, ramadas, corrales, las marcas de animales, de dominio como mojones y de, físicamente, los “papeles” o escritos que testifican el dominio sobre las cosas (títulos públicos o privados, boletos de compra venta, etc.), los cuales, conjuntamente con el abigeato, constituían un mecanismo de compulsa política que bordeó el carácter de guerra civil durante todo el periodo de revueltas y rebeliones entre federales y unitarios⁹¹¹.

Diez años después, Don Amador Montiveros, ya retirado del ejército y dedicado a sus faenas de estanciero, decidió solicitar, mediante apoderado, que se le conceda nuevamente “lo merecido”. Así:

16 de abril de 1833

⁹⁰⁹ Luis QUINTERO, *Las vías del escarmiento. Bosquejo histórico de Milagro*, ed. Del Autor, la Rioja, 2003, 86.

⁹¹⁰ Luis QUINTERO, *Las vías...*, 87

⁹¹¹ Por ejemplo, los comuneros de Tama (paraje de 411 habitantes) solicitan, en 1887 la “reposición de títulos por haberse extraviado durante las guerras civiles” el título de la merced de tierras de Tama la cual fue hecha en 1719 a Pedro Sánchez de Villegas Valderrama, AJLR, 407- M, 1887. Idéntica situación AHLR, S Letra- 139, Ávila Albino, Confección de títulos- Famatina- Juan Mercado, AHLR Tierras Fiscales Leg 1: 1813-1878 “Ante la rectitud de su Juzgado y Digo: Que mediante los trastornos de Guerra se an perdido los titulos”, etc.

Excelentísimo Señor Gobernador Intendente [Jacinto del Rincón]: Dn Vicente Alamo, vecino de esta ciudad y apoderado cartulario del Capitan retirado Don Amador Montiveros del Departamento de Los Llanos, ante Vuestra excelencia comparezco según derecho y digo: que siendo Gobernador Intendente Don Nicolas Davila, a solicitud de mi parte, en vista de sus notorios servicios, se sirvió concederle una merced en los campos desiertos denominados ‘el milagro’, con media legua a toso los extremos, camino preciso de la de Córdoba para la de San Juan y otros distritos, en cuyos terrenos tiene trabajos, pozos de balde, casa, corrales, y poblado de ganados mayores y menores, los cuales documentos con trastornos de la guerra ha padecido pérdida de ellos, y siendo como es útil dicha población al bien público, sírvase vuestra excelencia en ampararle de nuevo, a virtud de quien de público y notorio es poseedor de buena fe, y que hace privilegio (...) como ser acreedor para dicho amparo en recompensa de sus servicios”⁹¹²

De la lectura de la solicitud se desprende que no solicita una nueva merced de tierras sino un amparo por la merced concedida años antes y de la cual es poseedor en buena fe. El 20 de abril de 1833, previa vista del fiscal, quien “no tiene embarazo en que se le dé”, el gobierno local dispone un “Ampárese el derecho que esta parte solicita”⁹¹³ y el

⁹¹² Luís QUINTERO, *Las vías...*, 88.

⁹¹³ “Habiendose presentado verbalmente Don Vicente Santos de Alamo como apoderado de Don Amador Montiveros, las anteriores diligencias de vista fiscal, y amparo expedido por el excelentísimo Señor Gobernador, solicitando comisión para la posesión que debe tomar su podermandante Montiveros, se comisiona en bastante forma de derecho al Señor Coronel Don Hipólito Tello para que pasando al Balde, y terrenos del Milagro, campos desiertos, le ponga en posesión real, corporal al interesado Don Amador Montiveros, bajo los linderos de su petición, y verificando que sea, le hará entrega de estas fojas para en guarda de su derecho y hágale saber a dicho apoderado para su entrega así lo provea, yo Don Nicolas Carreño, Alcalde Ordinario de primer voto y Juez Consular de ella con testigos a falta de escribano. Jose Nicolás Carreño. Testigo: José Domingo Arias. Testigo: Luís Antonio Zárate. En el mismo día notarié al apoderado del anterior auto de comisión y se le hizo entrega, y firmó conmigo, doy fe. Carreño. Santos Alamo. Baldes de Milagro, octubre 20 de 1833”.

Alcalde Ordinario del primer voto y Juez Consular comisionó al entonces coronel Hipólito Tello a que le diera posesión:

“En uso de la comisión conferida a mí, y en consecuencia lo verifique en un día sereno y claro a horas diez de la mañana tomándole de la mano se le dio posesión a Don Amador Montiveros y señalándole los términos que comprende bajo su posesión domicilio y vecindad, hice que entrara en ella como dueño legítimo de ella, con toda posesión y dominio a nombre de la Nación, solemnizando el acto de la posesión con todas las virtualidades y requisitos de costumbres según derecho de la ley prescripta actuando en consecuencia (...) la firmé en este lugar de los Baldes a 29 de octubre de 1833. Hipólito Tello”

“Balde del Milagro” fue la denominación de un espacio territorial muy avaro de lluvias, en el que el mismo Montivero había iniciado su ocupación con la cava de pozos de balde en busca de agua de profundidad, los que hoy figuran en la mensura de 1890 como “baldes abandonados” hasta que Montiveros construyó el “Pozo Último” donde encontró el preciado líquido el cual era conservado (el agua), en épocas de sequía, por seis meses. Allí mismo situó el punto céntrico de su solicitud para que “le concediera una legua a todos los extremos”. Pero a su vez, esta característica nos sugiere que se está constituyendo otro tipo de merced de tierras: intersticial entre otras más grandes y que ya han ocupado las mejores pasturas y aguadas (naturales de arroyos estacionales o de vertientes) y situadas a ambos lados de las serranías de los Llanos y en el valle del Famatina.

La segunda característica se refiere a sus modestas dimensiones. Tendrá solo una legua cuadrada, es decir, 2500 hectáreas⁹¹⁴, las cuales se equiparán a otras solicitudes del periodo patrio frente a las 50.000 hectáreas promedio del periodo indiano.

La tercera característica nos sugiere que los actores ya no apelarán a denominaciones toponímicas prehispánicas o de poblados de indios, simplemente porque nos los hubo en

⁹¹⁴ 25.534.830 metros según la mensura del agrimensor Juan Fernandez, aprobada el 10 de mayo de 1890.

razón de que estos predios son desérticos o estas denominaciones readquirieron una nueva dimensión espacial de tradición criolla.

Las características comunes al resto de las mercedes podemos resumirlas como: petición formal con descripción de motivos, condición de vecindad y linderos, vista (u opinión) del fiscal (o jefe de hacienda de la caja real o estadual), concesión y auto de comisión para la puesta en posesión. En otro lugar, ya hemos ahondado sobre el valor jurídico de esta ritualidad. Nominativamente, y en estos casos particulares, “Nación” reemplaza a “Reino” —lo que significó la reappropriación identitaria de la idea de nación por parte de todas aquellas matrices constructoras de sentido del antiguo régimen—. Y, ratificamos la sustantiva acción de ésta última, por cuanto sin ella —la *missio in possessionem*— el título no se “le hará entrega de estas fojas para en guarda de su derecho”.

¿Y qué acontece con el resto del siglo XIX? Balde de Milagro se transforma en un paraje de carretas debido a su condición nodal de los caminos desde y hacia San Juan y Córdoba. El aumento de la capacidad productiva de ganado vacuno, durante todo el siglo XIX, descrito por cronistas⁹¹⁵ y ratificado por los informes de exportación local, informa que en el año 1894, 18.000 vacunos de Los Llanos se exportaron a Chile, por Oficina de Inmigración (*Guías de rubro ganado en pie*)⁹¹⁶, e hicieron de Milagro una urbe de viajeros y caravaneros, con casas esparcidas como unidades de producción casi

⁹¹⁵ Pierre Denis nos consigna los arreos transcorderos de ganado errado “*Las arrias a Copiapo, medidas en 11 o 12 jornadas o ‘dormidas’ tenían diversos itinerarios según fuera el estado de la hacienda. En cambio, si los bovinos eran conducidos primero a San Juan, como ocurría usualmente con el ganado del sur de Los Llanos (Chepes, Ulapes) demoraban de una a dos semanas en atravesar la Cordillera (...) Se necesitaban cinco hombres para un tropa de 100 animales; 8 solamente para una de doscientos*”, Pierre DENIS, *La République ...*, 99

⁹¹⁶ Graciela OLIVERA, *Por Travesías y oasis. Mercados, producción agraria y actores sociales de La Rioja (Los Llanos y Arauco, 1900-1960)*, Córdoba, ed. Universidad Nacional de Córdoba, 2000, 50. Esta autora ha elaborado unos cuadros estadísticos específicos sobre la base de las anotaciones de las “Receptorías de Comercio Exterior” asentadas en las localidades de Vinchina (La Rioja) y Tinogasta (Catamarca), ambos puestos fronterizos ubicados en Los Andes cordilleranos. Por ejemplo, para el año 1902, desde Vinchina se anotaron envíos, “en pie” o sea en arreo, de: bovinos, 1853; ovinos, 199; mulas, 755; asnos, 377; equinos, 69 unidades lo que da una idea general de la actividad exportadora de La Rioja, Cif. G. Olivera, *Por travesías...*, cuadros núm. 1,2,3,4 y 5, Anexo, 274 y ss.

autónomas, colindantes cada una, por los límites de sus respectivos potreros y chacras, dominando la escena socio económica de lo que se ha denominado época pre-ferroviaria⁹¹⁷. En efecto, todo este ganado se produce en tierras comuneras⁹¹⁸, entre poseedores y titulares del goce de la tierra en mercedes indivisas, las cuales, desde una diversificada producción de autosuficiencia, avanzará en la mercantilización también de la tierra con nuevos intentos por apropiarse según el nuevo marco jurídico del último cuarto del siglo XIX.

En un intento por lograr una comprensión más profunda del uso comunero de la merced de Milagro, conviene puntualizar aquellos aspectos que nos parecen más tipificadores y que en otro lugar hemos denominado *usus communis terrae*. Conviene entonces identificar el objeto tal como merced de tierras, el cual independientemente a las técnicas de especialización, convenimos que es la dimensión indiana “de media legua a todos los vientos” según el documento, expresión de motivos, sujeto y fecha cierta (1823). Hasta 1889, conviven en ella diversos sujetos “tenedores de la tierra”, varias “casas pobladas” esparcidas en puntos, donde el comunero hizo y eligió, con indudable beneplácito de sus vecinos próximos, su rancho, sus potreros y pozo de balde de agua. Estos pobladores rurales bien podrían ser definidos también como “propietarios prácticos” (Congost), perfilados con una diferencial intensidad de la dimensión apropiadora y parapropietarios (Grossi), y propietarios colectivos, ya sea por

⁹¹⁷ Luis QUINTERO, *Las vías...*, 106.

⁹¹⁸ En el año 2004, “*el uso del campo por los pobladores herederos, coherederos y descendientes de Aicuña, sigue en común*” dirá A. Ormeño, presidente de la Cooperativa Vecinal de Aicuña al Diario *EL Independiente*, el 23 Marzo de 2004. Las tierras de Aicuña habían sido desglosadas una de las numerosas mercedes de tierra del Capitán Nicolás de Brizuela. Leemos en libro del registro de la propiedad inmobiliaria de la provincia de La Rioja:

“*Este campo [Aicuña] perteneció al General Nicolás Brizuela y por testamento de éste ha donado dicho campo a su hijo Domingo Brizuela (...) les corresponde por compra [de los condominios hecha a] Antonio Gonzales y Juliana de Mercado realizada por \$800 del testimonio contrastadas las tramitaciones seguidas ante el Gobierno de la Provincia de aquellos años (...) fdo: Damian Leguizá, Dirección de la Propiedad*” ADGP, L. 1, 1-135, año 1912, “Protocolización títulos campo de Aicuña”, escritura 225, f. 249 v.

la comunión con del agua que baja de la quebrada acuífera de Anzulón, de la servidumbre de paso, de sembrar y recoger algarroba, leña y de caza de liebres y *suris*, que por factores contingentes fueron deviniendo en derecho a goce del bien que pudo apropiarse o colaborar para su obtención, como represas y cercos, constituyendo efectivos condóminos del goce de los fundos, con gran parte de la organización de la gestión agro-silbo-pastoral de ganado vacuno, mular y caprino en manos de estos “condóminos” o “derechosos”. Hacia 1882, la colindante merced de tierras de Olpas⁹¹⁹ poseía medio millar de derechosos⁹²⁰, por lo que no parece inadecuado suponer la existencia de un centenar de sujetos comuneros para la de Baldes de Milagro. Como era habitual en este siglo y jurisdicción, comienza un pasaje de herederos a comuneros al acordar los efectivos o supuestos descendientes del titular originario la venta de “derechos y acciones” y el mismo es, también, un modo de adquisición de un derecho por parte de sujetos más idóneos para llevar adelante la regularización dominial que comenzaba la legislación vigente a exigir, como la ley 88 del año 1888. La merced de Baldes del Milagro no tenía por qué ser ajena a ese destino⁹²¹. El 21 de Julio de 1888, don Daniel Tello, vecinado en la Villa Santa Rita de Catuna, compra “dos derechos y acciones comunes al campo de parte paterna, de la original posesión de don José Amador Montiveros” de manos de Don José Zárate y su finado hermano Ceferino Zárate, como descendientes legítimos del originario titular de la merced de tierras. En 1889, un año después, Tello, representado judicialmente por el letrado Guillermo San Román, solicita judicialmente la mensura, deslinde y amojonamiento de la merced de tierras de Baldes de Milagro que ejecuta el agrimensor Juan Fernández, quien comienza la mensura a las 10 de la mañana del 10 de mayo de 1890 “desde el punto céntrico que es los antiguos Baldes del Milagro y media legua a todos los vientos”. Algunos pobladores, en la actualidad, describen a los mojones como tallados en piedra, de un

⁹¹⁹ La merced de tierras de Olpas fue concedida a Luis Villafañe y Tejeda por el Gobernador Abarca y fechada en Salta del Tucumán en 1730.

⁹²⁰ Ramón Díaz afirma que, según un expediente judicial de 1882, la merced de Olpas consignó la existencia de 252 derechos y acciones, Ramón DÍAZ, *La Rioja-Encrucijada de aridez y esperanza*, 1989, ed. Magisterio del Río de La Plata, La Plata, 1989, 136.

⁹²¹ L. QUINTEROS, *Las vías...* 93.

metro de alto, con un mojón en el centro y tres por cada costado. El propietario comienza a consolidar sus dotes de *propietas* del bien ya entendido como único bien y *unicum proprietas*, en detrimento de los propietarios prácticos habitantes rurales en ese campo.

§ 29. CULTURA JURÍDICA Y RETÓRICA DEL *USUS TERRAE COMUNIS*.

La relación de los sujetos con la tierra que habitan en el Tucumán se sostuvo, entre el siglo XVII y principios del XX, en una cultura legal costumbrista que reprodujo una experiencia jurídica centenaria propia, cuyo carácter distintivo fue el uso y goce comunal, y un peculiar ordenamiento jurídico de “situaciones reales” amparadas con “derechos y acciones”. Estos derechos terrícolas eran “escritos”, pero su naturaleza no era exclusivista o privatista. En otras palabras, estos derechos y acciones no estaban en concurrencia ni en competencia con la comunitarización, válganos la palabrota, según la feliz expresión de Clavero⁹²². Eludían, en términos prácticos, la codificación (que conllevaba a un individualismo posesivo) con una estrategia de ser inscriptas en el Registro de la Propiedad bajo la figura de folio personal⁹²³, siendo, los titulares de éstos

⁹²² B. CLAVERO, “Retablo constitucional de derecho indígena: Ecuador, Venezuela, Bolivia, México”, s.f. (alrededor de 2005), La Paz, 62 [92].

⁹²³ Los derechos y acciones se *registraron* sin ser dominio imperfecto (art. 2661 de C. Civil). El artículo 2º de la ley 17.801 incorporada al Código Civil establece:

“De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2505, 3135 y concordantes del Código Civil, para su publicidad, oponibilidad de terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros [de la propiedad inmueble provinciales, n. del r.] se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguientes documentos:

- a. Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles;
- b. Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares;
- c. Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales.”

Aún con la última modificación (1968) el *Códe* argentino continúa a mantener la facultades provinciales de anotación de escrituras públicas, aun los que después sean desacreditados como

“derechosos” o “comuneros” que cumplían, en alianza con la corporación notarial local, con el imperativo de tener los “títulos” en condición de “registrados”. Esta cultura legal⁹²⁴ de los al menos tres siglos precedentes, que no es *folk*⁹²⁵, ni inmaterial, cual perteneciente solo a lo simbólico, sino que se ubica en una territorialidad y tiempo, y, dentro de esa *spatialisation*⁹²⁶, ha sido descripta por la ciencia histórica y ciencia jurídica moderna desde el tópico dual más recurrente: la relación de subordinación de un sujeto (de derecho) a clientes sujetados en el marco de un espacio: encomendero-encomendados / mercendero-comuneros / caudillo-montoneros / estanciero-gauchos, privilegiando dicha relación en un registro espacial determinando o territorio o jurisdicción, y en conflicto de transición del *ancien regime* a la modernidad. En estos estudios, el líder o caudillo, nacido en una cultura de la conquista del siglo XVI entra en

derechos personales y no reales. Según la doctrina jurídica provincial implícita el Código *manda* a inscribir pero no dice qué inscribir, lo que además fortalece la capacidad estadual provincial, de anotar lo que las leyes provinciales dijeran. Ello permitió que durante gran parte del siglo XX, algunas provincias como La Rioja, San Juan y Catamarca, poseyeran folios especiales para anotar los derechos y acciones. Com. pers. abogado Delfor A. BRIZUELA (2011).

⁹²⁴ Para la noción de cultura nos hemos llevado por la de George FOSTER; *Culture and Conquest: America's Spanish Heritage*, traducción al español de Carlo Castro, *Cultura y Conquista: la herencia española de América*, Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana, Xalapa, ed. Talleres Gráficos de la Nación, 33-51, 1962.

⁹²⁵ Existe una vasta tradición historiográfica folklórica, situada en autores como Gandia, Anzaláz, Cáceres Freyre y hasta Margulis, que se dedicaron a lo que denomina “las creencias populares de los habitantes primitivos” (Anzaláz) y polemizan “*todo nuestro folklore, aún el que se nos presenta con más fuerza con ropaje indígena, es de viejo y puro origen europeo*” dirá Enrique DE GANDIA en la introducción al libro de Fermín A. ANZALÁZ, *Cuentos y Tradiciones de La Rioja*, La Rioja, ed. Tribuna, 1946, 89. Véase también, siempre para la cultura rural de La Rioja, Mario MARGULIS, *Contacto cultural y crisis en una comunidad rural*, Buenos Aires, ed. EUDEBA. Para un estado actual de la discusión en Adrián MERCADO REYNOSO “El eterno retorno a la sociedad colonial de blancos e indígenas en el origen de la celebración religiosa del Tinkunaco riojano”, en *JOURNAL OF THE SOCIOLOGY AND THEORY OF RELIGION*, Año 2013, Vol. 2, Número 1, en red ISSN-e 2255-2715, Vol. 2, N°. 1, 2013, 45-71 Texto completo (pdf) en internet <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4760179> <http://sociologia.palencia.uva.es/revista/index.php/religion/article/view/19> (Consultado el 16-6-2016)

⁹²⁶ En contra de la universalización de problemas sociales comunes, surge una problematización que no puede ya ser dicha, descripta y discutida de otro modo que no sea en un registro espacial y con la ayuda de categorías territoriales, Sylvie TISSOT y Franck POUPEAU, “La *spatialisation* des problèmes sociaux”, en *Actes de la recherche en sciences sociales*, núm.159, Colección Enjeux, ed. Ferreyra-Seuil, Paris, setiembre de 2005.

conflicto con las autoridades federales en el XIX en defensa de “la autonomía”, y, dentro de ella, la cultura comunera⁹²⁷. Una cultura entrecruzada con la esfera de pertenencia patrimonial de sus habitantes, pero cuya matriz señorial es difícil de inteligibilizar si se compara con el modo de producción feudal (ante la ausencia empírica de la renta no tributaria) o el modo capitalista (más distintivo, este último, al individualismo jurídico potestativo, el salario, unido a la mercantilización de la tierra).

Instaurado, el Código Civil argentino trajo más complejidad, entre otras, por dificultades de implementación de un derecho público de raíz consuetudinaria al servicio del derecho privado. Las concepciones coetáneas acerca de estos temas, tierra y propiedad exclusiva, revelan un trasfondo cultural y doctrinal que, inexplicablemente, sólo desde un tiempo relativamente reciente han sido puestos de relieve por los actuales estudiosos, demostrando así las carencias en aquellos análisis que tendían a concebir dicho código político como el *alfa* o principio de un sistema que se explica por sí mismo, completamente autónomo, en conformidad con un método que solo contemplaba las cuestiones dogmáticas desde un punto de vista exclusivamente exegético. Es entendible pues, que desde la codificación se afirme, ante estos fenómenos de *usus terrae communis* al interior de los *dominios indivisos*, que las mercedes de tierras tienen o tuvieron un valor histórico pero que decididamente carecen de valor jurídico. En contraste, los archivos de escribanías públicas nos muestran que aún existiendo la indivisibilidad del bien terrícola, existió una constante transferencia del mismo. Desde el dogma moderno era y es imposible que algo indivisible pueda ser transferible. Los intentos por mandarla al baúl de los recuerdos en cuanto instituto, tal como lo hizo con la encomienda, el tributo y el mayorazgo, por mencionar aquellos más próximos al universo de los derechos reales, no surtieron el efecto deseado. La merced de tierras, en su ámbito naturalmente rural, siguió siendo “inasible” al Código en todo el siglo XX para gran parte del norte argentino.

⁹²⁷ Véase a De PAOLI, *El protector de los gauchos*, ampliamente reproducido en la páginas del Instituto del Revisionismo Argentino, y Fermín CHAVEZ, “El gaucho matrero, una categoría política” (1967), en línea en <http://jovenesrevisionistas.org/una-categoria-politica-el-gaucho-matrero-de-fermin-chavez/> (Consultado el 21/02/2016)

Tabla 14: Ejemplos de mercedes privatizadas, por número de comuneros y nuevos propietarios.

Nombre de la merced (año de concesión)	Número de pobladores comuneros residentes (previo a la privatización)	Cantidad de propietarios privados (a posterior de la privatización)	Año de privatización
La Hediondita (1755)	128	43	1967
Tudcum (1649)	132	13	1971
Araupatis Yuctabas o Bañado del Pantano (1687)	456	248	1984

Fuente: Elaboración propia en base a : INDEC, Censo Nacional de 1867, Buenos Aires, ed. S. Topográfica Nacional; IMTI-Latinoconsult Argentina S.A., “Intervención operativa ...” op. cit. p. 234; Martha PEÑA, *et al.*, *Estudio Social...* op.cit. p. 181; ADEZA-GTZ (Agencia de Desarrollo de Zonas Áridas y Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) “Saneamiento de Títulos”.

En el pasado reciente (fines del siglo XX) hubo en La Rioja, como vimos, una experiencia jurídica fundada en la recomposición de la legalidad consistente en restituir el dominio directo allí donde era solo útil (política de “saneamiento de títulos” como esquema interpretativo prevaleciente de una realidad “enferma de dominio indiviso” y uso común), a partir de 1965. Entonces, el estado provincial fue el principal sujeto, acompañado por una élite de políticos y empresarios, y de la legitimidad de la estatalidad del derecho propio. Se sanciona una ley provincial y se crea el IMTI que realiza la expropiación de las mercedes de tierras de la Hediondita, Tudcúm y Araupatis, con su readjudicación individual. No hubo en éstas ni terratenientes ni grandes poseedores al interior de los predios mercenderos que ostentasen u osasen disputar, con su *utilitas*, la potestad pública, lo que no permite suponer que la ley de creación del IMTI fue producto de una negociación legislativa y establecimiento *ex ante* de las áreas de “insuficiencia dominial” que el órgano iba a delinear y “sanear”. Habían pasado más de 45 años de la publicación de las Memorias del riojano Joaquín V. González⁹²⁸, quién decía, en 1920 y en referencia a la incapacidad local, es decir riojana, de que mediante ley provincial se solucionase el problema de “estado de indivisión”, y exponía su manifiesta desconfianza a los órganos productores de derecho locales:

⁹²⁸ Intentando recupera las jerarquías internas de la ‘clase gobernante’ del periodo 1880-1916, Natalio Botana (1985) considera a Joaquín Víctor González político de “primer rango por haber concentrado en su persona múltiples funciones públicas: Ministro, Diputado y Senador Nacional además de Gobernador de La Rioja. González fue Diputado nacional por La Rioja en los periodos 1886-1888, 1888-1889, 1892-1896, 1898-1901; Senador nacional por la misma provincia entre 1907-1916 y entre 1916 y 1923, Ministro del Interior de la Nación entre 1901 y 1904; en el mismo periodo ejerció alternadamente los cargos de Ministro Interino de Justicia e Instrucción Pública de la Nación y Ministro Interior de Relaciones Exteriores y Culto; entre 1904 y 1906 fue titular del Ministerio de de Justicia e Instrucción Pública; entre septiembre y noviembre de 1906 Ministro del Interior; Gobernador de La Rioja entre 1889 y 1891; redactor de la nueva Constitución de La Rioja en 1887; fue, asimismo, Vocal del consejo Nacional de Educación en 1889 y 1899; electo por Córdoba como convencional para la reforma de la Constitución Nacional en 1898; Presidente y Rector de la Universidad Nacional de La Plata en los periodos 1909-1912, 1912-1915, y 1915-1918. Abogado, diseño el primer Código Nacional del Trabajo que será sancionado en 1904. Véase, Natalio BOTANA, *El orden conservador*, ed. Hyspamerica, Buenos Aires, 1985, 135; y Félix LUNA (dir.) *Joaquín V. González*, ed. Planeta, Madrid, 1999, 151.

“[tierra deslindada por mensura se logrará] sobre la hipótesis de que las legislaturas —compuestas por lo general de terratenientes, poseedores en comunidad, o de simple hecho, o aspirantes a la propiedad por prescripción o unificación de derechos a largo plazo—, se presten a sancionar leyes cuya ejecución haya de resultar su propio despojo, o al menos, la privación de un goce más nominal que efectivo, pero que a ellos se les antoja una ventaja sobre el régimen de división y la individualización.”⁹²⁹

Emulando una política de composición de las disposiciones de Felipe III, los campesinos comuneros de Tudcúm, La Hediondita, y Auraupatis acudieron coercitivamente a mostrar los instrumentos públicos que atendiblemente legitimasen sus pretensiones de con-dominio o dominio indiviso predial. Siguiendo un procedimiento legal (excepcionalmente preestablecido), el Estado seleccionó a los nuevos propietarios, los imbuyó con dotes de legalidad (mensura de la merced, cálculo de la unidad económica, mensura particular, nomenclatura catastral, inscripción y otorgamiento de escritura pública individual) y sustanció la expropiación de los demás mercenderos pagándoles monetariamente. Con independencia de una evaluación ajustada de esta *ius* política, nos interesa resaltar una dimensión de dicho procedimiento: la nueva catalogación de los sujetos tenedores ante el bien raíz en el marco de un derecho intermedio, ni codificador napoleónico ni indiano cunde. El punto de certeza era que no se debía partir del código decimonónico y sus modos permitidos de acceso al dominio, sino que se debía crear una graduatoria (o graduación) u orden de mérito cuyo punto más evidente era la asignación de puntaje de los sujetos pretendientes poseedores del inmueble aún llamado merced, en función del rescate de subjetividades, sus *animus*, los tenedores (derechoso,...etc.) más los instrumentos públicos (escritos, hijuelas, sucesiones ab intestato, cartas, de fecha cierta) que este derecho presentare. Ello fue la excepcionalidad y particularidad de proceso que contuvo una *ius* más emparentada con el derecho indiano que con el republicano y es posible pensarla en cuanto esta categorización está dada en concurrencia de sujetos portadores de derecho sobre un único bien. En otras palabras, se define topográficamente una merced rescatando la cultura comunera y la tradición indiana, y se subordinan a ella los múltiples sujetos

⁹²⁹ J. GONZALEZ, *Obras completas*, Buenos Aires, ed. Congreso Nacional, 1920, t, II, 98.

ubicados en diferentes peldaños de un *grădum*, graduación u orden de mérito de éstos con relación al bien inmueble (previa definición de cuales serían los elementos meritorios). Definido pues el perfil de la intensidad de dimensión apropiativa de estos sujetos, a algunos, el Estado los imbuyó de atributos propietarios, a aquellos ubicados en la cabecera de los estados intermedios que se condujeron sucesivamente de un nivel a otro de la escala hasta el máximo de la gradación.

Narrativamente, don Andrés Ocampo, heredero de su abuela de unos “derechos y acciones” de la merced de tierras de La Hediondita, más la titularidad de tres represas, un pozo de balde, seis bañados y el derecho a pastar, cortar postes de *retama* y quebracho, supo en 1967 que el predio de donde se ubican y habitaron sus ancestros tiene, por mensura pública, más de un centenar de miles de hectáreas. Ahora sabe que la escritura pública le asignó 6.673 hectáreas y que solo puede pastar su ganado en ella, cazar y recolectar leña de ella, en síntesis, es propietario inmobiliario de “esas” seis mil seiscientos setenta y tres hectáreas.

Tabla 15: Mercedes de tierra por año de concesión y denominación, La Rioja 1613-1858

1613	Ispillango
1613	Balagasta
1614	Chacra
1615	Diego de Arroyo
1617	Alcázar y Tuison
¿1619?	Pocle o Miranda
1627	Alcasar
1628	Guanchín
1628	Amilgancho
1629	Nonogasta

1631	Tuani
1633	Aimogasta
1637	Guancadol
1642	Sobras de Malligasta (*)
1645	Pinchas
1646	Sobras de Sañogasta (*)
1647	Cargoya
1648	Tudcúm
1648	Yoque Benesa Pacatala
1649	Guan (Guandacol)
1650	Mascasín
1650	Cuchiyaco
1654	Acnín o Campanas
1655	Santa Cruz
1663	Sobras de Cuchiyaco (*)
1663	Balasto
1667	Amaná
1672	Famapay
1672	Massangano
1672	Duraznillo
1678	Malligasta
1684	Cochangasta
1687	Araupatis Yuctabas
1687	Anillaco de Abaucan
1687	Olta

1687	Conasto
¿1688?	Sobras de San Nicolas de Capayán
1694	Machigasta
1694	Malanzán
1695	Catunita
1695	Ambil o Estancia vieja
1695	Aguas Calientes
1696	Ulapes
1697	Jague (Capayán, Cocayambi, Binchina, Guamba -Guandacol- y Caube)
1697	Salana
1699	Sobras de Chimenea (*)
1701	Sobras Aminga
1702	Aguango
1702	Humango
1702	Sobras de Anguinán (*)
1707	Yatguit
1707	Sévilá
1710	Tuyubil
1712	Chilecito o Santa Rita
1713	Arauco o Los Hornillos
1713	Angulos o Cabaybil
1719	Tama
1720	Chumbicha
1721	Vinchina
1727	Chepes

1730	Olpas
1730	Sobras de Alcázar y Tuisuna (*)
1755	Puertecilla de Chile
1755	Hediondita
1755	San Isidro de las Minas
1756	Días de Loria
1759	Sobras de Tuyubil (*)
1770	Talampay
1761	San Andrés de los Palmares
1764	Medina Montalbo
1766	Villafañe
1768	Santa Rosa
1776	Trampasacha
1777	Nacate
1789	Ñoqueue
1792	Anchico
1809	Avila
1818	Amaya
1823	Balde del Milagro
1822	Melados (Desiderio Tello)
1824	Ocampo
1826	Aguango
1826	Tacanita
1826	Sobras del Barranco o del Bagual (*)
1829	Pozo de los ultimos

1838	Los Coloraditos
1838	Chañar
1839	Don Gil
1851	Sierra Brava
1853	Pozo del Alto
1858	La Lata
1858	Tres Pozos
1861	Bajo Los Pedernales

Fuente: elaboración propia en base de ADGC, folio 79, Libro del Registro Catastral del Departamento Capital, tomo 3, 1889. p.79; AGNA Ramo de la medias anatas; AJLR,A-410;AJLR, Expte. “Merced de la Hediondita, año 1887 que se remite a 1755 – Macho Muerto.”; Documento N° 16 de la Caja “Campos”; Expte. “F5.” s/f; Expte A-395, s/f.; F Brizuela del Moral; AJLR, Expte 386-M, “Mersed Real y mas documentos perten.tes al paraje de Santa Rita de Chilecito en el Balle de Anguinan Jurisdiccion dela Rioxa”]; AJLR, s.f. “Larrahona y Otros, Reposición de títulos”, 1888; *RJHyLLR*, año II, núm. 1, enero-marzo, 1942, pp. 31-35, *RJHyLLR* año II, núm.1, Enero-Febrero-Marzo de 1943; *RJHyLLR* año III, núm. 3, Julio-Agosto-Setiembre de 1944; ACELR; Protocolo del escribano Jaramillo, año 1880, foja 78;AJLR, Leg. A-395, f.403-409 vta; *RJHyLLR* año III, núm. 4, Octubre-Diciembre. de 1944, AJLR, C-104, Don Crisologo Chavez y compartes pidiendo posesión de los terrenos en la Merced de Tilimuque, 1873 (con traslado de 1717) "; AJLR, M. Jaramillo: Moreyra F, Protocolización, 1883; AHCo. Escribanía de Gobierno 2, Leg. 6 –Tomo II, Expte. 22; ADGC, MJ-20-P14, f. 14 y ss.; AHCo, Escribanía de Hipotecas, Leg 23, Expte. 3, pp. 1648-49; AJLR“Lidoro Aguirre- (ilegible) s/merced de Tudcum”, s.f, Expte 3130, Juzgado de 1° Instancia, Recatatulado “Merced de la Aguadita de Ampiza”;AJLR Expte 745, letra “V”, año 1912; *RJHyLLR*, año 2, núm. 3, Julio-Agosto-Setiembre de 1943, p. 26-32; Armando Bazan, *Historia...op.cit.*; Anzaláz, Fermín, *El cultivo de la vid*, La Rioja, 1949; Municipalidad de La Rioja,

Protocolización ∞ Escritura de permuta entre los padres jesuitas y el Capitan Pedro Nicolas de Brizuela, 1943, La Rioja, ed. Imp. Valdés, p.12; Américo Torralba, Los dueños de Chamical, La Rioja, ed. La Torre Blanca, 1982. p.11; L. Quarleri, “La administración laica de los bienes de los jesuitas de La Rioja: Producción, ingresos y malversación fiscal”, Revista Mundo Agrario núm. 2. Cif. <http://www.fahce.unlp.edu.ar/mundoagrario/nro2/Quarleri.html>; AHCo, Escribanía 2, leg. 6, tomo 2, Expte. 33. (1687). CFI —Consejo Federal de Inversiones-, Estudio sobre las mercedes de los Llanos de La Rioja, Buenos Aires, Mimeo, 1964; Francisco E. De La Fuente, “Chilecito”, p. 556; Serrano Radonett, Los Ortiz de Ocampo, RCEGBA, año 1, núm 1, Bs. As, 1979; Luis Quinteros, Las vías del escarmiento: bosquejo histórico de Milagro, La Rioja, ed. del Autor, 1998; ADGP, L.1, esc. 158, fs. 69 -69v, año 1913; ADGP, L.2, esc. 408, fs. 487 al 488v, año 1913;

(*) Nota: se han uniformado los términos “*demasia*” y “*sobras*” por del de “Sobras de (...)”

¿Qué había acontecido antes? ¿Hubo una autorregulación *pacticia* de estos actores/sujetos rurales en donde la *lex romana* de la *proprietates terrae* de carácter exclusivo no había ingresado como tal? Interrogándonos de otra manera y con palabras de Mariluz Urquijo: ¿por qué no hubo un deterioro progresivo de las restricciones al derecho a gozar del suelo con total exclusión de extraños? Ello es verificable ante la ausencia de evidencias en contrario. Pero esta “autorregulación” comunera, de fines del XIX y mitad del XX, no debe presuponer un espacio idílico⁹³⁰ y ausente de conflictos o

⁹³⁰ Raúl ROUX, “Por vago y mal entretenido”, *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, N° 21, Buenos Aires, 1960, es un ejemplo de una idea spengleriana de cultura rural. “Es que, a partir del triunfo del unitarismo de tradición rivadaviana y probritánico, se hace efectivo en la Argentina, como en ninguna otra época, el despojo de la tierra a los hijos de la tierra”. Los comuneros de Angel “Chacho” Peñaloza, son el fiel exponente de una cultura política.” Porque *gaucho matrero* no es una calificación jurídica, de derecho penal, sino sencillamente una categoría política. Llama así profundamente la atención que el único cargo grave que los detractores del Chacho —a partir de Sarmiento- le endilguen al riojano, es el de haber sido protector de los gauchos matreros del oeste. Tanto el aludido Sarmiento como Benjamín Villafañe, Joaquín V. González,

litigios sino que éstos se trasladan al Código Rural (una magistral criatura destinada a hacer de “policía” de los intercambios y frutos de la campaña, y legitimar un propio diseño popular de usufructo) y con ello se alejaban de la cuestión térrea para adentrarse en otros bienes más tangibles como el ganado, la servidumbre, las aguas y apropiación por caza.⁹³¹

Tabla 16: Gobernadores del Tucumán, periodos de gobierno por cantidad de mercedes de tierras concedidas en la jurisdicción de La Rioja

Esteban Urizar y Arespachaga 1707-1724	10
Gutierre de Acosta y Padilla 1644-1650	9
Felipe de Albornoz 1627-1637	8
Juan de Samudio 1696-1701	8
Angel de Peredo 1670-1674	5
Quiñones Osorio 1612-1619	4
Tomás Felix de Argandoña 1686-1691	4
Martín de Juaregui 1691-1696	3

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles

Marcelino Reyes o Salvador de la Colina, o los agentes mitristas de 1863, se quejan permanentemente de esa protección que Peñaloza brinda a los gauchos matreros de La Rioja y provincias vecinas”.

⁹³¹ Los códigos rurales, como es sabido, regulaban la propiedad del ganado por un sistema de marcas y señales, la servidumbre real de aguas, las tablas, la apropiación por caza y la personería legal del juez de Paz de la campaña. Define instrumento parapropietarios, por ejemplo, el sistema de marcas: “*La marca indica y prueba acabadamente y en todas las partes la propiedad del animal ú objeto que la lleva*”, define el art. 31 del Código Rural Para los Territorios Nacionales., art. 17 del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, art. 35 del Código Rural de la República Oriental del Uruguay, etc. *Código Rural para los Territorios Nacionales sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 14 de Agosto de 1894*, ed. Imprenta de V. Daroqui, Buenos Aires, 1901, 17 y ss.

§ 30. EL CÓDIGO CIVIL SIN CÓDIGO AGRARIO.

El *Code Civil* no es solo una creación francesa sino universal y su influencia en La Rioja no es materia de debate. Sin embargo, Clavero ha traído a América Latina una perspectiva que implica el desocultamiento de la discusión de los proyectos formales de Código Rural en Francia⁹³², y el enunciado, hoy evidente, de los problemas adaptativos de una visión burguesa y citadina, no siempre correspondidos en una sociedad mayoritariamente campesina y rural, tal como la francesa de entonces y, también, la tucumana tardo colonial y del siglo XIX.

Conviene comenzar mirando, entonces, una invención europea, la codificación, esto es, la consolidación napoleónica de la revolución francesa en el ámbito del ordenamiento jurídico: *Code Civil*, *Code de Procédure Civil*, *Code de Commerce*, *Code Pénal* y *Code d’Instruction Criminelle*. Estos no fueron *ideal typus* sino ordenadores de la sociedad. Entre finales del XVIII y primeros años del XIX, fue en Francia donde se generó la formulación normativa del modelo social que, exportándose a continuación por parte de Europa y América Latina, está en la raíz de una problemática de derecho agrario sudamericano. Se trata, en efecto, del *Code Civil* (1804), que tantas imitaciones y hasta meras copias latinoamericanas conocerá. En Francia, entonces, se inventó como verdadero código de juego para la sociedad civil, inclusive, aunque hubiera vacilaciones, la del sector agrario. Pues bien, dirá Clavero “dicha invención, tal y como en Francia se materializó y tal como enseguida comenzaría a multiplicarse, se configuraba, en teoría, como un reglamento suficiente del juego civil de la vida social,

⁹³² El proyecto de Code Rural elaborado y debatido entre 1801 y 1814 está reproducido en internet: <http://gallica.bnf.fr/anthologie/notices/01095.htm> (Consultado el 12/11/2015). Véase el pertinente trabajo de Françoise FORTUNET, “Le Code rural ou l’impossible codification”, en *Annales Historiques de la Révolution Française*, 247, 1982, 95-112; y Serge ABERDAM, *Aux origines du Code Rural, 1789-1900. Un siècle de débat*, París 1984.

pero resultaba de hecho parcial, deliberadamente además parcial, y ello en el doble sentido de la parcialidad, por incompleto y por tendencioso”⁹³³.

Si hablamos de códigos sectoriales, como un código agrario, código para la tierra y para quienes vivieran directamente o se sustentaran mediatamente de ella, una inmensa mayoría, por entonces. Con todo su carácter básico, con toda su importancia social, esta otra posible pieza, la de materia agraria, quedaría excluida del modelo de la codificación. El Código Civil general se entendería que bastaría. Pero no se piense que se tratara de una incapacidad o de un descuido en el planteamiento de los códigos. La necesidad de un derecho agrario con código propio, con un código particular como el mercantil al menos, fue algo realmente controvertido desde aquellos inicios y durante el tiempo por venir. Hubo entonces, en la Francia revolucionaria, proyectos, incluso formales, de *Code Rural*. Su descarte, entonces definitivo, entre las piezas que redondearan la codificación clásica junto al *Code Civil* fue una determinación al fin consciente y deliberada.

En fin, por lo que manifestamos más arriba, en la historia de la codificación sobre tierras no se nos permite obviar a los llamados Códigos Rurales. La codificación rural (la construcción de los Códigos rurales de las provincias como también en los extensos Territorios Nacionales que devendrán en futuras y nuevas provincias argentinas) desempeñó un factor importante de regulación de las relaciones sociales de producción. Para lograr este objetivo debió constituir un sostenido articulado en donde apoyar una doctrina de la circulación de los sujetos poseedores - portadores de bienes y titulares de derechos a tierras y derechos a aguas. Por caso, la provincia de Catamarca establecerá en 1878 que el Código Rural es el conjunto de disposiciones referentes “a personas rurales y a la propiedad rural”⁹³⁴, disponiendo qué es una “persona rural” y definiendo laxamente a la propiedad rural como “la consistencia en bienes raíces, muebles, semovientes existentes o radicados en estancias, chacras, quintas o poblados de

⁹³³ B. CLAVERO, “Retablo constitucional de derercho indígena...”, 47.

⁹³⁴ Art. 1., Provincia de Catamarca, Código Rural del año 1878, San Fernando, ed. Oficial (Talleres Gráficos D’Amico Hermanos), 1931, 69.

campo”⁹³⁵. Además de uniformar los bienes raíces y los muebles con disposiciones comunes, incita a una moderna definición de las áreas urbanas de las rurales. Los establecimientos rurales se definirán por su ubicación “fuera de los ejidos de las ciudades y los pueblos”⁹³⁶ En igual sentido, el código rural de la Provincia de Tucumán definía que el “derecho de agua o de riego” no constituye “una propiedad absoluta de la misma (...) en consecuencia: a) el Derecho de agua es inseparable de su propiedad y no puede ser embargado sino con el terreno para que fue concedido”⁹³⁷.

El Código Rural riojano (1934) incorporará, además de las recensiones de los códigos agrarios circunvecinos, la noción de “Terrenos de Labranza”⁹³⁸ los que nos da una idea de definición del bien de raíz por su uso, su utilidad. “Todos los terrenos de labranza gozarán de la protección que este código acuerda (1934)” y considerará como terrenos de labranza a 1) los ejidos (sic) de los municipios y de los pueblos, 2) los terrenos cultivados fuera de estos centros, cualquiera que fuese su importancia y extensión; 3) las colonias; 4) los terrenos destinados a huertas de árboles frutales, forestales, de adorno y alfalfares de corte”⁹³⁹. En esta miscelánea del *droit écrit*, desaparece la noción quichiuzante de “chacras”, se preserva la tradición comunera de “alfalfares de corte” junto a la moderna distinción de “colonias”, típica figura de la modernidad enfrente a la rusticidad rural.

En este sentido regulacionista y aunque tardíamente —el Código Rural de los Territorios Nacionales es de 1894, el de la Provincia de Catamarca de 1878, el de Tucumán de 1897 y el de La Rioja de 1934— estos códigos revisten, al menos, una experiencia jurídica de codificación, motivados —al igual que los Bandos de Buen

⁹³⁵ Ibidem, 3.

⁹³⁶ Art, 3., Provincia de Tucumán, *Ley de Riego y Código Rural*, San Miguel, Publicación Oficial del Ministerio de Gobierno, 1897, 71, [183].

⁹³⁷ Ibidem, art. 15.

⁹³⁸ Ley 628 de 1934, del *Código Rural de La Rioja*, Título Tercero, Capítulo Primero, Art. 161, 26 y 27 de la edición de la Biblioteca Legislativa Gral San Martín, La Rioja, 1934.

⁹³⁹ Ibidem, Art. 162.

Gobierno y Autos del Cabildo de tradición indiana— a resolver conflictos de orden concreto y, siguiendo el paradigma grossiano, constituyen un modo insustituible de ‘leer’ y organizar la sociedad rural⁹⁴⁰.

§ 31. MONTONEROS Y BOLCHEVIQUES AL ASALTO DEL ORDEN MODERNO

La Rioja fue una jurisdicción de frontera, en los siglos XVI y XVIII, de la Gobernación del Tucumán qué, a su vez, continuó siendo periférica del virreinato del Perú primero, y de Buenos Aires después, pero la antedicha aseveración de marginalidad fáctica no atenúa ni menoscaba la extraordinaria singularidad y complejidad del régimen de tierras radicada en su *iuris dictio*. En un pasaje a la modernidad (guerras civiles argentinas de mediados de siglo XIX) todos sus archivos capitulares y notariales fueron perdidos. ¿Pudo ello —“Las Montoneras” o líderes comuneros- haber influido en la peculiaridad demostrada de su régimen de tierras? Nuevas investigaciones lo debieran profundizar, pero bien se podría enunciar hipotéticamente que aquella situación de inestabilidad pudo haber contribuido a generar, en las clases poseedoras locales, una mentalidad de guardarse para sí mismas la documentación probatoria y correr traslado solo en caso extremos⁹⁴¹.

⁹⁴⁰ No nos atrevemos a más. La evaluación de la efectividad y la aplicabilidad de este instrumento, y del protagonismo de los jueces de paz en los contextos rurales que este código brindaba, etc. , en las provincias mencionadas, es aún tema no estudiado, con excepción del ya mencionado Proyecto de Investigación “Nuevos campos de investigación en la historia del derecho indiano: el derecho indiano provincial y local y la pervivencia de la cultura jurídica indiana después de la emancipación iberoamericana”, que dirige el Víctor Tau Anzoátegui y de unos trabajos tales como los de María A. CORVA, “Descentralizar el poder: la justicia de paz en la Constitución Provincial de 1873. La visión del foro de Buenos Aires”, Actas de las XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino, setiembre de 2004, Buenos Aires.

⁹⁴¹ Es paradigmático es el caso del caudillo Chacho Peñaloza a quien no solo las fuerzas federales decapitaron y exhibieron en pica en la plaza pública del pueblo de indios de Olta sino que quemaron el baúl de cuero que contenía los títulos de propiedad y otros documentos escritos. Ángel Vicente Peñaloza, apodado El Chacho, (nacido en Malanzán, Virreinato del Río de la Plata, 2

En términos de normatividad indiana, como estructura general de la ordenación jurídica tucumana, la merced, en tanto concepción racional-abstracta de relación entre el sujeto y la cosa, ocupó un lugar central. La merced peninsular como entidad *regia de gratia* entrega de cargos, oficios, bienes y encomiendas, fue, paulatinamente y por los dos siglos de la experiencia jurídica aquí analizada, dando paso a la construcción de una categoría jurídica propia caracterizada por su simplicidad y la utilización funcional retributiva que, además, fortalecía la gobernabilidad local del sistema colonial al estrechar el vínculo de las tres clases sociales del sistema colonial de las que, reiterando, nos habla Tao Anzoátegui: funcionarios, eclesiásticos y beneméritos, con los intereses metropolitanos de la Corona. De manera práctica, las mercedes y la relación con las causas por la que discurría estando, p. e. ausente de gravámenes impositivos, permitió dos cosas: el mantenimiento de una correspondencia entre el ordenamiento jurídico colonial y la cambiante realidad social del XVIII y XIX, por un lado, y, por otro, la deposición efectiva de la *detentatio* india, criolla, colectiva e individual, de las tierras *andinas* de sus ancestros. ¿Y el dominio indio? Hecho el relevamiento empírico, se destaca “su no lugar” como sujeto potestativo. Recluidos primero en las reducciones y luego, en los pueblos de indios, tuvieron un recorrido clásico del periodo hasta topar con el discurso patrocinador de su fraccionamiento como vimos en los párrafos anteriores.

Analizadas las casi cien mercedes efectivamente documentadas, ninguna se basa en contradigos o en la venta originaria de indios a hispanos o criollos y/o través de curatelas o compras de derechos enajenados a indios que linden con mercedes otorgadas por el gobernador. En otras palabras, no hemos registrado peticiones de naturales indios al juez o protector de naturales para que nombre curador para concordar cartas de compra-venta de tierras (comunales o propias) a favor de terceros, —como instrumentos

de octubre de 1798 – asesinado en Olta, La Rioja, 12 de noviembre de 1863) fue un caudillo y militar federal argentino, uno de los últimos líderes llamados montoneros alzados en armas contra el centralismo de Buenos Aires. Véase la hipótesis de como, según la fuente documental de los actores de los eventos, la imposición del absolutismo jurídico rioplatense estuvo relacionada con la destrucción de los archivos registrales de las propiedades, en el párrafo 31, nota al pie 959 in fine, de la página 503 del presente trabajo.

probatorios de la existencia de *animus*— como sí se encuentran documentadas en otras regiones tales como el Alto Perú y el Reino de Chile⁹⁴².

Fue la merced de tierras un elemento estructural y material de constitución política de la sociedad del Antiguo Régimen, institucionalizando la relación entre la Corona y los poderes periféricos del Reino. En palabras simples, los intereses materiales y simbólicos de los titulares de mercedes (extracción de excedente económico) eran los intereses de la Corona (fidelidad, doctrina, sostén de las cajas del fisco). Por cuanto uno garantizaba la perdurabilidad del otro. Sin estudios empíricos complementarios que incluyan los aportes monetarios a las cajas reales de los feudatarios a las campañas militares tanto contra “calchaquies” como, en el centeno posterior, contra los “chaqueños”, es difícil avanzar en este sentido, que hasta ahora ha sido solo tratado con el recurso de las fuentes literarias. No obstante, lo visto hasta aquí, la mera transcripción de los títulos resaltaría el “servicio de guerra”. Con todo, predomina una concepción retributiva y utilitarista de la validación de la ocupación a un nuevo sujeto ocupante por sobre de sus antiguos originarios: Abaucán fue propiedad de Juan Gregorio Bazán de Pedraza por merced, no obstante haya sido la tierra de sus antiguos indios abaucanes encomendados (1678), Araupatis-yuctubas era de Gil Bazán por merced de sus desterrados indios araupais y yuctubas (1687), las demasías de Sañogasta (1940), Aschpampa (1662), Anchubil (1672) y Amaná (1670) eran de Pedro Nicolás Brizuela y Doria por sus servicios contra los capayanes, famatinas y amingas y debía una inestable convivencia con indios amigos como los saños, pocles y guandacoles. Tudcum de Gregorio Luna y Cárdenas (1658) por sus varias entradas a Calchaquí y represión de los

⁹⁴² Para el Reino de Chile, véase la Presentación de la petición de los indios Rapel de que el juez les nombre curador para concordar la venta de sus tierras a su encomendero en 1597, en F SILVA VARGAS, *Tierras...*, 215, y el acuerdo del cabildo mendocino de 1569 que decidió impulsar la Junta de Caciques (y principales) para determinar cuáles eran las tierras de los indios y cuáles podían considerarse vacantes para realizar nuevos repartos, en M. HERRERA DE FLORES, *Tierra ...*, 28 y ss; para la jurisdicción de San Juan de la Frontera véase la escritura de venta de la heredera del cacique, cacica Teresa Icaña, realizó en 1725 del valle de Pismanta, en MICIELLI Catalina, *Realidad socioeconómica de los indígenas de San Juan en el Siglo XVII*, ed Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, 1996, p 58. Para el Perú, la asistencia en curaduría a los curacas de Larapa del curador Vásquez Pinelo para celebrar la escritura de transferencia con el fin de perfeccionar el requisito relativo a la capacidad jurídica de los agentes andinos, J. GUEVARA GIL, *Propiedad ...*, 103.

Atilés, Vinchina era de Gregorio de Brizuela por sus correrías contra los Guandacoles (1678); hasta la llegada de una serie de nuevas concesiones por sus entradas al Chaco como la de Olta a Pedro de Ávila (1700), Ulapes y Puluchán a Gómez Camargo (1700 y 1693), La Hediondita a Sánchez de Soria (1755) y *via dicendo*, pero que este paradigma retribucionista perdura hasta la Confederación (v.g. merced de Tello) como un recurso regio primero, y estadual provinciano después.

Es de suponer teóricamente que estos intereses comunales se cobijaron en el caudillismo y montonerismo imperante en el segundo tercio del siglo XIX. Un ilustrado riojano, hacia 1920, todavía refleja esa mentalidad circulante. Leemos a Victor Mercante,

“Esos ataques de los montoneros a La Rioja; ese sobresalto continuo de la población culta (...) porque los procedimientos son idénticos, que [los] que Lokerman refiere de los bolcheviques al entrar en Rostov. Las épocas se repiten, en La Rioja o Ekaterinostav, porque el hombre bestializado es el mismo en los Llanos o en el Don, un siglo antes o un siglo después...”⁹⁴³

La llegada de la revolución y la guerra civil significaron la erosión de las certezas del derecho indiano a la exclusividad. Cuando Quiroga vence a Dávila, está también venciendo a un integrante de la familia amayorazgada de los Brizuela y Doria quienes habían invertido sus vidas y la de sus ancestros en el acopio de mercedes de tierra de inmensurables proporciones y de los espacios institucionales de poder local. Pero había

⁹⁴³ Victor Mercante, prólogo a Domingo A. DE LA COLINA, S. M. *El Emperador de Los Llanos, La Rioja 1861-1868, Contribución a su historia*, La Plata, ed. Talleres Horacio Benavides, 1920,4 [297]. Indudablemente, Mercante hace referencia a la obra muy difundida en el Rio de la Plata, de de A. LOKERMAN, *Les bolcheviks á l'oeuvre: soixante quatorze jours de dictature bolcheviste à Rostov-sur-le-Don*, traducido y editado por Juan Pueyo como *En plena dictadura bolchevista: setenta y cuatro días bajo el poder de los rojos*, 1920, Madrid, p. 183.

surgido ese denostado “ensayo bolchevique” y cuanto aparente imprevisto fenómeno: los caudillos y su súbita y costosa popularidad.

“¿Acaso cree Vd. que, a fuerza de llamarse general de la Nación, la provincia de La Rioja es de Vd. y suyas las propiedades de los vecinos?”

díjole Sarmiento al caudillo Peñaloza⁹⁴⁴.

Pero como señalamos en otro lugar⁹⁴⁵, se constata que en la época de los caudillos riojanos (1800-1865) se verificó una práctica señorial por cuanto en los archivos personales de por ejemplo, Juan Facundo Quiroga⁹⁴⁶, se visualizan los pedidos de “justicia” al líder por parte de comuneros (reclamos de pagos, conflictos de tierras y reclamos de dotes, etc.) como así también se cobijan en ellos las prácticas comuneras de usufructo común de la tierra en las que el hombre de campaña (“rústico”, “de campo”, “rural”) convive. Dicho en otras palabras, si en la Rioja del siglo XVIII el comunismo pervivió amparado en el dominio útil del derecho indiano, en el siglo XIX continuó en el amparo de los caudillos al uso comunitario de las tierras de pastura, de las aguas, madera y de caza, sin interrupciones.

Pero hay nuevos riesgos de actualizar las lecturas de la historia de la propiedad en este marco indiano-patrio. El primer riesgo es nuestro pesante bagaje monocultural: en el mundo de derecho moderno, aunque sea con todas las pluralizaciones, lleva incluido el reclamo a un universo propietario y propiedad que es siempre, según Grossi, un mínimo de pertenencia, de poderes exclusivos y de dispositivos conferidos a un

⁹⁴⁴ D. DE LA COLINA, S. M. *El Emperador*, 77.

⁹⁴⁵ A. MERCADO REYNOSO- O GARECCA "La liga de los gobernadores y la fuerza militar en la política argentina", en M^o Cristina Vera de Flachs (comp) en *Problemas del Estado y la Nación Hispanoamericana*, Departamento de Ciencias Sociales, Apuntes de Cátedra ‘Procesos históricos y económicos argentinos latinoamericanos’, Universidad Nacional de la Rioja. Año 1996. Editorial Universitaria, Córdoba, 2006, 5-38.

⁹⁴⁶ INSTITUTO RAVIGNANI, Fondos y colecciones digitales - Investigaciones y ediciones documentales del Instituto - *Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga, tomo I (1815-1821) Documentos para la Historia Argentina*, nro 24.. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Departamento Editorial, 1957, 386.

determinando sujeto del orden jurídico. En palabras simples, la merced de tierras era la mejor apropiación privada porque estaba legitimada por la autoridad pública. Y si no hay ninguna duda que el secreto de la historia del derecho de la Europa occidental sea las vivencias de propietarios y la lucha por la propiedad, —afirmación grossiana a la cual agregamos el individualismo potestativo y el redescubrimiento de la unidad romana de la propiedad— pero también no hay ninguna duda de que éste es un universo *tropo stretto*, muy limitado, aún para las situaciones reales. Por lógica, afuera de la Europa occidental, aquella oriental, el África o Latinoamérica —desde las estepas rusas a las llanistas tucumanas en la evocación de Mercante de los acontecimientos de los bolcheviques en Rusia emparentados con los montoneros riojanos— nos remandan a tradiciones previas, de localismos preconstitucionales, y presentes al pensar las relaciones de los sujetos con los o “sus” fundos terrícolas. Paradójicamente, en un mismo Estado nación y modo de producción capitalista como el argentino, es posible encontrar esas dos Europas a las que implícitamente nos remiten Grossi y Mercante: la pampa húmeda y su colonización de inmigrantes europeos relacionados vía enfiteusis y propietariamente con un fundo territorial y el norte argentino, en cambio, más ligado al uso comunitario de tierras del altiplano andino y su andina comunidad indígena y de familias tradicionales.

Del binomio continuidad-discontinuidad, la discontinuidad ha sido efectivamente descripta desde la dogmática jurídica apelando a la ley positiva y la cultura del código. No así la continuidad. Quizás, la aproximación a la explicación de los elementos de continuidad entre el Derecho del Antiguo Régimen y el *Code Napoleon*, la encontremos en la alegoría griega de George Wilhein Frederick Hegel⁹⁴⁷: Hércules siempre lucha y vence a Tadeo, en todo tiempo y de manera continua. Lo vence porque es Dios y es más fuerte, pero Tadeo tiene un recurso. Apenas él toca la tierra vencido en la derrota, ésta, la tierra, le devuelve la fuerza para reincorporarse y luchar nuevamente, y así de manera continua en el tiempo. Hegel dice que la tierra es la “tradición”, que enviste a Tadeo y le da fuerza para la lucha “continua” con Hércules.

⁹⁴⁷ Georg W. F. HEGEL, *Propedeutica filosofica*, Florencia, ed. Sansoni, 1951,43 [289].

Mas allá de las muletas que nos brinda Hegel apoyándose en la tradición de la mitología griega, es indudable que, llegados a este punto, sufrimos de una falta de una historia de la cultura jurídica del derecho indiano —deficiencia que no ha podido subsanarse mediante los muy ilustrativos y, en ocasiones, excelentes estudios monográficos que, como vimos, disponemos al efecto. Queda aún, en primer término, por dilucidar la propia influencia y alcance del título de merced de tierras en la *praxis* autóctona tucumana, charqueña o rioplatense. Visto del lado constitucional, éste *ius* podría vanagloriarse de tener invariablemente, aunque no escrita, “constitución” durante un largo periodo de tiempo, aún si las lealtades no se conviertan en constitución escrita—aunque Dromi insista en denominar a la disposiciones de la creación de la Intendencia como Constitución Indiana—, es doctrinariamente pertinente que, ante la ausencia de un estudio del sistema de propiedad en el derecho indiano, la *ius* historiografía pueda dar paso a la filosofía del derecho como paradigma interpretativo y, concretamente, a la ley natural de Hegel.

En efecto, en término hegelianos, es naturalmente obvio que la “sociedad civil” (y sus capas, instituciones e integraciones, las profesiones, las corporaciones, partidos, “lugares de trabajo”, etc., que en el mundo tucumano representan los encomenderos, los funcionarios y las representaciones indias y comuneras) desarrolla su propia red de normas, que está débilmente, si es que lo está en absoluto, conectada con las reglas de otros institutos más o con conjuntos nuevos universales (generales) de normas e ideales indianos... Damos por consiguiente por descontado que los miembros de tales instituciones, corporaciones, profesionales, etc., contemplan tales normas como normas éticas, desaprobando su transgresión y aprobando su observancia. Es igualmente un hecho histórico que, si una persona deja una corporación, profesión o lugar de trabajo, puede hacer caso omiso de sus reglas porque estas últimas solo son válidas en sus escenarios respectivos concretos y no tienen relevancia en otros. Esta es, por lo tanto, una red de *sittlichkeit* (micro relaciones del mundo moral o micro relaciones éticas constitutivas de la civilidad), particularistas en el mundo universalmente contemporáneo, y distinguir entre lo permitido y lo prohibido, en este medio particular, es una cuestión de supervivencia para las personas que entran a unos mundos de micro-*sittlichkeit* tan separados.

La inevitable variedad de encuadres y tratamientos antropológicos, históricos y jurídicos en lo que las tierras “historizadas” se convierten, como sucede a veces en iniciativas solo disciplinares y no transdisciplinares, en un mero centón de interés dudoso o nulo desde el punto de vista científico⁹⁴⁸

Mapa 9: Mercedes de tierra riojanas por cabeceras o parajes donde se realizó la puesta en posesión

⁹⁴⁸ Pensamos en los trabajos de técnicos de organismos públicos tales como el Consejo Federal de Inversiones que plantean iniciativas como por, ejemplo, de hidrología de un valle o zona árida o semiárida, o aquellos informes que propusieron “leyes” que por simple promulgación se solucionaría el problema, sea de carácter natural o social. Véase el listado en la página oficial del Consejo Federal de Inversiones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos argentino, en línea en <http://biblioteca.cfi.org.ar/biblioteca/>, Biblioteca Manuel Belgrano.



Aquí las distinciones entre los trabajos basados en expedientes judiciales (estudios de caso) y, la regularidad de lo no excepcional se convierte en regla y es allí donde la filosofía hegeliana le podría hacer una contribución esencial a la historia de derecho indiano. En suma, describir el *habitus*, dicho en otras palabras, describir la *tendance a`agir d'une manière régulière*, como estructura de las regularidades colectivas por la cuales se mantienen ligados los actores. Dentro de esas regularidades existe un componente “durable” del *habitus* y es la tierra misma como dimensión espacial donde se encuentra ubicado o situado.

En síntesis, ¿qué quisimos por consiguiente decir? ¿que la merced de tierras es un producto del derecho del antiguo régimen? Ciertamente. Aunque no proviene de l'ancienne *Espagne* sino de una metamorfosis de ésta con la tradición comunitaria india tan apreciablemente leída por la tradición toledana (en sus Visitas, desagravios, amparos, ordenanzas, juicios de residencia). Pero también quisimos describir la vitalidad de pervivencia de situaciones reales de usufructo, de posesión, de las variadas especies que después se codificaran como derechosos, condóminos, hoy dichas servidumbres prediales, de accionarios de derechos personales que se creen dueños del espacio territorial por las razones que fueren. Estas razones nos remiten al acervo subjetivo que asentó las bases culturales para el sostén de la continuidad e impidió el ingreso de prácticas liberales del mercado de tierras como la exclusividad, el arrendamiento e incluso la enfiteusis. Pero este presupuesto subjetivo del heterogéneo grupo de comuneros llanistas y vallistas riojanos se fundó en el poder del Rey y en una construcción racional (y si se quiere *iur* natural no individual ni posesiva ni exclusiva de la comunidad familiar hereditaria) que perduraron hasta mediados del siglo XX y que caracterizan a este régimen como precario, no conflictivo en la medida que garantizaba el usufructo a los de sus comunes/ros pretendientes (dichos, según época, “comunidades indivisas” “campos comuneros”). Los juicios sobre el dominio se originaron en el uso de los pastos y la extracción de postes y leña, y la doctrina amparó a los foráneos en la medida en que estos adquirieran derechos a comuneros no residentes rurales ahora urbanizados, que, los habilitaban para realizar dichas extracciones, emulando al sistema de accesión minero: uno poseía el “derecho de acceso” mientras que el derecho de propiedad, entendida como exclusiva, devenía en una simple abstracción o una irrealidad. Y, paradójicamente, fortalecía el dominio útil de innumerables pretendientes. El dominio directo volvería con la colonización de último tercio de siglo XX, donde el Estado, a través del IMTI, expropiará y posesionará a sujetos “colonos”, que la actividad económica ya había sugerido e impulsado como parapropietarios.

En este contexto, la propia política rural de dotación de infraestructura por el Estado se concibe como servicio a la propiedad privada o propiedad “descomunitarizada”. Es nuevamente el Estado burgués el que debe dotar al predio de mercancía al darle mensura precisa, nomenclatura catastral, “unidad productiva”, fiscalidad impositiva y exclusividad.

A fines del XIX y en todo el siglo XX el estado provincial aparece como un sujeto público dominante de la construcción de la obra propietaria (obras públicas de carreteras, tendido eléctrico, estaciones de bombeo de agua subterráneas, etc.) por cuanto este consideraba que para subsanar el problema de la indivisibilidad (y no gravabilidad impositiva) debía ser abolida la tenencia en común. Pese a que el objetivo explícito era el de transferir a tierra al dominio de los particulares, en realidad lo que se efectivizaba era convertir en fiscal o pública la tierra de los particulares, ya que —por ejemplo, a diferencia de la conquista patagónica— no estaba colonizando tierras deshabitadas, sino despojando a los comuneros rurales de su estatus legal de propietarios prácticos. La paradoja historiográfica estuvo dada en que, para recuperar ese estatus, éstos debían comprar sus propias tierras con los mecanismos previstos. Solo en este caso el estado provincial hacía efectiva su registración, gravación impositiva y sacralizaba el dominio directo a favor del ciudadano pagador de impuestos.

§ 32 CONSIDERACIONES FINALES

Recapitulando una verdad de perogrullo de la *praxis imperia*, a partir del siglo XV y XVI, los imperios europeos y los nuevos estados-nación que surgieron impulsados por su colonización de ultramar (además de América Latina piénsese, por ejemplo, en Canadá en América del Norte, Australia en Oceanía y Sudáfrica en África) portaron su noción de propiedad y su derecho que, si se quiere, migró con ellos y se impuso imperialmente sobre las poblaciones autóctonas preexistentes, definiendo nuevamente qué podía ser constituido como propiedad, quiénes eran los propietarios y, hubo experiencia histórica elocuente, una radical reapropiación de la tierra a favor de los “colonos” de la etnia dominante invasora de ese estado-nación-imperio que colonizaba *ultre-mer*⁹⁴⁹. En las Indias americanas, para ejecutar ese legal *transfert*, fue el derecho

⁹⁴⁹ Literalmente, “*As European empires and the new nation-states that emerged in their wake colonised overseas territories, the property templates that migrated with them were sometimes imposed over the pre-existing autochthonous ones, defining anew what could be constituted as property, owners and rights, and shaping radical re-appropriation of*

indiano y la merced de tierra el instrumento de *transatio imperii*. Huelga decirlo, este derecho castellano, con origen en las Partidas, lejos estuvo de sostenerse sólo en una concepción romanista de propiedad territorial, y, según constatamos, adquirirá fuerza de *propietas* legitimante y exclusiva en los procesos codificadores post independentistas. No obstante, la historia mundial de la *legal tradition* caracterizada *by diversity mobility and distances* cobija desde *una plasticidade de organização* tal como *el sistema pluralista da jurisdição en Macau* (Hespanha) a las Ordenanzas del Virrey del Perú (Lohman Villena). Al explicarlo, Grossi insta a pensar en los *homines novi hispani* y su praxis que privilegia la *convenientia rerum aequitas* de raíz medieval, de la cual he partido, implementándola como paradigma investigativo para el objeto de estudio, aplicado a una jurisdicción en un tiempo determinado. Aunque pretendamos explicaciones universalmente aplicables, deviene lo que Clavero definió como los localismos preconstitucionales. Del mundo integrado por localismos y *prassi nazionali*⁹⁵⁰, me he centrado en el *Ordo Andino* y dentro de éste, en el Tucumán colonial y en él, he particularizado la jurisdicción de La Rioja, hoy República Argentina.

Identificado el objeto de estudio, y por imperativo de la academia, elaboré una conceptualización y sistematización. He documentado, registrado e identificado un centenar de concesiones de merced de tierras rurales en la jurisdicción riojana del Tucumán, otorgadas en tres siglos y validé empíricamente con casos específicos, la importancia de este título en el establecimiento y continuidad del orden jurídico de tierras llamadas “mercedes”. He pretendido describir, asimismo, un espectro de posibilidades e intereses (objetivos y subjetivos) que existían en la pugna por la construcción de la territorialidad hispana, desentrañando enfoques muy variados a la hora de enfrentarse con el derecho del pasado, sin desdeñar, por ello, el sacar conclusiones válidas para nuestra época actual, y clarificar algunas lagunas *ius*

land in favour of colonists” en Rosa CONGOST, Jorge GELMAN y Rui SANTOS “Property rights in land: institutional innovations, social appropriations and path dependence”, XVIth World Economic History Congress, Julio de 2012, Stellenbosch University, South Africa.

⁹⁵⁰ Sobre la noción de Grossi de *homini novi* e *prassi nazionali* Cfr. Adrián MERCADO REYNOSO, “Unicidad y diversidad en el sujeto patrimonial indiano: el pensamiento novohispano (s. XVI y XVII)” 2003.

historiográficas sobre la consolidación del *ordo* hispano en el Tucumán colonial. Tomando en consideración los debates sobre la introducción de la modernidad europea en América y la configuración de un derecho de propiedad romanista en la Europa — por ejemplo, desde los países germánicos a los ejidos vascos— evidenciamos que nuestro objeto tiene las mismas dificultades de constituirse en el Tucumán porque siglos de mentalidad posesoria estarán destinados a confrontarse vivamente con el estado moderno que presionaba por hegemonizar el derecho privado y hacer de él, por cuanto atañe a su fuente de producción, un derecho público dirigido a los privados. En el mundo andino, regido por la monarquía católica policéntrica, asoma un desmembramiento jurídico de la propiedad civil y la desintegración del dominio en útil y directo. La merced de tierras no es un *dominium* directo o *proprietas* entendida como propiedad privada moderna actual, lo dirá un Bando de Buen Gobierno emitido por un gobernador tucumano en el tardío 1808. Acusadamente, al igual que la merced de encomienda del siglo XVII, su configuración está emparentada con un conjunto de potestades concedidas públicamente a una persona física para usufructo y posesión hereditaria. Esta situación denotaba una casuística de uso y utilidad destinada a beneficiar al portador benemérito del derecho a tierras en la cual el orden jurídico, sin proponérselo y al menos en el sud tucumano, se agravaba por el sistema de herencias castellano al continuar dividiendo y transmitiendo lo que se torna indivisible, así como multiplicando un universo de usufructuarios que irá ampliándose con el paso del tiempo y alimentando una cultura mal llamada “condominial” más propia del “comunitarismo”⁹⁵¹ que del *rappporto* individual del derecho positivo abstracto y absoluto. A mediados del siglo XX, la simple y aguda observación de un sociólogo como Margulis, afirma: “Las enormes extensiones de tierra pertenecen (...) a veces [a] todo un pueblo”, no es más que una descripción de los sujetos “derechosos” comuneros. El dispositivo “derechos y acciones” fue la solución que encuentran los poseedores comunitarios para soterrar la represión institucional a la que en la modernidad se encuentra sometido el derecho común de los poseedores precarios.

⁹⁵¹ Para la precisión del término, Cfr. B. CLAVERO, *Antidora*, 48; y nota 35 de la página 694, RQF N°41, “Gracia y derecho, entre localización, recepción y globalización (lectura coral de las vísperas constitucionales de António Hespanha)”.

Al historizar las concesiones en un espacio determinado, la intención ha sido la de, por un lado, dar cuenta de una serie de procesos de duración secular y, por el otro, abonar la hipótesis según la cual la merced de tierra, en cuanto “instituto”, fue la principal “forma” de privatización y, al mismo tiempo, el sustancial “modo” de adquisición de un bien terrícola vía *ius* —es decir, mediante instrumentos públicos de carácter público plausibles de juridicidad y normatividad— específicamente para la jurisdicción de La Rioja del Tucumán y para este periodo histórico (1592-1856). Adicionalmente, he intentado una relectura de las políticas de “desvinculación” estatal provincial moderna a partir de las arraigadas prácticas comuneras devenidas en *possessores* y *possessiones*, antes amparadas en del derecho indiano y en el derecho patrio y ahora hostilizadas por el derecho argentino. He profundizado el análisis de la relación entre la merced de tierras con la encomienda —como institutos típicos del *ancient regime*— y la he relacionado con la actual situación moderna de dominio indiviso de innumerables predios inmuebles riojanos, catamarqueños y tucumanos del siglo XX. Dicho en palabras de Hespanha “os localismos [que describimos no es mas que una] manifestação de uma nova adaptação contextual ainda reforça a validade do modelo, mostrando como ele é capaz de —ao contrario dos modelos políticos universalisras que virão depois- de incorporar os localismos e reverberar as diferenças”.

En una sociedad de pos conquista —hacía más de un siglo que los ibéricos estaban en América— como la instalada en la jurisdicción riojana de fines del s. XVI, se fundó la ciudad de *Todos Los Sanctos de la Nueva Rioxa*, en la boca de la quebrada Yacampis, asiento de homónimos indios, donde éstos poseían unos maizales y *chacras* acequiadas, con la intención, por parte de los invasores, de crear un nuevo orden social aún a costa de viejas instituciones feudales. Hipotetizamos, en derivación, que las guerras calchaquies (1632 c.-1666 c.) contribuyeron al haber influido en el ánimo del poseedor del disputante vencedor y en el sentido de pertenencia de la tierra “rebelde” al rey, contribuyendo a fortalecer el sistema colonial.

El establecimiento de una jurisdicción y de la cuadrícula urbana o *echura en quadro*, en cuanto manifestación de la geografía voluntaria de un racional plan colonizador, fue acompañado por una búsqueda recursos, entre los cuales se destaca, la fuerza de trabajo servicial india para ser encomendado. Éstos y su tributo fueron, al parecer, los

principales motivos de la ocupación tardía de este espacio tucumano, enmarcada coyunturalmente en una disputa inter jurisdiccional entre la Gobernación del Tucumán y la Gobernación y Capitanía General de Chile, apenas hubo la certeza de la inexistencia de materiales preciosos del cerro del Famatina. Hacia fines del siglo XVI y el primer cuarto del XVII, no hay avidez por parte de este grupo dominante por acopiar tierras ni aprovechar los mecanismos jurídicos para llevar adelante las apropiaciones, primando las mercedes de encomienda por sobre la tierra misma (cuando ya está claro, en la mentalidad circulante y en el *ius propium* indiano, que son dos cosas diferentes).

Pero, según se estableció, ya en la segunda mitad del XVII comienza a relacionarse la merced de tierras con una empresa agrícola llamada “hacienda” colonial y ésta, con el mercado comercial potosino, aunque es evidente, como también demostramos, que se arriba a esta última —la hacienda colonial riojana— a través de la encomienda. Las haciendas de San Sebastián de Sañogasta, la de Huaco y la de Anillaco de Fiambalá, con unidad de mando empresarial en manos de encomenderos tales como Nicolás Brizuela y Doria, Gil Bazán de Pedraza y Gregorio Bazán de Pedraza, serán quienes obtengan, en los años 1647, 1687 y 1688, los predios territoriales más valiosos, vía merced de tierras de sus encomendados, no obstante normativa y doctrina indiana en contrario. En esta invención de lo cotidiano, vimos cómo el argumento más ilustrado de los “hacendados” peticionantes es el de preservar un orden de “prelación”, en tanto privilegio para los “vecinos”, en virtud su condición de “feudatarios”, y de la incapacidad manifiesta de los pueblos de indios “naturales” de amparar sus “pertenencias a causa de las guerras calchaquies”. Pero esta evidencia histórica parece ocurrir en el seno de las haciendas riojanas de fines del siglo XVIII y no más allá.

Esto me obligó a retrotraer el estudio de la praxis del derecho indiano hacia elementos más tangibles y contextuales, tales como: la política fiscal, la economía hacendal, el sostén financiero del tributo de la encomienda y la visita de Lujan de Vargas, siempre en relación a los sujetos potestativos propietarios, ya que desde los comienzos eran poseedores de la mayoría de los bienes materiales, culturales y simbólicos de ese siglo y ese espacio.

Por lo antedicho, para entender las mercedes de tierras he debido volver a reanalizar las concesiones de encomiendas y su realidad socio-extractiva. G. Doucet, en su

investigación sobre la encomienda tucumana de Quilpo,⁹⁵² nos ha demostrado que el encomendero desarrollaba su producción mercantil en dos tipos de tierras: una la obtenida por merced territorial y otra en tierras que eran de los indios encomendados, mientras las “beneficiaba” a ambas con el trabajo concertado o servil de los indios de su encomienda. Con nuevas referencias documentales, he ampliado esa tesis, en particular la de la hacienda de Anillaco. Gregorio Bazán de Pedraza III era ya la tercera generación de descendientes de colonizadores que pide y obtiene, en 1687, la merced de tierras de sus indios abaucanes, los que fueran encomendados desde 1629 a su padre, con confirmación fechada en Madrid en 1631 y puesto, el mismo Bazán de Pedraza III, en posesión en 1671 (y confirmado en 1673). Los indígenas abaucanes del valle de Fiambalá (actual provincia de Catamarca), a los que a su vez Bazán de Pedraza había “sitiado” en sus tierras de Pichana (Noroeste de Córdoba) y Anguinán (valle de Famatina de La Rioja) fueron organizados en unidades productivas en base al trabajo familiar textil. Claramente, la merced territorial de todo el valle donde están los abaucanes —que incluyó, además, las “sobras” de los pueblos indios de Aimogasta y Fiambalá—, sirvió de instrumento de ocupación legal y de sustento dominial, a la exacción excedentaria de la producción mercantil india al dotarlo, al benemérito, de atributos parapropietarios. Los aún pendientes estudios particularizados de otras haciendas riojanas del s. XVIII, tales como las de San Sebastián de Sañogasta, Nonogasta, Atilés, Cuchiaco, Chumbicha y Huaco muestran esa relación factual entre hacienda y encomienda, que nos enseñó Góngora⁹⁵³, y que incluye su adquisición privada *terrea* mediante la merced de tierra adjunta o colindante a los dominios de los encomendados. Pero, en ningún caso hay una relación lineal y simple. También, en otro ejemplo, que vimos y detallamos, sobre el hacendado y encomendero de fines del s.XVII Gil Bazán de Pedraza, no hay, *prima facie*, ni ocultamiento ni mala fe de apropiarse ilegalmente de la tierra de “sus” indios *yuntubas* encomendados en su

⁹⁵² DOUCET, Gastón Gabriel “Los réditos de Quilpo: Funcionamiento de una encomienda cordobesa a fines del siglo XVI (1595-1598)” en *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, núm 23, ed. Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Viena, 1986.

⁹⁵³ J. BORDE y M. GÓNGORA, *Evolución...* 29 y ss; y M. GÓNGORA, *Encomenderos y estancieros: estudio acerca de la constitución social aristocrática de Chile después de la conquista 1580-1660*, Santiago, ed. UCCh, 1970.

hacienda de Huaco: él argumenta que posee un sitio primario en el orden prelativo o privilegio de, ante el caso de que se concedieran las tierras en merced de “sus” indígenas encomendados, ser él y no otro el aspirante a titular de la merced de tierras de los indios yuntubas-araupatis porque, si bien esos indios están encomendados en su hacienda de Huaco, lo están por “voluntad [o carga] pública”, es decir, “sitiados por provisión real” por “convenir” así al Reino y no a él (su ánimo de poseedor en *commendatio* no representa relevancia alguna ante el interés público del reino de reubicar indios rebeldes). Implícitamente, reconoce que las tierras son inmemorialmente de los yuntubas pero si van a ser privatizadas por ser vacas, argumenta que posee el primer lugar en el orden de prelación y “merecimiento” de las mismas. Como se desarrolló más arriba, la filosofía práctica que había aportado la tradición indiana (¿y toledana?) no podía escindirse de la política —en este caso de la guerra—. Aún después de cuarto siglo de concluidas las Guerras Calchaquies, éstas seguían fundando una doctrina del despojo legítimo y “violencia saludable”⁹⁵⁴ en cuanto estaba fundado en guerra. Y el aparato normativo de “desnaturalización” (sacar a los indígenas hostiles de sus posesiones ecológicas con fines de desestructuración étnica) consistente en reglamentos de “repartimiento de piezas indias”, las regias provisiones gubernativas de utilidad pública que sostenían la reubicación del sujeto desnaturalizado en predios y dominios de españoles, la obligatoriedad del “sitiado” de recibir “señalamiento” de tierras para su dominio “útil”, etcétera, produjo, como vimos, un alejamiento indio de su “natural” tenencia térrea.

Pero volviendo a nuestro tema, las mercedes de tierra ¿tuvieron relación de causalidad con la ausencia de mercantilización capitalista de la tierra? y ¿con la ausencia de la concepción de *dominium est ius utendi et abutendi*, tal como efectivamente aconteció en la fértil pampa húmeda rioplatense? Las mercedes de tierras riojanas, ese “*way of holding land (...) appear to have been unique in what today*

⁹⁵⁴ Sobre el concepto de *violencia saludable* como mediación bruta para compeler un orden social, Cfr. Gadi ALGAZI, “Pruning Peasants. Private War and Maintaining the Lords’ Peace in Late Medieval Germany”, en Esther COHEN and Mayke DE JONG (Eds.), *Medieval Transformations: Texts, Power and Gifts in Context*, Leiden, Brill, 2000, 245-274.

Argentina”⁹⁵⁵, ¿generaron las situaciones reales actuales de la llamada ‘rusticidad’, ‘anacronismo’ y ‘precarización’ según las concepciones modernas del derecho?, o ¿la comunidad indivisa generada por la merced fue un ámbito en donde el absolutismo jurídico no penetró con la intensidad y efectividad de otras jurisdicciones argentinas?, ¿es atribuible a las mercedes de tierras el origen de su actual (moderna) indivisibilidad?, ¿hasta dónde esta carga negativa de la tipificación tal como “rústica”, “precaria”, etcétera, no es más que una manifestación de la represión institucional —por parte del derecho moderno y el absolutismo jurídico— al derecho tradicional/común llamado “patrio” de origen indiano y que los escribanos y notarios de fines del siglo XIX comenzaron a denominar “derechos y acciones”? La evidencia empírica nos muestra la periodicidad y, llamémosle oportunidad, de la concesión efectiva de mercedes de tierras —discutible en cuanto la destrucción de documentos, la dispersión de fuentes y azarosa preservación— no varía ni cuantitativa ni temporalmente del número de mercedes de tierras de otras jurisdicciones colindantes como las de Córdoba o de San Miguel de Tucumán, otorgadas en el marco del derecho indiano y del sistema colonial tardío, entonces, ¿cuál es la característica de especial peculiaridad de constitución de la territorialidad o “espacialización” del territorio en Todos Los Santos de la Nueva Rioja? Verificamos una naturaleza históricamente limitada de la organización del mercado de tierras, en términos de parcelación e individualización, de una notable ausencia de las características enfitéuticas o arrendatarias que siguieron al natural desarrollo del mercado de tierras pampeano-rioplatense-patagónico el cual, aunque afectado por diversas coyunturas, mutó en uniformes patrones jurídicos de *perfectae proprietatis*, tal como también aconteció en el espacio salteño-jujeño desde algunos nichos ecológicos que se extienden desde la Quebrada de los Humahuaca a los litorales ribereños guaraníes de Santa Fe de la Vera Cruz. No sucedió de igual manera en La Rioja ni en los valles cordilleranos de la Antofagasta catamarqueña. Y la evidencia es la ausencia

⁹⁵⁵ A DE LA FUENTE, *Children ...*, 66; en el capítulo “land tenure” dice “*The way of holding land (...) of La Rioja appear to have been unique in what today Argentina.*”(2000). La traducción del inglés por Emilia Ghelfi (2007) titula al capítulo como “*Tenencia de la tierra*” y traduce “*Las formas de propiedad de la tierra (...) de la Rioja parecen haber sido únicas en lo que es hoy Argentina.*”, en A. DE LA FUENTE, *Los Hijos ...*, 97.

de enfiteusis que si acortaron el trayecto a la plena propiedad en otras provincias argentinas.

En relación con la ley fundamental, ya a mediados del siglo XIX constatamos que, constitucionalmente, la carta magna argentina establece, en su Art. 17, que nadie puede ser privado de su propiedad “sino en virtud de sentencia fundada en ley” y no difiere de la constitución indiana enunciada en cada (casuística) concesión de mercedes de tierra “que nadie puede despojar [lo] sin ser oído y por fuero vencido”.

Esta última fórmula es parte de la estructura formal del título de los centenares de títulos de mercedes consultados, con lo cual nunca es, para la experiencia jurídica del derecho indiano, abstracta como aquel artículo — y su evaluación variará según como entendamos el proceso codificador y casuísticas acaecidas en secuencia de tradición indiana frente al absolutismo jurídico del código confederal de hegemonía rioplatense.

Por ello convino situarnos en un “antes” de la invención de la Confederación Argentina, e independientemente de la posición axiológica que se adopte sobre la codificación como momento de pasaje del régimen *ancien* a un nuevo orden social, he debido describir de qué forma, en la jurisdicción de Todos los Santos de la Nueva Rioja, las mercedes reales funcionaban como un tándem o par funcional. Por un lado, la arquitectura indiana legitimaba la posesión de la tierra de los actores privados y por el otro, reafirmaba la potestad del Estado regio de asignar estos bienes, reforzando así una lógica constitutiva del sistema colonial de ultramar respecto del de la Península y de la burocracia estatal local colonial y, de ésta última, con los sujetos potestativos. Por ello y para valorar el derecho procedimental he detallado las diligencias necesarias para la obtención de una merced de tierras, la gravitación del estatus y del servicio del peticionante, del rol del gravámen de la media *annata* y de la mención de las autoridades con facultades para otorgar este título. Además, se ha descripto cómo otros institutos, por ejemplo: el juicio de residencia y, en menor medida, el defensor de los naturales, regulaban disuasivamente estas concesiones en el indiscutible marco general del derecho indiano. En fin, he intentado desenmarañar, en casos puntuales, la relación factual entre la merced de tierras y la de encomienda.

La merced de tierra fue el título público que se utilizó en mayor medida en la jurisdicción de La Rioja. Fuera esas tierras de carácter urbano o peri-urbano como solares o chacras, rurales como estancias o haciendas, el instrumento siguió siendo, contrastablemente, un documento escrito firmado por el gobernador, a nombre del rey y a favor del peticionante.

Discutida la cuestión del estado y del modo de producción feudal, se ha considerado pues a la merced de tierras desde la perspectiva de una institución propia del derecho indiano e interpretado a las instituciones de derecho indiano como el nexo entre el estado monárquico policéntrico y la sociedad civil benemérita no indígena. Al mismo tiempo, se verificó que la merced de tierras, así como las de encomiendas fueron ejecutadas por un funcionario del Estado, en el marco de las potestades concedidas por cédulas regias y, como se ha visto, sistematizadas a posteriori por la Recopilación de Indias. Se constatan las acciones públicas, plausibles de transmitir derechos reales, del burócrata colonial y del fisco regio a un privado, donde el funcionario rentado –figura central del instituto mercenario– cumplía con un plan sistemático y elaborado más allá de la mera conquista y con explícitos fines de colonización y ampliación gradual y sostenida de la *dominia hispania* en el territorio. Los mercenarios de tierras y encomiendas ocupaban –siendo titulares de derechos reales de amplio disfrute– además, los cargos más expectantes de la burocracia local como fueran los de teniente gobernador, alcaldías y del cabildo, siendo los encargados del cumplimiento de lo real normado. Enseguida, se verifica que, un siglo después de la fundación de la jurisdicción, la mayor parte de los funcionarios locales fueron enjuiciados y sancionados por la “visita” en 1693 del Oidor Luján de Vargas por diversas contravenciones, en especial para nuestro tema de estudio, por no haber “señalado” tierras a sus encomendados (no obstante se trate, *in strictu sensu*, de sanciones por no respetar el derecho personal de los indígenas de, en este caso, concederles *señalamiento* de tierras a cultivar para su sustento en el interior del predio dominado por el encomendero). En suma, en el marco del proceso de consolidación de la potestad normativa del monarca es donde aparecen los conflictos entre ley y costumbre.

En el contraste con la encomienda, la merced de tierra se revitaliza en el siglo XVIII coadyuvando a una espacialización de cuestión pública con fuertes tintes feudales. Estos

grands dominies, parte de un modo de producción feudal subsidiario de la economía minera, no fueron entendidos solo como relaciones de producción montados en la fuerza productiva tierra sino que estos institutos imperiales (y la merced de tierras es uno de ellos) lo consideramos como redes. Y en esta red de mercenderos estaban inmerosos en las redes tradicionales (comerciales, eclesiásticas, militares, administradores reales, etc.) Allí reaparece, localmente, la praxis jurídica de la costumbre que, así como fortalece la condición parapropietaria del mercendero que engloba también el trabajo comunitario de explotación rural, agrícola y ganadera, constituyéndose en parte del *ordo* territorial u orden jurídico de tierras. “Desde un ángulo muy diferente —nos había prevenido sus sospechas Mariluz Urquijo hace ya más de tres décadas—es muy poco lo que sabemos acerca del papel de la costumbre indiana como generadora de normas reguladoras de la propiedad”⁹⁵⁶. Por cierto, fue “costumbre” que, en la jurisdicción de La Rioja del Tucumán, la merced sea exclusiva del hispanoamericano o del criollo que se dice descendiente de aquel. No hubo colectivos indígenas, ni naturales ni desnaturalizados, que hayan sido peticionantes de mercedes de tierras lo que fortalece la idea de que este título solo era invocado a favor del estamento dominante español, tanto durante la conquista (1587 en adelante) como durante el período de la consolidación de los Austrias (1628-1755). El problema fiscal había producido transformaciones profundas de los institutos jurídicos incluso privatísticos como las mercedes, no dudando, la administración borbónica en modificar los principios generales del ordenamiento frente a las exigencias contingentes de las arcas imperiales, como lo fue con la creación de la *composición de tierras*.

Pasado el periodo inicial de rapiña y apropiación de bienes por causa de guerra al indígena y de recursos tales como su fuerza de trabajo, se consolidó una rústica actividad económica que luego es especializada como lo muestra la corporación jesuítica. La pérdida de la competitividad de los productos agrícolas de elevado uso intensivo de mano de obra (como el vino y el telar) fueron dando paso a la explotación intensiva de ganado mayor, vacunos y mulas (o sus derivados como el cebo o el tasajo) lo que revalorizó la tierra de los Llanos riojanos. La influencia de esta nueva puesta en

⁹⁵⁶ José M. MARILUZ URQUIJO, “La propiedad ..”, 155.

valor de los bienes “de raíz” sobre el orden normativo estuvo dada con la consecuente y gradual pérdida de entidad de la encomienda y del régimen de riego o “de aguas” ligado a la producción de cultivo en terraplén y “bañados”, y conllevó una revalorización de las serranías y llanuras aptas para el pastoreo comunitario. Este pastoreo llevó a incentivar un proceso de comunitarización que, atendiendo a las particularidades geográficas del valle o serranía o predera, se profundizó con la eliminación de las encomiendas y los rústicos pueblos de indios remanentes.

No obstante, al decir de Hespanha, *a questao dos legal transfers* se sedimenta en una construcción social que aquí se zurció con los acontecimientos históricos: las Ordenanzas de Toledo, Abreu, Ramírez de Velasco, Alfaro, y Lujan de Vargas, como los Bandos de Buen Gobierno de los Gobernadores y Tenientes de Gobernadores, generaron tensiones y resistencias en dos de los tres órdenes de las relaciones de producción, el de organización del trabajo encomendero y el de riego. Por el contrario, el orden jurídico del régimen de tierras —ajeno a aquellas tensiones— se desarrolló consustanciado con la cosmovisión óptica de la legitimidad en cuanto regalía del Rey (bien de disfrute de los mercaderos y descendientes en cuanto beneméritos). La constitución de la legitimidad del gobernante de conceder bienes regios para pagar “servicios y costas” públicas preservistas del sistema colonial, y que doctrinariamente, Solórzano de Pereira tan bien describiera, fue un hecho tan inmediato como indiscutido, tanto —si vale la analogía— como que la fe católica fue la religión del estado colonial.

En lo que respecta a las fuentes, si bien he pretendido destacar los rasgos principales de un proceso de instauración de un nuevo orden de dominio territorial sobre comunidades pre-establecidas, nuestro paradigma usó como fuentes los documentos administrativos, notariales y judiciales en la búsqueda de la merced de tierra como “figure dell’esperienza” particularmente relevantes. Ello conllevó a acentuar el tinte del aparato institucional de la Corona en menoscabo de fuentes de otro tipo como las crónicas, en especial las de los despojados (indígenas primero y comuneros después). La falta de referencias jurídicas y de otro tipo —por ejemplo, sobre la dramaticidad de los acontecimientos derivados de la guerra calchaquí⁹⁵⁷, en donde la zona del altiplano

⁹⁵⁷ En mi trabajo *El Inka volverá...*, me referí con detalle al descuartizamiento y decapitación de los líderes indígenas rebeldes tales como el *famatino* Coronilla y el *bualfino* Chemilyn y su impacto, junto

riojano londinense fue epicentro— no implica desconocer la violencia del conflicto desatado por el control de los recursos naturales y materiales y, su importancia e influencia en el *ordo* colonial temprano, aun cuando los organismos productores de derecho local no lo expliciten. Los poseedores de las tierras y recursos de los despojados indios encontraron en la guerra y en los méritos, reales o ficticios, una fuente de legitimación, impensada antes del 1600, de sus pretensiones territoriales. Esto empalmó con una doctrina triunfante: tierra a cambio de servicios, una fórmula *ius* política del Rey para conducir el bloque hegemónico dominante de su Reino tucumano.

Desde una perspectiva más abarcadora, sugerir en el Tucumán colonial la hipótesis de una “sociedad de derechos” en el marco de una sociedad estamental no significa aceptar la existencia jurídica del *ideal typus* de dos repúblicas, una de los españoles-criollos y otra de los indios, porque sería presuponer que los segundos podían ser sujetos potestativos, con dominio, jurisdicción, facultad o autoridad sobre sus cosas, muebles o de *raíz*. En el Tucumán, los silencios documentales del período, sean del gobierno, de escribanos, o de cartas de compra venta inter vivos, denotan una ausencia del colectivo indígena en acciones de trueque, compraventa, arrendamiento, sucesión por muerte, de tierras (bañados, porteros, vides, etc) pero, indudablemente, intercambiaron sus *sustentos*. Por el contrario, eran los mercenderos sus aliados (intermediarios-comerciantes) quienes comercializaban sus productos cuando los bienes producidos eran de determinada magnitud —cueros, arrobas de pimentón, crías mulares, postes, leña, cal, etc. —porque su entidad se lo permitía (pagar o no derechos de alcabalas, firmar contratos etc.). Pero solo los indios, junto con negros esclavos, eran quienes trabajaban en los campos, huertas, y chacras, recogían los frutos y cortaban las maderas de los árboles, en síntesis, parafraseando a Assadourian en una cita de Marx, “transformaban la *terre matière* en *terre capital*”⁹⁵⁸.

La pregunta sobre si la merced de tierras es el antecedente de la propiedad privada genera más dudas que certezas, sobre todo si pretendemos entender a esta última como

con las desnaturalizaciones y desterramientos, en el imaginario de las poblaciones autóctonas insurrectas del siglo XVII. Cfr. Adrián MERCADO REYNOSO, *El Inka volverá...*, 31 y ss.

⁹⁵⁸ Carlos S. Assadourian, *El sistema...*, 168.

la romanística *dominium* o *jus libere disponendi*. A través del título de la merced y del pacto vasállico se accedía a la posesión de vastas extensiones, nunca antes vistas y amparadas bajo la titularidad de una sola persona (*patres familia*). El título fue la legación pública más importante sobre el bien inmueble, aunque no era exclusiva. El principio expresado en la fórmula contenida en la concesión: “*en nombre de Su Magestad le amparo y defiando en illas y mando que no sea desposeydo ni despojado sin primero ser oydo y por fuero bencido*”, garantizaba al sujeto privado mercendero la autonomía relativa de los poderes públicos locales y brindaba la exclusiva posibilidad de enajenarla a su voluntad. Pero, aun siendo *uti arbitrio suo* no era el único *dominium* de ella, sino que había una multiplicidad de poderes factuales y *facultas habitationis* distribuidos entre el colectivo indígena, el personal eclesial —como lo fuera el cura doctrinero— y el estado colonial, que limitaba el *arbitrio suo*. El “*Iure dominii vel quasi*”, de la formulística inserta en el título de las mercedes de tierras⁹⁵⁹, confería a un titular un dominio cuasi perfecto, el más *perfecte et licite* posible pero no era el *perfecte dominium* ni el dominio eminente. Los tardíos bandos de buen gobierno, como legítimos productores de derecho, confirman esa división entre dominio útil y dominio directo.

El acto de posesión de la misma merced es, en sí mismo, un evento jurídico clave para entender la relación, en el derecho indiano, de los sujetos con las cosas. El aporte documental analizado entre el primer cuarto del siglo XVII y mitad del XIX, y puede subrayarse que el *Real Corporal Iure Dominii vel quasi*, sobre todo el “*iure domini uel quasi*” añadido, puede ser parte de un instrumento legislativo que, siguiendo una tradición de fusión más canónica que romanista atestigüa, en el mismo acto de *vestimento* indiano, el límite del dominio impuesto al particular derecho privado por acción del Príncipe (Pretor-Cónsul-Papa-Rey) que se reservaba para sí la determinación, en última instancia, del poder público y político sobre la *res* concedida a un benemérito (civil-vasallo-feudatario).

⁹⁵⁹ AJLR, 386-M, “Mersed Real y mas documentos perten. tes al paraje de Santa Rita de Chilecito en el Balle de Anguinan Jurisdiccion dela Rioxa”; Archivo particular de Zacarías Agüero Vera, sin catalogar; AJLR, F-5, Caja “campos”, fol. 94; “Merced de Araupatis y Yuctabas o de los Bañados del Pantano”, en RJHLLR, núm. 331; ACELR, *Protocolo Gaspar Villafañe 1845 y Blas Gonzales 1848-51*, f. 8.-12 vta; AHCa, Sección Judicial: Paq. 18, Expte. 28023, año 1911, fol. 173 a 173 y vta, etcétera.

En síntesis, se verifica que en las mercedes de tierras el principal dominio del terreno estaba situado en la titularidad del mercendero, pero éste no era el único dominio posible, aunque brindara sólidamente una cobertura autoritativa y positiva por cuanto emanaba de una autoridad formalmente investida del poder de concesión de un bien considerado realengo.

La pervivencia de esta forma de dominio legal estuvo acompañada, históricamente, por la persistente caída demográfica y activa asimilación de los indígenas, las que progresivamente erosionaron la *detentatio* efectiva y el usufructo real de la gente común de la campaña.

Antes de concluir, es preciso reconocer que al final del camino se presentan nuevos interrogantes en el sentido de describir la relación existente entre el comunalismo y el caudillismo federal, y entre estos y las tierras que fueron mercedes de tierras en el marco indiano, sobre todo en la explicitación del proceso de mutamiento de las mercedes de tierras desde el régimen de tierras del derecho indiano (1500 c.-1810 c.) al derecho patrio (1810 c.-1870 c.) y de éste, al derecho argentino (1870 c.- 1967). Muchas de nuestras preguntas iniciales han sido respondidas por este trabajo, pero en el transcurso de la investigación han surgido cuestiones que previamente no consideraba importantes: tal es el caso del peso efectivo de las transferencias inter vivos de derechos proveniente de mercedes y privatizaciones de tierras fiscales en el siglo XIX (1865 c.- 1898 c.) las cuales, contrariamente al pensamiento dominante, contribuyeron a acentuar aún más las características de *usus communis terrae* que gran parte se había, como se prueba en este trabajo, constituido, generado y preservado a partir de la concesión de mercedes de tierras a beneméritos a cambio de los servicios prestados al Reino y/o a la Patria en el rango de años de la merced realenga de Capayan de 1592 a la merced patrialenga de Bajo los Pedernales de año 1861.

Por otra parte, el acontecimiento del año 1862 consistente en la destrucción y la quema del archivo general de la jurisdicción⁹⁶⁰ parece ser el punto de inflexión del derecho indiano con respecto a este tipo de concesión.

⁹⁶⁰ En este sentido es revelador el episodio acaecido entre mayo y junio de 1862, es decir en los inicios de la La Rioja durante el proceso de formación del Estado nacional argentino. La

Desde la perspectiva metodológica, se puede afirmar que el paradigma de análisis y representación utilizado en este trabajo para indagar sobre el *ius* y su relación con la propiedad terrícola —el de la escuela florentina *Centro Studi per il Pensiero Giuridico Moderno* de Paolo Grossi— ha resultado adecuado por cuanto remitió a una reconstrucción de la historia del derecho indiano territorial, en el marco de una ausencia del individualismo posesivo aunque el mercendero concentre la máxima potestad posesiva, en el auscultar en cada caso, en el peso de las relaciones de posesión, de hecho y vecindad existentes en concordancia al poder sobre la cosa inmueble. Se ratifica la idea grossiana (en el ámbito tardomedieval europeo) y la de Tao Anzoátegui (en el rioplatense) según las cuales el orden jurídico pre moderno posee la *consuetudine come fatto normativo*, el peso de la costumbre, como una instancia reguladora de las

destrucción misma de registro público amerita una investigación propia que aquí no haremos. Siguiendo e. a Ariel DE LA FUENTE, *Children of facundo...* 271, acontece que en 1862 siendo la primera rebelión encabezada por el caudillo “Chacho Peñaloza”, (titular de las mercedes del Portezuelo y La Hediondita y hacendado *federal*), a lo que las tropas unitarias porteñas deciden sitiar la ciudad de La Rioja y es allí donde resisten el asedio de las tropas de gauchos encabezadas por comandante federal famatinense Carlos Ángel, quienes siguiendo un observador de la época los montoneros/comuneros arengaban al grito de “*mueran los incendiarios y berejes*”. Las tropas rioplatenses habían destruido el archivo e incendiado casas de opositores. Este acontecimiento es mencionado por el historiador A. Zinny quien en 1911 justifica la acción de destrucción de los registros debido a “la heroica defensa de la ciudad contra la montonera”. Se verifica que en esa coyuntura histórica se destruyó el archivo provincial, del cabildo, padrones, censos y capitular de la Jurisdicción riojana. Zinny y Reyes corroboran que la destrucción del papel del archivo se hizo para hacer cartuchos de pólvora, Cfr. ZINNY, *Escritos...*, 87; y M. REYES, *Bosquejo...*, 107.. El coronel José Miguel de Arreondo no solo destruyó el archivo público sino que quemó las casas de los líderes insurrectos “con sus papeles adentro”. El capitán Mayer, jefe de la patrulla unitaria que prendió fuego de los pueblos de *Mazán* y *Aymogasta* fue particularmente cruel con algunas víctimas. Cuando quemada casa del líder montonero Severo Chumbita en Aimogasta no permitió a la esposa del caudillo federal sacara la estatua del santo San José que la familia custodiaba en su rancho Cfr. Ramón NAVARRO OCAMPO, *Actor, Testigo y Mártir*, ed. Lerner, Córdoba, 80 y ss. Igualmente, con Chacho Peñaloza que después de ser degollado, se quemaron sus cosas personales, entre ellas el baúl de cuero que contenía los papeles que probaban sus propiedades y arriendos, según declarara su esposa, arrestada y ante el juez “*Me exigen pruebas y documentos de haber tenido yo algo; me tomaron dos cargas de petacas por mandato del señor coronel Arredondo, donde estaban todos mis papeles, testamentos, hijuelas, donaciones y cuanto a mí me pertenecía*” en “Rioja, agosto 12 de 1864 – Carta de Victoria Romero de Peñaloza al Excmo, capitán general Don Justo José de Urquiza”, transcripto del “Archivo Particular del Dr. Fernando Peña” en *RJHYL*, Tomo I, N° 2, 109 y 110; Disponible en línea en [<http://culturacasadelarioja.blogspot.com.ar/2015/11/carta-de-dona-victoria-urquiza.html/>], (Consultado el 14/11/2015)

relaciones de posesión y transmisión de ella y que, como ha sido ya estudiado en otras áreas del Tucumán para estos siglos, ante las disputas de *lis* o existencia de intereses jurídicos contrapuestos, nos remite a una instancia de validación en el marco del derecho indiano, patrio o nacional (con amplio peso de las relaciones interpersonales, de instancias procedimentales del juicio y eventual acuerdo de conveniencia, eliminado extrajudicialmente la mayoría de las veces, el interés jurídico contrapuesto). Ello surge del análisis de la mayoría de los expedientes de litigios sobre tierras existentes en el Archivo Judicial de los Tribunales (desde 1888), en donde los jueces no pudieron o no supieron aplicar la románica relación *simplicissima* de que cada tierra tiene un dueño y se avinieron a la búsqueda de acuerdos de convivencia por fuera del marco jurídico por ellos refrendado judicialmente. A mediados de la década del 60 del siglo XX surgen las sentencias que les quitan a los derechos y acciones características parapropietarias (las cuales *actio* confería el carácter posesorio o petitorio) para separarlas como sólo derecho personal y no real. Simultáneamente, la operatividad moderna intenta describir a estas *situações enraizadas* como, justamente, situaciones reales y cataloga (a fines de la década del sesenta del siglo pasado) a los comuneros poseedores de las mercedes de tierras de Tucumán como “*Derechoso, Ocupante y Residente; Heredero forzoso del derecho, Ocupante y Residente ; Derechoso y ocupante; Heredero forzoso del Derechoso y Ocupante; Derechoso; Heredero de Derechoso, Derechoso con Bienes; Heredero de Derechoso con Bienes; Ocupante Residente; Ocupante; Propietarios de Mejoras*”. Como puede observarse, es todo un manual de prelación del dominio útil el que nos llega en 1967, y de la mano del Instituto Minifundio y Tierras Indivisas provincial, cuya “práctica” compulsiva de “adecuación” de derecho a propietario fue descripta.

Aunque el mayorazgo no sea nuestro tema —su omisión hubiese sido contrario al paradigma orden-sistema— la existencia de la mayor concentración de mayorazgos testamentarios del Río de la Plata en jurisdicción de La Rioja es un elemento insoslayable del régimen de propiedad de la tierra riojana, que aún no ha sido estudiado, en especial, en las estrategias familiares y privadas de preservación del acervo hereditario inmobiliario. Fue la merced de tierras el título con el cual los bienes raíces ingresaban al patrimonio amayorazgado y que, por *motu proprio* del titular mercenario,

se vinculaba. Y que increíblemente duró hasta que la justicia disolvió 1914 al último mayorazgo como fue el de San Sebastián de Sañogasta.

La existencia de usuarios y usufructuarios comunes de las tierras que, según la bibliografía, se denominaron “naturales”, comuneros, campesinos, “montoneros”, derechosos, caracterizados porque en “común unidad” explotan ese factor de producción tierra, ha generado su *iura propria*: los “derechos y acciones”, los cuales, por más de tres siglos, se convertirán en una sui generis forma de acceso y transmisión de las pretensiones de dominio devenidas ahora en “situaciones reales”.

“Por cuanto ofrece la ubicación inmediata de los hechos o circunstancias relativas a la grandes extensiones de tierra que se encuentran afectadas como consecuencia de esas ‘Comunidades’ ”⁹⁶¹ dirá el Acuerdo número 106 del año 1971 del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja, en la introducción al “índice de mercedes” que habían mandado los magistrados del máximo órgano judicial de la Provincia de La Rioja al personal del archivo a identificar, y ratifica así, para los máximos administradores de justicia riojanos, dos aspectos. Ya en la modernidad, uno es el carácter histórico-político de *grands dominies* —siguen siendo grandes extensiones de tierra— y, otro, el de sujeto de derecho de éstas, son las pretendidas “Comunidades” —ese conjunto de *patres familias* que habitan esos parajes rurales rústicos y que aprovechan las fiestas religiosas anuales para tomar las decisiones de trabajo comunitario y de otro tipo—. Aunque importante, esta noción, “comunidad” o “tierras comunitarias” o tierras indivisas”, “campos indivisos” o “campos comuneros” es esporádica, en contraste con la noción de “merced”, la cual se ha demostrado que es recurrente en las modalidades del discurso jurídico sobre dominios rurales, y aún el registro topográfico, por cuanto los agrimensores replican la cosmovisión indiana y andina de identificar físicamente como colindantes a las otras mercedes y no a los propietarios que, cartográficamente se ubicarán solo al interior de éstas. La merced misma, como ámbito físico, se constituye en una instancia intermedia entre la ciudad y el pueblo o paraje.

⁹⁶¹ L. SOTOMAYOR, “Poder Judicial —Superior Tribunal de Justicia: Mensuras y otras causas en que obran relación o antecedentes de títulos de ...”, 12.

Es un fenómeno que, desde la historiografía técnica de mediados del siglo XIX a mediados del s. XX, fue descripto como “impuro” y que, por lo tanto, debía ser desamortizado: en todos estos análisis desarrollistas (sean estos técnico hidrológicos, fiscales o registrales) se hace referencia a la ausencia de un mercado capitalístico de tierras, esto es, de la ausencia de la concurrencia de un bien raíz con un precio monetario, a cambio del dominio de este bien real registrado.

La “resiliencia” jurídica que los comuneros poseedores de derechos y acciones (último *relictio* del derecho común indiano si es que lo hay) de una merced de tierras soportaron frente a las condiciones que establece el Código Civil para conducirlos a la adquisición del dominio exclusivo, no significa impermeabilidad al capital, ni menos invulnerabilidad al uso de tradición indiana. Como agujeros en un queso, van naciendo, vía prescripción adquisitiva o usucapión, *perfectae proprietates*, de las otrora mercedes de tierras que no “entraron” en “saneamiento”.

Con tales “localismos preconstitucionales” nos orientó Clavero para delinear el provincialismo aquí descripto y en la forma de afrontar este régimen de tierras heredado “de la Colonia”; ello se verifica en el léxico y praxis del cuerpo normativo que propusieron, en varios ciclos, los órganos locales productores de derecho (sin olvidar que la facultad de reglar su régimen es una facultad provincial o comunal no delegada a la Nación federal o República Argentina). La constitución argentina (1853) contribuye a la provincialización de la facultad de aportar los instrumentos registrales de la patrimonialización propios (junto a los federales) en el marco de una codificación nacional negociada que fue vista como un obstáculo, tal como lo afirma un agudo observador de orden jurídico territorial mercedario, el ya antedicho “ilustrado” Joaquín Víctor González, para quién las legislaturas provinciales jamás sancionaran “su propio despojo” por encontrarse, ellas, compuestas por:

- a) terratenientes;
- b) poseedores en comunidad,
- c) poseedores de simple hecho,
- d) aspirantes a la propiedad por prescripción adquisitiva,
- e) aspirantes a la unificación de derechos a largo plazo.

De allí que, si adoptamos la hipótesis de González, fácilmente se puedan enmarcar los errores y aciertos y los límites de las *expolio* o expropiaciones de mercedes de tierras —vía declaración de “utilidad pública” y encuadradas en proyectos “desarrollistas”— los cuales han privatizado tierras en suspensiones del régimen democrático o bien dictaduras, pero —y esto es lo notable para el *ius* de tierras— preservando la unicidad del objeto de expropiación, llamado “merced de tierras”, sus “inmuebles”, “acciones y derechos” puesto que se expropiaron por leyes “mercedes de tierras” tales como las de San Isidro de la Sierras de las Minas (1960)⁹⁶², La Hediondita (1967), Tudcúm (1970), Araupatis (1983) que generaron, como vimos, medio millar de nuevos propietarios y un sinnúmero de campesinos forzosamente urbanizados por las relocalizaciones en la cabeceras municipales.

Respecto a los acervos familiares, hay evidencia empírica de que algunas familias beneméritas han logrado mantener una relación jurídica de dominio sobre tierras originariamente concedidas en merced a sus antepasados: los Ocampo con la merced de tierras de La Hediondita; los Bazán con Tudcúm; los Brizuela y Doria en algunos pequeños enclaves de la merced de Guandacol y de las Sobras de Sañogasta, y otros tantos, pero de ningún modo estas son significativas desde el punto de vista cuantitativo, ni de *ius*, y no representan, más que menos, del 1 % de la superficie total de la tierra concedida en merced a lo largo de los tres últimos siglos. Esto implica nuevas preguntas no respondidas aún sobre cómo funcionan los patrimonios al interior de las familias notables de La Rioja, a partir de la primera mitad del siglo XVII y hasta entrado el siglo XX. Ajenas a la condición privada de la preservación y transmisión y de los mecanismos que permitían consolidar y perpetuar el patrimonio de los más encumbrados, la mercedes de tierra ayudaban a establecer la condición de dependencia vital de la familia y su casa poblada con su entorno espacial, a consolidar las relaciones de sujeción y subalternidad y de servidumbre de los sujetos usufructuarios, cuando los hubiere, en las tierras concedidas, estableciendo una hegemonía social, económica,

⁹⁶² Vid ej. “LEY N° 2717, 20/10/1960. LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA SANCIONA CON FUERZA DE LEY: Art. 1° Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación todos los inmuebles, acciones y derechos comprendidos en el campo denominado ‘San Isidro de las Sierras de las Minas’(...)”, Imprenta del Estado y Boletín Oficial, La Rioja, 1961-65, 97.

política, jurídica y simbólica del sujeto potestativo con la tierra, pensada no superficialmente sino en cuanto espacialidad. En contraposición con esta minoría, la mayoría de los titulares mercedarios vendieron o fraccionaron (es más notable en las mercedes concedidas a capitanes criollos y auxiliares de la campaña contra los indios Chacos de mediados del siglo XVIII), cuyas lecturas de fuentes nos advierten de los incontables inconvenientes para fortalecer su dominio una vez muerto el titular inicial de la concesión o primigenio titular. De estas mercedes, comprobamos problemas crónicos de “corrupción” en la transmisión y transferencia que, por cierto, fueron comunes a todos los modos de transmisión de dominio independientemente del modo de adquisición —compraventa, donación, cesión, capellanía, composición—, que, en este caso, solo referenciamos a la merced de tierra. En otras palabras, las transmisiones de los derechos derivadas de la titularidad de la merced fueron actos privativos del concesionario y el nuevo adquiriente, en donde, nada cabe al título originario ni su *vestmentum* como mercendero privado en las dificultades indianas y modernas de regulación catastral y fiscal de la autoridad pública.

En fin, es indudable que en la merced de tierras es donde se origina la figura jurídica de los “derechos y acciones”, y esa forma de *iura propria* riojana será, según los extremos interpretativos modernos, a) una primitiva e indeterminada forma de acceso, por parte del adquiriente, al usufructo de la tierra que otrora fuera una merced de tierra (una especie de sistema de accesión al usufructo de un predio o bien térreo), o, en el otro extremo, b) una “carta precaria” de titulación condominial de derechos personales y no reales aunque estos se encuentren asentados o registrados públicamente (sección libro de folios personales en el registro de la propiedad inmobiliaria) tal como lo establece el código civil argentino. En términos grossianos, esta relación entre derecho y cosa territorial no es más que fuerzas liberadas de la plurisecular oficina altomedieval, tales como el dominio *diviso* trasladadas al reino altoperuano que se volvieron mentalidad circulante, y pervivirá al interior de una misma experiencia jurídica y de un mismo universo cultural (andino o del altiplano sur). Y lo más peculiar, es comunal, aun siendo de origen, como queda establecido, diferente a la propiedad comunal indígena. Estimo que, con este sentido doctrinario, debemos interpretar el antes comentado y desde hace poco echado a la luz, Auto de Gobierno del Gobernador salteño de 1800 y

1806, que establece que el “dominio directo” pertenece a la Corona y el “dominio útil” al mercendero.

Todo esto, sumado a los dos puntos anteriores, permite verificar una práctica de uso comunitario del suelo térreo que, he denominado provocativamente, *usus terrae comunis*, para contextualizar esta precaria, aunque efectiva, situación real de dominio y forma de organización del uso de la tierra, aguas y bosques del espacio mercendero (mercedes de Ulapes, Puluchán, Malanzán, Allegas, Las Latas, San Andrés de los Palmares, etc.), en donde sus habitantes, aún en el actualidad, aprovechan las festividades religiosas o patrias para que sus líderes acuerden “privadamente” —enmarcados en su privado mundo moral o “civilidad” hegeliana— las “mejoras” anuales de cercos, manejo de ganado y tala de bosques, eventuales “desbarres” de represas y cavado y reparación de pozos de agua, *e in fine*, petición a las autoridades.

Respecto al Código Civil Argentino, la situación de la merced de tierra es conocida. El redactor del código (año 1871) Dalmacio Vélez Sarfield, no incluyó a la merced en el listado de derechos reales, tal como lo hiciera con las servidumbres activas, la prenda, el dominio, el derecho de hipoteca y el usufructo (art. 2503). Emulando a Altamira diríamos que, con el presente estudio de la “merced de tierras”, he tratado de poner de manifiesto “formas de propiedad y disfrute que, a juzgar por nuestro código civil, ni existen ni pueden darse”⁹⁶³.

⁹⁶³ Rafael ALTAMIRA Y CREVEA, *Historia de la propiedad comunal* [1890]; (prólogo de 1924), estudio preliminar por Alejandro Nieto, Madrid, ed. Instituto de Estudios de Administración Local, 1981, 14 [457].

§ FUENTES DOCUMENTALES DE ARCHIVO Y MANUSCRITAS

Archivo General de Indias. Sevilla. (AGI)

Sección V – Gobierno:

Audiencia de Buenos Aires:

Legajos n°:

614

Audiencia de Charcas:

Legajos n°:

26

34

42

58

102

221

Sección VI – Escribanía de Cámara

Legajos n°:

864 A

864 B

874 A

374 B

1184

Sección — Contaduría

Legajos n°:

1876

Archivo General de la Nación -Argentina (AGNA).

AGNA, Sala IX, Archivo del cabildo de Buenos Aires, año 1722, f. 264.

AGNA. IX.22.7.1.

AGNA. IX.22.7.2.

AGNA B N 92214.

AGNA IX. 21.7.1.

AGNA. IX.21.10.4.

AGNA IX.17.2.1. folio 17 y vuelta.

AGNA, XIII, 12, 9, 4.

Archivo Judicial de La Rioja. La Rioja –Argentina (AJLR).

Expedientes (letra-núm.-año de iniciación):

- F-5 , 1855.
- A-395, 18
- «Merced de La hediondita, año 1887, que se remite a 1755, Macho Muerto»
- Doc. N° 16 Caja “Campos”
- A-410, 1888.
- V-745, 1912.

Archivo del Colegio de Escribanos de La Rioja, (ACELR)

- Protocolo 1693-1811, foja 43.
- Protocolo escribano M. Jaramillo, año 1880, fojas 78 y ss.
- Protocolo del escribano E.H. González, año 1888, f. 630 vuelta y ss.;
- Protocolo Gaspar Villafañe 1845;

- Protocolo de Blas Gonzáles 1848-51, f. 8.-12 vta

Archivo Histórico de La Rioja, (AHLR).

- AHLR, C-508, “Convenio ante el Superior Tribunal de Justicia sobre Agua entre Comuneros de Anguinan” [1833]-27 Nov 1827.
- C-104, «Don Crisologo Chavez y compartes pidiendo posesión de los terrenos en la Merced de Tilimuque, 1873 (con traslado de 1717) ».
- F-42, «Don Dionisio Fuentes s/unos potreros en Los Angulos de Famatina, 1844».
- M-408, «Reposición de títulos, Don Antonio Mir Márquez en representación de los vecinos de Malligasta, 1887»

Archivo Dirección General de Catastro de La Rioja (ADGC)

Libros del Registro de Títulos de Propiedad.

Dispocisión 31-11;

MJ (Mensura Judicial) 133;

Archivo particular de Zacarías Agüero Vera (ApZAV), cedido gentilmente por M. BRAVO TEDÍN.

Archivo de la Dirección General de la Propiedad Inmobiliaria (ADGPI)

Año 1913, L.1, nº 1 al 192, folios 1-139,

Esc. 45: “Vicente Morán a Jose Antolin Caceres, Depto. Rivadavia, lindantes sobre Merced de Olpas”;

L.1, nº 1 al 192, folios 1-139, Esc. 159: De sucesión de Justo Rufino Zárate a favor de José E. Paz, “todas las acciones y derechos pro.indivisos que por heredad de los antecesores correspondiente en el campo ‘Merced de Olpas’ en Departamento General Ocampo”;

1913, L1, nº 1 al 192, Esc. 158, f. 69, “protocolización escritura de Merced: el Gobierno de la Provincia a favor de Doña Maria Anastasia Ávila”,

Esc. 77, “Compraventa: los cónyuges Jesús Nieto y Ramona Barrionuevo a favor de Vicente Gregorio de una represa y derecho y acción del campo común en la merced denominada ‘Chañar’.

1913, L.2. 193 al 927, Esc. 20, f. 25 y 26, “Campo Indiviso de Tanín”.

Esc. 408, f. 487 a 488v., Protocolización escritura de merced: el Excmo. Gobierno de La Rioja a favor de Jenuario Molina”.

Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

“*Don Lorenzo Guari y Otros c/ la Provincia de Jujuy, sobre reivindicación*”, en FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, t. XXIX, p.303-319

Archivo Historico de Córdoba. Córdoba –Argentina (AHCo)

Libros:

Escribanía de Hipotecas N°1, Leg. 108, Expte. 1, año 1657.

Escribanía de Hacienda N°2, Leg. 2 bis, Expte. 20, año 1669.

Escribanía de Hacienda N°2, Leg. 7, 2 bis, Expte. 20, año 1669-1689.

Escribanía de Hacienda N°2, Leg. 2, años 1664-1674.

Escribanía de Hacienda N°2, Leg. 37, Expte. 21, año 1763.

Escribanía de Gobierno N°2, Leg. 6, tomo II, Expte. 22 [1687-1688].

Escribanía de Gobierno N° 2, Leg. 7, 2 bis, Expte. 20, año 1669.

Escribanía de Hipotecas N° 12, Leg. 14, Expte. 9.

Escribanía de Hipotecas N° 1, Leg. 128.

Archivo Judicial de Córdoba (AJC)

legajo 94, expediente 3.

legajo 25, folios 177 y vta y 178.

Archivo Histórico de Catamarca (AHCa)

Sección Judicial: Paq. 18, Expte. 28023, año 1911, fol. 173 a 173 y vta.

Sección Gobierno, Carpeta N° 1, Leg. s/n, años 1681-1902, fs. 9 a 13 y vta.

§ FUENTES ÉDITAS

ADEZA-GTZ (Agencia de Desarrollo de Zonas Áridas y Deutche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) “Saneamiento de Títulos en los Llanos Riojanos”. 1997, La Rioja, Mimeo.

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, *Cartas Annuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay*, Buenos Aires, ed. Academia Nacional de Historia, 1990, p. 229

ALFARO, Francisco de; *Tractatus de officio fiscalis, Deque fiscalibus privilegys Don Francisci de Alfaro Reggi in Argentina Cancellaria Regnorum Pirv fiscalis procvratoris*, ed. Apud Ludovicum Sanchez, Valladolid, 1606, p. 674, [Sala de Tesoro de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires].

ANÓNIMO, *Relación e suma de tierra y poblaciones que D. Jerónimo Luis de Cabrera, Gobernador de la Provincia de los Jurés, ha descubierto, donde va a poblar en nombre de su majestad*”, en Ricardo Jaimes Freyre, *El Tucumán del siglo XVI (Bajo el gobierno de Juan Ramirez de Velasco)*, Buenos Aires, ed. Imp. de Coni Hermanos, 1914. p. 239.

BUSTOS, Juan P.; *Elenco mutilado de escrituras y biblioteca hecho por el muy reverendo padre prior fray Juan José Bustos en el año de 1784*, en Revista Histórica del Convento de los Hermanos Predicadores de La Rioja, Vol. I, núm. 11, p. 176 y ss., y Vol I, núm. 12, p. 195 y ss., La Rioja, ed. Imprenta de Pedro Giraud, 1929.

CELSO, Hugo de; *Reportorio vniversal de todas las leyes destos reynos de Castilla, abreuviadas y reduzidas en forma de reportorio decifiuo*; estudio preliminar de Javier Alvarado Planas, Madrid, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Boletín Oficial del Estado, 2000.

COLECCIÓN DE CLÁSICOS TAVERA, *TEXTOS CLÁSICOS DE LITERATURA JURÍDICA INDIANA (I)*, Sánchez Bella, Ismael (comp.); Alfaro, Francisco de; Alvarez de Abreu, Antonio Joseph; Colón de Larriátegui, Félix; Diez de la Calle, Juan; Escalona y Agüero, Gaspar de; Ferau de Cassañas, Esteban; Hevia Bolaños, Juan de; Liñan y Cisneros, Melchor de; Mateu y Sanz, Lorenzo; Montemayor y Córdoba de Cuenca, J. Francisco; Morelli, D. Cyriacus; Murillo Velarde, Pedro; Parras, Pedro Joseph; Pérez Landero Otañez y Castro, Pedro; Rezabak y Ugarte, Joseph de; Villarroel, Gaspar de; ed. Fundación MAPFRE, Fundación Historica Tavera- Digibis Publicaciones Digitales, Serie II, VI. 15, 1999, CD-ROM.

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ANTIGUAS POSESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA Y OCEANÍA, *SACADOS DE LOS ARCHIVOS DEL REINO Y MUY ESPECIALMENTE DEL DE INDIAS*. Madrid. Editados por Joaquín F. Pacheco, Francisco de Cárdenas, Luis Torres de Mendoza. 1864-1889. 42 vols., ed. Est. Tip. Rivadeneira.

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ANTIGUAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR. Madrid. Segunda serie. Academia de Historia. 1885-1932.

CORNEJO LECINA, Atilio *La falsa Merced Real de 1713 a favor del Cacique Sayanca. Texto de la sentencia judicial que la declara falsa, apócrifa y sin ningún valor. Relación de los hechos y copias de los documentos y peritajes que muestran su falsedad*, s/e., Mendoza, 1961, p. 63.

COMPILACIÓN DE LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY DESDE EL AÑO 1835 HASTA EL AÑO 1884. Publicación Oficial, Jujuy, ed. Tip. La Libertad de José Petruzzelli, 1885. III tomos.

DENIS, Pierre; *La République Argentine: la mise en valeurs du pays*, Paris, ed. Armand Colin, 1920, p. 299.

ENCIMAS, Diego; *Cedulario de Encinas: Estudio e índices de Alfonso García-Gallo*, Madrid : Ediciones de Cultura Hispánica, Agencia española de cooperación internacional, 1990.

ENCINAS, Diego de ; *Provisiones, cédulas, capítulos de ordenanzas, instrucciones y cartas tocantes al buen gobierno de las Indias y administración de la justicia en ellas*, Madrid. 1596. 4 vols.

ESCALONA AGÜERO, Gaspar de; *Gazophilacium Regium Perubicum* [1647], traducido como *Gazolfilacio Real del Perú, Tratado financiero del coloniaje*, La Paz, ed. del Estado [Bolivia], prólogo de León M. Loza, 1941.

ESCRICHE, Joaquin, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, [1851] ed. Impr. Eduardo Cuesta, 3 tomos, 1874-1876 [“Nueva edición reformada y considerablemente aumentada (...) por León Galindo y de Vera y José Vicente y Caravantes, ed. de la primera edición Rosa Bouret y Cía, Paris.], Madrid.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN HISTORIA DEL DERECHO, *Libros registros-cedularios del Tucumán y el Paraguay (1573-1716)*, Catálogo, Buenos Ares, ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2000, p. 414.

RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, La Rioja, ed. Imprenta del Estado, 1937.

RECOPILACIÓN DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS, MANDADAS IMPRIMIR Y PUBLICAR POR LA Magestad Católica del Rey Don Carlos II, Tomo Segundo. Cuarta Impresión. Madrid. MDCCCLXXXI, Coeditada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el BOE (Boletín del Estado Español), Imprenta Nacional. Madrid. 1998.

- RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE LA RIOJA, Juan J Romero, Dardo de la Vega Díaz, Rafael Torres y Juan C. Gómez (comps.), La Rioja. Talleres Gráficos del Estado. 1938, p.141.
- REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, Tomo IV de los años 1866, 1867, 1868 y 1869, Buenos Aires, ed. Imprenta de Pablo Coni e Hijos, 1890, p. 213.
- MURO OREJÓN, Antonio; *Cedulario americano del siglo XVIII: Colección de disposiciones legales indianas desde 1680 a 1800 contenidas en los Cedularios del Archivo General de Indias*, tomo 1 Cédulas de Carlos II (1679); tomo 2 Cédulas de Felipe V (1700-1724), Sevilla, ed. EEHA-CSIC, 1956 (t 1) y 1969 (t 2).
- PASTELLS, Pablo, *Historiae Societatis in Provinci Paraquariensi (...) R. P. Paulo Pastells, Romae 27 Octobris 1912*, traduc. *Historia de la Compañía de Jesus en la provincia del Paraguay*, Madrid, ed. Librería General de Victorino Suárez, 1915, t.I. 591, t. II, p. 775, III, p. 544; y IV 567.
- POLO DE ONDEGARDO, "Informe del licenciado Polo de Ondegardo al licenciado Briviesca de Muñatones." [1561], *Revista Histórica*. 18, Lima, 1940, p.142.
- TOLEDO, Francisco de; *Disposiciones gubernativas...1569-1574*, Sevilla, prólogo de Guillermo VILLENA LOHMANN y transcripción de Ma. SARABIA VIEJO, ed. Escuela de Estudios Hispano-americanos- CSIC y El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1986, 2 T.
- SOLÓRZANO DE PEREIRA, Juan; *disputationem de Indiarum iure tomus primus siue De iusta Indiarum Occidentalium inquisitione acquisitione et retentione tribus libris comprehensam*, [1648] D.E.C, Variante del título, [*De Indiarum iure.*](#), ed. typographia Domin, Garciae Morras, 1653. *Política Indiana*, Edición española de Biblioteca de Autores Españoles, 1972, p. 387.
- SOLÓRZANO DE PEREIRA, Juan; *Libro primero de la Recopilación de Cédulas, Cartas, Provisiones y Ordenanzas Reales*, t. I y II [1622], Buenos Aires, Introducción de Ricardo Levene, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Argentino, Colección de textos y documentos para la historia del derecho argentino, V, ed. Imprenta de U.B.A., 1949.
- SOTOMAYOR, Luis. "Poder Judicial –Superior Tribunal de Justicia: Mensuras y otras causas en que obran relación o antecedentes de títulos de la mercedes de la provincia de La Rioja". Noviembre 1971. Acuerdo N°106/71. Mimeo, pp 16.
- ZORITA, Alonso de (Çorita) "Breve y sumaria relación de los señores... en la Nueva España por el doctor Alonso de Çorita", publicado en la *Nueva colección de documentos para al historia de México*, de García Icazbalceta, 2ª ed., México, 1941. pp. 85 y ss.

ZORITA, Alonso de, *Leyes y Ordenanzas reales de la Indias del mar Océano por las cuales primeramente se han de librar todos los pleytos civiles y criminales de aquellas partes y lo que no estuviere determinado se ha de librar por las Leyes y Ordenanças de los Reinos de Castilla*, reproducido de facsimil que se encuentra en la Biblioteca Real, Palacio de Oriente, Madrid, fechado en México en 1574, y ed. por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México, 1983-1984, p. 645.

ZORITA, Alonso de, *Relación de algunas de las muchas cosas notables que hay en la Nueva España y de su conquista y pacificación y de la conversión de los naturales de ella*, México, E. Ruiz Medrano- Wiebke Ahrndt- J.M. Leiva (ed.), Conaculta, 1999, 2 vol.

§ BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ABERDAM, Serge; *Aux origines du Code Rural, 1789-1900. Un siècle de débat*, Nantes y París, Institut National de la Recherche Agronomique, Laboratoire d'études et de recherches économiques du Nantes, 1981-82.
- ACEVEDO, Edberto, *Barroco y terminología en Hispanoamérica*, Buenos Aires, ed. Ciudad Argentina, p. 248.
- ALMANDOZ GARMENDIA, Jose A.; Fray Alonso de Veracruz y la encomienda indiana en la historia eclesiástica novohispana 1552-1556, Madrid, ed. José Porra, 1971.
- ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael *Estudio sobre las fuentes del conocimiento del Derecho Indiano-Análisis de la Recopilación de Indias de 1680*, Buenos Aires, 1941, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Argentino, II, p.446.
- ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael; *Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la legislación indiana*, México, ed. Instituto Panamericano de Historia y Geografía, 1951, p. 385
- ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael; *Historia de la propiedad comunal* [1890]; (prólogo de 1924), estudio preliminar por Alejandro Nieto, Madrid, ed. Instituto de Estudios de Administración Local, 1981, p. 457.
- ALVAREZ RUBIANO, Pedro, "Importancia político social de las mercedes de 1519 concedidas a los labradores de Tierra Firme", en *Revista de Indias*, N° 5, Madrid, 1941, p. 139-159.
- AMBROSETTI, Juan; *La question calchaquie et les travaux de la faculté de philosophie et lettres de L'Université Buenos Aires*, Viena, Separat-abdruck aus den verhandlungen des XVI Internationalen Amerikanisten-Kongresses, 1909, ed. A. Hartleben's, pp. 429-467.
- AMBROSETTI, Juan; *El bronce en la región calchaquí*, Buenos Aires, ed. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, Tomo XI (ser. 3ª, t IV), pp.163-314, imprenta de Juan Alsina, 1904.
- ARCHIVO HISTÓRICO DR. 'RICARDO LEVENE'; *Mercedes de tierras hechas por los gobernadores a nombre del rey*, La Plata, ed. por, 1979, p.287.
- ARECES, Nidia; *Campesinado y reforma agraria en America Latina*, Buenos Aires, ed. Centro Editor de America Latina, 1972, p.143.

- ARECES, Nidia, "Las sociedades urbanas coloniales", en E. Tandeter (director), *Nueva Historia Argentina*. Tomo 2. "La Sociedad Colonial", Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 2000.
- ARGUEDAS, José M^a.; *Las comunidades de España y del Perú*, Madrid, ed. Cultura Hispánica (I.C.I.-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), 1987, p. 340.
- ARGUEDAS, José María y ORTIZ RESCANIERE, Alejandro, "La posesión de la tierra, los mitos prehispánicos y la visión del universo en la población monolingüe quechua". En: *Les problèmes agraires des Ameriques Latines*, Paris: CNRS. 1965.
- ARMAS CHITTY, Juan A. ; *Influencia de algunas capitulaciones en la geografía de Venezuela*, Serie Historia, Instituto de Antropología e Historia, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Caracas, Caracas, 1967, p. 260.
- ASSADOURIAN, Carlos Sempat; CARDOSO, Ciro Flamarion S.; CIAFARINI, Horacio; GARAVAGLIA, Juan Carlos; Ernesto LACLAU: *Modos de producción en América Latina*, Buenos Aires, 1973, Siglo XXI editores, p. 211.
- ASSADOURIAN Carlos Sempat, *El sistema de la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio económico*, México, 1975, ed. Nueva Imagen, p. 167. Existe una versión aumentada editada por IEP, Lima, 1982, p. 240.
- ASSADOURIAN, Carlos Sempat; "La producción de la mercancía de dinero en la formación del mercado interno colonial: el caso del espacio peruano, siglo XVI". en *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina*, ed. F.C.E. 1979.
- ASSADOURIAN, C.S.; Beato, Guillermo; Chiaramonte, J.C.; *Argentina: de la conquista a la independencia*, 1^a reimpresión ed. Paidós. Buenos Aires, 1985; 2^a reimp. Hyspamerica. Buenos Aires. 1986.-
- ASSADOURIAN Carlos Sempat, "Estructuras económicas coloniales: El sistema de las haciendas", *Cuadernos de Historia*, Serie Ec. y Soc. N° 2, CIFYH-UNC, Córdoba, 1999, pp. 27-87.
- AVILA MARTEL, Alamiro de, "Plan para una investigación sobre la propiedad en el derecho indiano", en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, ed. Jurídica Chilena, Santiago, 1970, p. 152-153.
- BARRIENTOS GRANDON, Javier; "La literatura jurídica indiana y el ius comune", en Javier Alvarado (ed.), *Historia de la literatura jurídica en la España del antiguo régimen*, Vol. I, Madrid, ed. Marcial Pons, p. 199-285.
- BARRIERA, Dario G.; "Herederos: esfuerzos de justificación, presentación de sí ante la justicia y criterios de legitimación de 'lo justo', Santa Fe, siglo XVII", en *Avances del CESOR* (Centro de Estudios Regionales) año II, núm. 2, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, 1999, pp 23-40.

- BARRIERA, Dario G.; “La Tierra Nueva es algo Libre y Vidriosa. El delito de «traición a la Corona real»: lealtades, tiranía, delito y pecado en al jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas (1580-1581)”, en *Revista Ley, Razón y Justicia*, Neuquén, año 8, núm.11, 2010, pp.281-307.
- BAZAN, Armando; *Historia de La Rioja*, Buenos Aires, ed. Plus Ultra, 1978, p.238.
- BAZÁN LESCANO, Marcelo; “Aporte para el estudio de la familia Peñaloza”, en *Revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán*, año III, núm 3, 1970, pp. 211-218.
- BLOCH, Marc; *Les caractères originarios de l’histoire rurale francaise*, T. 1, cap. III, y t. II, “Supplement établi d’après les travaux de l’auteur par Robert Dauvergne”, PUF París, 1956.
- BOBBIO, Norberto; *La consuetudine como fatto normativo*, ed. CEDAM, Padova, 1942.
- BOLLA, Giovanni; “Le comunione familiare ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civili di 1947”, en *Scritti di diritto agrario*, p. 502 y ss.
- BOIXADÓS, Roxana. “Indios rebeldes-indios leales. El pueblo de Famatina en la Sociedad Colonial (La Rioja, Siglo XVII)”, en *Xama*, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Mendoza. 1998, pp. 132-143.
- BOIXADOS, Roxana; “Herencia, descendencia y patrimonio en La Rioja colonial”, en la revista *Andes*, núm. 8, ed CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, 1997, p.199-223.
- BAUDOT, Georges, *La Corona y la fundación de los reinos americanos*, Valencia, ed. Asociación Francisco López de Gómara, 1992, p. 321.
- BAUDOT, Georges; *Felipe II y el oficio de rey: la fragua de un imperio*, Madrid, ed. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, p. 869.
- BRIZUELA DEL MORAL, Félix A.; *La Merced de Fiambalá y Tinogasta y los Mayorazgos de Don Juan Gregorio Bazan de Pedraza y Tejeda*, Congreso Internacional V siglos de Hispanidad, Córdoba, 1990, ed. Imprenta de Universidad Nacional de Catamarca, 1991, p. 24.
- BRODHA, Johanna; “Las comunidades indígenas y formas de extracción del excedente: época prehispánica y colonial”, en Florescano, Enrique (comp.), *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina 1500-1975*; ed. FCE .1987.
- BRUNNER, Heinrich; *Grundzuge der deutschen Rechtsgeschichte*, Munich y Leipzig, ed. Duncker & Humblot, 1921, p.347. traducido al español en. Brunner, Heinrich y Von Schwerin, Claudius; *Historia del Derecho Germánico*, Barcelona, ed. Labor, 1936, p.332.

- BURRUS, Ernest; *The Writing of Alonso de Veracruz*, St. Louis, ed Jesuit Historical Institute of Roma, 1968, 2 t.
- CABRERA, Pablo; *Introducción a la historia eclesiástica del Tucumán: 1535 a 1590*, Buenos Aires, ed. Santa Catalina, 1934-1935, 2 v. (448 p.).
- CABRERA, Pablo; *Córdoba de la Nueva Andalucia. Noticias etno-geográficas e históricas acerca de su fundación*, Revista de la Universidad, Córdoba, ed. Bautista Cubas, 1917, [186]
- CALVILLO, Manuel; *Francisco Suarez: La filosofía jurídica [y] el derecho de Propiedad*, México, ed. El Colegio de México, 1945, p.114.
- CANEDO, Mariana; “Propiedades, propietarios y ocupantes. La tierra y la familia en la campaña de Buenos Aires. ‘El Pago de Los Arroyos’ 1600-1750”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera Serie, núm. 7, 1º semestre de 1993, pp. 7-28.
- CAPOGROSSI COLOGNESI, Luigi; *Proprietà e diritti reali : usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma, ed. Il Cigno Galileo Galilei, 1999.
- CARAVALE, Mario; *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Bologna, ed. Il Mulino, 2000.
- CARDIM, Pedro; HERZOG, Tamar; RUIZ IBÁÑEZ, José; SABATINI, Gaetano; *Polycentric Monarchies: How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony*, Sussex Academic Press- Fundación Séneca- Universidade Nova de Lisboa - Universidade de Açores - Red Columnaria, Brighton-Portland-Toronto, 2013, p. 320.
- CARMAGNANI, Marcello. *Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: le Chili (1680-1830)*, París, ed. SEVEPEN, 1973, p. 392
- CARMAGNANI, Marcello; *L’America Latina dal’500 a oggi, nascita, espansione e crisi di un sistema feudale*, Milán, ed. Feltrinelli, 1975, p. 403.
- CARMAGIANI, Marcello; “Elementos característicos del sistema económico latinoamericano, siglos XVI-XVIII”; en Florescano, Enrique (comp.): *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina 1500-1975*, ed. F.C.E .1987.
- CARMAGNANI, Marcello, *L’altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio*, Milán, ed. Einaudi, 2003, p. 452.
- CARONI, Pio; “La historia de la codificación y la historia del código”, en *INITIUM Revista Catalana d’Història del Dret ‘Jaume de Montjuïc’*, N° 5, 2000, 403-431.
- CARRIZO DE GEZ ELVIRA ROSA C/ MANUEL FILOMENO GONZALEZ-REIVINDICACIÓN, en *Jurisprudencia Riojana*, núm.1, ed. Del Norte SRL, La Rioja, 1969, p. 15-17.

- CARRIZO, Juan A.; *Cancionero Popular de La Rioja*. Buenos Aires. 3 t. Baiocco y Cía editores para la Universidad Nacional de Tucumán, 1942.-
- CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; Dedieu, Jean Pierre; María Victoria López-Cordón Cortezo, eds., *La pluma, la mitra y la espada : estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, ed. Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 365, Serie Maison des Pays Ibériques.
- CHEVALIER, Françoise; *La formation des grans domaines au Mexique. Terre e société aux XV^o-VII^o siècles* (Paris, 1952, p. 480). Traducido al español como *La formación de los latifundios en México: Haciendas y sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII*, México, F. C. E., 1999, 3^o ed., p. 645.
- CHEVALIER, Françoise; “El latifundio en Andalucía y en América”, pp.11-31, en Bibiano TORRES RAMÍREZ (comp), *Propiedad de la Tierra, Latifundios y Movimientos Campesinos: Actas de Las VIII Jornadas de Andalucía y América* (Universidad de Santa María de la Rábida, Marzo, 1988), ed. Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 1991, Sevilla, p. 383.
- CHEVALIER, Françoise; “Servidumbre de la tierra y rasgos señoriales en el Alto Perú: apuntes comparativos sobre los yanaconas”, en *Historica*, vol. XIII, núm, 2, pp. 153-171, Dic. 1989.
- CLAVERO, Bartolomé; “Codificación y Constitución: paradigmas de un binomio”, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XVIII, (1989), Giuffrè editores, Milán, pp.79-145.
- CLAVERO Bartolomé, Paolo GROSSI y Francisco TOMÁS Y VALIENTE (ed.), *Hispania, entre Derechos propios y Derechos nacionales* ed. Giuffrè, Milan, 1990, t I y II,
- CLAVERO, Bartolomé; “Institución histórica del derecho”, Madrid, en B. Clavero, A. Hespanha, C. Petit, J. Vallejo (comp.) *Curso general de historia del derecho*, Libro I, ed. Marcial Pons, 1992, p. 278.
- CLAVERO, Bartolomé; *Ama Llunku, Abya Yala: Constituyencia Indígena y Código Ladino por América*, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 277.
- CLAVERO, Bartolomé “El común y no su doble (a propósito de pasado y presente de los comunales y lo comunitario)”, en RQF N° 31, 2003, pp. 908-951.
- CLAVERO, Bartolomé; “Retablo constitucional de derecho indígena: Ecuador, Venezuela, Bolivia, México”. s.f. (alrededor de 2005), La Paz, p. 96.
- CLAVERO Bartolomé; A. HESPANHA; C. PETIT; J. VALLEJO, *Curso General de Historia del Derecho*, Madrid, ed. Marcial Pons.
- COING, Helmut *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, ed. Veröffentlichung des Max- Planck Instituts für Europäische Rechtsgechichte, Munich, 1973, vol. I y II.

- COING, Helmut; *Europäischen Privatrechtsgeschichte. I Alteres Gemeine Recht (1500 bis 1800)*, Munich, 1985. Traducción española *Volumen 1 de Derecho privado europeo: (1500-1800). Derecho común más antiguo*, ed. Antonio Pérez Martín-Fundación Cultural del Notariado, 1996, p. 862
- CONGOST, Rosa, “Property Rights and Historical Analysis: What Rights? What History?” en *Past and Present*, núm. 181, 2003.
- CONGOST, Rosa , Conferencia “*Tierras, hombres, leyes. La construcción social de la propiedad de la tierra*”, Instituto Ravignani – Sala de Investigadores, Ciudad de Buenos Aires, Mayo 2006.
- CONGOST, Rosa; Jorge Gelman y Rui Santos “Property rights in land: institucional innovations, social appropriations and path dependence”, ponencia al XVIth World Economic History Congress, Stellenbosch University, South Africa, Julio de 2012
- CONTE, Emanuele “Cose, persone, obbligazioni, consuetudini. Piccole osservazioni su grandi temi”, en *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècle)*”, (convegno Lione 1993), Roma 1995 *Collection de l' École Française de Rome*, 206), pp. 27-39, y http://www.idr.unipi.it/iura-communia/conte_lyon.html
- COSTA, Joaquín; *El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones con el status individual, el referéndum y la costumbre*, Buenos Aires, ed. Jurídicas Europa-América, 1958, p. 152.
- COSTA, Joaquín; *Derecho consuetudinario y colectivismo agrario* (partes I y II, Doctrina y hechos) [1915], Madrid, con estudio introductorio de José Gil Cremades, Zaragoza, ed. Guara, 1981, 11 vols.
- CRESPI, Luis y ALONSO, F. “Fuentes Judiciales Del Siglo XVIII Conservadas En El Archivo General De La Nación” Archivo General De La Nación (Ponencia) 1º Jornadas “La Fuente Judicial En La Construcción De La Memoria” Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar Del Plata. Junio de 1999.-
- CUBILÓ DE PÉREZ, Maria y MERCADO REYNOSO, Adrián; *Campesinos y la utilización de Tecnología Apropriada en el Medio Arido*, Instituto de Antropología, Universidad Nacional de La Rioja. M/S, 1994, p.231 [http://www.unlar.edu.ar/investigacion/secyt/pro_inv/p27-a-04.htm].
- CUNNIL GRAU, Pedro; “La geohistoria”, en *Para una historia de América 1: Las Estructuras*, en Carmagnani, Marcello; Hernandez Chávez, Alicia; Ruggiero, Romano (coords.). Ed. por Fideicomiso Historia de México – El Colegio de México. FCE – CM. México. 1999. p. 567.
- CUTTER, Charles; *The Legal Culture of Northern New Spain. 1700-1810*, Albuquerque, ed. University of New Mexico Press, 1995.

- CUTTER, Charles; *The Protector de Indios in Colonial New Mexico, 1659-1821*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986.
- DE BERNARDO ARES, José Manuel; “Los poderes intermedios en la ‘República’ de Jean Bodin” en *Revista de Estudios Políticos* [del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales] núm.42, 227-238 (Nov-Dic, 1984) pp. 212-237.
- DE BERNARDO ARES, José Manuel; “Gobernantes y gobernados en el Antiguo Régimen. Estado y sociedad desde la perspectiva local”, en *Axarquía* núm.14, 1985, pp. 13-40.
- DE BERNARDO ARES, José Manuel, “Rey-Reino: el binomio estatal de la corona de Castilla en el siglo XVII”. En, Juan L. CASTELLANO- Jean P. DEDIEU-María V. LÓPEZ- CORDÓN CORDEZO (eds.) *La pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, ed. Marcial Pons, serie Maison des Pays Iberiques, Barcelona, 2000, pp. 340-354.
- DE LA FUENTE, ARIEL; *Children of Facundo. caudillo and gaucho insurgency during the Argentine state-formation process, La Rioja, 1853-1870*, ed. Duke University, Londres, 2000, p. 234.
- DJENDEREDJIAN, Juan; *Economía y sociedad en la Arcadia criolla. Formación y desarrollo de una sociedad de frontera en Entre Ríos, 1750-1820*, Tesis doctoral, UBA, 2004.
- DÍAZ REMENTERÍA, Carlos J. ; “El patrimonio comunal indígena: del sistema incaico de propiedad al derecho castellano”; en Levaggi, Abelardo (coord.); *El aborigen y el derecho en le pasado y el presente*, ed. Universidad del Museo Social Argentino. Buenos Aires, 1990.
- DÍAZ REMENTERÍA, Carlos J.; “Fundación de pueblos indios en la Gobernación del Tucumán (siglos XVII-XVIII)”. *Revista de Historia del Derecho*. Buenos Aires. N°8, ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1980.
- DIOS, Salustiano de *Gracia, merced y patronazgo real: la cámara en Castilla entre 1474 y 1530*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. p.432.
- DIOS, Salustiano de “La evolución de las Cortes de Castilla durante los siglos XVI y XVII”, en *Hispania, entre Derechos propios y Derechos nacionales*, Bartolomé CLAVERO, Paolo GROSSI y Francisco TOMÁS Y VALIENTE (ed.), ed. Giuffrè, Milan, 1990, II, pp. 593-755.
- DIOS, Salustiano de; Javier INFANTE, Ricardo ROBLEDO y Eugenia TORIJANO (Coordinadores) *Historia de la propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente* Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2002, p. 652.
- DOUCET, Gastón; “Génesis de una ‘Visita de tierras’. Los orígenes de la visita a las gobernaciones del Tucumán y el Paraguay por el Lic. Don Francisco de Alfaro”, *Revista*

de Historia del Derecho. Buenos Aires. N°8, ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1980, pp. 121-193.

DOUCET Gastón, “De Juan José Feliciano Fernández Campero a Fernando Campero: Aportes documentales y críticos al estudio de la sucesión del Marquesado del Valle de Tojo en el Siglo XIX”, Separata de autor, Buenos Aires, 1994, pp. 9-133, s/e.

DOUCET, Gastón Gabriel: “Los réditos de Quilpo: Funcionamiento de una encomienda cordobesa a fines del siglo XVI /(1595-1598) en *Jahrbuch für Geschichte von Staat Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, núm 23, Koln- Viena, 1986

ENDREK Emiliano, *El mestisaje en el Tucumán*, Cuadernos de Historia, núm. XXXV, Instituto de Estudios Americanistas, ed. Dirección General de Publicaciones (Universidad de Córdoba), 1967, p.39.

FERRERO, Carolina y NICOLINI, Silvina; “Transferencias de tierras rurales durante el siglo XVII en Córdoba”, en *CUADERNOS DE HISTORIA*, Serie Economía y Sociedad, núm. 4, CIFYH-UNC, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2001, pp. 105-130.

FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis. *La propiedad inmueble y el registro de la propiedad en las sociedades antiguas: el Egipto faraónico*. Madrid, ed. Centro de Estudios Registrales, D.L. 1993.

FERRANTE, Riccardo; en “Cultura giuridica e codificazione”, en *Cliothemis, Revue électronique d'histoire du droit*, N° 2, <http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-2>

FOSTER, George; *Culture and Conquest: America's Spanish Heritage*, traducción al español de Carlo Castro, *Cultura y Conquista: la herencia española de América*, Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana, Xalapa, ed. Talleres Graficos de la Nación, p. 467, 1962.

FORTUNET, Françoise; “Le Code rural ou l'impossible codification”, en *Annales Historiques de la Révolution Française*, 247, 1982, pp. 95-112

FRADKIN, Raúl O. “Las quintas y el arrendamiento en Buenos Aires (siglos XVIII y XIX)”, en Fradkin R., Canedo M., Mateo J. (comp.) *Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX*. GIHRR (Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense), Facultad de Humanidades. Departamento de Historia. Universidad Nacional de Mar del Plata. 1999. pp. 263.-

FRADKIN Raúl y GARAVAGLIA, Juan *La Argentina Colonial. El Rio de La Plata entre el siglo XVI y XIX*, Buenos Aires, ed. Siglo XXI y Fundación OSDE, 2009, p. 290.

FRADKIN Raul y Gabriel DI MEGLIO (comp.) *Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense*, Buenos Aires, ed. Prometeo, 2013, p.459.

GARAVAGLIA, Juan; “Un modo de producción subsidiario: la organización económica de las comunidades guaranizadas durante los siglos XVII y XVIII en la formación regional

altoperuana-rioplatense”, en ASSADOURIAN, Carlos Sempat; CARDOSO, Ciro Flamarion S.; CIAFARINI, Horacio; GARAVAGLIA, Juan Carlos; Ernesto LACLAU: *Modos de producción en América Latina*, Cuadernos del Pasado y el Presente, Córdoba, 1973, reeditado por Siglo XXI editores, México (Decimotercera edición), 2005. 161-193.

GARAVAGLIA, Juan “Las actividades agropecuarias en el marco de la vida económica del Pueblo de Indios de Nuestra Señora de Los Santos Reyes Magos de Yapeyú: 1768-1806”, en FLORESCANO, Enrique, *Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina*; México, ed. Siglo XXI-FLACSO, 1975, pp. 464-487.

GARAVAGLIA, Juan, *Mercado interno y economía colonial*, ed. Grijalbo, México, 1983, 398.

GARAVAGLIA, Juan, “La guerra en el Tucumán colonial. Sociedad y economía en el área de frontera”, Lima, en HISLA: REVISTA LATINOAMERICANA DE HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL, N° 4, 1984.

GARAVAGLIA, Juan; “Los textiles de la tierra en el contexto colonial rioplatense ¿una revolución industrial fallida?, Anuario del IEHS –Instituto de Estudios Históricos Sociales “prof. Juan Carlos Grosso”, 1, (1986) 45-87 Universidad Nacional del Centro. En línea en <http://www.unicen.edu.ar/iehs/Indice%201.html> (Consultado el 24/04/2016)

GARAVAGLIA Juan y MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan; *Historia de América Latina, de los orígenes a 1805*, ed. Crítica, Barcelona, 2005, 2 vols. p. 549 y 693.

GARAVAGLIA, Juan y FRADKIN, Raúl, *Hombres y mujeres de la colonia*, ed. Sudamericana, Buenos Aires, Octava edición, 2007, 279.

GARAVAGLIA, Juan ; GAUTREAU, Pierre *Mensurar la tierra, controlar el territorio. America Latina, siglos XVIII- XIX*. Rosario, Prohistoria Ediciones, p.325, 2011, En línea, en www.archives-ouvertes.fr. <halshs-00992284> (Consultado el 08/08/2015).

GARCÍA-GALLO DE DIEGO Alfonso “El Proyecto de «Código peruano» de Gaspar de Escalona y Agüero, en AHDE 17 (1946) pp. 889-920.

GARCIA GALLO, Alfonso. “Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI”, en AHDE 40 (1970) pp.313-347;

GARCIA GALLO, Alfonso; *Metodología de la historia del Derecho Indiano*, Ed. Jurídica de Chile, 1971.

GARCIA GALLO, Alfonso. *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano*, Madrid, ed. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1992.

GARCIA LINERA, Alvaro *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares de Bolivia*, Antología y presentación de P. Stefanoni. ed. CLACSO-Prometeo, Buenos Aires, p. 412.

- GARCÍA MARÍN, J. Ma., *Monarquía Católica en Italia: Burocracia imperial y privilegios Constitucionales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.
- GARCÍA MARÍN, J. Ma., *Teoría política y gobierno en la Monarquía Hispánica*, Madrid, ed, Centro de Estudios Políticos y Cosntitucionales, p. 329.
- GARZON MACEDA, Ceferino; *Economía del Tucumán, economía natural, economía monetaria en los siglos XVI-XVII-XVIII*. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Estudios Americanistas “Dr. Enrique Martínez Paz”. Serie Histórica N° XXXV. Córdoba. 1968.-
- GIBSON, Charles; *España en América*, Barcelona, ed. Grijalbo, 1977, p. 368.
- GIBSON, Charles; *The Inca concept of sovereingnty and the Spanish Administration in Peru*, Austin, The University of Texas Press, 1948, p. 145 .
- GIBSON, Charles; *Los aztecas bajo el dominio español : 1519-1810* , México, ed. Siglo XXI, 1986, p. 531
- GENTILE, Margarita; “El testamento del indio Domingo Chuca (Tucumán, 1620) Acerca de la costumbre como fuente del derecho”, XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, septiembre de 2004, ed. Dunken.
- GIL MONTERO, Raquel “La población colonial del Tucumán”, en *Cuadernos de Historia de la Población*, 3-4, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2005, pp. 65-122.
- GOLDMAN, Noemí; “Legalidad y legitimidad en el caudillismo. Juan Facundo Quiroga y La Rioja en el interior rioplatence (1810-1835)” en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera Serie, núm. 7, 1º semestre de 1993, pp. 31-58.
- GÓMEZ PÉREZ, Carmen y MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan; “Las sociedades indígenas y los conquistadores . Apus y supay”, Quito, en Manuel BURGA (comp.) *Historia Andina*, Vol. II, 1ª parte. Universidad Andina Simón Bolívar, 1996.
- GÓNGORA Mario *El Estado en el Derecho Indiano. Época de fundación: 1492-1570*, Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales. Universidad de Chile. Santiago, 1951. p.328.
- GONZALEZ RODRIGUEZ, Adolfo *La encomienda en el Tucumán*, Sevilla, ed. Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, p 456.
- GRAFE, Regina y IRIGOIN, Alejandra “Bargaining for Absolutism: A Spanish Path to Empire and Nation Building,” *Hispanic American Historical Review*, LXXXVIII (2008), 173–209.

- GRAFE, Regina; “On the spatial nature of institutions and the institutional nature of personal networks in the Spanish Atlantic”, en *Culture & History Digital Journal*, 3(1): 2014, en línea en <http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2014.006>.
- GRAFE, Regina; “Tyrannie à distance: la construction de l’État polycentrique et les systèmes fiscaux en Espagne (1650-1800)”, pp.167-186; en Katia BEGUIN (ed.) *Ressources publiques et construction étatique en Europe*, Ministère des Finances et des Comptes Publics, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Paris, 2015, en línea en https://www.researchgate.net/publication/277011146_Tyrannie_a_distance_la_construction_de_l%27Etat_polycentrique_et_les_systemes_fiscaux_en_Espagne_1650-1800 (Consultado el 04/12/2015)
- GROSSI, Paolo; *Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale*, Padova, ed. CEDAM, 1966, p. 220.
- GROSSI, Paolo; *Un’alto modo di possedere, L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giurídica post-unitaria*, ed. Laterza, Bari, 1974, p. 392.
- GROSSI, Paolo. “‘Dominia’ e ‘Servitutes’: inversión sistemática de diritto comune in tema di servitù”. *Quaderni Fiorentini Per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, Milán, ed. Giuffrè, núm.18, 1989, p. 755-798.
- GROSSI, Paolo “Assolutismo giuridico e proprietà collettive”, en *RDQF*, Milán, núm. XIX, 1990, pp. 504-564.
- GROSSI, Paolo; “La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico”, en *RDQF*, Milan, núm. XVII, ed. Guiffè, 1990, pp. 358-422.
- GROSSI, Paolo; *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milán, ed. Giuffrè, 1992, Vol. 41, p. 246 y ss.
- GROSSI, Paolo; “Un derecho sin estado. La noción de autonomía como fundamento de la constitución jurídica medieval”, en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, núm. 9, (1997), p. 167-178.
- GROSSI, Paolo; *Mitologie giuridiche della modernità* . Milán, ed. Giuffrè, 2001. p. 267.
- GROSSI, Paolo, *A History of European Law*, ed. John Wiley-Blackwell, Malasia, 2010, p. 189.
- GRUZINSKY, Serge, *La Colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en México español*, siglo XVI-XVIII, ed. FCE, México, 4º reimpresión 2001, p. 310.
- GRUZINSKY, Serge; “Monarquía católica, mundialización y mestizajes: algunas pistas para el historiador”; en *MEMORIA AMERICANA*, núm. 11, Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A, 2003, p.9-33.

- GUERRERO, Andrés y PLATT, Tristan, “Proyecto antiguo, nuevas preguntas: La antropología histórica de las Comunidades andinas cara al nuevo siglo”, en Hans Joachim KÖNIG, Tristan PLATT y Colin LEWIS (coord.) *Estado-nación, Comunidad Indígena, Industria, Tres debates al final del Milenio*, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Cuaderno núm. 8 de AHILA, ed. Ridderprint-Ridderkerk, Holanda, 2000, p. 95-131.
- HEGEL G. W. F. *Propedeutica filosófica*, Florencia, ed. Sansoni, 1951, p.289.
- HERRERA DE FLORES, Marta; *Tierra y Propiedad en Mendoza Colonial*, Mendoza, ed. Ediciones Culturales de Mendoza, 1997, p.144.
- HESPANHA, Antonio-Manuel <https://sites.google.com/site/antoniomanuelhespanha/home> es el sitio del Profesor A. Hespanha con registro actualizado de su obra, videos de conferencias y enlaces.
- HESPANHA, Antonio-Manuel, “Savants et rustiques. La violence douce de la raison juridique”, *Ius Commune*, X, 1983, pp.4-48.
- HESPANHA, Antonio-Manuel *La gracia del derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p.351.
- HESPANHA, Antonio-Manuel *As Vésperas do Leviathan. Instituições e 'poder político. Portugal, século XVII*, Coimbra, Almedina, 1994.
- HESPANHA, Antonio-Manuel, *a propósito de As Visperas de Leviathan*, en «Heautontimorumenos, Scienza & Politica, per una storia delle dottrine» Vol 3, N° 5 (1991), Università di Bologna, pp 107-113.
<http://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/3066/2463>
- HESPANHA, António, *Depois do Leviathan, entrevista a António Hespanha* de Pedro Cardim, en *Análise Social*, 2011, Vol. 46, núm.2000, pp. 430-445.
- HESPANHA, Antonio M., *Cultura jurídica europea, síntesis de un milenio*, Madrid, ed Tecnos, 2002, p.277.
- HESPANHA, Antonio; «Pequenas repúblicas, grandes estados. Problemas de organização política entre antigo regime e liberalismo», en István Jancso (comp), *Brasil: Formação do estado e da nação*, San Pablo, ed. Huicitec, Brasil, 2003, p. pp. 93-109 [703].
- HESPANHA, Antonio; “A Note on Two Recent Books on the Patterns of Portuguese Politics In the 18th Century” en *E-Journal of Portuguese History*, Volumen 5, num. 2, Verano 2007, en internet:
https://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/contacts.html

- HESPANHA, Antonio-Manuel , *A Política Perdida. Ordem e Governo antes das Modernidade*, Curitiba, Juruá, 2010.
- HERRUP, Cynthia; “The countries and the country: some thoughts on seventeenth-century historiography”, en *Social History*, VII, 1983, pp. 169-181.
- IMTI-LATINOCONSULT ARGENTINA S.A., “Intervención operativa para el procesamiento jurídico económico y social de la tierras indivisas de la provincia de La Rioja”, en *Procesamiento de la tierras indivisas-1968-Tomo I*, Introducción y metodología, S. C., 1968, p. 234.
- KÖNIG, Hans Joachim; PLATT, Tristan y Lewis, COLIN (coords.) *Estado-nación, Comunidad Indígena, Industria: Tres debates al final del Milenio*, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA),
- IRRIBARREN, Guillermo; *Temas riojanos. Reflejos del centralismo*, Buenos Aires, ed. Talleres Gráficos de la Revista Oral de Ciencias Médicas, 1946, p. 227.
- LAMACCHIA, Ada y Perena, Luciano; *Relectio de Indis: la questione degli indios*, Bari, ed. Levante, 1996, p.136
- LARROUY, Antonio; Manuel SORIA, *Autonomía Catamarqueña: Homenaje en su primer centenario*, Comisión de Festejos (ed), San Fernando de Catamarca, p.244. 1921.
- LARROUY, Antonio (Padre), *Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán*, Tomo 1, 1591-1700, Buenos Aires, 1923. Tomo 2, el siglo XVIII, Tolosa, 1927.
- LASARTE ALVAREZ, Carlos. *Principios de derecho civil*, Madrid, ed. Trivium, 2000.
- LEIVA Alberto; “La aplicación de la media anata en el Virreinato del Río de La Plata”, en *REVISTA CHILENA DE HISTORIA DEL DERECHO*, núm 13, Santiago, p. 21-43, 1987.
- LEON, Antonio de; *Tratado de confirmaciones reales*, Madrid. 1630.
- LEVAGGI, Abelardo; *Historia de la prueba en el derecho civil indiano y argentino, siglos XVI-XIX*, ed. Depalma. 1974. Buenos Aires.
- LEVAGGI, Abelardo; “Antecedentes históricos de la controversia entre las Provincias y la Nación por la propiedad del suelo”, en *Investigaciones & Ensayos*, núm 32, enero-junio de 1982, pp. 239-256.
- LEVAGGI, Abelardo; “Supervivencia del derecho castellano-indiano en el Río de la Plata (siglo XIX)“, in *Jahrbuch für Geschichte von Staat Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, 1985, XXII, pp.285-294.
- LEVENE, Ricardo; *Introducción a la Historia del Derecho Indiano*, Tomo 1, Buenos Aires.1924, 3 vols.

- LEVENE, Ricardo; *Investigaciones acerca de la Historia económica del virreynato del Plata*, Buenos Aires, ed. Librería el Ateneo, 1952, t. II, p. 211 y ss.
- LEVI, Giovanni; “La transformación de la tierra en mercancía: El caso piamontés (1680-1717”, en *HISPANIA*, LV/3, núm. 191, 1995, pp. 821-844.
- LEVILLIER, Roberto; *Descubrimiento y Población del Norte argentino por españoles del Perú, 1543-1553*, Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino ‘La Argentina en el Siglo XVI’, Talleres Gráficos Porter Hnos. Buenos Aires, 1945.
- LEVILLIER, Roberto; *Don Francisco de Toledo, Supremo organizador del Perú*, Tomo 1 “Su vida y su obra 1515-1582”. Espasa-Calpe. SA. Madrid 1935. p. 487; T. 2 “Sus informaciones sobre los Incas” (1570-1572”) Bs Aires, p. 507. Tomo 3. “La Historia Indica de Sarmiento de Gamboa que el Mandó escribir cotejado con los comentarios de Garcilazo y otras crónicas”. Espasa. Buenos Aires. 1942, pp 379 (19 láminas y 49 grabados).
- LEVILLIER, Roberto; *Gobernantes del Perú. Cartas y papeles*, Buenos Aires, ed. Espasa, t. III, 1949.
- LEVILLIER, Roberto; *Guerras y Conquistas en Tucuman y Cuyo, 1554-1574*, Buenos Aires, ed. Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino ‘La Argentina en el Siglo XVI’, Talleres Gráficos Porter Hnos., 1945
- LEVILLIER, Roberto; *Nueva Crónica de la conquista del Tucumán*, 3 tomos; t. 1, Buenos Aires, 1926; t. 2, Macon Potat Freres Imprimerus, Varsovia, 1928; t. 3 Varsovia, 1927-29.
- LEVILLIER, Roberto; *Papeles de los Gobernadores en el siglo XVI*, 2 tomos. Madrid. Imprenta Juan Pueyo, 1920
- LEVILLIER, Roberto; *Papeles Eclesiásticos del Tucumán*, Madrid, Vol 2, Imprenta Juan Pueyo, 1924.
- LEVILLIER, Roberto; *La Audencia de Charcas, correspondencia de presidentes y oidores, 1580-1589*, Madrid, ed. Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino, 1919, tomo I, p. 549.
- LEVILLIER, Roberto; *Probanzas y méritos y servicios de los conquistadores*, 2 tomos. Madrid. 1919-1920.
- LOCKHART, James; “*Economy and Haciend: The evolution of the Great Estate in the Spanish Indies*”, en *Hispanic American Historical Review*, 49. N° 3. Durham, (N.C.), 1969.
- LOHMANN VILLENA, Guillermo; *Juan de Matienzo, autor de "Gobierno del Perú" : (su personalidad y su obra)*, Sevilla, ed. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1966, p.120.

- LÓPEZ SARRELAUGUE, Delfina, “Las tierras comunales indígenas en la Nueva España en el siglo XVI”, en *Estudios de Historia Novohispana*, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, año I Número 1, México, ed. Dirección General de Publicaciones e la Universidad Autónoma de México, 1966, pp.131-149.
- LÓPEZ Y LÓPEZ Ángel M. “Gény, Duguit y el derecho subjetivo: evocación de una nota polémica”, en *RDQF*, núm 20, 1991, p. 165. (161-179).
- LÓPEZ Y LÓPEZ Ángel M. “Prólogo para civilistas”, en Grossi, Paolo; *La propiedad y las propiedades : un análisis histórico*; Madrid, ed. Cívitas, 1992. p 134.
- LORANDI, Ana; “Pleito de Juan Ochoa de Zárate por la posesión de los indios ocloas. Un caso de verticalidad étnica o un relictos del archipiélago estatal”; En *Runa*. Vol. XIV. Buenos Aires, 1984.
- LORANDI, Ana; *Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato del Perú en los siglos XVI y XVII*, Barcelona, ed. Gedisa –UBA Facultad de Filosofía y Letras, 2002, p. 222.
- LOZANO, Pedro; *Historia de la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y el Tucumán*. 3 t. Imprenta Popular. Buenos Aires. 1874.
- LUNA, Felix C. “Rioja, la noble”, en *Revista de la Junta de Historia y Letras de La Rioja* Año III; N° 4; Octubre- Noviembre y Diciembre de 1944. La Rioja.
- LUQUE COLOMBRES, Carlos; “Los ejidos de Córdoba y la enfiteusis”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, ed. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, núm. 9, 1958, Imprenta de la Universidad, pp. 96-114.
- MACERA, Pablo, “Feudalismo colonial americano. El caso de las haciendas peruanas”, t. III, en *Trabajos de Historia*, ed. Instituto Nacional de Cultura, Lima, 1977, p139-227.
- MANDELLI, Humberto; “Algunas consideraciones sobre la tierra”. En *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, núm. 6. 1954. pág. 124.
- MANZANO, Abelardo; “Las leyes y costumbres indígenas en el orden de prelación de fuentes del Derecho Indiano”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho ‘Ricardo Levene’*, Buenos Aires, 1967, XVIII, pp. 65-71.
- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan; *Ejército y milicianos en el mundo colonial americano*, Madrid, Colección MAPFRE, 1992, p. 316.
- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan; “El día que los negros cantaron la marsellesa. El fracaso del liberalismo español en América”, pp. 145-181.

- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan ; “Militarismo y constitucionalismo en el ocaso del orden colonial en Sierra Andina”, en, Julio Valdeón Baroque et Al., *Acta Salmanticensia: Estudios históricos y geográficos*, núm 97, setiembre de 1995, Salamanca, ed. Universidad de Salamanca, p.100-139.
- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan; “The Social Wordl of the Military in Perú and New Granada: the Colonial Oligarchies in Conflict”, en *Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru*, ed. Allan Kuethe, John Fisher y Anthony McFarlane, pp. 54-95, Louisiana State University Press, Baton Rouge y Londres. 1990.
- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan; “La Defensa del Imperio: De los Señores de la Guerra a los Soldados del Rey”, en *UNESCO. Historia General de América Latina*.Vol.III-2. *Consolidación del Orden Colonial*. (Coord.: Allan Kuethe y Alfredo Castillero), París, pp.615-669, Editorial Trotta-UNESCO, 2001.
- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan; *Papeles españoles para una revolución americana: intercambios intelectuales a fines del siglo XVIII*, Mimeo, Curso del programa de Doctorado de Élités y Procesos de Convergencia Cultural y Económica 1450-1900, Universidad Pablo de Olavide. Julio 2002.
- MARILUZ URQUIJO, José M; *Ensayo sobre los juicios de residencia indianos*; Sevilla, ed. Escuela de Estudios Hispano-americanos – CSIC, 1952, XVIII, p.318.
- MARILUZ URQUIJO, José M.; *El régimen de la tierra en el derecho indiano*, Buenos Aires, ed. Perrot, 1968, p.173.
- MARILUZ URQUIJO, José María; “La propiedad en el derecho indiano”, en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, ed. Jurídica Chilena, Santiago, 1970, pp. 154-157.
- MARILUZ URQUIJO, José M.; *El derecho prehispánico y el derecho indiano como modelos del derecho castellano*, Madrid, ed. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1973, p.101-113.
- MARILUZ URQUIJO, José “Algo más sobre la comunidad de montes en el Rio de La Plata”, en Revista del Instituto de Historia del Derecho (en adelante RIHD) núm 1, 383-398, (1973) en línea, en <https://www.dropbox.com/s/r9aq39w1v44nzq2/Revista%20de%20Historia%20del%20Derecho%20n%C2%B01.pdf?dl=0> , (consultado el 12-03-2016)
- MARILUZ URQUIJO, José M.; *Una utopía jurídica española del siglo XVIII*, Buenos Aires, en *Utopías* N°-17, 1981, p.303-333 ;. Reproducido en “Pensamiento Utópico y reformismo Borbónico” 1998, en www.minterior.gov.ar -
- MARILUZ URQUIJO, José M. *La búsqueda de la justicia: el derecho indiano*, ed. Pontificia Commissio Pro America Latina, 1992, p.453-458.

- MARTINES GIJÓN, José; “La prueba judicial en el derecho territorial de Navarra y Aragón durante la baja edad media”, en *AHDE*. 1961, pp. 33-45. Madrid.
- MATIENZO, Juan de; *Gobierno del Perú*, [D. Ioannis Matienci ac Peraltae iunioris ... Repetitiones tredecim in varia iurisconsultorum responsa, imperatorum sanctiones et pontificum decreta .., ed. Antverpiae apud Martinum Nutium, 1628, p. 308], Buenos Aires, ed. Cía. Americana de Billetes de Banco, p. 221.
- MATRAYA Y RICCI, Juan Joseph; Catálogo cronológico de pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales emanados despues de la recopilación de las leyes de indias [1819] ; Prólogo de Mariluz Urquijo, José M.; ed. Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. Buenos Aires, 1985.
- MERCADO REYNOSO, Adrián; “Analisi del capitalismo agricolo sulla base dello studio comparato della produzione aziendale della colonia ortofrutticola ‘Las Parcelas’, La Rioja, Argentina”. Dipartimento di Ricerche Economico Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Cagliari, M/S, 1993. p 209.
- MERCADO REYNOSO, *Tierras, Cosas, Consuetudes. Formas disociadas de propiedad inmobiliaria en la Ciudad de todos los Sanctos de la Nueva Ríoxa*, Universidad Nacional de Rosario Editora, Rosario, 2003, p. 308.
- MERCADO REYNOSO, “Mercedes de tierra en nombre del Rey en La Rioja Colonial”, Actas del 51º Congreso de Americanistas, Santiago de Chile, Julio de 2003.
- MERCADO REYNOSO, Adrián; “Unicidad y diversidad en el sujeto patrimonial indiano: el pensamiento novohispano (s. XVI y XVII) 1º Jornadas Experiencias de la Diversidad. Facultad de Humanidades y Artes, CEDCU—*Centro de Estudios sobre la Diversidad Cultural*—, U.N.R., 9 y 10 de Mayo 2003, CD-ROM, 2004.
- MERCADO REYNOSO, “La producción textil en una Hacienda colonial hacia el 1700 en la Gobernación del Tucumán: La Hacienda del valle de Abaucán”, ponencia publicada con el título de “La hacienda y encomienda de Anillaco, Noroeste argentino, siglo XVII” en *Actas de las III Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad-* Rosario, Septiembre de 2004, en Beatriz DÁVILO, Marisa GERMAIN, Claudia GOTTA, Analía MANAVELLA y María Luisa MÚGICA (Coords de la obra), Rosario, Ediciones digitales Nueva Hólade, 2006. ISBN 987-95463-9-3
- MERCADO REYNOSO, Adrián; “Estatalidad del derecho indiano en la aplicación de las sanciones a encomenderos riojanos por el oidor Lujan de Vargas en su *Visita* de 1693”. XX Jornadas de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, septiembre de 2004, ed. Dunken.

- MERCADO REYNOSO, Adrián *Y el inca volverá: indios insurgentes y calceteros en el periodo de la desintegración étnica en el sud calchaquí, siglo XVII* . - 1a ed. Imprenta del Estado y Boletín Oficial, 2011. La Rioja, 258 p. ; ISBN: 978-987-33-0793-5
- MERCADO REYNOSO Adrián “El eterno retorno a la sociedad colonial de blancos e indígenas en el origen de la celebración religiosa del Tinkunaco riojano”, en JOURNAL OF THE SOCIOLOGY AND THEORY OF RELIGION, Año 2013, Vol. 2, Número 1, en red ISSN-e 2255-2715, Vol. 2, Nº. 1, 2013 , pág. 45-71 Texto completo (pdf) en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4760179>
<http://sociologia.palencia.uva.es/revista/index.php/religion/article/view/19>
- MERCOL, Italo: “Noticia histórica de las mercedes” en Italo Mercol (Comp.), *Los Derechos y acciones en las mercedes y campos comuneros: La solución riojana*, La Rioja, ed. Publicación técnica n° 6 de la Dirección General de Catastro de la Provincia de La Rioja, p. 86, 1976 [Aporte al segundo congreso nacional de derecho registral, Córdoba, 1976].
- MILLER ASTRADA, Luisa. “Repartimientos de tierras a particulares en Salta (siglos XVI-XVIII)”. En REVISTA del Instituto de Historia del Derecho, núm. 5 (1953).
- MILLETICH, Vilma; “El Rio de la Plata en la economía colonial”, en E. Tandeter (Director), *Nueva Historia Argentina*, Buenos Aires, Tomo 2. “La Sociedad Colonial”,. Editorial Sudamericana. 2000, p. 221.
- MOISSET DE ESPANÉS, Luis; “La legislación sobre hechos y actos jurídicos: evolución histórica”, en Cuadernos de Historia, año 12, núm. 12, Córdoba, pp. 15-31.
- MONTEMAYOR Y CÓRDOBA DE CUENCA, Juan Francisco; *Discurso Político Histórico y Jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos aprehendidos en justa guerra, premios y castigos de los soldados. Premios y castigos de los soldados...*, México, ed. Mexico: POR IVAN RRVIZ, 1658, p. 307.
- MONTES, Aníbal , “El Gran Alzamiento diaguita (1630-1643)”, en *Revista del Instituto de Antropología*, Tomo III, UNC. 1959.
- MÖRNER MAGNUS, Francisco Martinez; *Medidas como precios y como instrumentos para la explotación. Un expediente cuzqueño del siglo XVIII*, Cusco, ed. Separata ALLPANCHIS, N°15, 1980, pp. 133-160.
- MÖRNER, MAGNUS; *Compraventas de tierras en el Cuzco: 1825-1869* . Estocolmo, ed. Instituto de Estudios Latinoamericanos, 1984. p. 65.
- MÖRNER, MAGNUS; *The Spanish American Hacienda: a survey of recent research an debate*. HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW, núm. 53 (2), pp. 183-216, Duke University Press.

- MÖRNER, MAGNUS; *Actividades políticas y económicas de los Jesuitas en el Rio de la Plata*, Buenos Aires, ed. Hyspamérica, 1986 [1968] p. 162.
- MOXÓ, Salvador de; *Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla Medieval*, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 2000, p. 370.
- MOYANO ALIAGA, Alejandro. “Aportes documentales para el estudio de población de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis (siglo XVIII)”, en Dora Estela Celton (coord.) *Fuentes utiles para el estudio de la población Americana*, ed. Ecuatoriana. Quito. 1998.
- MOYANO ALIAGA, Alejandro. “Expedientes riojanos en el archivo Histórico de Cordoba (siglo XVII)”. Universidad Nacional de Córdoba. Mimeo.2001.
- MURRA, John V.; et al. (ed.), *Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562 [de] Iñigo Ortiz de Zuñiga, Visitador*, Huánuco (Perú), Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Letras y de Educación, 1967-1972, 2 vols.
- MURRA, John; *La organización económica del Estado Inca*, México, ed. Siglo XXI, [1955] 1978, p. 426.
- NOEJOVICH, Héctor Omar; “La Noción Abstracta De Propiedad En América: Una Visión Desde Los Andes”, en: Derecho, 56, Pontificia Universidad Católica del Perú, Diciembre 2003,.
- O’PHELAN GODOY, Scarlett; “Hacia una tipología y enfoque alternativo de las revueltas y rebeliones del Perú Colonial (siglo XVIII), en *Jahrbuch für Geschichte von staatswirtschaft Lateinamerikas*, núm. 21, 1984, p.127-153.
- OTS CAPDEQUÍ, José M^a, *El régimen de la tierra en la América española durante el periodo colonial*, ed. Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo, Trujillo, 1946.
- OTS CAPDEQUÍ, José M^a, *España en América. El régimen de tierras en la época colonial*. Fondo de Cultura Económica. México, 1959.-
- OTS CAPDEQUÍ, José M^a.; El derecho de propiedad en las Indias, en AHDE, II. S.f.-
- OTS CAPDEQUÍ, José M^a; *Instituciones sociales de la América Española en el periodo Colonial*, ed. Biblioteca Humanidades, La Plata, 1934, tomo XV, p. 224.
- OEXLE, Otto “Vom ‘Staat’ zur ‘Kultur’ des Mittelalters. Problemgeschichten un Paradigmenwechsel in der deutschen Mittelalterforschung”, pp. 14-61, en Natalie FRYDE, Pierre MONET, Otto OEXLE y Leslek ZUGNER (coords) *Die Deutung der mittelalterlichen Gesellschaft in der Moderne- L’imaginaire et les conceptions modernes de la société médiévale*, 2006, Ed. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- PIANA DE CUESTAS, Josefina; “De encomiendas y mercedes de tierras: afinidades y precedencias en la jurisdicción de Córdoba” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani, Tercera Serie, núm. 5, 1º semestre de 1992, p. 20.

- PICCINELLI, Ferdinando; *Studi e ricerche intorno alla definizione Dominium est ius utendi et abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur*; con una nota di lettura di Luigi Capogrossi Colognesi, Nápoles, ed. Jovene, 1980.
- PIETSCHMANN, Horst “El ejercicio y los conflictos de poder en Hispanoamérica”, en en UNESCO. Historia General de América Latina. Vol.III-2. *Consolidación del Orden Colonial*. (Coord.: Allan Kuethe y Alfredo Castillero), París, pp. 670-692, ed. Trotta-UNESCO, 2001.
- QUESADA, Vicente Gregorio, “Actas de Fundación de las Ciudades Capitales de Provincia en la Republica Argentina”, en Revista de Buenos Aires. Historia Americana, Literatura y Derecho, Miguel Navarro Viola y Vicente Quesada (directores), tomo VII, Buenos Aires, 1886, pp. 530-540
- QUIROGA, Laura; LAPIDO, Gabriela, “Las Aguas del Hualfin: Contradicciones y Conflictos en un año de seca”, en *Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina*, núm. 37, agosto, 2011, 45-60, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile; en línea en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371336247004>
- QUIROGA, Laura; “La descripción política de los paisajes americanos: Guerra y paisaje en la Relación Geografica de 1604. La Provincia de los Diaguitas (Gobernación del Tucumán, Virreinato del Perú)”, en evaluación para prensa en *Melanges*, Casa Velázquez (École des hautes études hispaniques et ibériques), p. 26.
- RAMÍREZ, Susan E.; *Patriarcas provinciales: la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú colonial*; versión española de Nellie Manso de Zúñiga, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1991,
- RAMOS, Demetrio; “Notas sobre historia de la economía agrícola de Hispanoamérica”, en *Revista de Indias*, N° 103-104, Madrid, 1958.
- RAVIGNANI, Emilio; *La población indigena de las regiones del Rio de la Plata y Tucumán en la segunda mitad del siglo XVII*. XXV Congreso internacional de Americanistas, 1932. Separata de actas, tomo II, s/f.
- REIMUNDIN, Ricardo; *Antecedentes históricos del derecho procesal indiano*. Tucuman, ed. Universidad nacional de Tucuman, Facultad de derecho y ciencias sociales, 1953.
- REYES, Marcelino; *Bosquejo Histórico de la Provincia de La Rioja*, Talleres Gráficos de H. Cattáneo. Buenos Aires. 1913.
- RIAZA, Román y GARCÍA GALLO, Alfonso *Manual de Historia del Derecho Español*, Librería Gral. de Victoriano Suarez, Madrid, 1934.
- RODRIGUEZ PINELO, León; *Tratado de confirmaciones reales de encomiendas, oficios y casos en que se requieren para las Indias Occidentales* [1629], Caracas, ed. Eduardo Arcila Farías para la Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1979. 3t.

- RUBIO DURÁN, Francisco, *Punas, valles y quebradas: tierra y trabajo en el Tucumán colonial. Siglo XVII*, ed. Diputación de Sevilla, Sevilla, 1999, p.567.
- RUBIO DURÁN, Francisco, *Tierra y ocupación en el área surandina*, Aconcagua libros, Colección La Otra América. Sevilla. 1997, p. 317.
- RUIZ IBÁÑEZ, José; “Una historia más allá del paradigma centro-periferia”. Texto inédito.
- RUIZ IBAÑEZ, José; “Les acteurs de l’hégémonie hispanique : du monde à la péninsule Ibérique”, *Annales Histoire Sciences Sociales*, 2014, págs 927-954, en <https://www.cairn.info/revue-Annales-2014-4-page-927.htm>
- SACCHETTI DE ROVERE, Laura: “Concesión de mercedes, tierras y solares en Salta. (1582-1589)”, pp.405-413; en AA.VV., *Los primeros cuatro siglos de Salta. 1582 – 16 de Abril – 1982. Una visión multidisciplinaria*. Salta, ed. División de Publicaciones de la Universidad Nacional de Salta, 1982, p. 529.
- SAMPERE Y GUARINOS, Juan; *Consideraciones sobre las causas de la grandeza y de la decadencia de la monarquía española*, ed. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1998, p.277 (traducción de Juan Rico Gimenez).
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio; *En torno a los orígenes del feudalismo*. Edición del Autor, 1942, Mendoza, 234.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio; “Las Beheterias, la encomendación en Asturias, León y Castilla”, en *AHDE*, 1954.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio; *Estudios sobre las instituciones medievales españolas*. Ed. Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. 1965. México. p. 830.
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio; *España: un enigma histórico*, ed. EDHASA, Barcelona, 1983 (8ª reimpresión), 2 Vol. I, p. 654, II, p. 729.
- SÁNCHEZ BELLA, Ignacio; *La organización financiera de las Indias*, siglo XVI, Sevilla, 1968.
- SANCHEZ BELLA, Ismael, *Derecho indiano: estudios*, Pamplona, ed. Universidad de Navarra, 1991. 2 v. ; [Colección jurídica.1: Las visitas generales en la América española, siglos 16.-17. . 2: Fuentes, literatura jurídica, derecho publico.](#)
- SÁNCHEZ BELLA, Ismael, *Eficacia de la Visita en Indias*, Madrid, *AHDE*,1980.
- SANCHEZ BELLIA, Ismael; *Recopilación de las Indias por Antonio León Pinelo*, México, 5 vols., 1992.
- SCALOJA, Victor; *Teoria della proprietà nel diritto romano*, Roma, ed. De Luca, 1929, 2 T.

- SECRETO, María V.; “Procesos judiciales y recorridos administrativos. La conflictiva propiedad de los Díaz Velez, Buenos Aires, siglo XIX”, en *Prohistoria*, Año V, núm. 5, Rosario, 2001, pp 223-249.
- SERRANO REDONNET, Jorge A; *La sociedad de Buenos Aires en sus derechos a mayorazgos y a otras fundaciones españolas*, Buenos Aires, ed. Academia Americana de Genealogía, 1992, p. 278.
- SERRANO RADONETT, Jorge A.; “Los Ortiz de Ocampo”, en *Revista del Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires*, Año 1, núm.1, Buenos Aires, 1979, p.62.
- SICA, Gabriela; “¿De qué norte hablamos? Las percepciones históricas del espacio y sus consecuencia en la investigación de las sociedades prehispánicas y coloniales del noroeste argentino”, en *Memoria Americana* 11, año 2003, pp. 51-72.
- SILVA VARGAS, Fernando; *Tierras y Pueblos de Indios en el Reino de Chile: Esquema histórico-jurídico*, Santiago, ed. Universidad Católica de Chile, serie Estudios de Historia del Derecho Chileno, núm.7, 1962, p.266.
- SOLANO, Francisco de; “Selección documental sobre el régimen de tierras, 1509-1813”, en, *Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala*, Guatemala, ed. Universidad de San Carlos, 1973, p. 445.
- SOLANO, Francisco de; “El juez de tierras y la superintendencia del beneficio y composición de tierras”, *Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano*, Vol. IV, Quito, 1980, pp. 347-358.
- SOLANO, Francisco de; *Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial 1497-1820*, México, ed. UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), 1984, p. 587.
- SOLANO, Francisco de; “El régimen de tierras antes y después de la Recopilación”, en *Memoria el Simposio sobre las Leyes de Indias*, San Jose de Costa Rica, ed. Imprenta Nacional, 1984, pp. 237-250.
- STERN Steve, *Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española*, Madrid, ed. Alianza América, 1982, p. 235.
- STERN, Steve; “Feudalism, Capitalism and the World System in the perspective of Latin America and the Caribbean”, en *American Historical Review*, 93:4, 1988. pp. 829-872.
- STERN, Steve; *Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes.siglos XVIII al XX*, Lima, ed. Instituto de Estudios Peruanos, 1990.
- STERN, Steve; “Paradigmas de la conquista: Historia, Historiografía y Política”, en BIIHAER, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”* 3° serie, Núm. 6, 2° semestre de 1992, pag. 7-39.

- SZEMIŃSKY, Jean “El Mundo andino dominado por los «muertos rebeldes»”, p. 171-205., en Miguel LEÓN PORTILLA *et Al.* (eds.) *De palabra y obra en el Nuevo Mundo*, Junta de Extremadura-Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1992.
- TAU ANZOÁTEGUI, V. y Martire E.; *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*. Ed. Macchi. Buenos Aires. 1975. Cuarta Edición.-
- TAU ANZOÁTEGUI, Victor *¿Que fue el derecho indiano?* 2. ed. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1982. 69 p. ; 19 cm.
- TAU ANZOÁTEGUI, Victor, *Casuismo y sistema: indagacion historica sobre el espiritu del derecho indiano*, Buenos Aires, ed.Instituto de investigaciones de historia del derecho, 1992, p. 617.
- TAU ANZOÁTEGUI, Victor; “Consideraciones sobre la aplicación de la Recopilación de 1680” *Revista de Historia del Derecho*. Buenos Aires. N°8, ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1980, pp. 331-397.
- TAU ANZOÁTEGUI, Victor; “La costumbre jurídica en la América española. S. XVI-XVIII.”. *Revista de Historia del Derecho*. Buenos Aires. N°14, ed. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1986, pp. 356-425.
- TAU ANZOÁTEGUI, Víctor; “La Ley se obedece pero no se cumple. En torno a la suplicación de las leyes en el Derecho Indiano”, en *Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano*, IV, Quito, 1980, pp. 55-110.
- TAU ANZOÁTEGUI, Víctor; “Órdenes normativos y prácticas socio-jurídicas. La justicia”, Separata de la *Nueva Historia de la Nación Argentina*, tomo II, Academia Nacional de Historia, Buenos Aires, ed Planeta, 1999, p. 294.
- TAU ANZOÁTEGUI, Víctor; *Los bandos de buen gobierno del Rio de La Plata, Tucumán y Cuyo*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, p. 564.
- TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, “El derecho indiano en su relación con los derechos castellano y común” en CLAVERO Bartolomé, Paolo GROSSI y Francisco TOMÁS Y VALIENTE (ed.), *Hispania, entre Derechos propios y Derechos nacionales* ed. Giuffrè, Milan, 1990, t II, p.587-599.
- TELL, Sonia “En defensa de la autonomía. Gobierno, justicia y reclutamiento en los pueblos de indios de Córdoba (1810-1850)”, en R. FRADKIN y G. DI MEGLIO (comp.) *Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense*, Buenos Aires, ed. Prometeo, 2013, pp.127-178.
- TELL, Sonia “Campos en común, campos contendidos: Significados y apropiaciones de la comunidad en Córdoba a fines del siglo XIX”, en *Revista de ciencias sociales*, segunda época, núm. 27, otoño de 2015, pp. 67-86

- TISSOT, Sylvie y Franck POUPEAU, “La spatialisation des problèmes sociaux”, en *Actes de la recherche en sciences sociales*, núm.159, Colección Enjeux, ed. Ferreyra-Seuil, París, setiembre de 2005.
- UGARTE Y UGARTE, Eduardo; “Los caciques de Chucuito y Arequipa contra la perpetuidad de la encomienda”, en *Hombre y Mundo*, 2º época, Arequipa, 1966, p. 44.
- VERA VALLEJO, Ricardo; “Memorias de vida forense”, en RJHLLR, año II, núm. 1, 1943, pp. 116-127.
- VERGOPOULOS, Kostas. “L’Etat dans le capitalisme périphérique”, en *Reveu tiers-monde del institut d’étud du développement économique et social*; Tomo XXIV, N° 93, PUF, París.
- VILLAMARÍN, Juan y VILLAMARÍN, Judith; “El trabajo indígena, su papel en la organización social y política prehispánica y colonial”, en M. CARMAGNANI, A. HERNÁNDEZ CHÁVEZ y R. ROMANO (Coords.), *Para una historia de américa III. Los nudos (2)*, ed. F.C.E. – Fideicomiso Historia de las Américas- El Colegio de México, México, pp. 13-72.
- VITORIA, Francisco de, *Relecciones de Indios y del Derecho a la Guerra con trozos de la referente a la Potestad Civil*, Madrid, versión al español del Marqués de Olivard, ed. Espasa-Calpe S.A., 1928, p.273.
- WEBER, Max; “Die Sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur”, de *Gesansmelte Aufätze zur Social-and Wirtschaftsgeschichte*, Tubinga, 1924, resumido en Karl POLANYI, *El sustento del hombre*, Madrid, ed. Mondadori, 1995, p. 371.
- WEBER Max; *Historia Económica General*, Buenos Aires, ed. Paidos, 1989, p. 238
- YUN CASALILLA, Bartolomé; *Sobre la transición al capitalismo en Castilla, Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830)*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, p. 671.
- YUN CASALILLA, Bartolomé “La aristocracia castellana en el seiscientos: ¿crisis, refeudalización u ofensiva política?”, en *Revista Internacionald de Sociología*, Núm. 1, 1987, pp 77-104.
- ZAVALA, Silvio; *Estudios Indianos*, México, edición de El Colegio Nacional, 1948, p. 504.
- ZAVALA, Silvio; *Fray Alonso de Veracruz. Primer maestro de Derecho Agrario en la incipiente Universidad de México*, México, Centro de Estudios de Historia Condomex Chimalistac, 1981, p. 88.
- ZAVALA, Silvio; *La encomienda Indiana*, Madrid, Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, Centro de Estudios Históricos, Sección Hispanoamericana, 1935. p.163 ; 2º ed. Porrúa. México 1973.
- ZAVALA, Silvio; *Por la senda hispana de la libertad*, México, ed. FCE y MAPFRE, p. 276.

ZINNY, Antoigne; *Escritos inéditos de Antonio Zinny el redactor del congreso nacional (1816-1820)*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones de la Universidad de Buenos Aires, 1923.

ZINNY, Antoigne; *Historia de los gobernadores de las provincias argentinas*, Buenos Aires, ed. Baiocco y Cía., 1882, 3 t.

ZINNY, Antonio; *Historia de los Gobernadores del Paraguay, 1535-1887*, Buenos Aires, ed. Imprenta y Librería de Mayo, 1887, p. 513.

ZORRAQUIN BECU, Ricardo; “El Oficio de gobernador en el derecho indiano”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho ‘Ricardo Levene’*. N°23 (1972). La Plata, pp. 171-237.

ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo; *Historia del Derecho Argentino*, Tomo I. Buenos Aires, ed. Perrot, 1966.

§ APENDICE DOCUMENTAL

A

“ORDENAZAS GENERALES PARA LA VIDA COMÚN EN LOS PUEBLOS DE INDIOS”

Arequipa, 6 de noviembre de 1575.

Don Francisco de Toledo, Mayordomo de Su Magestad, su Visorrey, Gobernador y Capitán General en estos reinos y Provincias del Perú y Tierra Firme, etcétera (...)

ORDENANZA X.— Como se han de repartir y recompensar las tierras cuando los indios se reducen de unos pueblos a otros.

Y porque en las reducciones que se han hecho por los vistadores comisarios por mi nombrados en este reino, convino pasar de unos pueblos y repartimientos, parcialidades y ayllus á otros, juntándolos y haciéndolos dejar sus chacaras y pueblos antiguos y repartiendo las tierras cercanas a sus reducciones, aunque no eran suyas, sino de los indios con quien se redujeron, de lo cual ha resultado pleitos y diferencias, sin embargo de lo que sobre esto hicieron y proveyeron los visitadores, y aunque en las instrucciones generales les mandé que siendo necesario tomar algunas tierras para la reducción de los naturales que lo pudiesen hacer, así de españoles como de indios, y que teniendo títulos verdaderos de ellas, y de quien se los pudo dar en nombre de Su Magestad y que tuvo poderes para ello siendo de españoles o de indios, teniéndolas o poseyéndolas quieta y pacíficamente, se las recompensas en las que dejasen los indios reducidos, dándoles otras tantas, y tan buenas, parece que siendo todo un repartimiento, si en las partes y lugares donde se redujo, había abundancia de tierras para todos, aunque las poseyesen las diferentes parcialidades y ayllus, no es necesario hacerce tanto la dicha recompensa, pues le quedan por propias sus tierras a los indios, a quien se la dana los demás para sus reducciones, y conviene proveer en lo uno y en lo otro de remedio, de manera que cesen los dichos pleitos y diferencias, por lo tanto, ordeno y mando que cuando los dichos indios se hubieran reducido de diferentes pueblos, parcialidades y ayllus fueren todos de un repartimiento, y con los que así se redujeren, los dichos visitadores les repartieren las

dichas tierras comarcanas, que habiendo abundancia para todos, especialmente para los indios de quien se tomaron, no se trate de hacer la dicha recompensa, sino que los unos y los otros posean las cercanas y lejanas con toda igualdad, sin que se les admita pleito, ni demanda sobre ello y se guarde lo que los visitantes dejaron proveído, y si fueren de diversos repartimientos, en tal caso, teniendo los indios de quien tomaren las dichas tierras necesidad de que las recompensen, se haga por los corregidores de aquel distrito con toda igualdad y entereza, faltándoles la dicha necesidad, si no tuvieren mucha falta de tierra de suerte que si se las tomasen, no les quedaría con qué poder sustentar, tambien se haga dicha recompensa con moderación, de manera que los unos y los otros queden satisfechos en cuanto fuere posible en la forma susodicha, y mando que los dichos corregidores lo hagan así cumplir, guardar y ejecutar, y en lo que determinaren y ejecutaren no admitan á los dichos indios réplica ni escusa alguna no habiendo dejado los dichos visitantes orden en lo uno y en lo otro, y habiéndola dejado lo hagan así guardar y cumplir.”

[Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, Mss. B. 511, f. 551-577, reproducido por Roberto Levillier, *Gobernantes del Perú, Cartas y Papeles*, Buenos Aires, ed. Espasa, T. III, c. VIII, p. 304 y ss.]

B

CAPITULACIÓN DE BLAS PONCE CON EL GOBERNADOR DEL TUCUMÁN RAMÍREZ DE VELASCO

Santiago de Estero, 24 de Enero de 1591.-

Memoria del servicio que yo, el capitán Don Blas Ponce, me obligo a hacer al Rey, Nuestro Señor, y a S.S. el Gobernador Juan Ramírez de Velasco en su real nombre; el que S.S. Juan Ramirez de Velasco, en su real nombre; y el que S.S. el dicho Gobernador ha de hacer conmigo en nombre de S. M., entretanto que el Rey nuestro señor, me hace más merced.

Primeramente: que iré con mi persona, siendo nuestro señor servido, dándome salud para ello, en acompañamiento de su señoría a las provincias de los Diaguitas, por el mes de febrero, y en los términos que tuvo la ciudad de Londres en la parte y lugar que a su señoría pareciere, poblar y fundar una ciudad, en la cual fundación su señoría me nombrará por poblador y fundador en su ayuda y servicio del Rey nuestro Señor, y su señoría nombrará alcaldes y regidores y otros oficiales de cabildo y a mi por lugarteniente general de aquella ciudad y de la ciudad de San Miguel del Tucumán, Salta y Córdoba, porque será necesario entrar las dichas ciudades y sus términos, a dividirse términos é indios, e dar a cada una lo que perteneciere, e sacar socorros, habiallos así de gente como de comidas, dejando las ciudades con seguridad, como en poblar y descubrir minas y otras cosas necesarias a que no se debe dar lugar a las contiendas con los tenientes de las ciudades, ni lugar, ni dilaciones; sino oyeto, provello y librallo, con poder de justicia en las dichas ciudades, como tal Teniente General, y que su señoría me ha de ayudar a hacer el Fuerte, recoger comidas, y hasta tanto no este fecho no me ha de dejar, en lo cual ha de asistir un mes, y hecho el dicho Fuerte su señoría me dejará con los pobladores y ayudará con pólbora y plo mecha y municiones, tomando lo que hubiere menester para el camino, y dejándome lo de más; dejandome dicho poder por el tiempo de su gobierno, el cual no se revocará ni acortará, sino antes

se ampliará, y su señoría me ha de dejar para poder depositar los indios que se empadronaren, sujeten y visitaren, y los sacados de paz o de guerra, por noticia, los cuales depósitos ha de confirmnar su señoría biniendo ante él sin rebocación ninguna, como se han en los Conquistadores y pobladores (54); y nos sean en extremo grado superfluo, y siéndolo solo, los pueda enmendar en lo que lo fueren dejándoles su justo merecimiento y gratificación.

El segundo: que assi mismo, su señoría me ha de dar poder para repartir solares, quadras, Huertas, chacras, estancias y caballerías, y su Señoría me ha de dejar en la dicha población toda la más gente que pudiere pa pobladores y sustentadores, gente de guerra, buenos soldados.

El tercero: que su señoría me ha de hacer merced en nombre de su Magestad el Rey Don Felipe nuestro Señor, de más del repartimiento que en su real nombre tengo en esta ciudad, de darme y encomendarme otro repartimiento en términos de aquella ciudad, en el cual entren valles, pueblos, Caziques e indios que yo tenía en la dicha provincia, en encomienda por el General Juan Perez de Sorisa, y más la mitad del valle vecino y sus caziques he indios, y en ellos y en otros más sercanos a ellos se me cumplan sesiscientos indios de visitación, casados con más hijos y mujeres, sin que sea obligado a escogienda de vecindad, sino que goce de los unos y de los otros, como tal poblador y sustentador; y que estos indios todos o parte de ellos todas la veces que yo quisiere é hiciere dejación Su Señoría sea servido por mis trabajos y méritos encomendallos en hijo o yerno, o en otra persona por nueva encomienda como a mi se me hace merced; y que de los indios que no han sido empadronados, que nuevamente se descubrieren, me haga merced de la veintena parte de ellos; porque yo no me he de tomar indios para mi, sino que su señoría me los ha de encomendar en nombre de su magestad.

Quinto: que su señoría me ha de hacer merced, que en todas las minas que se descubrieran por mí, o por mi mandato, así de oro, plata, azopgue y otros metales y colores, que en todas ellas entre por descubridor, y se me den dos minas como a tal, y tomadas estas, se ha de dar a su Señoria, una a este deslinde, y todas tres han de ser por itad de su Señoría e mias, de compañía en gastos y erencias.

Sesto: que en todas las guacas, tesoros y enterramientos y ofuscamientos del sol que por mi mandato se descubrieren, que sacado el quinto y sexto perteneciente al rey nuestro señor, y la cuarta de Capitán General de su Señoría en lo restante partir por mitad como tal descubridor con los pobladores.

Septimo: que pueda libremente sacar y llevar de mi repartimiento para ayuda de la dicha población y mi hablamiento, y tenello allá todo el tiempo que he de sustentar la dicha población, todo el servicio de anacona, indios e indias que hubieren menester.

Octavo: que yo, ni Juan de Cadova mi yerno, todo el tiempo que estuviere en la dicha población, no seamos obligados a subsidio de sustentar vecindad, y que podamos hacer ausencia de ella, y no seamos obligados a sustentar casa poblada, ni otros subsidios, y que libremente puedan estar nuestras casas y familias en los pueblos de nuestras encomiendas y estancias todo dicho tiempo, para mejor proveernos de lo necesario para el sustento de la población.

Noveno que si el poder y mando que por su Señoría me fuere dado o por otro Gobernador, si acaso viniere el dicho tiempo me fuere revocado o menoscabado en todo o en parte, que desde el día de tal revocación no sea obligado ni este a cargo el cumplimiento de lo por mi obligado, a sustentar y gastar y descubrir, sino que desde entonces se acabe mi obligación y por lo hasta allí servido y gastado quede libremente con el dicho repartimiento y demás mercedes de tierra y otros aprovechamiento que su señoría me hace en nombre del Rey nuestro Señor.

Haciendo, y cumpliendo su Señoría el Gobernador Juan Ramirez de Velazco conmigo, y lo arriba escrito y capitulado, me obligo de hacer y cumplir lo siguiente, y contenido a las espaldas de esta plana

Primariamente: que para habiamiento a la jornada y pobladores, sin lo que he de gastar con mi persona, casa familia y servicio, ayudaré a los pobladores con la cantidad de seis mil pesos, con ropa de obraje, cabalgadura y erraje, y herramientas para esta primera salida y entrada en dicha población.

Item: que sacare de aquí para llevar a la jornada y allá ayudar a hacer la sementera cinquenta boelles.

Item: que sacaré de aquí dos mil cabras y repartiré con los pobladores por camaradas las mile e quinientas, y las otras para mi camarada y sustento.

Item: Que sacaré de aquí mile carneros para sustento de los pobladores y mío.

Item: que cada año de los dichos quatro años meteré en la dicha población otro miles carneros para el dicho sustento.

Item: que cada año de los dichos quatro años meteré mile obejas pa partir con los dichos pobladores si antes la tierra no le diera los frutos con que ellos las puedan comprar.

Item: que los dichos quatro años no dando la tierra fruto bastante con que los pobladores se puedan sustentar y tengan con que lo puedan comprar, socorreré con hierro y erraje, paño y ropa de mi obraje con cantidad de seis mile pesos corrientes, pa repartir entre los Pobladores en cada un año de los dichos quatro años.

Que todos los dichos quatro años, o los mas de ellos, que los diezmos no fueren bastante para sustentar un Sacerdote pa Cura y Vicario, dare quatroceintos pesos pa ayudar a este sustento en cada un año, los quales señalo en mi obraje en la hacienda de él, fuera de sus obenciones y aprovechamiento.

Que llevaré a mi costa ornamento y frontal, y dosel é imágenes, y proveeré de vino y cera a mi costo a la Iglesia por el tiempo de quatro años, si antes la Iglesia no tuviera posible pa ello.

Que en tiempo de los dichos quatro años me obligo de tener minas descubiertas, publicas y sabidas, en términos del dicho pueblo, de oro, plata y asogue, que puedan seguir y labrar.

Que Assimismo haré un Estandarte de Damasco Carmesí pa la ciudad con armas Reales, y un Santiago, y despues que su Majestad fuere servido de dar armas para la ciudad se forman.

En la ciudad de Santiago del Estero, en veinticuatro dias del mes de enero de mile e quinientos y nobenta y un años, el Capitán Blas Ponce, vecino de esta ciudad, en presencia de mi, el escribano suso escrito, dio y entregó a su señoria del dicho Gobernador Juan Ramirez de Velasco las capitulaciones de suso escrito, que son

condiciones que tiene tratadas con su Señoría pa la jornada de san Pedro Mártir, las cuales en cuanto a él toca, hará, guardará e cumplirá según que en ellas y en cada una de ellas se contiene, sin exceder en cosa, cumpliendo con él su Señoría lo que es de su parte, y su Señoría, del dicho Gobernador, habiendo leído las dichas condiciones capitulacionee de verbo ad verbum, dijo: que en nombre de su Majestad, y por el serbicio que se hace en que se haga lo en ellas contenido, assi por el bien de los naturales, que mediante la dicha jornada se espera, como por el aumento del Real patrimonio estaba presto guardar y cumplir, lo que de su parte esta obligado, sin exeder en cosa, cumpliendo el dicho Capitan Blas Ponce con lo que tiene puesto y capitulado.

En testimonio de ello lo firmaron de su nombre y fueron testigos: Martin Delgadillo y Melchor de Vega, Alguacil Mayor, é Baleriano Cornejo, y otorgaron dos escrituras de un tenor — Juan Ramirez de Velazco — Blas Ponce — Ante mi Juan Fernández de Castro, Escribano.

[Fuente: *“Recopilación de documentos relativos a la fundación de la ciudad de La Rioja”*, La Rioja (Argentina) Juan J. Romero, Dardo de la Vega Díaz, Rafael Torres, y Juan C. Gómez (Comps.), ed. Publicación Oficial. La Rioja. Talleres Gráficos del Estado.1938.]

Acta de la fundación de la Ciudad de Todos Los Santos de la Nueva Rioja

«Yo Luis de Hoyos escriuano Publico de Gouerna.ºn en esta Prouincias de Tucuman y del Cabildo deesta ciudad de todos los sanctos dela nueva rrioxa en la prouincia de los diaguitas nombrado por su señoria del señor Joan Ramirez de velasco gouernador y capitán general Just.^a M^o deestas prouincias por el rrey nro. Señor Doy ffe y Verdad testimonio como su s^a. el señor gr.or entró en este Valle y prouincia delos diaguitas por el Valle de Catamarca con numero de setenta hombres y setecientos y cincuenta caualllos de guera y carga y catorce carretas y ciento y beinte bueyes y mucho ganado de cabras obejas y carneros y otros pertrechos de guerra y bitualla y su s^a. el señor gouernador traxo para su persona y seruicio ochenta y quatro caualllos y bastimento y a los diez dias del mes de mayo de este presente año de milesquinientos ynouenta yunaños entró con elcampo deste Valle que llaman Yacampis quatro leguas poco mas o menos de canagastay auiendose adelantado en persona con cinquenta soldados armados despues de que amanecido auiendo caminanado cassi toda la noche se dio Velasco a unos pueblos e yndios deste valle y se tomaron como treinta personas chicas y grandes y entre ellas se tomo y prendió al cacique de ellos y en esto lo que quedauan u otros yndios y caciques vinieron a dar la xuntas y lo mesmo los caciques de canagasta y otras partes y su señoria Velasco señor gouernador mando que todo lo quese auia tomado se volbiese porque lo naturales entendiesen que no se venía a fazerle mal sino bien y asi conesto an ydo continuando adarlaxas y oy dia siruen a sus muchos caciques e yndios deestos. Y mismo su s^a. em persona busca el sitio y lugar comodossuficientes para fundar y poblar esta ciudad se hallo este lugar y tubo auiso y noticia no saber otro mejor y el acuerdo y boto y parecer del maese de campo Blas Ponce y capitanes del campo y soldados fue que su señoría poblase y fundase en este asiento la ciudad y que era bueno y buenas tierras acequiadas y había pasto y leña y agua y en comarca de toda esta prouincia y asi visto por su señoría lo susodicho a los veinte de mayo de este presente año sacho el estandarte real de su majestad y puesto a caualllo el capitán don Joan Ramírez de Velasco alférez general de esta gouernación le tomo en sus manos y le acompañaron todos los capitanes y soldados deste capo armados a punto

de guerra y saliendo su señoría con la dicha gente a caualllo dio una vuelta en redor de la plaza que auia de ser y auiendo llegado en medio della se apeo del dicho caualllo y tomo estandarte rreal de mano del dicho alferes general y le campeo tres veces diciendo España España España y estas prouincias y ciudad de Todos los Santos de la nueva rrioxa por el catolico Rey Don Felipe nuestro señor y en su real nombre hincó y mano hincar un árbol de madera por rrollo e picota diziendo ser tal arbol de Justicia civil y criminal con mero mixto imperio donde sea executada la rreal justicia y echo mano a su espada y dio ciertos golpes a unas ramas diziendo que en nombre de su majestad tomaua y aprehendia possessio de estas prouincias y de esta ciudad y la llamo y puso por nombre ciudad de todos Santos de la nueva rrioxa y efectho lo susodicho nombró alcaldes i regidores oficiales rreales algualcil mayor y alcaldes de la hermandad y otros oficiales de republica y ante su señoria juraron a Dios nuestro señor de lo usar bien y fielmente(...)»

[Fuente: A.G.I, *Sec. V*, Charcas, 34]

D

Merced de tierras a los primeros vecinos de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, Provincia de los Diaguitas.

27 de Agosto de 1591

“En la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja Provincia de Los Diaguitas, en 27 dias del mes de agosto de 1591 años, el Capitán Blas Ponce, Maestre de Campo de esta Gobernación y Teniente General de Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción por S. M., dijo, que por cuanto algunas personas de los vecinos de esta ciudad; que habían de perpetuarse y permanecer en ella casados y por casar, que tenía hijos y familia le han pedido que habían pedido que porque teniendo pocos solares y cuadras les hiciese merced en nombre de S.M., como á pobladores y conquistadores de dicha ciudad y provincia, de hacerles merced de acrecentarles algunas cuadras y teniendo consideración a los servicios y trabajos, dijo, que en nombre de S.M.hacía e hizo merced á personas aquí nombradas y señaladas, de cuadras y solares siguientes: las cuales señalaba y señalo por cima de esta ciudad y de las cuadras señaladas que en la traza señalaba en la tierra que hay entre dicha traza ó acequias que de la loma vienen por encima de dicha ciudad para regar las huertas y solares hasta llegar á las dichas acequias, como no pase por ellas. Las cuadras que se fuesen señalando en más cantidad de media cuadra delante de la parte de la acequia, para arriba de las cuales corran el principio de cada suerte en frente. La primera de la cuadra de su señoría y mano izquierda hacia el río en frente de cada cuadra como van saliendo las cuadras de la ciudad, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta hasta mano derecha, y hacia mano izquierda, segunda, tercera, cuarta y quinta y cada suerte de estas ha de correr hacia la Boca de la Quebrada, donde viene el río de esta ciudad, hasta llegar à las dichas acequias como dicho tiene sucesivo, uno pos de otro, las personas que en cada quadra señalaría la cantidad que le fuese nombrada y señalada, las cuales son las siguientes:

Primeramente por derecho de la quadra de dicho señor Gobernador que es la que de la plaza hasta otra postrera suya donde nombró la primera quadra señalo dos solares de la dicha primera quadra para la hermita de Nuestra Señora del Rosario, porque el solar que por Su Señoría le fue señalado cae en ruín parte à esta mas cómodo para la dicha hermita los dichos dos solares, y en mejor parte, y dicho solar que le fue señalado por Su Señoría para la aotra hermita en su lugar queda vacío para darlo a otra persona de los vecinos o que adelante se avecinadacen en esta ciudad, y asi mismo hace merced en nombre de S.M. linde con los dos solares que se ha señalado a Nuestra Señora del Rosario, quadra a Baltazar Barrionuevo media de tierra que habrá hasta la acequia, sin que haya calle de los dichos dos solares, hasta la dicha acequia sin que haya calle por medio.

- Ítem señalaba y señaló en la segunda quadra hacia la huerta de su Señoría á un quadra de tierra que Su Señoría señalo al capitan Alvaro de Abreu, para que se la señalece a dicho Maestre de Campo, y la segunda hacia la acequia, linde dicha á Pedro de Soria Medrano, que asi mismo Su Señoría del Gobernador se la señalo en este libro de Cabildo linde del dicho Capitán Alvaro de Abreu al dicho Pedro de Soria.
- Ítem asi mismo señalaba y le señalo en la tercera quadra hacia la mano derecha como tiene dicho quadra de tierra a Don Diego Garzón y á su linde de la parte de arriba hacia la acequia otra quadra a Pedro Díaz.
- Ítem en la cuarta quadra de la mano derecha hacia la huerta de Su Señoría una quadra de tierra á Alfonso López de Santa María y á su linde la parte de arriba hacia la acequia otra quadra á Francisco de Romero.
- Ítem en la quinta quadra que es cerca de la ronda junto á la huerta de Su Señoría dos quadras, que hay de tierra hasta la acequia se han de partir entre Marcos de Arroyo y Francisco Díaz Barroso y Pedro de Herresuelo rota por cantidad tanto el uno como el otro.
- Ítem en la segunda quadra que corre hacia mano izquierda de la hermita hasta el río en frente, y calle en medio para el servicio de la compañía del nombre de Jesús, una

quadra á Domingo de Otazo y á su linde hacia la tierra y acequia lo que hubiere de tierra hacia la dicha acequia á Gonzalo de Barrionuevo y Hernando de Pedraza.

- Ítem en la tercera quadra hacia el rio señalaba y señalo lo que hay de la quadra y solares que stán en la traza de Juan Dávalos y Alonso de Barrionuevo calle en medio lo que hay de tierra hasta la dicha acequia para si, para alcáceres y alfalfar para el servicio de la casa y caballos.
- Ítem en la quarta quadra que cae en frente de Bartolomé de Saconeta y feliciano Rodriguez señalaba y señalo una quadra de tierra a Pedro de Maydana, y otra á linde á Alonso Ruiz, y otra a si linde á Baltazar Díaz.
- Ítem en la quinta quadra hacia el rio una quadra de tierra á Pedro Tello de Sotomayor, y á su linde otra á Alonso de Carrión y a su linde otra á Francisco Toledo.
- Ítem encima de la postrer quadra de la ciudad de la parte de arriba una quadra á Francisco Maldonado y á su linde á Damián Pérez de Villarreal, y otra a Gonzalo de Contreras.
- Ítem señalaba y señaló para repartir á los vecinos de esta ciudad nueve quadras de tierra que tiene esta ciudad de largo linde calle en medio con las quadras que Su Señoría señalo para propios de la ciudad, y otras tres quadras más arriba que por todas sean doce quadras de largo, las cuales quadras que al presente se señala, comienza la primera desde la postrera quadra de la donde tiene solares Luis Indio y Miguel de Oliva calle en medio, y de ahí para arriba se cuentan segunda tercera y quarta hasta cumplir las doce y la primera quadra como está señalado de la parte de debajo de la ciudad señaló á Luis Hernández de Palma y Gonzalo Tejera de por mitad, para que la partan entre los dos.
- Ítem la segunda hacia arriba á Alonso Cabello y la tercera á Melchor de Vega, la quarta á Alonso Sequera, la quinta á Pedro de Alcázar, la sexta á Hernando de Avila, la séptima á Sebastian de Soria, la octava á Juan Guevara de Castro, la novena á Antonio Alvarez, la décima á Juan Fernández, la onцена á Antonio de Cejas, y

encima de esta docena señalaba otra quadra y media á Alonso de Ordoña y Hernando Palomares.

- Ítem señalaba y señaló de la parte hacia las puertas de la ciudad de la parte de abajo en los éjidos de ella calle en medio con las quadras repartidas por Su Señoría otra diez quadras de tierra, que la primera comience linde con la primera que se añadió y repartió linde de Luis Indio y Juan Ruiz, la cual dicha quadra primera hace merced á Gonzalo Nuñez, y la segunda á Francisco Garzón linde de Juan Ramírez de Montalvo, la tercera a Alonso Garcia, linde del servicio de Nuestra Señora de la Mercedes, la cuarta linde doña María Bazán á gerónimo Pereira, la quinta á Juan Nieto Principe, linde del Coronel Gonzalo Duarte, la sexta á Valeriano Cornejo, linde Pedro de Soria Medrano, calle de medio, la séptima á Gerónimo de Oliva, linde de Domingo de Otazo, calle en medio, la octava á Alonso de Tula Cervín, la novena a Alonso Romero, la décima á Manuel Alvarez, las cuatro dichas quadras, en nombre de S. M. hacía é hizo la dicha merced para que las puedan trocar y cambiar como cosa suya y propia á vida por justo título, sin embargos de los cercar sino fuere como cada uno pudiere, y asi dijo, que hacía é hizo la dicha merced en nombre de Su Magestad y firmó de su nombre. Blas Ponce— ante mí: Baltasar Díaz. Escribano Público y de Cabildo»

Antoigne Zinny, *Historia de los gobernadores de las provincias argentinas* [1882]; recogido por Reyes, Marcelino; *Bosquejo histórico de la provincia de La Rioja (1543-1867)*, Buenos Aires, ed. Talleres Gráficos de H. Cattáneo, 1913. p. 15 y ss.

Cuadrícula o *Traza* de La Ciudad de La Rioja



Antoine Zinny, *Escritos inéditos de Antonio Zinny el redactor del congreso nacional (1816-1820)*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones de la Sección Historia, N° X, ed. Peuser, 1921, lámina V.

F

Merced de Autigasta otorgada por el Gobernador Ramírez de Velasco a favor de Alonso Carrión (1591).

«por cuanto me habeis pedido que os haga merced de tres leguas de tierras en tierras yermas y despobladas, para estancias de vuestros ganados mayores y menores , y para huertas y heredades en el valle de Catamarca, en el pueblo viejo de Autigasta que esta despoblado.....

Yo, en nombre de su Majestad y usando sus poderes que para ello tengo, hago merced a vos, el dicho Alonso Carrión de las dichas tierras, para las dichas estancias de ganados y sementeras de pan y heredades, en la parte y lugar que la pedís que estarán a 27 o 28 leguas de la ciudad de Todos Santos de la Nueva Rioja, que tengan tres leguas de largo y otras tantas de ancho, con el arroyo que le cogen en el medio, con todos los montes y algarrobales en ellos inclusos, para vos y vuestros herederos y sucesores por siempre jamás, para que como tal cosa vuestra propia la podais poblar y cultivar, vender o enajenar y hacer y deshacer de ella lo que quisieredes, etc.. Fecho en la muy noble ciudad de santiago del estero a nueve dias del mes de noviembre de 1591»

[Juan C. Carrizo, *Cancionero Popular de La Rioja*. 3 t. Baiocco y Cía editores - Universidad Nacional de Tucumán, Buenos Aires. 1942.- p. 121, t.1.]

G

Merced de Capayan (1592)

“Joan Ramírez de Velasco por quanto vos Alonso de Tula cervín ...qe sois vecino de la ciudad de todos Santos de la Nueva Rioja que yo poble en el Real nombre en la Provincia de indios Diaguitas que descubrí y conquisté y allané donde teneis el rreparimiento de indios de Villapima y sus anexos... me abeis pedido e suplicado que os hiciese merced de os dar una Estancia de tierras para criadero de todos ganados mayores e menores y para sementeras de trigo e mais e cebada y de todas las semillas y para plantar eredades de viñas e otras arboledas frutales, que la dicha estancia cayese una legua por cima del dicho pueblo de Villapima rio arriba y tuviese tres leguas de largo y legua y media de ancho coxiendo en medio del anchor el dicho rio (...) para que en las tierras de dicha estancia pueda hacer e haga molinos y batanes e sacar e saque en ella heridos y acequias del agua del dicho rio para ellos y sus cementeras”, *Cif.*

AHCo, Escribania de Gobierno, 2º Leg. 2, Exp. 9 1667, (“Padrón de indios jurisdicción Londres”)

H

Merced de Yoque Pacatala a favor de Francisco Nuñez de Yllañes (1649)

En la ciudad de La Rioja, en once dias del mes de enero de mil seiscientos cuarenta y nueve años se presentó esta por el contenido ante mi el Capitan Gabriel Sarmiento de Vega, Tesorero Juez Oficial Real en esta ciudad por su Majestad, Francisco Nuñez de Llanes natural y vecino de esta ciudad ante vuestra merced paresco con la forma que lugar aya en derecho y dijo: Que el Señor Don Gutierrez de Acosta y Padilla Gobernador y Capitan General de esta Provincia fue servido de acerme Merced en nombre de su Majestad en remuneración de mis [ante]pasados y mios, de cierta aguada y tierras que caen en la jurisdicción de esta ciudad y los Llanos, camino de Córdoba como consta de este título Y Merced, de que hago presentación ante vuestra merced porque asi conviene a mi derecho, que vuestra merced se sirva de admitir información del valor que hoy tiene con personas que an visto las dichas tierras y sepan el valor que tienen para que su Majestad sea servido y pagado el derecho Real, conforme a lo dispuesto por el Arancel que es de media Anata que estoy pronto de enterar en la Caja Real de esta ciudad lo que fuera echa la avaluación que cumpliendo con el tenor de lo que refiero se me dé posesión en forma vastante de las dichas tierras y Aguadas y potreros; Vuestra merced pido y suplico visto el título y Merced de uso referida mande se reciba dicha información y es justicia la cual pido y para ello etcétera. Francisco Nuñez de Llanes.- Habiendo visto esta el dicho tesorero y la Merced fecha por su Señoría el Señor Gobernador de esta Provincia Don Gutierrez de Acosta y Padilla y demás recaudos presentados por esta parte mando que el dicho Francisco Nuñez de la informacion que ofrece para que, dada se entere en la caja Real el derecho de media Annata ofrecido. Asi lo proveo, mando y firmo, Ante mi por falta de escribano público y Real con testigo. Sarmiento de Vega. Testigo- Melchor de Avila Barrionuevo. (...)

En la ciudad de La Rioja en once dias de mes de enero de milseisiento cuarenta y nueve años yo el capitan Gabriel Sarmiento de Vega, Tesorero, Juez, Oficial Real de esta dicha ciudad habiendo visto esta información dada por Francisco Nuñez de Yllanes y declarar los testigos no valer mas de cien pesos las dichas tierras mando que el dicho

Francisco Nuñez entre en esta real caja de cargo, cinco pesos en reales de a ocho que conforme al arancel de cinco por ciento echa se le dara la certificacion para que le de la posesión asi mando y firmo por ante mi por no haber Escribano Público Real con testigos=Gabriel Sarmiento de Vega, testigo=Melchor de Avila Barrionuevo (...) En el dicho dia mes y año dicho yo el Capitán Gabriel Sarmiento de Vega Tesorero, Juez Oficial Real notifique el auto por mi provehido a Francisco Nuñez de Yllanes, en su persona que le oyo y exhibio ante mi el dicho tesorero los cinco pesos contenidos y pertenecientes a la Real Caja y firmo conmigo de su nombre Gabriel Sarmiento de Vega= Francisco Nuñez de Yllanes en la ciudad de La Rioja en once dias del mes de Enero de mil seiscientos cuarenta y nueve años enteró en la Real Caja de mi cargo Francisco Nuñez de Yllañes cinco pesos en Reales del derecho de media annata del título que el señor Gobernador le izo Merced de las tierras de «Yoque Pacatala y [ilegible]» que se avaluaron en cien pesos por dos personas como de dicha informacion constara a que me refiero y lo firmo el susodicho conmigo el tesorero en este libro Real de mi cargo para que conste en todo tiempo=Gabriel Sarmiento de Vega, Francisco Nuñez de Yllañes= como consta y parece del libro Real a mi cargo esta la partida contenida a fojas cincuenta y una y cinquenta y dos a que en los necesario me refiero: y para que conste de el presente testimonio en once de Enero de mil seisiento cuarenta y nueve años a falta de Escribano Publico y Real =Gabriel Sarmiento.- Derecho cuatro pesos.

En este punto de Yoque, en ocho dias del mes de Mayo de mil seisiento cuarenta y nueve años, yo Ambrosio Escobedo, Juez comisionado de este Partido de los Llanos siendo requerido por Francisco Nuñez de Yllanes, como vecino encomendero de la ciudad de la Rioja llegué a esta estancia de tierras nombradas «Yoque» y de ella se me pidió que diese posesión en ella expresada en virtud de la comisión contenida en el titulo del Señor Gobernador, le tomé de la mano y le pasie por ella y le di posesion en nombre de su Majestad y de dichas tierras y a lo ella pertenecientes, Real, actual, Judicial, «juri dómíne bel cuazi» conforme a derecho y le amparo y defiende en ella y de cómo asi toma y aprende la posesion Arrancando yerbas y tirando piedras quieta y pacíficamente y sin contradiccion alguna de dichos linderos contenidos en este titulo me lo pidió, yo se lo doy en forma según asi pasó siendo testigo Antonio Quinteros y Julian

de Escobedo que lo firman juntamente conmigo: Ambrosio de Escobedo-Francisco
Núñez y de Yllañes=Testigo=Antonio Quinteros=Testigo=Julián Escobedo.

[ADGC, MJ-20-P14, f. 14 y ss.]

G

SOLICITUD DE MERCED DE TIERRAS AL NORTE DE COCHANGASTA,
AMPARO DE LAS ESTANCIAS DEL DURAZNILLO y AMPLIACIÓN A TIERRAS
VACAS A FAVOR DEL COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESUS

(La Rioja, 13 Marzo de 1687)

Señor Gouernador [Thomas Felis de Argandoria]

El P. Francisco Busges Rector de la Cia de Jesus desta ciudad de la Rioxa paresco y digo, que entre el hejido del molino, que el año de quarenta compro el general don Juan de Adoso, y la chacra, o quadra de cochangasta, que caen a la parte sur de la acequia o rio principal desta ciudad que viene dela boca dela quebrada, ay en la parte del norte desta acequia, o rio, un salto, y un pedaso de tierras vacas, que son aproposito para poder poder fabricar en ellas un molino y un canal para tener, y pastar algunas cavalgaduras, y buies necesarios para el arrio de un molino; las quales no se sabe sean de persona alguna, y assi son realengas. Por lo qual a Usd. Pido y suplico, que como Gouernador y Capitan general que es desta Provincia de Tucuman, por su Magestad, que Dios guarde, que en nombre desa Magestad haga merced a este collegio dela comp de jesus de dicho salto, y pedazo de tierras como tengo dicho, para edificar un molino, y hazer un corral para tener el ganado necesario para el arrio de otro molino, y poder pastear en otra tierra, por tener este collegio necesidad de un molino para sustento de sus sujetos; y ceder tambien en pro, y oir desta ciudad, que por falta de molinos atiempos padeze hasta necesidad.

Otro si digo, que este colegio tiene, y posee a tres y quatro leguas desta ciudad asi a la banda norte arrimados a la sierra dos estancias juntas, y contiguas, la primera se llama el Durasnillo que dista de desta ciudad tres leguas por lo menos; la segunda que dista quatro leguas poco mas o menos, se llama Las Cañas, que los antiguos llamron Alipan, y por la parte del oriente miran asi el camino del Valle de catamarca, y por el poniente a la cumbre de la sierra grande desta ciudad, que corre de norte a sur; y a la parte norte vezina la estancia del Cantadero, que oy posee el Me- de Campo Don Juan Gregorio Bazan de Pedraza, y a la parte sur confina con la estancia de Las Higuerillas, que oy posee el capitan don Alonso Moreno Gordillo; las quales estancias compró este

collegio, como consta por los se@cados, que con esta misma presento en la devida forma; y yo el año pasado poble de ganados maiores, para el sustento del collegio, en que se experimentaron algunos daños considerables en este ganado, por mover unos y otros en dichas tierras sus mulas, buies y ganados, como si fueran, siendo assi, que dichas tierras con sus aguadas son deste collegiotengo dicho, y para que de aquí adelante cessen los daños que el año pasado de [mil ochocientos] ochenta y seis se experimentaron, suplico a Uds. como Gouernador y Capitan General, que desta Prov° de Tucuman por su Magd , que Dios, guarde, que ampare aeste mi collegio la pacificaposesion de estas estancias del duraznillo, y de los imponiendo pena a los que le inquietasen en la posesion, o le ... daño. Y justamente suplico a Uds., que de su Magd que Dios guarde, me haga a este collegio della Rioxa de unas sobras de tierras y aguadas que hiviese vacas, y realengas, por justo titulo, que sea, en todo su contorno, y por todos sus pastos. Atento a los sujetos deste collegio, desdeque se fundo, siempre se lo uso y emplean en el bien delas almas, y enseñanza, y cultivo de la Ley, indios, y negros, assi grandes como chicos desta ciudad, y de toda la jurisdiccion, como a todos es maniefiesto. En la qual haga una obra mui grata a Dios N. Sr. ; y mui del seruicio dela catolica Magestad del Rei N. Sr., que tanto encomienda de fomentar estos evangelios, como Uds. con todo zelo y exemplo de todos en esta Prou. ; y este collegio recibisa buena obra, y justicia y que en su nombre pido. Etc.

Francisco Burges

[Fuente: Archivo Histórico de Córdoba. Escribanía de Gobierno 2, Leg. 6 –Tomo II, Expte. 22 (“Expte. 114 . 1687. La Compañía de Jesus pide merced de mas tierras, en La Rioja. Escribano Olca”)]

J

MERCED DE ULAPES A FAVOR DE GOMES CAMARGO (1697)

El Maetre de Campo Don Juan de Samudio, Cauallero del Orden de Santiago Gouernador y Capitan General desta Provincia del Tucuman por Su Mag.d que dios guarde. Porquantto antte mi Parecio Don Thomas Gomes Camargo Vecino dela Ciudad dela Rioja, y Preffentto una petición que con la ella decretado es del tenor siguiente: Don Thomas Camargo Vecino fe(u)detario de la Ciudad de todos Santos dela Nueva Rioja Paresco antte Su Señoria C(o)naquella forma que mas lugar alla con derecho y digo que (...) Soy casado (...) con Doña Maria Del Castillo hija legitima del Capitan Don Juan Del Castillo, ya difunto, y de Doña Agustina de Yllanes y por muerte del dicho su padre entro en la Suseccion del Encomienda de Indios del Pueblo de Polcos Jurisdicción dela dicha Ciudad dela Rioxax donde asì me hallo abesinado; y para llevar a las cargas del dicho matrimonio y por ser el dicho fuedo tan (...) que solo secompone de seis o siete Indios que estan casi todos ausentes dettodas estas provincias, y Señor hallarme con mas de dos muchachos, necesito que su Señoria sesirva de aserme Merced en nombre de su Majestad que Dios guarde de Un pedazo de tierras que estan en una aguada llamada Vlape que esta en un camino nuevo (...) que esta poco amidad para la ciudad de San Luis de Loyola; distante de la ciudad dela Rioxax como sinquenta leguas poco mas o menos ; las cuales estan desiertas yermas y despobladas, y que la dicha Merced [sea de] dos o tres leguas encontorno dela dicha aguada para que asi pueda ser remunida la dicha mi mujer por ser benemérita hija y nieta delos primeros pobladores y conquistadores de esta provincia; y para que yo conforme a las obligaciones de Isodalgo que soy notorio pueda acudir al real Servicio de cargas de vecindad y crianza de mis Ijos, y de sustentto dela dicha mi mujer quien como es publico y notorio quedo huérfana y pobre sin tener mas que el amparo de su madre biuda cargada de quatro.....

(...)

Acerme ladicha Merced en la prima summa pedida que es conforme a lo que su Majestad que Dios Guarde tiene dispuesto por sus reales Cédulas y Ordenanzas: por todo lo cual = Asu Señoría pido y suplico en dicho real nombre Seirba de aserme Merced dedicho pedazo de tierras atendiendo a mi suma necesidad que en ello recibire merced della piedad de su señoría. Don Thomas Gomes Camargo.

En la ciudad de Cordova en dieciséis dias del mes de octubre de Mil Seisientos y Nobenta y Siete (1697). El Señor Maestre de Campo Don Juan de Samudio Caballero del Orden de Santiago Gobernador y Capitan General de la Provincia del Tucuman por Su Majestad Que Dios Guarde = Abiendo visto este pedimento presentado por Don Thomas Gómez Camargo y que por el, en atención a lo que representa parece estar cassado con persona benemérita de esta provincia y sin tener tierras para poderlas cultivar para el sustentto y para ello pide se le aga Merced de este pedazo de tierras llamadas Vlapes, sinquenta leguas de la ciudad de la Rioja yermas y despobladas en cuia attension, según el tenor de su pedimento sin perjuicio de Pueblo de Indios y de otra cualquier persona Sele ase Merced del pedasso de las tierras contenido en su pedimento debajo a los linderso mecionados, del qual abiendo enterado el derecho dela media nata a fassion del Teniente de Real dela dicha Ciudad dela Rioja, y ora de otra manera; las justicias de ella le daran y aran se le den la posesión delas dichas tierras conforme a derecho y dadas no consentiran Sea desposeído sin primero ser oído y por fuero. Y derecho becido pena de quinientos pesos aplicados mitad como (...) de Su Majestad y la otra mitad para gastos de Guerra Y desgachese titulo en forma Con...versión de este pedimento Y lo di proveído Y lo firmo.= Don Juan de Samudio=

[Fuente: Archivo Judicial de La Rioja, Leg. A-395, f.403-409 vta.]

K

Merced de tierra de Olta (1687)

“Pedro de Abila hijo originario y morador de la ciudad de la Rioja (...) y digo que he serbido a su magestad en las ocasiones que me han ofrecido de tomar los amos en su real serbicio y en la ultima campaña que hizo el señor Juan de Dias de Andino a la probincia del Chaco entre a mi costa y mención. Y estoi casado y pobre y para poder me sustentar se sirba en nombre de su magestad a aserme merced de un pedaso de tierras que estan bacas y realengas en el paraje de Olta jurisdicción de la rioja que lindan por la parte del poniente con los de Colosacarez y por la otra parte con la [merced] de al tener Francisco Plasido de Bergara y por la parte del oriente con la de Olta con sus pastos y aguadas y usos y costumbres y derechos y servidumbre para que los pueda poblar con ganados maiores y menores y sean confesas y lomas queami me paresiere que son dos leguas asi de largo como de anchoY pido y suplico se sirba de haserme merced de dichas tierras[fdo:Pedro de Abila]

En la ciudad de Cordoba a los doce dias del mes de julio de mil seisiento y ochenta y siete Don Thomas Felis de Argandoña Gouor. Y Cap. General de la Provincia el Tucuman por su magestad que dios guarde abiendo visto la petission presentada por el ayudante Pedro de Avila morador de la ciudad de la Rioja. Y alegado y pedido por el susodicho digo que en atension a sus meritos y servicios hechos a su Magestad en todas las ocasiones que sean devido tomar las armas como lo alega en su petición; En nombre de su Magestad que dios lo guarde el Gouer. Capitan General de estas Provincias y en virtud de los Reales poderes que para ello tiene le hara y dio merced al dicho ayudante don Pedro de Abila para el y paras sus herederos y susesores para siempre jamas del las tierras mencionadas en su petission En el paraje y debajo de los linderos mencionados en su petición con todos sus pastos y montes y entradas y salidas.....Sinperjuicio de indios ni tercero alguno de mayor derecho tenga Y con cargo asi mismo de que aya de enterar en la Real caxa de la ciudad de La Rioja el

derecho de la media anata en poder del tesorero juez o pcial. della Real Hacienda que la tiene a su cargo.

Y consitando acuerdo hecho ordena y mandaa las justicias m.Y y ordinarias de la ciudad de la Rioxa le den y le hagan dar la posesion de las tierras y en ella le amparen y defiendan sin consetir que sea desposeido de ellas sin primero ser oydo y por fuero y desobededecido pena de cinquenta pesos corrientes de a ochoreales aplicados para la Real Camara y gastos de justiciay sele despache titulo ...Y decreto y assilo proveyo mano y firmo de su nombre .[Gobernador] Thomas Felis Argandoña”

[Fuente: Archivo Histórico de Córdoba (Arg.), Escribania de Hacienda N° 2, Leg. 7. Expte. 9]

L

MERCED DE ANILLACO DEL ABAUCÁN, FIAMBALA Y TINOGASTA

(Los Sauces, 3 de Febrero de 1687)

El Cap.n de Caballos Corazas Don Tomas Felix de Argandoña, Gov.or y Cap.n Gral deesta provincia del tucumán por Su Magestad q.e Dios guarde—Por quanto parece [ileg.] Gobierno el Maestre de Campo D. Juan Greg.o Bazan Pedraza, vecino de esta ciudad de la Rioja, hasiendo precentacion Y peticion y en ella relacion de sus méritos y servicios y de sus pasados pidiendo en atencion de ello y de no tener tierras p.a sementeras y ganados mayores y menores en su Crecida familia y hermanos y sobrinos, q.e lo hisiese merced en el Real nombre en la jurisdic.n de la ciudad de San Fernando y las que se contienen en otro pedimento por Bacas Yermas y despobladas q.e probeí de merced de ellas en su favor q.e con dho su pedimento a la letra es del tenor sigiente — El Maestre de campo don Juan Greg.o Bazan Pedraza paresco ante Vs en la mejor forma q.e el dro me permite y digo que en la Ciudad de San Fernando Cincuenta leguas poco mas o menos de la Ciudad de La Rioja y serca de su distrito hacia el poniente de ella de esas de su sierra hay unos parajes y tierras bacas y realengas que estuvieron pueblos de indios de mi encomienda y de otros q.e oy entran p.r orden de la Capitanía general desta probincia reducidos con sobrada comodidad a mas sercanía delas dhas dos ciudades p.r conveniencia de dhos Yndios y la publica, las cuales tierras necesito para poblarlas y cultivarlas para sustento y obligaciones y la de mis hermanas y familia dilatada q.e mediante ser voluntad de su Mag. Q.e se den y haga merced las dhas tierras bacas a personas beneméritas de su Corona y serlo yo por haber servido a su magestad en el socorro del puerto de Buenos ayres Contra la Nacion Lusitana q.e hice p.r mi persona con dos soldados mantenidos y pagados a mi Costa Como mostrare por sertificacion de mis superiores y ser hijo legitimo del Mstre de Campo D. Juan Greg.o Bazan de Pedraza y por su persona y con la Costa y mucho gasto de los cargos q.e a abiendo sirvio y

asistio ala pasificacion y conquista del Valle del Calchaquí en su ultima reducción y ser nieto p.r linea paterna y materna y decendiente de los primeros descubridores conquistadores y pobladores de la Ciudad de Santaigo de hestero, la de ntra. Señora de Talavera de Esteco, la de Cordova, de la Rioja, y la de San Juan Bautista q.e hoy esta reducida al Valle de Catamarca, con sastisfacion publica en los cargos preminentes q.e tubieron hasi publico como militares y cumplim.to delo q.e fue a su cargo en el real servicio; se ade servir U.s. de hacerme la dha mrd en la forma y manera sigiente: =del Pueblo biejo de Anillaco con dos arroyos uno bermejo q.e corre en dho paraje, y otro adelante con mas su potreros q.e esta a un lado y el Pueblo biejo de Guatungasta, y el paraje llamado Saladillo, y el otro Pueblo biejo llamado Fiambala con mas su potrero q.e cae rio arriba y al poniente y los Pueblos biejos de Abaucan Sunquil y Saujil desiertos que fueron de Yndios de mi encomienda, con dos leguas de tierra en contorno en cada uno de los dhos pueblos y sitios suso mencionados, todas las Aguadas q.e contienen montes y pastos [ilegible] aguadas y pertenencias q.e los dhos pueblos tubieron q.e les pertenecian en ambas sierras, las del poniente y oriente q.e forman el Valle donde estan los parajes con mas las sobras de ellos y sus [ilegible] entradas y salidas cazaderas y pescaderas y otras servidumbres de dhos pueblos especialmente el paraje q.e llaman el Cazadero delos Yndios de Abaucan de dha mi encomienda; y las sobras del Pueblo de Tinogasta del Capitan Juan de Vega, y el de Aymogasta, las Cuales mercedes son sin perjuicio de tercero de mejor Drõ. Q.e en hacerlo asi U.s. se cumplirá la voluntad de Su Mgestad por lo cual al U.s. pido y suplico me haga la dha. Mrd. En la forma que la pido q.e en ella recibire merced, y juro a Dios y a esta señal de Cruz + no es de malicia =D.Juan Gregorio de Pedraza= En el Pueblo de Los Sauces, jurisdicción de la Ciudad de La Rioja, en tres dias del mes de Febrero de mil seiscientos y ochenta y siete años, el Cap.n de Caballos Corazas D. Thomas Feliz de Argandoña Governador y Cap.n General de esta provincia del Tucuman, por su magestad q.e Dios guarde Visto el pedimento antecedente del Mre. De Campo D. Juan Greg.o Bazan de Pedraza sobre que se le haga mrd. en el real nombre de los parajes y pueblos biejos q.e hay bacos en la jurisdiccion de la Ciudad de San fernando en el Valle de Tinogasta y Abaucan, y los demas q.e en la dha petición ban espresadas p.r tierras bacas Yermas y despobladas lo Cual sea en remuneracion de sus meritos y servicios y los de su Padre y Abuelo de ambas lineas Paterna y materna, y por ser publico y notorio y constarme han

servido a su magestad en todas las ocasiones q.e sean ofresido en esta Prov^o con mucha costa de sus Asiadnas y lustre de sus personas y atendiendo a la calidad de ellas y ser Voluntad de su Magestad sean remunerados los benemeritos por tanto en nombre de su Magestad y en virtud de sus reales poderes y como su Governador y Cap.n Gral de esta provincia hago merced a Voz el mtre de campo D. Juan Gregorio Bazan de Pedraza, p.a vos y Uuestros herederos y subseores perpetuamente [ilegible] de heredad de los parajes y pueblos biejos de Yndios q.e los abitaron de Uuestra encomienda y de otras reducidos de años atrás en distantes parajes por Ordenes de esta Capitanía General por combenir asi y tener sobrada comodidad p.a que sean vuestros el Pueblo de Anillaco con aguadas arroyos y potrero y el paraje del Saladillo y el de Guatungasta pueblo biejo y el pueblo asi mismo biejo de Fiambala y su potrero rio arriba y los pueblos de Abaucan Sunguil y Sabuil con dos leguas de tierra en contorno en cada uno de los parajes y pueblos mencionados con todas las aguadas rios y manantiales, montes pastos q.e comprenden y todos sus usos y costumbres casaderos y pescaderos y demas pertenencias y servidumbres que los dhos pueblos tubieron y debieron tener al tiempo q.e estubieron pobladas y abitadas de los dhos Yndios dentro y fuera de los linderos q.e en cada Pueblo aaquíban señalados con los potreros sierras y aguadas q.e tubieron y poseyeron y hay en sus contornos y en ambas sierras q.e forman el dho Valle de Abaucan y Tinogasta y el Potrero del Cazadero de Abaucan, y lo demas enla forma q.e esta parte lo pide debajo de los linderos q.e sita con mas las sobras de los dhos parajes y Pueblos suso mencionados y de el de Tinogasta y Aymogasta q.e refiere q.e sea sin perjuicio de tercero y naturales p.r yermas bacas y despobladas p.r q.e las pueda poblar o en agenaar como cosa suya propia con tal de q.e por esta mrd entere en la real Caja de la Ciudad de la rioja o enla de sanfernando de dros de media anata y constando de ello mando a las justicias mayores y ordinarias de dha ciudad ante quien esta parte seprecentare le den y haya dar la posesion natural de dhas Tierras en uno de dhos parajes mencionados q.e baste y se entienda la adquiere delos demas y si p.r la distancia dela Ciudad de Sanfernando hubiese el entero dela media anata en la real Caja de la Ciudad de la Rioja de donde es becino doy comision a cualquiera persona q.e sepa leer y escribir p.a q.e en el real nombre de la dha pocecion con las solemnidades dispuestas p.r dro y habiendola tomado le defiendan y amporen en ella las dhas justicias sin concentir sea despoceido sin primero ser hoydo y p.r fuero y dro bensido pena de cada

doscientos pesos correintes aplicados p.r mitad Camara de su magestad y gastos del precidio de esteco y sola dha pena la persona q.e diere la dha pocecion a esta dha parte si hallare alguna persona ó personas ocupando las dhas tierras de q.e hago mrd sin anterior mejor derecho y titulo los lansara dejando aesta parte en quieta pocecion y p.a ello podra usar bara dela real justicia y Ymponerle las penas q.e fueren combenientes y excutarlas en caso de inobediencia conforme a Drô y deesta mrd se despacha titulo en forma con Ynsercion de este acuso y dho su pedimento. Asi lo probe mande y firme con testigos p.r aucencia del escribano de Gobierno y a falta de real en este papel comun a falta del sellado= Don Tomas Feliz de Argandoña, testigo Juan Clemente de Baigorri=testigo Vicente [ileg.].

[Fuente: Archivo Histórico de Catamarca. Sección Gobierno, Carpeta N° 1, Leg. s/n, años 1681-1902, fs. 9 a 13 y vta.]

M

Auto General del Oidor y Visitador Martínez Luján de Vargas (1693)

«En la ciudad de todos los santos dela Rioxa, en once dias del mes de julio de mil y seiscientos y nobenta y tres años, el señor doctor don Antonio Martínez Luxán de Bargas del Consejo de Su Magestad, su oydor más antiguo de la Real Audiencia de la ciudad de La Plata y Visitador general de esta provincia del tucumán por especial comisión del Rey nuestro señor, etcétera

Ø Dijo que auiendo acabado y concluydo la visita de las encomiendas de jurisdicción de esta ciudad, en las sentencias que âpronunçiado en ella tiene prevenido el modo y forma que deuen observar los encomenderos en los casos que cada Vno a contrauenido a las leyes y las hordenanzas; y porque se le ha pedido asi por el Protector de los naturales de esta ciudad como por algunos de dichos encomenderos, se les deje forma para portarse en lo de adelante con sus indios encomendados, por auer Uiuido hasta aquí con alguna ympericia de las cédulas y leyes que hay en esta materia, para que en algún tiempo no la puedan alegar y queden sabidores de lo que es su obligación y resulta en beneficio de los indios:

Ø Mando lo primero que, para que se excusen quantas sobre esta paga del servicio personal y otras queexas y clamores que se han experimentado en esta visita, cobren los dichos encomenderos el tributo de los indios encomendados que tobieren de diez y ocho años hasta cincuenta, según la tasa hecha por el Señor don Francisco de Alfaro, oydor de la Real Audiencia de La Plata, visitador general que fue de esta provincia, que son cinco pesos al año, como se expresa en la hordenaza nobenta, exceptuando las encomiendas fechas en aquel tiempo, porque estas han de correr a razón de diez pesos de tributo hasta que vaquen, como declara la ordenanza noventa y una. ===Y que no Vsen del servicio personal de dichos indios por estar prohibido en la hordenanza primera, habiéndose hecho ésta en la junta a que concurrió el señor Obispo y señor Visitador, los prelados de las hórdenes y otros letrados, sinque ninguno sintiese cosa en contrario, teniendo todos por injusto y contra todo derecho el dicho servicio personal; y por ley veinte y cuatro del título quinto del libro sexto

de la nueva Recopilación de Yndias declara Su Majestad ser su voluntad que las tasaciones de los indios que tuvieran algún servicio personal se quiten sin embargo de cualquier reclamación de los encomenderos;= y en la ley siguiente del título y libro citado manda que se alce y quite como quiera que se hallase introducido;= y por la ley cuarenta y siete, título doce del libro sexto se impone pribación de encomienda al que contraviniera a lo referido, y al ministro que fuese culpado en esto o lo disimulare en pribación de oficio;== y por la ley cuarenta y nueve de mismo título y libro se manda a poner en las clausulas de la mercedes de encomiendas la calidad exclusiva del servicio personal, esforzando lo mismo por la ley diez y siete del mismo título y libro.== Y aunque estas leyes son generales para todo el reino del Perú, se expidió cedula especial para esta provincia el año de mil seiscientos y diez y ocho, muy posterior a las hordenanzas del señor don Francisco de Alfaro, y hoy está puesto en cuerpo de derecho, que es la ley primera del título diez y siete del libro sexto de la Recopilación, en que su Majestad prohíbe expresamente este servicio a los de esta provincia, aunque sea por título de yanaconazgo, declarando por nulos los hechos de los gobernadores que contubieren semejante calidad, suspendiendo de oficio al que contrabiniere y privando del salario que desde la provisión de la encomienda le corriere, privando justamente al encomendero que le usare, poniendo desde luego en la Real Corona la encomienda.==Y por lo que le toca a los indios calchaquies que se halla mucha parte de ellos reducida en las chacras desta ciudad, mando su Magestad por cedula beinte de diziembre de mill y seiscientos y setenta y quatro que estos se encomienden en forma questa dispuesto con los demás sin obligarles al servicio personal pues generalmente esta prohibido como se reconocen de lo antesedente.==Y porque de la observancia de dichas leyes pende el alivio y el consuelo de los indios y con que cesarán los agravios que se refieren, pues cesando este motivo faltará la ocasión de las quejas, como sucede en los encomendados de casi todo el reino de Perú.

==Y asimesmo mando que cuiden los dichos encomenderos y el protector de los naturales que cuando estos se concertaren para servir o fueren a alguna mita se les pague de jornal a rreal y medio cada día en moneda de la tierra, y a los que sirvieren por meses quatro pesos y medio en la misma, como lo hordena Su Majestad en la ley

doce del título diez y siete del libro sexto de la nueva recopilación, porque aunque en la ordenanza sesenta se puso menor tasa, todaVía deue prevalezer la ley, y está más proporcionada a los tiempos presentes, en que los indios, por usar diferentes vestidos que cuando se hicieron las hordenanzas, tienen mayor gasto.===Y porque se ha reconocido perjuicio en que los encomenderos tengan en sus casas indias de sus rrepartimientos, porque he condenado a algunos, les mando guarden y cumplan la ley beinte, titulo nueve del libro sexto de la Recopilación, que con expresión lo prohíbe, aunque se diga y se alegue que las tienen de su voluntad y que les pagan, imponiendose pena de cien pesos oro para la Cámara de Su Majestad.==Y porque tambien se ha perjudicado a los indios en alquilarlos y darlos a otras personas, especialmente para viajes, mando que no se haga, por prohibirlo Su Majestad por la ley veinte y tres de titulo nueve , libro sexto, con pena de perdimiento de los indios y cincuenta mil maravedís aplicados a la Real Cámara.===Y de la misma manera prohibo que los encomenderos, sus mujeres, padres e hixos y criados ni esclavos entren ni residan en los pueblos de sus encomiendas, porque demás de estar prohibido en la hordenanzas lo prohíbe Su Majestad, pena de cincuenta pesos aplicados por tercias partes, Cámara, juez y denunciador, ordenando que las justicias reales no lo consientan ni permitan y que ejecuten la pena, por la ley catorce, título nueve, libro sexto; y por la diez y seis quedan encomenderos obligados a estos daños y a pagar el interés y condenación hecha por esta causa, sin diferencia entre pena e interés.==Y que por la misma razón no deuen los encomenderos tener mayordomos o pobleros, mando que se guarde y cumpla la hordenanza veinte y nueve pena de privacion de la encomienda perpetuamente y que por los dos años quede ynábil para obtener otra, y al que lo aceptare diez años de galera y doscientos azotes. Y porque los yndios de los pueblos suelen exceder en su embriaguez y es bien que aya quien los contenga se observarra puntualmente la hordenanza setenta y tresque dispone el Justicia mayor o alcalde hordinario tenga ... dado de visitar los otros pueblos particulamente al tiempo de siembra y coger las sementeras y cuando se cosecha algarroba y si toda Vía esto no bastare y se rreconosiere necesidad presisa de poner mayor domos Usaran los dhos encomenderos dela facuatad que seles consede por la ley beinte y siete del título tersero de libro sexto, ajustandose para no yncurrir en la pena desta ordenanza a las calidades con que la ley lo permite de que los dhos

Ø mayordomos ayan de ser personas tales y de tanta satisfazion que no hagan daño ni
 Ø agrauio a los indios y luego que sean nombrados antes de entrar en el pueblo sean de
 Ø presentar en la Audiencia o ante el gouernador para que se les de licencia y estos y
 los encomenderos daran fianzas legas llanas y abonadas en la cantidad que pareciere
 de pagar y satisfacer los daños y estar a derecho ===Y por esto no se sierra la puerta
 absolutamente al encomendero para entrar a los pueblos de su encomienda porque
 según la ordenanza treinta y dos lo pueden hazer en tiempo señalado que es en el de
 Ø siembra y coxer la comida y coger la algarroba, ora ayan de coxerla en el pueblo o
 fuera de el y tambien para la cobranza de las tasas pueden estar en el otro pueblo
 ocho dias pero abran yncurrido en la pena de la ley si estuvieren en otros tiempos
 ==Y porque e condena a algunos encomenderos con penas pecuniarias por los
 hilados que an rrepartido o hecho rrepartir a las indias de sus pueblos y
 especialmente a las casadas para la paga de estos tributos de sus maridos, y assi
 Ø prohibo y mando se escusen estas repartisiones y no las agan los dhos encomenderos
 pues las yndias son libres y exentas del tributo y seruicio y se opone a todos los
 Ø derechos la introdusion y abuso de que las muxeres pagan por los maridos, y esta
 prohibido por cedula del tres de mayo demil seiscientos y nueve y mill seiscientos
 seis ==Y mando que los caciques de dichos pueblos no rreciban ni rrepartan como lo
 an hecho hasta aquí algodón de sus encomenderos para estas contribuciones pena de
 beinte asotes y de quatro dias de carcel por cada vez, y al encomendero por perdido
 este hilado y con obligación de pagar el por texer a las muxeres casadas y de cien
 pesos aplicados por terzias partes Camara de Su Magestad, Juez y denunciador ==y
 porque tengo rreconocida la disposisión y despendio de las rreducciones de los yndios
 Ø Y que con esto rresulta de sacarlos de sus Pueblos a título de traxinantes o seruicio
 de los que lleban carretas o mulas-Mando se guarde y se cumpla la ley sexta del
 título dies y siete del libro sexto de la rrecopilasion que da la forma y el modo con
 que se ande portar en estos biaxes ymponiendo pena de sinquenta pesos al español y
 beinte asotes al yndio que contrabinere y antes estava preuenido por la ordenansa
 treinta y siete y assi no podran sacar los indios aunque sea de su voluntad sin
 preseder licencia expresa y por escrito del gouernador desta Prouincia El qual
 auiendo visto y examinado el efecto para que se la piden la podrá conseder y en esta
 conformidad señalara los yndios que le pareciere y el teimpo que se an de ocupar y

los jornales que an de perseguir y rrescuira fianzas y seguridad dela parte de que los bolbera a sus pueblos al plaso que se señalare poniendo las penas a su advitrio y que se obligen, principal y fiador, a la paga de los hornales de los dias que se ocuparen en estar y boluer a sus pueblos ===Y todas las calidades referidas reguardarán Inviolablemente y sesará la ocazi3n de pasarse los yndios al rreyno del Perú por ser esta la Uoluntad de Su Magestad expresada en la ley sitada y en cedula posterior del ocho de octubre de mill seiscientos y ochenta y Uno ==Y porque tengo reconocido general desconsuelo en los yndios rrepresentándome que no tienen libertad para alquilarse con los españoles que les ofrecen buenas comodidades y porque luego sus encomenderos los sacan de las partes y lugares donde se hallan pasando aun a tener con las mismas personas con quienes se an alquilado y porque en esto se infringe la libertad –Mando que de aquí en adelante no se les ympida ni embarase a los dhos yndios el que se puedan alquilar según y en las formas y en los tiempos y con las calidades que se dispone en las hordenanzas de esta prouincia, aduirtiéndose que no por eso ande tener facultades los indios para desamparar sus pueblos y rredusiones sino que acabando el teimpo de su alquiler rebuelban a ellos y para que no haya dificultad ande de dexar sus muxeres hixos y ganado que con eso repar los inconbenientes que se preseden ...==Y porque los dhos encomenderos con pretexto y so color de correcci3n fraterna, suelen castigar los indios las faltas que tienen con ellos-Mando que ningún encomendero pueda por sí ni por ynterp3sita persona, ni con ningún motibo, castigar a ningún indio o yndia debajo de la pena dela hordenansa y que si el castigo fuere con exeso se castige con el mismo la justicia

Don Martínez Luxan de Vargas (*rúbrica*)

Por mandato del señor Oidor y Visitador General, Lorenzo Pinto (*rúbrica*) escribano receptor.

[Fuente: A.G.I., *Sec. VI*, Escribanía de Cámara, 864-A, pieza 5º, f.945-948 vta.]

O

Merced de sobras de La Chimenea a favor de Juan Muñoz Pereyra (1701)

“Petición.- Francisco Gaitan en nombre y con poder del teniente Juan Muñoz Pereyra vecino de La Rioja paresco ante V.E. como mas lugar haya en derecho y digo que que dicha mi parte ha servido a su majestad en dos entradas al valle calchaquí y su conquista y en todas ocasiones que se han ofrecido para la guerra pendiente del Chaco yendo a ella y despachando a su hijo Francisco Muñoz Pereyra y en otras ocasiones habiendo soldados por orden de los tenientes de la dicha ciudad, y esta casado con doña Luisa de Llanes persona así mismo venemrita decendiente de conquistadores, pobladores de la dicha ciudad de La Rioja y necesita para sustentarse y acomodar a sus hijos y familia de que en la estancia de Chimenea en Los Llanos de la jurisdicción de la dicha ciudad de La Rioja, por otro nombre y llamada «Zoque» la cual posee por herencia de dicha su mujer por merced real que se le hizo a su hermano Francisco Muñoz Pereyra y de la dicha Merced para el oriente pido, en dicho nombre, las sobras hasta los términos del pueblo de Olta que habrá una legua poco mas o menos y para el poniente que linda dicha merced de sobras con la estancia de Sunin y Polco, que poseen Juan de Acosta y Jose Roldan y para el sur con las tierras de la estancia de Nacate que posee el capitán Andres Perez de Arce, que habra una legua de tierras bacas a cada parte y lo mismo para el norte a los términos del pueblo de Colosacan las cuales sobras se sirva V S de hacer merced al dicho mi parte. A V.S. pido y suplico se sirba de ha-ser la dicha merced de sobras tuyas referidas al dicho mi parte que las necesita para acomodar a sus hijos y familia y se haya pobre y cargado de ellas y que recibirá y yo en su nombre bien y merced. Francisco Gaitan.—En la ciudad de Córdoba provincia del Tucumán en nueve dias del mes de noviembre de mil setescientos y un año el Señor Don Juan De Samudio Caballero de el orden de Santiago Gobernador Capitan General en esta dicha provincia habiendo visto este escrito en nombre y con poder del Teniente Juan Muñoz Pereyra vecino de la ciudad de La Rioja en esta Provincia otorgado ante don Antonio de Almonacid alcalde ordinario, su fecha en dicha ciudad de La Rioja a veinte y nueve del

mes de octubre pasado de este año para los efectos de pedir la merced de tierras que se contiene dijo su señoría que en atencion a sus méritos y servicios del dicho Juan Muñoz Pereyra por el presente le hacia e hizo merced en nombre de su Majestad Dios le Guarde en virtud de los reales poderes que para ello tiene, de las tierras contenidas en el pedimento en contorno de la dicha estancia llamada «La Chimenea», en la jurisdicción de la Rioja como y según se contiene en su escrito a los cuatro rumbos, Norte, Sur, Oriente y Poniente hasta los linderos que refiere de suerte que en cuanto huviere baco y realengo desde la dicha estancia de «La Chimenea» a todos los cuatro rumbos hasta los dichos linderos, le hace merced de ella con todas sus aguadas enconada, pastos y montes y se lo da por servido al susodicho sus herederos y sucesores y que como tal suyo, la puedan vender, donar, trocar, cambiar y enajenar y en otra manera disponer como cosa suya y esta merced no le hace con cargo de que sea y no entienda sin perjuicio de tercero y de naturales que mejor derecho tengan y que pague la media annata en las cajas reales de la dicha Ciudad a tazacion de quien toca y para su cumplimiento se ordena y manda a los justicias de la dicha ciudad y en su defecto a cualquier persona que sepa leer y escribir le de la posesion de todas las dichas tierras de esta merced que es conforme rija el pedimento al dicho Juan Muñoz Pereyra dandosela ante dos testigos y asi dada no concientan sea despojado, ni desposeido sin primero ser oido y por fuero y derecho vencido pena de doscientos pesos aplicados en la forma ordinaria porque su señoría desde luego lo ampara en ellas. Y atento a la pobreza del susodicho y poca utilidad del terruño de la dicha merced le sirva este auto de titulo y recaudo en forma y lo firmo y su señoría por ante mi el presente escribano que asiste a los despachos de sus juzgados de ello doy fe.. Don Juan de Samudio. Ante mi Don Luis Izquierdo de Guadalupe escribano de su majestad.

En la ciudad de La Rioja en quince dias del mes de Enero de mil setescientos y dos años, el maestre de campo Juan Clemente de Andrada teniente tesorero Juez Oficial real en ella y su jurisdicción certifico que en el libro real a mi cargo esta asentada una partida de entero y cargo en el ramo de medias anatas del tenor siguiente. En la ciudad de La Rioja en quince dias del mes de enero de mil setecientos y dos años enteró en esta real caja de mi cargo el teniente Juan Muñoz de Pereyra tres pesos corrientes por el derecho de media anata por un titulo de merced de las sobras de la estancia de «La Chimenea» en el partido de los «Llanos» en esta ciudad de que le ha hecho merced el

señor Don Juan de Samudio Gobernador y Capitan General de esta Provincia su fecha en Cordoba en nueve dias del mes de noviembre del año pasado de setecientos un años y refrendado de Don Luis Izquierdo de Guadalupe Escribano de su majestad. Y habiendome informado del valor de dichas sobras y ser de poca utilidad las tase en los dichos tres pesos de media anata que exhibió ante mi de que me hago cargo y lo firmo. Juan Clemente Andrada. Como Consta y parece por dicho libro real en el ramo citado a que en lo necesario me refiero y para que conste donde convenga lo certifico y firmo de mi nombre Juan Clemente de Andrada. (...)”

[ACELR-Protocolo Escribano Miguel Jaramillo, año 1880, fojas 78 y ss.]

Mersed Real y mas documentos perten.^{tes} al paraje de Santa Rita de Chilecito en el Balle de Anguinan Jurisdiccion dela Rioxa

+veinte quatro

SELLOPRIMERO,VEINTEYQVATROREALES,AÑOS-DE-MIL-Y-SEISCIENTOS-Y-QVARENTAYQVATRO,Y-SESIENTOS-Y-QVARENTA-Y-CINCO.

[sello]POTOSI 1709-1710-1707-1708 [sello]POTOSI 1712-1713-1714-1715.

Don Esteuan de Vrizar y Arespacochaga Cauallro del orden de Santiago Maestre de campo de Ynfanteria Espaneola, Gobernador Capitan Gral. destas Provincias del Tucumán. Eccetera ==

Por quanto el Sargento Mayor Don José Fernández Pedroso del Sueldo, Uecino feudatario y Alcalde ordinario de esta ciudad de Salta Presentó ante mi una petición en nombre y con poder del Sargetno Mayor Domingo de Castro Basan uecino dela ciudad de la Rioja pidiendome y suplicandome fuese servido hacerle á su parte delas Tierras que refiere su pedimento, cuyo tenor conlo á él proveído es el siguiente==

Señor Gobernador y Capitan General El Sargento Mayor Jose Fernández Pedroso del Sueldo uecino de esta ciudad y Alcalde Ordinario en ella, en nombre y con poder del Sargento Mayor Domingo de Castro Uecino feudatario dela Ciudad de la Rioja que en el que con ésta presentó en devida forma ante Uzia paresco y digo: Que dicha mi parte es persona noble y Uenemérita Hijo y descendiente de los primeros conquistadores pobladores de estas Provincias y esta casado con Doña María Gonzales de Faías. Asimimo hija y nieta de la primera nobleza desta Provincia cuyos méritos de dicha mi parte son notorios de que me relevan de prueua y hallarse pobre con crecida familia de mujer e hijos que sustentar y para poderlo hacer: se traole servir Usía en nombre de su Magestad (que dios guarde) de hacerle merced de un recado de tierras que Lllaman “Del Ynga” y para cada viento una legua con un marco de agua que pueda cojer de la quebrada dela agua negra en el Valle de Anguinan que en esto se cumplirá cn la uoluntad de su Mgestad Yo recibiré merced en dicho poder me lo debuelua para usar

de el en los casos que conbengan en dcha mi parte que será Justicia que espero dela grandeza de Usía, Jose Fernández Pedroso del Sueldo== Salta y Seteimbire Veinte y ocho de mil setecientos y doce años== Por presentada en nombre de su parte que lo esel sargetno mayor Domingo de Castro Basan uecino feudatario de la ciudad dela Rioja con el poder que refiere; en quanto ha lugar y derecho. Y en atencion a los méritos y seruicios dela parte que esta representa que son notorios y constan a su Señoría, y asi los antecedentes como los efectuados en la guerra pendiente y presentes campan a su vista==Digo que en nombre de Su Magestad (que dios guarde) Y en uirtud de sus reales poderes que para ello tien como su Gobernador y Ctan Gral destas Provincias : Hacía é hizo Merced al dicho Sargento mayor Domingo de Castro Basan uesino feudatario dela ciudad de la Rioja de las tierras que refiere su pedimento en el paraje y deuajo de los linderos que en el se contienen en jurisdiccion del Valle de Anguinan con el marco de agua sitio calidades i linderos que en el se expresa= y esta Merced se le hace sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga; para el sus hijos herederos y subseores con cargo de pagar el derecho de la media anata á tasacion del oficial Real del Partido==Y constando de su Entero la Justicia Mayor Ordinarias de la jurisdiccion le pondran en posesion de dichas tierras; para lo cual se les despacha Título en forma con incersion de su pedimento y este Decretto==Don esteuan de Vrizar y Arespacochaga.

=Ante mi Don Juan Francisco Martinez Saenz, Escriuano Mayor de Gobierno ==En cuya conformidad y del decreto preincerto que mando se guarde cumpla y execute entodo y por todo como en el se contiene, en nombre de Su Majestad (Dios le guarde) y en virtud de sus Reales poderes que para ello tengo como Gobernador y Capitan General de estas Provincias del Tucumán Hago a Vos el Sargento Mayor Domingo de Castro BasanUecino Feudatario de la Ciudad dela Rioja de las Tierras que se refiere en el pedimento presentado por nuestro apoderado que es un recado de tierras que dice tendrá de largo cojiendo por dentro la Cara que llaman “del Ynga., para cada viento una legua con un marco de agua que podrais coger de la que sale dela quebrada del Agua Negra en le Valle de Anguinan como lo pedís para vos, uuestros hijos heredero y subcesores y quien en vuestro derecho Subsediere, la cual se entienda sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga: y con cargo y calidad que habeis de pagar el de la media anata a tasación del oficial Real del Partido.

==Y constando por un certificado haberlo enterado y pagado en la real Caja de su cargo, Ordeno y mando a las Justicias Mayores y Ordinarias de la Ciudad de La Rioja y su Jurisdiccion os pongan en posesión de dichas tierras sin permitir por ninguna manera que de ella seais desposeido sin primero ser oido y por fuero y Dro vencido Pena de doscientos pesos aplicados por mitad Real Camara de Su Majestad y Gastos de la Guerra pendiente, en que desde luego declaro por [illeg] y condenando al que lo contrario hiciere. Para lo cual os mandé dar, y dí el presente firmando de mis mano, sellado con el cello de mis armas y refrendado del infrascripto secretario Mayor de Gobernación: Fecho en esta Ciudad de Salta en quatro dias del mes de Octubre de mil setecientos y Doce años. Esteuan de Vrizar y Arespacochaga. Por mandato de la Señoría, Juan Francisco Martienes Saenz Secretario Mayor de Gobernacion.

==El maestre de campo Don Diego Ignacio Bazan de Pedraza Rejidor y DepositarioJeneral de esta Ciudad Teniente Tesorero, Juez Oficial dela Real Hacienda: Certifico como en el libro real de mi cargo a fojas treinta y uno esta una partida de entero y caja del tenor sgte sacada a la letra==En la Ciudad de la Rioja en once dias de Agosto de mil setescientos y trece años El maestre de campo Don Diego Ignacio Bazan de Pedraza Rejidor Depositario General Teniente Tesorero Juez Oficial de la Real Hacienda desta dcha Ciudad, me hago cargo de dos pesos corrientes que hoy dicho dia enteró en mi poder y real caja de mi cargo el Alferez Enrique Bazan Podatario del Sargento mayor Don Domingo de Castro por un título de Merced de Tierras fecho a favor de dicho Don Domingo de Castro por el Señor Don Estevan de Vrizar y Arespacochaga del Orden de Santiago, maestre de campo, de Ynfanteria Española, Gobernador y Capitan General desta Provincia, de una suerte de tierras y un marco de agua en un recado que hace y sercano al Arroyo que sale y sercano al Rio Negro cojiendo por dentro las casas que llaman del Ynga, como todo mas cabamente costa por el pedimento y Merced fecho en la Ciudad de Salta en cuatro dias del mes de Octubre de mil setecientos y doce años, firmado de su nombre y sellado con el cello de sus armas refrendado por Don Francisco Martinez escribano mayor de Gobernacion por haberse tazado en cien pesos por personas que conocen dicho paraje pagó dichos dos pesos, de los cuales me hago cargo Lo firmo Don Diego Ignacio Bazan de Pedraza==Don Enrique Bazan =Como costas y parece de dicho libro real foja y partida á que en lo necesario me refiero y para que conste donde conbenga de pedimento de

dicho don Enrique Bazan: Doy la presente certificación firmada de mi nombre en once diaz del mes de Agosto de mil setecientos y trece años. Diego Ignacio Bazan de Pedraza-Derechos gratis.

==En la ciudad de La Rioja en doce dias de Agosto de mil setescientos y trece años El Capitan Don Gabriel Bazan de Pedraza Uecino y Alcalde Ordinario en ella y su Jurisdicción por Su Majestad (que dios guarde) Por Quanto se ha presentado en este mi Juscado el capitan Don Enrique Bazan por parte del Sargetno Mayor Don Domingo de Castro con la Merced Real y certificación de entero de media anata que constan estas fojas; y me Pide comicion para proceder a la Posesion de las Tierras y Aguas de dicha Merced y hallarme embarazado con diferentes causas que ocurren en este mi Juscado y no poderla dar por mi persona Doy por el presente Comicion la que en Dercho es necesaria a cualquier persona que sepa leer escribir para que alzando Uara de la Real Justicia baya al Paraje y parte que en dicho Pedimento y Merced se contienen y Señalan[illeg] ante todas cosas a los circumbecinos por si tienen algun derecho ó accion á dichas tierras oagua de la posesion a dicho Sargento Mayor Don Domingo de Castro Real y Corporal con todas la Solemnidades de el Derecho que para todo ello y lo mas que en Derecho es necesario, doy dicha comicion Y lo firma por ante mi y de testigos a falta de Escribano en este papel y a falta del cellado Don GabrielGegrorio Bazan de Pedraza =testigo Justo Brioso y Quijano =testigo Jose del Alamo.

==El Sargento Mayor Domingo de Castro uecino feudatario de esta ciudad de la Rioja y al presente en este Valle de Anguinan ante Ud parecio como mas por derecho deva y digo: Que en el año pasado del setecientos y doce me hizo Merced de una legua de tierras con un marco de agua el Señor Don Estevan de Urizar y Arespacochaga de la Orden De Santiago , Maestre de Campo de Ynfanteria Española Gobernador y Capitan General de estas Provincias con cargo del entero de Media anata la cual consta y parece en los instrumentos que son estas en debida forma presento ante Usted Y abiendo con dicho cargo me presenté por mi apoderado ante el capitan Don Gabriel Bazan siendo Alcalde Ordinario el año pasado de setescientos y trece por el mes de agosto, quien vistos los instrumentos referidos libro su comicion para que se me diese la posesion la cual no se ha ejecutado por no hauer auido firma de persona intelijente para que la predicha Merced tenga el devido cumplimiento y yo goce con más derecho en la

posesión en que etoy há mas de tres años, se ha de servir Usted medienate su Justicia de darme dicha posesion judicial y que se hallen presentes los circumbecinos a dicha posesion. Por tosm lo que A Usted pido y suplico provea según que pido que sera justicia que pido y lo necesario etcetera. Fdo Domingo de Castro Bazan. ==Por presentada esta peticion por el contenido en ella con los ynstrumentos referidos y todo visto Titulo de Merced y la certificacion del oficial Real: Mando se le de posesion que pide citando a los circumbecinos y que se hallen presentes a dicha posesion por si acaso tuvieran que pedir o les fuere perjudicial. Asi lo proveo mando y firmo ante mi y tstigos a falta de escribano y en este papel a falta de cellado porvei lo de uso Yo el capitan Don Francisco Moreno Maldonado Uecino Alcalde Ordinario de la ciudad de La Rioja y su jurisdiccion por su majestad (que dios guarde) que es fecha en este paraje de Santa Rita jurisdiccion de dicha Ciudad en Dios y nueve dias del mes de febrero mil setescientos y quince años. Francisco Moreno Maldonado =testigo Cristobal Juarez =Silvestre Juarez.

==En la Poblacion que reside el Sargento Mayor Domingo de Castro Jurisdiccion de la Ciuda de Todos Santos de la Rioja en dies y nuevedias del mes de febrero de mil y setescientos y quince años, en cunmplimiento y ejecucción de lo mandado por el Señor Don Esteba de Urizar y Arespacochaga del Orden de Santiago Maestre de Campo de Ynfanteria de Española Gobernador Capitan General de esta Provincia del Tucuman por su Majestad (que dios Guarde) por un Titulo y Merced de Tierras y un marco de agua, Su fecha de dicho Titulo en Salta el cuatro dias del mes de octubre demil setecientos y doce años refrendado por el Maestre de Campo Don Juan Francisco Martinez Saens Escriuano Mayor de Gobernacion y el entero de la media anata que hizo dicho Domingo de Castro ante el Maestre de campo Don Ignacio Bazan de Pedraza Teniente Tesorero Juez Oficial real: Y en cumplimiento y ejecucion de lo mandado por dicho señor gobernado y lo pedido por dicho sargento mayor Domingo de Castro: y citados y presentes los sircum uecinos le cojí de la mano al dicho Domingo de Castro y lo metí en dichas tierras y puesto en ella le dí posesion en nombre de Su Majestad (que dios guarde) Real actual y Corporal *Iure domini belcuasi*, y conforme a Derecho de dia claro como a las dos de la tarde y ante los dichos circumvecinos que sirvieron de testigos y sin contradiccion de persona alguna ; y en señal de posesión el dicho Domingo de Castro arrancó yeruas cortó ramas y tiro piedras y bevio agua de la que corria por el Rio y dijo a los circunstantes se fueren de sus tierras y que se las dejasen libres y hizo otros actos

de posesion y en virtud de ella puso por nombre 'Santa Rita' de quien doy fee y me pidio el dicho Domingo de Castro que lo certifique y diese originalmente para en guarda de su Derecho. Y asi lo certifico en cuanto puedo yo el capitan Don Francisco Moreno Maldonado uecino y Alcalde ordinario de dicha Ciudad y Jurisdicion por su majestas (que dios guarde) y mando no sea despoceido sin primero ser oido y por fuero y derecho Uencido, y se le de originalmente para en guarda de su derecho que es fecho en este papel comun a falta del cellado por ante mi y testigos que se hallaron presentes que firmaron y unos por no saber firmaron otros por ellos, de que doy fe a falta de escribano. Francisco Moreno Maldonado =testigo Cristibal Juares =Gabriel Molina =Joseph de Luna Cardenas =Miguel Davairte.

[Fuente: Archivo Judicial de La Rioja (Depósito Función Judicial del Poder Judicial de la Provincia de La Rioja), Expte 386-M, "Mersed Real y mas documentos perten.^{tes} al paraje de Santa Rita de Chilecito en el Balle de Anguinan Jurisdicion dela Rioxa"]

Q

Venta del Potrero de Mariana del Moral a Benito Nina y Manuel Mercado (1845).

“Viva la Confederación Argentina- Muera los Salvages Vnitarios.

En esta ciudad Capital de la Provincia de La Rioja en catorce dias del mes de Enero de mil ochocientos cuarenta y cinco años. Ante mí Don Gaspar Villafañe, Jues de primer Orden de la Pas, Consular, del Crimen, y Alzada de ella; parecieron presentes Doñas Andrea del Moral como vendedora del Dr□ō. que tenía su finado Padre Don Miguel del Moral en el Potrero que fue del Principal Dueño el Señor Canonizo finado Don Miguel del Moral, y este lo adjudicó á dos de sus hermanos D Nicolas y Doña Mariana del Moral, y se les denomina en lo General el Potrero de los Morales, que enfrenta a Juan Caro y Calera, y como compradores Don Benito Nina, y Don Ml Mercado, ambos en Compañía, y por ante testigos de justo infrascriptos á falta de escriuano, unos, y otros naturales y vecinos de esta Ciudad, por quienes doy fé, que conosco, y Dijo la vendedora Doña Andrea del Moral, que por el presente instrumento Publico Uende, y como que de facto vendió el Dr□ō. que por heredad perteneció a su finado padre Don Miguel del Moral en el Potrero Citado de los Morales frente a Juan Caro y Calera á los expresados Don Benito Nina y Manuel Mercado en cantidad de cinquenta y nueve pesos plata corriente, por conveniencia propia de su interes, que tenía para celebrar la dicha venta de todo el Dr□ō. que pertenecía a su Padre del Moral, por haberle tocado solo a la referida vendedora Doña Andrea en Rason de que se hizo cargo del pago de deudas contraídas por el finado Padre, y otros cargos funerarios que hizo para el entierro del citado su Padre, y que ning- de los demás sus compartes hermanos no tenían Dr□ō. en la pertenencia del referido Potrero de esta Venta, que la hacia para los mismos cargos que tenía que pagar y responder por el dicho finado su padre Don Miguel del Moral, y á consecuencia de la mejor seguridad de los referidos compradores Nina y Mercado, presentó el Boleto del Señor Ministro de Hacienda, que á la letra es, del tenor siguiente.«Uiva la Confederación Argentina=Mueran los salvages unitarios=Ministerio de Hacienda=Rioja 13 de mil ochocientos cuarenta y cinco. Al señor Jues de primer orden Don Gaspar de Villafañe=No hay em(baraz)o para que proceda V. al otorgamiento de la Escritura Publica de Venta Doña Andrea del Moral Hace a Don

Benito Nina y Don Manuel Mercado de todo el Dr^o. que por heredad obtuvo del finado su Padre Don Miguel del Moral del Potrero que llaman de los Morales, que enfrenta a Juan Caro y Calera por haber satisfecho dos pesos tres reales de Alcabala, que le han correspondido al cuatro por ciento sobre el principal de los cinquenta y nueve \$ en que ha sido vendido el citado Dr^o. del potrero de los Morales=Dios qu'- á V. muchos años=Tomas Valdes=» Y dijo la vendedora Doña Andrea del Moral que en rason de esta venta que hacía se separa y de facto se separó de todo dominio, propiedad, y señorío, que en el referido Dr^o. de Potrero tenía por parte hereditaria, y por que sus demás compartes hermanos habian sido con mayor aumento de bienes dotados en hijuelas respectivas, y cede, y traspasa en los compradores Nina y Mercado, con todas sus regalías, Usos, Costumbres, pastos, Montes, Aguadas, pasteaderos a los cuatro rumbos, que abrasen en el dicho Potrero, Montes de frutas que ne el se hallen, y sus servidumbres, y que no valía más que los referidos cinquenta y nueve pesos corrientes de á ocho reales el pesos que hubiere recibido a su entera satisfacció, Y si más valía o valer pudiese, les hace gracia, y donación, pura, mera, perfecta, é irrevocable, de las que el Dr^o llama de inter vivos y partes presentes, renunciando ambos tres, vendedora y compradores, cada uno por si, in solidum las Leyes de la Non Numerata pecunia del dolo, y engaño, por estar ya recibida la autentica presente de Hoc Ha fidei jussoribus rebus deventi, con la general y Dr^{os}. deella y que dice; que General Renunciación non Vala fha. de Leyes, y con protesta, que hace la vendedora Doña Andrea, que si alguna ó algunos les pusiese pleito, debate, ó contienda, saldrá á la defensa y seguirá el pleito hasta dejarlos en la más quieta y pacífica posesion del referido Dr^o del Potrero de que habla esta Escritura, y si tal no lo consiguere les devolverá la citada contidad e los referidos cinquenta y nueve pesos en los mismos terminos que los ha recibido, renunciando todas las leyes que hayan y hacer pudiesen a su favor con inclusión de la que expresamente hagan a favor de las mugeres en rason de intentar alguna nulidad en esta venta, que la hace de su libre, expontanea voluntad que para cuyo saneamiento de su (illeg.) y obligada con su persona y bienes habidos, y por haber dado poder a las justicias superiores como inferiores, para que cumplan y apremie por todo el rigor del Dr^o. Via breve y efectiva como si fuere sentencia definitiva, dada, y pasada en autoridad de cosa juzgada, convertida sentenciada y no apelada; y los referidos compradores ambos dos dijeron que desde luego por ahora y para siempre estaban

conformes con la compra del referido Dr^o de Potrero, que llaman de los Morales, que se cita frente a las dos estancias de Juan caro y Calera con todas sus regalías, que les previene en esta escritura, y en ambos esa de su libre voluntad el referido contrato, que tenían celebrado conforme a los linderos que abraza todo el campo, pasteaderos, y aguadas de las cuatro partes en sus rumbos, q' van expresados, y que ahora, ni en ningún tiempo ni en forma alguna tendrán, que deducir contradicción alguna respecto á que la dicha compra la habían celebrado á su voluntad y contesto; y en Consequencia la vendedora referida Doña Andrea del Moral expresó, que en virtud de esta venta les facultaba pudiesen toma librem-^{te} la Publica Posesión de Dr^o cuando mejor les pareciere Conveniente hacerlo del Derecho de Potrero de esa Venta; Respecto á que por su parte se hallaba separada de todos los Dr^{os}. Q' tuvo en el referido Potrero, y que aunque no parecieron de presente los referidos Cinquenta y nueve pesos, le dio la vendedora por recibida de ellos. E Yo el Jues, que presente he sido a este otorgamiento certifico, doy fé, y verdadero testimonio, que conosco a los otorganete, y de que asi lo otorgaron en mi presencia y la de los tgos. que presentes se hallaron, con quienes actuo y de que doy fé, á falta de Escribano. [Firmado] Gaspar de Villafañe, Andrea del Moral.

A ruego del comprador Don Benito Nina , Lorenzo Ant^o Blanco.

A ruego del comprado Don Manuel Mercado, Manuel Ant^o Barros.

Viva la Confed.ⁿ Argentina; Mueran los Salv.^s Vnit.

En esta ciudad Capital de la Prov.^a de la Rioja en quince dias del mes de Enero de mil ochocientos quarenta y cinco años. Yo Don Gaspar de Villafañe, Jues de Primer Orden de Pas, Consular, del Crimen, y Alsada de ella; puesto en este sitio y puerto de la Tercera Aguada del Potrero que llaman de los Morales de esta ciudad acompañado de los tstigosYnfrascriptos á falta de Escribano y de los interesados compradores Don Benito Nina y Don Manuel Mercado ambos vecinos de esta ciudad aquienes tomandolos de la mano y teniendoles presente en nombre de la Patria Les di la publica possession q' previene el dr^o, Jure Domini vel quasi, la que aprehendieron y tomaron en un dia claro y sereno horas dies de la mañana, de todo el derecho de heredad que perteneció al finado Don Miguel del Moral la qual venta la hacia su hija Doña Andrea del Moral por pertenecer a ella sola, y no tener parte en el dho. Derecho los demas hermanos según expresamente consta en la de la escritura publica de su otorgamiento

con dr^o y escencial á los cuatro rumbos q'habiera el dho Potrero y bajo los linderos conocidos de los campos pastiaderos y aguadas que en el abrasan con la propiedad absoluta ambos dos compradores Nina y Mercado de todo el expresado dr^o que pertenció al finado Don Miguel del Moral, para ellos perpetuam.^{te} y sus sucesores hijos, ó para lo mejor que de ello quieran hacer vender ó enagenar del modo q' les pareciere conven.^{te} en sus faores, y en señal de berdaderos dueños del citado dr^o de potrero hicieron todos los actos que probiene el derecho, arrancaron yerbas, exparcieron piedras por todas partes, bebieron agua, se pasearon en el terreno, se rebolcaron, y mandaron á que le ocupasen salgan fuera de sus dros., y no serian despojados sin primero ser oidos y bajo del fuero del dr^o vencido, so pena de cincuenta Ps de multa a las personas q' los incomodara, Ynquietara, ó perturbara, de su mas quieta y pasífica posesion, aplicada a los fondos publicos de la Prov.^a. y si tal sucedia saldria la vendedora en la defensa hasta dejarlos en su tranquila posesión, y si la perdía les devolverían todo su importe que les hauia costado, con mas todos los costos, y autos, y mejoras que hubieren puesto y en su trabajo, y como de todos los que se les originaren en rason á la venta celebrada, y en su firme balidacion y constancia de este acto (...)"

[Fuente: Archivo de Escribanos de La Rioja, Protocolo Gaspar Villafañe 1845 y Blas Gonzales 1848-51, f. 8.-12 vta]